

Klaus Bodemer (coord.)
Cultura, sociedad y democracia en América Latina
Aportes para un debate interdisciplinario



BIBLIOTHECA IBERO-AMERICANA

Publicaciones del Instituto Ibero-Americano

Fundación Patrimonio Cultural Prusiano

Vol. 148

Consejo editorial de la colección

Peter Birle (Instituto Ibero-Americano)

Sandra Carreras (Instituto Ibero-Americano)

Ulrike Mühlshlegel (Instituto Ibero-Americano)

Héctor Pérez Brignoli (Universidad de Costa Rica)

Janett Reinstädler (Universität des Saarlandes)

Friedhelm Schmidt-Welle (Instituto Ibero-Americano)

Liliana Weinberg (Universidad Nacional Autónoma de México)

Nikolaus Werz (Universität Rostock)

BIBLIOTHECA IBERO-AMERICANA

Klaus Bodemer (coord.)

**Cultura, sociedad y democracia
en América Latina**

Aportes para un debate interdisciplinario



Agradecemos a la Fundación Thyssen por haber posibilitado esta publicación con su apoyo financiero.

Reservados todos los derechos

© Iberoamericana 2012
Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid
Tel. +34 91 4293522
Fax +34 91 4295397

© Vervuert Verlag 2012
Elisabethenstr. 3-9 – D-60594 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 5974617
Fax +49 69 5978743

info@iberoamericanalibros.com
www.ibero-americana.net

ISSN 0067-8015
ISBN 978-84-8489-651-7 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-86527-704-6 (Vervuert)

Depósito legal: M-29808-2012

Diseño de la cubierta: Carlos Zamora
Impreso en España
Este libro está impreso íntegramente en papel ecológico blanqueado sin cloro.

Índice

Klaus Bodemer

Introducción	7
--------------------	---

I. ACTORES SOCIALES, DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD

Lucio R. Renno

O saldo da crise democrática na América Latina: sobre a legitimidade e a consolidação da Democracia Representativa	19
--	----

Emil Albert Sobottka

Políticas sociais e desigualdade social no governo Lula da Silva	43
--	----

Carla Gras

Agronegocios y empresarios. Un estudio sobre la reconfiguración de perfiles socioeconómicos y la construcción política del “campo” en Argentina	63
---	----

Ricardo Córdova Macías

Percepciones sobre la delincuencia y la inseguridad en Centroamérica ...	85
--	----

Marco Estrada Saavedra

La estética de los agraviados: arte callejero y política. El caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, México	135
---	-----

II. DERECHO Y ESTADO DE DERECHO

Juan Manuel Palacio

Ley y justicia en el primer “Estado populista”: algunas hipótesis para el estudio comparado de México, Brasil y Argentina	161
---	-----

María Carolina Agoff

¿Nuevos derechos hacen nuevas mujeres? El derecho a una vida libre de violencia como espacio de autoidentificación	187
--	-----

Álvaro Pérez-Ragone

Diálogo y cooperación en la justicia civil contemporánea: hacia una mayor eficiencia, legitimidad y justicia en la decisión	203
---	-----

III. CULTURA Y SOCIEDAD

Kathya Araujo

La tesis de la individualización en las sociologías alemana y chilena: una lectura crítica	229
--	-----

Patricia Mattos

As abordagens da “sociologia disposicional” e da “interseccionalidade”: articulando uma proposta para os estudos de gênero	251
--	-----

Luiz Sérgio Duarte da Silva

Filosofia da História e Teoria da Fronteira no Ensaio Americano: interculturalidade e integração. Primeiras notas de uma pesquisa em andamento ..	271
---	-----

Miguel A. García

Las músicas de Tierra del Fuego en su versión (etno)musicológica	285
--	-----

IV. CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Raquel Gil Montero

Tecnología minera en los siglos XVI-XIX: una perspectiva comparada	305
---	-----

Oldimar Cardoso

Cultura histórica e responsabilização científica	327
--	-----

Henrique Cukierman

Um mapa inicial para uma história comparada da informática brasileira	343
---	-----

EPÍLOGO

Günther Maihold

<i>Außenwissenschaftspolitik</i> , diplomacia científica y relaciones internacionales científicas: Alemania-América Latina	359
--	-----

SOBRE LOS AUTORES	383
-------------------------	-----

Klaus Bodemer¹

Introducción

En el año 2007, la Fundación Alexander von Humboldt (AvH) y la Fundación Fritz Thyssen lanzaron un programa de becas de corto plazo para investigadores latinoamericanos con título de doctor, que les ofrecía la posibilidad de realizar un proyecto de investigación de su propia elección en una universidad alemana. El programa estaba dirigido fundamentalmente a investigadores en las áreas de derecho, economía y ciencias sociales. Las becas tenían una duración de seis meses, repartidos en dos estadios a realizarse en dos años consecutivos. Después de una conferencia del despegue del programa en Bonn en 2007, se celebraron durante su desarrollo en Berlín tres conferencias, a finales de enero de 2009, 2010 y de 2011 respectivamente, en las cuales participaron los becarios, sus tutores y los miembros del comité de selección del programa. En esas conferencias, los becarios tuvieron la oportunidad de presentar los resultados preliminares de sus investigaciones y discutirlos con sus colegas, abriendo un debate interdisciplinario e iniciando el establecimiento de una red de contactos científicos entre las distintas regiones latinoamericanas.

Los detalles del proyecto y el plan de trabajo fueron acordados entre el solicitante y el tutor alemán antes de la presentación oficial de la solicitud. La evaluación de las solicitudes corrió a cargo de expertos independientes nombrados por la Fundación Humboldt. En la valoración de los proyectos se tomaron en cuenta sobre todo los méritos académicos de los candidatos y la calidad y viabilidad de los proyectos presentados. La decisión final fue tomada por un comité compuesto por científicos de todas las especialidades relevantes. El programa se desarrolló bajo el asesoramiento del editor de este volumen, quien además actuó como instancia de referencia para los becarios en asuntos académicos.

El tomo que presentamos aquí recoge los resultados de estas investigaciones, que en parte son trabajos concluidos y, en parte, todavía *works in progress*. Las contribuciones, escritas en la lengua materna de sus autores (español y portugués), provienen de diferentes disciplinas, cubren una amplia gama de temas y se distribuyen en cuatro bloques.

¹ Prof. Dr., Senior Fellow en el GIGA Instituto de Estudios Latinoamericanos.

El primer bloque (**“Actores sociales, democracia y gobernabilidad”**) está compuesto por cinco ensayos. El politólogo **Lucio Renno**, de la Universidad de Brasilia (UdB), analiza en su aporte **“O saldo da crise democrática na América Latina: Sobre a legitimidade e a consolidação da Democracia Representativa”** las preferencias, opiniones y perfil de valores de los ciudadanos latinoamericanos, comparando datos de encuestas provenientes de países que han sufrido crisis constitucionales o interrupciones del proceso democrático con las de otros que no sufrieron tales crisis. Las variables centrales que explican las diferencias entre ambos grupos son la participación en movimientos de protesta, las experiencias con la corrupción y la valoración de las instituciones y la economía. Los resultados muestran que los ciudadanos del primer grupo de países son más proclives a comprometerse en formas de desobediencia civil, tienen más experiencia con la corrupción y confían menos en las instituciones democráticas y representativas que los ciudadanos de las democracias estables. Estos fenómenos de crisis pueden provocar cicatrices en ciertos grupos de la población que se sienten perdedores, y motivar perspectivas más pesimistas sobre el futuro de la democracia en la región.

El debate sobre la desigualdad social en América Latina en general y sobre la de Brasil en particular no es nuevo. **Emil Albert Sobottka**, sociólogo de la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), retoma este debate en su artículo **“Políticas sociais e desigualdade social no governo Lula da Silva”**, un tema que ha despertado mucho interés en años recientes tanto en el ámbito científico como en el político. Luego de pasar revista a las diferentes etapas de la lucha social y a las políticas sociales estatales desde el golpe militar de 1964, y de describir los lineamientos predominantes de la política social de Lula da Silva y sus resultados, el autor constata que, a pesar de destacables progresos sociales, los niveles de desigualdad en Brasil permanecen altos. Este resultado poco alentador encuentra su explicación en el hecho de que la distribución de las políticas sociales es muy desigual y privilegia más bien a la clase media-alta que a la baja. La carga tributaria tiene un efecto concentrador de la renta. Por eso, una política que supuestamente estaba destinada a (por lo menos) reducir la desigualdad crónica en el país ha contribuido más bien a agudizar el problema y tuvo en realidad un efecto concentrador de renta, a pesar de su mérito de haber dado a millones de ciudadanos de las capas bajas la posibilidad de acceder al consumo y al seguro social, y de ascender en la escala social. Una explicación del escaso avance en la reducción de la desigualdad es, según Sobottka, que el gobierno de Lula fue muy cauteloso con respecto a la macroeconomía y que estaba muy interesado en preservar sus buenas relaciones con los grupos privilegiados de la sociedad brasileira.

La relación conflictiva entre un actor social poderoso, “el campo” y el gobierno de turno en Argentina es tema de la contribución de **Carla Gras**,

socióloga de la Universidad de Buenos Aires, quien analiza el conflicto entre los gobiernos de Néstor Kirchner y su sucesora Cristina Fernández de Kirchner y el sector agrario por las retenciones a las exportaciones, un conflicto que hasta hoy no ha sido resuelto de manera convincente. La autora concentra su análisis en dos puntos centrales. En primer lugar, la emergencia de un proceso de diferenciación interna de la clase empresarial, que hace a este actor más complejo y diferenciado y lo vincula a la consolidación de un nuevo modelo agrario y agroindustrial en el país a partir de la década de 1990. El segundo punto, estrechamente vinculado con el primero, es la reorganización de las instituciones representativas de este sector y la producción de nuevas formas de articulación productiva, ideológica y simbólica que se reflejan tanto en la autorrepresentación del sector como en los ámbitos y tipos de acción privilegiados por él para ejercer influencia. Según Gras, el empresariado argentino ha logrado construir una imagen pública renovada y ha hecho visible su influencia sobre aspectos centrales de la nueva matriz productiva, pero no ha alcanzado a ampliar su influencia fuera de lo estrictamente sectorial. En la relación del empresariado con la política, el sector privilegió la defensa corporativa de intereses a través del *lobbying*. Los altos precios internacionales y la alta rentabilidad han facilitado una estrategia común entre las diferentes fracciones del campo. Es, sin embargo, poco probable que esta unidad se mantenga a largo plazo, porque las asimetrías y antagonismos que caracterizan al modelo agrario actual pueden resurgir cuando las variables externas cambien.

Como muestran las encuestas de los años recientes (Latinobarómetro, etc.), la violencia y la inseguridad pública han ganado cada vez más un lugar privilegiado en las percepciones de los ciudadanos latinoamericanos, sobrepasando incluso en algunos países a la preocupación por la desocupación. La lucha exitosa contra este flagelo es, por lo tanto, un indicador importante para la consolidación democrática y la gobernabilidad en la región. El politólogo **Ricardo Córdova Macías**, director ejecutivo de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo en El Salvador, analiza la situación en América Central, la región más violenta de la región, en su amplio ensayo **“Percepciones sobre la delincuencia y la inseguridad en Centroamérica”**. Partiendo de los datos disponibles sobre homicidios y delitos en la subregión, de su problematización y las percepciones de inseguridad, el autor explora algunas de las consecuencias que este fenómeno está teniendo en la vida cotidiana de la gente, en los niveles de confianza institucional e interpersonal y en las actitudes ciudadanas hacia la democracia. Finalmente, el autor se pregunta, desde la perspectiva de su disciplina, la ciencia política, si el crimen y el miedo asociado están tendiendo a erosionar los aún jóvenes sistemas democráticos del Istmo. El ensayo presenta evidencia empírica para sustentar la hipótesis de que la violencia criminal y la inseguridad están impactando los valores y las actitudes de los ciudadanos

centroamericanos hacia la democracia, así como los niveles de confianza interpersonal e institucional. El factor más importante en este contexto es la percepción subjetiva de inseguridad (el miedo al crimen). Frente a esta situación poco alentadora, el gran desafío consiste en encontrar maneras en las cuales “el respeto al estado de derecho coexista con respuestas eficientes y efectivas a la problemática de la inseguridad”.

La relación entre arte callejero como protesta política y la política comunal es investigada por el sociólogo mexicano **Marco Estrada Saavedra**, de El Colegio de México, en su estudio de caso sobre las actitudes de la Asamblea Popular de los Pueblos en la ciudad de Oaxaca (APPO), titulado **“La estética de los agraviados: arte callejero y política. El caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, México”**. Para comprender las actividades artísticas de este colectivo, el autor introduce el concepto de “protesta simbólica”, haciendo referencia a los elementos no discursivos, es decir, emotivos, plásticos, sonoros, escénicos y figurativos de la movilización contestataria pública. Saavedra concibe a la APPO en alusión a Niklas Luhmann como “sistema social” que cumple cinco funciones para la autopoiesis del sistema de protesta: 1) enriquecer el discurso político con elementos emotivos, gráfica y plásticamente elaborados; 2) reflexionar en estas intervenciones gráficas sobre el conflicto y su proyecto social y político; 3) contribuir con las obras de los colectivos a la identificación activa con la asamblea; 4) contribuir a la elaboración y preservación de la “memoria sistémica” de los múltiples eventos significativos de este conflicto; y 5) reelaborar sucesos históricos, personajes y toda suerte de figuras públicas, reales o ficticias para dar profundidad y continuidad a las luchas populares. Se trata en Oaxaca de un arte producido en el conflicto y pensado como un instrumento de lucha. En resumen, “las intervenciones de grafiteros y colectivos pasaron de la politización propagandística del arte, que tenía lugar dentro del sistema político, a la estetización de la política, al interior del sistema de arte”.

El **segundo bloque** de ensayos (**“Derecho y estado de derecho”**) está constituido por tres trabajos. El historiador argentino **Juan Manuel Palacio**, investigador del CONICET y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, analiza en un trabajo comparativo el rol que cumplieron tanto la legislación social como los nuevos organismos estatales de resolución de conflictos en la implementación del estado social durante los gobiernos populistas en México, Brasil y Argentina. Su estudio parte de los cambios que, en material legal y judicial en el terreno laboral, se produjeron más o menos contemporáneamente en cada uno de los tres países y se pregunta por la interpretación de los populismos “clásicos” -el primer peronismo, el varguismo y el cardenismo- en la historiografía reciente. Sobre esta base, el autor presenta algunas conclusiones que pueden servir

como hipótesis para una investigación más profunda. Según Palacio, es necesario reinterpretar el populismo a la luz de las experiencias históricas concretas, acercarse científicamente al tema a través de fuentes judiciales y privilegiar una perspectiva comparativa. Así se llega a una interpretación más positiva del estado populista que la que ofrece el *mainstream* de la historiografía. Los gobiernos de Perón, Cárdenas y Vargas fueron grandes creadores de derecho, propusieron una nueva institucionalidad cuidadosamente diseñada que desafiaba abiertamente el orden jurídico e institucional del estado liberal, y crearon tribunales laborales que cumplieron un rol clave en la aplicación de la nueva legislación económica, social y laboral.

María Carolina Agoff, socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), retoma el tema de la violencia que ya había aparecido en el primer bloque y lo discute desde una perspectiva micro y de género. El punto de partida de las reflexiones que presenta en su trabajo **“¿Nuevos derechos hacia nuevas mujeres? El derecho a una vida libre de violencia como espacio de autoidentificación”** es el alto porcentaje de mujeres mexicanas que, según datos empíricos, ha experimentado violencia física y/o sexual y, la reacción del Estado ante esta situación, es decir, la reciente promulgación de dos leyes contra la violencia de género. La autora elige tres ejes de análisis: 1) la discrepancia (en la percepción de las víctimas) entre violencia merecida y no merecida; 2) el conflicto entre diferentes formas de reconocimiento, el jurídico y el moral; y 3) la eficacia simbólica del derecho y su capacidad de desnaturalizar una experiencia de injusticia naturalizada y normalizada por las tradiciones. La pregunta central es en qué medida el derecho puede constituirse en un objeto de identificación para las víctimas de violencia, en tanto las apela como individuos con derechos particulares. Como resultado de 72 entrevistas con mujeres víctimas de violencia, la autora constata una diferencia generacional notable: sólo las mujeres mayores de 30 años se mostraban permeables al discurso de los derechos y se permitieron cuestionar el modelo genérico tradicional. Además, la idea del derecho a una vida libre de violencia sólo tuvo influencia en aquellas mujeres para quienes la violencia resultó una experiencia sostenida a lo largo de los años. Se ha mostrado, además, que el poder del Estado es limitado si no va acompañado por el reconocimiento social. El reconocimiento jurídico sin una valoración social deja trunco el desarrollo completo de la autonomía personal.

El jurista **Álvaro Javier Pérez-Ragone**, de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, se ocupa de un tema especial del Derecho civil en su investigación, **“Diálogo y cooperación en la justicia civil contemporánea: hacia una mayor eficiencia, legitimidad y justicia en la decisión”**. Según él, el litigio civil tiene al menos tres variables, que lo pueden hacer más o menos eficiente y eficaz: el tiempo que insume, el costo y la precisión-legitimidad de su resulta-

do. La determinación correcta de la recopilación de los hechos que fundamentan el caso es relevante para luego poder discernir cuáles deben probarse o necesitan de evidencia y cuáles no, lo que sirve de base para una sentencia justa y aceptable para los participantes en un juicio. La combinación de un juez director del proceso y las partes que colaboren con lealtad, buena fe y veracidad, especialmente en el aporte de la información sobre los hechos relevantes, coadyudan para una etapa probatoria eventual y una decisión más legitimada, dentro de un término razonable con minimización de costos. La asimetría de información en un proceso civil lo convierte muchas veces en un dilema del prisionero, donde el resultado es de suma cero. Los protagonistas del proceso en su demanda y defensa tienen deberes de información mediante deberes sustantivos y netamente procesales que se incentivan y corrigen con un sistema adecuado y previsible de cargas y deberes procesales. Pero también los terceros podrían quedar obligados a cooperar para el éxito en la tramitación y el resultado en un proceso civil que no es sino una de las manifestaciones de la función del Estado: la función jurisdiccional. En los últimos diez años muchos sistemas procesales civiles incorporaron incentivos para maximizar el aporte de información relevante para una sentencia más correcta y justa. Este aporte de partes y de terceros con un rol activo del juez permite igualmente minimizar los tiempos del proceso y el error en la decisión. Un ejemplo tomado por el autor es el antes y el presente de la reforma de la Zivilprozessordnung alemana en el año 2002.

Un **tercer bloque** de temas gira en torno a las relaciones entre **cultura y sociedad**, y contiene aportes de la sociología, la filosofía y la etnología. La socióloga **Kathya Araujo**, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, discute uno de los temas centrales en la sociología contemporánea en su trabajo **“La tesis de la individualización en las sociologías alemana y chilena: una lectura crítica”**. Partiendo de un análisis detallado del concepto de la individualización en la obra de Ulrich Beck y de sus deficiencias, Araujo discute su recepción y recreación en la sociedad chilena, subrayando que esta recepción no ha tomado suficientemente en cuenta el contexto histórico, político y social diferente en el cual el individuo chileno en el sentido moderno era y es, y el hecho de que en este contexto la individuación es ante todo un proyecto inconcluso pero en marcha. A partir de allí, la autora extrae una serie de consecuencias: 1) se precisa un diagnóstico más serio de nuestra época, tomando en cuenta las variantes nacionales en las que se da la individualización; 2) se debe dar cuenta, sobre nuevas bases, de la articulación entre los fenómenos estructurales y las experiencias subjetivas; y 3) resulta necesario que la sociología tome en cuenta de manera más activa el trabajo de los individuos para producirse como sujetos.

Patrícia Castro Mattos, especialista en teoría sociológica de la Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Brasil, presenta una propuesta teórica

para los estudios de género en su aporte **“As abordagens da ‘sociologia disposicional’ e da ‘interseccionalidade’: articulando uma proposta para os estudos de gênero”**. Sus reflexiones se basan en el concepto de interseccionalidad, propuesto por Degele y Winker, que permite articular la relación entre agencia y estructura, y combina tres niveles: las estructuras sociales, las representaciones simbólicas y la identidad. Las reflexiones de la autora se nutren de la sociología disposicional de Bourdieu y su concepto de *habitus*, así como de las críticas expuestas por Degele y Winker. El artículo quiere mostrar las ventajas teóricas y metodológicas de la perspectiva interseccional y de la sociología disposicional para los estudios de género. Ambos conceptos permiten, según la autora, realizar un análisis más preciso de causas y efectos de las desigualdades sociales, mostrar cómo operan los sistemas de clasificación/desclasificación social en diferentes contextos y, con eso, deconstruir los códigos binarios que siempre producen y reproducen asimetrías arbitrariamente construidas entre los individuos.

Sérgio Duarte da Silva, historiador de la Universidade Federal de Goiás, Brasil, se ocupa en su trabajo **“História e Teoria da Fronteira no Ensaio Americano: interculturalidade e integração. Primeiras nota de uma pesquisa em andamento”** del ensayo latinoamericano del siglo xx. Este “género mixto” incluye, sobre todo, una teoría de la frontera y de la heterogeneidad, de crucial importancia en el debate actual y de particular interés para los interesados en relaciones interculturales. Este producto del pensamiento americano ha sido caracterizado como vanguardista, neobarroco, intercultural, entre-lugar, antropofagia e hibridismo. Pero lo más importante es, según el autor, ver en él tanto un fruto y expresión de la experiencia de colonización y modernización, como una forma de irreverencia, afirmación y diálogo. Debido a su carácter experimental, es posible encontrar en él conceptos y procedimientos relevantes para la teoría de la historia.

Miguel Ángel García, etnomusicólogo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, analiza en su artículo **“Las músicas de Tierra del Fuego en su versión (etno)musicológica”** cantos de los aborígenes de Tierra del Fuego que fueron grabados entre 1907 y 1923 por los investigadores Charles Wellington Furlong, Martin Gusinde y Wilhelm Koppers. En las décadas siguientes, estas grabaciones fueron objeto de investigación de algunos musicólogos, como los alemanes Erich von Hornbostel y Martin Gusinde, y, más tarde, de los etnomusicólogos Jorge Novati, Gilbert Rouget y Anne Chapman. García efectúa un recorrido por el inventario de los discursos producidos sobre esas músicas y señala los tópicos que en ellos se fueron generando. Como subraya García con un acento crítico, los musicólogos mencionados convirtieron los cantos de los aborígenes en su objeto de conocimiento, creando la ilusión de una correspondencia nítida entre sus discursos y una

supuesta realidad ajena al observador. Los factores que conferirían valor científico a los cantos fueguinos eran para los investigadores su “condición primitiva” y su supuesto “alto grado de aislamiento”. Como resultado, en muchos casos la investigación etnomusicológica fue, según el autor, una práctica que acompañó al colonialismo e ignoró o hizo ignorar los contextos culturales, sociales e históricos en los cuales se desarrollaron esas músicas desatendiendo además las circunstancias de la desaparición de estos pueblos.

El **cuarto bloque** de ensayos se puede agrupar bajo el título de **“Ciencia y tecnología”** y consiste en tres trabajos. El primero, de **Raquel Gil Montero**, investigadora del Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (CONICET), Argentina, nos ofrece en su investigación **“Tecnología minera en los siglos XVI-XIX: una perspectiva comparada”** un análisis comparado y detallado del desarrollo de la tecnología minera en la región andina durante cuatro siglos, poniendo énfasis en la cronología y el aporte local. El texto se estructura, en parte, en torno a la expedición de expertos alemanes contratados por la Corona española a fines del siglo XVIII y a su visión de la minería andina, que sirvió como puente entre las dos geografías. Partiendo de un breve análisis de los avances historiográficos más destacados, la autora describe el contexto europeo que sirvió como fuente de donde abrevaron quienes vinieron para trabajar en América Latina. La situación de la minería andina es analizada a través de una doble mirada: la de los expertos alemanes y la de los mineros locales. La última parte recopila los debates y avances en la investigación y nos da algunas explicaciones del porqué del desarrollo tecnológico divergente. La autora concluye que la tecnología minera indígena estuvo mucho más presente de lo que se pensaba. La tecnología de Europa Central se conocía pero se aplicaba sólo en forma muy limitada tanto en España como en América Latina.

Oldimar Pontes Cardoso, historiador de las Universidade de São Paulo (USP) dedica su aporte **“Cultura histórica e responsabilização científica”** a estudiar la divulgación de la historia por medio de revistas en Brasil, Alemania, Argentina y México. El ensayo forma parte de una investigación todavía en marcha y tiene como objetivo central definir cuáles son las funciones sociales de la historia que se expresan en este tipo de publicaciones, que forman una fuente destacable de información para un público más amplio pero no gozan de prestigio entre los historiadores profesionales. Pontes Cardoso analiza en detalle los significados de los diferentes términos (“difusión científica”, “divulgación científica”, “diseminación científica”, “vulgarización científica” y “mediación científica”) y sus funciones en la relación entre ciencia y sociedad. El autor reflexiona además sobre la cultura y la conciencia históricas y su conceptualización. Pontes Cardoso concluye que un historiador con responsabilidad científica se comprende inmerso en la cultura histórica, reconoce la

dualidad de la cultura histórica y la historia científica y aprovecha esta metaconciencia histórica en favor de un trabajo riguroso.

En el último trabajo de este bloque titulado **“Um mapa inicial para uma história comparada da informática brasileira”**, **Henrique Luiz Cukierman** de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se pregunta qué significa el término “informática”. Según la opinión común, la informática pretende ser universal y sugiere como punto de referencia un cuerpo único de conocimientos. El autor argumenta contra este supuesto de unidad, buscando mapear las condiciones para una comparación entre la informática del llamado Primer Mundo y la de Brasil, cuyas diferencias son evidentes si se examina la manera en la cual las prácticas locales reciben, reproducen y/o reconstruyen esa supuesta universalidad. Para escribir una historia comparada de la informática brasileña es necesario dar cuenta de la influencia de factores contextuales, como el mercado, el sector militar, la cultura local, el Estado, la comunidad científica, la industria, la gestión y el financiamiento. Además, el autor presenta un catálogo preliminar de cuestiones cuyo análisis permitirá el avance en el estudio de la historia comparada de la informática brasileña y la formulación de estrategias para superar las asimetrías observadas.

El último ensayo, cuya primera versión fue presentada en la clausura de la última conferencia del Programa Thyssen/Humboldt en Berlín en enero de 2010, es de **Günther Maihold**, vicedirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP) en Berlín. Bajo el título **“Außenwissenschaftspolitik, diplomacia científica y relaciones internacionales científicas: Alemania-América Latina”**, el autor reflexiona sobre el reciente debate gubernamental alemán sobre el reforzamiento de la cooperación en ciencia e investigación, tal como ha sido propuesto en diferentes documentos y declaraciones programáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Educación e Investigación y de la Fundación Alexander von Humboldt. Este debate se estructura en torno a dos estrategias: la internacionalización de la ciencia y la investigación, y la diplomacia científica. Las políticas de implementación de estas estrategias tienen una amplia gama de objetivos, una situación que enfrenta al gobierno y sus instancias con grandes retos, especialmente en tiempos de presupuestos reducidos y una creciente competencia internacional. Según el autor, siendo Alemania un *soft power* y potencia intermedia sin recursos naturales propios, debe apelar a esta forma de proyección de poder a nivel internacional. Afortunadamente, los dos gobiernos alemanes recientes han tomado en cuenta este desafío en forma proactiva. Testigo de eso son los nuevos documentos del gobierno alemán con respecto a su estrategia hacia América Latina de 2010 y una serie de documentos programáticos e iniciativas concretas de los dos ministerios arriba mencionados y del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), que apuntan al fortalecimiento del intercambio científico-tec-

nológico entre Alemania y América Latina. Sin embargo, más allá de las declaraciones programáticas gubernamentales, que se logre o no construir puentes y redes interuniversitarios depende, en primer lugar, de los diferentes actores del área de la ciencia y la investigación, y de sus intereses y su compromiso.

Con esta reflexión sobre las tendencias recientes y los desafíos futuros del intercambio científico entre Alemania y América Latina se cierra este tomo, cuyo objetivo es dar a los lectores un panorama de las investigaciones puestas en marcha o ya finalizadas en el marco del Programa de Becas de corto plazo Thyssen-Humboldt para América Latina de los años 2007-2011. De acuerdo con la filosofía básica de ambas fundaciones, corresponde a los investigadores mismos proponer sus propios temas de investigación. Esta libertad en la definición del objeto de estudio tiene como consecuencia que los temas tratados por los becarios cubran varias disciplinas, una amplia gama de contenidos y enfoques teóricos diferentes. En este sentido, este volumen tiene por objeto poner en evidencia la amplia variedad de las investigaciones fomentadas en el marco del programa. Espero, junto con los autores, que los aportes enriquezcan el debate académico y contribuyan a la profundización de las investigaciones iniciadas, al fortalecimiento de las redes científicas establecidas y al descubrimiento de nuevos caminos en la cooperación científica entre Alemania y América Latina.

Finalmente quisiera agradecer también en el nombre de las becarias y los becarios y de los miembros de la Comisión de Selección a las dos fundaciones por el apoyo y el clima agradable durante los cuatro años de duración del programa.

I. ACTORES SOCIALES, DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD

Lucio R. Renno

O saldo da crise democrática na América Latina: sobre a legitimidade e a consolidação da Democracia Representativa¹

1. Introdução

A Democracia na América Latina encontra-se numa encruzilhada sem precedentes: democracia representativa – sustentada por eleições livres e justas, competição multipartidária, estado de direito e um sistema de pesos e contrapesos – tem sido desafiada por uma visão mais radical de democracia direta, com base em consultas populares constantes, na redução da competição entre elites e na centralização do poder político no Executivo. A particularidade da atual junção crítica na história de região é que os desafios acerca do regime democrático nascem de eleições: são, portanto, provenientes de dentro do próprio sistema. Isto é, líderes eleitos diretamente pelos mecanismos de democracia representativa conduzem as reformas radicais correntes que podem minar o próprio modelo Madisoniano de democracia, baseado na representação política e no sistema de *checks and balances*, que existem atualmente na maioria dos países latino-americanos. Assim, argumento aqui que a nova forma de instabilidade política na América Latina, ao contrário do que pensam alguns, pode sim estar afetando a própria continuidade do regime democrático na região (Perez-Liñan 2007, 2008; Llanos/Marsteintredet 2010). Dessa forma, o atual processo de mudança de regime e instabilidade na América Latina apóia-se na erosão da democracia representativa e não apenas quedas de presidentes

¹ Uma versão inicial deste artigo foi escrita durante residência no Latin American Centre (LAC) da University of Oxford, com apoio do Researcher Exchange Program Conselho Britânico. Agradeço a Timothy Power, aos colegas e aos estudantes do LAC pelos comentários e sugestões. Também agradeço a comentários de colegas em apresentação do paper no Encontro de Potsdam, Alemanha do European Consortium for Political Research (ECPR). Agradeço ainda a Anthony Spanakos pelas sugestões e, finalmente, ao apoio da Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF – pela assistência financeira que viabilizou a participação no encontro ECPR. Equívocos restantes no texto são de minha responsabilidade.

através de renúncias e impeachments. Há em curso uma intensificação das crises da democracia na região (Boniface 2007), motivadas por crises prolongadas das instituições de representação democrática (Mainwaring 2006).

Além disso, e mais importante, em alguns países, esses embates tem resultado em mudanças institucionais que mexem no cerne dos princípios democráticos representativos, ampliando cada vez mais os mecanismos participativos e centralizando a convocação desses mecanismos no poder executivo. Este processo de erosão dos componentes representativos pode ser, em grande parte, sustentado pela frustração popular com a ausência de justiça social, inclusão econômica e participação popular direta no processo de tomada de decisão que prevaleceu no continente durante a chamada era “neoliberal” (Hochstetler 2008, Hochstetler/Edwards 2009). Ou seja, a insatisfação presente pode ser resultado de avaliações negativas da qualidade da democracia na região (Rennó *et al.* 2011).

Como consequência, há a oportunidade na América Latina de hoje de algo que era impensável há alguns anos e que Przeworski denominou de “mandato eleitoral para o socialismo” (1986: 60).² Como consequência de uma generalizada frustração com o processo de enxugamento do Estado e aumento da informalidade na economia na década de noventa (Hoffman/Centeno 2003, Portes/Hoffman 2003), o apelo inclusivo da retórica corrente é muito atraente para as parcelas excluídas da população e para ideólogos de esquerda. Não apenas isto, está relacionado também com limitações existentes no funcionamento das democracias representativas na América Latina. Deste modo, a discussão acerca da qualidade da democracia é central para entender o surgimento de uma visão crítica sobre o regime e sobre desafios aos seus princípios básicos.³

Estas mudanças, naturalmente, encontram resistência das elites tradicionais e daqueles preocupados com a aproximação desses novos regimes com o populismo e socialismo, assim como com a queda das características constitucionais liberais que marcaram a democracia na América Latina (Zakaria 1996, Seligson 2007). Esses grupos, novamente em alguns países, tem reagido de forma contundente aos processos de reforma institucional implantadas após as crises. O resultado dessa situação é um aumento na instabilidade política, no conflito e na violência política na região e recorrentes impasses e crises constitucionais.

Mas, quais são esses países que claramente atravessaram crises e impasses políticos recentes e posteriormente embarcaram em processos de mudança

² Venezuela é o principal exemplo.

³ Para uma discussão sobre qualidade da democracia, veja Diamond and Morlino (2004). Para sua aplicação ao caso brasileiro, veja Rennó *et al.* (2011).

constitucional que alteram a ordem democrática? Venezuela, Equador e Bolívia – com violência generalizada pelas ruas, sérios desafios impostos aos governos por forças de oposição e questionamento consistente das reformas de governo – são paradigmas desta nova situação de instabilidade na região.

A recente literatura sobre novas formas de instabilidade na América Latina tem oferecido uma extensa lista de presidentes fracassados – Equador e Paraguai, mais recentemente, mas também Argentina, são os grandes exemplos – que integram esta nova dinâmica de instabilidade política (Perez-Liñan 2007, 2008, Llanos/Marsteintredet 2010). Se levarmos em consideração também os constantes questionamentos de resultados eleitorais, o aumento da incidência de protestos políticos e manifestações de rua, esses episódios de instabilidade podem também indicar um novo processo de turbulência política regional com sérias implicações para o funcionamento da democracia. Desta forma, contrariando a literatura sobre novas formas de instabilidade política que afirma que as crises atuais não levam à mudanças no regime, acontecimentos recentes em alguns países da América Latina permitem-nos especular que mudanças no regime não devem ser totalmente descartadas dentre as possíveis consequências das crises. Ou seja, o saldo das crises democráticas pode resvalar em alterações na ordem institucional e claramente condicionar as formas como os cidadãos desses países pensam sobre seus regimes, principalmente em contraste com países que não atravessaram tais crises.

Ao listar os eventos desta natureza ocorridos nas últimas duas décadas (até 2007), Boniface define crise como a “interrupção repentina ou irregular do processo institucional político-democrático”, conforme definido na Resolução 1080 da Organização dos Estados Americanos (OEA), e qualquer “alteração inconstitucional da constituição (...) que seriamente debilite a ordem democrática”, como indica a Carta Democrática de 2001 da OEA (Boniface 2007, 46-47). Seguindo esse critério, Boniface identifica 19 episódios de crise constitucional na América Latina entre 1991 e 2007. Cinco referem-se a golpes de Estado ou auto-golpes – Haiti (1991), Peru (1992), Guatemala (1993), Equador (2000) e Venezuela (2002) e um caso de ameaça militar de retirada de um presidente antes do término de seu mandato: Paraguai em 1996. Outro grupo de casos – Paraguai (1999/2000), Bolívia (2003), Haiti (2004) e Equador (2004/2005) – “ocupam uma área cinzenta” porque eles envolvem violência, renúncias de presidentes e acusações de golpes, mas não tão claramente quanto os primeiros seis casos. Os nove casos restantes são vistos como exemplos de falhas em eleições majoritárias ou impasses constitucionais. Eles incluem República Dominicana (1994), Equador (1997), Haiti (2000/2003), Peru (2000), Argentina (2001), Trinidad e Tobago (2000/2001), Bolívia (2005) e Nicarágua (2001/2005).

Estes dados indicam que alguns países na América Latina são mais propensos a episódios de instabilidade que outros. Portanto, a América Latina

atual pode ser dividida em dois grandes grupos de casos: países que têm enfrentado turbulência política radical na última década e países que não enfrentaram tais situações. Assim sendo, surgem duas perguntas. A primeira seria por que um grupo de países sofre um tipo ou outro de crise enquanto outros não? Existem traços comuns ou padrões entre os distintos grupos? A segunda pergunta seria quais são as consequências desses golpes para os grupos sociais desses países? Os cidadãos desses países têm opiniões sobre seus regimes políticos diferentes dos cidadãos de países que não passaram por essas crises?

Nós exploramos aqui o segundo conjunto de perguntas, com foco nas consequências da crise sobre regimes políticos a partir da ótica dos cidadãos e contrastando países que sofreram e os que não sofreram crises democráticas. Esta é portanto uma investigação sobre os efeitos de uma década de crise política na região sobre a opinião pública, que é medida por meio das pesquisas fornecidas pelo Barômetro das Américas de 2008 em todos os países do continente. Não serão exploradas as causas da instabilidade. Este é uma meta para um projeto futuro⁴. Nós começamos pela investigação dos efeitos da crise sobre a perspectiva dos eleitores acerca da legitimidade de seus regimes políticos, fator esse intimamente ligado ao surgimento de rupturas na ordem democrática nos anos 70, como apontou Linz (1978) e que hoje continuam presentes nas preocupações de pesquisadores da região, como Booth/Seligson (2009).

Este artigo procura contrastar as visões de cidadãos de países que atravessaram crises com os que não atravessaram em fatores que são vistos pela literatura especializada como centrais para entendermos processos de instabilidade e quebra do regime democrático: perda de legitimidade, entendido aqui como apoio popular e aquiescência à democracia. Deste modo, o foco é em como indivíduos pensam sobre seus governantes, sobre o regime democrático e acerca de seus problemas cotidianos.

Obviamente, a opinião dos cidadãos sobre regimes políticos não é a única explicação para mudanças de regime. Alinhamentos de elites, desenhos insti-

⁴ Boniface indica alguns padrões explicativos para as crises democráticas (2007: 51). Primeiro, as crises tornam-se mais frequentes a partir da chegada ao poder de Hugo Chávez em 1999. Ou seja, há uma dimensão temporal explicando a crise e um evento, o início do período Chávez na Venezuela, que marcam a intensificação da turbulência democrática na América Latina. Uma segunda dimensão é geográfica e reforça a dimensão temporal. Grande parte das crises ocorre em países da região andina. Finalmente, não há claro padrão econômico para a crise: as crises não são privilégio de países mais pobres, já que a Venezuela não faz parte desse grupo na região. Esses *insights* são interessantes, mas insuficientes para entendermos por que alguns países são vítimas de crise, às vezes consecutivas, e outros não. De qualquer forma, esse é um tema para outra pesquisa e trabalho.

tucionais, problemas econômicos estruturais e fatores internacionais levam – isoladamente ou em conjunto – a instabilidade e queda de um regime político (Przeworski 1986: 50). Portanto, deve ficar claro que o apoio popular, que será discutido posteriormente em detalhe, é necessário mas insuficiente para explicar mudanças de regime. Todavia, as formas como cidadãos e cidadãs pensam sobre seus regimes pode ter impactos relevantes para a estabilidade e o aprofundamento da democracia em sua fase de consolidação (Reis/O'Donnell 1989, Moisés 1995). Assim sendo, a pesquisa sobre apoio e visão popular no que se refere à democracia é uma forma de medir o grau de consolidação da democracia na América Latina.

Além disso, em um momento quando a participação popular se torna um aspecto central de inovação no funcionamento da democracia para os otimistas (Avritzer 2002) ou uma ameaça à democracia representativa para os pessimistas (Mainwaring *et al.* 2006), é importante entender como os cidadãos percebem os sistemas políticos e a qualidade de seus representantes e servidores públicos.

Em resumo, o objetivo deste trabalho é analisar como a ótica popular sobre corrupção e crime, a performance econômica dos governos, a participação individual em movimentos de protestos e o funcionamento das instituições democráticas diferem entre cidadãos de países que enfrentaram crises democráticas a partir de 1995 dos países que não passaram por tais crises. As crises do início dos anos 90 não devem ter reflexos nas visões atuais dos cidadãos sobre os regimes. A diferença temporal pode ser muito grande e as crises nesses países não levaram à reformas profundas do sistema político. Por esta razão, Guatemala e República Dominicana – presentes na lista de Boniface – não são incluídos entre os países que enfrentam crises nesta análise. Portanto, crises democráticas podem ocorrer em qualquer lugar. Algumas podem levar à mudanças radicais na democracia e outras não, mas nenhum regime está imune à crises. Na verdade, a forma de resolução das crises é que passa a ser central sobre o seu saldo, seu impacto no futuro. Pode-se argumentar que o nível de consolidação da democracia é definido por como regimes lidam com suas crises políticas. Desta forma, as consequências da crise se tornam chave para entender as perspectivas para consolidação da democracia.

Eu me baseio na rica literatura sobre legitimidade política, assim como em estudos mais recentes acerca da qualidade da democracia e representação para orientar a análise empírica. Finalmente, emprego pesquisas de opinião pública do Barômetro das Américas de 2008, realizadas em todos os países da América Latina, da América do Norte, além de Haiti, República Dominicana e Jamaica a fim de explorar as perspectivas dos cidadãos sobre os fatores listados anteriormente. Tendo em vista que estudos prévios nesta agenda de pesquisa utilizam dados de 1996, eu atualizarei esses resultados (Mainwaring 2006).

2. Legitimidade, Qualidade e Consolidação da Representação democrática

Juan Linz define legitimidade como “crença que, apesar das limitações e falhas, as instituições políticas existentes são melhores que quaisquer outras que possam ser estabelecidas e, por isso, podem demandar obediência” (1978: 16). Ele sustenta que reações da opinião pública são um indicador indireto de legitimidade, pois são uma reação à atuação de elites políticas que tem desempenhado de forma insatisfatória seu papel representativo. Mainwaring complementa esse raciocínio argumentando que “onde cidadãos comuns não são comprometidos com a democracia, eles estarão abertos à líderes e grupos de ‘oposição desleal’” (1992: 307). Tais líderes, que não tem compromisso claro com o regime político democrático, mas prioritariamente com seus próprios projetos de poder, podem gerar amplas ondas de reprovação popular, também frustrada com o desempenho do regime. Por isso, a percepção dos cidadãos sobre o funcionamento do Estado, sobre o desempenho do governo e das instituições políticas se torna central para entender o saldo, as consequências das crises e falhas do regime.

A idéia de legitimidade está intimamente relacionada ao conceito de consolidação democrática, ambas no centro de debates importantes na literatura sobre a transição de regimes. O'Donnell claramente diferencia duas etapas no processo de mudança de regime (O'Donnell 1989). O primeiro é rotulado como transição, que é marcado pela alteração na configuração institucional do regime. Ele começa como um processo de reforma institucional que culmina em uma mudança dramática no sistema político, alterando completamente as regras de como atores políticos interagem e como decisões são tomadas. Um segundo momento é aquele que começa após a conclusão do processo de mudança institucional e foi chamado de “período de consolidação”, referindo-se a como atores políticos incorporam e aceitam a novas regras do jogo. Deste modo, o momento de consolidação é de incorporação e incorporação por parte de todos os atores políticos – do eleitor/cidadão ao representante eleito, incluindo oposição e situação – das práticas e instituições democráticas e da aceitação delas como únicas formas válidas e legítimas de obediência à ordem política. A questão da consolidação da democracia é, conseqüentemente, uma de forjar a legitimidade do sistema político. Esta questão se refere à como elites e massas vêem seu sistema político, obedecem as regras e apesar de discordarem sobre as direções dos governos, não questionam o regime. Em outras palavras, trata-se de haver apoio latente ao sistema, independentemente de apoio específico, que remete a uma prática de apoiar as instituições e princípios democráticos sem necessariamente deixar de ser crítico dos governantes de plantão (Booth/Seligson 2009).

Expostas tais afirmações teóricas, o que as atuais crises da democracia na América Latina representam para a legitimidade do regime? Estas crises deixam para trás um legado de instabilidade que influencia como cidadãos pensam sobre seus sistemas políticos e como eles se comportam politicamente? Qual a profundidade das cicatrizes deixadas pelas crises democráticas – se é que elas existem – nas visões, crenças e preferências sobre política? Essas perguntas são sobre política de massa e legitimidade do regime baseada na percepção dos cidadãos. Cidadãos em países que enfrentam crises democráticas recentemente vêem sistemas políticos diferentemente dos cidadãos de outros países?

3. Algumas hipóteses sobre as consequências das crises democráticas

Se as cicatrizes das crises democráticas são profundas e se, de fato, deixam um legado, espera-se ver diferenças entre países que enfrentaram crises e aqueles que não. Isto indicaria que a natureza esporádica das crises tem efeito muito mais longo no que se refere à estabilidade do regime do que a literatura corrente imagina. Tal fato traz para o centro da discussão o ponto de que crises mal-resolvidas são um desafio significativo para a consolidação da democracia em alguns países da América Latina.

Além disso, estas crises podem ser resultantes de uma cadeia de eventos que ligam longos processos históricos de exclusão (Reis/O'Donnell 1989), acentuados pela implementação da agenda neoliberal dos anos 90 (Hagopian 2006). Os episódios de crises democráticas/institucionais analisados aqui sinalizam deficiências do processo de representação democrática, que na perspectiva da opinião pública pode ser aferida como um “desafeto com os veículos convencionais de representação democrática (Mainwaring *et al.* 2006: 2). Deste modo, as crises nascem de processos profundos de ausência de legitimidade do regime político e que remetem à visão de que as percepções populares sobre o regime precisam ser consideradas na análise de transições e de processos de consolidação.

Estudos recentes têm confirmado estas expectativas. Mainwaring e Hagopian argumentam claramente que “atitudes favoráveis à democracia e um ambiente internacional favorável” são mais importantes para explicar a sobrevivência ou fracasso de um regime competitivo na América Latina do que fatores estruturais” (2005: 7). Hagopian afirma ainda enfaticamente que atitudes sobre a democracia estão relacionadas com expectativas e avaliações da performance do governo e da qualidade da representação. Assim, tópicos como segurança pública, desempenho econômico e corrupção ocupam lugar

central na avaliação dos cidadãos sobre a performance de seus representantes (Hagopian 2005: 345). Mainwaring *et al.* argumenta que governança e deficiências do Estado nestas áreas são instrumentos para explicar perdas de legitimidade e instabilidade do regime (2006). Por isso, fatores que afetam adversamente a qualidade de vida (violência, pobreza, desigualdade e corrupção) e que podem ser heranças de um mal desempenho governamental e das fragilidades do Estado na região diminuem a legitimidade das instituições democráticas aos olhos do público. Se Estado e governos não resolvem esses problemas ou não demonstram enfrentá-los, eles viram desafios à sobrevivência do regime. Como mencionado anteriormente, seguindo Linz, problemas mal resolvidos se tornam gatilhos para crises democráticas e rupturas constitucionais futuras (1978).

Portanto, a questão por trás da fragilidade da legitimidade democrática na América Latina é a baixa qualidade do desempenho da democracia representativa em alguns países. Governos sucessivos têm feito pouco para melhorar a qualidade de vida em alguns países da região que criam a base para o crescimento de demandas (e oferta) por reformas radicais. A frustração acumulada com a continuada incapacidade dos governos anteriores de solucionar problemas de exclusão social e pobreza está certamente na raiz das atuais crises democráticas na região, levando ao apoio cada vez maior à formas mais radicais de democracia direta e à frustração com os mecanismos representativos.

Mainwaring testa algumas dessas hipóteses ao analisar os fatores determinantes de confiança nas instituições, sua *proxy* para legitimidade democrática, em alguns países latino-americanos usando vários indicadores de desempenho do sistema político, tais como visões sobre economia, corrupção e violência (2006). Utilizando dados do Latinobarômetro de 1996, ele conclui que as visões sobre corrupção são centrais para explicar a perda de confiança nas instituições.

Nosso objetivo empírico neste artigo é atualizar a análise realizada por Mainwaring com dados de 2008 e analisar países que enfrentaram crises assim como países que não passaram por crises democráticas na última década. Mainwaring foca exclusivamente em países problemáticos da região andina, tratando apenas de casos onde há crises democráticas. Consequentemente, sua análise sofre de um viés de seleção. Com a incorporação de países que não enfrentaram crises, eu amplio o seu trabalho e comparo os dois grupos de países. Este é um teste crucial para compreender como o legado das crises influencia a legitimidade do regime. Além da confiança nas instituições, também tentamos explicar como outras dimensões da legitimidade democrática se diferenciam entre países que passaram por crises e os demais (Booth/Seligson 2010).

Por último, nós também incorporamos um ingrediente final da receita para crises democráticas: a participação dos cidadãos em movimentos de protesto. Desde os primeiros estudos feitos por Huntington sobre ordem política nas

sociedades em modernização, a inclinação dos cidadãos ao engajamento em movimentos de protesto e desobediência civil figura nas raízes da instabilidade de regimes políticos (1968). Obviamente, movimentos de protestos estão relacionados com a falta de canais institucionais para intermediação, tais como partidos políticos e com problemas mal resolvidos, dentre os quais desigualdade e pobreza aparecem como principais motivações para protestos. Hochstetler (2008) e Hochstetler/Edwards (2009) claramente apontam a existência de protestos populares como um ingrediente fundamental para a derrubada de presidentes na América Latina. Se as crises têm impacto negativo sobre a legitimidade do regime, espera-se que protestos sejam ainda mais predominantes em países que enfrentaram crises.

Em resumo: combine fraco desempenho governamental, crime, corrupção e fragilidade dos mecanismos de representação institucional, como partidos políticos; misture-os com protestos políticos recorrentes e, *voilà*, você tem uma mistura explosiva de sabores, mais semelhante a um coquetel *Molotov* do que propriamente a um *milkshake* de tardes ensolaradas de domingo. De qualquer forma, a democracia representativa estará sujeita a uma inevitável e dolorida ressaca no dia seguinte.

4. Dados, hipóteses e variáveis

Com base nos dados do Barômetro das Américas de 2008, nós testamos a receita acima. A série é coordenada por Mitchell A. Seligson como parte do Latin American Public Opinion Project (LAPOP) da Vanderbilt University. Uma rede ampla de pesquisadores de todas as Américas participa ativamente em todos os estágios do processo de coleta dos dados, da elaboração dos questionários e desenho da amostra ao pré-teste do questionário, culminando com o treinamento dos entrevistadores e uma extensa e profunda supervisão do trabalho de campo, visando a coleta de dados de opinião público da mais alta qualidade. Os questionários contêm módulos idênticos em todos os países, assim como abordam temas específicos à cada país. O trabalho de campo foi sincronizado em quase todos os países, aumentando ainda mais a comparabilidade das respostas dadas pelos entrevistados às nossas perguntas. As amostras são quasi-probabilísticas, com uma quota por gênero e idade dentro do domicílio, e em estágios múltiplos completamente aleatórios até a seleção do domicílio. Os tamanhos das amostras não variam consideravelmente (+/- 1500 por país) e são pesadas para assegurarem igualdade nos resultados quando analisadas simultaneamente.

A análise dos dados procederá em dois estágios. Inicialmente, o foco é na comparação entre países que enfrentaram crises na década passada e àqueles

que não enfrentaram através de variáveis chaves propostas aqui. Em seguida iremos explorar simples medidas de associação entre ter vivido em países em crise e visões sobre diversas variáveis que são tidas como chave na descrição das raízes das novas formas de instabilidade política na região.

Assim, serão analisadas as avaliações declaradas dos cidadãos em relação ao desempenho econômico do governo, suas experiências de corrupção e crime, a sua participação em protestos políticos e às formas distintas de avaliação e comprometimento institucional. Argumenta-se que as perspectivas dos cidadãos sobre essas questões serão mais negativas em países que enfrentam turbulência política recorrente: Haiti, Nicarágua, Equador, Venezuela, Paraguai, Peru e Bolívia. Sobretudo, nossas hipóteses são que cidadãos que vivem em países que passaram por crises democráticas são mais inclinados a:

- 1) Avaliar negativamente o desempenho econômico dos governos;
- 2) Apresentar maior vitimização e percepção sobre corrupção;
- 3) Ter sido vítima de crimes com mais frequência;
- 4) Ter participado de protestos políticos com mais frequência;
- 5) Demonstrar baixos níveis de identificação e confiança em partidos políticos;
- 6) Avaliar negativamente seus representantes no Congresso;
- 7) Apresentar baixos níveis de confiança nas principais instituições políticas; (Sistema Judiciário, Congresso, Suprema Corte e Governo Nacional).

A fim de operacionalizar os conceitos mencionados acima, nós aplicamos os seguintes itens encontrados no Barômetro das Américas.

Desempenho econômico governamental é um índice somatório de respostas a dois itens baseados em escalas de resposta de 7 pontos que variam entre “nada” e “muito”.

N1. Até que ponto o sr./sra. diria que o governo federal atual combate a pobreza.

N12. Até que ponto o sr./sra. diria que o governo federal atual combate o desemprego.

Experiências com corrupção são construídas como uma escala composta de itens sobre a vitimização à corrupção, com alternativas de resposta “sim” ou “não”, exceto quando explicitado de outra forma:

EXC2. No último ano algum agente de polícia pediu ao sr./sra. uma propina (ou suborno)?

EXC6. No último ano um funcionário público solicitou ao sr./sra. uma propina (ou suborno)?

EXC13. No último ano no seu trabalho, alguém solicitou alguma propina (suborno)?

EXC14. O sr./sra. teve que pagar alguma propina (suborno) aos juízes?

EXC15. Para ser atendido em um hospital ou em um posto de saúde, o sr./sra. teve que pagar alguma propina (suborno)?

EXC16. Na escola ou colégio, o sr./sra. teve que pagar alguma propina (suborno)?

EXC7. Considerando sua experiência ou o que ouviu falar dos funcionários públicos, a corrupção dos funcionários públicos está... ? **[LER]** (1) Muito comum (2) Algo comum (3) Pouco comum (4) Nada comum (8) NS/NR

Vitimização por crime foi operacionada por meio de itens com respostas “sim” ou “não”:

VIC1. Agora mudando de assunto, o sr./sra. foi vítima de algum ato de delinquência (assalto, roubo, sequestro relâmpago, etc.) nos últimos doze meses?

A participação em protestos políticos é baseada nos seguintes itens:

PROT1. Alguma vez na sua vida o sr./sra. participou de manifestação ou protesto público? Participou algumas vezes, quase nunca ou nunca?

Eu uso diversas variáveis para medir a visão do cidadão sobre as instituições de democracia representativa tradicionais. No que se refere a partidos políticos, uso dois itens. O primeiro tem como alternativa de resposta “sim” ou “não” e o segundo apresenta uma escala de sete pontos que varia de “nada” a “muito”.

VB10. Atualmente o sr./sra. simpatiza com algum partido político?

B21. Até que ponto o sr./sra. tem confiança nos partidos políticos?

Para medir as perspectivas sobre o congresso, emprego dois itens. O segundo item, B13, utiliza o mesmo estilo de alternativa de resposta do B21.

M2. Falando do Congresso Nacional e pensando em todos os deputados, sem levar em consideração os partidos políticos a que pertencem, o sr./sra. pensa que os deputados estão fazendo um trabalho muito bom, bom, nem bom nem mal, mal ou muito mal? (1) Muito bom (2) Bom (3) Nem bom, nem mal (regular) (4) Mal (5) Muito mal (péssimo)

B13. Até que ponto o sr./sra. tem confiança no Congresso Nacional?

A última variável é um índice de confiança nas principais instituições democráticas, que será aqui usada para operacionalizar o apoio ao regime

democrático, e é composta por três itens além do B13, que apresentam as mesmas alternativas de resposta.

B10A. Até que ponto o sr./sra. tem confiança na justiça?

B11. Até que ponto o sr./sra. tem confiança na Justiça Eleitoral?

B14. Até que ponto o sr./sra. tem confiança no Governo Federal?

Todos estes itens têm a vantagem de serem diretamente relacionados a fatores de observação concretos. Não há itens sobre o apoio à democracia ou conceitos mais difusos, que tendem a criar questionamentos sobre a acurácia com que o entrevistado reporta suas opiniões sobre eles (Knight 2001). Ou seja, não há itens abstratos ou complexos em demasia que causem problemas para serem respondidos. Além disso, mesmo que o interesse recaia sobre as tendências centrais nesses países, também se inclui na análise medidas de discordância dos entrevistados e de dispersão das opiniões representadas pelos intervalos de confiança nos gráficos abaixo. Por este motivo, não se presume que estas opiniões sejam dominantes, se quer majoritárias em cada país isoladamente: testa-se por isso considerando o intervalo de confiança (Knight 2001).

5. Análise

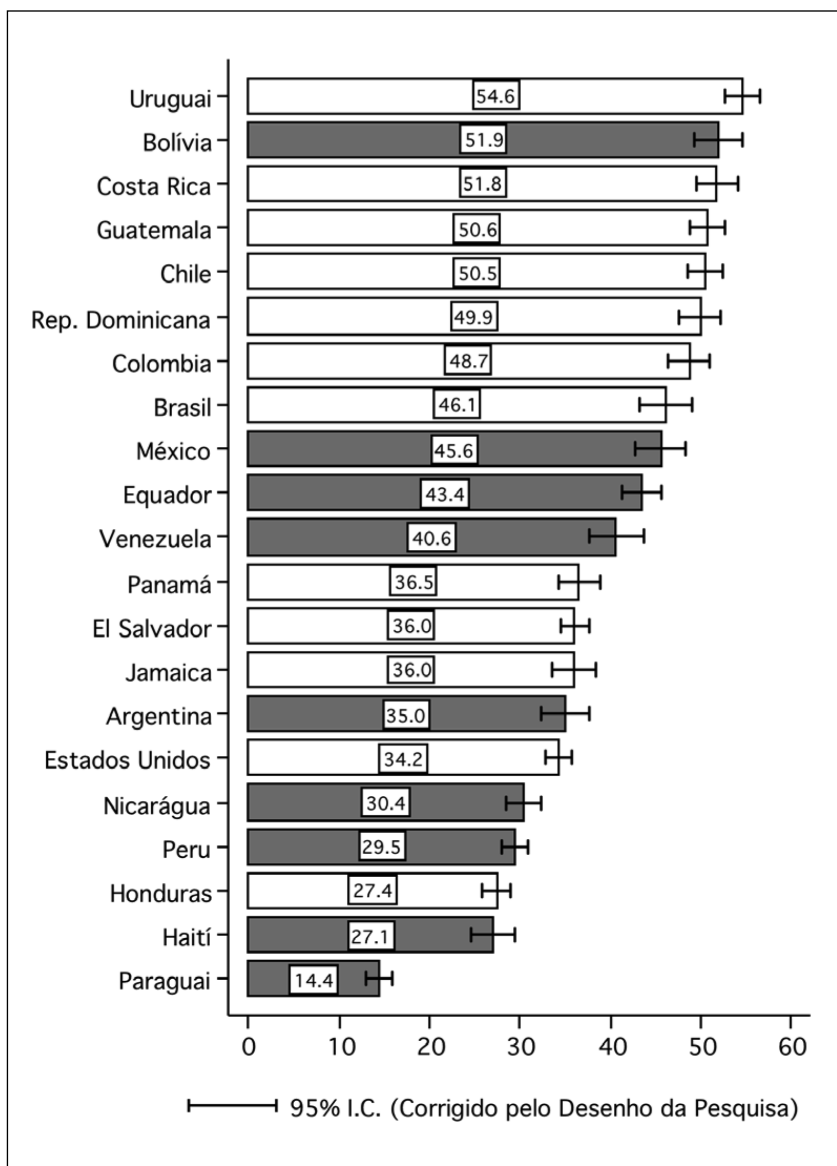
Na análise que segue, são apresentadas evidências de visões do público sobre questões que podem estar associadas a crises democráticas. Países que passaram por crises devem ser agrupados de acordo com as hipóteses apresentadas anteriormente: assim, deve haver um processo de “clustering”, aglomeração de países em grupos que passaram por crises e grupos que não atravessaram crises.

Em teoria, não foi definido um modelo que explica crises, mas um que se baseia em como fatores covariam e estão associados com crises democráticas. Qualquer modelo de crise democrática ou instabilidade de regime deve ser necessariamente mais complexo que o discutido aqui, incluindo explicações sistêmicas e contextuais com a utilização de dados de várias fontes e tipos diferentes. Mas, isso é tarefa para o futuro.

Começamos nossa discussão dos resultados com a análise das percepções sobre performance econômica nos países da região. A figura 1 não indica qualquer padrão claro que diferencie países que atravessaram crises – marcados com a cor mais escura no gráfico – de países que não atravessaram crises.⁵ Há

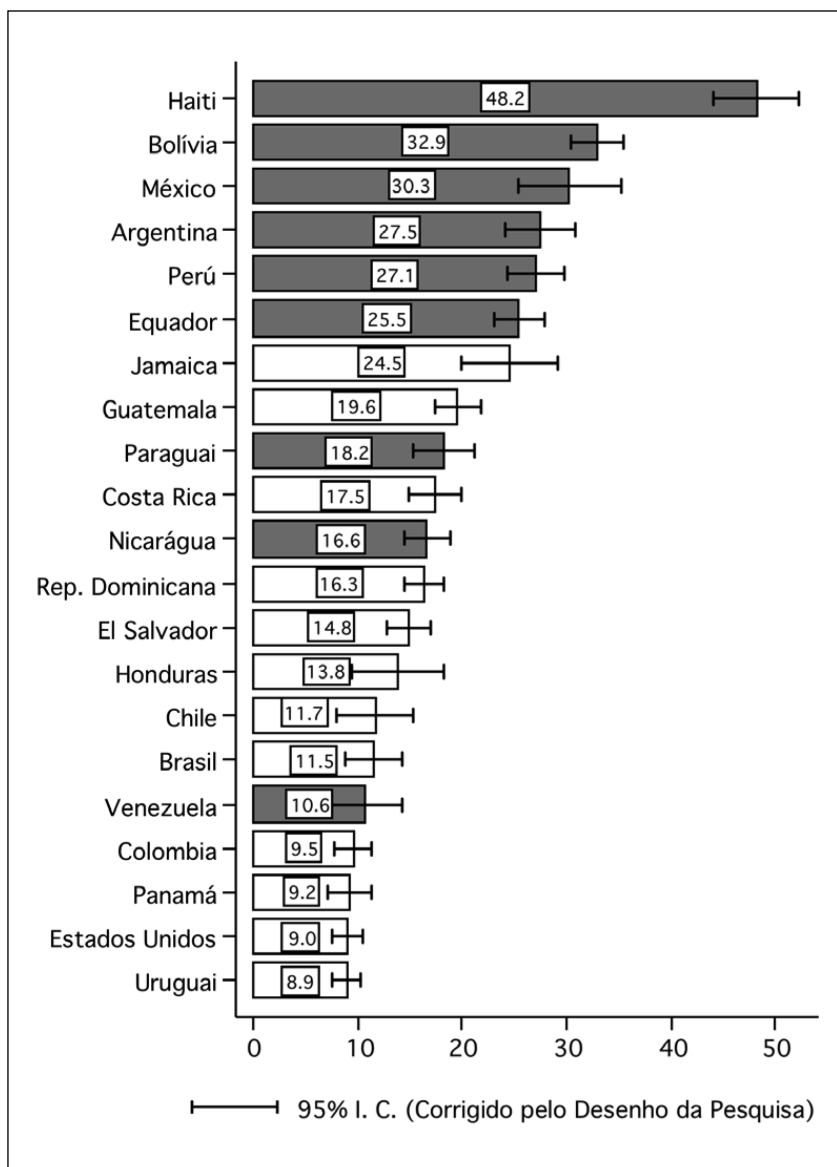
⁵ Inclui o caso do México entre os países que atravessaram crises por conta de sua profunda instabilidade eleitoral em 2006.

FIGURA 1
Avaliações do desempenho econômico do governo nas Américas – 2008



FONTE: Americas Barometer by LAPOP.

FIGURA 2
Vitimização por Corrupção nas Américas – 2008



FONTE: Americas Barometer by LAPOP.

alguma aglomeração de países em crise nos níveis mais baixos de avaliação do desempenho econômico do governo, mas em padrão não tão claro como o que será observado em outras variáveis. Assim, esse ponto inicial confirma a visão de Boniface em que não há uma relação clara entre situação econômica e crise democrática.

A figura 2 apresenta um quadro distinto. Com relação à experiências com corrupção, há uma clara aglutinação de países que atravessaram crise nos pontos mais altos da escala, confirmando a expectativa de que vitimização e percepção sobre a corrupção estão claramente associadas à existência de crises democráticas.

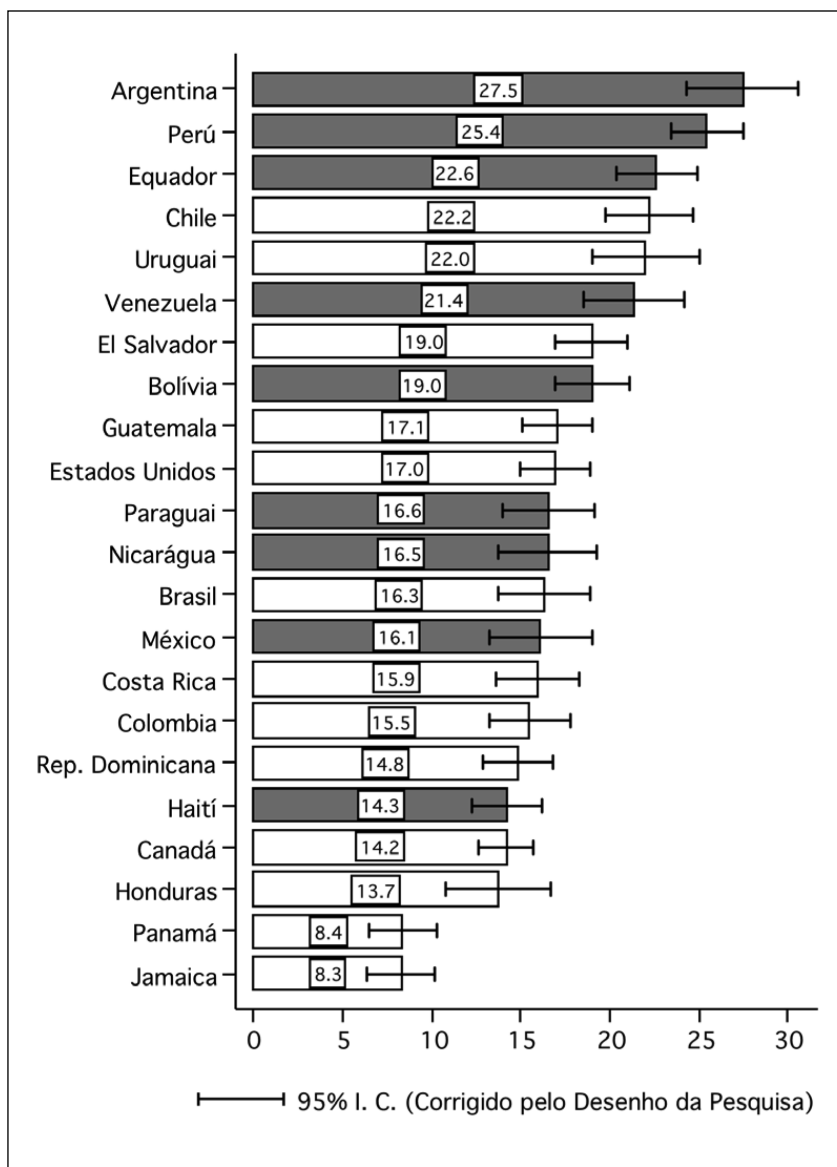
Em seguida, discutimos a hipótese de que vitimização por crime é outro fator associado à crises democráticas. Os resultados não são evidentes nesse caso, como foram na questão da corrupção, o que indica uma baixa capacidade dessa variável de distinguir os países que enfrentaram crises dos demais. Aparentemente, os problemas de segurança pública perpassam todos os países da região (figura 3).

Corrupção, então, está mais fortemente relacionada com crises da democracia do que crime e percepções sobre a economia. E quanto à participação em protesto políticos? Há maior engajamento em protestos nos países que atravessaram crises? Os resultados apresentados na figura 4 não deixam dúvidas de que, mesmo passadas as crises, o engajamento da cidadania em movimentos de protesto continua alta nos países que vivenciaram turbulência política recente. Assim, as crises democráticas do passado, tão claramente baseadas e nutridas por protestos políticos, não eliminaram os problemas e a incidência de engajamento em protestos continua elevada entre a população desses países. Ou seja, a continuação de altos níveis de percepção e vitimização por corrupção, ao lado de uma continuada presença popular em protestos de rua continuam presentes nos países que atravessaram crises democráticas no passado recente.

Finalmente passamos para a discussão sobre indicadores de participação, avaliação e confiança em instituições tradicionais da democracia representativa. Afinal, para Hagopian, Mainwaring e colaboradores, na essência da instabilidade democrática na região Andina está a crise das instituições tradicionais de representação de interesses. As figuras 5 e 6 apresentam dados sobre atitudes frente aos partidos políticos. Fica claro que ainda em 2008, mesmo passadas as crises, os cidadãos dos países que enfrentaram essas instabilidades em seus regimes no passado continuam descrentes dos partidos políticos, embora indiquem alguma identificação com partidos políticos. Ou seja, a crise de representatividade não foi contornada após as crises.

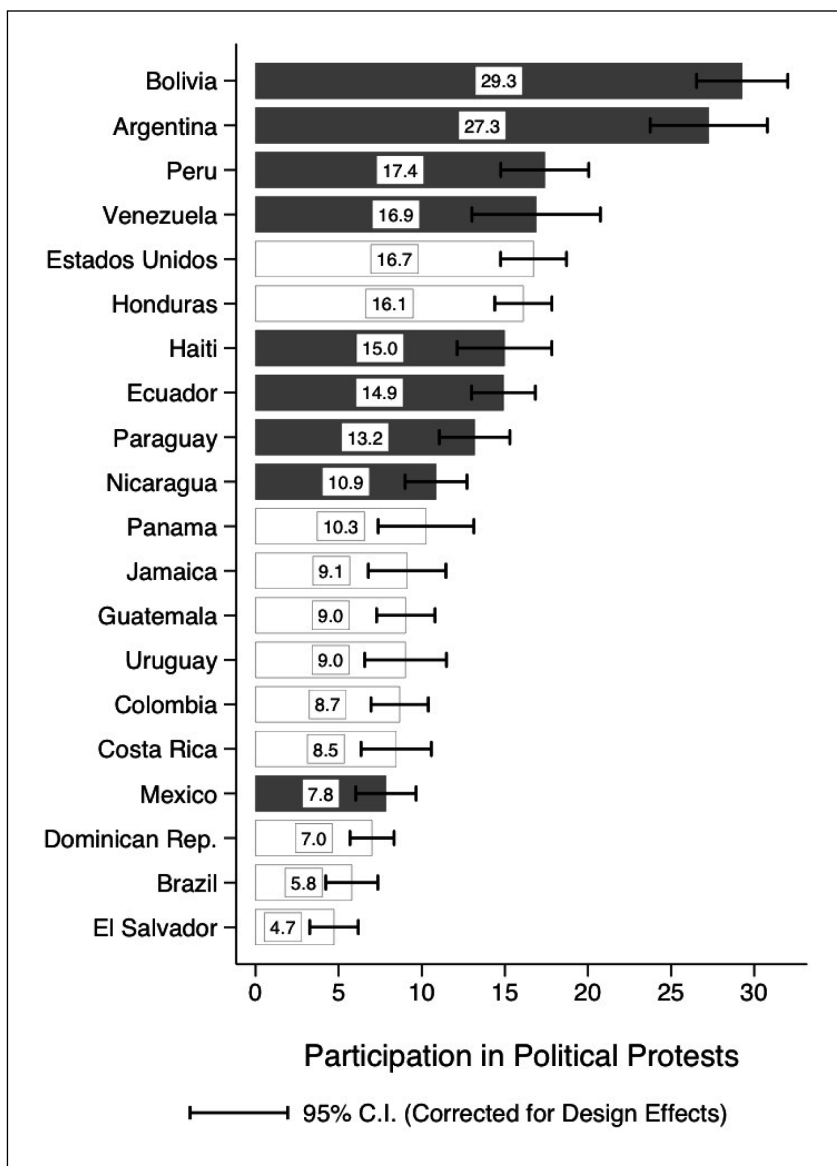
Em trabalhos futuros iremos explorar como essa identificação com partidos políticos pode resultar em cicatrizes mais profundas deixadas pelas crises

FIGURA 3
Vitimização por crime nas Américas – 2008



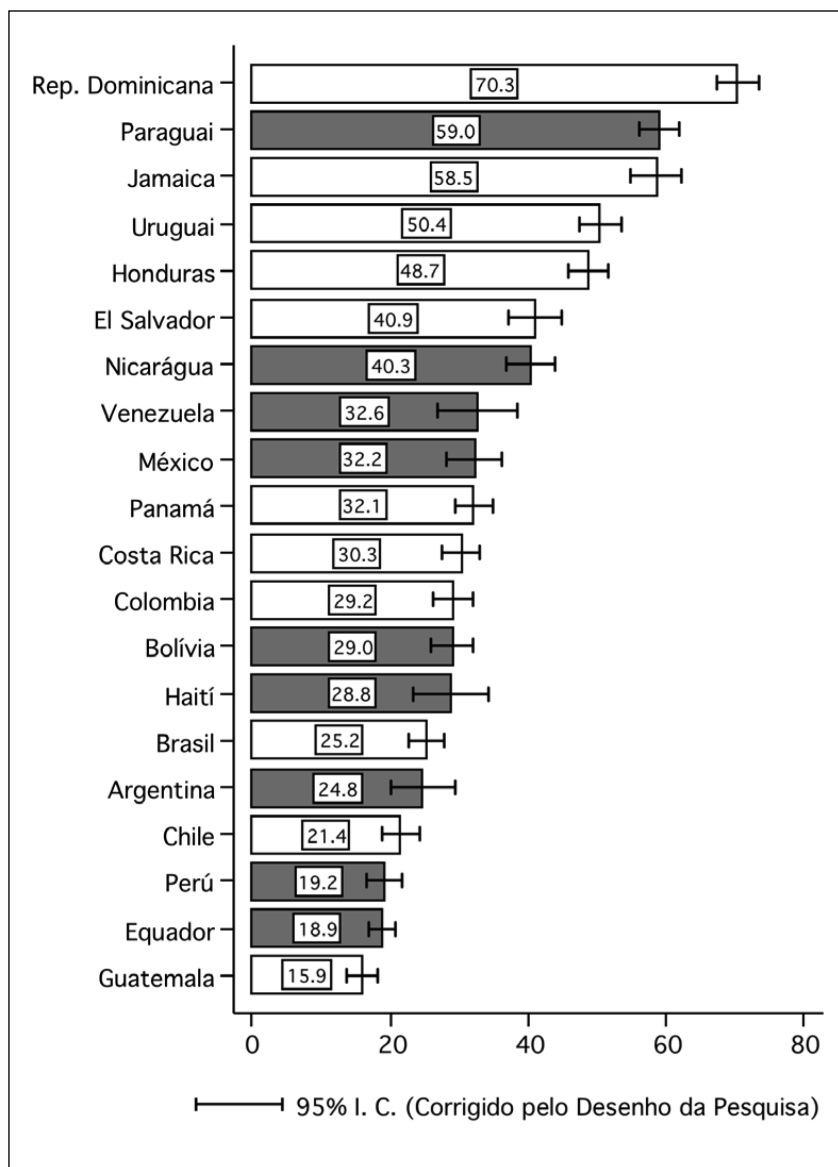
FONTE: Americas Barometer by LAPOP.

FIGURA 4
Participação em protestos políticos nas Américas – 2008



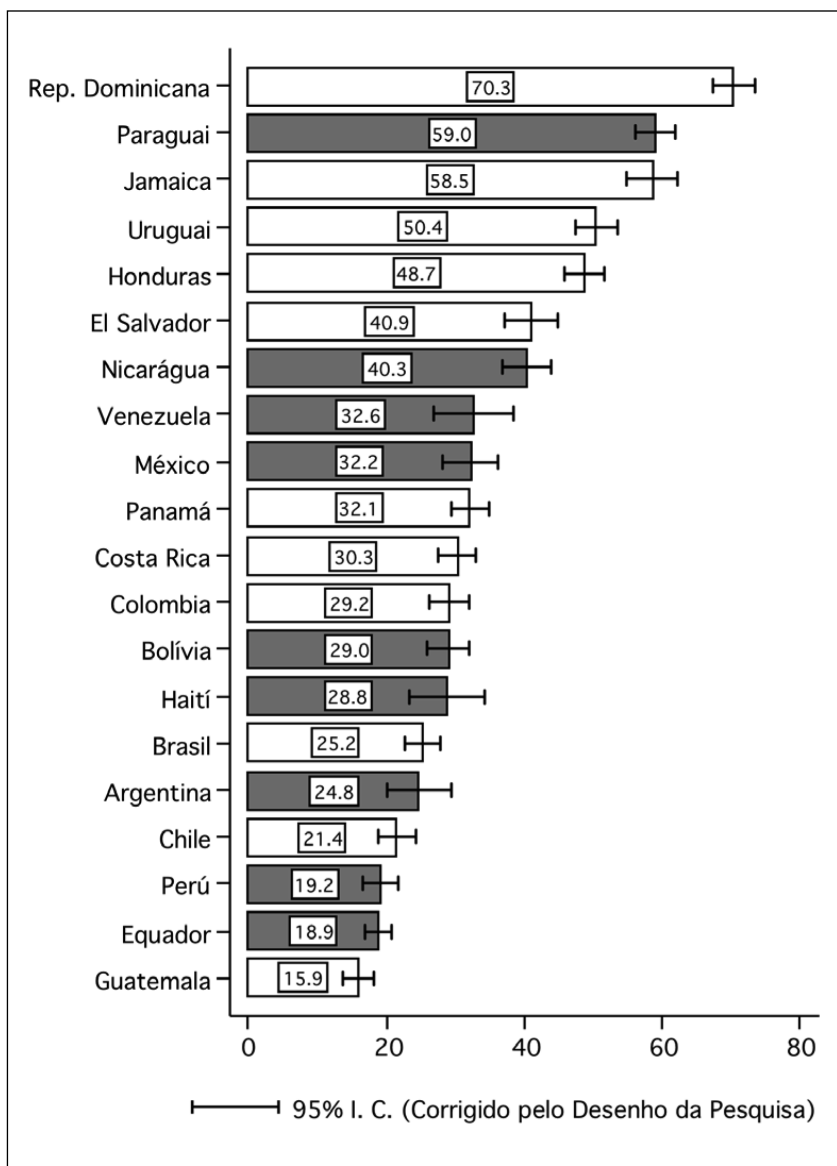
SOURCE: Americas Barometer by LAPOP.

FIGURA 5
Confiança em partidos políticos nas Américas – 2008



FONTE: Americas Barometer by LAPOP.

FIGURA 6
Identificação com partidos políticos nas Américas – 2008



FONTE: Americas Barometer by LAPOP.

dentre os membros de partidos da oposição aos regimes em vigor e que implementaram reformas amplas das regras democráticas. Mas, novamente, esse tema específico é parte da agenda mais ampla de pesquisa em que este primeiro trabalho se insere e será discutido aprofundadamente no futuro.

Também de forma semelhante, países que tiveram crises democráticas recentes também se aglomeram nos níveis mais baixos de confiança no Congresso e avaliações de seus representantes no poder legislativo. Aqui também vemos que o rescaldo das crises não foi uma melhora na avaliação das instituições (figuras 7-8).

Finalmente, em relação ao índice geral de legitimidade das instituições democráticas, vemos os países que atravessaram crises também nos níveis mais baixos. Ou seja, parecem haver fatores mais sistêmicos e enraizados nesses sistemas políticos que o diferenciam daqueles que não atravessaram crises. Mais importante ainda, o saldo das crises não foi uma reversão de padrões anteriores e uma caminhada no sentido de melhora da situação anterior.

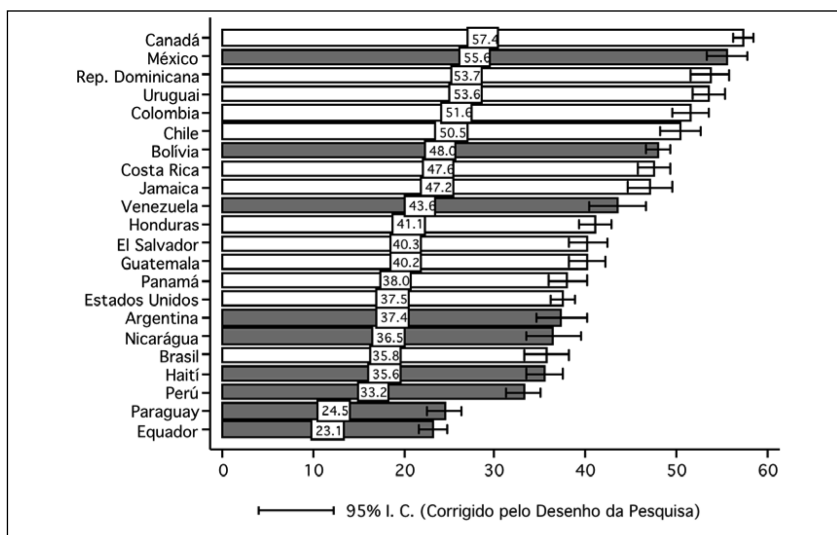
A simples inspeção visual dos gráficos acima indicam que corrupção e protestos políticos tem sido características definidoras de países que atravessaram crises democráticas recentes. As crises do passado não contribuíram para possivelmente alterar esses fatores, supondo que eles já existiam antes, o que só poderemos afirmar de forma contundente com dados comparados no tempo. De qualquer forma, se levarmos em consideração os trabalhos de Hoschestler/Edwards e de Pérez-Liñán, que se baseiam em dados do passado recente e que apontam para esses dois fatores como já presentes antes das crises, o que se pode afirmar é que após as crises, esses dois elementos continuam relevantes nos países que vivenciaram turbulência política. Também fica claro que esses países continuam imersos em profundas crises de representatividade de suas instituições políticas tradicionais. Ou seja, não houve, com raras exceções, uma recuperação do apoio ao sistema democrático após as crises.

A tabela 1 abaixo apresenta coeficientes de associação entre uma variável que indica se o país atravessou crises e as diferentes medidas discutidas acima. As associações mais claras são entre experiências com corrupção e participação em protestos políticos, confirmando a análise acima. A combinação desses dois fatores parece ser explosiva para sistemas políticos.

6. Conclusões

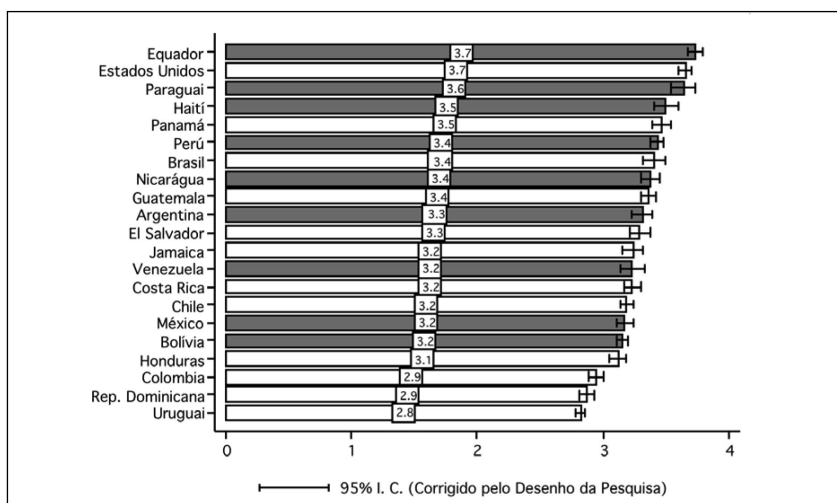
Os resultados acima indicam que países que atravessaram crises da democracia no passado recente continuam se diferenciando dos demais países em fatores que são tidos como centrais para explicar essas crises. Corrupção, engajamento em protestos políticos, baixa avaliação das instituições democráticas

FIGURA 7
Confiança no congresso nas Américas – 2008



FONTE: Americas Barometer by LAPOP.

FIGURA 8
Avaliação de representantes eleitos no Congresso nas Américas – 2008



FONTE: Americas Barometer by LAPOP.

TABELA 1
Coefficientes Gamma para associação entre variáveis
selecionadas e crises democráticas

Variáveis	Coefficiente Gamma
Performance econômica do Governo	−0.13
Experiências com corrupção	0.43
Vitimização por crime	0.13
Participação em protestos políticos	0.42
Identificação com partidos políticos	−0.20
Confiança em partidos políticos	−0.18
Avaliação de representantes no poder legislativo	−0.13
Confiança no Congresso	−0.20
Legitimidade das instituições democráticas	−0.18*

* Usamos nesse caso um coeficiente de correlação Pearson.

representativas continuam diferenciando os regimes que atravessaram turbulência política na última década. Assim, não se pode afirmar que todo o processo de instabilidade, alimentado pela insatisfação da população com a qualidade da representação democrática na região, resultou em regimes melhores, que solucionaram as crises com medidas eficientes e que atacavam, de fato, os fatores motivadores dessas mesmas crises. É possível inclusive especular que as crises da democracia podem ter gerado cicatrizes em grupos específicos, os que perderam nos conflitos ou nos processos de reforma do Estado subsequentes, que resultam em ainda maior distanciamento desses grupos do sistema política e a formação de clivagens políticas ainda mais intensas e conflitivas. Essa combinação de fatores, portanto, pode colocar em risco o processo de consolidação da democracia nesses países e facilmente levar esses regimes a caminhos irreversíveis de consolidação da instabilidade como traço definidor.

Bibliografia:

- AVRITZER, Leonardo (2002): *Democracy and the Public Space in Latin America*. Princeton: Princeton University Press.
- BONIFACE, Dexter (2007): “The OAS’s Mixed Record”, em Legler, T./Sharon, F. L./Boniface, D. (eds.): *Promoting Democracy in the Americas*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, pp. 40-62.
- BOOTH, John/SELIGSON, Mitchell (2009): *The Legitimacy Puzzle in Latin America: Political Support and Democracy in Eight Nations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DIAMOND, Larry/MORLINO, Leonardo (eds.) (2004): *Assessing the Quality of Democracy*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- HAGOPIAN, Frances/MAINWARING, Scott P. (2005): *The Third Wave of Democratization in Latin America: Advances and Setbacks*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HOCHSTETLER, Kathryn (2008): “Repensando el presidencialismo: desafíos y caídas presidenciales en el Cono Sur”, em: *América Latina Hoy*, Vol. 49 Nuevas Formas de Inestabilidad Política, pp. 51-72.
- HOCHSTETLER, Kathryn/EDWARDS, Margaret (2009): “Failed Presidencies: Identifying and Explaining a South American Anomaly”, em: *Journal of Politics in Latin America*, 1:2, 31-57.
- HOFFMAN, Kelly/CENTENO, Miguel Angel (2003): “The Lopsided Continent: Inequality in Latin America”, em: *Annual Review of Sociology*, 29, pp. 363-390.
- HUNTINGTON, Samuel P. (1968): *Political Order in Changing Societies*. New Haven/London: Yale University Press.
- KNIGHT, Alan (2001): “Polls, Political Culture and Democracy: A Heretical Historical Look”, em: Camp, Roderic (ed.): *Citizen Views of Democracy in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, pp. 223-242.
- LLANOS, Mariana/MARSTEINTREDET, Leiv (2010): *Presidential Breakdowns in Latin America: Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies*. New York: Palgrave Macmillan.
- LINZ, Juan J. (1978): *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration*. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press.
- MAINWARING, Scott (2006): “The Crisis of Representation in the Andes”, em: *Journal of Democracy*, 17:3, pp. 13-27.
- MAINWARING, Scott/BEJARANO, Ana María/LEONGÓMEZ, Eduardo Pizarro (2006): *The Crisis of Democratic Representation in the Andes*. Stanford: Stanford University Press.
- MAINWARING, Scott/O'DONNELL, Guillermo/VALENZUELA, J. Samuel (1992): *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective*. Notre Dame: Published for the Helen Kellogg Institute for International Studies by University of Notre Dame Press.
- MARSTEINTREDET, Leiv (2008): “Las consecuencias sobre el régimen de las interrupciones presidenciales en América Latina”, em: *América Latina Hoy*, Vol. 49 Nuevas Formas de Inestabilidad Política, pp. 31-50.

- MOISÉS, José Álvaro (1995): *Os Brasileiros e a Democracia: Bases Sócio-Políticas da Legitimidade Democrática*. São Paulo: Editora Ática.
- PEREZ-LIÑAN, Anibal (2007): *Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2008): “Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política: perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales“, em: *América Latina Hoy*, Vol. 49 Nuevas Formas de Inestabilidad Política, pp. 105-126.
- PORTES, Alejandro/HOFFMAN, Kelly (2003): “Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Neoliberal Era“, *Latin American Research Review*, 38:1, pp. 41-82.
- PRZEWORSKI, Adam (1986): “Some Problems in the Study of the Transition to Democracy“, em: O'Donnell, G./Schmitter, P./Whitehead, L. (eds.): *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press, pp. 47-63.
- REIS, Fábio Wanderley/O'Donnell, Guillermo (1988): *A Democracia no Brasil : dilemas e perspectivas*. São Paulo: Vértice.
- RENNÓ, Lucio/SMITH, Amy E./LAYTON, Matthew L./PEREIRA, Frederico B. (2011): *Legitimidade e Qualidade da Democracia no Brasil: Uma Visão da Cidadania*. São Paulo: Intermeios.
- SELIGSON, Mitchell (2007): “The Rise of Populism and the Left in Latin America“, em: *Journal of Democracy*, 18:3, pp. 81-95.
- STEPAN, Alfred (1989): *Democratizing Brazil: Problems of Transition and Consolidation*. New York/Oxford: Oxford University Press.
- ZAKARIA, Fareed (1997): “The Rise of Illiberal Democracy“, em: *Foreign Affairs*, 76, pp. 22-43.

Emil Albert Sobottka

Políticas sociais e desigualdade social no governo Lula da Silva

O Brasil convive, historicamente, com uma contradição entre seu peso político e econômico crescente na América Ibérica, e tentativamente até em nível global, e níveis elevados e persistentes de desigualdade interna. Um protagonismo crescente em nível internacional em situações de conflito como a questão nuclear no Irã ou na articulação de blocos regionais na Organização Mundial do Comércio, ou sua condição de sétima economia mundial em termos de Produto Interno Bruto, à frente da Itália, testemunham a favor de um país que quer “chegar ao primeiro mundo” ou superar seu status de “país em vias de desenvolvimento”. O empenho em conseguir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU expressa a autoconfiança adquirida em anos recentes sobre seu papel como líder regional e como protagonista internacional.

Essa situação contrasta com a permanência do país em posições precárias em indicadores que expressam níveis de desigualdade no acesso a bens, serviços e a condições de vida. Assim, o Brasil, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no final da década de 2000 permanecia em 73º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano e tinha uma distribuição de renda com coeficiente de Gini de 0,55 (UNDP 2010, tabelas 1 e 3). A Alemanha está em 10º lugar no desenvolvimento humano e tem coeficiente de Gini 0,28 para a distribuição de renda. Enquanto os 10% mais ricos ficavam com 43% da renda, os 10% mais pobres dividiam entre si somente 1,1%. Esses dados revelam a continuidade da desigualdade social no Brasil. Na Alemanha, onde a desigualdade social recentemente voltou a crescer, em 2005 a participação dos 10% mais ricos na renda era de 23,1% e a dos 10% mais pobres era de 2,5%.

No presente texto, o foco não estará na faceta do Brasil que quer chegar ao Primeiro Mundo e que quer ser um importante protagonista internacional. Antes, ele estará no polo da persistente desigualdade e das políticas sociais que, em tese, estariam destinadas a minimizar ou até mesmo superar a desigualdade social. Primeiro será feito uma breve reconstituição das recentes etapas pelas quais passaram as lutas e as políticas sociais nas últimas três décadas, posteriores ao golpe militar de 1964. Depois serão analisadas as linhas

predominantes das políticas sociais do governo Lula. Por fim, o texto se volta para a questão acerca das possíveis explicações para a persistência da desigualdade em níveis tão elevados.

A expansão da desigualdade social e a esperança de superá-la

“Primeiro é preciso deixar o bolo crescer, para depois distribuí-lo”. Essa frase, atribuída ao mais influente tecnocrata do regime militar (1964-1985) brasileiro, Antonio Delfin Neto, expressa bem a postura daquele regime frente à questão da desigualdade social. Para impulsionar o crescimento da economia, os governantes julgavam necessário concentrar as riquezas nas mãos de quem pudesse reinvesti-las. Como nos segmentos mais pobres da população a renda, que geralmente vem de salário, se traduziria praticamente toda em consumo, seria preferível diminuir a participação dos salários na renda nacional e, assim, indiretamente fomentar a poupança e a disponibilidade de verba para investimentos. Por consequência dessa política, o salário mínimo foi tendo seu poder de compra diminuído continuamente.

Ao mesmo tempo em que se desenvolvia a política explícita de concentração da renda, durante o regime militar coincidiam repressão a movimentos organizados e baixa capacidade organizativa dos segmentos majoritários da população. Sindicatos e associações eram amplamente controlados pelo regime, inibindo seu caráter político. Para dar alguma legitimidade a essas organizações, foram atribuídas a elas diversas tarefas assistenciais, como assistência básica à saúde e cuidados odontológicos. Atividades de mobilização política para reivindicar aumentos salariais, no caso dos sindicatos, ou políticas públicas específicas, no caso das demais associações, eram vetadas e reprimidas. Partidos políticos só eram permitidos dois: um que era a base de sustentação do governo, e outro que fazia oposição moderada e controlada. Contribuiu para uma certa letargia na população o fato de que suas reivindicações eram relativamente difusas. Segundo Santos, isso tudo levou a que à época, “permanece a noção de cidadania destituída de qualquer conotação pública e universal. Grande parte da população é pré-cívica e nela não se encontra ínsita nenhuma pauta fundamental de direitos” (Santos 1979, p. 104).

A transição do autoritarismo do regime militar para a democracia no Brasil foi lenta e, em certa medida, controlada. Nas eleições de 1974, o único partido de oposição permitido à época obteve vitórias significativas sobre o partido de sustentação do regime militar em grandes cidades e estados mais populosos. Isso serviu de alerta aos militares para que gradativamente distendessem o regime. Foi assim que aceitaram uma anistia, reintroduziram o pluripartidarismo e permitiram eleições para governadores nos estados e para prefeitos nas

capitais, o que até então era proibido. Mas a maior campanha popular que o país já teve, a campanha por *eleições diretas já* para presidente, foi derrotada. Mesmo assim, numa eleição indireta os militares foram derrotados e viram o poder voltar às mãos de um presidente civil em 1985. A transição para a democracia no Brasil durou metade do período do regime militar.

O Brasil do autoritarismo, do controle e da repressão dos movimentos sociais organizados, dos sindicatos controlados pelo governo e dos partidos políticos de oposição genuína proibidos, foi cedendo lugar para um Brasil que queria uma democracia substantiva, com reformas políticas, sociais e com direitos humanos respeitados. Queria a cidadania para todos.

A partir do final dos anos 1970, os movimentos sociais conseguiram se reorganizar e trazer suas reivindicações à agenda política. Greves de metalúrgicos na região mais industrializada do país, conhecida como ABC, foram a face visível de uma organização crescente das forças sociais opositoras ao regime, que se estendia desde sindicatos rurais retomados pela oposição, passando por associações de bairros e movimentos reivindicatórios urbanos, até a atuação conjunta de organizações intermediárias da sociedade civil, tais como as igrejas Católica Romana e do Protestantismo Histórico (luteranos, presbiterianos, metodistas, anglicanos), Associação Brasileira de Imprensa, Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros.

Aumento salarial, reforma do solo urbano, moradia, saúde, inclusão dos trabalhadores rurais na previdência, respeito aos direitos humanos e eleições diretas para todos os cargos políticos, foram as principais bandeiras. Gradativamente essas reivindicações foram sendo reinterpretadas na forma de uma democracia *substantiva*, de uma nova constituição e de uma *cidadania plena*. Pode-se dizer assim que, no Brasil, a década de 1980 foi se configurando menos como uma “década perdida” e muito mais como a década dos movimentos sociais, da organização da sociedade civil, da expansão das políticas de bem-estar social. Duas conquistas expressam a força adquirida por eles no período.

A primeira foi a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), um sistema de atendimento amplo à saúde, público e não contributivo, que tinha como orientação central a tese de que “a saúde é um direito de todos e um dever do estado”. Três diretrizes básicas orientavam esse sistema: a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade. Os três níveis de governo – união, estados e municípios – se responsabilizavam por uma política, cuja formulação passaria a ser feita através de Conselhos de Saúde (cf. Yunes 1999). A segunda foi o processo constituinte, do qual resultou a nova Constituição Federal, em 1988. O capítulo dos direitos sociais acolhe um conjunto de direitos materiais de cidadania tão abrangente que se poderia dizer que ele expressa a legitimação constitucional de um projeto de estado de bem-estar

social. Além de acolher o SUS, essa constituição estendeu também ao mundo rural os direitos trabalhistas, introduzidos originalmente apenas para trabalhadores urbanos na década de 1940.

Estas conquistas formais dos movimentos sociais contrastam com a tendência predominante à época em muitos países, em especial nos países industrializados (Esping-Andersen 1990), onde o estado de bem-estar social estava sendo questionado, reformado e, em boa medida, substituído por uma política de orientação neoliberal.

Parecia que no Brasil um segundo projeto de sociedade estava sendo gestado: o de uma sociedade de bem-estar, com um amplo conjunto de direitos de cidadania reconhecidos a todos, um governo democraticamente eleito e políticas públicas, em especial políticas sociais, orientadas para toda a população e não apenas para pequenas minorias (cf. Sobottka 2003).

Mas a onda de reformas com orientação neoliberal acabou chegando também ao Brasil. Se no cenário internacional o ano de 1989 é lembrado pela queda do muro de Berlim e como uma suposta vitória do sistema capitalista sobre as experiências socialistas, no Brasil este foi o ano das primeiras eleições diretas para presidente da república desde o regime militar. Para os movimentos sociais e setores próximos a eles, parecia ter chegado a hora de concluir a transição para a democracia e para um estado de bem-estar social, mediante a conquista do poder pela via eleitoral.

Ao longo da campanha eleitoral foram se constituindo em polos opostos dois projetos de sociedade: de um lado, este projeto de um estado de bem-estar, da ampliação da cidadania, da redistribuição ampla da propriedade, da renda e das oportunidades de vida. Do fim da histórica desigualdade social e, pelo menos na expectativa de alguns, da transição gradativa ao socialismo pela via eleitoral. De outro lado, por trás de um discurso de modernidade se agruparam as forças que queriam limitar a intervenção redistributiva do estado na economia, estender as regras do mercado para o maior número possível de esferas da vida social e impedir a implantação efetiva de políticas sociais nos termos previstos pela constituição. Luis Inácio Lula da Silva, sindicalista surgido como liderança a partir dos movimentos grevistas de 1978, era o candidato que representava o primeiro projeto; Fernando Collor de Mello, ligado à oligarquia rural nordestina, representava o segundo, que acabou saindo vencedor.

A década de 1990 foi de predominância desta política de orientação neoliberal, tendo como eixos o combate à inflação através do receituário monetarista, a abertura ampla do mercado brasileiro para empresas transnacionais, privatização de empresas e de serviços públicos e algumas tentativas de reforma da administração do estado. Também foram reiteradamente discutidas propostas de reforma na legislação trabalhista, tornando mais *flexíveis* os direitos dos trabalhadores. Os movimentos sociais foram enfraquecidos e não conseguiram

pressionar o governo o suficiente para fazê-lo implementar os novos direitos conquistados no processo constituinte. Um auxílio-desemprego de três meses foi a única política social nova de certa abrangência implantada no período. A política de achatamento dos salários e de concentração da renda e da propriedade, iniciada durante o regime militar, chegou ao seu apogeu. O salário mínimo chegou a valer 17,5% de seu valor original e se estabilizou em torno de 25% do poder de compra.

Uma política de assistência social foi introduzida, amparando em especial pessoas idosas e portadoras de deficiência que vivem em situação de pobreza, tornando realidade um direito que até então estava apenas reconhecido formalmente. Em compensação, foi realizada uma pequena reforma da Previdência Social, com o intuito de reduzir seus gastos. A principal mudança foi a introdução de uma fórmula de redução dos benefícios na previdência do regime geral, denominada *fator previdenciário*, que simultaneamente dilata o prazo para concessão de aposentadoria e diminui drasticamente os benefícios que o segurado pode esperar. Os privilégios do regime especial de aposentadoria dos funcionários públicos ficaram intactos.

A política de orientação neoliberal inseriu o país no mercado internacional, remodelou amplamente a economia, desnacionalizou setores da atividade econômica. Desenvolvimento econômico e direitos sociais foram afastados da agenda política – mas não foram feitos cortes radicais na política social já vigente.

Graças à privatização de empresas estatais e de serviços públicos, assim como à crescente intervenção do estado como patrocinador do capital através de financiamentos altamente subsidiados, durante esse período uma pequena camada da população brasileira enriqueceu muito, ampliando o já considerável abismo entre ricos e pobres. Uma política de altas taxas de juros e de endividamento interno em níveis antes desconhecidos permitiu, adicionalmente, a transferência de renda tanto para grandes especuladores do mercado financeiro como para segmentos intermediários da população capazes de fazer alguma poupança, investir no mercado financeiro e assim ampliar a renda não derivada do trabalho.

Juntando as quatro políticas deste modelo: a transferência de patrimônio da sociedade para mãos particulares, por meio de privatizações; financiamentos altamente subsidiados e isenções de impostos para grandes empresas; uma política de elevadas aposentadorias para a elite do funcionalismo público; e taxas de juro elevadas para remunerar a dívida pública, tem-se o mapa de como a riqueza socialmente produzida no Brasil era transferida para uma restrita clientela política daquele governo. Face à dificuldade para recortar direitos sociais em grande escala, o governo ampliou a carga tributária em sete pontos percentuais sobre o Produto Interno Bruto, especialmente com impos-

tos regressivos, que pesam mais sobre a população com menor renda, e “devolveu” esses recursos a sua clientela, sem ampliar significativamente os investimentos públicos.

A estabilização da economia, que antes padecia com inflação de dois dígitos ao mês, assim como reajustes no salário de algumas categorias de trabalhadores mais organizadas permitiram com que, a despeito do aumento da desigualdade social, o período de políticas neoliberais resultasse em pequenos ganhos no poder de compra dos salários. Isso deu legitimidade aos governantes e permitiu que em sucessivas eleições saíssem vitoriosos e seguissem derrotando o candidato Lula da Silva enquanto representava o modelo de uma política de bem-estar social.

Assim, nas últimas quatro décadas do século 20 o Brasil tinha diante de si três projetos bem distintos de sociedade. Primeiro um regime autoritário, que concentrava a riqueza, achatava os salários e reprimia movimentos sociais, sindicatos e opositores políticos. Depois, por um breve período parecia ser possível construir uma sociedade democrática, fortalecer a cidadania com direitos civis, políticos e sociais efetivos e superar o abismo que separa os extremos da sociedade. Por fim, uma política de orientação neoliberal estabeleceu novos modos de relações sociais, relativizou a ideia de uma cidadania abrangente, com direitos civis, políticos e sociais para todos e a substituiu pela lógica do mercado.

Ao longo de 2002 foi se desenhando um quadro de relativa insatisfação com essas políticas. Endividamento do estado e as altas taxas de juro limitavam a continuidade de transferência de renda para os segmentos privilegiados da economia, e os ganhos marginais dos mais pobres com a estabilização haviam estagnado. Era possível antever chances eleitorais para a oposição nas eleições presidenciais de outubro daquele ano – uma vitória que o Partido dos Trabalhadores e Lula da Silva obtiveram, depois de uma das mais acirradas campanhas eleitorais que o país viveu. Foi este acirramento que levou o candidato vitorioso a proclamar, logo após as eleições, que “a esperança venceu o medo”.

Ambiguidades políticas no governo Lula da Silva (2003-2010)

Medo e esperança eram sentimentos difusos presentes na população brasileira em relação ao governo de Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores. Esperança “de transformar o injusto panorama social brasileiro, interromper o persistente ciclo vicioso de corrupção no estado, recuperar e aprofundar o crescimento econômico, enfim, de profundas transformações nas esferas social, política e econômica do país”. Medo associado “à perda de credibilidade do

país junto ao mercado externo, à fuga de capitais, ao incremento do processo recessivo e inflacionário que já se encontravam em curso, enfim, a toda ordem de distúrbios macro-econômicos que pudessem vir associados a uma mudança radical na política econômica do país” (Dias e Perez 2006).

O partido foi fundado como expressão política do sindicalismo combativo, dos movimentos sociais, de setores organizados da sociedade civil e de uma ala mais crítica da intelectualidade brasileira. Ele colocou como objetivo programático a transição para o socialismo, defendia o não-pagamento da dívida externa, a estatização dos bancos, uma reforma agrária abrangente, entre outras políticas consideradas polêmicas à época.

Depois de primeiros insucessos eleitorais, este partido conseguiu ampliar seu apoio gradativamente. Na medida em que assumiu responsabilidade de governo em níveis local e regional, desenvolveu formas participativas de decisão das políticas, inverteu prioridades na aplicação dos gastos públicos e atendeu com políticas públicas parcelas da população que antes raramente tinham suas demandas respeitadas. A expectativa com o incentivo à participação e a descentralização foi que o movimento popular se fortalecesse para dar governabilidade e legitimidade ao partido. Assim poderia colocar em prática políticas voltadas para segmentos da população antes excluídos das políticas públicas.

Tanto o partido como os movimentos sociais haviam construído sua participação política como críticos e opositores. Agora viram-se frente a novos papéis e a uma nova relação entre si. Para os movimentos sociais parecia haver chegado a hora de dar grandes passos em direção a uma nova sociedade. Nesta parceria, no entanto, havia uma ambiguidade: a participação exige níveis de formalização e coloca como necessários lógicas, cronogramas e procedimentos típicos da burocracia ou do jogo político, alheios ao cotidiano dos movimentos e dos cidadãos em geral. Além disso, a própria participação era patrocinada pela administração pública a quem, em tese, deveria controlar.

Mesmo assim, gradativamente o PT ganhou apoio tanto entre os mais pobres como em setores médios da população (cf. Sobottka 2006b). A percepção de chances reais de se tornar uma alternativa de poder motivou a polarização política. Mas essa mesma percepção foi também o que levou os estrategistas partidários a buscar condições não apenas de vencer a próxima eleição, mas de criar condições do que denominavam governabilidade.

Para dirimir desconfiança dos setores que temiam um rompimento institucional caso Lula fosse eleito, foi a divulgação da *Carta ao Povo Brasileiro* três meses antes da eleição (Silva 2002). Nela, o candidato Lula prometia que não mudaria o tripé da estabilidade: câmbio flexível, metas de inflação arrojadas e geração de superávit primário para o serviço da dívida. Com isso, comprometia-se a manter o núcleo duro, monetarista, da política neoliberal, outrora tão abominada.

Outra iniciativa importante do PT foi uma nova política de alianças: Lula convidou o empresário mineiro José de Alencar, do Partido Liberal, para ser seu vice. A imposição dessa aliança rompeu com a tradição de democracia interna do PT (Lacerda 2002) e já prenunciava um certo autoritarismo interno, que se ampliaria nos anos seguintes. Ela culminou com a expulsão de qualificados quadros partidários que queriam preservar o patrimônio político da agremiação (Samuels 2004; Sobottka 2006b).

Passados os oito anos de gestão de Lula da Silva como presidente do Brasil, é possível constatar que o medo foi exagerado. Os dados macro-econômicos do Brasil, de um modo geral, seguiram dentro de padrões consideráveis normais ou mesmo bons. A inflação permaneceu sob controle, com uma média de 5,8% anuais. O país não perdeu credibilidade, nem dele fugiram os capitais. Ao contrário, o Brasil assumiu posições de respeito e destaque, tanto em nível político como econômico. Particularmente em relação aos investimentos externos, os indicadores são consistentes: em abril de 2008 o Brasil recebeu de agências internacionais o título de grau de investimento, o fluxo de capitais para o país se manteve alto, e o crescimento do PIB se manteve em média em 4% ao ano, contra 2,3 em média nos oito anos anteriores.

Do mesmo modo as propostas radicais que o PT defendia antes foram deixadas de lado. A dívida externa foi sendo fielmente paga, o país ampliou suas relações com o Fundo Monetário Internacional, empresas capitalistas nacionais foram fortalecidas e empresas internacionais, em especial bancos e companhias de comunicação, seguiram tendo no Brasil seus maiores lucros. A reforma agrária também não foi feita. Nessas áreas, o governo anterior dificilmente teria feito uma política muito diferente.

Uma estratégia foi colocar pessoas de confiança do mercado financeiro internacional nos postos chave da economia. Assim, para presidente do Banco Central foi nomeado o ex-presidente mundial do Banco de Boston; no Ministério da Fazenda foi colocado o interlocutor do partido com o grande empresário e tesoureiro da campanha eleitoral, e o Ministério da Agricultura foi dirigido por uma liderança do agronegócio exportador, aliada do latifúndio e em aberto conflito com a agricultura familiar, histórica base do Partido dos Trabalhadores ao lado dos sindicatos urbanos.

O governo Lula da Silva, ademais, fez uma política muito agressiva de alianças e foi apoiado por grande maioria dos partidos políticos. Alguns de seus aliados eram expoentes políticos dos governos anteriores – desde os tempos da ditadura militar. O preço a ser pago foi elevado: a barganha política do orçamento e loteamento da máquina estatal entre apadrinhados políticos tornaram-se rotina, o controle sobre as contas públicas foi relaxado. Práticas históricas de corrupção e favorecimento pessoal não foram apenas toleradas, mas incorporadas à prática cotidiana de alguns expoentes do próprio PT. O mais

flagrante desses episódios foi o “escândalo do mensalão”, onde aparentemente o apoio político de parlamentares era pago na forma de remunerações mensais ilegais, com recursos desviados dos cofres públicos em complexas transações. Esta prática já é mais antiga – e mesmo o direito à reeleição, que necessitava uma mudança na constituição, aparentemente foi conquistado assim por Fernando Henrique Cardoso.

Desigualdade e políticas sociais

Mas enquanto a política macro-econômica foi feita pelos antigos adversários políticos do PT, as políticas sociais foram a área em que muitas das bandeiras tradicionais do PT e de seus apoiadores encontraram sua mais clara expressão. Delas serão extraídos agora alguns exemplos para, com base neles, analisar a questão de sua incidência sobre a desigualdade social.

O valor do salário mínimo nacional (aprox. 270€) tem no Brasil uma influência muito grande na renda das pessoas mais pobres. Estima-se que 22 milhões de trabalhadores assalariados o recebam como remuneração. Outras 18,3 milhões de pessoas recebem benefícios sociais em valores equivalentes a um salário mínimo também. Um elevado número de servidores públicos nos estados e municípios também recebem renda baseada no valor do salário mínimo. Além disso, as linhas de pobreza e de pobreza absoluta ou miséria são definidas com base nele. Serão essas linhas de pobreza que definirão quem poderá receber uma série de benefícios da política social.

Já foi referido que o regime militar impôs uma política de desvalorização do trabalho, expressa na perda de poder aquisitivo do salário mínimo. Quando em 1990 começou o período de políticas de orientação neoliberal, o salário mínimo tinha 34,5% de seu poder original de compra; a desvalorização seguiu até atingir 17,5% em dezembro de 1992, seguindo-se então uma leve recuperação até 25,7% em 2003, quando Lula da Silva assumiu o governo. No final do seu governo, o poder de compra havia sido elevado até um nível de 46,2% de seu poder original de compra – praticamente igualando o poder de compra do salário no final do regime militar, quando estava em 47,6%.

Recentemente houve uma grande discussão sobre a política de reajustes deste salário: um acordo informal entre governo e centrais sindicais previa um reajuste anual que repõe a inflação e acresce o crescimento do PIB de há dois anos. Como a crise econômica mundial resultou em crescimento negativo do PIB em 2009, em 2011 ocorreu apenas a reposição da inflação, ao passo que em 2012 deveria haver um reajuste de 7,5% acima da inflação. A despeito de muita pressão das centrais sindicais, da oposição no parlamento e de alguns membros do próprio governo, a política foi mantida.

Lula da Silva foi o presidente mais popular do Brasil. Uma das principais razões foi, sem dúvida, a ascensão social provocada pela combinação de aumentos reais no poder de compra do salário mínimo com uma política de transferência direta de renda através de políticas sociais. O Banco Central do Brasil (2010) estima que 25 milhões de brasileiros e brasileiras passaram das *classes* D e E para a *classe* C. O coeficiente Gini para a desigualdade social, passou de 0,60 em 1995 para 0,54 em 2010, sinalizando uma gradativa diminuição nas disparidades entre os mais ricos e os mais pobres. Parte desta mudança é atribuída à maior formalização da economia – que não aumenta a renda, mas dá maior acesso à seguridade social. Já o aumento do poder de compra do salário mínimo tem influência direta sobre o valor das aposentadorias de menor valor, das Prestações de Benefício Continuado e o Programa Bolsa Família. Provavelmente dois terços da queda da desigualdade social se devem à política de assistência, com transferência direta de renda. Com isso, a diminuição da desigualdade não se deve a mudanças estruturais consistentes, na organização da sociedade brasileira, mas a uma política de assistência social.

A Prestação de Benefício Continuado para pessoas idosas pobres, correspondente ao valor de um salário mínimo (aprox. 270€) mensal, está previsto na constituição e não pressupõe contribuição prévia. O programa Bolsa Família foi a grande marca da política social do governo Lula da Silva, e segue em vigência no governo de Dilma Rousseff. Este programa foi criado em 2003 no marco do combate à fome e à desnutrição, e resultou da reunião de diversos pequenos benefícios. Há dois critérios de acesso: famílias com renda per capita abaixo de 30,50€ recebem um benefício equivalente a 30,50€ mensais; elas e mais todas as famílias cuja renda per capita está abaixo de 60,90€ mensais recebem ainda 13,90€ para cada filho até 15 anos, até o limite de 5 filhos, e 16,50€ para até dois filhos entre 16 e 17 anos. Como contrapartida, as crianças em idade escolar devem frequentar a escola regularmente e com bom aproveitamento; ademais, mulheres e crianças devem participar dos programas de saúde preventiva. Se estas condicionalidades não são cumpridas, a família pode ser excluída do programa. O benefício máximo para uma família com renda per capita de até 30,50€, com 5 filhos de até 15 anos e 2 entre 16 e 17 anos perfaz mensalmente 133,00€. Para famílias com renda per capita entre 30,50€ e 60,90€, o benefício máximo mensal pode atingir 102,50€. Levando-se em consideração que este benefício máximo só é dado a famílias com no mínimo 8 pessoas, é fácil perceber que se trata tão somente de uma ajuda para a sobrevivência. Ainda assim o Banco Central estima que dois terços da diminuição da desigualdade social se deva a estes dois programas sociais. Com isso fica claro que mesmo a modesta queda no coeficiente de Gini nos últimos 15 anos no Brasil se deve à assistência social estatal e não a mudanças na estrutura social.

A tabela abaixo mostra como ainda é elevada a desigualdade. As pessoas mais ricas recebem cerca de 35 vezes mais que as pessoas mais pobres. O acesso a redes de esgoto sanitário em suas residências e a novas tecnologias, como a internet, também segue altamente desigual, mesmo depois de anos de políticas dirigidas a esses setores. O tratamento de esgoto sequer é mencionado no mais amplo balanço das políticas públicas (Ipea 2009, v. 2). Estima-se que não passe de 3% da população brasileira que tem seu esgoto tratado; o restante é “devolvido” à natureza.

TABELA 1
Distribuição desigual do acesso a bens e serviços no Brasil

Classe social por renda	E	D	C	A-B
Renda familiar (€)	0,235	235,490	490,2110	2110,7
População (%)	15,4	23,6	50,4	10,6
Renda (%)	1,8	7,8	46,3	44,1
Renda/população (ideal: 1,00)	0,12	0,33	0,92	4,16
Escolaridade (anos)	4,98	5,46	7,18	12
Rede de esgoto (% do grupo)	30,65	40,45	57,78	72,02
Internet (% do grupo)	6,73	9,69	33,9	75,82

FONTE: *Economia brasileira em perspectiva*, Banco Central, ago.-set. 2010.

Um dado que chama a atenção é a diferença em anos de escolaridade: os mais pobres têm menos da metade da escolaridade dos mais ricos, e bem menos que os oito anos considerados obrigatórios por lei no Brasil. Quando se leva em conta a importância que a educação tem para as possibilidades de ascensão social, uma informação adicional adquire dramaticidade: no exame PISA, de 2009, o Brasil ocupou o 53º lugar entre os 65 países avaliados. Enquanto os estudantes de escolas particulares tiveram em média 502 pontos, os de escola pública tiveram apenas 387 pontos. Isso os colocaria respectivamente em 15º e 60º lugar. Como quem frequenta escolas públicas no Brasil são via de regra os pobres, o sistema educacional brasileiro segue sendo, a despeito de todos os esforços, um importante reproduzidor da desigualdade social.

Mesmo assim cabe ressaltar que há alguns anos vem sendo desenvolvida no Brasil uma política de melhoria na educação em todos os níveis. O governo federal instituiu um piso salarial mínimo para professores e transfere recursos

para estados e municípios para investimentos em educação. Foi muito ampliada a rede de escolas técnicas de formação profissional. Dois programas na área da educação superior merecem destaque. De um lado, diversas modalidades de cotas de acesso para populações que antes tinham poucas chances de obter uma vaga. Negros, populações indígenas e egressos de escolas públicas vêm sendo beneficiados com essa política. Por outro lado, o governo criou um programa denominado *Universidade para Todos* (ProUni), que concede certos benefícios fiscais às instituições privadas de ensino superior em troca de vagas gratuitas para estudantes de baixa renda. Aproximadamente 20% das vagas das instituições que aderem ao programa são distribuídas dessa forma. Em conjunto, essas políticas ampliaram as chances de uma formação de nível superior para uma parte da população jovem mais pobre. Infelizmente, mesmo com todas essas políticas, no Brasil apenas 13% da população em idade correspondente frequenta o ensino superior.

Atualmente, 3,4 milhões de pessoas idosas ou portadoras de uma deficiência incapacitante e que estejam em situação de pobreza recebem um salário mínimo mensal como *Benefício de Prestação Continuada*. Prevista desde a Constituição Federal de 1988, essa política começou a ser efetivada com a aprovação, em 1993, da Lei Orgânica da Assistência Social, complementada em 2004 com a criação de uma política nacional de assistência.

Pelo número de beneficiários, a maior política de assistência do governo Lula da Silva foi o Programa Bolsa Família. Famílias em situação de pobreza ou de pobreza extrema tornavam-se elegíveis para um apoio financeiro mensal, desde que enviassem seus filhos regularmente à escola e que as mulheres participassem de programas de saúde preventiva e de complementação nutricional. Essas *condicionalidades* são controvertidas. Quem as apoia crê que essa política ajudaria a cortar a transmissão intergeracional da pobreza. Quem se opõe argumenta que esse tipo de controle enfraquece a autonomia dos cidadãos, e corre o risco de deixar desprotegidas justamente as famílias mais vulneráveis, pela dificuldade em cumprir as condicionalidades. O próprio governo define estes benefícios como um “quase direito”. Muitas famílias que se enquadram nos critérios de elegibilidade podem ficar sem o benefício porque não foram cadastradas, porque falta convênio entre seu município e o governo federal ou porque os recursos previstos no orçamento se esgotaram. Se fosse um direito, não poderia ter esse tipo de condicionalidades. Uma dificuldade não resolvida ainda é a *porta de saída*: quando a assistência através do Bolsa Família deve cessar e qual a política social que dará seguimento na atenção aos beneficiários após sua saída do programa.

Em 2009, aproximadamente 11,3 milhões de famílias recebiam algum tipo de apoio através desse programa. Estimativas do próprio governo (Ipea 2010) indicam que em 2010 aproximadamente 40% das famílias elegíveis não recebiam o benefício. Como o benefício é definido como *ajuda* e não como *direi-*

to, ele não pode ser exigido judicialmente. Se por exemplo um prefeito da cidade por razões políticas não o introduz, os moradores pobres de sua cidade permanecem excluídas do programa. Além disso, anualmente só pode ser gasto com este programa o montante de recursos previstos em orçamento – diferente do que ocorre com alguns outros direitos sociais: enquanto no Bolsa Família o governo pode até cortar gastos previstos em orçamento, nos benefícios definidos como *direito* o orçamento deve ser adaptado à demanda.

Já foi mencionado que o valor do benefício do Bolsa Família é extremamente modesto, contribuindo basicamente para a sobrevivência. Um dos seus efeitos positivos foi o acesso de famílias pobres ao sistema bancário. Outro efeito de destaque advém do fato que via de regra a titular do benefício é a mulher. Só na ausência de uma mulher na família um homem pode ser o titular do benefício. Isso fortaleceu a posição das mulheres em muitas famílias, tendo assim um efeito marginal importante. Justamente ali onde há uma arraigada tradição de desrespeito à mulher que a torna, junto com as filhas, os elos mais frágeis das famílias e as expõe à violência e ao abuso sexual, este novo status influencia significativamente a dinâmica interna das famílias. Mas o governo federal exagera em muito quando afirma que “o Programa Bolsa Família é política revolucionária em termos de política social no Brasil” (Ipea 2009, v. 3, p. 590). Trata-se de uma ajuda para pessoas em necessidade extrema; se sua fome é amenizada, saúde e nutrição são melhoradas, as crianças frequentam mais tempo a escola e além disso ainda a posição das mulheres é fortalecida, então os investimentos nesta política se justificam. Mas ela não tem potencial para mudar a estrutura da desigualdade social no Brasil.

Por outro lado, com este programa sob o governo Lula da Silva foi levada ao extremo uma antiga tendência existente no Brasil, de o governo de turno se apropriar simbolicamente das políticas públicas, apresentando-as como um benefício do governo e não do estado. Com Offe (2005) pode-se assumir que a ajuda para pessoas em necessidade seja um princípio de justiça e um dever para todos aqueles que têm condições de ajudar. Em sociedades modernas, esta obrigação é delegada ao estado como uma das tarefas da política social. Independentemente se, como em Marshall (1992), este dever só inclui os cidadãos ou se, como ocorre no Brasil e em muitos outros países, engloba todos os habitantes: é a sociedade que assegura aos seus membros a ajuda para as situações de necessidade, que delega ao estado a responsabilidade de se estruturar para poder prestar esta ajuda, e encarrega os governantes de turno com a implementação desta política. A sociedade ajuda seus membros em necessidade; o estado e o governo são os instrumentos com os quais o dever moral de ajudar é cumprido efetivamente. Pelo menos é assim que, à luz das recentes discussões no âmbito das teorias da justiça, este tipo de política social pode ser interpretado em sociedades democráticas.

Em outro contexto já foi possível mostrar (Sobottka 2006a) que a política social no Brasil dificilmente é justificada discursivamente. A maioria dos programas só têm continuidade enquanto o governo que os criou permanece no poder. Depois eles são descontinuados – mesmo quando programas idênticos são recriados com outro nome e apresentados festivamente como conquistas do novo governo. Alguns direitos sociais, como em especial as elevadas aposentadorias no serviço público – sobre as quais ainda será discutido adiante –, foram assegurados como direito em lei. Mas eles não são mais justificados como *política social*, mas defendidos como *direito adquirido*, no mesmo nível do *direito à propriedade*. Lula da Silva, como nenhum governo antes dele, soube apropriar-se simbolicamente dos benefícios do Bolsa Família e apresentá-los como se estes benefícios fossem uma generosidade do seu governo e do Partido dos Trabalhadores – e não como uma ajuda da sociedade para pessoas em necessidade, assumida pelos cidadãos brasileiros como seu dever moral. Tanto na campanha eleitoral de 2006 para a reeleição de Lula da Silva como na de 2010 para a eleição de Dilma Rousseff à presidência da república esta apropriação foi o mais forte argumento propagandístico.

Duas outras políticas sociais revelam como através delas a desigualdade social se reproduz e perpetua. Uma é a política habitacional. No seu conjunto, os investimentos em habitação foram multiplicados por cinco nos últimos anos para fazer frente a um déficit habitacional que em 2007 era de 6,3 milhões de moradias. A tabela mostra como a necessidade da população mais pobre é grande em comparação com os demais segmentos da população, e ao mesmo tempo permite ver que a relação entre os investimentos públicos em habitação e o déficit para os mais ricos foi 30 vezes superior à daqueles destinados à população mais pobre. Ironicamente, o *Programa Bolsa Família* e o programa habitacional *Minha Casa, Minha Vida* serviram de carro chefe da campanha de Dilma Rousseff à sucessão de Lula da Silva na presidência.

TABELA 2
Distribuição do déficit habitacional e dos investimentos públicos

Renda familiar (SM)	0 a 3	3 a 5	5 a 10	+ de 10
Déficit habitacional (%)	89,4	6,5	3,1	1
Investimentos públicos (%)	27	35	38	
Relação investimento/déficit	0,3	5,4	9,3	

SM = Salário mínimo

FONTE: Brasil em desenvolvimento (Ipea, 2009).

Outra política social que serve antes à concentração de renda que a sua distribuição é a previdência social. No Brasil há três regimes distintos de aposentadoria. Um deles é o sistema de previdência privada complementar, gerido por bancos ou sociedades criadas especificamente para esse fim. Em sua maioria, trabalhadores e empresas contribuem para um fundo, do qual depois de certo tempo será pago um benefício, que pode ser a aposentadoria, pensão para o cônjuge ou mesmo um valor global a ser sacado pelo beneficiário. Esse sistema tem alguns incentivos fiscais.

Um segundo sistema é o Regime Geral, pelo qual os trabalhadores da iniciativa privada são assegurados. Nela há um teto para as contribuições e também para o posterior benefício. Historicamente o governo corrige os valores dessas aposentadorias por índices inferiores à inflação, de modo que com o passar do tempo o valor recebido pelos aposentados e pensionistas se aproxima do piso, que é um salário mínimo. Em 1999, foi adicionalmente introduzido o *fator previdenciário*, criado para incentivar que as pessoas se aposentem mais tarde. Mas sua fórmula na prática reduz muito o valor do benefício de quem se aposenta antes dos 65 anos. Além disso, segundo estimativas do próprio governo, 40% da população economicamente ativa em 2008 estava sem cobertura da previdência social (Ipea 2010, p. 33).

Um terceiro sistema de previdência é o Regime Especial, para o funcionalismo público. Nele as aposentadorias e pensões são iguais ao salário dos ativos. Diversos mecanismos permitiram ao longo dos anos o acúmulo de vantagens, gratificações e até mesmo aposentadorias múltiplas. Segundo dados do Banco Mundial, as aposentadorias deste regime, no Judiciário brasileiro, são 27 vezes maiores em média do que a dos trabalhadores do regime geral. Detentores de cargos eletivos em muitos casos se aposentam com vencimentos integrais com pouco tempo de serviço. Além disso, militares e algumas outras categorias conquistaram o privilégio de repassarem pensões por herança, de modo que elas são pagas séculos depois da morte dos beneficiários originais.

No seu conjunto, esse terceiro sistema de previdência é um dos mais forte fatores de concentração de renda no Brasil. Na Constituição Federal de 1988 há uma limitação para esses valores a um teto que se aproxima de 40 salários mínimos, mas até hoje essa previsão legal é desrespeitada. Diversas instituições públicas, como universidades, têm despesa maior com aposentados e pensionistas que com pessoal na ativa.

Uma comparação entre duas políticas sociais mostra as disparidades. No Bolsa Família são investidos apenas 0,3% do PIB (€3,7 bilhões), para atender 50,4 milhões de pessoas. Com aposentados e pensionistas do regime especial, só no poder executivo em nível federal o governo gastou 2,6% do PIB (€32,2 bilhões) em 2008. Para cada real gasto por pessoa com o Bolsa Família são gastos 627 reais com um aposentado ou pensionista do governo federal.

Uma importante política social no Brasil se dá na área da segurança alimentar. Em busca de maior segurança alimentar para uma população que, historicamente, se alimenta mal, foram introduzidos diversos programas destinados ao aumento da produção e à melhoria do abastecimento, e de acesso à alimentação. Também foram desenvolvidos diversos programas básicos de promoção da saúde consorciados com a alimentação, inclusive na forma de merenda escolar.

Já foi mencionado acima que no Brasil foi introduzido um amplo programa de saúde denominado Sistema Único de Saúde, não-contributivo e de acesso universal. Ele resultou da reivindicação de diversos movimentos sociais e vem sendo gradativamente ampliado e aperfeiçoado desde sua implementação há cerca de 25 anos. Na gestão deste sistema participam conselhos de saúde organizados nos três níveis de governo. Esse sistema, além da medicina alopática também apoia a medicina tradicional. Em anos recentes, tem dado ênfase crescente à prevenção, no que se destaca o Programa de Saúde da Família. Outra atividade de destaque na política de saúde é o programa DST/Aids, onde o Brasil tem sido visto como destaque por suas iniciativas.

O orçamento da saúde no Brasil padece de insuficiência de recursos. Em 2010 o governo federal investiu €27,2 bilhões em saúde e o próprio SUS admite que seriam necessários no mínimo o dobro dos recursos. Mesmo assim houveram reiteradas tentativas dos governos de diminuir-los ainda mais. Há uma previsão legal sobre quanto municípios, estados e governo federal devem gastar com educação e com saúde. Mas a lei não é cumprida. O governo federal há alguns anos criou uma contribuição sobre as movimentações financeiras, recolhida diretamente pelos bancos, destinada à saúde. A arrecadação foi mais do que o dobro do total investido em saúde, mas só uma pequena fração dos recursos foi para a saúde – em substituição a recursos cortados anteriormente. Assim, aumentou a carga tributária, mas o orçamento da saúde permaneceu igual. Outro ataque ao orçamento da saúde foi a aprovação de uma desvinculação de parte expressiva (aprox. 30%) das receitas governamentais. Indispostos a aumentar o orçamento, os governos criaram uma fórmula para esconder o tamanho do déficit orçamentário da saúde. Para tentar evitar essas manobras, foi aprovada em dezembro de 2000 a Emenda Constitucional nº 29, que fixa mais claramente as obrigações dos diversos níveis de governo com a saúde. Passados onze anos, ela ainda não está efetivamente em vigor porque o governo sempre se recusou a regulamentá-la.

Certamente é necessário perguntar como é possível entender, após os oito anos de governo de Lula da Silva, que de um lado é comemorado que uma quantidade muito expressiva de brasileiros tenha experimentado uma ascensão social, e, de outro, na análise de algumas das principais políticas sociais fique evidente como elas são incapazes de interromper a reprodução da pobreza e

reverter o histórico quadro de desigualdade social. Com uma arrecadação de mais de 37% do PIB, o governo teria recursos suficientes para reverter o quadro de desigualdade. Mas enquanto os 20% mais ricos recebem 38% das verbas sociais, os 20% mais pobres recebem só 25% – e as assim chamadas classes médias são os grandes financiadores tanto da ajuda aos pobres como da “ajuda” aos mais ricos.

Na análise breve das políticas sociais feita aqui ficou claro que os programas criados ou ampliados nos últimos anos pouco fortaleceram os direitos de cidadania. Foram basicamente políticas de assistência social. Os recursos investidos são muito pequenos para causar um impacto duradouro. Outras políticas, como as da área da educação, em especial da educação superior, têm impacto apenas no médio prazo e atingem grupos específicos reduzidos de pessoas.

A grande maioria das políticas sociais do Brasil, ao contrário do que convencionalmente se espera delas, investem mais recursos em benefício das pessoas mais ricas. Pelo fato de que o sistema tributário brasileiro tem uma participação pequena de impostos progressivos e uma predominância ampla de impostos regressivos, a alta carga tributária, aliada a esta formatação das políticas públicas, leva a que estas tenham sobretudo um efeito concentrador da renda. E essa realidade não foi alterada significativamente nos últimos anos.

Como tamanha desigualdade social pode subsistir?

A discussão da questão da desigualdade social no Brasil, e na América Latina em geral, não é nova (cf. Leguizamón 2007). Aqui tampouco será possível respondê-la definitivamente. O que pretendo fazer nesse breve espaço é apenas apontar para uma entre muitas maneiras como se tem buscado categorias explicativas para o abismo entre os extremos sociais no Brasil.

Elas vem de Marcelo Neves (2006), em diálogo com a teoria sistêmica de Luhmann. Neves propõe que em determinados países, que ele denomina de modernidade periférica, os sistemas sociais, por diversas razões, não são operativamente fechados. Por consequência, há constantes interferências de um sistema em outro: da economia na política, desta na educação e assim por diante. Com isso, os sistemas sociais seriam incapazes de estruturarem a complexidade em seu entorno para processá-la segundo suas próprias regras. Isso gera insegurança quanto ao que se pode esperar funcionalmente de cada um.

Trazendo essa incerteza para a perspectiva do indivíduo, Neves usa o binômio inclusão-exclusão. A inclusão é definida como “o envolvimento do conjunto da população nos resultados dos diversos sistemas funcionais da sociedade. Ela diz respeito de um lado ao acesso a estes resultados e, por outro

lado, à dependência da condução individual da vida destes resultados. Na medida em que a inclusão se concretiza, desaparecem os grupos que não participam ou que participam apenas marginalmente da vida em sociedade”. A exclusão ocorre quando há dependência sem acesso aos resultados dos sistemas funcionais da sociedade.

Em outro momento, mas ainda com o mesmo foco, Neves introduz as categorias subintegração e sobreintegração. Subintegração ocorre, segundo ele, quando há dependência dos resultados de um sistema social sem acesso a eles; sobreintegração, por sua vez, descreve a situação de “independência frente às regras associadas ao acesso aos resultados dos sistemas sociais parciais”. Por consequência pode-se dizer que nas sociedades por ele denominadas de modernidade periférica, a relação de sobre e subordinação leva a uma assimetria na capacidade de determinados grupos sociais fazerem prevalecer suas propostas. Essa relação desigual transmite e reproduz desigualdades de uma esfera da vida a outra, e, como consequência, divide as pessoas em subintegradas e sobreintegradas.

É possível ser cético com a influência da teoria sistêmica nessa forma de leitura da desigualdade de países como o Brasil. Na brevidade em que aqui é possível, gostaria de chamar a atenção para dois aspectos que Neves aponta. De um lado, sua leitura de que os sistemas sociais não seriam operativamente fechados, como previsto na teoria, permite-lhe ser sensível ao modo como a desigualdade social se transmite de uma esfera da vida a outra. Nessa perspectiva, certo nível de desigualdade é visto até como produtivo, e não necessariamente como negativo. Problemática se torna a situação quando a desigualdade de uma esfera da vida gera/transfere desigualdade social em/a outra esfera.

A clientela das políticas sociais no Brasil, em sua grande maioria, enfrenta exatamente esse tipo de *contaminação* de várias esferas de sua vida pelas carências existentes noutras esferas. Algumas políticas sociais tentam minimizar esta transferência ao buscarem inserir os beneficiários nos diversos programas sociais. Mas se a iniciativa abrangente está correta, seu impacto transformador ainda deixa a desejar – e isso precisa ser uma preocupação na avaliação destas políticas.

Por outro lado, quando conceitua certos grupos sociais como sendo *sobreintegrados* e chama a atenção como conseguem sobrepor-se às regras de sua sociedade, Neves volta o foco da atenção para aqueles que, no caso das políticas sociais, se apropriam desproporcionalmente da riqueza social. Há grupos sociais no Brasil que conseguem, reiteradamente, evitar que a legislação que os afete negativamente seja aprovada ou, quando aprovada, descumpra-na impunemente. A limitação das super-aposentadorias é um exemplo magistral para isso. Conseguem também fazer com que a definição das políticas sociais seja tal que eles também sejam beneficiados, mesmo não estando

entre os necessitados. A disparidade entre os investimentos públicos em habitações para pobres e para ricos atesta isso. Ou os planos privados de saúde, que são incentivados com renúncia fiscal, mas em muitos casos, quando o tratamento é muito oneroso, os pacientes vêm tratar-se no Sistema Único de Saúde, disputando com procedimentos caros os poucos recursos disponíveis à população mais pobre. A lei que exige o ressarcimento destas despesas não é cumprida há muitos anos.

Assim pode-se concluir que, a despeito das múltiplas iniciativas, em especial no âmbito da assistência social, a gestão do Partido dos Trabalhadores sob Lula da Silva não conseguiu romper os principais fatores de reprodução da desigualdade social. Um número significativo de pessoas ampliou seu acesso ao consumo, outras tiveram uma melhoria em sua renda porque o governo as contemplou com alguma transferência direta, outras encontraram vias para formalizar seu vínculo empregatício e assim ter acesso à previdência social. Essas políticas tiveram considerável impacto na vida de seus beneficiários. Mas a opção mais consistente do governo foi cuidar da macro-economia e preservar suas boas relações com os grupos sobreintegrados da sociedade brasileira, preservando-os do rigor da lei e de sua responsabilidade para com o todo da sociedade.

Bibliografia

- BANCO CENTRAL DO BRASIL (2010): *Economia brasileira em perspectiva*. Ago-sept. Brasília: Banco Central do Brasil.
- DIAS, Marcia Ribeiro/PEREZ, José M. S. (2006): *Antes do vendaval: um diagnóstico do governo Lula antes da crise política de 2005*. Porto Alegre: Edipucrs.
- ESPING-ANDERSEN, Gøsta (1990): *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press.
- INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS (IPEA) (ed.) (2009): *Brasil em desenvolvimento: estado, planejamento e políticas públicas*. Brasília: Ipea, 3 v. Disponível em: <www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/090921_brasildesenvlivro1.pdf>.
- (2009a): *Boletim de políticas sociais*. v. 17, nº 1-3.
- (2010): *Boletim de políticas sociais*. v. 18.
- JACOBI, Pedro R. (1987): “Movimentos sociais urbanos no Brasil: reflexão sobre a literatura dos anos 70 e 80”, em: *Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais*, v. 23, pp. 18-34.
- LACERDA, Alan Daniel Freire de (2002) : “O PT e a unidade partidária como problema”, em: *Dados*, v. 45, n. 1, pp. 39-76.
- LEGUIZÁMON, Sonia Alvarez (2007): “A produção da pobreza massiva e sua persistência no pensamento social latino-americano”, em: *Cimadamore*, Alberto D./Cattani,

- Antonio David (eds.): *Produção de pobreza e desigualdade na América Latina*. Porto Alegre: Tomo e Clacso, pp. 79-124.
- MARSHALL, T. H. (1992): *Bürgerrechte und soziale Klassen: Zur Soziologie des Wohlfahrtsstaates*. Frankfurt: Campus. [= *Cidadania, classe social e status*. Rio de Janeiro: Zahar, 1967].
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC/INEP) (2010): *Resultados preliminares Pisa 2009*. 7. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/2010/pisa2009_apresentacao_resultados_divulgacao.ppt>.
- NEVES, Marcelo (2006): *Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil*. São Paulo: Martins Fontes.
- OFFE, C. (2005): “Princípios de justiça social e o futuro do estado de bem-estar social”, em: de Souza, D. G./Petersen, N. (eds.): *Globalização e Justiça*. Porto Alegre: Edipucrs, v. 2, pp. 69-85.
- PIERSON, Paul (2000): “Increasing returns, path dependence, and the study of politics” em: *American Political Science Review*. v. 94, n° 2, pp. 251-267.
- SAMUELS, David (2004): “From socialism to social democracy: party organization and the transformation of the Workers Party in Brazil”, em: *Comparative Political Studies*, pp. 1-26.
- SANTOS, Wanderley G. (1979): *Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira*. Rio de Janeiro: Campus.
- SILVA, Luiz Inácio Lula da (2002): *Carta ao povo brasileiro*. Disponível em: <<http://www2.fpa.org.br/carta-ao-povo-brasileiro-por-luiz-inacio-lula-da-silva>>.
- SOBOTTKA, Emil Albert (2003): “A utopia político-emancipatória em transição: movimentos sociais viram ONGs que viram ‘terceiro setor’”, em: *Teoria e Sociedade*, v. 11, n° 1, pp. 48-65.
- (2006a): “Por que se faz políticas sociais no Brasil? Notas sobre estratégias de legitimação nos últimos dois governos federais”, em: *Civitas*, v. 6, n° 1, pp. 79-93.
- (2006b): “The responsibility of governing and the changes in the Workers’ Party of Brazil”, em: *International Journal of Action Research*, v. 2, n° 1, pp. 54-77.
- UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) (2010): *Human Development Report 2010 – the real wealth of nations: pathways to human development*. New York: UNDP.
- YUNES, João (1999): “O SUS na lógica da descentralização”, em: *Estudos Avançados*, v. 13, n. 35, pp. 5-70.

Carla Gras¹

**Agronegocios y empresarios.
Un estudio sobre la reconfiguración de perfiles
socioeconómicos y la construcción política
del “campo” en Argentina²**

Introducción

La presencia de la gran empresa caracterizó históricamente al agro argentino. La etapa durante la cual el poderío económico –derivado de la propiedad de grandes extensiones de tierra en la fértil llanura pampeana y del control de la renta de la tierra–, el prestigio social y el poder político de los grandes productores fueron indiscutidos remite al modelo agroexportador vigente entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. La evolución posterior del sector agropecuario fue errática y el sector industrial se consolidó como eje del modelo de acumulación, debilitando la posición económica del sector agropecuario y de sus actores centrales –los terratenientes pampeanos–, aun cuando retuvieron el papel clave de ser la principal fuente de exportaciones y de obtención de divisas. En el plano social y político, la llegada del peronismo al gobierno en 1945 profundizó el cuestionamiento público hacia los terratenientes –resultante de la mayor permeabilidad del régimen político a partir de la ampliación de la ciudadanía política con las leyes de 1912– y terminó de modificar aspectos clave que hacían al poder de esa clase. El peronismo desarrolló políticas para beneficiar el acceso a la propiedad de la tierra y al crédito de pequeños y medianos agricultores. La estructura de propiedad del agro

¹ Este artículo es un resultado de la investigación que obtuvo una Short-Term Fellowship for Social Scientists from Latin America financiada por las Fundaciones Thyssen y A. von Humboldt de Alemania, a partir de la cual realicé dos estancias entre los meses de enero y marzo de 2010 y 2011, respectivamente, en el Lateinamerika Institut de la Freie Universität-Berlin y el Ibero-Amerikanisches Institut.

² Carla Gras. Socióloga, Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Profesora Asociada en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

argentino sufrió cambios, haciéndose más heterogéneo el espectro de los propietarios, en términos de su origen social y de la extensión de sus propiedades. Hora (2005) ubica estos años como el fin del poder terrateniente, señalando que, a partir de entonces, las grandes fortunas del país no estarían asentadas en la propiedad de la tierra.

A pesar de ello, es frecuente encontrar en las opiniones de no pocos habitantes de la Argentina, en expresiones de miembros de su clase política y en análisis de investigadores e intelectuales, referencias a la estabilidad en el tiempo de la clase terrateniente, tanto de su poder económico como de su gravitación social y política. Aun reconociendo las profundas mutaciones que el sector agropecuario atravesó en las últimas décadas y sus impactos en la estructura agraria, algunos análisis insisten en una suerte de eterna presencia de aquella vieja clase terrateniente, que mantendría su otrora fuerte entidad corporativa (la Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866) y su ejercicio de influencia política.

En este contexto, pretendo aquí desarrollar dos puntos centrales. En primer lugar, la emergencia de un proceso de diferenciación interna de la clase empresarial, que hace a este actor más complejo de lo que podía reconocerse en el pasado. Dicha complejidad alude al carácter global que adquieren algunos de sus integrantes frente a la orientación nacional del resto; a las diversas formas de relación y control con la tierra y el capital; y a las diferencias internas en cuanto a la magnitud de los recursos controlados. Este proceso de diferenciación de la clase capitalista agraria en el país está vinculado a la consolidación de un nuevo modelo agrario y agroindustrial en la Argentina a partir de la década de 1990.

El segundo punto está en consonancia con el anterior e implica el problema de la traducción política de la preeminencia económica de un actor complejo como el que ha transformado y dinamizado al agro argentino. En tal sentido, será necesario abordar la reorganización de sus instituciones representativas y la producción de novedosas formas de articulación productiva, ideológica y simbólica, que intervienen tanto en el modo en que sus miembros se autorrepresentan (en términos de un nuevo empresariado), como en los ámbitos y tipos de acción privilegiados para ejercer influencia.

Estas cuestiones resultan de fundamental importancia en la Argentina contemporánea por variadas razones. En primer lugar, por la centralidad que los actores empresariales adquirieron en el período reciente, tanto en relación con la actual matriz agraria como por su creciente protagonismo político a partir de 2008 con el conflicto mantenido con el actual gobierno en torno a un dispositivo central de su política económica: las retenciones o derechos a las exportaciones agropecuarias. En segundo lugar, porque sus perfiles, así como los vectores que los diferencian internamente, permiten aportar elementos para el

estudio de la reconfiguración de los sectores dominantes en el marco de los actuales procesos de globalización. Finalmente, porque en el contexto de un crecimiento espectacular de la producción agrícola en Argentina (con fuertes alzas de los precios internacionales de los granos, principal rubro de las exportaciones agrarias, y la consecuente multiplicación de las rentas y ganancias de los empresarios), sus actores principales parecen haber redescubierto su vocación hegemónica, proceso que aún está en ciernes, y que deja abiertos diversos interrogantes.

La expansión sojera y la consolidación del agronegocio

Focalizando en la expansión de la producción de soja en la Argentina en las últimas décadas, mi investigación se interroga por los actores sociales que lideraron el pasaje de un modelo socioproductivo donde la agricultura familiar³ tenía un lugar significativo, a otro basado en niveles más altos de capitalización y en escalas extensivas; con conexiones crecientes y estrechas con cadenas de producción globales, y con mayores y renovados vínculos con el capital financiero. La emergencia y expansión de este nuevo modelo –llamado también “sojero” por la predominancia de este cultivo, o de agronegocios– supuso un cambio en la lógica de acumulación en el agro argentino, que ha tenido significativas implicancias en la estructura agraria y las relaciones entre actores.

Desde la década de 1970 y notablemente a partir de los años 90, se registra un rápido aumento de la producción de granos, en particular de soja, para el mercado internacional. Ello tuvo como consecuencia la reducción del área dedicada a la ganadería y a otros cultivos, así como también el corrimiento de la frontera agraria hacia tierras con montes y bosques, o consideradas “improductivas” por sus características agroecológicas.

La expansión de la soja no puede ser comprendida sin considerar la introducción de biotecnologías. En efecto, este cultivo se asoció a las semillas transgénicas, al sistema de labranza conocido como siembra directa y al uso extendido de agroquímicos y biocidas, en particular el glifosato. La soja fue el primer cultivo transgénico cuya comercialización se liberó en el país en 1996. Conocida como soja RR –por el nombre comercial dado por la multinacional

³ Me refiero a un conjunto heterogéneo de explotaciones que pivotan en torno al trabajo de la familia y que incluyen desde las de tipo campesino a las más capitalizadas, de tipo *farmer*. Son estas últimas las que tuvieron relevancia y visibilidad económica y política en el pasado.

Monsanto— por su resistencia al herbicida glifosato, estos dos productores conformaron lo que se conoce como “paquete cerrado”. Su adopción fue exponencial; se estimaba que, pocos años después, en 2000, casi el 100% de la superficie con soja era transgénica, convirtiéndose la Argentina en la segunda exportadora mundial de cultivos transgénicos. Las biotecnologías son un elemento distintivo del actual modelo agrario (Gras/Hernández 2009); han generado nuevas formas de acumulación y han permitido al capital agroindustrial —en un mercado cada vez más concentrado y transnacionalizado— incrementar su control sobre dicha acumulación (Morrison 2008; Newell 2009; Sztulwark 2005).

El inicio de la soja en el país se vincula a la globalización de las agriculturas y sistemas agroalimentarios. Sus primeras producciones comerciales datan de los 70, en la región pampeana, demandada por Europa para alimentación del ganado. En 1971-1972 se producían alrededor de 80.000 hectáreas, que pasaron a 2 millones diez años más tarde. En 1991, con casi 5 millones de hectáreas el área sembrada superaba a la de trigo (4,5 millones). Para 2002, el área con soja aumentó un 130% al lograr 11.450.000 hectáreas, y la producción total pasó de 11.310.000 toneladas a 35 millones. Para 2009, el área cultivada es un 60% más que aquella de 2002 (18 millones de hectáreas) y la producción alcanza 52 millones de toneladas⁴.

Los cambios en diversos registros de la estructura productiva del agro argentino y sus implicancias en términos de los actores que se consolidaron, los que fueron excluidos y las relaciones de producción emergentes, no pueden ser comprendidos sin poner en el escenario el rol del Estado y la reformulación de la política agraria preexistente. Un cambio a destacar fue la amplia desregulación de la economía: en el sector agropecuario, ello significó la retracción del Estado de sus funciones reguladoras (eliminación de una serie de entes públicos de control)⁵ y el afianzamiento de su rol de garante del libre juego del mercado. Cabe mencionar, por su importancia, las consecuencias de este cambio en el sistema de financiamiento de la producción agrícola: desaparecen los créditos “blandos”, lo que afectó especialmente a los productores de menores recursos que por lo general no podían acceder a otras fuentes de financiamiento. Concomitantemente, se observa la creciente importancia del capital financiero —nacional o internacional— a través de fondos de inversión o de los llamados *pools* de siembra, los cuales tomaron la actividad agrícola

⁴ Datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (<www.siiia.gov.ar, consultado el 09.02.11).

⁵ Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, Dirección Nacional del Azúcar, Instituto Nacional de la Yerba Mate, entre otros.

como un espacio de alto rendimiento, por momentos con tasas de retorno anual del 25%⁶.

Al mismo tiempo, se acentuó y consolidó la transnacionalización del mercado de insumos. Compañías tradicionales en el mercado local de semillas fueron compradas o se fusionaron con las grandes transnacionales. El mercado, por otra parte, se concentró fuertemente: se estima que solo cuatro empresas controlan el mercado de glifosato en el país. El control de estas transnacionales se extendió también a la cadena de distribución; las antiguas agronomías –comercios ubicados en pueblos y ciudades del interior, que vendían productos de diversas marcas– fueron reconvertidas en centros de servicios asociados a alguna de las transnacionales⁷.

Para resumir y subrayar las principales transformaciones que acarreo la nueva matriz agraria, señalaré: a) la concentración de la producción, la cual no avanzó al mismo ritmo que la concentración de la propiedad de la tierra, forma de tenencia que resultó desplazada por el arrendamiento⁸; b) la expansión de la frontera agraria⁹; c) la reorganización del proceso de trabajo –con el incremento de la tercerización y subcontratación de labores–, la profesionalización de la actividad agropecuaria y la introducción de ideas y prácticas del *management* moderno en la gestión de las explotaciones.

⁶ Datos obtenidos durante la investigación, de un fondo de inversión mediano –en términos de la cantidad de hectáreas incluidas en su portafolio– muestran que entre 2002 y 2008 tuvo una rentabilidad promedio del 22%. Entrevista realizada en 2010.

⁷ Una de las primeras en llevar adelante esa estrategia fue Monsanto, con sus centros Magnum. Posteriormente, otras compañías implementaron estrategias similares, las cuales buscan asegurar su presencia en el territorio –jerarquizándola frente a la de los competidores– además de ampliar su alcance y control sobre el universo de productores.

⁸ Entre los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002, la cantidad total de tierras bajo arriendo aumentó un 52%. Hoy se estima que 7 de cada 10 hectáreas se explotan bajo esta forma de tenencia. Este cambio en la estructura de tenencia de la tierra implicó la consolidación, particularmente en la región pampeana, de lo que se ha dado en llamar “mini rentistas”, esto es, propietarios de pequeñas extensiones de tierra. Alentados por el fuerte aumento de los precios de la tierra que desató en los 2000 la fiebre sojera, muchos pequeños productores, con escalas inviables desde los actuales parámetros tecnológicos, decidieron dar sus campos a productores más grandes y vivir en sus pueblos con ingresos considerables. Su presencia ha tenido impactos en la configuración de las estructuras sociales y socialidades locales (Gras/Manildo 2011; Gras/Bidaseca 2009).

⁹ Como resultado, en algunas provincias la superficie agrícola registró aumentos exponenciales. Tal es el caso de provincias como Salta, Chaco o Santiago del Estero en el norte del país, en las cuales, en el lapso de 15 años (entre 1996-1997 y 2009-2010) la superficie con soja registra aumentos del 254%, 443% y 529%, respectivamente.

Los actores empresariales en el nuevo modelo

La expansión y consolidación de este modelo socioproductivo tuvo efectos importantísimos sobre la estructura agraria, algunos bastante estudiados, como la disminución del número total de explotaciones en el país (entre los censos de 1988 y 2002, de un 21%, que se concentró en los estratos de menor tamaño, vinculados con las explotaciones de tipo familiar) y el aumento de su tamaño medio, que rondó el 25%.

En Argentina, la sociología ha documentado las implicancias del nuevo modelo en el mundo de la agricultura familiar. En contraposición, el estudio de las franjas empresariales –que adquirieron una clara centralidad en la nueva matriz– ocupó un lugar relativamente menor, dándose por sentada la persistencia en el tiempo de los rasgos fundamentales de la gran empresa, analizados por una importante historiografía. En este artículo, me pregunto por las características que las definen actualmente y por las diferencias internas que las atraviesan. Dos cuestiones aparecen vinculadas a esa pregunta: de un lado, la reconfiguración del empresariado, es decir, la medida en que sus rasgos actuales se parecen a los que ostentaban en el pasado; del otro, su recomposición, proceso que refiere a la estabilidad en el tiempo de sus integrantes. ¿Son los empresarios sojeros que hoy encontramos en el campo argentino “nuevos” actores, tal como reclaman sus asociaciones? Y en tal caso, ¿en qué sentido son nuevos? ¿En sus orígenes sociales, en sus perfiles socioproductivos, en sus lógicas de acumulación? ¿O las novedades están en las formas institucionales adoptadas, en sus identidades socio-profesionales, en las acciones político-institucionales que privilegian? Abordaré este segundo interrogante en el próximo apartado, y en lo que sigue presentaré una caracterización de las capas¹⁰.

Uno de los criterios más utilizados en los estudios rurales a la hora de identificar grupos sociales en un sistema de estratificación recorta al universo de

¹⁰ Utilizamos para ello, además de la revisión de la bibliografía existente sobre el tema, materiales provenientes de nuestra investigación: documentos producidos por las organizaciones del sector y por instituciones públicas; material periodístico, en particular de los suplementos rurales de los diarios nacionales de mayor circulación; análisis de casos de la Escuela de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que toman como tales a algunas de las empresas más grandes de producción de soja y granos en general; y básicamente, entrevistas en profundidad realizadas entre 2007 y 2009, así como información cuantitativa relevada a partir de una encuesta realizada en los primeros meses de 2010 entre miembros de una asociación profesional que nuclea a medianos y grandes productores (la encuesta se tomó sobre 1004 explotaciones agropecuarias, que representa poco más del 50% del total de asociados a dicha entidad), y finalmente la observación participante de diversos espacios, como jornadas de intercambio de grupos empresarios y, durante 2008 y 2009, asambleas y movilizaciones.

los empresarios o capitalistas de otro tipo de agentes agrarios –como la producción familiar, capitalizada o campesina– en función de la presencia de asalariados como base de la organización laboral, es decir, la explotación de mano de obra. En la actualidad, este criterio resulta poco productivo por sí solo, al considerar las importantes transformaciones ocurridas en los vínculos entre capital y trabajo, con la expansión de diversas formas de intermediación laboral y la creciente tercerización y subcontratación de tareas. Pero lo que aún puede mantenerse como criterio amplio es que las capas capitalistas o empresariales se definen por la ausencia de la explotación de la propia fuerza de trabajo familiar. Este criterio, que para el caso de Argentina permite englobar dentro de la categoría de empresarias a casi un cuarto del total de explotaciones según datos de 2002 (unas 82.000 aproximadamente para esa fecha sobre un total de 333.533 explotaciones agropecuarias)¹¹, deja en su interior una notable heterogeneidad. La misma no solo se refiere a la difícil tarea de hacer operativos criterios que distingan a las unidades de tipo empresarial en función de la magnitud de los recursos económicos y productivos que poseen o controlan (el problema de dónde establecer “cortes” entre una franja y otra); de su inserción en otras actividades económicas, sean estas conexas o no al sector agropecuario (industria, comercio, finanzas); de las relaciones que establecen con otros agentes de las cadenas productivas en las que participan (proveedores de insumos, exportadores, contratistas de servicios).

Se puede distinguir, en el caso de los productores vinculados a la producción de granos, dos grandes posiciones entre los estudiosos del tema¹², respecto de otras tantas cuestiones centrales. Las mencioné brevemente en tanto son fundamentales para entender las narrativas puestas en juego por los empresarios –y la medida en que existen diferencias en la producción de esas narrativas; en qué momentos se hacen visibles o se invisibilizan– para legitimar sus posiciones corporativas, haciendo circular jugar la idea de que componen un “nuevo empresariado”, capaz de desempeñar un rol económico, social y político en el país, como desde el fin del modelo agroexportador hacia fines de la Primera Guerra Mundial, el empresariado agrario no había vuelto a tener. Un “nuevo empresariado”, moderno e innovador, que tendría la capacidad de tra-

¹¹ Esta estimación corresponde a un estudio realizado por el PROINDER (Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sobre la base de reprocesamientos del Censo Nacional Agropecuario de 2002. El cálculo incluye explotaciones que combinan el uso del propio trabajo con la contratación de asalariados por lo que puede plantearse que el peso de las explotaciones de tipo empresarial que el estudio estima está sobrestimado.

¹² Los trabajos de Basualdo (2010) y Bisang/Kosacoff (2006) permiten reconstruir estos debates.

ducir este carácter en sus prácticas pública, según las novedosas formas de articulación productiva, ideológica y simbólica que han ido produciendo (en particular los productores más grandes, aquellos que mejor encarnan las prácticas e ideas del agronegocio)¹³.

La primera de ellas refiere al peso que en las capas empresarias adquieren actores que provienen de otras actividades, y la medida en que ello ha implicado una renovación de los sectores dominantes en el agro. La segunda cuestión, conectada a la anterior, retoma el problema de la importancia que retiene la propiedad de la tierra, y particularmente la gran propiedad, como atributo característico de los actores empresariales. Más precisamente, ¿en qué medida la propiedad sigue caracterizando a sus grupos dominantes, dada la expansión en las últimas décadas del arrendamiento como forma de tenencia de la tierra? ¿Mantienen los grandes propietarios su condición de agentes centrales de la producción o han sido reemplazados por otros agentes económicos?

Los megaempresarios: los emblemas del paradigma del agronegocio

A partir de estas consideraciones resulta imprescindible mencionar la existencia de una franja superior que se distingue del resto, en primer lugar, por ser quienes concentran los mayores volúmenes de tierra y producción.

La concentración es un rasgo histórico en la agricultura argentina y en especial en la pampeana. La gran empresa tiene una presencia de larga data en el país, desde la conformación del modelo agroexportador. Si bien la estructura de tenencia de la tierra cambió a partir de la segunda mitad del siglo XX¹⁴, la centralidad de la gran empresa se mantuvo, aunque sus características y magnitud continuó siendo un problema central en la discusión académica.

En la actualidad, el tema se ve replanteado por la exacerbación de las economías de escala, consecuencia del tipo de desarrollo tecnológico propio de la nueva matriz productiva. Una evidencia insoslayable es la escala que logra un grupo muy reducido de empresas, las cuales superan ampliamente las 100.000 hectáreas y llegan incluso al medio millón de hectáreas (Beltrán s/f). Según un entrevistado, la constitución de esas escalas, “impensables” aun para quienes como él saludaron con entusiasmo la expansión del actual paradigma biotec-

¹³ Al respecto, véase Hernández 2007 y 2009, y Gras 2009.

¹⁴ Cabe recordar el papel desempeñado por los conflictos sociales en torno de los arrendamientos y las leyes impulsadas por el primer gobierno peronista para modificar las condiciones de los mismos, y por la existencia de créditos blandos que facilitaron el acceso a la propiedad de la tierra de pequeños y medianos productores. Los patrones de herencia también incidieron en la subdivisión de las grandes propiedades.

nológico, hacen que “hoy en la Argentina una empresa de 15.000 hectáreas es una empresa mediana” (entrevista a L. M., gerente de una empresa transnacional de agroquímicos 2010).

En casi todas ellas se destaca el hecho de que las tierras que operan no solo se ubican en la Argentina, sino que se extienden a los países del Cono Sur (Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia). Son verdaderas “megaempresas”, a las cuales distintos informantes calificaron como los “grandes jugadores” del agronegocio. Sus posiciones dominantes en términos de la tierra y producción que controlan se ven reforzadas por otra condición fundamental: están ligadas a la economía global. No solo porque acceden al capital financiero internacional, o porque pueden participar a través de distintos arreglos (*joint-ventures*) en la exportación, sino porque han ido consolidando un carácter transnacional. Si bien este es un rasgo que constituye, en rigor, una hipótesis que debe seguir siendo analizada, la evidencia empírica de su expansión fuera de las fronteras nacionales, hablaría de la estructuración global que ha alcanzado su organización productiva en los últimos años. Son actores que se han globalizado, su acumulación no está limitada por las fronteras nacionales sino que las atraviesan, asignando recursos y actividades productivas en un espacio ampliado.

Según la información surgida de las entrevistas realizadas, que corrobora el trabajo de Beltrán (c/f), la mayoría de ellas se destaca por ser propietarias de una proporción pequeña de tierras —en términos relativos— en comparación con la extensión de los campos que arriendan; algunas, incluso, operan exclusivamente en campos de terceros. Según el mencionado autor, entre los propietarios la proporción de campos propios no superaría el 20% del total. Los campos de terceros son incorporados a partir de múltiples arreglos (en lo que concierne a la duración y modalidades de pago). Lo mismo ocurre con el capital fijo y circulante, a partir de acuerdos con contratistas de servicios, proveedoras de insumos e inversores que aportan capital. Así, un rasgo saliente de las megaempresas es que se basan en una “agricultura de contratos”. Empresas como Los Grobo o El Tejar incluyen en esta estrategia el financiamiento de la cosecha de productores más pequeños. En definitiva, su poder radica en el control de la gestión de ese entramado de recursos, relaciones y actores y las condiciones que pueden imponer en ese marco¹⁵, gestión que adopta los cánones del *management* moderno (Hernández 2009 y 2007). El manejo de ese entramado es cambiante, en función de la rentabilidad comparativa que ofrecen las distintas actividades económicas (agrarias y no agrarias) y las estrategias productivas

¹⁵ Por ejemplo, pueden financiarse con tasas del 4% en vez del 18% como deben pagar el resto de los productores; imponen precios a los contratistas locales, etc. (entrevistas a informantes 2008 y 2009).

adoptadas en cada coyuntura¹⁶: así, por ejemplo, empresas como El Tejar, que desde su constitución habían trabajado exclusivamente en campos arrendados comenzaron en los últimos años a adquirir tierras propias en Uruguay.

El resto: la heterogeneidad del empresariado agrario

Por debajo de estas megaempresas hay un heterogéneo empresariado, que aunque controla una cantidad menor –siempre en términos relativos– de recursos productivos, constituye un sector económico importante por la riqueza que concentran. Como ya se mencionó, cerca de un cuarto del total de explotaciones del país son de tipo empresarial. Si bien están distribuidos en todo el país, su presencia es característica en las provincias pampeanas.

Para ofrecer algunos de sus rasgos, utilizaré datos de una encuesta a integrantes de una asociación profesional, que si bien no constituyen una muestra estadísticamente representativa del total de explotaciones empresariales del país, ofrece la ventaja de estar integrada exclusivamente por este tipo de agente. Excluye por tanto, dados sus orígenes e historia¹⁷, a las explotaciones familiares capitalizadas que pueden incluir entre sus rasgos la contratación de asalariados permanentes, criterio usualmente empleado para delimitar a las unidades de tipo empresarial.

Según la mencionada encuesta, estos empresarios manejan en promedio 6.500 hectáreas. Al igual que las megaempresas, controlan explotaciones de distinto tamaño que están distribuidas territorialmente, aunque siempre dentro de las fronteras nacionales. El dato promedio oculta un cierto grado de heterogeneidad, que incluye la presencia en la entidad de algunas megaempresas (el 0,3% se ubica en los rangos de más de 100.000 hectáreas). Predominan las empresas medianas (el 38,5% opera extensiones de hasta 2000 hectáreas, mientras que un 25% maneja superficies que van hasta las 5000), aunque las empresas grandes tienen una presencia significativa: poco más de un tercio maneja extensiones de hasta 10.000 hectáreas (18%) y de hasta 25.000 (15%). El resto (3,5%) se ubica en los estratos de más de 25.000 hectáreas totales. Las entrevistas realizadas revelan que se trata de productores que se expandieron

¹⁶ Al respecto, Basualdo (2010) señala que históricamente las rentabilidades relativas entre ganadería y agricultura orientaron el comportamiento de los grandes propietarios, pero que desde los años 70, con la reforma financiera impulsada por la dictadura militar en Argentina, el sector comenzó a dirigir los excedentes de su actividad al sector financiero, generándose ganancias que incluso predominaron en la década del 80 por sobre las derivadas de su actividad agropecuaria.

¹⁷ Al respecto, véase Gras 2009 y 2010.

en los últimos años, a partir de una importante incorporación de tierras y del aumento de su dotación de capital.

Entre estos empresarios, predomina la propiedad de la tierra, sea en forma exclusiva o combinada con el arrendamiento. Solo un 12,5% trabaja únicamente en tierras de terceros. Es importante detenerse en este rasgo, que establece una diferencia con las megaempresas, no porque entre ellas la propiedad no esté presente, sino porque en este caso la predominancia de quienes poseen el total –o más del 80%– de las tierras que operan, estaría señalando tanto una estrategia distinta en cuanto al modo de acceso a los recursos, como el lugar central que la propiedad mantiene en sus lógicas de acumulación. En otras palabras, son franjas cuyo capital tiene un fuerte componente de inversión en tierras, que buscan valorizar en la producción.

Si bien pueden adoptar formas similares de organización de la producción a las desplegadas por las megaempresas –esto es, contratos de producción con los dueños de maquinaria o de las tierras que pueden alquilar–, no tienen la misma capacidad de gestión de la trama que aquellas. Sus estrategias son más propias del “productor tradicional”, aun cuando sean fuertes innovadores en lo que respecta a la tecnología, la gestión y administración empresarial: las ganancias derivadas de su actividad agropecuaria provienen básicamente de la rentabilidad que logran al producir en escala, antes que de las ganancias diferenciales resultantes de las posiciones dominantes que los megaempresarios detentan en las diversas cadenas en las que el proceso productivo se ha fraccionado o segmentado en la actualidad.

El uso agrícola del suelo es lo característico entre estos empresarios, aun que se observa la relativa relevancia que mantiene la actividad ganadera, ya sea como única producción o combinada con la agricultura. En rigor, la encuesta muestra que a mayor tamaño (medido en este caso en términos del valor bruto de producción) predominan las empresas puramente agrícolas, mientras que entre las explotaciones de menor tamaño la importancia de la ganadería aumenta¹⁸. Estas diferencias en términos del uso del suelo son significativas en cuanto reflejan la heterogeneidad de lógicas de acumulación, donde la adopción exclusiva de la agricultura se asocia a formas crecientemente flexibles de organización de los factores productivos. Tienen relevancia también a la hora de comprender los alineamientos en el mapa institucional y las demandas que plantean.

Otro rasgo interesante es el lugar que mantiene el titular en la toma decisiones, lo que se verifica en el 65% de los casos. Siguen en importancia las

¹⁸ El 80% de los ganaderos “puros” se ubica en los dos quintiles inferiores de la distribución del valor bruto de la producción. Por el contrario, el 53% de quienes solo hacen agricultura se ubica en los dos quintiles más altos.

explotaciones donde las mismas son tomadas por un administrador (24%). Estos datos reflejan que, en este sector empresarial, ese papel central no ha sido delegado mayoritariamente en complejas estructuras de gestión, como las que sí pueden encontrarse entre los megaempresarios, las cuales incluyen departamentos específicos, con gerentes a cargo¹⁹. Si bien en general las decisiones específicas en cuanto a calendarios productivos u organización del trabajo son delegadas en los asesores técnicos –cuya presencia encontramos en todas las empresas del universo relevado– o en un administrador, estos empresarios retienen el carácter de actores decisivos en lo que atañe a cuestiones centrales para el desempeño económico de sus actividades, como el momento de la incorporación tecnológica, las inversiones a realizar, el financiamiento y la estrategia global de comercialización. Asimismo, cabe señalar que si bien adoptan diferentes formas jurídicas (la más frecuente –42%– es la sociedad anónima), las empresas analizadas se caracterizan por mantener un carácter familiar en su conformación societaria (un 64% está integrada total o parcialmente por familiares); es decir, que aun cuando pueda no participar de la toma de decisiones, la familia sigue siendo la propietaria del capital y patrimonio detentado. Este es otra importante diferencia respecto de los rasgos que caracterizan como grupo a los megaempresarios.

Ello no implica, sin embargo, que las franjas empresariales analizadas en este apartado, no se caractericen por la profesionalización cada vez más acentuada de la gestión, tanto en la faz agronómica y productiva como en la económica y financiera. Por el contrario, incorporan tecnologías en sus distintos soportes, incluyendo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (los sistemas de GPS, Internet, etc.). La relación de estos empresarios con los sistemas de información y conocimiento experto es notable, lo que está en consonancia con el perfil profesional y moderno que buscan encarnar. En ese marco es posible comprender su vuelco a las asociaciones técnicas, y su menor identificación con las organizaciones corporativas del sector²⁰; valorizan particularmente el aporte de conocimientos técnicos y de gestión que brindan estas asociaciones. Ellas les ofrecen, por otra parte, un modelo profesional al que aspirar –el de los “emprendedores” e “innovadores”–, el cual ha sustentado los nuevos perfiles identitarios (Hernández 2007) que decantaron al ritmo de las profundas transformaciones implicadas en la configuración de la actual matriz socioproductiva agraria (Gras/Hernández 2008).

¹⁹ Muchas veces uno de los integrantes de la sociedad anónima funciona como CEO de la empresa.

²⁰ Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).

Un par de elementos más serán importantes para concluir esta breve caracterización. En primer lugar, la relevancia que adquiere la residencia en el interior del país: la mayoría, vive en pueblos y pequeñas ciudades. Según las entrevistas realizadas, este cambio respecto de las tradicionales clases empresarias y propietarias agrarias es relativamente reciente e involucra una mayor interacción con los actores y poblaciones locales, con las tensiones y contradicciones que ello implica en particular por las brechas de ingresos que ha generado el llamado “oro verde” o soja.

El segundo elemento a mencionar, que es también subrayado por los propios empresarios, es su condición de “nueva generación”: el 44% de los empresarios que conformaron el universo relevado por encuesta tiene entre 40 y 55 años, mientras que un 19% tiene entre 30 y 40. Por otro lado, el 59% alcanzó títulos universitarios y, entre ellos, el 18% cursó estudios de posgrado, principalmente en agronegocios y economía empresarial.

En definitiva, la centralidad adquirida por las capas empresariales es evidente desde 2002, cuando los precios internacionales registraron importantes y sostenidos aumentos, lo que les reportó ganancias significativas. Como se ha mostrado, estas capas están internamente diferenciadas. Si bien la mayoría provendría de antiguas familias de productores (sea de la otrora poderosa clase terrateniente, sea de la movilidad social ascendente entre las capas altas de la agricultura familiar), es de destacar la presencia de nuevos integrantes (capitales extra -agrarios que compraron tierra o conformaron grupos de inversores y luego se involucraron en la producción; actores vinculados a la agroindustria, como contratistas e ingenieros agrónomos, que se vuelcan a la producción directa). Precisamente, el tema de la medida en que la expansión de las capas empresariales ha implicado una recomposición de estos actores constituye un punto controversial, con implicancias en términos de la imagen pública del sector.

A pesar de las diferencias aquí señaladas, recientemente el empresariado logró una cierta consistencia interna: como se plantea en el apartado que sigue, el conflicto de 2008 con el gobierno nacional en torno a los impuestos a la exportación jugó un importante papel. Al mismo tiempo, el trabajo de las asociaciones profesionales debe ser también retenido, en cuanto han producido nuevas narrativas para legitimar las posiciones corporativas del sector y sus modos de acumulación.

El empresariado agrario y su constitución como actor político: algunas pistas e interrogantes

Algo más llamó mi atención a la par que analizaba las transformaciones comentadas: la intensa actividad (seminarios, congresos, aparición en los

medios de comunicación, presencia en foros académicos y técnicos) que grupos como los nucleados en las asociaciones técnicas llevaban a cabo, la que parecía converger en la producción de una renovada imagen pública del empresariado agrario. La profunda y grave crisis socioeconómica y político institucional que atravesó la Argentina hacia fines de 2001 los había mostrado involucrados en tareas de asistencia social –donaciones de alimentos a comedores barriales y comunitarios en el marco del programa Soja Solidaria, impulsado por las asociaciones–. Pero más importante: los principales referentes de las asociaciones técnicas presentaban el nuevo modelo como una “nueva agricultura”, moderna y tecnológicamente avanzada, que demostraba ser el sector económico más competitivo, el que podía sacar al país de la crisis y consolidar el crecimiento económico²¹. En ese marco, estas entidades comenzaron a plasmar discursos con un horizonte más amplio que el sectorial y a buscar formas de influir en el espacio público.

Estos elementos invitaban a reflexionar sobre los complejos problemas de la traducción en capital político del poder económico adquirido por los actores empresariales²², y sobre las disputas que en ese proceso tuvieran lugar entre sus diferentes franjas, más dependientes unas que otras de la dinámica económica interna en función de su grado de inserción global, a la vez que con intereses distintos en cuanto al rol del Estado y la política agraria.

Ya se ha mencionado cómo los cambios que trajeron aparejada la centralidad del empresariado habían tenido correlato en el mapa institucional del sector agropecuario, con la importancia que cobraron las asociaciones técnico-profesionales como espacios de referencia e identificación. También se sugirió que el campo de acción de estas entidades fue desbordando lo estrictamente productivo, para generar formas novedosas de articulación ideológica y simbólica que intervienen en el modo en que los empresarios se autorrepresentan y conciben su actividad profesional.

Las acciones más relevantes inicialmente se plasmaron en diferentes iniciativas desarrolladas por dos de estas asociaciones profesionales en la última década, en buena medida en línea con el programa Soja Solidaria y la asisten-

²¹ Vale destacar en ese sentido que en los años 90, el ingreso de divisas del total del complejo sojero –incluyendo aquí la producción de aceite, harinas, etc., además de la materia prima– estuvo en el orden de los 3 mil millones de dólares anuales (un 16% del total de ventas argentinas al exterior). En 2003, ese valor aumentó a más del 43%, ascendiendo a cerca de 7.000 millones; a partir de allí han estado entre los 7.500 y los 8.500 millones de dólares por año. Otro dato importante en este sentido es el aporte de la producción sojera al Tesoro Nacional, a través de las llamadas retenciones.

²² Como señala Hora (2009), aun en su “edad de oro”, los empresarios agrarios tuvieron dificultades en lograr esa traducción y en dotarse para ello de organizaciones sólidas.

cia a poblaciones en situación de pobreza. Estas acciones continuaron en el tiempo, y superado el pico de la crisis de 2001, se orientaron a apoyar escuelas o centros de salud de diferentes localidades del interior del país²³.

Por ese entonces, algunos megaempresarios comenzaron a desarrollar programas corporativos de responsabilidad social empresaria, que incorporan las prácticas asistenciales preexistentes dentro de modelos de gestión de las empresas²⁴, en especial de su imagen pública. Al mismo tiempo, las asociaciones técnicas insistían en la necesidad que el empresariado se “involucrara activamente” en los lugares donde desarrollaban su actividad y muchas veces también residían. Una de ellas organizó un programa de formación de líderes comunitarios, que desde 2004 intenta promover la participación de sus asociados en los asuntos de sus pueblos y localidades. A pesar de la respuesta favorable que dicho programa tuvo entre los integrantes de la misma, la vinculación con lo público y con la política, así como el tipo de organización que ella requería, planteaban más interrogantes que certezas. Así, por ejemplo, una de las jornadas realizada por el mencionado programa en 2007 tuvo como uno sus ejes principales de debate la cuestión de cómo influir en el manejo de la cosa pública y desde dónde ejercer el “compromiso con lo público”. Estos interrogantes adquirirían otros sentidos en el marco de las certezas que en esos espacios se compartía: debían poner en práctica en lo público lo que como empresarios hacían tan exitosamente en la esfera privada. Asimismo, algunos políticos e intelectuales que participaban de esos foros, los calificaban como “una nueva dirigencia histórica” y los interrogaban por el papel que podían jugar en el “futuro de Argentina”²⁵.

Pero es necesario señalar en este punto que estas cuestiones circulaban en ámbitos más o menos restringidos. Si bien la asociación que impulsaba estas acciones congrega a casi 2000 empresarios, no todos ellos se involucraban en actividades diferentes a las estrictamente técnico-productivas. En otras palabras, no se observaba entonces una movilización de la voluntad del grueso del empresariado que integraba estas asociaciones, y mucho menos de quienes no lo estaban. Por otra parte, el alcance de las acciones emprendidas no traspasaba el ámbito local del pequeño pueblo o ciudad donde aquellos empresarios residían.

²³ Por ejemplo, se dan recursos para pintar la escuela, comprar una computadora, se organizan donaciones para la compra de equipamiento menor para un hospital. Se trata de acciones puntuales que no implican necesariamente una continuidad en el tiempo.

²⁴ Este modelo de gestión involucra la relación con grupos de interés que por distintos motivos son de referencia para la empresa, y a los que ella está vinculada (bancos, proveedores, compradores, etc.).

²⁵ Notas de campo provenientes de la observación participante en el mencionado evento.

En suma, consolidado su protagonismo económico y productivo, el empresariado —a través de la activa militancia de algunos de sus referentes— había logrado construir una imagen pública renovada que podía reclamar ser distinguida de la antigua clase terrateniente²⁶. Su influencia sobre aspectos centrales de la nueva matriz productiva era identificable en diversas políticas del Ministerio de Agricultura o bien en los programas de formación de profesionales en las universidades. Pero esa influencia no lograba ampliarse fuera de lo estrictamente sectorial. Más aún, seguramente, para buena parte de la sociedad argentina —en articular sus clases urbanas— estos sectores no tenían visibilidad alguna en términos políticos.

Así las cosas, el 11 de marzo de 2008 el gobierno de C.F. Kirchner firmó una resolución (conocida desde entonces como “la 125” por el número que llevó) aumentando la alícuota de los derechos de exportación —en el caso de la soja, pasaban del 35% al 44%— y estableciendo su carácter móvil de acuerdo a las variaciones de los precios internacionales de las principales materias primas de exportación. La medida desató uno de los conflictos más prolongados de la historia agraria en el país y uno de los hechos políticos más importantes de la última década.

El conflicto y las tensiones en torno a la construcción del actor político

Durante más de cuatro meses, grupos de productores (en la región pampeana principalmente, aunque también en provincias del norte del país) cortaron rutas, llevaron adelante ceses de comercialización, se congregaron en asambleas locales, y demandaron cambios en la política del gobierno, los cuales se resumían en dos puntos básicos: la eliminación de las retenciones y de la intervención en los mercados de la recientemente creada Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Las corporaciones históricas del sector agropecuario constituyeron la llamada Mesa de Enlace para canalizar la representación institucional de los productores. Sin embargo, no siempre lo logró: a poco de empezar el conflicto, surgieron en casi toda la geografía pampeana grupos de productores “autoconvocados”, que no siempre reconocieron a la Mesa de Enlace como espacio de representación, que exigían mayor radicalidad en las posturas de la misma, y que desplegaron un variado repertorio de acciones. En verdad, los grupos “autoconvocados” planteaban posiciones

²⁶ Cuyos comportamientos políticos han sido impugnados por los partidos políticos populares a lo largo del siglo xx.

sumamente críticas a las corporaciones respecto de sus estrategias de acción y las formas en que ejercían su representación (Gras 2010).

La redefinición del mapa de actores agrarios –tanto en términos de los perfiles socioeconómicos como institucionales– encontró en el conflicto una coyuntura crítica, un momento de anudamiento de distintos procesos y de producción de un campo de efectos. Uno de ellos se vincula a la construcción del empresariado agrario como actor político. Importa en este punto plantear los movimientos y tensiones implicadas en esa construcción.

En esa línea, es de destacar que uno de los aspectos más salientes y controversiales del conflicto fue la convergencia en la acción de franjas empresariales que si bien tenían en común su pertenencia a la clase capitalista agraria, eran sumamente heterogéneas, como ya se señaló; a ello se sumaba también la participación de productores de tipo familiar (capitalizados). Ciertamente, las modificaciones en la política gubernamental los afectaban en sus niveles de ingreso de distinta manera. Al mismo tiempo, reconocían mayor o menor cercanía con las entidades de la Mesa de Enlace.

Estas entidades eran contrastantes e incluso antagónicas en más de un sentido: tienen trayectorias distintas, defienden y promueven distintos intereses que se han reflejado en sus demandas, en sus modalidades de presencia en la arena política y en las formas en que han buscado influir sobre las políticas estatales, y en las alianzas que han construido con otros actores sociales. Pero las diferencias y antagonismos entre dichas entidades, que por décadas reflejaron más o menos nítidamente las líneas de fractura de la estructura social, parecieron pasar a un segundo plano. Una nueva denominación cobró impulso y se instaló públicamente: “el campo”.

Como momento político, el conflicto mostraba, por un lado, que existían nuevas líneas de fractura, y que estas estaban siendo social y políticamente procesadas, reconstituyéndose en ese contexto las fronteras preexistentes entre categorías socio-económicas e identidades sociopolíticas²⁷. Por el otro, que la construcción del “campo” como actor político implicaba complejos movimientos hacia adentro del sector y también hacia afuera, esto es, hacia los grupos y sectores sociales cuyo apoyo había logrado concitar por aquellos días

²⁷ La noción de fronteras sociales alude a las “múltiples formas de mantenimiento y de recomposición de la distancia diferentes grupos sociales en sociedades marcadas por procesos más o menos intensos de recomposición social” (Saint-Martin *et al.* 2008; traducción propia). Refieren tanto a las diferencias sociales objetivadas en el acceso y participación desigual en la distribución de recursos y oportunidades sociales, como a los modos en que los actores conciben y categorizan objetos, personas, prácticas y compiten en la producción, difusión e institucionalización de sistemas y principios de clasificación (Lamont/Molnár 2002).

(las clases medias urbanas; organizaciones sociales que habían quedado fuera del armado político construido por los gobiernos de C.F. Kirchner y su antecesor, N. Kirchner).

El cambio tecnológico y las maneras en que fue significado por el núcleo del empresariado agrario conformaron un sustrato básico de la reconfiguración de fronteras sociales: sobre él se desplegó el discurso del *Management*, que puso el énfasis en los procedimientos (pasibles de ser adquiridos –en esa construcción ideológica– a través de la iniciativa individual) antes que en la posesión y control de recursos. Por otro lado, el cambio tecnológico promovió una estandarización de las formas de practicar y organizar la actividad agropecuaria, diluyendo antiguas diferencias que habían definido perfiles e identidades socio profesionales (trabajo manual/mecanización; oficio/profesionalización).

Finalmente, es necesario recordar el crecimiento de la actividad agropecuaria a partir de 2002, que había permitido la mejora de ingresos de todo el sector más allá de sus diferencias internas, configurado un escenario bastante distinto al de los años 90, cuando no pocos pequeños empresarios se habían fundido. Esto no implica afirmar en modo alguno que las fronteras se diluyeran, sino que ellas comenzaron a ser experimentadas no solo como mera oposición sino también en sus múltiples lógicas (esto es, no ya como oposiciones binarias, sino entre uno y varios otros agentes sociales).

El otro elemento involucrado en la construcción del “campo” se vincula con la actualización de su histórica identificación con la nación, anclada en el llamado interior del país. Se construía así una distinción respecto de otros grupos o sectores económicos cuya actuación no se conectaría tan claramente con el desarrollo nacional. En buena medida, esta pretensión encontraba sustento material en el mayor movimiento económico de las localidades del interior –lazo de pertenencia de gran importancia en las interacciones que se establecieron durante el conflicto y que primaron sobre las fracturas internas–, el cual retroalimentó visiones productivistas sobre el desarrollo y las relaciones virtuosas que el comportamiento de un pujante sector productivo podía establecer entre el campo y la ciudad.

En fin, en la construcción del “campo” como actor político han convergido dos movimientos en los que se juega su complejidad y también su contingencia. Hacia adentro, para procesar los clivajes estructurales –debilitando su fuerza– y los conflictos de intereses que sobre ellos puedan construirse. Hacia afuera, para mantener y ampliar apoyos de otros actores a la vez que para sostener la construcción de la legitimidad de sus demandas corporativas sobre la base de su identificación con la nación, lo implica hacer lo menos visible posible la dimensión transnacional de la cúpula del empresariado.

Durante el conflicto, ambos movimientos fueron efectivos, como se desprende de la adhesión de distintos sectores y la sostenida movilización en la

que las diferentes franjas empresarias se comprometieron. Posteriormente, asomaron las tensiones y contradicciones propias de toda construcción política. Se observaría así la desmovilización de muchos de los grupos autoconvocados. Pero también un alto involucramiento de algunos referentes para acceder a los mecanismos de reclutamiento y formación de la clase política, integrándose a las listas de partidos de la oposición en las elecciones legislativas de 2009. Durante los últimos meses de 2010 los conflictos internos se hicieron visibles en la Mesa de Enlace, cuyas entidades retomaron comportamientos reactivos. Por otro lado, los diputados electos por el “campo” tuvieron una performance por lo menos pobre: sin grandes proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional, tampoco lograron marcar la agenda de los partidos a los cuales contribuyeron a dar identidad opositora durante la campaña electoral de 2009. Y al mismo tiempo, instalado el debate por el modelo de desarrollo que el empresariado disputa, sus franjas más concentradas, en la voz de sus referentes paradigmáticos, ocupan lugares importantes en los medios, sentando postura respecto de los caminos más adecuados en ese sentido.

A modo de conclusión

En la actualidad, el sector agropecuario muestra un gran dinamismo; sus indicadores principales registran un crecimiento sostenido desde hace casi una década. El proceso marca la centralidad de las capas empresariales y, de su mano, la configuración de un nuevo modelo productivo basado en la innovación biotecnológica. Este sector empresarial es heterogéneo, siendo un vector de diferenciación importante no solo el nivel de concentración de recursos sino también la medida en que sus estrategias económicas y productivas se insertan en espacios transnacionales.

En la relación del empresariado con la política, las conexiones con los canales institucionales de representación democrática y con la arena pública no han sido lo característico. Sus formas de acción privilegiaron la defensa corporativa de intereses a través de *lobbies* o la integración de sus miembros a las burocracias técnico-profesionales. Mientras, la construcción de una representación política propia y de vínculos con la clase política diferentes a los implicados en la lógica corporativa pareció carecer de proyectos convocantes para sus propios miembros. De hecho, las innovaciones institucionales se han sustentado sobre lo técnico-productivo, con lo que su alcance sobre la política se centraba en un recortado espectro de asuntos. A partir de 2001, estas asociaciones abrieron espacios y actividades que fueron cimentando en algunos de sus miembros una renovada vocación hegemónica.

El conflicto de 2008 marca un punto de inflexión en ese recorrido. Es cierto que comenzó siendo una de las usuales disputas por las condiciones de realización de las ganancias empresarias. Pero con el correr de los días, devino un conflicto político y así fue definido por los propios protagonistas. En ese contexto, se fue desplegando con todas sus tensiones y contradicciones, la construcción del campo como actor político. Proceso que ha evidenciado las complejas dimensiones existentes en las relaciones entre empresarios, clase política, desarrollo y democracia.

Sobre el final del apartado anterior, se señalaron los movimientos que esa construcción implica y los interrogantes que se plantean, particularmente al considerar el escenario posconflicto. Cabe aquí agregar otro más, referido a la medida en que la convergencia de las distintas capas empresariales fue meramente estratégica, o bien puede –involucrando el complejo movimiento “hacia adentro” antes subrayado– sostenerse en el tiempo, como base la constitución del campo como actor político.

El largo conflicto de 2008 no debe soslayar el hecho de que las medidas afectaban especialmente a una fracción del empresariado: los capitalistas nacionales o cuya lógica de acumulación es local –aunque sus ganancias se generen en el intercambio en el mercado externo–. Ciertamente, la actual matriz productiva abrió oportunidades de movilidad ascendente para muchos de estos capitalistas medianos y pequeños. Pero las mismas coexisten con un período de altos precios internacionales y alta rentabilidad. Es posible pensar que las tensiones entre las distintas fracciones se expresarán más crudamente de cambiar esas variables, diferenciándose sus intereses en lo que refiere al rol que pretenden del Estado y agudizándose las competencias y asimetrías en el acceso a recursos.

En tal sentido, es necesario profundizar el estudio de las asimetrías y antagonismos que se manifiestan en el actual modelo agrario, desde la complejidad de las relaciones entre las distintas fracciones del empresariado, prestando atención a las formas en que se dirimen los conflictos y a las estrategias de construcción de hegemonía.

Bibliografía

- BASUALDO, Eduardo (2010): “Los propietarios de la tierra y las economías de escala, sustentos del paradigma soja en la Argentina”, en: *Desarrollo Económico*, n° 197, vol. 50, pp. 3-32.
- BELTRÁN, Carlos (s/f): “Difusión de contratos y aparición de *big players* en el sector agropecuario argentino. Algunos casos”. Mimeo.
- BISANG, Roberto/KOSACOFF, Bernardo (2006): “Las redes de producción en el agro argentino”, XIV Congreso Anual de AAPRESID, Buenos Aires.

- GRAS, Carla (2009): "El nuevo empresariado agrario: sobre la construcción y dilemas de sus organizaciones", en: Gras, C./ Hernández, V. (comps.): *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos, pp. 215-236.
- (2010): "Actores agrarios y formas de acción política en la Argentina contemporánea: un análisis a partir de los grupos de autoconvocados en la región pampeana", en: Arondskind, R./Vommaro, G. (comps.): *Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*. Buenos Aires: Prometeo/UNGS, pp. 279-312.
- GRAS, Carla/BIDASECA, Karina (2009): "Cartografías contemporáneas de tres pueblos sojeros en la Pampa gringa. Sobre territorios y procesos de reconstrucción identitaria de los chacareros", en: *Realidad Económica*, n° 245, pp. 97-119.
- GRAS, Carla/HERNÁNDEZ, Valeria (2008): "Modelo productivo y actores sociales en el agro argentino", en: *Revista Mexicana de Sociología*, año 70, n° 2, pp. 227-259.
- (2009): "El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agorrrural en la Argentina", en: Gras, C./Hernández V. (comps.): *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos, pp.15-38.
- GRAS, Carla/MANILDO, Luciana (2011): "Los pueblos hoy: estructuras sociales, empleo y condiciones de vida", en: Gras, C./Bidaseca, K. (dirs.): *Herencia, territorio e identidad en los pueblos sojeros. El mundo chacarero en tiempos de cambio*. Buenos Aires: Editorial CICCUS, pp. 87-108.
- HERNÁNDEZ, Valeria (2007): "El fenómeno económico y cultural del boom de la soja y el empresariado innovador", en: *Desarrollo Económico*, vol. 47, n° 187, octubre-diciembre, Buenos Aires, pp. 331-365.
- (2009): "La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las pampas gringas", en: Gras, C./Hernández V. (comps.): *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos, pp. 39-64.
- HORA, Roy (2005): *Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política, 1860-1945*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- (2009): *Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- LAMONT, Michèle/MOLNÁR, Virág (2002): "The study of boundaries in the social sciences", en: *Annual Review of Sociology*, vol. 28, pp. 167-195.
- MORRISON, William (2008): *Latin America and Global Capitalism. A Critical Globalization Perspective*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- NEWELL, Peter (2009): "Bio-Hegemony: The Political Economy of Agricultural Biotechnology in Argentina", en: *Journal of Latin American Studies*, vol. 41, pp. 27-57.
- DE SAINT-MARTIN, M./DA CASTRO ROCHA, D./HEREDIA, M. (2008): "Trocas intergeracionais e construção de fronteiras sociais na Franca", en: *Tempo Social*, vol. 20, pp. 135-162.
- SZTULWARK, Sebastián (2005): "Especialización productiva y subdesarrollo en el paradigma informacional. Una aproximación a partir del caso de las semillas transgénicas y su difusión en la Argentina", XI Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Bahía, Brasil.

Ricardo Córdova Macías*

Percepciones sobre la delincuencia y la inseguridad en Centroamérica**

Introducción

La región de América Latina y el Caribe registra, después del África Subsahariana, las tasas de homicidio más altas del planeta (PAHO 2003), y en este marco, Centroamérica es la región más violenta entre aquellas que no están siendo afectadas por una intensa violencia política (IDHAC 2009-2010). De acuerdo con un informe reciente del PNUD, Centroamérica tuvo 29,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2004, mientras que todo el mundo tuvo 9, Europa 8 y Latinoamérica 25 (IDHAC 2009-2010).

Los datos para el año 2006 muestran que la situación de Centroamérica “es sin duda muy grave. El promedio de las tasas de los siete países (32) equivale a algo más de tres veces la tasa mundial y supera en siete puntos la de América Latina. Pero El Salvador, Guatemala y Honduras, seguidos por Belice, tienen un problema más serio –digamos, entre tres y seis veces más serio– que el de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. El primer grupo está por encima del promedio de América Latina, por encima de México, e incluso está peor que un país proverbialmente violento como Colombia. (...) El segundo grupo de países (Panamá, Costa Rica y Nicaragua), aunque no llega a la media latinoamericana, está sobre el promedio mundial, sobre el de Europa y sobre el de los países del Cono Sur latinoamericano” (IDHAC 2009-2010: 68). En dicho informe se ha estimado que la violencia homicida ha cobrado la vida de casi 79.000 centroamericanos durante el período 2003-2008.

En el Cuadro 1 se puede observar la evolución de las tasas de homicidios para cada uno de los países centroamericanos durante el período 2000-2008.

* Director ejecutivo, Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, El Salvador. *Visiting scholar* en el German Institute for International and Security Affairs/Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, Germany. Ensayo escrito en el marco de una beca de corto plazo de las fundaciones Alexander von Humboldt y Thyssen.

** Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la Fourth Network Conference of Thyssen-Humboldt Short Term Fellows from Latin America, Berlín, 20-21 de enero de 2011.

CUADRO 1
Centroamérica: homicidios por 100.000 habitantes (2000-2008)

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Belice	19	25	30	24	27	28	31	30	32
Costa Rica	6	6	6	7	7	8	8	8	11
El Salvador	45	40	39	40	49	62	65	57	52
Guatemala	28	30	32	37	38	44	47	45	48
Honduras	–	–	69	65	35	39	46	50	58
Nicaragua	9	10	10	12	12	13	13	13	13
Panamá	10	10	12	11	10	11	11	13	19

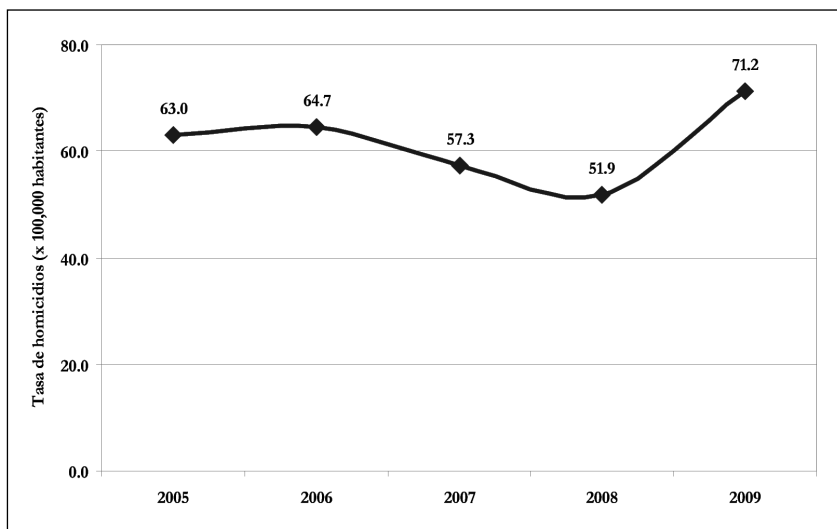
FUENTE: IDHAC (2009-2010: 69).

En términos generales se puede apreciar un incremento en las tasas de homicidios en todos los países, aunque con diferentes niveles de magnitud. El llamado triángulo del norte exhibe las tasas más altas, así, en el año 2008, la tasa de Honduras era de 58, El Salvador 52 y Guatemala 48; seguido por Belice con una tasa de 32. Luego vienen Panamá con una tasa de 19, Nicaragua con 13 y Costa Rica con 11. Incluso Costa Rica, el país con la tasa más baja, prácticamente la duplicó en el período, pasando de 6 en 2000-2002 a 11 en 2008.

En el Gráfico 1 se presenta la información más reciente y más confiable para el caso de El Salvador: la tasa de homicidios por cien mil habitantes pasa de 63 en 2005 a 64,7 en 2006, disminuye a 57,3 en 2007, baja a 51,9 en 2008 y luego aumenta a 71,2 en 2009. En el caso de El Salvador, el promedio de homicidios diarios ha tenido la siguiente evolución: de 10,4 en 2005, pasa a 10,8 en 2006, baja a 9,6 en 2007, disminuye a 8,7 en 2008 y sube a 12 en 2009.

Para tener una visión más amplia sobre esta problemática en la región centroamericana es preciso relacionar la problemática de la violencia homicida con la violencia no homicida (agresión, violación y secuestro) y la actividad delictiva común, en particular los delitos contra el patrimonio privado (el robo, el hurto y la estafa). De manera que al combinar estos factores, el IDHAC agrupa a los países de El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice en una situación de alta criminalidad, entendida como una alta tasa de homicidio y tasas altas o crecientes de violencia no homicida y de delitos contra la propiedad; mientras que Panamá, Costa Rica y Nicaragua son clasificados como de baja criminalidad, entendida como tasas medias o bajas de homicidios y por

GRÁFICO 1
El Salvador: tasa de homicidios a nivel nacional, 2005-2009



FUENTE: FUNDAUNGO (2010: 18).

tasas moderadas, estables o en descenso de violencia no homicida y de delitos contra la propiedad (IDHAC 2009-2010: 85-86).

El estudio más reciente sobre los costos económicos de la violencia en Centroamérica ha sido realizado por Carlos Acevedo (2008) para el Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, quien estima que la violencia habría costado —en términos de costos directos e indirectos¹— a los países centroamericanos en el año 2006 la cantidad de 6.505,9 millones de dólares estadounidenses, equivalentes al 7,7 del Producto Interno Bruto de la región. Dicho estudio presenta los siguientes datos: “En valores absolutos, los costos son mayores para Guatemala (US\$ 2.291 millones) y El Salvador (US\$ 2.010 millones) y menores para Costa Rica (US\$ 791 millones) y Nicaragua (US\$ 529 millones). En términos relativos al tamaño de la economía, la situación cambia. En un extremo se encuentra El Salvador, donde la violencia impone un costo cercano al 11% del PIB; en el otro Costa Rica, con una carga del 3,6% del PIB. En Honduras y Nicaragua, los costos de la violencia equivalen al 9,6% y al 10% del PIB, respectivamente. En Guatemala, el peso relativo de

¹ Esto incluye costos en salud, institucionales (legales, judiciales y policiales), los preventivos en seguridad privada y las pérdidas materiales (Acevedo 2008).

los costos de la violencia es menor (7,7% del PIB), aun cuando es el país que registra los costos mayores en valores absolutos” (Acevedo 2008: 13).

En términos generales, los datos sobre homicidios y delitos en la región centroamericana son bastante problemáticos, por la ausencia de series estadísticas confiables, y que a su vez sean comparables entre los países. Esto se debe a varios factores, entre los cuales se pueden señalar tres. Primero, debido a que las estadísticas publicadas por los gobiernos están basadas en casos que la población denuncia ante las autoridades, y en estudios previos de LAPOP y otras instituciones han mostrado que una proporción alta de las víctimas de la delincuencia no denuncia el hecho ante las autoridades. Es “precisamente en las áreas con mayor nivel de delitos donde las tasas de denuncia son menores” (United Nations Office on Drugs and Crime and the Latin America and the Caribbean Region of the World Bank 2007: 5). Segundo, debido a las diferencias existentes en las legislaciones nacionales sobre la tipificación de los delitos, lo cual complejiza la comparabilidad de los mismos. Tercero, debido a la generación de datos discrepantes provenientes de distintas instituciones: la policía, el ministerio público y medicina legal.

Frente a estas dificultades con las fuentes de información gubernamentales, la información complementaria para el análisis de la problemática del crimen proviene de las encuestas de hogares, como por ejemplo las encuestas estandarizadas sobre delitos bajo los auspicios de la Encuesta Internacional a Víctimas del Delito (ICVS por sus siglas en inglés). Sin embargo, los datos provenientes de encuestas de opinión pública tienen algunas limitaciones. Primero, “por motivos obvios las víctimas de asesinato no pueden ser entrevistadas, por lo que denuncias directas sobre la forma más violenta de delincuencia es imposible que puedan ser recabadas a través de encuestas. En segundo lugar, las denuncias sobre asesinatos o delincuencia reportadas en la encuesta por familiares usualmente conducen a una exageración en las estadísticas sobre delincuencia, en parte porque a menudo no son más que datos indirectos, en parte porque la definición de “familia” varía de un individuo a otro (desde familia nuclear a familia extendida)”. Tercero, “un factor que complica las estimaciones nacionales de la delincuencia es la variación en su concentración o dispersión. (...) En las encuestas de LAPOP, el mismo fenómeno se ha producido en un número de países. En El Salvador, por ejemplo, las tasas de delincuencia reportadas en nuestras encuestas en San Salvador son marcadamente superiores que en el resto del país” (Córdova/Cruz 2008: 56-57). En este marco, habría que señalar que las encuestas son de utilidad para el análisis de una parte de la problemática de la delincuencia e inseguridad, proporcionando valiosa información sobre algunos delitos (por ejemplo, contra el patrimonio), pero no para todos. Por su naturaleza no permiten capturar de manera confiable la información sobre la violencia intrafamiliar o los delitos sexuales.

Por lo tanto, para los propósitos de este ensayo, el enfoque se hará en lo que es posible analizar con el uso de los datos provenientes de las encuestas de opinión pública.

Debido a que la región centroamericana tiene altos niveles de violencia y criminalidad, algunos estudios se han enfocado en la problemática de la seguridad pública; mientras que otros lo abordan desde una perspectiva económica, enfocándose en la pérdida de productividad, en los costos económicos, o en los factores relacionados con incrementar los costos esperados;² y en otros el abordaje es de carácter sociológico, enfocándose en su relación con aspectos de la estructura social.³ Sin embargo, en este ensayo se aborda desde una perspectiva de la ciencia política, enfocándose en algunos impactos que esta problemática está teniendo en erosionar los jóvenes sistemas democráticos de la región. Como se ha planteado en estudios anteriores, es pertinente preguntarse si el crimen y el miedo asociado al mismo, constituyen una amenaza para las democracias en América Central (Cruz 2000; Seligson/Azpuru 2001). A un nivel más amplio, Bodemer (2003) ha llamado la atención sobre los posibles efectos que la violencia y las situaciones de inseguridad en América Latina podrían estar teniendo sobre los sistemas democráticos.

En general, es poco lo que se conoce sobre el impacto que tienen el crimen y la violencia sobre los sistemas democráticos en Latinoamérica en términos generales, y para la región centroamericana a nivel más específico. En este ensayo se explora la hipótesis según la cual la violencia criminal y la inseguridad están impactando los valores y las actitudes de los ciudadanos hacia la democracia, así como los niveles de confianza interpersonal y la confianza en las instituciones, contribuyendo así en la erosión de los jóvenes sistemas democráticos de la región centroamericana.⁴

En este ensayo se abordan los siguientes aspectos. Primero una breve explicación sobre las fuentes de información utilizadas. Segundo, se reportan los datos de las tasas de victimización y se presentan algunas características básicas de las víctimas. Tercero, se abordan las percepciones de inseguridad. Cuarto, se exploran algunas de las consecuencias que este fenómeno está teniendo en la vida cotidiana de los ciudadanos. El quinto aspecto es el impacto en los niveles de confianza institucional, en la confianza interpersonal y en las actitudes ciudadanas hacia la democracia; y el sexto es el impacto en el respeto al estado de derecho. Por último, se presentan las principales conclusiones derivadas de la evidencia empírica presentada.

² Al respecto, véase Dills/Miron/Summers 2010.

³ Al respecto, véase Gottfredson/Hindelang 1981.

⁴ Con la excepción de Costa Rica, que después de la guerra civil de 1948 ha mantenido ininterrumpidamente el sistema democrático.

Para finalizar, quisiera dejar constancia de mi agradecimiento a la Fundación Alexander Von Humboldt y a la Fundación Thyssen por su apoyo al haberme proporcionado una beca de corto plazo para una estadía en Alemania, y al SWP como institución anfitriona, por el apoyo recibido para desarrollar mi proyecto de investigación en el marco del cual se elaboró este ensayo.⁵

1. Fuentes de información

El presente estudio se basa en los datos generados por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, en su edición correspondiente al año 2008. Si bien la encuesta se desarrolló en 22 países del continente americano, en este estudio se utilizan únicamente los datos correspondientes a seis países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

En cada país se diseñaron muestras nacionales probabilísticas de adultos en edad de votar para presentar con precisión la distribución de la población, con un número alrededor de 1.500 entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años.⁶

CUADRO 2
Tamaño de la muestra y error muestral
Centroamérica, LAPOP 2008

País	Tamaño de la muestra	Error muestral
Guatemala	1.538	± 2,5%
El Salvador	1.549	± 2,4%
Honduras	1.522	± 2,5%
Nicaragua	1.540	± 2,5%
Costa Rica	1.500	± 2,5%
Panamá	1.536	± 2,5%
Total	9.185	

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

⁵ Deseo expresar mi agradecimiento a Víctor Antonio Tablas, Nayelly Loya Marín y María Elena Rivera por sus comentarios a una versión preliminar de este ensayo; y a Loida Pineda por su apoyo en la labor de edición.

⁶ Solamente en el caso de Nicaragua se encuestó a ciudadanos a partir de los 16 años de edad.

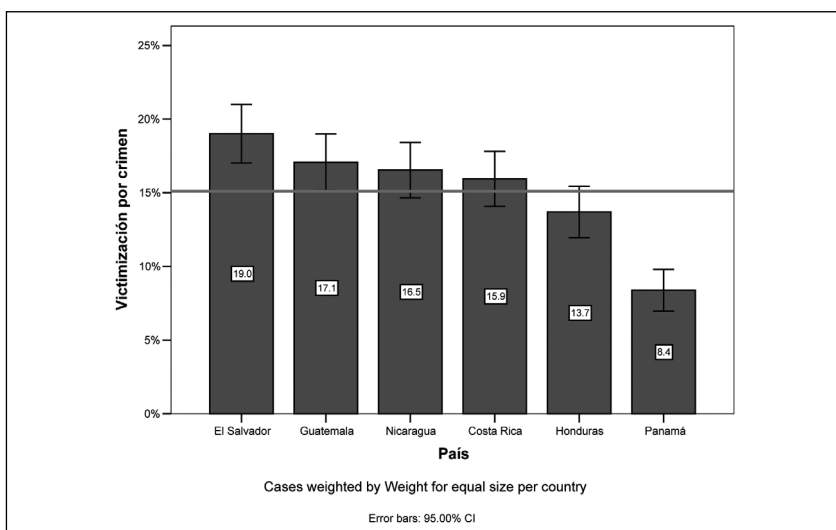
En el Cuadro 2 se presenta la información correspondiente al tamaño de la muestra y el error muestral para cada país.

Para el análisis de los datos se ha utilizado una ponderación del tamaño de la muestra, de manera que se cuente con 1.500 casos para cada uno de los países.

2. Tasas de victimización y características de las víctimas

En la encuesta de LAPOP 2008 se utilizó una pregunta convencional en los estudios sobre victimización: “Ahora, cambiando el tema, ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? (1) Sí, (2) No, (8) NS/NR”. En promedio, en la región centroamericana, se reporta una tasa de victimización por crimen del 15,10%. En el Gráfico 2 se puede observar que arriba del promedio se ubican El Salvador (19%), Guatemala (17,1%), Nicaragua (16,5%) y Costa Rica (15,9%); mientras que Honduras (13,7%) y Panamá (8,4%) se ubican abajo del promedio. Como se ha señalado anteriormente, estos datos solamente logran captar un aspecto del complejo fenómeno de la criminalidad, particularmente capturan valiosa información sobre el crimen contra el patrimonio.

GRÁFICO 2
Porcentaje de personas que fueron víctimas de la delincuencia
en Centroamérica, 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

A partir de los datos de la encuesta de LAPOP, a continuación se exploran algunas características básicas sobre las víctimas del crimen en Centroamérica, para lo cual se realizó un análisis de regresión logística debido a que nuestra variable dependiente es dicotómica: si ha sido o no víctima de un acto de delincuencia. Se ha estimado un modelo de regresión para cada uno de los países, y otra para toda la región centroamericana. Los resultados del análisis de regresión logística con los predictores de la victimización por crimen se presentan en el Cuadro 3.

Cinco variables socioeconómicas han sido utilizadas como variables independientes: el tamaño del municipio de residencia,⁷ el nivel educativo, la edad, la posesión de bienes materiales⁸ y el sexo. Para el tamaño del municipio de residencia el sentido de la relación es negativo y estadísticamente significativo para los seis países y para la región, es decir, que la victimización del delito es mayor en las ciudades con mayor población (capital o ciudad grande), y ésta disminuye para las ciudades medianas y pequeñas, y para el área rural. Esto se puede visualizar para la región centroamericana en el Gráfico 3. El sentido de la relación con el nivel educativo es positivo para todos los países (pero solo es estadísticamente significativo en dos países y para la región), lo que significa que los que tienen más años de escolaridad suelen ser víctimas más frecuentes. Esto se puede visualizar para la región centroamericana en el Gráfico 4.

El sentido de la relación entre la edad y la victimización es negativa para cuatro países y para la región (pero sólo es estadísticamente significativo para tres países y para la región), lo que significa que los jóvenes suelen ser víctimas del delito más frecuentemente que las personas de mayor edad. En el Gráfico 5 se presenta la tasa de victimización por crimen para la región centroamericana, de acuerdo con el grupo etario. El sentido de la relación con la posesión de bienes materiales es positiva en cuatro países y para la región (pero sólo es estadísticamente significativa en dos países), lo que significa que los que cuentan con más recursos económicos suelen ser víctimas más frecuentemente. La relación entre el sexo y la victimización también es negativa para todos los países pero sólo es estadísticamente significativa para dos países y la región, lo que significa que los hombres suelen ser víctimas del delito más frecuentemente que las mujeres, lo cual se puede apreciar en el Gráfico 6.

⁷ Se le utiliza como variable *proxy* porque se preguntó por el lugar de residencia, más no necesariamente indica que ese haya sido el lugar donde ocurrió el delito.

⁸ Se ha usado el índice de posesión de bienes materiales por ser más confiable que la pregunta sobre el nivel de ingreso.

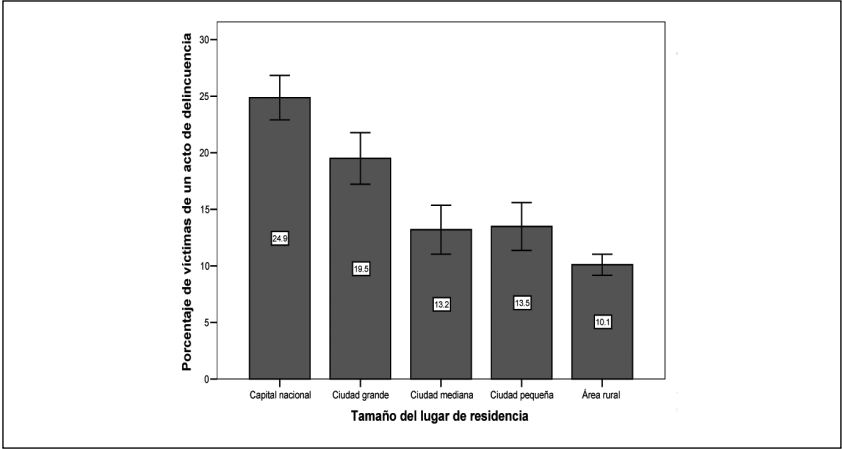
CUADRO 3
Predictores de la victimización por crimen (7) en Centroamérica, 2008

Variable	Coeficientes en primera columna (6) y valores p en segunda columna						Región centroamericana
	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	
Tamaño del municipio de residencia (1)	-0.220*** (0.802)	-0.361*** (0.697)	-0.241*** (0.786)	-0.232*** (0.793)	-0.184*** (0.832)	-0.169** (0.844)	-0.237*** (0.789)
Educación (2)	0.028 (1.029)	0.013 (1.013)	0.055* (1.056)	0.005 (1.005)	0.053** (1.054)	0.059 (1.061)	0.022** (1.022)
Edad	-0.017** (0.983)	-0.029*** (0.971)	0.002 (1.002)	-0.016** (0.984)	-0.011 (0.989)	0.003 (1.003)	-0.014*** (0.986)
Poseción de bienes materiales (3)	0.144** (1.155)	0.028 (1.029)	-0.072 (0.931)	0.174*** (1.191)	-0.059 (0.942)	0.005 (1.005)	0.030 (1.031)
Sexo (4)	-0.269 (.764)	-0.439** (0.645)	-0.047 (0.954)	-0.235 (0.790)	-0.440** (0.644)	-0.341 (0.711)	-0.289*** (0.749)
Constante	-0.447 (0.640)	1.050* (2.856)	-1.131* (0.323)	-0.569 (0.566)	-0.094 (0.910)	-2.207*** (0.110)	-0.345 (0.708)
N (5)	1523	1520	1498	1503	1431	1493	8968
Hosmer-Lemeshow (valor p)	0.843	0.724	0.905	0.536	0.772	0.626	0.588
R ² de Nagelkerke	0.116	0.149	0.037	0.099	0.050	0.033	0.064

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

(1) Los valores son: 1 capital nacional, 2 ciudad grande, 3 ciudad mediana, 4 ciudad pequeña y 5 área rural. (2) Los valores van en un rango de 0 a 18. (3) Índice de riqueza familiar basado en la posesión de bienes materiales como televisor, refrigerador, teléfono, etc. Tiene un rango 0-9. (4) Los valores son: 1 hombre y 2 mujer. (5) Para propósitos de la regresión, se han utilizado los Ns de cada país sin el ponderador (*weight*). (6) Primero se reporta el B y entre paréntesis el Exp (B). (7) Los valores para la variable dependiente son 0 No y 100 Sí.

GRÁFICO 3
Víctimas de un acto de delincuencia según tamaño del municipio de residencia de las víctimas, Centroamérica 2008

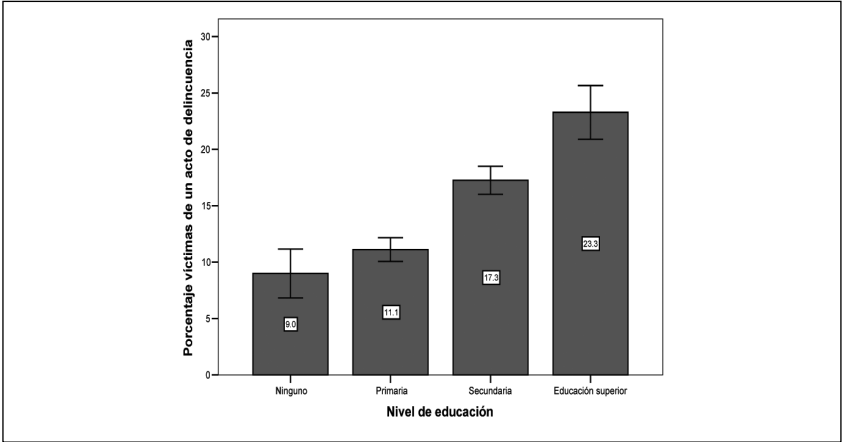


Cases weighted by Weight for equal size per country

Error bars: 95.00% CI

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

GRÁFICO 4
Víctimas de un acto de delincuencia según nivel educativo de las víctimas, Centroamérica 2008

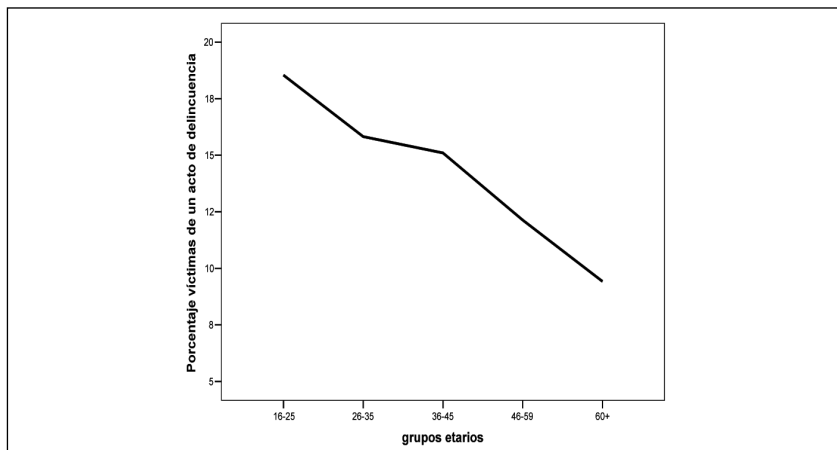


Cases weighted by Weight for equal size per country

Error bars: 95.00% CI

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

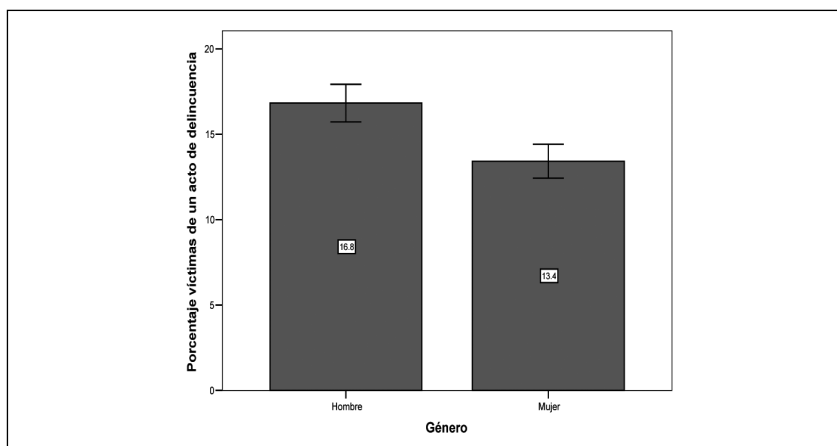
GRÁFICO 5
Víctimas de un acto de delincuencia según grupo etario de las víctimas,
Centroamérica 2008



Cases weighted by Weight for equal size per country

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

GRÁFICO 6
Víctimas de un acto de delincuencia según sexo de las víctimas,
Centroamérica 2008

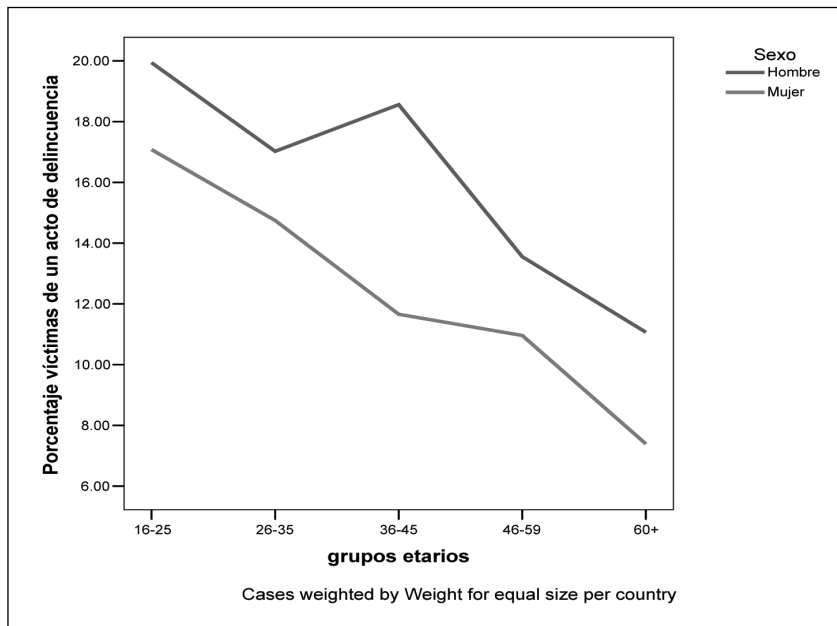


Cases weighted by Weight for equal size per country

Error bars: 95.00% CI

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

GRÁFICO 7
Víctimas de un acto de delincuencia según grupo etario y sexo,
Centroamérica 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

En el Gráfico 7 se presenta la tasa de victimización por crimen, de acuerdo con el grupo etario y el sexo, en donde se puede observar que para todos los grupos etarios el porcentaje de victimización es menor para las mujeres en comparación con los hombres.

En el Cuadro 4 se presenta de manera resumida la información sobre las variables que han resultado estadísticamente significativas. A nivel del modelo de regresión, cuatro son las variables estadísticamente significativas para la región: tamaño del municipio de residencia, educación, edad y sexo. Por lo que tienden a ser víctimas de la delincuencia con mayor frecuencia los que viven en las ciudades con mayores concentraciones urbanas, los hombres, los jóvenes, y los que cuentan con mayores niveles de escolaridad. A nivel de las variables específicas, solamente el tamaño del municipio de residencia resultó estadísticamente significativa en todos los países y para la región; le sigue edad en tres países y la región; luego educación y sexo en dos países y para la región; y por último la posesión de bienes materiales solo en dos países y no lo es para la región.

CUADRO 4
Resumen de los predictores de la victimización por crimen
en Centroamérica, 2008

Variable	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Región centroamericana
Tamaño del municipio de residencia	–	–	–	–	–	–	–
Educación			+		+		+
Edad	–	–		–			–
Posesión de bienes materiales	+			+			
Sexo		–			–		–

NOTAS: Los espacios en blanco responden a que la variable no resulta estadísticamente significativa.

No se reporta el signo de la constante.

CUADRO 5
Porcentaje del uso de la violencia en casos de delito en Centroamérica, 2008

País	Promedio	N	Desviación estándar
Guatemala	46,36	255	49,97
El Salvador	48,98	285	50,08
Honduras	45,41	204	49,91
Nicaragua	54,33	247	49,91
Costa Rica	41,77	237	49,42
Panamá	37,50	125	48,61
Total	46,60	1.353	49,90

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

El nivel de violencia asociado al acto delincencial es explorado en una pregunta sólo para quienes fueron víctimas de un delito (Cuadro 5): “¿El delincuente o los delincuentes usaron violencia en contra de usted? (1) Sí (2) No (9) Inaplicable”. Para simplificar el análisis, las respuestas se transformaron en un formato de escala 0-100. En el siguiente cuadro se puede apreciar que los encuestados reportan un importante nivel de violencia asociado a los actos criminales, con un promedio regional del 46,60; Nicaragua (54,3) y El Salvador (49) están por encima del mismo; Guatemala (46,4) y Honduras (45,4), cerca del promedio; y Costa Rica (41,8) y Panamá (37,5), abajo del mismo.

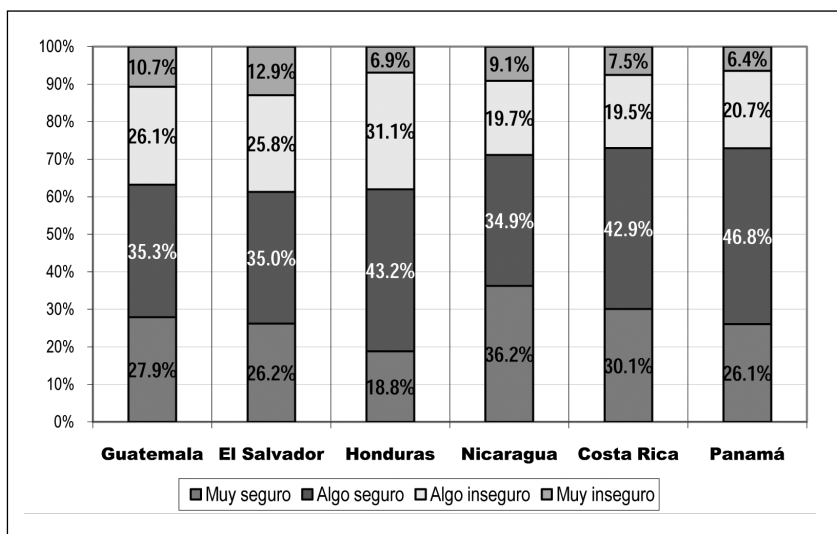
3. Percepciones de inseguridad

Otra dimensión de la problemática del crimen e inseguridad que se explora en la encuesta de LAPOP es precisamente las percepciones de inseguridad personal (el miedo al crimen). Este aspecto es importante, porque la delincuencia y la violencia tienden a generar una percepción de inseguridad en la ciudadanía. No necesariamente la medición objetiva y la percepción subjetiva coinciden, porque en la formación de esta percepción también intervienen otros factores como la exposición a las noticias en los medios de comunicación o el lugar de residencia. En la encuesta de LAPOP se incluyó la siguiente pregunta: “Hablando del lugar o barrio/colonia donde usted vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿se siente usted muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro? (1) Muy seguro (2) Algo seguro (3) Algo inseguro (4) Muy inseguro (8) NS/NR”.

En el Gráfico 8 se puede observar la variedad de respuestas de los encuestados en cada uno de los países centroamericanos, reflejando que al interior de un mismo país hay distintas percepciones. Al analizar cada una de las opciones de respuesta, en la valoración de muy seguro se tiene arriba del promedio a Nicaragua (36,2%), Costa Rica (30,1%) y Guatemala (27,9%); en la de algo seguro arriba del promedio están Panamá (46,8%), Honduras (43,2%) y Costa Rica (42,9%); en algo inseguro arriba del promedio están Honduras (31,1%), Guatemala (26,1%) y El Salvador (25,8%); y en muy inseguro arriba del promedio están El Salvador (12,9%), Guatemala (10,7%) y Nicaragua (9,1%).

Para simplificar el análisis de las diversas respuestas de los centroamericanos a esta pregunta, se han recodificado las opciones de respuesta en un formato 0-100, y los resultados se presentan en el Gráfico 9. Debido a que hay una valoración negativa, se cambió el sentido de las respuestas, de manera que 100 representa la percepción de inseguridad y 0 de mayor segu-

GRÁFICO 8
Percepción de seguridad en Centroamérica, 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

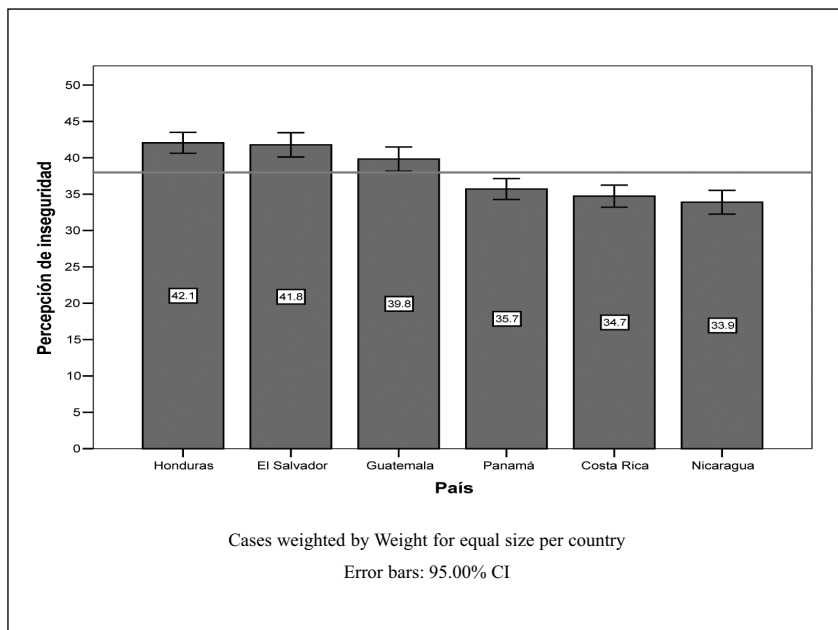
ridad.⁹ El promedio regional en la escala de inseguridad es 38, y arriba de este promedio, con las percepciones más altas de inseguridad se encuentran Honduras (42,1), El Salvador (41,8) y Guatemala (39,8), mientras que abajo del promedio están Panamá (35,7), Costa Rica (34,7) y Nicaragua (33,9).

Es importante señalar que no hay una correspondencia directa ni mecánica entre las dos percepciones exploradas en esta encuesta: la “objetiva” (la victimización) y la “subjetiva” (percepción de inseguridad). Así, por ejemplo, mientras el promedio de victimización para la región centroamericana en una escala 0-100 es de 15,10, la escala de la percepción de inseguridad exhibe un promedio de 37,98, es decir, más del doble que la primera. Y esta diferencia es común para todos los países. Esta diferencia es mayor para los casos de Panamá (8,38 vs. 35,70) y Honduras (13,69 vs. 42,05).

En el Cuadro 6 se presenta el resultado de la exploración de la correlación entre ambas variables para los países centroamericanos. En todos los casos la correlación es positiva pero baja, y es estadísticamente significativa.

⁹ La escala de inseguridad se recodificó de la siguiente manera: 0 muy seguro, 33 algo seguro, 67 algo inseguro y 100 muy inseguro.

GRÁFICO 9
Percepción de inseguridad en Centroamérica, 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

Esta divergencia entre las dos percepciones se puede deber a múltiples razones que no se abordan en este ensayo. Una hipótesis que se puede formular es la existencia de un umbral de tolerancia diferenciado para cada país con respecto a las actividades criminales, y que por lo tanto en un contexto de menos violencia/criminalidad, debido a la poca tolerancia, los pocos casos ocurridos pueden generar una alta percepción de inseguridad. Esta línea de argumentación sugiere la importancia de introducir en el análisis factores propios de cada país con respecto a las actitudes hacia la violencia y hacia la delincuencia.¹⁰ En todo caso, éste es un tema que debería ser abordado en futuros estudios.

¹⁰ Al respecto, es interesante el estudio de Kessler 2009.

CUADRO 6
Correlación entre la percepción “objetiva” (víctima de un acto de delincuencia)
y “subjetiva” (percepción de inseguridad) de la inseguridad por país,
Centroamérica 2008

País		
Guatemala	Pearson correlation Sig (2-tailed) N	.167** .000 1431
El Salvador	Pearson correlation Sig (2-tailed) N	.157** .000 1492
Honduras	Pearson correlation Sig (2-tailed) N	.083** .001 1474
Nicaragua	Pearson correlation Sig (2-tailed) N	.194** .000 1486
Costa Rica	Pearson correlation Sig (2-tailed) N	.169** .000 1465
Panamá	Pearson correlation Sig (2-tailed) N	.173** .000 1475

(**) La correlación es estadísticamente significativa al nivel de .01 (dos colas).

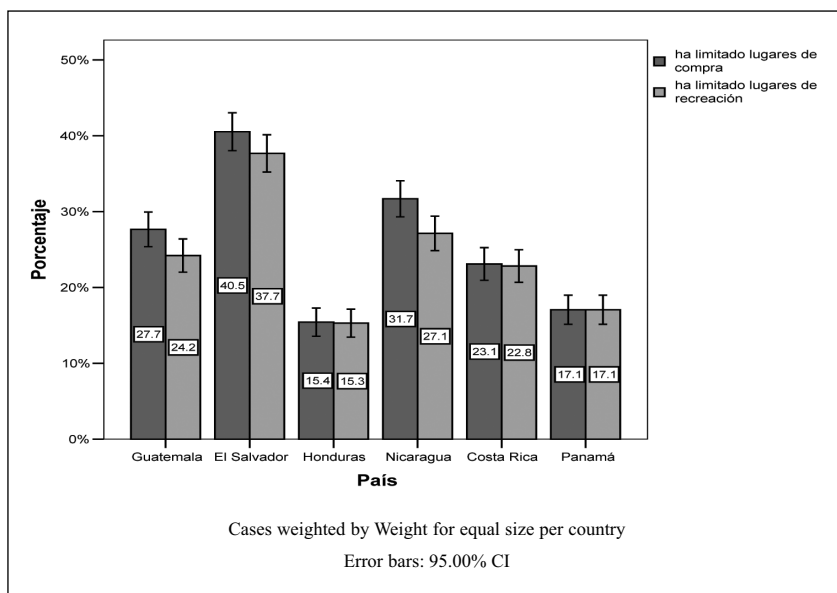
FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

4. El impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos

Con los datos de la encuesta de LAPOP es posible explorar el impacto que la criminalidad y la percepción de inseguridad están teniendo sobre la vida cotidiana de la ciudadanía. Primero me quiero referir a dos preguntas formuladas a las personas encuestadas: “Por temor a ser víctima de la delincuencia, en los últimos doce meses usted... ¿Ha limitado los lugares donde va de compras? ¿Ha limitado los lugares de recreación? (1) Sí (0) No (8) NS/NR”.

En el Gráfico 10 se presentan los resultados para ambas preguntas. En promedio, para la región centroamericana, el 24% ha limitado los lugares de

GRÁFICO 10
Cambios de comportamiento debido a la delincuencia I, Centroamérica 2008

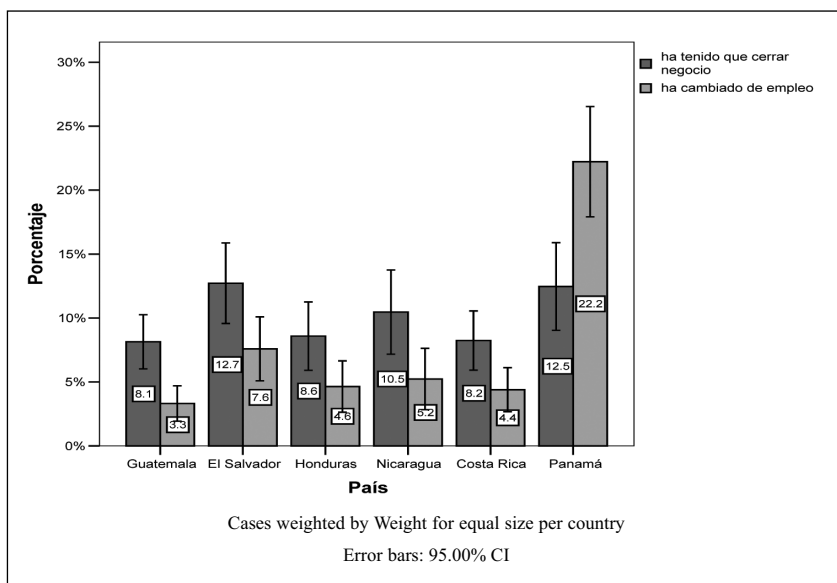


FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

recreación y el 26% ha limitado los lugares donde va de compras. Éste es un dato revelador, ya que implicaría que en el último año al momento de la encuesta, uno de cada cuatro centroamericanos ha limitado el lugar donde va de compras y además los lugares de recreación por temor a ser víctima de la delincuencia. En tres países los datos son muy similares para cada una de las preguntas (Honduras, Costa Rica y Panamá), en dos hay diferencias pero las mismas no son estadísticamente significativas (El Salvador y Guatemala), y solamente en el caso de Nicaragua las diferencias entre las dos preguntas son estadísticamente significativas, siendo mayor la limitación para asistir a los lugares de compra.

Además, para aquellos que tienen o han tenido un negocio en los últimos 12 meses se preguntó: “¿Ha cerrado su negocio a causa de la delincuencia?”, y para aquellos que trabajan, se preguntó: “¿Ha cambiado de trabajo o de empleo por temor a la delincuencia?”. Debe tomarse en cuenta que el número de personas a las que se le ha hecho esta pregunta es menor: 6.093 que trabajan y 3.087 que tienen o han tenido un negocio. A continuación se presentan los promedios para cada una de ellas.

GRÁFICO 11
Cambios de comportamiento debido a la delincuencia II, Centroamérica 2008

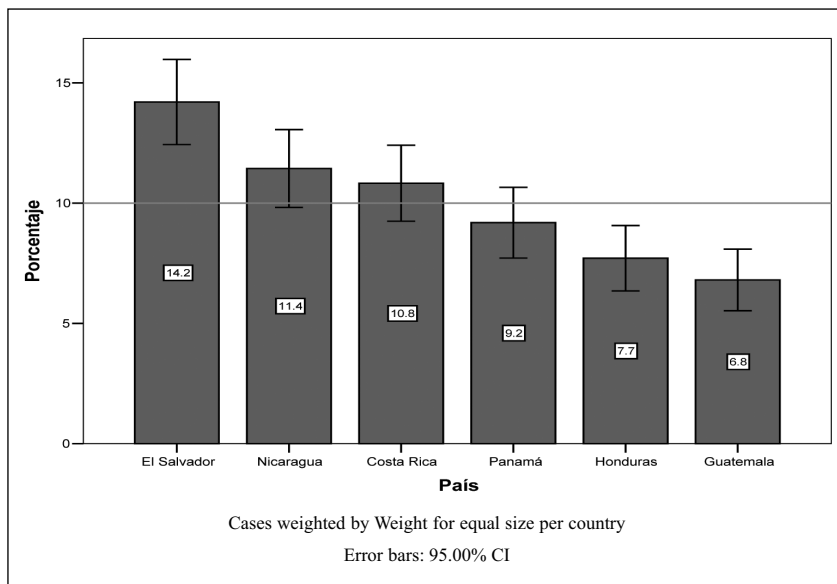


FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

En el Gráfico 11 se presentan los resultados para ambas preguntas. En promedio, para la región centroamericana, el 9,6% ha cerrado su negocio y el 6,6% ha cambiado de trabajo o empleo a causa de la delincuencia. Es revelador que de aquellos que tenían un negocio al momento de la entrevista, uno de cada diez lo haya cerrado debido a la delincuencia. En cinco países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) es mayor el porcentaje de personas que han tenido que cerrar un negocio, en comparación con quien ha tenido que cambiar de empleo, y es lo contrario sólo en el caso de Panamá.

La otra dimensión que se explora en la encuesta de LAPOP es la valoración sobre la necesidad de cambiar de barrio o de colonia: “¿Ha sentido la necesidad de cambiar de barrio o de colonia por temor a la delincuencia? [en zona rural utilizar “caserío” o “comunidad”].” En este caso, en promedio para la región centroamericana, el 10% de los encuestados ha sentido la necesidad de cambiar de barrio o colonia, lo cual no implica que lo haya hecho, pero sí que al menos lo haya pensado. Arriba del promedio regional está El Salvador (14,2%), mientras que cerca del promedio están Nicaragua (11,4%), Costa Rica (10,8%) y Panamá (9,2%), y abajo del promedio están Honduras (7,7%) y Guatemala (6,8%).

GRÁFICO 12
Cambios de comportamiento debido a la delincuencia III, Centroamérica 2008

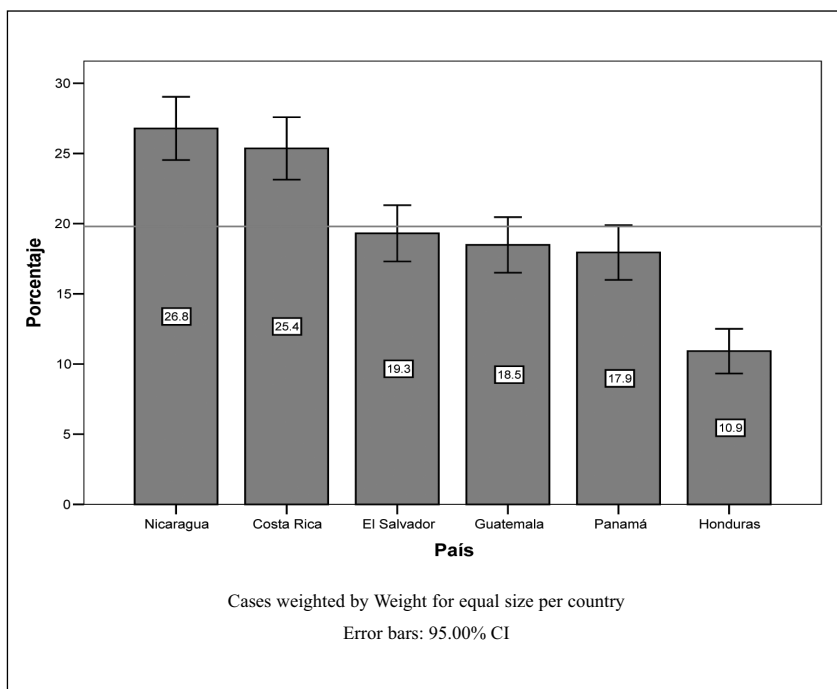


FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

Pero, además, se preguntó (Gráfico 13): “¿En los últimos doce meses, ha tomado usted en su vivienda alguna medida de seguridad para protegerse de la delincuencia? (1) Sí, (2) No, (8) NS/NR”. En promedio para la región centroamericana, el 19,8% ha tomado alguna medida de seguridad en su vivienda. Es revelador de la problemática que uno de cada cinco centroamericanos haya tomado medidas para reforzar la seguridad en su vivienda. Arriba del promedio regional están Nicaragua (26,8%) y Costa Rica (25,4%); mientras que cerca del promedio están El Salvador (19,3%), Guatemala (18,5%) y Panamá (17,9%); y abajo del promedio se encuentra Honduras (10,9%).

Y a las personas entrevistadas que afirmaron haber tomado medidas de seguridad en sus viviendas, se les preguntó a continuación: “¿Qué medida de seguridad ha tomado usted en su vivienda para protegerse de la delincuencia?”. A continuación se reporta solamente la primera opción de respuesta que dieron las personas entrevistadas. La opción con más menciones es la construcción de muros, rejas o paredes exteriores adicionales (35,3%), seguido por la colocación de candados o chapas a las puertas de la casa (21,9%), en tercer lugar la colocación de alambre de púas, “razor”, malla electrificada o vidrio

GRÁFICO 13
Cambios de comportamiento debido a la delincuencia IV, Centroamérica 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

roto (14,9%), y en cuarto lugar se menciona que ha adquirido o comprado un arma (5,1%). Este último dato es relevante: una de cada veinte personas ha comprado o adquirido un arma.

Arriba del promedio regional en materia de la construcción de muros, rejas o paredes exteriores adicionales (35,3%), están Panamá (64,7%), Costa Rica (43,7%) y Honduras (42,9%); arriba del promedio regional en materia de la colocación de candados o chapas a las puertas de la casa (21,9%), están Nicaragua (29,3%), Guatemala (25,5%) y El Salvador (22,5%); en tanto que arriba del promedio regional en términos de la colocación de alambre de púas, “razor”, malla electrificada o vidrio roto (14,9%), están Honduras (22,4%), El Salvador (19,3%), Costa Rica (15,1%) y Nicaragua (15%); y por último, arriba del promedio regional de haber adquirido o comprado un arma (5,1%), están El Salvador (6,7%), Guatemala (6,2%) y Honduras (5,6%).

CUADRO 7
Medidas de seguridad tomadas en la vivienda para protegerse de la delincuencia, Centroamérica 2008

¿Qué medida de seguridad ha tomado usted en su vivienda para protegerse de la delincuencia?	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Región centroamericana
Ha construido muros, rejas o paredes exteriores adicionales en su casa	26,3% (68)	20,7% (59)	42,9% (69)	21,3% (85)	43,7% (159)	64,7% (172)	35,3% (612)
Ha puesto alambre de púas, “razor”, malla electrificada o vidrio roto alrededor de su casa	8,9% (23)	19,3% (55)	22,4% (36)	15,0% (60)	15,1% (55)	11,3% (30)	14,9% (259)
Ha instalado alarmas en su casa	7,7% (20)	4,6% (13)	3,7% (6)	2,5% (10)	6,9% (25)	3,0% (8)	4,7% (82)
Le ha puesto más candados o chapas a las puertas de su casa	25,5% (66)	22,5% (64)	21,1% (34)	29,3% (117)	18,4% (67)	12,0% (32)	21,9% (380)
Ha adquirido o ha comprado un arma	6,2% (16)	6,7% (19)	5,6% (9)	4,8% (19)	4,9% (18)	2,6% (7)	5,1% (88)
Ha contratado un servicio de seguridad privada o a un vigilante privado	2,7% (7)	5,3% (15)	1,2% (2)	4,8% (19)	3,8% (14)	0% (0)	3,3% (57)
Otras medidas	22,8% (59)	21,1% (60)	3,1% (5)	22,3% (89)	7,1% (26)	6,4% (17)	14,8% (256)
Total	100,0% (259)	100,0% (285)	100,0% (161)	100,0% (399)	100,0% (364)	100,0% (266)	100,0% (1734)

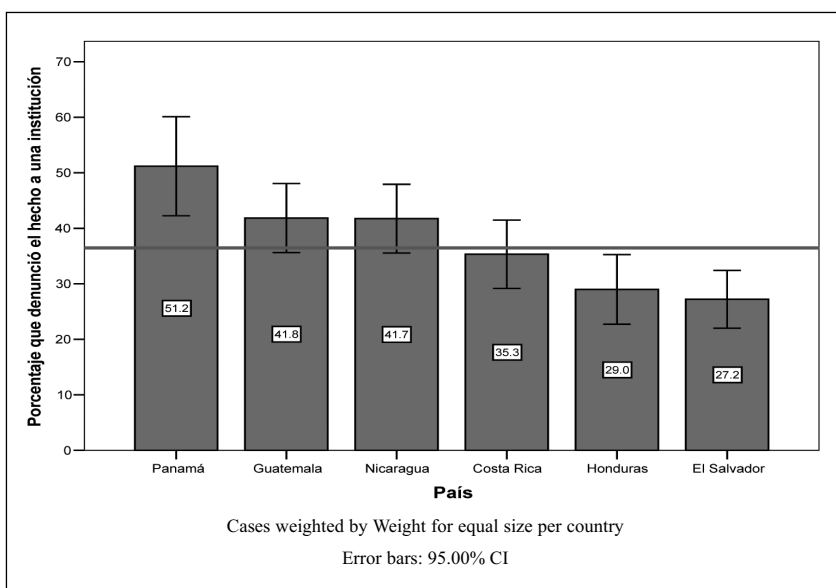
NOTA: entre paréntesis se coloca el valor del N.
FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

5. Determinantes de la confianza institucional y de la confianza interpersonal

Un dato que ha sido identificado en estudios anteriores es una baja confianza institucional de la ciudadanía en las instituciones de seguridad, y que se refleja en una baja tasa de denuncia de los actos delictivos. En la encuesta de LAPOP se preguntó: “¿Denunció el hecho a alguna institución? (1) Sí (2) No (8) NS/NR (9) Inaplicable (no víctima)”. En el siguiente gráfico se puede observar que en la región centroamericana se reporta una baja tasa de denuncia. Por encima del promedio regional (36,47) se encuentran Panamá (51,2), Guatemala (41,8) y Nicaragua (41,7), y debajo del promedio Costa Rica (35,3), Honduras (29) y El Salvador (27,2). El caso de El Salvador resulta paradójico, pues tiene la tasa más alta de victimización (19%) que coexiste con la tasa más baja de denuncia (27,2%).

GRÁFICO 14

Porcentaje que denunció el hecho delictivo a una institución, Centroamérica 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

Para entender esta temática es preciso identificar las razones por las cuales la ciudadanía no denuncia los actos delictivos. En la encuesta se preguntó:

CUADRO 8
Motivo por el cual no denunció el hecho delictivo, Centroamérica 2008

País	No sirve de nada	Es peligroso y por miedo a represalias	No tenía pruebas	No fue grave	No sabe adónde denunciar	Otro	Total
Guatemala	44,6% (7)	22,3% (62)	12,9% (31)	5,0% (18)	2,2% (3)	12,9% (18)	100% (139)
El Salvador	42,0% (86)	24,4% (50)	9,8% (20)	16,6% (34)	0% (0)	7,3% (15)	100% (205)
Honduras	52,7% (77)	19,9% (29)	8,9% (13)	13,7% (20)	2,7% (4)	2,1% (3)	100% (146)
Nicaragua	45,5% (65)	16,1% (23)	16,8% (24)	12,6% (18)	1,4% (2)	7,7% (11)	100% (143)
Costa Rica	62,0% (93)	4,7% (7)	17,3% (26)	10,0% (15)	2,0% (3)	4,0% (6)	100% (150)
Panamá	31,1% (19)	11,5% (7)	26,2% (16)	27,9% (17)	3,3% (2)	0% (0)	100% (61)
Total	47,6% (402)	17,4% (147)	13,9% (117)	13,2% (111)	1,7% (14)	6,3% (53)	100% (844)

NOTA: entre paréntesis se coloca el valor del N.
FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

“¿Por qué no denunció el hecho?”. En la región centroamericana, la principal razón es la opinión de que no sirve para nada (47,6%), lo cual es un indicador claro de la falta de confianza institucional. Arriba de este promedio están Costa Rica (62%), Honduras (52,7%), y abajo del mismo Nicaragua (45,5%), Guatemala (44,6%), El Salvador (42%) y Panamá (31,1%).

La segunda razón para la región es por ser peligroso y por temor a represalias (17,4%), lo cual en cierto sentido se relaciona con los bajos niveles de confianza institucional. El 13,9% menciona que no tenía pruebas, el 13,2% que no fue grave, y el 1,7% que no sabe dónde denunciar. Este último dato es importante, porque indicaría que la falta de denuncia no se relaciona principalmente con no saber dónde presentar la denuncia, sino que los datos más bien indicarían un problema de bajos niveles de confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia (Cuadro 8).

Investigaciones previas en el campo de la opinión pública han mostrado la existencia de un fuerte vínculo entre algunas actitudes ciudadanas y la democracia (Inglehart 1997; Norris 1999; Inglehart/Welzel 2005; Córdova/Seligson 2010; Booth/Seligson 2009). Por lo tanto, resulta importante explorar las consecuencias que la problemática de la violencia e inseguridad están teniendo en la erosión de la confianza institucional y en la confianza interpersonal de los centroamericanos, así como en sus valores y actitudes hacia la democracia. Tras varios años de convivencia de los centroamericanos con el fenómeno de la violencia y la delincuencia, se podría esperar que esta problemática este afectando las jóvenes democracias.

Midiendo el apoyo ciudadano a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza institucional

En este ensayo se centra la atención en seis variables dependientes que podrían verse afectadas por la problemática de la delincuencia e inseguridad, y que, al mismo tiempo, son aspectos identificados como relevantes para el funcionamiento de los sistemas democráticos: apoyo para la democracia, apoyo al sistema, satisfacción con el funcionamiento de la democracia, confianza interpersonal, confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia, y legitimidad política de las instituciones.¹¹

La primera es el **apoyo a la democracia** como régimen político. En la literatura se ha planteado la importancia de los valores y el compromiso

¹¹ Hemos utilizado como marco de referencia los trabajos de Norris (1999), Norris (2006), y Booth/Seligson (2009).

democrático de los ciudadanos, de manera que crean que la democracia es la mejor forma de gobierno. Se utilizó la pregunta: “Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?”.¹² En el Anexo 1 se presentan los niveles de apoyo a la democracia para cada país centroamericano.

La segunda es el **apoyo al sistema**. En estudios anteriores del Barómetro de las Américas, para analizar la creencia en la legitimidad del sistema político se ha utilizado una escala denominada “Apoyo Político/Alienación”, la cual busca medir el nivel de apoyo que los ciudadanos otorgan a su sistema de gobierno, sin enfocarse en el gobierno de turno. En la literatura de la ciencia política se le llama a este fenómeno “apoyo difuso” o “apoyo al sistema”.^{13/14} En el Anexo 2 se presenta el gráfico con los niveles de apoyo al sistema para cada país centroamericano.

La tercera es la **satisfacción con el funcionamiento de la democracia**. En la encuesta se preguntó: “En general, ¿usted diría que está muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en El Salvador? (1) Muy satisfecho, (2) Satisfecho, (3) Insatisfecho, (4) Muy insatisfecho, (8) No sabe/no responde”.¹⁵ En el Anexo 3 se presenta el gráfico para la satisfacción con el funcionamiento de la democracia para cada país centroamericano.

¹² Esta pregunta tiene un formato de respuesta de siete puntos, que va de 1 “muy en desacuerdo” a 7 “muy de acuerdo”. Para facilitar el análisis se ha recodificado esta pregunta en un formato de una escala 0-100, en donde 0 representa muy en desacuerdo y 100 muy de acuerdo. Esto a su vez permitiría la comparación con otras variables dependientes utilizadas en este estudio.

¹³ Las preguntas utilizadas para crear esta escala son cinco. De manera indicativa se presentan las utilizadas para el caso de El Salvador:

¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de El Salvador garantizan un juicio justo?

¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de El Salvador?

¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político salvadoreño?

¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político salvadoreño?

¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político salvadoreño?

¹⁴ El puntaje de codificación de estas variables se basó en una escala de 1-7 puntos (que van desde “nada” hasta “mucho”), pero para facilitar la comprensión de éstos han sido convertidos a una escala en un rango de 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho. El Alfa de Cronbach de esta escala es de 0.793. Un valor arriba de .7 indica una buena consistencia interna.

¹⁵ Para facilitar la comprensión de los resultados se recodificó en un formato 0-100, en donde 0 representa muy insatisfecho y 100 muy satisfecho.

La cuarta es la **confianza interpersonal**. En la literatura sobre el capital social se ha señalado que así como es importante la confianza en las instituciones, también es importante la confianza en las personas que nos rodean (Putnam 1993). Investigaciones previas “han encontrado que es más probable que persista la democracia y que ésta funcione mejor en lugares que tienen altos niveles de capital social definido en términos de la confianza interpersonal” (Córdova/Seligson 2010). Se preguntó: “Ahora, hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es (1) Muy confiable, (2) Algo confiable, (3) Poco confiable, (4) Nada confiable, (8) NS/NR”.¹⁶

En la literatura se ha señalado que los ciudadanos no sólo deben de creer que la democracia es la mejor forma de gobierno, sino que además es necesario que crean en la legitimidad de sus instituciones. La quinta es la **confianza en las instituciones del sector justicia y seguridad**. La cual ha sido conformada a partir de tres preguntas sobre la confianza en las instituciones: el sistema de justicia, la policía y la Corte Suprema de Justicia.¹⁷

La sexta es la valoración sobre la **legitimidad política de las instituciones**. A partir de la confianza en tres instituciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia representativa: Gobierno Nacional, Asamblea Legislativa y partidos políticos.¹⁸

Las variables independientes

Con el propósito de identificar qué factores son relevantes para explicar el apoyo ciudadano a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza institucional, se han identificado tres grupos de variables independientes: las de seguridad, las socioeconómicas y las políticas. Las vinculadas con la problemática de la seguridad que se han incluido en el modelo estadístico son cuatro: la victimización por crimen y la percepción de inseguridad¹⁹ que hemos analizado anteriormente, y además la percepción acerca de la presencia de pandillas en la colonia o barrio²⁰ y la confianza en la poli-

¹⁶ Para facilitar la comprensión de los resultados se creó una escala en un formato 0-100, en donde 0 representa nada confiable y 100 muy confiable.

¹⁷ Estas preguntas se integraron en un formato 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho. El Alfa de Cronbach de esta escala es de 0.752.

¹⁸ Estas preguntas se integraron en un formato 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho. El Alfa de Cronbach de esta escala es de 0.748.

¹⁹ Tiene un formato 0-100, en donde 0 representa muy seguro y 100 muy inseguro.

²⁰ “¿Hasta qué punto diría que su barrio está afectado por las maras? ¿Diría mucho, algo, poco o nada?”. Se recodificó en un formato 0-100, donde 0 representa nada y 100 mucho.

cía^{21/22}. Hay que recordar que nuestro propósito es explorar el impacto que los factores de criminalidad e inseguridad están teniendo sobre las jóvenes democracias centroamericanas. Sin embargo, para poder controlar el efecto que puedan tener otras variables, se han incluido las socioeconómicas y las políticas que, de acuerdo a la literatura, contribuyen a explicar el apoyo a los sistemas democráticos.

En cuanto a las socioeconómicas, en el modelo estadístico se han incluido cinco: el tamaño del municipio de residencia, el sexo, la edad, el nivel educativo y la posesión de bienes materiales. Además, en el modelo estadístico se han incluido cinco variables políticas, que capturan aspectos del entorno: la percepción de la situación económica del país,²³ la percepción de su situación económica personal,²⁴ la evaluación del trabajo del presidente,²⁵ el interés en la política²⁶ y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia.²⁷

²¹ “¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía?”. Las opciones de respuesta se recodificaron en un formato 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho.

²² Por la importancia que tiene la confianza ciudadana en la policía es analizada en una parte de este trabajo como variable independiente, pero además, en uno de los modelos, forma parte de una escala utilizada como variable dependiente. Por la relevancia del desempeño de la policía en las percepciones de la ciudadanía sobre la problemática de la seguridad, esto debería de ser profundizado en futuros estudios. Sólo para ilustrar el punto: de acuerdo con los datos de la encuesta de LAPOP, en promedio para la región centroamericana, el 43% opina que la policía protege a la población, el 41,7% que la policía esta involucrada en la delincuencia, y el 15,3% que no protege pero que tampoco esta involucrada con la delincuencia o protege e involucrada.

²³ “Ahora, hablando de la economía... ¿Cómo calificaría la situación económica del país? ¿Diría usted que es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala?”. Para facilitar la comprensión de los resultados se recodificó en un formato 0-100, en donde 0 representa muy mala y 100 muy buena.

²⁴ “¿Cómo calificaría en general su situación económica? ¿Diría usted que es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala?”. Para facilitar la comprensión de los resultados se recodificó en un formato 0-100, en donde 0 representa muy mala y 100 muy buena.

²⁵ “Y hablando en general del actual gobierno, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el Presidente Antonio Saca es...? (1) muy bueno, (2) bueno, (3) ni bueno ni malo (regular), (4) malo, (5) muy malo (pésimo), (8) NS/NR”. Para facilitar la comprensión de los resultados se recodificó en un formato 0-100, en donde 0 representa muy malo y 100 muy bueno.

²⁶ “¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?”. Para facilitar la comprensión de los resultados se recodificó en un formato 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho.

²⁷ “En general, ¿usted diría que está muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en El Salvador? (1) Muy satisfecho, (2) Satisfecho, (3) Insatisfecho, (4) Muy insatisfecho, (8) No sabe/no responde”. Para facilitar la comprensión de los resultados se recodificó en un formato 0-100, en donde 0 representa muy insatisfecho y 100 muy satisfecho.

El impacto de la delincuencia e inseguridad en el apoyo ciudadano a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza institucional

Con el propósito de identificar qué tan importante es cada uno de los factores de seguridad, socioeconómicos y políticos identificados (variables independientes) para explicar el apoyo ciudadano a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza institucional (variables dependientes), se llevó a cabo un análisis estadístico multivariado para la región centroamericana en su conjunto, y para cada uno de los países, utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).

En el Cuadro 9 se presentan los resultados para la región centroamericana del análisis multivariado del impacto de los factores de seguridad, socioeconómicos y políticos sobre el apoyo ciudadano a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza institucional.²⁸

A continuación se comentan los principales hallazgos para los tres grupos de variables independientes (las de seguridad, las socioeconómicas y las políticas) con respecto a las seis variables dependientes relacionadas con el apoyo ciudadano a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza institucional.

En términos generales, las variables independientes identificadas (las de seguridad, las socioeconómicas y las políticas) son más robustas para explicar la legitimidad política de las instituciones (36% de la variación),²⁹ y el apoyo al sistema (30% de la variación), seguido por la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (20% de la variación), la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia (16%), la confianza interpersonal (15%), y el nivel más bajo es para el apoyo a la democracia (4%).

A un nivel más específico, lo que en este ensayo interesa destacar son los hallazgos relacionados con el impacto que las variables de seguridad están teniendo sobre el apoyo ciudadano a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza institucional. En el grupo de variables de seguridad, se puede apreciar que el sentido de la relación entre la percepción de inseguridad y las variables dependientes en el modelo es inversa para cinco variables, aunque solamente es estadísticamente significativa para cuatro de ellas. Es decir, la percepción de inseguridad reduce el apoyo a la democracia, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, disminuye la confianza interpersonal y la

²⁸ En total se estimaron 42 regresiones. Debido a este alto número de modelos ajustados para la región y para cada uno de los países para cada variable dependiente, se decidió presentar en este apartado únicamente los resultados para la región centroamericana.

²⁹ De la variable dependiente.

confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. La percepción de inseguridad tiene efectos negativos sobre el conjunto de las variables analizadas para la región. En el Gráfico 15 se ilustra esta relación entre la percepción de inseguridad y la confianza interpersonal a nivel bivariado para los países de la región centroamericana. Sin embargo, se puede debatir el sentido de la causalidad de esta última relación, ya que es posible argumentar que la percepción de inseguridad es la que determina la reducción en la confianza interpersonal, pero también se podría argumentar que la baja confianza interpersonal podría estar afectando la percepción de inseguridad.

La victimización por crimen no resultó tener mayores impactos. Solamente resultó estadísticamente significativa para dos de ellas: negativa para la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia, y de manera no esperada es positiva con respecto a la confianza interpersonal. En cuanto al primer hallazgo, proporciona soporte para la hipótesis de que las personas que han sido víctimas de la delincuencia exhiben menores niveles de confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. En el Gráfico 16 se ilustra esta relación entre la victimización por crimen y la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia a nivel bivariado para los países de la región centroamericana. En cuanto al segundo hallazgo, un análisis de los resultados bivariados para cada uno de los países proporciona evidencia de que hay diferentes direcciones y magnitudes en la relación entre la victimización por crimen y la confianza interpersonal. En el caso de Honduras, aumenta la confianza interpersonal para quienes han sido víctimas (pasando de un promedio de 50,8 para los que no a un 59,1 para los que sí). En el caso de Guatemala casi no hay diferencia entre cada uno de estos grupos, aunque disminuye un poco para lo que sí han sido víctimas (60,6 para los que no y 58,9 para los que sí). En los otros cuatro países, la confianza interpersonal disminuye para los que sí han sido víctimas de la delincuencia (El Salvador pasa de 66,3 a 58,8; Nicaragua, de 59,3 a 52; Costa Rica, de 69,1 a 63,2; y Panamá de 58,4 a 54,1).

El sentido de la relación entre la percepción acerca de la presencia de pandillas y las variables dependientes en el modelo es negativo para cuatro variables, aunque solamente es estadísticamente significativa para tres de ellas. Es decir, la percepción acerca de la presencia de pandillas reduce el apoyo a la democracia, disminuye la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. En el Gráfico 17 se ilustra esta relación entre la percepción acerca de la presencia de pandillas y la confianza interpersonal a nivel bivariado para los países de la región centroamericana.

Por último, el sentido de la relación entre la confianza en la policía y las variables dependientes en el modelo es positiva y estadísticamente significativa para las cinco variables. Los niveles de confianza en la policía tienen efectos positivos sobre el conjunto de las variables analizadas para la región. Es

CUADRO 9
Predictores del apoyo a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza institucional, Centroamérica 2008

Seguridad	Apoyo a la democracia		Apoyo al sistema	Satisfacción con el funcionamiento de la democracia	Confianza interpersonal	Confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia	Legitimidad política de las instituciones					
	Coeficientes en primera columna (1) y valores p en segunda columna											
Victimización por crimen (2)	0.017 (0.010)	0.080	0.007 (0.006)	0.238	0.004 (0.007)	0.576	0.034*** (0.009)	0.000	0.023** (0.007)	0.002	0.001 (0.007)	0.938
Percepción de inseguridad (3)	-0.040*** (0.012)	0.001	-0.012 (0.008)	0.115	-0.062*** (0.009)	0.000	-0.244*** (0.012)	0.000	-0.043*** (0.009)	0.000	0.010 (0.008)	0.227
Percepción acerca de la presencia de pandillas (4)	-0.065*** (0.011)	0.000	-0.005 (0.007)	0.492	0.001 (0.008)	0.885	-0.144*** (0.011)	0.000	-0.030*** (0.009)	0.000	0.009 (0.008)	0.247
Confianza en la policía (5)	0.096*** (0.012)	0.000	0.280*** (0.008)	0.000	0.099*** (0.009)	0.000	0.083*** (0.011)	NA		0.000	0.349*** (0.008)	0.000
Socio económicas												
Tamaño del municipio de residencia (6)	0.294 (0.245)	0.229	1.105*** (0.158)	0.000	0.688*** (0.184)	0.000	0.500* (0.239)	0.037	0.508** (0.186)	0.006	0.544** (0.165)	0.001
Sexo (7)	-0.321 (0.689)	0.641	0.209 (0.443)	0.637	0.128 (0.516)	0.804	-3.047*** (0.669)	0.000	0.713 (0.525)	0.174	0.195 (0.464)	0.674
Edad	0.113*** (0.024)	0.000	-0.005 (0.015)	0.731	0.039* (0.018)	0.030	0.162*** (0.023)	0.000	0.040* (0.018)	0.026	-0.013 (0.016)	0.419
Educación (8)	0.243** (0.094)	0.010	-0.249*** (0.060)	0.000	-0.328*** (0.071)	0.000	0.020 (0.092)	0.824	-0.162* (0.072)	0.024	-0.346*** (0.063)	0.000
Poseción de bienes materiales (9)	1.203*** (0.205)	0.000	1.063*** (0.132)	0.000	1.174*** (0.153)	0.000	0.787*** (0.199)	0.000	-0.349* (0.156)	0.025	0.193 (0.138)	0.162

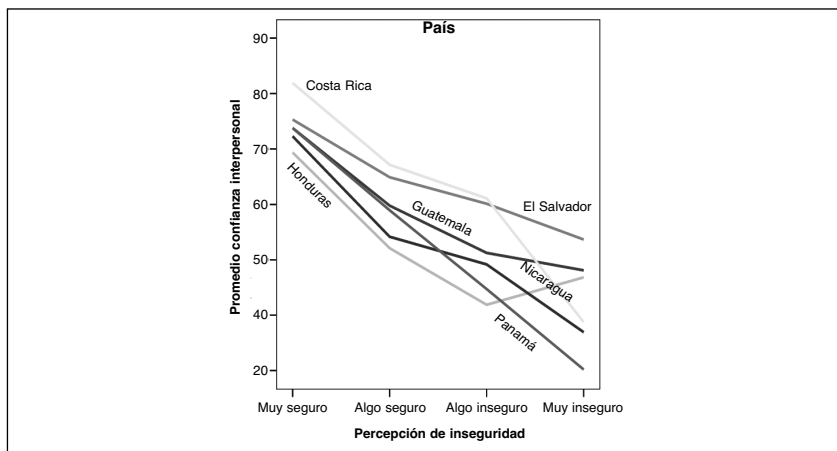
CUADRO 9 (Cont.)

	Apoyo a la democracia	Apoyo al sistema	Satisfacción con el funcionamiento de la democracia		Confianza interpersonal	Confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia	Legitimidad política de las instituciones
Políticas	Coeficientes en primera columna (1) y valores p en segunda columna						
Percepción de la situación económica del país (10)	-0,067*** (0,017)	0,021 (0,011)	0,059 (0,013)	0,127*** (0,013)	0,000 (0,017)	0,026* (0,013)	0,067*** (0,012)
Percepción de su situación económica personal (11)	-0,023 (0,019)	0,038** (0,012)	0,001 (0,014)	0,060*** (0,014)	0,000 (0,018)	0,027 (0,014)	0,005 (0,013)
Evaluación del trabajo del presidente (12)	-0,013 (0,016)	0,168*** (0,011)	0,000 (0,012)	0,300*** (0,012)	0,000 (0,016)	0,260*** (0,012)	0,208*** (0,011)
Interés en la política (13)	0,019 (0,011)	0,037*** (0,007)	0,000 (0,008)	-0,026** (0,008)	0,016 (0,011)	0,059*** (0,009)	0,088*** (0,008)
Satisfacción con el funcionamiento de la democracia (14)	0,118*** (0,015)	0,117*** (0,010)	0,000 (0,010)	NA	0,066*** (0,015)	0,167*** (0,011)	0,104*** (0,010)
Constante	53,835*** (2,458)	14,827*** (1,580)	0,000 (1,580)	21,239*** (1,822)	54,890*** (2,385)	20,843*** (1,849)	2,033 (1,652)
N	7,383	7,545	7,671	7,597	7,353	7,321	
R ²	0,046	0,302	0,201	0,158	0,170		0,367
R ² ajustado	0,045	0,301	0,200	0,156	0,169		0,366

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. Nota: N/A significa no aplica.

(1) Primero se reporta el B y entre paréntesis el error estándar. (2) Tiene un formato 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho. (3) Tiene un formato 0-100, en donde 0 representa muy inseguro y 100 muy seguro. (4) Tiene un formato 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho. (5) Tiene un formato 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho. (6) Los valores son: 1 capital nacional, 2 ciudad grande, 3 ciudad mediana, 4 ciudad pequeña y 5 área rural. (7) Los valores son: 1 hombre y 2 mujer. (8) Los valores van en un rango de 0 a 18. (9) Índice de riqueza familiar basado en la posesión de bienes materiales como televisor, refrigerador, teléfono, etc. Tiene un rango 0-9. (10) Los valores van en un rango 0-100, en donde 0 representa muy mala y 100 muy buena. (11) Los valores van en un rango 0-100, en donde 0 representa muy mala y 100 muy buena. (12) Los valores van en un rango 0-100, en donde 0 representa muy malo y 100 muy bueno. (13) Los valores van en un rango 0-100, en donde 0 representa muy insatisfecho y 100 muy satisfecho.

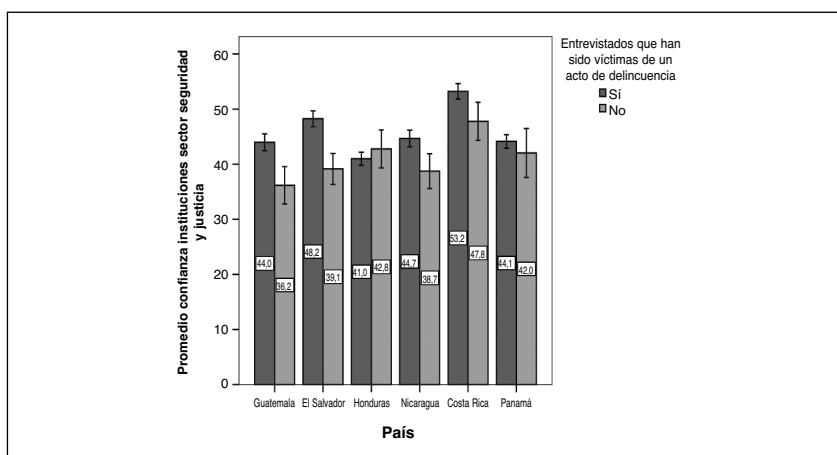
GRÁFICO 15
Promedio de confianza interpersonal según percepción de inseguridad,
Centroamérica 2008



Cases weighted by Weight for equal size per country

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

GRÁFICO 16
Promedio de confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia según
victimización por crimen, Centroamérica 2008

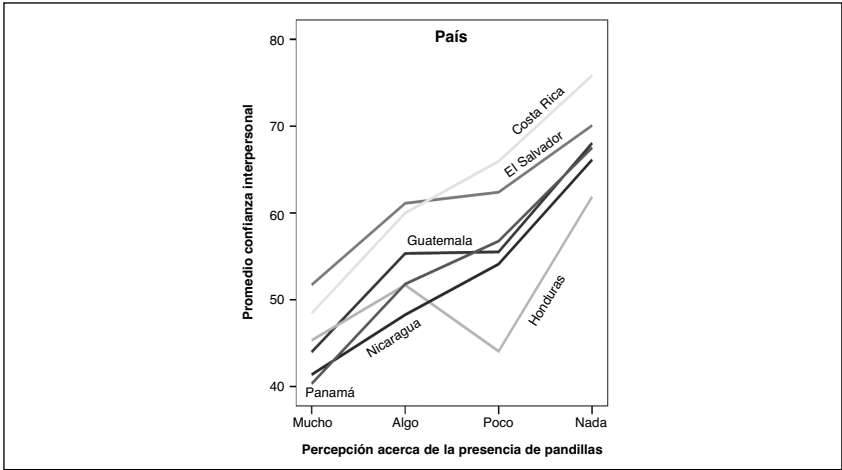


Cases weighted by Weight for equal size per country

Error bars: 95.00% CI

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

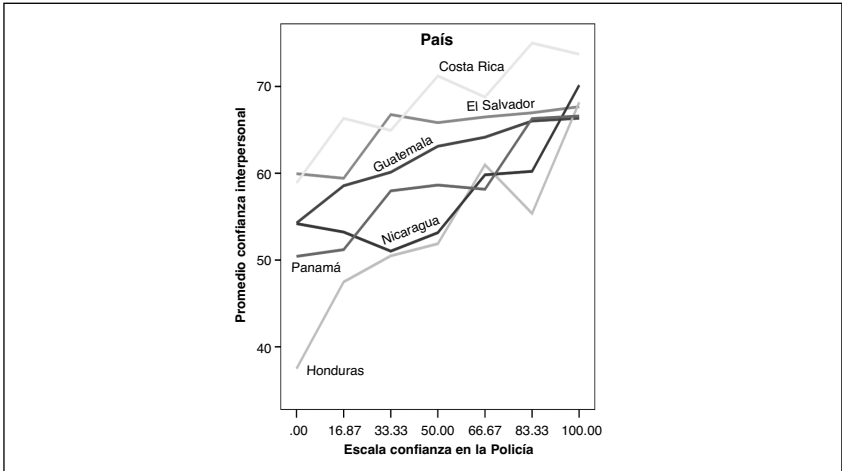
GRÁFICO 17
Promedio de confianza interpersonal según percepción acerca de la presencia de pandillas, Centroamérica 2008



Cases weighted by Weight for equal size per country

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

GRÁFICO 18
Promedio de confianza interpersonal según confianza en la policía, Centroamérica 2008



Cases weighted by Weight for equal size per country

FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

decir, altos niveles de confianza en la policía están asociados con que aumente el apoyo a la democracia, aumente el apoyo al sistema, aumente la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, se incremente la confianza interpersonal y la confianza en la legitimidad política de las instituciones. En el Gráfico 18 se ilustra esta relación entre la confianza en la policía y la confianza interpersonal a nivel bivariado para los países de la región centroamericana.

En el Cuadro 10 se presenta de manera resumida la información sobre las variables que han resultado estadísticamente significativas. Me voy a detener únicamente en las variables correspondientes a la temática de la seguridad. La percepción de inseguridad reduce el apoyo a la democracia, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. La victimización por crimen resultó negativa para la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia, y positiva con respecto a la confianza interpersonal. La percepción acerca de la presencia de pandillas disminuye el apoyo a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. La confianza en la policía aumenta el apoyo a la democracia, el apoyo al sistema, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, la confianza interpersonal y la confianza en la legitimidad política de las instituciones.

La variable dependiente sobre la que tienen mayores efectos es la confianza interpersonal, siendo que ésta se reduce para los que tienen una mayor percepción de inseguridad y entre los que perciben una mayor presencia de pandillas; y la misma aumenta entre quienes tienen mayor confianza en la policía y para la victimización por crimen. Con respecto a la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia, ésta disminuye entre quienes han sido víctimas del crimen, y entre aquellos que tienen una mayor percepción de inseguridad y entre los que perciben una mayor presencia de pandillas.

Por otra parte, el apoyo a la democracia se reduce para quienes tienen una mayor percepción de inseguridad y la percepción acerca de una mayor presencia de pandillas, y aumenta entre quienes tienen mayor confianza en la policía.

6. Determinantes del respeto por el estado de derecho

Otro aspecto relevante a explorar en el marco de la crisis de inseguridad que vive la región, es el compromiso de los centroamericanos con el respeto al estado de derecho. Ya la literatura ha indicado la importancia del estado de derecho para los sistemas políticos democráticos (Méndez O'Donnell y Pinheiro, 1999). En el caso de Centroamérica, en el marco de los procesos de democratización en la región se han señalado varias debilidades en el estado

CUADRO 10
Resumen de los predictores del apoyo a la democracia, la confianza personal y la confianza institucional, Centroamérica 2008

Variables	Apoyo a la democracia	Apoyo al sistema	Satisfacción con el funcionamiento de la democracia	Confianza interpersonal del sector seguridad y justicia	Legitimidad en las instituciones de las instituciones	Confianza política
Seguridad						
Victimización por crimen				+	—	
Percepción de inseguridad	—		—	—	—	
Percepción acerca presencia de pandillas	—			—	—	
Confianza en la policía	+	+	+	+	NA	+
Socio económicas						
Tamaño del municipio de residencia		+	+	+	+	+
Sexo				—		
Edad	+		+	+	+	
Educación	+	—	—		—	—
Posesión de bienes materiales	+	+	+	+	—	

CUADRO 10 (Cont.)

Variables	Apoyo a la democracia	Apoyo al sistema	Satisfacción con el funcionamiento de la democracia	Confianza interpersonal del sector seguridad y justicia	Legitimidad en las instituciones de las instituciones	Confianza política
Políticas						
Percepción de la situación económica del país	—		+	—	+	+
Percepción de su situación económica personal		+	+	+		
Evaluación del trabajo del presidente		+	+	+	+	+
Interés en la política		+	—		+	+
Satisfacción con el funcionamiento de la democracia	+	+	NA	+	+	+

NOTAS: Los espacios en blanco responden a que la variable no resulta estadísticamente significativa.
No se reporta el signo de la constante.

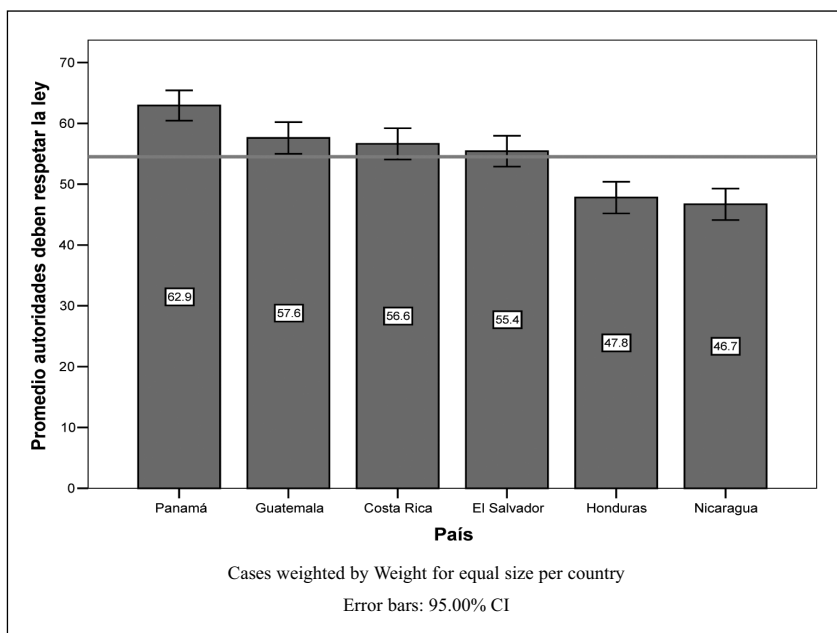
de derecho (Ungar 2002; Córdova *et al.* 2007). Existen diversas maneras de analizar el apoyo al estado de derecho: niveles de apoyo al sistema de justicia como un todo, o hacia algunas de sus instituciones fundamentales como los tribunales y la policía. Otra manera es analizando el nivel de respeto que la gente siente por la ley (las normas jurídicas por un lado, y en el cumplimiento efectivo de la ley); así como el sometimiento de las autoridades al imperio de la ley.

Para los propósitos de este ensayo, independientemente de la manera como se defina el concepto del estado de derecho, en el marco del proceso de reforma judicial que se ha implementado en la región en las últimas décadas, éste ha coincidido con el incremento en el crimen (que ha afectado la seguridad de las personas y la propiedad que el estado de derecho debe de proteger), y ha contribuido a la insatisfacción con los resultados de las reformas que buscan proteger los derechos civiles y políticos y garantizar el debido proceso. Tan es así, que en los últimos años se ha planteado una tensión “entre la exigencia de mejorar la seguridad y la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos” (Córdova *et al.* 2007: 220). En la encuesta de LAPOP se preguntó: “Para poder capturar delincuentes, ¿cree usted que las autoridades siempre deben respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen de la ley? (1) deben respetar las leyes siempre (2) en ocasiones pueden actuar al margen (8) NS/NR”. Para simplificar el análisis se recodificó en un formato 0-100, en donde 0 significa que en ocasiones se puede actuar al margen de la ley y 100 que siempre se deben respetar las leyes. De manera que en la pregunta se explora la valoración acerca de si bajo el supuesto de enfrentar (y reducir) la delincuencia, los centroamericanos estarían dispuestos a sacrificar en alguna medida el cumplimiento de la ley. El valor más alto indicaría un compromiso con el respeto al estado de derecho.

En Centroamérica se observa un limitado compromiso ciudadano con el respeto al estado de derecho. Preocupados y agobiados por la violencia criminal, los ciudadanos están dispuestos a sacrificar algunos aspectos del estado de derecho con tal de que mejore la crisis de inseguridad. El promedio regional de compromiso con el estado de derecho es de 54,5 en una escala 0-100. Se pueden identificar tres grupos: el nivel más alto de respeto al estado de derecho en Panamá (62,9), seguido por un grupo cercano al promedio regional, Guatemala (57,6), Costa Rica (56,6) y El Salvador (55,4); y con el nivel más bajo: Honduras (47,8) y Nicaragua (46,7). Llama la atención que tras tantos esfuerzos para la construcción democrática en la región, todavía en 2008 haya un relativo bajo compromiso con el respeto al estado de derecho.

Una hipótesis a explorar es si la crisis de inseguridad está contribuyendo a erosionar el estado de derecho (Cuadro 11). Para lo cual, dado que nuestra variable dependiente es dicotómica, si se deben respetar o no siempre las leyes,

GRÁFICO 19
Promedio de apoyo al respeto del estado de derecho, Centroamérica 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

se ha estimado un modelo de regresión logística, utilizando las cuatro variables de la dimensión de seguridad y las socio económicas utilizadas en el apartado anterior.

A continuación se comentan los principales hallazgos relacionados con el impacto que las variables de seguridad están teniendo sobre el apoyo ciudadano al estado de derecho. En el Cuadro 12 se presenta de manera resumida la información sobre las variables que han resultado estadísticamente significativas.

Se puede apreciar que el sentido de la relación entre la percepción de inseguridad y la variable dependiente en el modelo es negativo para todos los países y para la región, aunque solamente es estadísticamente significativa para tres países (Guatemala, Honduras y Panamá) y para la región. Es decir, la percepción de inseguridad reduce el apoyo ciudadano al estado de derecho.

La relación entre la victimización por crimen y el apoyo al estado de derecho es negativa para cuatro países y para la región, aunque solamente es estadísticamente significativa para un país (El Salvador) y para la región. Es decir,

CUADRO 11
Predictores del apoyo al estado de derecho (9) en Centroamérica, 2008

Variables	Región CA		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica		Panamá	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
Victimización por crimen (1)	-0.002** (0.998)	0.002	-0.002 (0.998)	0.117	-0.004** (0.996)	0.004	0.002 (1.002)	0.175	-0.002 (0.998)	0.179	-0.002 (0.998)	0.254	0.002 (1.002)	0.290
Percepción de inseguridad (2)	-0.006*** (0.994)	0.000	-0.011*** (0.989)	0.000	-0.003 (0.997)	0.096	-0.014*** (0.986)	0.000	-0.003 (0.997)	0.154	-0.002 (0.998)	0.318	-0.008** (0.992)	0.001
Percepción acerca de la presencia de pandillas (3)	-0.001 (0.999)	0.063	-0.001 (0.999)	0.705	-0.001 (0.999)	0.721	-0.001 (0.999)	0.477	-0.001 (0.999)	0.671	0.000 (1.000)	0.848	-0.005** (0.995)	0.005
Confianza en la policía (4)	0.001 (1.001)	0.380	0.001 (1.001)	0.445	0.000 (1.000)	0.868	0.004 (1.004)	0.072	0.000 (1.000)	0.970	0.004* (1.004)	0.023	-0.003 (0.998)	0.212
Tamaño del municipio de residencia (5)	-0.024 (0.976)	0.137	-0.077 (0.926)	0.110	-0.004 (0.996)	0.931	-0.146** (0.864)	0.002	0.118** (1.125)	0.005	0.088* (1.092)	0.015	-0.226*** (0.798)	0.000
Educación (6)	-0.005 (0.995)	0.420	0.001 (1.001)	0.974	0.001 (1.001)	0.951	-0.004 (0.996)	0.835	0.026 (1.027)	0.080	-0.011 (0.989)	0.485	-0.041* (0.960)	0.029
Edad	0.006*** (1.006)	0.000	-0.002 (0.998)	0.601	0.016*** (1.017)	0.000	-0.004 (0.996)	0.365	0.015*** (1.015)	0.000	0.004 (1.004)	0.279	-0.004 (0.996)	0.305

CUADRO 11 (Cont.)

Variables	Región CA		Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica		Panamá	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
Poseción de bienes materiales (7)	-0.008	0.562 (0.992)	-0.115**	0.004 (0.892)	-0.048	0.189 (0.953)	-0.045	0.227 (0.956)	-0.023	0.554 (0.977)	-0.111*	0.017 (0.895)	-0.037	0.341 (0.963)
Sexo (8)	0.153** (1.165)	0.001	0.148 (1.159)	0.207	0.124 (1.132)	0.259	0.079 (1.083)	0.477	0.132 (1.142)	0.232	0.323** (1.381)	0.005	0.126 (1.134)	0.275
Constante	0.163 (1.178)	0.278	1.234** (3.435)	0.002	-0.189 (0.828)	0.631	1.104** (3.016)	0.006	-1.240** (0.289)	0.001	-0.080 (0.923)	0.850	2.355*** (10.540)	0.000
N (10)	8269		1305		1487		1371		1408		1310		1388	
Hosmer-Lemeshow (valor p)	0.651		0.821		0.510		0.578		0.112		0.083		0.882	
R ² de Nagelkerke	0.024		0.064		0.046		0.056		0.037		0.039		0.054	

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001

(1) Tiene un formato 0-100, en donde 0 representa No y 100 Sí. (2) Tiene un formato 0-100, en donde 0 representa muy seguro y 100 muy inseguro. (3) Tiene un formato 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho. (4) Tiene un formato 0-100, en donde 0 representa nada y 100 mucho. (5) Los valores son: 1 capital nacional, 2 ciudad grande, 3 ciudad mediana, 4 ciudad pequeña y 5 área rural. (6) Los valores van en un rango de 0 a 18. (7) Índice de riqueza familiar basado en la posesión de bienes materiales como televisor, refrigerador, teléfono, etc. Tiene un rango 0-9. (8) Los valores son: 1 hombre y 2 mujer. (9) Los valores de la variable dependiente son 0 No y 100 Sí. (10) Para propósitos de la regresión, se han utilizado los Ns de cada país sin el ponderador (*weight*).

CUADRO 12
Resumen de los predictores del apoyo al estado de derecho en Centroamérica, 2008

Variables	Región CA	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Seguridad							
Victimización por crimen	-		-				
Percepción de inseguridad	-	-		-			-
Percepción acerca de presencia de pandillas							-
Confianza en la policía					+		
Socioeconómicas							
Tamaño del municipio de residencia					+	+	-
Educación							-
Edad +		+		+			
Posesión de bienes materiales		-				-	
Sexo +					+		

NOTAS: Los espacios en blanco responden a que la variable no resulta estadísticamente significativa.
 No se reporta el signo de la constante.

la victimización por crimen reduce el apoyo al estado de derecho. Mientras que el sentido de la relación entre la percepción acerca de la presencia de pandillas y la variable dependiente es negativa en cinco países y para la región, pero únicamente es estadísticamente significativa para un país (Panamá). En este caso, los que perciben una mayor presencia de pandillas apoyan menos el estado de derecho.

El sentido de la relación entre la confianza en la policía y el apoyo al estado de derecho es positivo en cinco países y para la región, aunque solamente es estadísticamente significativa para un país (Costa Rica). Es decir, los que tienen mayores niveles de confianza en la policía exhiben un mayor apoyo para el estado de derecho.

Por último, si bien se trata de modelos con un limitado alcance explicativo en los países (entre un 3 y un 6% de la variación de la variable dependiente), para la región centroamericana los cuatro predictores de apoyo al estado de derecho son: la victimización por crimen, la percepción de inseguridad, la edad y el sexo. Los que han sido víctimas del crimen o tienen una alta percepción de inseguridad, tienden a apoyar menos el estado de derecho, mientras que los adultos apoyan más el estado de derecho que los jóvenes, y las mujeres más que los hombres.

7. Conclusiones

En el marco de la profunda crisis de inseguridad que ha vivido la región centroamericana en los últimos años, en este ensayo se ha hecho énfasis en la perspectiva de los ciudadanos, explorando algunos impactos que el crimen y la percepción de inseguridad están teniendo en la erosión de los sistemas democráticos en la región centroamericana.

Las estadísticas gubernamentales no proporcionan mayor información sobre algunas características básicas de las personas que son víctimas de los actos delincuenciales. A partir de los datos de las encuestas, se han presentado los predictores de la victimización por crimen, siendo cuatro las variables estadísticamente significativas para la región: tamaño del municipio de residencia, educación, edad y sexo. Por lo que tienden a ser víctimas de la delincuencia con mayor frecuencia los que viven en las ciudades con mayores concentraciones urbanas, los hombres, los jóvenes, y los que cuentan con mayores niveles de escolaridad.

Tras varios años de que los centroamericanos han estado conviviendo con el fenómeno de la violencia y la delincuencia, en este ensayo se ha presentado evidencia empírica para sustentar la hipótesis de que la violencia criminal y la inseguridad están impactando los valores y las actitudes de los ciudadanos

hacia la democracia, así como los niveles de confianza interpersonal e institucional.

La percepción de inseguridad reduce el apoyo a la democracia, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. La victimización por crimen resultó negativa para la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia, y positiva con respecto a la confianza interpersonal. La percepción acerca de la presencia de pandillas disminuye el apoyo a la democracia, la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. La confianza en la policía aumenta el apoyo a la democracia, el apoyo al sistema, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, la confianza interpersonal y la confianza en la legitimidad política de las instituciones.

La problemática de la inseguridad tiene mayores efectos sobre los niveles de confianza interpersonal, siendo que ésta se reduce para los que tienen una mayor percepción de inseguridad y entre los que perciben una mayor presencia de pandillas; y la misma aumenta entre quienes tienen mayor confianza en la policía y para los que han sufrido victimización por crimen. Con respecto a la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia, ésta disminuye entre quienes han sido víctimas del crimen, y entre aquellos que tienen una mayor percepción de inseguridad y entre los que perciben una mayor presencia de pandillas. Por otra parte, el apoyo a la democracia se reduce para quienes tienen una mayor percepción de inseguridad y la percepción acerca de una mayor presencia de pandillas, y aumenta entre quienes tienen mayor confianza en la policía.

Se ha identificado con claridad que es la percepción subjetiva de inseguridad (el miedo al crimen) el factor más importante que está impactando el apoyo a la democracia, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, así como en la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. Por la importancia que tiene esta variable, en el futuro es necesario profundizar en el conocimiento sobre los factores que explican esta percepción de inseguridad que tienen los centroamericanos, la cual como se ha comentado anteriormente, no tiene una relación directa y mecánica con los factores o indicadores objetivos.³⁰

Los niveles de confianza en la policía han resultado ser un fuerte predictor. Los niveles más altos de confianza en la policía están asociados con mayores niveles de apoyo a la democracia, el apoyo al sistema, la satisfacción con el

³⁰ En Cruz (2009a), se aborda el sentimiento de inseguridad pública en Centroamérica y México.

funcionamiento de la democracia, la confianza interpersonal y la legitimidad política de las instituciones. Ahora bien, como se ha señalado anteriormente, en la región centroamericana hay opiniones divididas con respecto al desempeño y a la efectividad de la labor policial, así como percepciones de actos de corrupción en los cuerpos policiales. Es decir, en el futuro, el impacto que la confianza policial pueda tener sobre la democracia, la confianza interpersonal y la confianza institucional va a depender básicamente de la valoración que los individuos hagan sobre el desempeño de esta importante institución para el sector seguridad y justicia. Si los niveles de confianza aumentan, entonces podrá ser un factor de fortalecimiento democrático, pero si disminuyen, puede constituirse en un factor que contribuya a erosionar la cultura política democrática.

Con respecto al impacto que las variables de seguridad están teniendo sobre la cultura política democrática, es mayor su efecto sobre la confianza interpersonal y sobre la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. Con respecto a la primera, el sentido de la relación es bastante claro: la percepción de inseguridad (el miedo al crimen) así como la percepción acerca de la presencia de pandillas en el barrio de residencia están erosionando tanto la confianza interpersonal como la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. Éste es un aspecto al que se le debe de prestar mayor atención, debido a que, como se ha argumentado en este ensayo, la problemática de la violencia y el crimen están afectando no sólo aspectos de seguridad pública, la salud de la población o comprometiendo el desarrollo económico y social al desviar importantes recursos; sino que, además, está afectando algunas variables relevantes de la cultura política democrática, al erosionar la confianza entre las personas y las instituciones. Es decir, el crimen está erosionando el capital social, entendido como “la capacidad de una sociedad para construir redes y alcanzar metas propuestas en conjunto” (Córdova/Cruz 2008: 73). Y esto se vuelve más relevante debido a que algunas de las propuestas de políticas públicas que se están promoviendo para enfrentar esta problemática plantean la necesidad de la participación ciudadana, así como la denuncia por parte de las víctimas para que se puedan investigar los hechos. Ello sin duda requiere, al menos, de niveles aceptables de confianza en las instituciones gubernamentales.

Por último, se ha presentado evidencia empírica para apoyar la hipótesis de que la violencia criminal y la inseguridad están impactando el apoyo ciudadano al estado de derecho. Para la región centroamericana, la victimización por crimen y la percepción de inseguridad reducen el apoyo al estado de derecho, es decir, las víctimas de la delincuencia y aquellos que tienen una percepción más alta de inseguridad (el miedo al crimen) apoyan menos el estado de derecho. Este hallazgo, en particular, estaría indicando que debido a lo agobiante y

desesperanzador que la crisis de inseguridad puede ser para algunas personas, éstas estarían dispuestas a sacrificar algunas libertades y derechos, siempre y cuando tuvieran como contrapartida una mayor efectividad en el combate a la delincuencia. “La inseguridad destruye la confianza en los procedimientos legales y estimula las actitudes que apoyan las actividades extralegales en las instituciones de seguridad” (Cruz 2009b: 5). El desafío, en todo caso, es para los formuladores de políticas, para que encuentren maneras en las cuales el respeto al estado de derecho coexista con respuestas eficientes y efectivas a la problemática de la inseguridad.

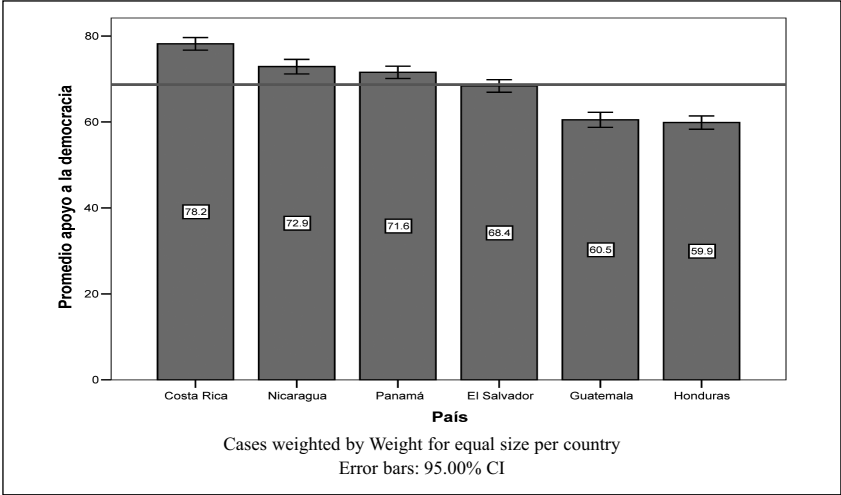
Bibliografía

- ACEVEDO, Carlos (2008): *Los costos económicos de la violencia en Centroamérica*. San Salvador: Consejo Nacional de Seguridad Pública.
- BODEMER, Klaus (ed.) (2003): *El nuevo escenario de (in)seguridad en América Latina. ¿Amenaza para la democracia?* Caracas: Editorial Nueva Sociedad.
- BOOTH, John A./SELIGSON, Mitchell (2009): *The Legitimacy Puzzle in Latin America: Democracy and Political Support in Eight Nations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CALL, Charles T. (2000): *Sustainable Development in Central America: The Challenges of Violence, Injustice and Insecurity*. Hamburg: Institut für Iberoamerika-Kunde. (CA 2020: Working Paper # 8.)
- CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo/CRUZ, José Miguel (2008): *Cultura política de la democracia en El Salvador, 2008. El impacto de la gobernabilidad*. San Salvador: IUDOP/FUNDAUNGO/Vanderbilt University/PNUD/BID.
- CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo/PÉREZ, Orlando J. (2006): “La agenda de seguridad en Centroamérica hacia el siglo XXI”, en: Tulchin, Joseph S./Benítez Manaut, Raúl/Diamint, Rut (eds.): *El Rompecabezas. Conformando la seguridad hemisférica en el siglo XXI*. Buenos Aires: Bonniae Libris.
- CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo/RAMOS, Carlos G./LOYA MARÍN, Nayelly (2007): “La contribución del proceso de paz a la construcción de la democracia en El Salvador (1992-2004)”, en: Azpuru, Dinorah *et al.* (eds.): *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto. Guatemala y El Salvador, un enfoque comparado*. Ciudad de Guatemala: IDRC/F&G Editores.
- CÓRDOVA, Abby/SELIGSON, Mitchell A. (2010): “La gobernabilidad y el apoyo a la democracia estable en Latinoamérica: resultados del Barómetro de las Américas 2008”, en: *Journal of Democracy en Español*, vol. 2, pp. 28-46.
- CRUZ, José Miguel (2000): “Violencia, democracia y cultura política”, en *Revista Nueva Sociedad*, n° 167, pp. 132-146.
- (2009a): “Inseguridad pública en Centroamérica y México”, en: *Vanderbilt. Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2009*, n° 28.
- (2009b): “¿Deben las autoridades respetar la ley cuando luchan en contra del crimen?”, en: *Vanderbilt. Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2009*, n° 19.

- DILLS, Angela K./MIRON, Jeffrey A./SUMMERS, Garret (2010): "What Do Economists Know about Crime?", en: Di Tella, Rafael/Edwards, Sebastian/Schargrotsky, Ernesto (eds.): *The Economics of Crime. Lessons For and From Latin America*. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 269-302.
- FUNDAUNGO (2010): *El Salvador: Atlas de la Violencia (2005-2009)*. San Salvador: FUNDAUNGO.
- GOTTFREDSON, Michael R./HINDELANG, Michael J. (1981): "Sociological Aspects of Criminal Victimization", en: *Annual Review of Sociology*, vol. 7, pp. 107-128.
- IDHAC (2009-2010): *Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano*. Bogotá: PNUD Colombia.
- INGLEHART, Ronald (1997): *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 societies*. Princeton: Princeton University Press.
- INGLEHART, Ronald/WELZEL, Christian (2005): *Modernization, Cultural Change, and Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- KESSLER, Gabriel (2009): *El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- MÉNDEZ, Juan E./O'DONNELL, Guillermo/PINHEIRO, Paulo Sergio (1999): *The (Un)Rule of Law and the underprivileged in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- NORRIS, Pipa (ed.) (1999): *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*. Oxford: Oxford University Press.
- (2006): "Support for Democratic Governance: Multidimensional concepts and survey measures". Paper for the LAPOP-UNDP workshop on Candidate Indicators for the UNDP Democracy Support Index, Center for the Americas at Vanderbilt University, Nashville, May 5-6th.
- PAHO (2003): "Statistics on Homicides, Suicides, Accidents, Injuries and Attitudes towards Violence", Washington DC.
- PÉREZ, J. Orlando (2003-2004): "Democratic Legitimacy and Public Insecurity: Crime and Democracy in El Salvador and Guatemala", *Political Science Quarterly*, vol. 118, n° 4, Winter, pp. 627-644.
- PUTNAM, Robert D. (1993): *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- SELIGSON, Mitchell A./AZPURU, Dinorah (2001): "Las dimensiones y el impacto político de la delincuencia en la población guatemalteca", en: Rosero, Luis (ed.): *Población del istmo 2000: Familia, migración, violencia y medio ambiente*. San José: Universidad de Costa Rica.
- UNGAR, Mark (2002): *Evasive Reform: Democracy and the Rule of Law in Latin America*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME AND THE LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN REGION OF THE WORLD BANK (2007): "Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean". Report n° 37820.

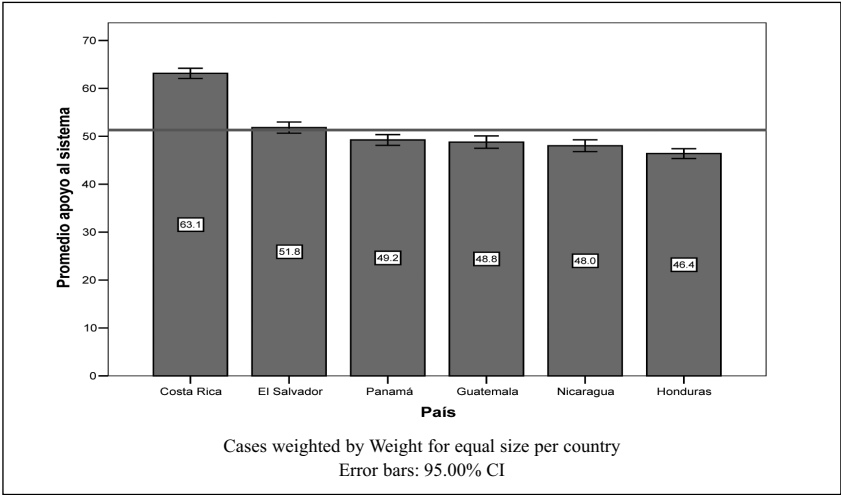
Anexos

ANEXO 1
Apoyo a la democracia, Centroamérica 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

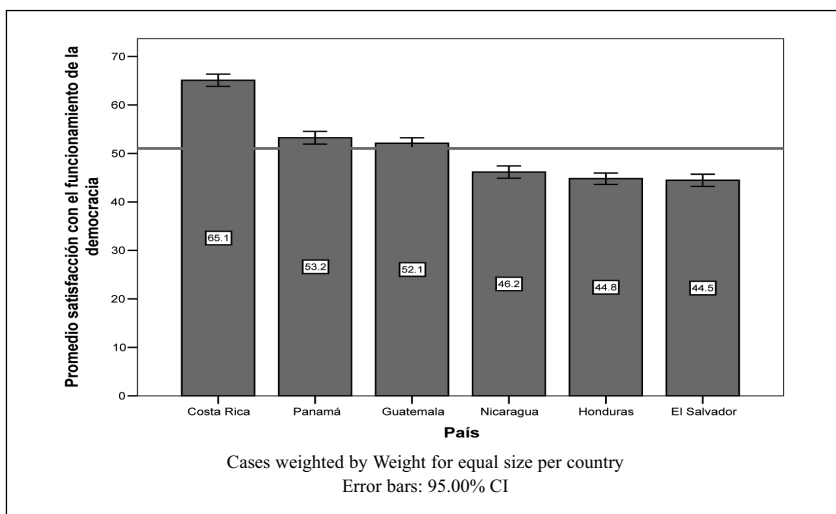
ANEXO 2
Apoyo al sistema, Centroamérica 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

ANEXO 3

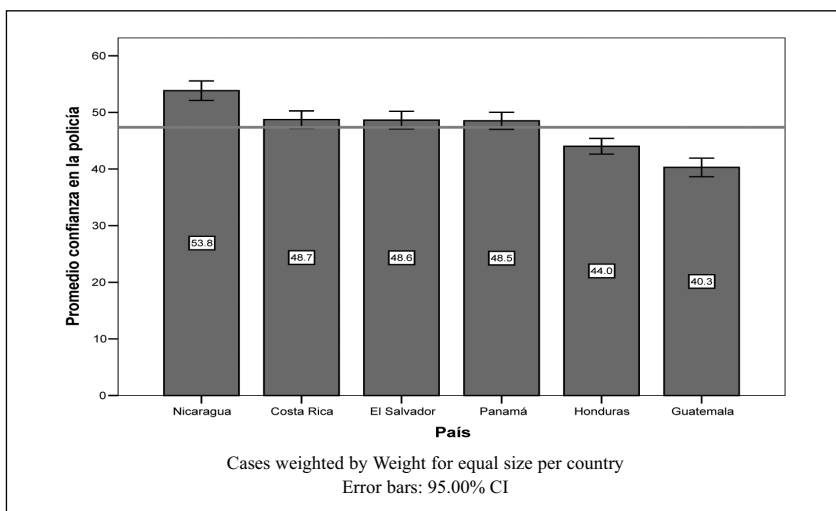
Satisfacción con el funcionamiento de la democracia, Centroamérica 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

ANEXO 4

Confianza en la policía, Centroamérica 2008



FUENTE: Barómetro de las Américas, LAPOP.

Marco Estrada Saavedra

**La estética de los agraviados:
arte callejero y política.
El caso de la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca, México**

Introducción

En mayo de 2006, los miembros de la Sección 22, fracción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), iniciaron su ciclo anual de negociaciones laborales con el gobierno del estado de Oaxaca, México. A diferencia de años pasados, en esta ocasión las diferencias entre las partes llegaron a tal grado, que se interrumpió el diálogo, por lo que los maestros decidieron instalar un “plantón indefinido” en la plaza central de la ciudad capital. Casi un mes después, el 14 de junio, el gobierno local intentó desalojar, de manera harto violenta y con nulo éxito, a los ocupantes. En reacción a lo anterior, los gremialistas convocan a la ciudadanía y a las organizaciones populares del estado a formar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se constituye el 17 del mismo mes para demandar la renuncia sin condiciones del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz.¹ A partir de entonces y hasta finales de noviembre de ese mismo año, los “asambleístas” se apoderaron de la ciudad y reinó un estado de ingobernabilidad en la principal ciudad de Oaxaca. En este contexto, diferentes *colectivos de artistas urbanos* se sumaron a la lucha social y política del “pueblo oaxaqueño” apropiándose de los muros de la ciudad para expresar su “resistencia visual”.

¹ Estudios sobre los antecedentes del conflicto social y la APPO se encuentran en Cortés (2006), algunas colaboraciones en el número 24/25 de *Cuadernos del Sur* (2007) y en Martínez Vásquez (2007 y 2009). Para una interpretación politológica sobre la APPO y la crisis política en Oaxaca, véase Recondo (2007: 457 ss.). También pueden consultarse los ensayos académicos en el número 148 de la revista de divulgación *El Cotidiano* (2008). Hasta la fecha, han predominado las publicaciones periodísticas, testimoniales, partidistas y de denuncia de violación de los derechos humanos (Osorno 2007; Martínez Vásquez 2007; Beas Torres 2007; Giarracca 2008; Denham *et al.* 2008; CCIODH 2007 y Sotelo Marbán 2008).

En este artículo deseo abordar, justamente, la “protesta gráfica” de estos colectivos, analizarla a la luz de las nuevas formas de participación política y generación de espacios públicos en las luchas populares. Centraré mi atención en los colectivos de artistas urbanos y su producción gráfica. En particular, me ocuparé de tres de ellos, cuyas obras y actividades han tenido mucha influencia en la conjugación del arte y la política en la “Comuna de Oaxaca”: Arte Jaguar, Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca (ASARO) y Lapiztola. Estas y otras agrupaciones “intervinieron” los muros y equipamiento urbano de la capital de Oaxaca con grafitis, *esténcils*, carteles y *stickers*. Aquí atenderé, especialmente, a la producción que conjugó grafitis y *esténcils*.

Pero antes de entrar en la materia, me gustaría definir los términos de la discusión. En primer lugar, concibo a la APPO como un “sistema de protesta”. Éste es una forma especial de los sistemas sociales,² que se caracteriza por su constitución y reproducción mediante comunicaciones orientadas al conflicto. Estas comunicaciones se expresan temáticamente como movilizaciones de protesta en contra de diferentes oponentes (como el gobierno, las organizaciones eclesiales, las empresas, los medios de comunicación) o de las consecuencias no previstas de la operación de los sistemas de funciones de la sociedad (como la política, el derecho, la economía, la ciencia o el arte).³ En segundo término, la *movilización contestataria pública* de los “sistemas de protesta” tiene un doble carácter: instrumental y expresivo. En efecto, por un lado se le puede observar de acuerdo a su eficacia para alcanzar metas políticas; por el otro, esa misma movilización puede ser mirada en su carácter simbólico como la puesta en escena, de manera lúdica o dramática, de la protesta. El concepto de “protesta simbólica”, que aquí introduzco, hace referencia a los elementos no discursivos, es decir, emotivos, plásticos, sonoros, escénicos y figurativos de la movilización contestataria pública. Este tipo de protesta sintetiza, mediante representaciones simbólicas, las ideas y los intereses, las esperanzas y los deseos de los participantes del sistema. En el caso particular que nos ocupa, la protesta simbólica appista ha conjugado diferentes “disciplinas”, como la pintura, el grabado, la música, el grafiti, la fotografía, el video, el teatro, etc. Todo ello ha enriquecido su forma, contenido y variedad temática. Con ello, ha aumentado la posibilidad de llegar a un mayor

² Sobre el concepto de sistema social, véase Luhmann (1987).

³ Sobre la concepción de los “movimientos de protesta” de la teoría de sistemas, véase Luhmann (1992, 1996 y 1998), Japp (1984, 1986a, 1986b y 1990), Hellmann (1996, 1998 y 2000) y Ahlemayer (1989 y 1995). Aunque emparentada con ésta, mi modelo analítico varía de manera significativa con respecto a la concepción alemana. En este texto no me es posible, sin embargo, desarrollar estas diferencias. Sobre el tema véase Estrada Saavedra (2008).

público y de una identificación de éste con las razones y los fines de su lucha popular.⁴

I

Gran parte de los integrantes de todos estos colectivos de artistas urbanos provienen de las clases bajas de Oaxaca. Algunos de ellos eran o son estudiantes de artes gráficas y visuales, arquitectura, diseño y ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Antes de la experiencia de la APPO, varios de los miembros de lo que después se conocería como Arte Jaguar, fundado en 2004 por media docena de artistas, habían formado parte de diferentes bandas juveniles dedicadas a producir grafitis. En estas agrupaciones, lo más importante para los “chavos” era convivir con miembros de otras bandas, escuchar música y mostrarse entre sí sus grafitis. Por su parte, los tres integrantes de Lapiztola, estudiantes de clase media baja que crearían su agrupación en 2005, formaban ya un grupo de amigos antes de la fundación del colectivo y guardaban estrechos vínculos familiares con el magisterio oaxaqueño. Como los “jaguares”, también ellos realizaban grafitis con diversas bandas juveniles. Finalmente, ASARO es constituida por 50 artistas e intelectuales populares como respuesta a la convocatoria de la APPO, en octubre de 2006, para que todos los sectores de la sociedad se organizaran y se sumaran a la “resistencia popular” desde diferentes frentes sociales (trabajo de campo, julio de 2009).

La apuesta de los colectivos por la conjugación del arte y la política fue resultado de un proceso de aprendizaje. En efecto, la obra de los integrantes de Arte Jaguar y de los que más tarde se conocería como Lapiztola se caracterizaba, antes del conflicto de 2006, por su fuerte interés en la forma del grafiti. El tránsito de éste como una expresión estética hacia un grafiti politizado no resultó fácil, porque chocaba con la concepción hasta entonces convencional entre las bandas juveniles: los “puristas” apreciaban, sobre todo, su forma y su doble función de identificación de la “banda” y de delimitación de un “territo-

⁴ Sobre el tema, consúltese Estrada Saavedra (2008). A propósito: el material empírico aquí publicado es parte de un proyecto de investigación más amplio sobre la constitución, organización y movilización de la APPO. Deseo agradecer a la Universidad Iberoamericana y al Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología por el financiamiento de este trabajo. Asimismo, doy las gracias a las fundaciones Alexander von Humboldt y Thyssen por la beca que me han otorgado como científico visitante en el Lateinamerika-Institut de la Freie Universität Berlin en el primer trimestre de los años 2010 y 2011. Con este estipendio he podido tener el tiempo y los medios necesarios para escribir este artículo.

rio” propio. En su opinión, otros sentidos del grafiti eran desviaciones de su “verdadero espíritu”.

Todo esto cambiaría en 2006, cuando se politizó su forma y contenido y fue evolucionando hacia el grafiti-consigna y el *esténcil*-grafiti. Sin embargo, esta transformación no fue resultado del desarrollo interno de una concepción estética alternativa, sino, más bien, de la participación directa de estos artistas en la defensa de sus barrios, con barricadas de por medio, como parte de su colaboración en la lucha popular en contra de los gobiernos estatal y federal. En este contexto de confrontación, estos artistas empezaron a concebir su trabajo con claros contenidos sociales y políticos y a poner al servicio de las “causas del pueblo” sus capacidades artísticas haciendo pintas, carteles y mantas. El caso de ASARO es parcialmente diferente al de las otras dos agrupaciones: sus miembros fundaron este colectivo con evidentes intenciones políticas con el fin de crear un “arte comprometido con el pueblo”. Además, entablarían una relación muy estrecha con el Frente Popular Revolucionario (FPR), una de las organizaciones sociales más influyentes en la APPO (trabajo de campo, julio de 2009).

Por último, ASARO, Lapiztola y Arte Jaguar se caracterizan por su forma de trabajo colectivo. Ello significa, por un lado, postular una “autoría colectiva” de las obras y, por el otro, decidir en grupo todo lo relativo al proceso creativo: concepción, diseño, elaboración y exposición.

II

Aunque, en términos estrictos, sólo ASARO se incorporó “formal y orgánicamente” a la APPO —como lo expresaría uno de sus integrantes, “ASARO es el brazo cultural de la APPO” (entrevista, 21 de julio de 2009)—, a este y los demás colectivos de artistas urbanos y grafiteros anónimos bien se les puede calificar, sociológicamente hablando, como componentes de un mismo “subsistema”, en la medida en que cada uno de ellos realizaba la misma función especializada para la asamblea, a saber: la *generación de formas estéticas* para el contenido de la “protesta simbólica” de este sistema de protesta.

Concebir a la APPO como “sistema social” nos permite tratarla desde la perspectiva de su complejidad sistémica. En términos teóricos, un sistema social es complejo cuando los elementos que lo componen no pueden estar vinculados directamente entre sí al mismo tiempo. Cuantos más elementos contenga un sistema, mayor será el número de relaciones posibles que puedan entablarse entre ellos y en su conjunto y, por tanto, más complejidad abrigará el sistema mismo. La complejidad implica, entonces, la necesidad de realizar selecciones para establecer y actualizar las relaciones entre los elementos sis-

témicos. En este caso hablamos de una complejidad organizada, la cual no es controlada directamente por algún elemento central del sistema. En otras palabras, un sistema social no puede actualizar y enlazar todos sus elementos al unísono. Por esta razón, los elementos del sistema adquieren cierta “autonomía” interna, porque pueden establecer enlaces particulares y no jerárquicamente controlados y supervisados, los cuales abren un ámbito de posibilidades de comunicación y acción actualizables tanto al interior del sistema como con su entorno.⁵

En este mismo sentido, al pensar a los “colectivos” como un subsistema, no hay necesidad alguna de esperar coordinación interna entre ellos ni de imputarles una perspectiva de observación homogénea a partir de la cual determinen, de igual modo y con las mismas formas y los mismos contenidos, la selección de sentidos que conllevan sus “obras” y que expresan la “protesta simbólica” de la APPO. Con todo y lo anterior, al ser la APPO un sistema con complejidad organizada, es decir, un sistema con una conexión selectiva de sus elementos (o, dicho de otra manera, una organización selectiva de su autopoiesis), su estructura ejerce presión sobre sus elementos —en este caso particular, los colectivos de artistas— para hacer más probables (aunque no necesarias) ciertas selecciones de enlaces que otros. En otras palabras, los sentidos seleccionados por los colectivos, condensados plásticamente y gráficamente en sus obras, serán relativamente semejantes entre sí, tendrán, por decirlo así, un “aire de familia”. De tal suerte, Arte Jaguar, Lapiztola o ASARO pueden operar muy bien con independencia entre sí e incluso generar diferencias estético-políticas significativas y, no obstante, seguir siendo elementos subsistémicos de la asamblea.

Cinco son las funciones que estos colectivos cumplen para la autopoiesis del sistema de protesta.

Primero, los colectivos colaboran, junto con los voceros de la asamblea o los “medios de difusión tomados y autogestionados”, en la función sistémica de generar una *perspectiva de observación*, es decir, en la construcción significativa de la realidad *desde* el punto de vista de la APPO. Este marco de interpretación sistémico no sólo supone dimensiones cognitivas (“esto sucede así porque...”), sino también valorativas (ético-políticas) en torno a eventos y actores (“¡Alto a la represión, ya!” o “Ulises Ruiz, tirano asesino”). En particular, las obras de los artistas urbanos enriquecen el discurso político con elementos emotivos, gráfica y plásticamente elaborados, que sintetizan diversos sentimientos y estados de ánimo como la esperanza, la indignación, la incertidumbre, la ira, el dolor, la impotencia o el miedo sentidos por los integrantes

⁵ Sobre el tema, consúltese Luhmann (1987: 45 ss.).

de la APPO en relación al conflicto y su desarrollo, a sus protagonistas y antagonistas. A manera de ejemplo de lo anterior, se puede evocar el *esténcil*-graffiti en el que se aprecian dos figuras delineadas en un contraste en blanco y negro: un policía antimotines equipado con tolete, escudo, botas militares y casco, que agrede a una mujer de rodillas que apenas alcanza a levantar sus brazos para no ser tundida a golpes. Debajo de la imagen se lee: “Asesino”. Asimismo, las parodias, burlas y transgresiones de estos trabajos murales provocan risa, invierten las jerarquías sociales y morales y, de este modo, facilitan al espectador desafiar y desnudar a las autoridades y la legitimidad del orden social de dominación. A modo de ilustración de esto, se pueden citar el siguiente *esténcil*-graffiti: elaborado en color negro, al estilo de las reproducciones en serie de fotografías intervenidas por Andy Warhol y al del juego mexicano de la lotería, se ve un conjunto de ocho imágenes del rostro de Ulises Ruiz con diferentes gestos y posturas, cada una de las cuales tiene debajo de ellas una descripción irónica que lo califica política y moralmente como: “El inocente”, “El cínico”, “El ratero”, “El autoritario”, “El represado”, “El ruin”, “El asesino”, “El asqueroso”.

En segundo lugar, estas intervenciones gráficas permiten a la APPO reflexionar sobre el conflicto y su proyecto social y político. Los grafitis, *esténcils* y carteles condensan gráficamente expectativas en torno a un futuro deseable: la realización plena de la “Comuna de Oaxaca”, la democratización del sistema político o el establecimiento del socialismo. Esto lo manifiesta muy bien el trabajo elaborado con color negro en el que se aprecia una tricicleta de panadero, en cuyo espacio para la carga lleva una estufa para hacer camotes. De la chimenea de ésta sale vapor y la leyenda: “Estamos cocinando la revolución”.

En tercer término, las obras de los colectivos contribuyen a la identificación activa con la asamblea. En efecto, a través de las intervenciones gráficas de la “resistencia visual”, los integrantes de la APPO –personas u organizaciones populares– tienen la oportunidad de reconocerse como parte del “pueblo oaxaqueño en lucha”, ya sea de manera individual (como en el caso de los *esténcils* con el motivo del “niño de la calle” con el rostro cubierto por un paliacate y arrojando piedras con resorteras para combatir a la policía) o colectiva (como en el *esténcil* en el que se representa un contingente de mujeres y hombres marchando unidos, con los ojos llenos de esperanza mirando hacia el futuro y los puños en alto, todo ello en colores rojinegros).

En cuarto lugar, los colectivos contribuyen a la elaboración y preservación de la “memoria sistémica” de los múltiples eventos significativos de este conflicto (por ejemplo, el intento de desalojo del plantón magisterial el 14 de junio de 2006, la toma de la radio y televisión estatales el 1° de agosto o la batalla de “Todos los Santos” entre la APPO y la Policía Federal Preventiva el 2 de noviembre). Mediante sus iconografías, los artistas realizan, de manera

sintética, una crónica dramática y lúdica de la historia de la asamblea con el fin de asegurar su recuerdo e interpelar visualmente al “público” (simpatizante o no, militante o espectador) para cerciorarse de las causas, las razones, los motivos y los fines de la lucha social.

Finalmente, en quinto lugar, echando mano del acervo de la memoria social, en particular en lo referente a la historia patria y a la cultura popular y mediática, los colectivos reelaboran sucesos históricos, personajes y toda suerte de figuras públicas, reales o ficticias (como la Revolución de 1910, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, el “Che” Guevara, el subcomandante Marcos, los macheteros de San Salvador Atenco, la Virgen de Guadalupe, la Intifada palestina, el Chapulín Colorado, Mickey Mouse, etcétera), y las intervienen estéticamente para generar profundidad y resonancias históricas de continuidad de las luchas populares pasadas con la oaxaqueña, que, al unísono, legitiman la protesta actual y la dotan de un horizonte utópico colectivo. Por ejemplo, la iconografía tradicional de Benito Juárez se modifica agregándole una boina a lo “Che” Guevara, sugiriendo que el héroe nacional de origen zapoteco sería, hoy día, un rebelde revolucionario que apoyaría la lucha appista. Lo mismo se puede afirmar de la imagen intervenida de Emiliano Zapata que, en lugar del sombrero campesino de ala amplia, aparece con un peinado con pelos en pico a lo *punk*, con el cual se identifican fácilmente los jóvenes urbanos marginados, *anarcopunks*, libertarios y revolucionarios. O, por último, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz caricaturizado como un monstruo con rostro vampiresco con largas y puntiagudas orejas, hocico babeante enmarcado por colmillos feroces, mirada desorbitada y perversa, y con un cuerpo agazapado de rata coluda. Este *esténcil* se acompaña con la consigna: “Ulises, chagal de la lucha sindical”.

III

El de los colectivos no es un arte concebido, originalmente, para su circulación en galerías o museos; más bien surge y se expone en la calle. Expresado con mayor precisión: *es un arte producido en el conflicto y pensado como un instrumento de lucha*. No es casualidad alguna, en este sentido, que uno de estas agrupaciones se denomine Lapiztola; nombre que es “un juego de palabras [que expresa] la idea [estética] del colectivo: hacer disparos gráficos, imágenes fuertes, pero no mortales” (entrevista colectiva con Lapiztola, 23 de julio de 2009). La dimensión política del “arte de la calle” se encuentra ya inscrita, asimismo, en su carácter furtivo, clandestino y subversivo, semejante a la “actividad del jaguar, que la realiza en la noche, pues la penumbra es su espacio de trabajo” (entrevista colectiva con Arte Jaguar, 24 de julio).

En efecto, en la confrontación entre la APPO y los gobiernos estatal y federal, los artistas callejeros entendieron sus trabajos como una “herramienta” más de la lucha popular en tanto *medio de concientización, propaganda y crítica*. De este modo, se empezó a pensar el arte como eminentemente político al desafiar el orden social de dominación. La estética gráfica de estos colectivos se compone de evidentes elementos irónicos, muchas veces ejercitando lúdicamente pastiches al estilo posmoderno, pero también –y en ello va su contenido político– elementos violentos y agresivos, pero no para ocasionar mera irritación o escándalo, sino, más bien, con la intención de provocar, mediante la conmoción visual del transeúnte y del público en general, una llamada de atención o, mejor dicho, una reflexión sobre la “realidad social y política” oaxaqueña y nacional. La expectativa estético-política de tras de ello consiste en generar “indignación” en el espectador para moverlo a la acción política contestataria.

Los artistas de ASARO son muy explícitos al respecto. Al concebir su trabajo como un medio de propaganda, protesta y denuncia, el colectivo pretende “crear conciencia” en el pueblo de las condiciones de explotación y dominación a las que está sujeto. Por esta razón, sus obras se alejan decididamente de la abstracción y apuestan por el arte figurativo, cuyas formas y contenidos sean “sencillos” de identificar y comprender por “el pueblo”. De esta manera, se forjan condiciones de diálogo sobre la “realidad social y política” entre los artistas y el “pueblo” (cfr. ASARO, <blogs.myspace.com/asaroaxaca>).

En este sentido, ASARO considera su trabajo explícitamente como un “arte nuevo y comprometido”. Su “novedad” consistiría en ser un producto colectivo en oposición a la creación como un proceso individual y elitista. El nuevo arte rechaza toda concepción artística como producto, como dirían los frankfurtianos, de la “industria cultural” y dirigido a la “enajenación” de las masas. El de ASARO se piensa, por el contrario, como un arte popular de las masas para su propia liberación y como instrumento de lucha en contra de la “burguesía” (cfr. ASARO, <blogs.myspace.com/asaroaxaca>).

Pero no sólo esto: los artistas de la calle se piensan a sí mismos como “soldados”. En efecto, Itandehui, grafitera, fotógrafa y videasta participante tanto en Arte Jaguar como en ASARO, discurre que los grafiteros son “una especie de soldados”, cuyo trabajo expresa una posición política, ya que en él se manifiesta “una inconformidad hacia las normas sociales y las instituciones” (en León 2009). Estos “soldados” formarían, de acuerdo con la artista, “parte de un ejército que despierta y resiste ante la hiper mercantilización de los tiempos posmodernos, ya que proyectan una violencia discursiva, un territorio visual y poético [en contra de] los cánones establecidos, sin el fin de llenar de basura visual [este espacio tal y] como lo hace [la propaganda de] las campañas electorales” (en Mejía 2009).

Como se mencionó más arriba, gran parte de estos jóvenes artistas urbanos se politizaron en medio del conflicto participando directamente en las múltiples actividades de la APPO. Sus intereses y gustos artísticos no fueron los conducidos hacia la acción política. Pero, una vez involucrados en la movilización y la protesta, cooperaron en la “Comuna de Oaxaca” con lo que sabían hacer. Smek, miembro de Arte Jaguar, lo expresa con claridad: “Nosotros participábamos con el pueblo en la barricada y en las marchas... Nos solidarizábamos con la banda haciendo lo que sabíamos hacer: utilizar la herramienta de trabajo para hacer mantas con consignas y que la gente se las llevara a la marcha” (entrevista, 24 de julio de 2009). La falta de tiempo para la creación artística y la urgencia para actuar impuestas por los eventos políticos dejaban una impronta propagandística en el carácter de sus intervenciones gráficas. En efecto, si bien los muros oaxaqueños se habían convertido en un enorme lienzo, no todo lo que se plasmaba en éste alcanzaba calidad o interés estéticos. “Los trabajos que hacíamos [durante el conflicto]”, comenta Yankel, de Lapiztola, “no son, precisamente, arte como lo que ahora realizamos, pues hoy tenemos más tiempo para pintar y hacer arte urbano. El *estencil* y los pósters de información y protesta no lo consideramos propiamente arte sino propaganda, que consistía en hacer un alto contraste entre las frases y la gráfica” (entrevista, 23 de julio de 2009).

La producción de pintas, consignas, grafitis y *estencils* empezó a ser apropiada masivamente por cada vez más jóvenes, provocando así que, lo que antes era un actividad casi exclusiva de chavos banda y grafiteros, se volviera una práctica común. Con ello, la idea de autoría sufrió, asimismo, una transformación. En efecto, en medio del conflicto y del proceso de formación de una identidad colectiva de los participantes en la “Comuna de Oaxaca”, el arte callejero no sólo fue puesto “al servicio del pueblo”, sino que se le concibió como una obra de autoría colectiva: el “arte del pueblo”. Así, muchos de los trabajos de los miembros de Arte Jaguar empezaron a realizar plantillas sin firma para que cualquiera pudiera verla, apropiársela e identificarse con ella por el simple hecho de encontrarse en un “espacio público”. Tras este gesto subyace, por supuesto, una crítica a la idea moderna del arte como producto de un genio individual y a la apreciación de las obras artísticas como una experiencia subjetiva particular. En un contexto altamente politizado, los colectivos como Arte Jaguar o ASARO han hecho, en cambio, la apuesta del arte como una “creación colectiva”, inclusive, afirmarían, “popular”.

IV

Al ocupar calles y plazas, toda movilización de un sistema de protesta manifiesta, implícita o explícitamente, un desafío en torno al carácter del espacio

público: ¿cómo es ocupado y apropiado?, ¿quiénes pueden hacerlo? En el fondo, se trata de un conflicto sobre quién tiene derecho y capacidad de incluirse con su cuerpo, persona, actos y discursos en él y, por este hecho, transformar el sentido y la forma de lo público. Sin duda alguna, las intervenciones de colectivos y grafiteros contribuyeron a su resignificación.

Lo anterior se puede apreciar mejor si se contraponen, como sucedió en 2006, dos lógicas de uso del espacio público: por un lado, la mercantilización turística del mismo a través de estrategias de “patrimonialización” del “centro histórico” de la ciudad de Oaxaca, tal y como la promueven los gobiernos federal y estatal y toda suerte de empresas y consorcios turísticos (cadenas de hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas, restauranteros, etc.); y, por el otro, la politización del mismo a través de las protestas de la APPO.

En este contexto, los muros de la ciudad se tornaron, especialmente, espacios *en y de* conflicto: por un lado, por la disputa con los dueños de los mismos o las autoridades públicas por su *uso y apropiación*; por el otro, porque se convirtieron en los “soportes” materiales de las obras de los colectivos, en los que se plasmaban gráficamente discursos políticos y estéticos en forma de pintas y *stencils*. Cuando estos muros formaban parte de un edificio histórico, se le desacralizaba en su estatus de “patrimonio cultural” y en su función mercantilizada de “atractivo turístico”. Con ello, se resignificaba también el carácter de su uso “público”: pasaban de ser un monumento histórico, a la vista de todos aquellos que tienen el tiempo, los recursos y la disposición estética y turística suficiente de gozar y apreciar su belleza y carácter histórico, a convertirse en un espacio apropiado por un público popular contestatario. En efecto, el conflicto político y social trastornó la noción y el uso del “público” y de lo “público” asociados, convencionalmente, a los objetos, espacios y actividades religiosos, culturales, políticos, económicos, turísticos y de esparcimiento en el zócalo de Oaxaca. Aparentando ahora un mural monumental con múltiples inscripciones gráficas, este escenario patrimonial fue transfigurado en símbolo y parte de la escenografía del “performance” de la protesta simbólica: quien lo ocupaba se hallaba en el centro del poder político y controlaba la ciudad. Las intervenciones estético-políticas, junto con el plantón en la plaza central y sus alrededores y, posteriormente, la infinidad de barricadas erigidas a lo largo y ancho de la ciudad delimitaban simbólica y materialmente un territorio y un espacio social de resistencia que los appistas reclamaban como “suyo”. “En ese tiempo”, reflexiona Carmen, una maestra muy activa durante esas jornadas, “sentíamos que las calles eran nuestras, que la ciudad nos pertenecía por primera vez después de tantos años de vivir aquí. Durante el movimiento, las calles eran realmente del pueblo” (entrevista, 23 de junio de 2009).

En tanto que los muros urbanos fueron refuncionalizados como “soportes” materiales de las intervenciones estético-políticas, se volvieron *ipso facto* un

espacio *de* conflicto, en el que no sólo los appistas se expresaban, sino, también, los oponentes políticos de estos. La respuesta de estos últimos –en particular de los gobiernos estatal y municipal y sus respectivos servidores públicos– no fue a través de réplicas gráficas, sino por medio de la censura, que destruía los carteles o pintaba sobre los *esténcils* y grafitis para evitar que fueran vistos y leídos. A lo largo de 2006 y, aunque en menor medida hasta nuestros días, en los muros se han registrado, en capas sobrepuestas de pintura, las intervenciones y contra intervenciones de los contrincantes. Así, mientras que una parte de la población de la ciudad se ha identificado con este arte urbano, porque expresa, de manera figurativa, sus vivencias, expectativas y participación en la APPO, otros, en cambio, encuentran estas mismas obras feas, vulgares, vandálicas y violentas, por lo que las rechazan y colaboran en su destrucción arrancando los carteles, repintando los muros de su propiedad, agrediendo verbalmente a los artistas o denunciando a la policía la presencia de las cuadrillas de artistas listos a hacer suyas las paredes públicas y privadas. Al respecto, Vain, integrante de ASARO, expresa: “Nos organizamos para salir a vigilar [cuando pegamos carteles o plasmamos *esténcils*], porque estas actividades [constituyen] una falta administrativa y generan mucha persecución. Después del 2006 hay mucho maltrato a los artistas callejeros; la represión aumenta, en especial, si catalogan tu trabajo como arte político. Nos identifican como parte del movimiento y nos golpean... Con la campaña de publicidad ‘Mi Oaxaca linda’,⁶ se le sugiere a la gente que somos delincuentes y que nos deben denunciar. Lo que quieren es que no se sepa más del movimiento. Se trata de un programa de limpieza total para que no se vea nada de lo que ha pasado y está pasando en el estado... Si eres joven, te criminalizan, te ven como una amenaza para la ley... Nuestro trabajo lo clasifican como incitación a la violencia y la rebelión” (entrevista colectiva, 21 de julio de 2009). La criminalización de los artistas urbanos y sus trabajos ha conducido a la situación de que, como comenta un integrante de Lapiztola, “si la policía te agarra con marcadores, rotuladores o aerosol, te detiene, aunque no los estés usando. Para ellos, portar esto es como si cargaras un arma” (entrevista, 23 de julio de 2009).

Los muros se vuelven espacios *de* conflicto, porque las pintas, los carteles y los *esténcils* forman parte de las comunicaciones de protesta appistas. Literalmente, “las calles están diciendo cosas”, como se lee en una pinta. En este sentido, junto con las asambleas en las barricadas barriales o las multitudinarias en el zócalo y los medios de difusión ocupados y autogestionados, se puede considerar a las intervenciones político-estéticas como componentes del

⁶ Sobre la campaña publicitaria, se puede consultar en la página electrónica: <www.mioaxacalinda.org>.

entramado de las *esferas de deliberación colectiva* del sistema de protesta, porque han favorecido la transmisión de los puntos de vista, la reflexión colectiva y la definición de las expectativas de la APPO, en una situación en la que los medios de comunicación impresos y electrónicos estatales, nacionales y privados han erigido un “cerco informativo” de censura y desinformación acerca del conflicto oaxaqueño, las razones y los objetivos de los movilizados, adoptando, en muchos casos, el punto de vista oficial.

V

Debido a que los colectivos de artistas urbanos han contribuido a la generación de formas estéticas para el contenido de la protesta simbólica de la APPO en medio del conflicto con los gobiernos estatal y federal, he dirigido mi atención, hasta ahora y de manera implícita, a las referencias y vinculaciones del subsistema aquí estudiado con el sistema político. Sin embargo, la particularidad plástica de las intervenciones de los colectivos ha suscitado que no sólo el político, sino, también, el sistema del arte las haya incluido en sus comunicaciones especializadas.⁷ En esta sección y la siguiente me ocuparé de este tema.

El apoyo organizado de un sector de artistas e intelectuales de Oaxaca a la APPO no fue inmediato. Conocedores de los ritos de movilización y protesta del magisterio, pintores, escultores, poetas, escritores, actores, músicos, así como galeristas y promotores culturales, observaron con distancia y cierto fastidio las negociaciones entre la Sección 22 del SNTE y el gobierno estatal. Incluso cuando la policía reprime a los maestros buscando desalojar la plaza central de la capital el 14 de junio, no se posicionan colectivamente. Juan Pablo Ruiz Núñez, un integrante de esta colectividad, describió la situación de aquel momento como sigue: “He observado que la comunidad académica-artística-cultural establecida en la ciudad de Oaxaca, sus alrededores y en el estado, se halla disgregada, de plano atomizada. Cada quien para su cauce y causas”.⁸ Por supuesto, hubo quienes, de manera individual y más bien ejerciendo su papel de ciudadanos, se sumaron a las marchas de la recién creada APPO o manifestaron, de manera aislada, su preocupación por la situación imperante. Sólo por mencionar un caso notorio, el pintor Francisco Toledo abrió entonces un centro de acopio en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y colocó, a la vez, una fotografía de Gandhi con la frase: “¡No a la violencia!”.

⁷ Sobre la concepción subyacente aquí utilizada acerca del “sistema del arte”, véase Luhmann (1995).

⁸ En *La Patria Ilustrada, publicación emergente*, Oaxaca, septiembre, 2006, p. 8.

Las iniciativas colectivas de creadores e intelectuales tendrían lugar, sin embargo, sólo hacia principio de septiembre. En efecto, ante la pasividad y falta de pronunciamiento de la “comunidad”, en el centro cultural Nueva Babel –fundado en septiembre de 2001 y concebido como un espacio para dar oportunidad a los artistas que no tenían cabida en el circuito cultural oficial como, por ejemplo, el MARCO o los teatros Macedonio Alcalá o Juárez– se organizó, el 7 de septiembre, la Barricada Plástica Femenina, una mezcla de evento político, performance, concierto de jazz, danza y exposición de 50 pinturas. “La idea era hacer la exposición en Nueva Babel, salir a una barricada y solidarizarnos con la gente allí. Así se decidió intervenir una barricada, y nos fuimos a la más cercana, en la calle de Morelos esquina con Crespo. Allí se encontraba un camión cruzado que bloqueaba el paso a la Plaza de la Danza, en donde se ubicaba el plantón alrededor del palacio municipal. Al camión lo forramos con tela y en ella pintamos consignas y todo lo que se nos ocurriera. En el toldo, pusimos veladoras. Un chavo tocó el yembé arriba del camión; otros hicieron arengas políticas; y algunos más recitaron poesía. Hacia las 11:30 de la noche nos regresamos al local a seguir la fiesta” (entrevista con Valente Plascencia, fundador de Nueva Babel, 14 de noviembre de 2009).⁹

Una semana después de la intervención de la Barricada Cultural Plástica, se inauguró el 16 de septiembre, en La Curtiduría, la exposición colectiva *La Patria Ilustrada*, en la que se mostraron trabajos audiovisuales, música, danza contemporánea y pintura. Asimismo, se presentó el primer número de una revista homónima. “En el conflicto, el cerco mediático e informativo no daba muchas opciones para expresarse. [Por esta razón, algunos artistas y creadores] tuvimos la necesidad de contribuir en el movimiento. Entonces, La Curtiduría se transformó en un espacio colectivo de encuentro y expresión que se fundó con este propósito... Invitamos, de manera abierta, a todos los artistas a que presentaran una pieza que expresara lo vivido en esos momentos” (entrevista con Demián Flores, artista plástico, 5 de mayo de 2010). En el primer número de *La Patria Ilustrada*, que reúne parte de los materiales que en su momento se pudieron observar en este espacio, se encuentran colaboraciones de poesía, gráfica, crítica social y reflexiones políticas. En un artículo, Hugo Stewart interpela a los artistas locales con las siguientes palabras: “A la espera de la solución del conflicto que nos aqueja en Oaxaca, los invito a sumarse a la resistencia creativa pacífica por Oaxaca y México”.¹⁰ En este evento no sólo

⁹ Una breve, pero interesante referencia a este evento se puede leer en el texto “Nuestra señora de las barricadas”, de Luis Manuel Amador, aparecido en el n° 1 de *La Patria Ilustrada*, Oaxaca, enero 2007, pp. 9 s.

¹⁰ En *La Patria Ilustrada*, publicación emergente, septiembre, 2006, p. 9.

participan, de una u otra forma, artistas reconocidos, como el fotógrafo Antonio Turok, sino, también, caricaturistas de la Sección 22 del SNTE, dibujantes y estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, cuyas “ideas plásticas y literarias” reflejaban ya, como apuntaría Tamara León, una preocupación clara y directa “en torno al movimiento social oaxaqueño”.¹¹ En este contexto de mayor involucramiento, algunos artistas, como Raúl Herrera entre otros, comienzan a colaborar estrechamente con la APPO haciendo mantas en el zócalo de Oaxaca y participando en la “marcha caravana” a la Ciudad de México, en donde tomarían parte en un evento cultural de protesta en el Hemiciclo a Juárez en la Alameda capitalina. “Todo esto fue un detonante muy importante, porque la gente vio que en la APPO no había sólo maestros sino que también se habían sumado artistas e intelectuales” (entrevista con Valente Plascencia, fundador de Nueva Babel, 14 de noviembre de 2009).

A pesar de la violenta represión policiaca de noviembre de 2006 y el clima de terror que se vivió en los meses siguientes en Oaxaca, el sistema de arte local siguió ocupándose del conflicto social y político y organizó una serie de exposiciones, en las que se recupera y examina el carácter estético de la protesta gráfica de la APPO. Con el sugerente título de *Grafiteros al paredón*, en febrero de 2007, el IAGO abrió sus muros a la intervención de grafiteros, colectivo de artistas de la calle y artistas independientes. Así, muchos de los *estencils* que habían sido conocidos primero en las calles de Oaxaca se volvieron a plasmar, en versiones más elaboradas, para esta muestra. En marzo, en Nueva Babel se organizó la exposición *Las paredes hablan*, “que fue pensada como un homenaje a la gente que sacó su arte a las calles. Por eso, invitamos a grafiteros, que intervinieron todos los muros del local, inclusive los que dan a la calle. Esto nos creó, por cierto, un problema con el ayuntamiento” (entrevista con Valente Plascencia, fundador de Nueva Babel, 14 de noviembre de 2009). En abril y mayo siguientes, en La Curtiduría, se presentó una muestra del arte urbano contextualizándolo en relación con su producción en el subcontinente. Así, Arte Jaguar compartió el espacio con sus contrapartes colombianas Excusado Printsystem y Asalto Urbano, y argentinas, Buenos Aires Stencil y Run don’t Walk, en la exposición colectiva *Stencilatinoamerica. Iconografía callejera*.¹² En este mismo espacio cultural tendría lugar, de septiembre a octubre, la exposición de fotografía, videoinstalación y gráfica *Aquí no pasa nada*, que contaría con la participación de Radio Plantón y Mal de Ojo, entre otros.¹³

¹¹ En, *La Patria Ilustrada, publicación emergente*, Oaxaca, septiembre, 2006, p. 12.

¹² Vid. La Curtiduría y Taller de Experimentación Gráfica (2007a).

¹³ Vid. La Curtiduría (2007). Esta exposición itinerante se presentaría también en Canadá, EE.UU. y la Ciudad de México.

Además de los diversos documentales que han merecido la APPO y su protesta en los últimos cuatro años, también vale rescatar el estupendo trabajo editorial de la obra *Memorial de agravios. Oaxaca, México, 2006*, por parte del reconocido pintor oaxaqueño Rubén Leyva (2008). Allí se reúnen un poco más de 200 fotografías de 22 fotógrafos nacionales e internacionales, que documentan, de manera impactante, las diferentes etapas del conflicto del 2006. Aunque de menor formato que las fotografías publicadas, pero de gran calidad en la impresión, el volumen contiene asimismo una selección de grafitis, pintas y *esténcils*.

No es necesario continuar las referencias al conjunto de exposiciones en Oaxaca, el país y el extranjero de las obras de los artistas de la calle. Lo importante aquí es, más bien, subrayar el hecho del reconocimiento del trabajo de diferentes “colectivos” por parte del sistema del arte, a través de sus múltiples organizaciones (como museos, galerías, centros culturales, editoriales, revistas especializadas, escuelas de bellas artes, etcétera), y, en consecuencia, su inclusión en las comunicaciones intrasistémicas. La condición de posibilidad de lo anterior han sido las actividades artístico-políticas de la “comunidad” de creadores e intelectuales de Oaxaca, que, asumiendo primero un papel político más activo en el conflicto, empezaron a revalorar posteriormente las manifestaciones gráficas de la protesta simbólica de la APPO y a considerarlas como objetos interesantes desde la perspectiva de observación, el código y los programas del sistema del arte. Un ejemplo de lo anterior es la experiencia del artista plástico Rubén Leyva:

El 14 de julio amanece Oaxaca en un verdadero estado de guerra: helicópteros volando, televisores en el espacio, palos, hules, mantas, catres. Era el surrealismo más puro que uno se pueda imaginar. Como pintor con casi 30 años de trabajo, percibo de inmediato la dimensión e idea estéticas en el movimiento popular, que están allí desde el inicio. Era maravilloso ver todo esto, porque la creatividad se desborda y resulta el único medio para poder denunciar. Así, las fachadas y el legado arquitectónico de cantera de hace casi cinco siglos se convierte en una pizarra para la denuncia. Se podría hablar hoy día de manera muy crítica [sobre los daños de la protesta gráfica provocados en el patrimonio cultural], pero la verdad se caería en el error al ver sólo este punto de la cuestión. La arquitectura y escenografía de la ciudad de Oaxaca resultó *ad hoc* al movimiento popular y su increíble riqueza estética. Pero los protagonistas no son mis colegas, los artistas, sino los artistas anónimos, desconocidos y no reconocidos de las colonias populares organizados en colectivos... ¡Esto era fantástico!... Así, pues, desde el inicio aparece la manifestación plástica en banquetas, en grandes muros, como *esténcils*, pintas y grafitis. Todo esto conduce a que el movimiento popular sea de verdad el más rico en imágenes hoy día. Esta creatividad resultó ser una de las armas más valiosas del movimiento. Pero ésta no se queda sólo en los muros, sino que se expresa, también, en ciertos artefactos para simular la guerra, porque allí sí había una resistencia. Mucha

gente salía a la calle disfrazada con máscaras, pañoletas de colores, escudos africanos y diferentes íconos y con un colorido que rompía, inclusive, con la paleta de la teoría del color. Todo esto se hacía con una imaginaria y una creatividad extraordinarias. Yo sabía que el movimiento estaba metido en una dinámica peligrosa, pero yo no podía deslindarme del gusto de ver esta parte de la creatividad que me llamó de inmediato la atención y me enriqueció mucho. Las vistas de la ciudad resultaban, de pronto, cuadros inesperados (entrevista, 26 de julio de 2009).

En resumen, las intervenciones de grafiteros y colectivos pasaron de la politización propagandística del arte, que tenía lugar dentro del sistema político, a la estetización de la política, al interior del sistema del arte.

VI

Mientras que el sistema del arte local incluía en sus comunicaciones y operaciones las obras de los colectivos de artistas de la calle, al interior de éstos y entre éstos y los grafiteros de las barricadas surgió una polémica en torno a los espacios de producción y exposición de sus trabajos y el sentido que todo ello debería tener. En efecto, participar, aunque de manera subordinada, en el circuito institucional cultural ha provocado, evidentemente, asombro, desconcierto, controversia y reacciones encontradas.

Entre los grafiteros de las barricadas y los colectivos se dio un primer cisma después de 2006, ya que los primeros dejaron de un lado los contenidos políticos de sus intervenciones y regresaron a las formas convencionales del grafiti. En palabras de Itandehui: “Los grafiteros de la nueva generación¹⁴ ya casi no hacen trabajos con contenido político... [Ellos creen] que el momento de pintar fue durante el conflicto. Ahora hacen bombas y letras, pero eso no es político. En cambio, los de la primera generación, como Yesca, Smek, Cer, Vain o los de ASARO, siguen trabajando todavía temas sociales y políticos” (entrevista, 5 de mayo de 2010). Esta diferencia tiene que ver, también, con el hecho de que los grafiteros de la calle consideran que abordar temas políticos y sociales *después* del conflicto no es sino una forma de “vender” el movimiento, de manera “oportunista”, para fines particulares. “Los chavos de las barricadas que hacían grafiti creen que colectivos como Lapiztola o ASARO se aprovechan del movimiento; y lo mismo [valdría para] artistas como Demián Flores, que, según ellos, nunca pintaron en la calle. No ven con buenos ojos, por ejemplo, que Lapiztola diseñe y venda playeras con gráfica alusi-

¹⁴ La entrevistada distingue entre la vieja y la nueva generación de grafiteros: los primeros tienen 26 años o más, mientras que los segundos, 22 o menos.

va al movimiento” (entrevista con Itandehui, artista, 5 de mayo de 2010). Asimismo, piensan que la vinculación de estos colectivos con el sistema del arte despolitiza, paradójicamente, el carácter del grafiti, la pinta y el *esténcil*, porque, en sus intervenciones, ya no “se la rifan [es decir, no se arriesgan] en las calles” y ahora trabajan sólo “de manera legal, es decir, en museos o bardas que les dan”. Por eso se preguntan: “¿De qué sirve hacer una temática muy política, si nada más va a los museos?” (entrevista con Itandehui, artista, 5 de mayo de 2010). En fin, si esta protesta gráfica desea conservar su carácter transgresor, parecen pensar los grafiteros de las barricadas, entonces se debe cultivar *en la calle y para la calle*.

Dado que se trata del mismo sistema de arte, no es de extrañar que una discusión similar haya tenido lugar también entre los artistas más establecidos de Oaxaca. “El movimiento popular en 2006 generó un debate en el seno de la comunidad artística respecto a las maneras de difundir el arte. Algunos de los artistas entrevistados señalaron que el conflicto oaxaqueño sirvió para mostrar que existen formas de hacer público el trabajo de distintos creadores fuera de los canales tradicionales para hacerlo –nos referimos, en este punto, a museos, galerías o eventos organizados por las autoridades gubernamentales–. En efecto, las obras de diversos artistas fueron mostradas directamente en las calles y plazuelas –teniendo a la calle de Alcalá como su principal espacio–, en sitios que devinieron escenarios fundamentales de difusión cultural –nos referimos por ejemplo a la Curtiduría, la Casa Rasta, la Nueva Babel y el Café Central– e incluso en algunas de las barricadas ciudadanas” (Porrás Ferreyra 2009: 240 s.). Asimismo, entre algunos creadores oaxaqueños se percibe también escepticismo en relación a la conveniencia estética y política de haber “enclaustrado” la imaginación creativa de la protesta simbólica *appista*. Así lo manifiesta, por ejemplo, Rubén Leyva: “En este sentido, resultaba preocupante observar, conforme pasaba el tiempo, hacia adónde iba todo esto; porque, hubo un momento, en que, en lugar de fomentar la expansión libre y natural de estos trabajos artísticos y de denuncia en el espacio de la calle, se le empezó a enmarcar, enclaustrar y coartar. Yo quiero ser muy claro y franco, por lo que me atrevo a afirmar que La Curtiduría jugó un papel importante en centralizar, frenar e institucionalizar [las manifestaciones estéticas] del movimiento popular. Afortunadamente hay gente que percibió esto, no cayó en el juego y se distanció de ello” (entrevista con Rubén Leyva, artista plástico, 26 de julio de 2009).

Los colectivos de artistas urbanos no juzgan, por su parte, que estén necesariamente aprovechándose o vendiendo el movimiento, como afirman sus críticos de las barricadas, al ingresar al sistema del arte y continuar con la elaboración de propuestas estéticas con contenido social y político. “Yo digo que todos los colectivos le han entrado, de una forma u otra, al mercado y a las ins-

tituciones. Lo chido [es decir, lo bueno] es que siguen trabajando sus temáticas y que nadie les impone lo que tiene que hacer o el tema a elaborar. Además, ninguno ha perdido la esencia de hacer el trabajo también en las calles. Por supuesto, aquí en los museos estatales de Oaxaca no se les han abierto las puertas; pero sí ha habido exposiciones en el Museo de la Ciudad de México, por ejemplo, y otros lugares. Algunos de estos artistas me dicen, “¿por qué no exponer en galerías o museos? Es como poner un *spot* más, que puede estar en la calle o en museo *nice*; pero lo importante es difundir esto en todos lados” (entrevista con Itandehui, artista, 5 de mayo de 2010). Roberto, miembro de Lapiztola, da un sentido diferente al de sus críticos al hecho de comercializar playeras con motivos gráficos del conflicto de 2006: “Las playeras con contenido político la entendemos como una semilla que puede ser llevada a muchos lados, como una gráfica que va caminando y que puede crear conciencia” (entrevista, 23 de julio de 2009).

Las reservas de ASARO hacia el sistema de arte son de naturaleza política, en primera instancia, y estética, en segundo lugar. En opinión de Smek, uno de sus integrantes, éste cumple una función de “enajenación” del “pueblo” que sólo “le sirve al “sistema” de dominación de la sociedad. Existe una élite de artistas que ya pertenece al capitalismo y con el cual están coludidos. “Les interesa más el dinero que la banda... Lamentablemente, muchos artistas hacen sólo un trabajo meramente estético y se pierden en abstracciones y cuestiones poéticas... [Por esta razón], en el mundo del arte estamos esclavizados por el sistema. Este arte no trata de romper u oponerse al sistema, porque está controlado por las clases altas de la sociedad, que deciden qué es arte y qué no, lo que sí vale y lo que no” (entrevista colectiva con ASARO, 21 de julio de 2009). A pesar de esta posición crítica al sistema del arte, lo cierto es que ASARO sí participa activamente en él, aunque, claro está, no en el circuito institucional “oficial” local, sino fuera de Oaxaca y en el extranjero.¹⁵ No obstante, entre ellos existe el propósito de “romper con este sistema vinculándonos con la sociedad a través del arte. Al involucrarnos estamos haciendo política, porque estamos proponiendo un cambio” (entrevista colectiva con ASARO, 21 de julio de 2009).

Ante esta situación, los colectivos de artistas urbanos están configurando un circuito contracultural alternativo con galerías y talleres como el Espacio Zapata, Nueva Babel, el Tianguis Cultural Libertad y Resistencia o, a en el ámbito nacional, la Revuelta Cultural Mexicana, en donde sus obras y discursos se exponen, intercambian y venden. En este espacio creen que se pueda

¹⁵ Una lista de exposiciones locales, nacionales e internacionales de ASARO se puede consultar en su “Curriculum Vitae”, en ASARO, *A dos años*, Oaxaca, 2009.

“desarrollar, de manera autónoma y autogestiva, un arte social y político”, en el que los “peligros” del individualismo y la mercantilización del arte, así como los intentos de cooptación institucional, serían conjurados. En palabras de Yescas:

Cuando exponemos colectivamente, buscan siempre a los más conocidos de ASARO y al que tiene el trabajo más estético. Yo creo que ésta es una estrategia [de las galerías y el mercado], porque ¿hasta qué punto puedes ser tú [en el sistema]? ¿Hasta qué punto puedes entrar en estos lugares? Lo esencial para mí es mantener el compromiso, ser siempre francos no dejarse absorber [por el sistema]... Cuando era estudiante de la Escuela de Bellas Artes [de la UABJO], yo no sabía adónde ir, porque el sistema es bien absorbente. Allí lo que te enseñan es a apostar a abrir una galería. Si lo haces, ya la armaste [es decir, ya triunfaste]. Pero realmente no estás haciendo arte de esta manera; sólo produces algo que no deja huella, no transforma o propone otra cosa: simplemente estás vendiendo (entrevista, 21 de julio de 2009).

La crítica al funcionamiento del sistema del arte por parte de los artistas urbanos puede también entenderse como la lucha, en términos de Pierre Bourdieu, entre un grupo subordinado en el campo artístico local en contra de los actores dominantes y su capacidad de decidir acerca del valor (estético y monetario) de las obras, su exhibición y reconocimiento, así como los apoyos y las oportunidades que pueden gozar o no los que participan en este campo para aumentar su capital simbólico y económico. Evidentemente, no todos los participantes en el sistema del arte tienen la misma influencia y el mismo poder para lograr que sus comunicaciones y obras tengan gran capacidad de enlace, resonancia y condensación para estructurar y organizar el sistema de arte local. Así, pues, estas posiciones escépticas hacia al “arte institucionalizado” pueden ser vistas, también, simplemente como una estrategia de legitimación y búsqueda de validación de su apuesta de conjugación del arte y la política. Lo paradójico es que esto los colocaría como herederos y continuadores de los creadores más oficialistas en la historia artística mexicana contemporánea: los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros.

El fondo de estas diferencias y conflictos entre los colectivos de artistas se encuentra en el hecho de que el sistema de arte opera con un código en el que las comunicaciones, temas y objetos con los que trata se aprehenden “exclusivamente” por su interés estético. El contenido político de las obras de los colectivos se observa y aprecia como un elemento más de estos trabajos, pero sin gozar de ningún valor primordial en sí mismo. En cambio, desde la perspectiva y la experiencia política de los colectivos y demás artistas de la calle, el contenido y el efecto político de sus intervenciones resultan fundamentales en sus

propuestas artísticas. Como anfibios, estos colectivos se mueven tanto en el sistema político como en el del arte y apuestan, por lo menos ASARO así lo hace, a subvertir los códigos sistémicos específicos y reprogramarlos, como diría Alberto Melucci (1996), para anular la diferencia entre el arte y la política. Sin embargo, a causa de la diferenciación funcional de la sociedad moderna en sistemas complejos y altamente especializados, esta pretensión resulta inviable. Lo que sus obras demuestran es, paradójicamente, la autonomía de los sistemas de funciones, pero, también, sus posibles acoplamientos estructurales, préstamos, resonancias e irritaciones mutuas (sobre el tema, vid Luhmann 1998).

Bibliografía

- AHLEMEYER, Heinrich W. (1989): "Was ist eine soziale Bewegung? Zur Distinktion und Einheit eines sozialen Phänomens", en: *Zeitschrift für Soziologie*, Jg. 18, Heft 3, Juni, pp. 175-1991.
- (1995): *Soziale Bewegungen als Kommunikationssystem. Einheit, Umweltverhältnis und Funktion eines sozialen Phänomens*. Opladen: Leske/Budrich.
- ARTE JAGUAR (2007a): "Arte Jaguar", en La Curtiduría y Taller de Experimentación Gráfica, *Stencilatinoamérica. Iconografía callejera*, catálogo de la exposición, abril-mayo. Oaxaca: s. e., s. p.
- (2007b): Video sin título, en: <<http://www.youtube.com/watch?v=vinA3BFQqRM>>, (15 de agosto de 2009).
- ASARO, <blogs.myspace.com/asaroaxaca>, (10 de agosto de 2009).
- BALLESTEROS, Héctor (2007): *Puntos B, cartografías de una ciudad en crisis: Oaxaca 2006, interactivo con 39 barricadas*. DVD Arquitectura.
- BEAS TORRES, Carlos (ed.) (2007): *La batalla por Oaxaca*. Oaxaca: Ediciones Yope Power.
- BOLOS, Silvia (2011): "La participation des organismes civils dans le conflit de Oaxaca 2006", en: *Problèmes d'Amérique Latine*, n. 81, été, pp. 75-102.
- COLADEANGELO, Claudio (2009): *El comal ardiente. ¿Qué pasa en Oaxaca?* Oaxaca: Pueblo Production.
- COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH) (2007): *Informe sobre los hechos de Oaxaca*. Barcelona: CCIODH-UACM.
- CORDERO, Patricia (2008): "Grafiti Jaguar: arte de protesta", en: *Excélsior*, 10 de agosto de 2008, <http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/grafiti_jaguar_arte_de_protesta/312443>, (10 de agosto de 2009).
- CORTÉS, Joel Vicente (coord.) (2006): *Educación, sindicalismo y gobernabilidad en Oaxaca*. Oaxaca: SNTE.
- Cuadernos del Sur* (2007), año 12, n° 24/25, noviembre, Oaxaca.
- DENHAM, Diana y CASA Collective (2008): *Teaching rebellion. Stories from the grass-roots mobilization in Oaxaca*. Oakland: P.M. Press.

- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ (2009): *Mi Oaxaca linda*, tríptico.
- “Editorial”, en: *Penélope. Diseño, gráfica y sociedad, Oaxaca, Gráfica 2006, carteles, esténcil, grafiti y grabados*, 2010, enero, n° 6, sin paginación.
- El Cotidiano* (2008), UAM-A, México, año 23, marzo-abril.
- Espacio Zapata*, <www.espaciozapata.blogspot.com>, 2008, (10 de agosto de 2009).
- ESTRADA Saavedra, Marco (2008): *Sistemas de protesta*, manuscrito inédito.
- (2012): “*Vox populi*. La difusión mediática de la protesta de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”, en: Estrada Saavedra, Marco (coordinador), *Protesta social. Tres estudios sobre movimientos sociales en clave de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann*. México: El Colegio de México, pp. 45-104.
- (2010): “La anarquía organizada: las barricadas como el subsistema de seguridad de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”, en: *Estudios Sociológicos*, vol. XXVIII, n° 84, septiembre-diciembre, pp. 903-939.
- FREIDBERG, Jill (2007): *Un poquito de tanta verdad*, Producción de Corrugated Films con la colaboración de Mal de Ojo TV, Seattle.
- GARCÍA HERNÁNDEZ, Arturo (2008): “Asaro, una respuesta cultural ante el control de los medios”, en: *La Jornada*, 3 de noviembre. Reproducido en: <blogs.myspace.com/asaroaxaca> (10 de agosto de 2009).
- GARDUÑO, Armando/SALCIDO, Amelia (2008): *El Muro*, DVD, UAM-X, México.
- GIARRACCA, Norma (2008): *Cuando hasta las piedras se levantan. Oaxaca, México, 2006*. Buenos Aires: Antropofagia.
- GIDDENS, Anthony (2002): *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza Editorial.
- HELLMANN, Kai-Uwe (1996): *Systemtheorie und neue soziale Bewegungen. Identitätssprobleme in der Risikogesellschaft*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- (1998): “Systemtheorie und Bewegungsforschung. Rezeptionsdefizite aufgrund von Stildifferenzen oder das Ausserachtlassen von Naheliegenden”, en: *Rechtshistorisches Journal*, Jg. 17, pp. 493-510.
- (2000): “...und ein grösseres Stück Landschaft mit den erloschenen Vulkanen des Marxismus. Oder: Warum rezipiert die Bewegungsforschung Luhmann nicht?”, en: De Berg, Henk/Schmidt, Johannes (eds.): *Rezeption und Reflexion. Zur Resonanz der Systemtheorie Niklas Luhmanns ausserhalb der Soziologie*. Frankfurt: Suhrkamp, pp. 411-439.
- JAPP, Klaus P. (1984): “Selbsterzeugung oder Fremdverschulden. Thesen zum Rationalismus in den Theorien sozialer Bewegungen”, en: *Soziale Welt*, Jg. 35, Heft 3, pp. 313-329.
- (1986a): “Kollektive Akteure als soziale Systeme?”, en: Unverferth, Hans-Jürgen (ed.): *System und Selbstproduktion. Zur Erschliessung eines neuen Paradigmas in den Sozialwissenschaften*. Frankfurt/Bern/New York: Peter Lang, pp. 166-191.
- (1986b): “Neue soziale Bewegungen und die Kontinuität der Moderne”, en: Berger, Johannes (ed.): *Die Moderne-Kontinuitäten und Zäsuren*. Göttingen: O. Schwartz, pp. 311-333.
- (1990): “Das Risiko der Rationalität für technisch-ökologische Systeme”, en: Halfmann, Jost/Japp, Klaus Peter (eds.): *Riskante Entscheidungen und Katastrophene-*

- potentiale. Elemente einer soziologischen Risikoforschung*. Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 34-60.
- LA CURTIDURÍA (2007): *Aquí no pasa nada*, catálogo de la exposición. Oaxaca: La Curtiduría.
- LACHE BOLAÑOS, Norma Patricia (2009): "Intervenciones plásticas en el entorno de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca", en: Martínez Vásquez, Víctor Raúl (coord.): *La APPO: ¿rebelión o movimiento social? (Nuevas formas de expresión ante la crisis)*. Oaxaca: IISUABJO, pp. 199-217.
- LAW, Yihn (2008): *Sígueme contando. Sonidos de la lucha oaxaqueña*, Producción CESOL/luzKemada, Oaxaca/C.d. México.
- LEÓN, Andrea (2009): "El grafiti y su historia en Oaxaca", en: ASARO, <blogs.myspace.com/asaroaxaca>, (10 de agosto de 2009).
- LEÓN, Tamara (2006): *La Patria Ilustrada, publicación emergente*, Oaxaca, p. 12.
- LEYVA, Rubén (2008): *Memorial de agravios, Oaxaca, México, 2006*. Oaxaca: Marabú Ediciones.
- LOBO, Fernando (2010): "La pared es el medio", en: *Penélope. Diseño, gráfica y sociedad, Oaxaca, Gráfica 2006, carteles, estencil, graffiti y grabados*, enero, n° 6, sin paginación.
- LUHMANN, Niklas (1987): *Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt: Suhrkamp.
- (1992): *Sociología del riesgo*. Guadalajara: Universidad Iberoamericana/Universidad de Guadalajara.
- (1995): *Die Kunst der Gesellschaft*. Frankfurt: Suhrkamp.
- (1996): *Protest. Systemtheorie und soziale Bewegungen*, herausgegeben und eingeleitet von Kai-Uwe Hellmann. Frankfurt: Suhrkamp.
- (1998): *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Frankfurt: Suhrkamp.
- (2000): *Die Politik der Gesellschaft*, herausgegeben von André Kieserling. Frankfurt: Suhrkamp.
- (2005): "Interaktion, Organisation, Gesellschaft", en: *Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 9-24.
- MAL DE OJO TV (2007): *Resistencia visual 1*, DVD, Oaxaca.
- MAL DE OJO TV/COMITÉ DE LIBERACIÓN 25 DE NOVIEMBRE (2007): *Compromiso Cumplido*, DVD, México.
- MAL DE OJO TV/CONTRAIMAGEN (2007): *Morena*, DVD, Oaxaca, marzo s/e.
- MARTÍNEZ VÁSQUEZ, Víctor Raúl (coord.) (2009): *La APPO: ¿rebelión o movimiento social? (Nuevas formas de expresión ante la crisis)*. Oaxaca: IISUABJO.
- (2007): *Autoritarismo, movimiento popular y crisis política: Oaxaca 2006*. Oaxaca: UABJO/Instituto de Investigaciones Sociológicas/Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño/A.C./EDUCA/Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
- MEJÍA, Gina (2009): "Captan imágenes a poetas urbanos", en: ASARO, <blogs.myspace.com/asaroaxaca>, (10 de agosto de 2009).
- MELUCCI, Alberto (1996): *Challenging codes. Collective action in the information age*. Cambridge: Cambridge University Press.

- MEZA VILLARINO, Inti (s. a.): “Escribir la vida en las calles. Conversación con Smeck del colectivo Arte Jaguar”, en: <<http://666ismocritico.wordpress.com/2009/03/14/598/>>, (10 de agosto de 2009).
- NEVEAR, Louis E. V. (2009): *Protest graffiti Mexico: Oaxaca*. Con fotografías de Elaine Sendyk. New York: Mark Batty Publisher.
- ORTIZ FRANCO, Itandehui (2007): “Resistencia visual. Stencil Oaxaca”, en: <<http://www.youtube.com/watch?v=FLEOP9SZEfU>>, (15 de agosto de 2009).
- (2009): “Curriculum delictivo. atake visual 132k. Grafiti y stencil Oaxaca, foto, video y edición”, en: <<http://www.youtube.com/watch?v=9CF1JgF8H4k>>, (15 de agosto de 2009).
- OSORNO, Diego Enrique (2007): *Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI*. México: Grijalbo.
- PARDO, Elena (2007): “Arte Jaguar + Acoamonchi (una probadita)”, en: <http://www.youtube.com/watch?v=A22_rg6jCpU>, (15 de agosto de 2009).
- Penélope. *Diseño, gráfica y sociedad, Oaxaca, Gráfica 2006, carteles, estencil, graffiti y grabados* (2010), enero, nº 6, sin paginación.
- PORRAS FERREYRA, Jaime (2009): “Las expresiones artísticas y la participación política: el conflicto oaxaqueño de 2006”, en: Martínez Vásquez, Víctor Raúl (coord.): *La APPO: ¿rebelión o movimiento social? (Nuevas formas de expresión ante la crisis)*. Oaxaca: IISUABJO, pp. 219-245.
- RECONDO, David (2007): *La política del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca*. México: CIESAS/CEMCA.
- RUIZ NÚÑEZ, Juan Pablo (2006): *La Patria Ilustrada, publicación emergente*, Oaxaca, p. 8.
- SIN AUTOR (2008): “Guerra visual”, en: <http://www.youtube.com/watch_popup?v=FLEOP9SZEfU>, (15 de agosto de 2009).
- SOTELO MARBÁN, José (2008): *Oaxaca: insurgencia civil y terrorismo de Estado*. México: Era.
- STEWART, Hugo (2006): *La Patria Ilustrada, publicación emergente*, Oaxaca, p. 9.
- TOVAR, Patricia, (2009): “Resistencia visual”, en: *A dos años*. Oaxaca: ASARO.
- VIDEOHACKERS/INDYMEDIA (2007): *Brad, uma noite mais nas barricadas*, DVD, Videohackers, Indymedia, Familia Bastos producciones-Brasil, Producciones Intermedia-España, s./e.

Trabajo de campo

- Entrevista con Carmen, maestra, 23 de junio de 2009.
- Entrevista colectiva con ASARO, 21 de julio de 2009.
- Entrevista colectiva con la Lapiztola, 23 de julio de 2009.
- Entrevista colectiva con Arte Jaguar, 24 de julio de 2009.
- Entrevista con Rubén Leyva, artista plástico, 26 de julio de 2009.
- Entrevista con Valente Plascencia, fundador de Nueva Babel, 14 noviembre de 2009.
- Entrevista con Demián Flores, artista plástico, 5 de mayo de 2010.
- Entrevista con Itandehui Franco, 5 de mayo de 2010.

II. DERECHO Y ESTADO DE DERECHO

Juan Manuel Palacio

Ley y justicia en el primer “Estado populista”: algunas hipótesis para el estudio comparado de México, Brasil y Argentina

El presente trabajo expone las principales hipótesis de una investigación en curso sobre los primeros gobiernos de Perón en Argentina, que sostiene una mirada comparativa con otras experiencias del llamado “primer populismo” (o “populismo clásico”) latinoamericano, en particular con los casos de Brasil y México. El objetivo general de dicha investigación es analizar el rol que tuvieron tanto la legislación social como muy especialmente los nuevos organismos estatales de resolución de conflictos (los nuevos fueros laborales, las cámaras arbitrales, los organismos de conciliación y arbitraje) en la implementación del Estado social en América Latina, así como en las formas cotidianas de construcción de hegemonía de estos gobiernos populistas. El estudio se concentra en el ámbito rural de la Argentina –principalmente aunque no exclusivamente en la región pampeana– y analiza las relaciones laborales y contractuales entre terratenientes, arrendatarios, campesinos y trabajadores, apoyándose en una variedad de fuentes documentales, con un eje en los expedientes judiciales de los diversos organismos de conciliación y arbitraje y de los tribunales laborales.

Las hipótesis que se despliegan a continuación tienen un carácter fuertemente preliminar y exploratorio y no pretenden dar una visión concluyente de los problemas que abordan. Por el contrario, por el momento sólo constituyen líneas interpretativas que guían la investigación, originadas en la lectura de trabajos historiográficos recientes sobre estos temas en los tres países considerados y en la pregunta sobre la posibilidad de construir una agenda de investigación comparativa sobre estos temas.

En la primera parte se pasa rápida revista a “los hechos” en los que se basa esta reflexión, esto es, a los cambios que, en materia legal y judicial en el terreno laboral, se dan más o menos contemporáneamente en cada uno de los países considerados. Son esos “hechos”, tanto por su contemporaneidad como por su similar contenido, los que invitan –hasta podría decirse, exigen– la comparación. En la segunda parte se ensaya una reflexión preliminar sobre las distintas novedades que exhibe la historiografía reciente sobre los populismos

“clásicos” latinoamericanos en los países mencionados, tratando de establecer áreas de contacto, así como diferencias y áreas de vacancia. En la tercera se exponen las principales hipótesis de trabajo que guían el proyecto, que si bien pretenden, con los matices que sean necesarios, tener validez para los distintos países considerados, están construidas principalmente en base a la observación de la experiencia argentina.

Los “hechos”

Con pequeñas variaciones temporales y con ritmos también sólo ligeramente distintos, durante las décadas de 1930 y 1940, México, Brasil y Argentina produjeron una cantidad inédita de leyes sociales y laborales, que tanto por su cantidad como por su contenido marcaron una clara ruptura con el pasado. Se trató en todos los casos de un conjunto heterogéneo de leyes, decretos y resoluciones, pero también de organismos de aplicación como ministerios, secretarías, departamentos, que si bien en algunos casos no eran enteramente nuevos y tenían antecedentes históricos en décadas anteriores (v. g. ministerios de Trabajo que antes habían sido departamentos o secretarías), constituían un aparato de intervención del Estado sobre las relaciones sociales y contractuales (entre trabajadores y empleadores, entre arrendatarios y terratenientes) de una envergadura inédita. También era inédito el cerrado discurso pro-obrerista, de reivindicación de las clases trabajadoras y campesinas con que los respectivos gobiernos sostenían estas políticas, presentándolas como hitos fundacionales en su historia y como parte fundamental de la causa nacional que encarnaban.

Dentro de este conjunto de nuevas instituciones destacan las leyes y los juzgados laborales, ya que el proceso de implementación del “nuevo derecho” significó una batalla particular para estos Estados y un aspecto central en su “causa” nacional y “revolucionaria”.¹ Aquí también es necesario aclarar que, si bien algunas leyes protectoras del trabajo, así como algunos organismos estatales de control y regulación, ya existían durante el periodo conservador-

¹ En efecto, el “nuevo derecho” había nacido de la crítica al liberalismo y se sostenía en principios que cuestionaban los fundamentos mismos del orden liberal. En particular, la idea del “contrato de locación” en la que se enmarcaba a las relaciones laborales en los códigos civiles, que ahora se reemplazaba por la idea de un contrato entre partes desiguales que el Estado y la legislación debían proteger. Estas ideas –que en verdad se venían debatiendo en foros jurídicos y políticos en las décadas anteriores– no se van a implementar sin fuertes resistencias del *establishment* jurídico y político de cada uno de estos países y sólo lo harán luego de mucho debate y conflicto.

liberal anterior (el Porfiriato en México, la Primera República en Brasil y el llamado “orden conservador” en la Argentina), éstas eran en verdad muy escasas y se cumplían en forma limitada. Por el contrario, durante los años treinta y cuarenta del siglo xx (dependiendo del país), no sólo las leyes y organismos anteriores que ya existían adquirieron un impulso nuevo (v. g. normas que pasaron a formar parte de códigos o leyes mayores u organismos cobraron otra envergadura dentro del Estado) sino que hubo creación de una infinidad de leyes y organismos nuevos, que sin exagerar puede decirse que alteraron buena parte del orden jurídico preexistente.

En cuanto a la legislación laboral, la cronología es clara. México, pionera en la región y en el mundo, define en el artículo 123 de su Constitución de 1917 el inventario de derechos sociales y laborales con un sentido programático: las décadas siguientes serán las de la progresiva conversión en leyes de esos principios, en un proceso que culmina en la Ley Federal del Trabajo, de 1931.² En Brasil, el gobierno provisional surgido de la revolución de 1930 aprueba diversas leyes laborales a poco de asumir el poder (entre otras, la Ley de Sindicatos) que luego adquirirán rango constitucional en 1934 —que en su artículo 121 reconoce los sindicatos y enumera derechos sociales y laborales básicos, a la manera del 123 mexicano— proceso que alcanza su clímax con la aprobación de la monumental Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) en 1943, verdadero compendio de las leyes laborales brasileñas existentes hasta entonces (Barros Biavaschi 2005; French 2004). En Argentina, el gobierno surgido del golpe militar de 1943 aprueba diversas leyes sociales y laborales (de asociaciones sindicales, de vacaciones, de regulación del trabajo rural) y luego el primer gobierno de Perón les da nuevo estatus en leyes más amplias (como la Ley 12.921, de 1946, que agrupa, dándoles fuerza de ley, a las diversas regulaciones y decretos de años anteriores, o la Ley de Trabajo Rural, de 1947) y también rango constitucional en la reforma de la Constitución de 1949.

En todos los casos analizados, estas leyes no sólo dan a los trabajadores derechos y protecciones que eran nuevos (vacaciones y feriados pagos, salarios mínimos, salarios anuales complementarios, derecho a la asociación, jornadas y condiciones de trabajo regulados, entre otros), sino que generan —cierto es, gracias también a una muy efectiva retórica oficial— la sensación de un cambio de época entre los trabajadores, como ha sido ya repetidamente señalado por la historiografía de estos países.

² El proceso de reglamentación del artículo 123 no se dio sin resistencias y sobresaltos. No pocas de esas resistencias tenían origen en las dirigencias estatales, que no querían perder la potestad de regulación del trabajo a favor del Estado nacional. Los años que van de 1917 a 1931 son testigos de estas marchas y contramarchas de diversos proyectos de ley tendientes a reglamentar el artículo 123. Véase Bensúsán 1986 y 1989; Middlebrook 1995.

Menos estudiada por dichas historiografías, pero igualmente decisiva, fue la creación de mecanismos y organismos diversos de implementación y control, así como de resolución de conflictos, que diseñaron estos gobiernos para la aplicación de estas leyes. Se trata, por un lado, de la creación de una burocracia específica dentro del Estado nacional para atender la cuestión laboral (supervisando el cumplimiento de la legislación, controlando las asociaciones y sindicatos) y específicamente –dentro o fuera de aquélla– la de organismos específicos para atender el conflicto laboral, que presumiblemente se iba a acrecentar como consecuencia de la implementación de las nuevas leyes.

Aquí, nuevamente, la cronología es coincidente en los distintos países, llevando México delantera. En 1917 se crea en ese país la Dirección de Trabajo dentro de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo³, que se convierte en Departamento de Trabajo Autónomo en 1932 y en Secretaría de Trabajo en 1940. Por otra parte, ya en el citado artículo 123 de su Constitución de 1917 se prevé el mecanismo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje con representación tripartita para la resolución de conflictos laborales, primer antecedente de la justicia laboral en ese país.⁴ Además de atender el conflicto, estas Juntas tenían funciones decisivas, como el reconocimiento oficial de sindicatos, la sanción de los convenios colectivos (o “contratos-ley”) de un determinado sindicato con la industria y el establecimiento del salario mínimo. Muy disputadas por empleadores y en general por las burguesías (y a veces los gobiernos) locales, estos mecanismos de resolución de conflicto van a ser fortalecidos por un fallo de la Corte Suprema de 1924 –que da a sus decisiones fuerza de ley (Suarez-Potts 2009)– y luego por la Ley Federal del Trabajo de 1931, que crea un Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje, en manos del Poder Ejecutivo (con Juntas subsidiarias en el nivel estadual y municipal), para resolver conflictos tanto colectivos como individuales.⁵ Este sistema perdura en México hasta el día de hoy en manos del Poder Ejecutivo.

En Brasil, el Departamento de Trabajo, que existía desde 1918, fue transformado por el gobierno revolucionario de Vargas en ministerio en 1931. Asimismo, en 1932 se crean por decreto las Juntas de Conciliação e Julgamento para atender a los conflictos individuales de los trabajadores, así como las Comissões Mistas de Conciliação, para los colectivos. La Constitución de

³ Existía un Departamento Nacional del Trabajo desde 1911, en el mismo estilo y espíritu “reformista” de los que también existían en Brasil y Argentina en la década de 1910.

⁴ Aunque en verdad éstas ya existían en diversos estados desde 1910. Véase Middlebrook 1995; De la Cueva 1963; Besunsán 1989; Montes de Oca Navas 2000; Suarez-Potts 2009.

⁵ El sistema federal había sido creado por Calles en 1927 y es incluido y ampliado en la LFT.

1934 preveía en su artículo 122 la organización de una Justicia del Trabajo, de la misma manera que la de 1937, que da origen al Estado Novo, su creación como órgano administrativo dentro del Ministerio de Trabajo, algo que se implementa por decreto recién en 1940. Seis años más tarde, la JT se convierte en un fuero nuevo dentro del Poder Judicial (Varusa 2002; Barros Biavaschi 2005).

En Argentina, el gobierno de la Revolución de Junio de 1943 transforma en ese año el Departamento de Trabajo (que existía desde 1912) en Secretaría de Trabajo y Previsión, y el gobierno de Perón lo convierte en ministerio en 1949. Por otro lado, un decreto del gobierno militar de 1944 dispone la creación de los Tribunales del Trabajo a nivel nacional, organizándose los de la Capital Federal en 1945 y los de la provincia de Buenos Aires en 1947.⁶ En ese mismo año, la Ley 13.020, sobre Trabajo Rural, crea en el ámbito del Ministerio de Trabajo la Comisión Nacional de Trabajo Rural, destinada a entender en todo lo concerniente a la regulación del trabajo rural y a intervenir (“en procura de una conciliación”) en las controversias que pudieran surgir por la aplicación de las leyes laborales. La Comisión estaba constituida por dos delegados del Ministerio de Agricultura, un representante de los obreros y otro de los patronos y su presidencia ejercida por un funcionario de la Secretaría de Trabajo.⁷

Este rápido repaso de la cronología de la creación de leyes sociales e institutos de protección y regulación del trabajo en México, Brasil y Argentina revela algunas similitudes en los procesos y permite extraer algunas conclusiones muy generales:

1. La creación de organismos de implementación de las nuevas leyes laborales y de control del trabajo fue tan fundamental como la misma aprobación de leyes sociales y fue parte inseparable de un único proceso. Dentro de estos nuevos institutos, fueron clave aquellos diseñados para atender los conflictos que generara la nueva legislación (juntas de conciliación, justicia del trabajo, etc.).

2. Es necesario comprender la creación de organismos específicos para atender la cuestión laboral y contractual dentro del proyecto más amplio de profunda transformación de las estructuras del Estado por parte de estos gobiernos llamados “populistas”. Ésta tenía como objetivo no sólo mejorar su

⁶ El resto de las provincias fueron organizando los suyos en los años subsiguientes.

⁷ La ley disponía que el nuevo instituto se organizara en diferentes “comisiones paritarias” locales a lo largo de todo el país, con la función de regular las condiciones y jornadas de duración del trabajo rural así como de fijar anualmente los salarios para cada actividad. También cumplían funciones de policía del trabajo en colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión, pudiendo levantar actas de infracción.

eficacia para la regulación, el control y la planificación —a través de procesos más estrictos de selección e ingreso y de la formación de sus cuadros técnicos en cursos de capacitación— sino también fomentar un espíritu de cuerpo y un sentido de misión afín a la “causa” nacional en los agentes burocráticos (entre otros, Berrotarán *et al.* 2004; Berrotarán 2008; Ferreira 1997)

3. Este acrecentamiento de la burocracia del Estado nacional era coherente con la intención de estos gobiernos de ejercer un control centralizado del país desde el gobierno central. Existe, detrás de la creación de organismos nuevos —conjuntamente con la intención de hacer más eficiente el Estado— la vocación de “conquistar” el territorio nacional, de nacionalizar el imperio de la ley, de garantizar la efectiva implementación de las leyes. Aunque con variaciones en los distintos países considerados, esta pretensión provocó no pocos conflictos entre el Estado nacional y los poderes locales (ya fueran éstos económicos, gubernamentales o burocráticos).

4. La similitud en cuanto a la variedad y el contenido de las leyes y organismos, como así también su contemporaneidad en los distintos países, sugieren que éstas no se concibieron aisladamente en cada país, sino que eran el fruto de un clima de época, de influencias teóricas, fuentes jurídicas, experiencias y tradiciones comunes. También, que los contactos y la circulación de esas ideas deben haber sido fluidos entre estos países y las experiencias mutuamente conocidas y compartidas (a nivel académico y universitario, pero también a nivel de los funcionarios de la alta burocracia).

La historiografía

La historiografía latinoamericana de las últimas décadas ha vuelto su mirada sobre el momento de construcción de los estados sociales o “de bienestar” a mediados del siglo xx, con una fuerte impronta revisionista. Así, se han multiplicado trabajos que abordan aspectos escasamente estudiados previamente, como la dimensión regional y local del fenómeno “populista”, la conformación y el funcionamiento de la nueva burocracia estatal o algunas áreas específicas de políticas públicas —más allá de la tradicional mirada sobre la política laboral y obrera, que concentró casi toda la atención en el pasado— proponiendo una imagen del fenómeno mucho más fragmentada que la que sostenían las visiones clásicas.

Logran así desarmar el sentido común imperante sobre esos regímenes (v. g., que se sustentaban en un liderazgo compacto y verticalista; que articularon un intervencionismo eficaz de la mano de una burocracia omnipresente; que ejercieron un control político férreo y centralizado; y que encarnaron una verdadera “revolución” que rompió drásticamente con la tradición y la cultura política anterior) y ponerlos en caja con la historia, reinterpretando todas las

supuestas novedades que trajeron en términos de continuidades con el pasado. En particular, han revisado la imagen de unas clases subalternas pasivas y cooptadas fácilmente por líderes de perfil “carismático”, para indagar en la racionalidad del apoyo crítico y condicional que esos sectores dieron a estos gobiernos en momentos históricos precisos (Palacio 2010).

Entre las novedades que exhiben estas historiografías se cuentan una importante renovación de los temas de investigación, así como de las miradas sobre temas tradicionales, con aportes desde perspectivas historiográficas diversas, como la historia cultural, la historia del arte, los estudios migratorios, la historia de las ideas, sin que ninguna reclame una visión hegemónica sobre el tema. También exhiben cambios en las escalas de análisis —con una marcada predilección por los estudios regionales y locales por sobre los nacionales— y en las perspectivas teóricas, con una notable preferencia por interpretaciones “culturalistas”, que resaltan la esencial inestabilidad y ambigüedad del mundo social y en particular del Estado y privilegian el estudio de las prácticas cotidianas de los actores sociales. El resultado es un mosaico interpretativo de una gran riqueza y heterogeneidad que, simultáneamente, propone una mirada sobre el fenómeno de los “populismos clásicos” mucho más fragmentada (los nuevos trabajos prefieren ya no hablar del “peronismo”, “cardenismo” o “varguismo”, sino cada vez con más frecuencia de “peronismos” o “varguismos”, en plural) que la que proponían las visiones tradicionales sobre estos regímenes.

Por último, esta renovación estuvo íntimamente ligada a la de los instrumentos utilizados para realizar estos originales abordajes. En efecto, las fuentes primarias también se han enriquecido, sumándose ahora a las más tradicionales (la prensa, las proclamas de los sindicatos, los debates parlamentarios, los textos legales, etc.) herramientas como los programas de los cursos de capacitación de la burocracia (y los textos de los manuales que se usaban allí); las trayectorias burocráticas, muchas veces reconstruidas a través de entrevistas; la iconografía, la arquitectura, y la fotografía; las cartas que los trabajadores escribían a los presidentes con demandas cotidianas, entre muchas otras.

Muy especialmente, el análisis de los expedientes judiciales (de la justicia laboral, de las juntas de conciliación, etc.) han sido fundamentales para estos revisionismos, dada la potencialidad que tienen esos archivos para esclarecer motivaciones y modalidades del conflicto social, así como para estudiar las culturas legales que gobiernan una sociedad (entendidas como conocimientos y como prácticas y usos de la ley y las instancias judiciales) y para asomarse a las experiencias de los trabajadores frente al Estado.⁸ En particular, como lo

⁸ El uso de estas fuentes, así como de las preguntas que les hacemos, es tributario de la llamada “nueva historia legal” latinoamericana, expresión historiográfica de un campo inter-

han demostrado algunos trabajos de la historiografía brasileña reciente, los expedientes de la justicia laboral resultan clave para evaluar continuidades y cambios como consecuencia de la implementación de las leyes laborales durante los gobiernos “populistas”, así como para brindar un panorama más complejo que el que proporcionaba la imagen de una clase trabajadora cooptada por dichos regímenes (Fortes *et al.* 1999; Marques Mendes 2005; Fortes 2004; Teixeira da Silva 1995; Welch 1999; Varusa 2002).

La historiografía argentina reciente sobre el primer peronismo

En las últimas décadas, la historiografía argentina, luego de muchos años de desatención, ha “revisitado” los años de los primeros gobiernos peronistas (rebautizándolos, además, como los del “peronismo clásico”). En efecto, la renovación historiográfica en la Argentina del retorno a la democracia no se había encargado del estudio de este período, dejándolo en manos de sociólogos, politólogos o ensayistas. Esto fue así en parte porque la agenda de investigación –en consonancia con la agenda política del alfonsinismo, que proponía una superación del peronismo en un “tercer movimiento histórico”– también se había propuesto “desperonizar” nuestra historia política, buscando las claves políticas, económicas y sociales de la Argentina de entonces en un pasado más remoto.⁹ En particular, la historia política de los trabajadores (o de los “sectores populares”, como prefería denominárselos) se reescribió con la mirada puesta en las tesis de Gino Germani acerca del apoyo incondicional que las “masas disponibles” dieron a Perón en 1945. Estos estudios prefirieron

disciplinario conformado en las últimas décadas al calor de influencias teóricas diversas (de Foucault a Clifford Geertz, pasando por reelaboraciones de Gramsci en E. P. Thompson y los Subaltern Studies) y de la centralidad que cobraron los sistemas judiciales latinoamericanos desde las transiciones democráticas de los años ochenta. Estos trabajos consideran a la instancia judicial como arena de conflicto social, en donde se dan cita y se confrontan diversos discursos y culturas legales (estatales y de la sociedad civil, positivas y consuetudinarias, letradas y legas, nacionales y locales) y como un mirador privilegiado de las relaciones sociales, que en particular permite escuchar las “voces subalternas”, difícilmente audibles en otras fuentes, oficiales o privadas (Candiotti/Palacio 2007).

⁹ Además de la superación (política e historiográfica) del peronismo en nuestra historia, esta búsqueda de continuidades se fundaba en los nuevos aires epistemológicos, que tendían a desconfiar de los cortes abruptos y fundacionales, para reemplazarlos por procesos de más larga duración. De la mano de esta sospecha, distintos estudios realizados en esos años se fueron encargando de escribir historias más largas de todos aquellos aspectos que supuestamente daban al peronismo su carácter fundador y revolucionario, como sus políticas sociales, el intervencionismo estatal en materia económica, etc. Una reflexión más extensa sobre este punto en Palacio (2006).

en cambio rastrear dicho apoyo en una larga tradición cultural preexistente entre los sectores populares, que incluía una historia también larga de prácticas asociativas y cooperativas construidas en sociedades de fomento, bibliotecas populares, clubes y asociaciones étnicas, que estaban en la base de su identidad y su experiencia política, que era previa al peronismo (Romero 1990; Gutiérrez/Romero 1989). En una clave parecida, las investigaciones de la “nueva historia política”, centradas en los orígenes de la ciudadanía y la esfera pública, se preocupaban por dejar bien en claro que la historia de la movilización política se remontaba mucho más allá de Perón, incluso más allá de las manifestaciones obreras de las décadas anteriores a él (Sabato 1998 y 2001).

El derrumbe del alfonsinismo a fines de los ochenta y el advenimiento del menemismo volvió a cambiar la agenda de investigación historiográfica. El doble desengaño –con la democracia y con la posibilidad de neutralizar la hegemonía política del peronismo– planteaba a los historiadores a la vez una paradoja y una tarea. Una paradoja porque, más allá de la convicción, construida con genuina evidencia histórica, de que el peronismo no había sido todo lo revolucionario que su retórica pretendía, los acontecimientos políticos y electorales volvían a poner a ese partido en el centro de la escena como algo verdaderamente excepcional. Una tarea, ya que esos mismos sucesos políticos ponían nuevamente en evidencia que, más allá de que el peronismo reconociera antecedentes muy sólidos en la historia, era necesaria una indagación profunda en los años de los gobiernos de Perón si se querían encontrar muchas de las claves de la Argentina del siglo xx.¹⁰

De manera que desde hace apenas unos quince años los historiadores han comenzado a llenar, ahora sí, ese curioso vacío historiográfico, de la mano de acercamientos teóricos y metodológicos novedosos como los señalados más arriba. Se han multiplicado así trabajos que abordan la dimensión regional, provincial y local del peronismo (Macor/Tcach 2003; Melon Pirro/Quiroga 2006; Quiroga 2004; Panella 2005; Aelo 2004); la conformación y el funcionamiento de la nueva burocracia estatal (Berrotarán 2003 y 2008; Berrotarán *et al.* 2004; Campione 2003); algunas políticas públicas menos estudiadas, como las de salud (Ramacciotti 2009), inmigración (Biernat 2007), industriales (Belini 2009), de vivienda (Aboy 2005; Ballent 2005) y género (Ramacciotti y Valobra 2004; Barry *et al.* 2008); la relación con la prensa (Rein/Panella 2008; Da Orden/Melon Pirro 2007), el cine (Kriger 2009), la iconografía (Gené 2005), entre otros.

¹⁰ Nadie entendió mejor esa paradoja y esa tarea que Tulio Halperín Donghi –por otra parte, uno de los referentes obligados para esa generación de historiadores–, quien en 1994 volvía a postular sin inmutarse el carácter revolucionario del peronismo y a interpretar la historia del país de la segunda mitad del siglo en esa clave (Halperín Donghi 1994).

Dentro de esta proliferación de acercamientos monográficos, la relación del peronismo con el mundo del trabajo ha sido una línea de investigación más entre otras –y no la más transitada–, de manera que algunas de las discusiones clásicas sobre obreros nuevos y viejos, o sobre el sindicalismo y el apoyo a Perón (Torre 1990; Doyon 2006; Murmis y Portantiero 1971, entre otros) no han sido revisitadas o no han estado en el centro de las preocupaciones (como según se verá, es el caso de la historiografía brasileña reciente). Existen sí, trabajos enfocados en la experiencia cotidiana de trabajadores durante el peronismo –en línea con las preocupaciones de Daniel James (1990)– como su participación en las “unidades básicas” –locales partidarios del partido peronista– (Quiroga 2004 y 2008; Acha 2004; Barry 2009; Melon Pirro/Quiroga 2006); sobre la participación de las mujeres en el movimiento político (Barry 2009), o sobre la especificidad de esas experiencias durante el peronismo, en trabajos de más amplio aliento (Lobato 2001 y 2007).¹¹

A través de estas variadas investigaciones, esta historiografía ha conseguido dismantelar muy eficazmente ese “constructo” llamado peronismo, que consideraban fabricado tanto por la retórica oficial del mismo peronismo en el poder como, luego, por la historiografía “oficial” peronista (y por el discurso político peronista contemporáneo). De la mano de un rico instrumental teórico y metodológico que ha servido bien a este propósito deconstruccionista, se han encargado de desmenuzar al peronismo en diversas partículas (provincias, municipios, actores, políticas específicas, etc.) y de “desenmascarar” su auto-proclamado carácter revolucionario y fundacional, enfatizando nuevamente las continuidades y sometiendo a sus gobiernos a ejercicios de confrontación entre dichos y hechos, entre mitos y realidades, entre discurso y práctica, para demostrar cuánto de realización, de “verdad” ha habido entre todo lo dicho y prometido (Girbal-Blacha 2003).

En cuanto a los usos de fuentes judiciales, si bien la nueva historia legal tiene buenos y variados representantes en la historiografía argentina, todavía son muy escasos los que han encontrado provechoso analizar estos expedientes en la revisión del primer peronismo.¹² Es por eso que las instancias de resolución de conflicto creadas por el peronismo, tanto como el proceso que dio origen a los tribunales laborales (debates parlamentarios, en medios jurídicos y la prensa) constituyen, curiosamente o no, campos casi vírgenes para el análisis.

¹¹ Existen ya algunos de reflexión historiográfica sobre esta nueva literatura sobre el peronismo. Véase Rein *et al.* 2009; Belini/Rougier 2006; Palacio 2010.

¹² Algunas excepciones son Barreneche 2009; Palacio 2009.

La historiografía reciente sobre varguismo y populismo

Aunque coincidente en su espíritu revisionista y probablemente en muchos de sus acercamientos teóricos y metodológicos, el caso de la historiografía brasileña sobre el varguismo es bien diferente al caso argentino, por diversos motivos.

La historiografía reciente sobre el “populismo” brasileño –un período que abarca los distintos gobiernos de Vargas hasta su suicidio en 1954 y se extiende luego hasta la caída de Goulart en 1964– cobró renovado impulso hacia los años noventa, luego de la experiencia del fuerte protagonismo de los trabajadores en el proceso de “*direitas ja*”, que sirvió de inspiración para trazar una historia crítica de la agencia de los trabajadores en el pasado.¹³ Este revisionismo –que a diferencia del caso argentino, estuvo sobre todo en manos de historiadores sociales del trabajo– se propuso discutir la tesis de la supuesta pasividad de los trabajadores en la historia de la consecución de derechos laborales, idea que subyacía tanto al discurso varguista –y al de la historiografía “oficial”– como al del revisionismo de los teóricos brasileños del populismo, como Weffort o Ianni.¹⁴

Hay aquí, entonces, una primera diferencia con las preocupaciones del revisionismo de la historiografía argentina. En Brasil, la discusión no sólo se entabla con el discurso varguista (y la historiografía que lo reproduce) –ése que daba a Vargas la paternidad de la legislación laboral en Brasil y a sus gobiernos como un punto de llegada en la historia de la adquisición de derechos sociales por parte de los trabajadores–, sino también con los primeros críticos de esa visión que postulaban que dichas leyes habían sido solamente un maquillaje, un engaño, un instrumento de manipulación y control cuyo principal objetivo era la desmovilización de los trabajadores. Para la historiografía actual, ambas visiones, contrapuestas en cuanto a la valoración del varguismo, coinciden sin embargo en que sus gobiernos “otorgaron” estas leyes a los trabajadores como una dádiva, que ellos ni reclamaban ni de cuyos beneficios eran del todo conscientes, atrapados como estaban en el aislamiento de las relaciones sociales tradicionales en el Brasil rural. En una versión similar a la interpretación de

¹³ Existen ya algunas reconstrucciones historiográficas de estos revisionismos. Véanse por ejemplo Teixeira da Silva/Da Costa 2001; French 1991 y 2001; Varusa 2000; De Castro Gomes 2002; McCreery 2008; Carneiro Araújo 1997.

¹⁴ Estos últimos postulaban que el propósito detrás de la legislación *trabalhista* no era favorecer a los trabajadores –como pretendía el discurso varguista– sino cooptarlos y manipularlos para de esa manera mantenerlos bajo el control del Estado y prevenir cualquier movilización autónoma. Esta visión también subyace a algunos trabajos historiográficos más tempranos, como en De Castro Gomes 1979; Munakata 1982 (véase Varusa 2000).

Germani sobre el peronismo, los teóricos del populismo brasileño brindaban una imagen pasiva de los obreros “nuevos”, cuya organización y conciencia de clase fue construida desde arriba por un gobierno dadivoso.¹⁵

El revisionismo reciente disputa estas ideas desde varios lugares. Primero, al igual que ocurre en la historiografía argentina, estos trabajos postulan que la historia de las luchas de los trabajadores no nace con Vargas, en 1930, ya que hay una historia más larga de sus luchas durante la Primera República, sin las cuales no pueden entenderse sus acciones ni actitudes frente a los gobiernos de Vargas. Estas experiencias previas fueron clave en el grado de autonomía con que pudieron manejarse en esos años (French 1991 y 1992; De Castro Gomes 1988; Wolfe 1993; entre otros). Segundo, aun cuando las múltiples leyes *trabalhistas* y los organismos para regular el trabajo creados durante los gobiernos de Vargas hayan sido instituidas con el propósito primordial de controlar a los trabajadores y sindicatos y de disipar el conflicto de clases, y aun cuando se hayan dado en un contexto autoritario y represivo, proveyeron un espacio de acción para los trabajadores, que éstos supieron aprovechar cada vez que tuvieron la oportunidad.¹⁶

Esto no sólo implicó generar una conciencia legal sobre sus nuevos derechos (French 2004; Ferreira 2002; Paoli 1988) sino que se transformó en prácticas concretas en los ámbitos judiciales, aun cuando –según sostienen muchos trabajos– eran espacios de limitación y control, más que favorables a los trabajadores (Marques Mendes 2005; Varusa 2002; Morel/Mangabeira 1994; Teixeira da Silva 1995).¹⁷ Tercero, el hecho de que los derechos fueran consagrados en leyes contradice la idea misma de la dádiva, ya que lo que hace la ley es consagrar esos derechos en otro nivel, más formal y definitivo, que si bien no está exento de disputas y negociaciones, le otorga un carácter más definitivo al “pacto populista”. Cuarto, sumado a lo anterior, los derechos no

¹⁵ Interpretación que se origina en los mismos escritos de los hacedores de esas leyes, como Oliveira Viana.

¹⁶ Buscando reestablecer el protagonismo de los trabajadores en la historia política de Brasil, algunos autores postularon que, más que una manipulación, lo que existió fue más bien un pacto entre el Estado populista y los trabajadores, pacto que los trabajadores hacen estratégicamente a favor de sus intereses, dando un “consenso activo”, un apoyo crítico –no incondicional– a Vargas (entre otros, De Castro Gomes 1988 y French 1991 y 1992). Esta tesis es fuertemente discutida por Joel Wolfe (1993 y 1994).

¹⁷ Existe en este punto un debate no resuelto entre los autores, ya que mientras unos, como French, ven a las instancias de resolución de conflictos (las Juntas de Conciliación primero, la JT después) como lugares en los que se burlaban sistemáticamente los derechos de los trabajadores, que por lo tanto preferían no acudir a ellos, para otros fueron un espacio más imprevisible en el que podían ganar pleitos y por lo tanto frecuentemente utilizados por los trabajadores (Varusa 2000 y 2002; Teixeira da Silva 1995).

habrían sido otorgados porque, aun cuando los organismos fueron diseñados para controlar y limitar la acción de los trabajadores, éstos, con sus acciones, rebasaron esos límites, disputando, burlando esas intenciones y usando esas leyes y organismos a su favor, en la línea de lo planteado por E. P. Thompson para Inglaterra.¹⁸

Este revisionismo también llevó –como en el caso argentino– a una reevaluación de las cronologías vigentes sobre la historia de los trabajadores en Brasil. En un primer momento, a fines de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, en el contexto de la experiencia de las luchas de los trabajadores durante los gobiernos militares –y en el contexto académico de auge de los estudios de “esfera pública” y ciudadanía– la historiografía pareció interesarse más por los años de la Primera República –y por los posteriores a 1964– como momentos de acción “autónoma” de los trabajadores, siendo el período “populista” en cierta medida relegado, por considerársele como uno de pasividad y de heteronomía de las clases trabajadoras y por lo tanto menos interesante para el análisis. Más recientemente y bajo una nuevas luces teóricas y metodológicas, los años del varguismo están siendo revalorizados, con investigaciones que buscan identificar espacios de agencia y de acción autónoma de los trabajadores durante los años populistas (Teixeira da Silva/Da Costa 2001).

De esta manera, la historiografía brasileña reciente –en una de las diferencias más notorias con la argentina, que prefiere evitarlo¹⁹– decide entonces discutir la categoría del “populismo”, historizando algunos de sus supuestos fundamentales, como el de la pasividad y la heteronomía de las clases subalternas durante ese período, la ruptura que significó el varguismo en la historia de las clases trabajadoras, el apoyo incondicional al líder, la falsa consciencia de clase y la idea misma del pacto populista. Buena parte de esa revisión está basada en el análisis de las experiencias de los trabajadores frente a diferentes instancias estatales, en particular en el estudio la justicia del trabajo, a través de los expedientes judiciales, lo que marca otra característica distintiva de la historiografía revisionista brasileña. La cantidad y calidad de investigaciones llevadas a cabo en esta línea pone a esa historiografía en un lugar diferente en el contexto latinoamericano.

¹⁸ En ese sentido, parecería que en Brasil los trabajadores tuvieron un papel mucho más importante en la efectiva aplicación de los nuevos derechos que en la Argentina (y para el caso, México).

¹⁹ Con la posible excepción de Raanan Rein (1998).

La historiografía de la Revolución Mexicana y el Cardenismo

Obtener una visión de conjunto del caso de México y su historiografía reciente sobre estos temas es más problemático. Primero porque la dinámica de crecimiento de la historiografía de la Revolución –ese campo historiográfico que por su envergadura no tiene paralelo en la historiografía latinoamericana– hace que el capítulo de la historia laboral sea sólo eso, un capítulo dentro de un revisionismo que además no ha tenido descanso casi desde la Revolución misma (Knight 1989). El otro punto problemático es que, fuera de algunos trabajos que lo han postulado enfáticamente (v. g. Hamilton 1983; Córdova 1974), no existe un consenso tan amplio ni en México ni entre los teóricos principales del populismo en considerar al gobierno de Cárdenas como un ejemplo paradigmático del “populismo clásico” latinoamericano (Falcón 1978). El tercer punto problemático es que esas medidas que se señalaron en el apartado anterior (aprobación de leyes laborales y nuevos organismos de intervención y regulación del mercado de trabajo), se dieron en México en un proceso más gradual, desde el inicio de la Revolución, en 1910. De manera que, si bien son bastante similares tanto en su letra como en su espíritu, la tendencia “obrerista” de la Revolución Mexicana existe desde sus primeros años, más allá de que en algunos aspectos Cárdenas pueda haberlas radicalizado.²⁰ Son más bien los gobiernos de Calles y del denominado Maximato los que exhiben concreciones decisivas en materia legal e institucional en la regulación del trabajo, como la resolución citada de la Corte Suprema de 1924, dando fuerza de ley a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la creación del Sistema Nacional de Arbitraje (1927) y, sobre todo, con la aprobación de la Ley Federal del Trabajo, en 1931.

En cuanto a la literatura específica sobre los trabajadores y su relación con las nuevas leyes e instituciones estatales, no es mucho lo que se ha escrito en los últimos años y el grueso de lo nuevo se ha producido en la academia norteamericana, siendo el trabajo de del politólogo Kevin Middlebrook, *The Paradox of Revolution* (1995), una referencia obligada. Allí, este autor –para quien la entrada de los trabajadores en la política nacional representa la consecuencia de largo plazo más significativa de la Revolución– realiza un estudio detallado del proceso de conformación de las instituciones laborales del Estado revolucionario (del Departamento de Trabajo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social) y en par-

²⁰ De hecho, la radicalización del populismo de Cárdenas, según Hamilton, pasa más por sus acciones en materia rural –con la extensión inédita de la reforma agraria y la organización de la Confederación Nacional Campesina– que por sus innovaciones en materia de organización del trabajo.

ricular de la evolución histórica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en el marco del trabajoso proceso de consolidación del Estado federal.

Otros trabajos se han concentrado también en los procesos de implementación en los distintos estados del artículo 123 de la Constitución de 1917, enfatizando las resistencias que generó en medios estatales (Besunsán 1986 y 1989; Montes de Oca Navas 2000). Estos trabajos, como era el caso de algunos en la historiografía brasileña, se concentran sobre todo en el rol de la Ley Federal del Trabajo (y de las Juntas de Conciliación) en el control del movimiento obrero organizado y en su espíritu esencialmente desmovilizador, estudiando muy especialmente la dinámica de conflictos que generaba la implementación de una legislación nacional del trabajo (la resistencia de las élites y los gobiernos estatales, la discusión política y jurídica del problema federal, etc.). También se concentran en el rol de las Juntas en la reglamentación local de los sindicatos (fijación del contrato-ley, reconocimiento legal, etc.) y en la resolución de conflictos colectivos, mientras que escasean los trabajos sobre los usos individuales de estas instancias por parte de los trabajadores.

Excepciones a estas tendencias son los trabajos de Jeffrey Bortz (1995 y especialmente 2008), que sostiene la tesis de una “revolución de los trabajadores” dentro de la Revolución, desatendida por la historiografía, que sin embargo fue decisiva en el armado del Estado revolucionario y derivó en que México tuviera las leyes laborales más completas y progresistas del mundo occidental de entonces. Más recientemente, William Suarez-Potts estudió la actuación de la Corte Suprema y las Juntas de Conciliación y Arbitraje en México desde 1917, como un intento de “judicializar” las relaciones del trabajo por parte de los gobiernos de la Revolución, en un trabajo donde se plantea cuestiones similares a algunos de los trabajos escritos para Brasil y Argentina (Varusa 2002; Teixeira da Silva 1995; Palacio 2009, entre otros). Así, Suarez-Potts ve a las Juntas como espacios de oportunidad para desplegar discursos de derechos y formulaciones legales, en definitiva, para ir creando una gimnasia legal y procesal en la defensa de sus derechos.

Dichas estas salvedades, el período cardenista no ha estado ausente de revisionismos en los últimos años. En particular, a tono con el camino que ya había señalado Alan Knight (1999), algunos trabajos están poniendo en cuestión tanto la supuesta coherencia interna y fortaleza del Estado cardenista como la eficacia con que logró asentar la autoridad del gobierno central en todo México. Nuevamente aquí las novedades vienen de la mano de historiadores norteamericanos, con estudios sobre las diversas vicisitudes que tuvo la implementación de las políticas cardenistas en los estados de Sonora (Bantjes 1998) y Yucatán (Fallaw 2001). Con diferentes matices, ambos autores se interesan por los diversos significados del cardenismo y su funcionamiento cotidiano en los distintos estados y destacan las limitaciones y fragilidades que tenía el Estado

federal para aplicar sus políticas –e incluso para ganarse el apoyo de sectores populares– en estos estados geográficamente lejanos del país.

Algunas reflexiones generales muy preliminares

La lectura de la historiografía reciente sobre los llamados regímenes populistas latinoamericanos “clásicos” o “primeros” permite extraer algunas conclusiones:

1. El ejemplo de la historiografía brasileña indica que el abordaje del “fenómeno” o “momento” populista por parte de los historiadores es a todas luces productivo y debería ser imitado. Así como ocurrió en su momento con la “teoría de la dependencia” –que a partir de los años ochenta la historiografía latinoamericana sometió a dura crítica, cuestionando la mayoría de sus simplificaciones y buscando ubicar en contextos históricos y nacionales precisos sus generalizaciones–, es necesario reinterpretar al populismo a la luz de las experiencias históricas concretas, sin desecharlo del todo a favor de una fragmentación que renuncie a interpretaciones más generales, sino rescatando su capacidad explicativa. En ese sentido, no hay dudas de la especificidad de ese momento en la historia de estas naciones aquí consideradas –un momento que ha sido y sigue siendo clave en su vida política, social y económica, así como en la historia de la construcción del Estado.

2. Dentro de ese revisionismo del populismo, la “entrada” a través de las fuentes judiciales es ciertamente prometedora, pues permite mejor que muchas otras acercarse vívidamente a la experiencia del Estado de los trabajadores y de otros actores sociales subalternos –una experiencia sobre la que se han construido muchas hipótesis y supuestos, pero que se ha investigado poco– así como a la historia menuda de las agencias estatales y de su construcción cotidiana, en su juego, siempre dinámico y disputado, con la sociedad civil. En estos aspectos, es nuevamente la historiografía brasileña la que lleva la delantera y sería muy aconsejable seguir sus pasos.

3. Las historiografías recientes aquí reseñadas, a pesar de su revisionismo, siguen sosteniendo una mirada más bien negativa sobre los populismos latinoamericanos y sus políticas obreristas.²¹ En efecto, los nuevos trabajos parecen confirmar la tesis de los teóricos clásicos del populismo que sostenía que la intención primera de estos regímenes al promover leyes sociales fue la desmo-

²¹ Una buena interpretación sobre la antipatía generalizada de intelectuales y científicos sociales –de izquierda y de derecha– con el fenómeno populista, en la introducción de Mackinnon y Petrone a su libro sobre el populismo latinoamericano (Mackinnon/Petrone 1999).

vilización y el control de los trabajadores.²² Frente a eso –y esto es lo novedoso en la mirada del último revisionismo– los trabajadores hicieron valer sus derechos gracias a sus luchas y a los usos que hicieron de esas “dádivas engañosas”. En otras palabras, dichos logros se consiguieron *a pesar* de los gobiernos populistas y sus instrumentos de control y no gracias a ellos. Este rasgo interpretativo es más claro para los casos de las historiografías brasileña y mexicana y menos para la argentina, en donde hay una mirada más “positiva” sobre las leyes sociales del primer peronismo y sobre la toma de posición de Perón por los trabajadores, en su desafío a las clases dominantes.²³

4. Una posible explicación de lo anterior podría residir en el hecho de que los estudios que se han basado en los archivos de los nuevos organismos reguladores del trabajo se han concentrado sobre todo en los conflictos colectivos, en donde jugaban más las cuestiones políticas y en donde el Estado nacional normalmente tenía que negociar con las resistencias a veces muy poderosas de los intereses de las burguesías o los gobiernos locales (v. g., frente a la posibilidad de una huelga o del reconocimiento de un sindicato). Es así como estudios basados en expedientes de las juntas de conciliación (tanto en Brasil como en México) suelen mostrarnos al representante del Estado habitualmente del lado de los patrones más que del de los trabajadores y por lo tanto a dichos organismos estatales esencialmente como instrumentos de control y de desmovilización de las clases trabajadoras. En ese sentido, es posible que trabajos basados en el análisis de acciones *individuales* de los trabajadores ante estos organismos –menos organizadas y por cuestiones más menudas y cotidianas– puedan contribuir a matizar esa imagen negativa que se tiene sobre estas Juntas. Dichas causas individuales –al menos, según se desprende del análisis del caso argentino– permiten ver en acción los discursos y estrategias judiciales que despliegan los diferentes actores en estas instancias, el aprendizaje cotidiano de saberes y tácticas procesales por parte de los subalternos o el rol fundamental de abogados y otros intermediarios burocráticos en la transmisión de dichos saberes. En otras palabras, permiten ver el efecto benéfico que tuvieron estos organismos para la construcción cotidiana de la “consciencia legal” de los trabajadores a la que se refería John French, más allá y a pesar de cuales hayan sido las intenciones últimas o “verdaderas” detrás de la creación de estos organismos.²⁴

²² Hay excepciones a lo que se dice, que sólo confirman la regla. Véase Ferreira (1997), De Castro Gomes (2002), Bortz (1995 y 2008), entre otros.

²³ La diferencia aquí puede no limitarse a la historiografía y también deberse a las especificidades de la experiencia histórica del peronismo en la Argentina.

²⁴ En efecto, en las fuentes judiciales en las que se basa el proyecto en curso para el caso argentino (que son principalmente conflictos individuales), la presunción que puede

5. Como ocurría en los trabajos tradicionales, la nueva historiografía sobre el populismo sigue concentrándose marcadamente en el ámbito urbano e industrial y, dentro de él, en los centros urbanos más destacados, ya sean las capitales de los países o sus principales centros industriales. Y si bien se ha avanzado bastante en el análisis de la experiencia populista en las provincias o estados, también en esos casos en general se analiza lo ocurrido en ámbitos urbanos (las capitales o los principales pueblos dentro de los estados). Y esto es así, a pesar del hecho evidente de que esos regímenes se dan en sociedades esencialmente rurales (en particular la mexicana y la brasileña) y de que por lo tanto una parte decisiva del apoyo que recibían provenía de la población rural. Sin embargo, como de memoria –y a pesar de que todo indica que es éste un momento propicio para revisarlo– los trabajos recientes siguen privilegiando el análisis de la configuración urbana e industrial del “lazo populista”.²⁵

6. A pesar de las similitudes señaladas tanto en los hechos como en los relatos históricos recientes, se da la paradoja de que las historiografías sobre el tema siguen ignorándose mutuamente. Y esto es así, a pesar de la coincidencia de los procesos de producción de leyes y organismos estatales sobre la cuestión laboral en todos los países (que a veces llevan nombres prácticamente idénticos); a pesar de la contemporaneidad en que se dan; a pesar de las fuentes y acercamientos comunes que están realizando los historiadores a estos períodos; y, fundamentalmente, también a pesar de los múltiples contactos que una mirada rápida a diversas fuentes (escritos de juristas y parlamentarios contemporáneos, debates en la prensa y las revistas especializadas de la época) revela que existían entre los actores contemporáneos en los distintos países.²⁶

hacerse sobre los representantes estatales es exactamente la opuesta a la que se postula para los casos mexicano y brasileño. Tanto en las Juntas como en las Cámaras de Conciliación y Arbitraje se encuentra a los representantes estatales casi siempre a favor del trabajador, cosa que sabían bien tanto los empleadores –que trataban de eludir esa instancia– como por supuesto los mismos trabajadores.

²⁵ En México hay que hacer la excepción de los múltiples estudios sobre la implementación de la reforma agraria en los distintos estados. Aunque los instrumentos de construcción de hegemonía del estado revolucionario mexicano eran otros –la incorporación de campesinos y trabajadores rurales en la administración de los ejidos, los bancos ejidales, la confederación Nacional Campesina y finalmente el Partido– son de alguna manera análogos a la legislación social en su rol clave en la conformación de ese “lazo”. Una excepción para el caso de Brasil es el trabajo de Cliff Welch (1999).

²⁶ Así, por ejemplo, la circulación de ideas que existía en el mundo sobre temas de leyes y justicia laboral durante esos años, que no sólo llegaban a las *intelligentias* de cada país –a los ideólogos de las nuevas leyes y a los altos funcionarios del Estado– sino también a los juristas (v. g. cuando uno observa a Oliveria Viana citando al argentino Bielsa o al mexicano De la Cueva o viceversa). También, los presidentes Vargas, Perón y Cárdenas solían enviar representantes a los encuentros periódicos que sostenía la Organización Interna-

La impresión que dejan las fuentes es que esta circulación de ideas, de personas, de debates, de proyectos –que se concebían casi siempre en diálogo y con la mirada atenta hacia otras experiencias de la región– era tan corriente y fluida, que podría decirse que el aislamiento, la indiferencia mutua, es una construcción (equivocada) de nuestras historiografías, que la experiencia histórica contradice. Si esto es cierto, la mirada comparativa –cuya ausencia se suele lamentar para otros temas también– sería en este caso una perspectiva ineludible, si se quiere realmente comprender un fenómeno que excedió en mucho lo nacional y se construyó en un contexto mayor –regional, pero también podría decirse occidental– sin el cual no es completamente inteligible.

Hipótesis de trabajo

1. Hablar de ley y justicia en el Estado populista puede parecer una contradicción en los términos. El sentido común académico indica que estos regímenes se han caracterizado por despreciar las instituciones, avasallar la división de poderes y gobernar de forma autoritaria por encima y a costa de la ley. Esa crítica parte de la constatación de las formas variadas en la que estos regímenes lesionaron algunos principios sagrados del estado liberal y en tal sentido no difieren mucho de las que estos gobiernos recibían de los mismos contemporáneos, en particular desde los sectores políticos que habían desplazado del poder. Inobjetable en un sentido, la crítica sin embargo pasa por alto que los populismos latinoamericanos fueron, en otro sentido, marcadamente institucionalistas y grandes creadores de derecho. En verdad, si algo quisieron fue crear una gigante estructura legal e institucional que conscientemente desafiara el viejo orden estatal liberal, cuyo punto culminante fueron las reformas constitucionales que emprendieron. La preocupación de las ciencias sociales por señalar el carácter autoritario, clientelista y fuertemente centralizador de estos gobiernos ha ocultado muy eficazmente este otro dato no menos evidente.

2. Adoptar esta perspectiva nos permitiría a los historiadores, por así decirlo, una salida elegante al que podríamos llamar el “paradigma de la aberración” con el que hemos venido analizando a estos regímenes. Desde esta otra óptica, no se trataría ya de gobiernos que avasallaron las instituciones, no

cional del Trabajo. Todos estos contactos –a los que habría que agregar los que seguramente existían entre los movimientos obreros de estos países– constituyen también un espacio fecundo para la investigación. John French llama la atención sobre este punto en la entrevista “Pensar a América Latina” (véase Fortes *et al.* 1999, pp. 181-207) y dedica unas páginas de su libro *Drowning in Laws* a analizar este “campo jurídico” en Brasil (French 2004).

respetaron la división de poderes, fueron autoritarios, etc., sino que (o si se quiere, junto con eso) propusieron una nueva institucionalidad que desafiaba abiertamente el orden jurídico e institucional del Estado liberal.

3. El campo de batalla elegido para ese desafío fue precisamente el de la ley, la justicia y las instituciones. Los gobiernos de Perón, Cárdenas y Vargas, entre otros, fueron en efecto grandes creadores de derecho. Tanto el aparato de intervención social como el más general de regulación minuciosa de la vida económica y social tuvo como eje la producción (la superproducción, podría decirse) de leyes, decretos, normas regulatorias, que probablemente si se contaran igualarían en número a las producidas en todos los gobiernos anteriores sumados.

4. La transformación legal e institucional que emprendieron estos regímenes no era algo improvisado y por el contrario era un proyecto largamente estudiado y cuidadosamente diseñado. Una mirada a los debates parlamentarios de las leyes laborales fundamentales en cualquiera de estos países –así como a los escritos de actores fundamentales como Oliveira Viana, José Figueroa o Mario de la Cueva– hablan a las claras de que los impulsores de las leyes y de las instituciones laborales en estos países eran grandes juristas, estudiosos del derecho internacional, que además conocían los debates y las experiencias contemporáneos de otros países sobre el tema.

5. Junto con la creación de leyes, fueron piezas clave de ese gran proyecto de creación institucional las políticas en torno a la administración de justicia, en lo que a su vez representaba uno de los desafíos más grandes al orden liberal. El caso más conocido es el de la creación de tribunales laborales, que ocurre más o menos contemporáneamente en diversos países de América Latina. Junto con ellos, toda una variedad de organismos burocráticos con funciones judiciales pero controlados desde el Poder Ejecutivo (que podrían denominarse “parajudiciales”, como las diversas juntas y cámaras de conciliación y arbitraje) cumplieron un rol clave en la aplicación de la nueva legislación económica, social y laboral, tanto de la preexistente a estos regímenes como muy en especial de la nueva legislación que esos mismos gobiernos se enorgullecían de presentar como revolucionaria e inédita.

6. Estas verdaderas políticas judiciales (que constituyen un aspecto todavía oscuro del ampliamente estudiado intervencionismo del Estado populista) perseguían un objetivo central: quitar de su ámbito natural (el Poder Judicial) la potestad estatal de resolución de conflictos y pasarlos al ámbito del Poder Ejecutivo. En efecto, los nuevos organismos (las cámaras arbitrales, las juntas de conciliación, etc.), se ubicaban en paralelo o por encima de los tradicionales (justicia de paz, justicia civil), a los que se les quita buena parte de su jurisdicción. Esto tenía al menos tres ventajas: por un lado, permitía al Poder Ejecutivo controlar la aplicación de la nueva legislación social, eludiendo las

imprevisibilidades de la vía judicial tradicional, garantizando que los conflictos contractuales y laborales se resolvieran en sus dependencias y según el espíritu de las nuevas leyes. Esto mismo permitía eludir el conservadurismo del poder judicial –quizás el bastión más resistente a las políticas de estos regímenes– que en particular era muy remiso a aceptar la aplicación del “nuevo derecho”. Tercero, administrar justicia a través de estos organismos “parajudiciales” erigió al Poder Ejecutivo, al presidente de la nación, como el gran benefactor que, de una manera directa, hacía llegar los beneficios de las nuevas políticas sociales a los trabajadores y campesinos, de manera de que no hubiera ninguna duda de dónde residía a la vez la paternidad y la tutela de los nuevos derechos.

7. A través de la nueva legislación social y de los nuevos organismos y actores burocráticos, muchas veces desplegados en una red de delegaciones del Poder Ejecutivo distribuidas a lo largo del territorio nacional, el Estado nacional persiguió la efectiva aplicación de la ley a lo largo del territorio del país (algo que en sí mismo constituía una novedad para estos países, dados los importantes bolsones de autonomía que dejaban los “órdenes conservadores” anteriores) con el objetivo general de consolidar el poder del estado central pero también de hacer llegar los beneficios de las nuevas leyes sociales a los trabajadores y campesinos de toda la geografía nacional.

8. En tal sentido, y en la medida en que, en forma además muy publicitada, estos nuevos organismos “llegaban” a los diferentes pueblos de la geografía nacional para garantizar los nuevos derechos –ocupando y controlando espacios de conciliación y de resolución de conflictos– constituyeron un espacio inestimable de construcción cotidiana de hegemonía de estos regímenes y transformaron sustancialmente las experiencias del Estado de todos los actores sociales. En particular, el hecho de que los sectores subalternos (trabajadores, campesinos) de todos los rincones del país pudieran ganar pleitos en los tribunales laborales o ante las cámaras arbitrales frente a patrones o terratenientes, además de una experiencia novedosa, era una confirmación de que las promesas de estos gobiernos y de su legislación social y laboral parecían hacerse realidad. Esta constatación les granjeó a esos gobiernos el apoyo silencioso de los sectores populares en todo el país, más allá de los más visibles, publicitados y estudiados apoyos de los obreros industriales concentrados en las grandes ciudades.

9. Si lo anterior es cierto, el análisis de lo que podría denominar la “dimensión rural” del fenómeno populista latinoamericano –todavía descuidada por las ciencias sociales y la historiografía– podría ser fructífero. El mirador del mundo rural podría permitir acercarse a los procesos más subterráneos y cotidianos de la construcción de hegemonía a lo largo y a lo ancho de la geografía de cada uno de estos países –al *hidden text* del populismo, para utilizar la feliz

expresión que Cliff Welch encontró para el Brasil rural bajo Vargas— cosa que, suponemos, fue una de sus características distintivas. Desde allí podríamos ponderar en toda su dimensión la eficacia de la implantación territorial del estado nacional en los distintos rincones del país.

Bibliografía

- ABOY, Rosa (2005): *Viviendas para el pueblo: espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales, 1946-1955*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- ACHA, Omar (2004): “Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo”, en: *Desarrollo Económico*, 44, 174, pp. 199-230.
- AELO, Oscar (2004): “Apogeo y ocaso de un equipo dirigente: el peronismo en la Provincia de Buenos Aires, 1947-1951”, en: *Desarrollo Económico*, 44, 73, pp. 85-107.
- BALLENT, Anahi (2005): *Las huellas de la política: vivienda, ciudad y peronismo en Buenos Aires*. Buenos Aires: UNQ/Prometeo Libros.
- BANTJES, Adrian A. (1998): *As if Jesus walked on Earth: Cardenismo, Sonora, and the Mexican Revolution*. Wilmington: Scholarly Resources.
- BARRENECHE, Osvaldo (2009): “*Por mano propia*. La justicia policial de la provincia de Buenos Aires en el primer peronismo”, en: *Sociohistórica* (La Plata), 25, pp. 123-152.
- BARROS BIAVASCHI, Magda (2005): *O Direito do Trabalho no Brasil – 1930/1942: A construção do sujeito de direitos trabalhistas*. Tesis Doctoral, Universidade Estadual de Campinas.
- BARRY, Carolina (2009): *Evita capitana. El Partido Peronista Femenino 1949-1955*. Buenos Aires: Eduntref.
- BARRY, Carolina et al. (eds.) (2008): *La Fundación Eva Perón y las mujeres: entre la provocación y la inclusión*. Buenos Aires: Biblos.
- BELINI, Claudio (2009): *La industria peronista 1946-1955: políticas públicas y cambio estructural*. Buenos Aires: Edhasa.
- BELINI, Claudio/ROUGIER, Marcelo (2006): “Los dilemas de la historiografía económica sobre el peronismo: certezas dudosas, vacíos persistentes. Aportes para la construcción de una agenda de investigación”, en: Gelman, Jorge (ed.): *La Historia Económica Argentina en la Encrucijada. Balances y Perspectivas*. Buenos Aires: Prometeo Libros, pp. 351-372.
- BENSUSÁN, Graciela (1986): “La legislación heredada de las luchas revolucionarias: del constituyente a la Ley Federal del Trabajo”, en: Moreno Toscano, Alejandra/León González, Samuel: *75 años de sindicalismo mexicano*. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.
- (1989): *La ley federal del trabajo: una visión retrospectiva. Los intentos de reglamentación local del artículo 123 (1917-1929)*. México: Fundación Friedrich Ebert. (Documentos de trabajo, Fundación Friedrich Ebert, n° 24).
- BERROTARÁN, Patricia (2003): *Del plan a la planificación. El Estado durante la época peronista*. Buenos Aires: Imago Mundi.

- (2008): “Educar al funcionario: ‘de la frialdad de las leyes a las innovaciones doctrinarias’ (Argentina 1946-1952)”, en: *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, URL: <<http://nuevomundo.revues.org/36602>>, (16/06/2008).
- BERROTARÁN, Patricia/JÁUREGUI, Aníbal/ROUGIER, Marcelo (eds.) (2004): *Sueños de bienestar en la Nueva Argentina. Las políticas públicas durante el peronismo, 1946-1955*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- BIERNAT, Carolina (2007): *¿Buenos o útiles? La política inmigratoria del peronismo*. Buenos Aires: Biblos.
- BORTZ, Jeffrey (1995): “The genesis of the Mexican labor relations system: federal labor policy and the textile industry 1925-1940”, en: *The Americas*, 52, 1, pp. 43-69.
- (2008): *Revolution within the revolution: cotton textile workers and the Mexican labor regime, 1910-1923*. Stanford: Stanford University Press.
- CAMPIONE, Daniel (2003): *Prolegómenos del peronismo. Los cambios en el estado nacional, 1943-1946*. Buenos Aires: FISyP.
- CANDIOTI, Magdalena/PALACIO, Juan Manuel (2007): “Justicia política y derechos en América Latina. Apuntes para un diálogo interdisciplinario”, en: Palacio, Juan Manuel/Candiotti, Magdalena (eds.): *Justicia, política y derechos en América Latina*. Buenos Aires: Prometeo Libros, pp. 11-24.
- CARNEIRO ARAÚJO, Angela Maria (ed.) (1997): *Trabalho, cultura e cidadania: um balanço da história social brasileira*. São Paulo: Arquivo Edgard Leuenroth.
- CÓRDOVA, Arnaldo (1974): *La política de masas del Cardenismo*. México: Era.
- DA ORDEN, María Liliana/MELON PIRRO, Julio César (eds.) (2007): *Prensa y peronismo: discursos, prácticas y empresas, 1943-1958*. Rosario: Prohistoria.
- DE CASTRO GOMES, Angela Maria (1979): *Burguesia e Trabalho. Política e legislação social no Brasil 1917-1937*. Rio de Janeiro: Editora Campus Ltda.
- (1988): *A Invenção do trabalhismo*. Rio de Janeiro: IUPERJ/Vértice.
- (2002): “Reflexões em torno de populismo e trabalhismo”, en: *Varia historia* (Belo Horizonte), 28, pp. 55-68.
- DE LA CUEVA, Mario (1963): *Derecho mexicano del trabajo*. México: Porrúa, (5ª edición, 1ª 1949).
- DOYON, Louise (2006): *Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*. Buenos Aires: Siglo XXI Editora Iberoamericana.
- FALLAW, Ben (2001): *Cárdenas compromised: the failure of reform in postrevolutionary Yucatán*. Durham/London: Duke University Press.
- FALCÓN, Romana (1978): “El surgimiento del agrarismo cardenista: Una revisión de las tesis populistas”, en: *Historia Mexicana* (México), 27, 3, pp. 333-386.
- FERREIRA, Jorge (1997): *Trabalhadores do Brasil. O imaginário popular*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997.
- (2002): “Queremismo, trabalhadores e cultura política. Soberanía popular e aprendizado democrático”, en *Varia historia* (Belo Horizonte), 28, pp.69-84.
- FORTES, Alexandre (2004): *Nós do Quarto Distrito. A classe trabalhadora porto-alegrense e a era Vargas*. Rio de Janeiro: EDUCS.
- FORTES, Alexandre et al. (1999): *Na luta por direitos: estudos recentes em história social do trabalho*. Campinas: Ed. da Unicamp.

- FRENCH, John D. (1991): "The origin of corporatist state intervention in Brazilian industrial relations, 1930-1934: a critique of the literature", en *Luso-Brazilian Review* (Madison), 28, 2, pp. 13-26.
- (1992): *The Brazilian worker's ABC: class conflict and alliances in modern São Paulo*. Chapel Hill/London: University of North Carolina Press.
- (2001): *Afogados em leis. A CLT e a cultura política dos trabalhadores brasileiros*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo.
- (2004): *Drowning in laws: labor law and Brazilian political culture*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- (2001): "El auge de los estudios sobre el trabajo en Latinoamérica", en: *Historia social* (Valencia), 39, pp. 129-150.
- GENÉ, Marcela (2005): *Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- GIRBAL-BLACHA, Noemí (2003): *Mitos y realidades en la Argentina Peronista (1946-1955)*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- GUTIÉRREZ, Leandro/ROMERO, Luis Alberto (1989): *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*. Buenos Aires: Sudamericana.
- HALPERÍN DONGHI, Tulio (1994): *La larga agonía de la Argentina peronista*. Buenos Aires: Ariel.
- HAMILTON, Nora (1983): *México: los límites de la autonomía del estado*. México: Era.
- JAMES, Daniel (1990): *Resistencia e integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Buenos Aires: Sudamericana.
- KNIGHT, Alan (1989): "Interpretaciones recientes de la revolución mexicana", en: *Secuencia* (México), 13, pp. 23-43.
- (1999): "Cardenismo: ¿coloso o catramina?", en: Mackinnon, Moira/Petrone, Mario (eds.): *Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta*. Buenos Aires: Eudeba, pp. 197-230.
- KRIGER, Clara (2009): *Cine y peronismo: el estado en escena*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- LOBATO, Mirta (2001): *La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970)*. Buenos Aires: Prometeo Libros/Entrepasados.
- (2007): *Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960)*. Buenos Aires: Edhasa.
- MACKINNON, Moira/PETRONE, Mario (eds.) (1999): *Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta*. Buenos Aires: Eudeba.
- MACOR, Darío/TCACH, César (eds.) (2003): *La invención del peronismo en el interior del país*. Santa Fe: Universidad del Litoral.
- MARQUES MENDES, Alexandre (2005): *Clase Trabalhadora e Justiça do Trabalho: experiências, atitudes e expresões do operário do calçado*. Ph. D. Dissertation, Universidad Estadual Paulista.
- MCCRERY, David (2008): "Gift of the devil", en: *Social History*, 33, 1, pp. 68-77.
- MELON PIRRO, Julio César/QUIROGA, Nicolás (eds.) (2006): *El peronismo bonaerense: partido y prácticas políticas 1946-1955*. Mar del Plata: Ediciones Suárez.

- MIDDLEBROOK, Kevin J. (1995): *The Paradox of Revolution: Labor, The State, and Authoritarianism in Mexico*. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press.
- MONTES DE OCA NAVAS, Elvia (2000): *Política laboral y corporativismo en el Estado de México 1934-1940*. Zinacantepec: El Colegio Mexiquense/Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
- MOREL, Regina Lucia M./MANGABEIRA, Wilma (1994): “‘Velho’ e ‘Novo’ Sindicalismo e Uso da Justiça do Trabalho: Um Estudo Comparativo com Trabalhadores de Companhia Siderúrgica Nacional”, en: *Dados*, 37, 1.
- MUNAKATA, Kazumi (1982): *A Legislação trabalhista no Brasil*. São Paulo: Brasiliense.
- MURMIS, Miguel/PORTANTIERO, Juan Carlos (1971): *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- PALACIO, Juan Manuel (2006): “Historias de fin de siglo: notas sobre la historiografía argentina de las últimas décadas”, en: *Revista de Historia*, 48, pp. 111-154.
- (2009): “De la paz a la discordia: El peronismo y la experiencia del Estado en la provincia de Buenos Aires (1943-1955)”, en: *Desarrollo Económico*, 49, 194, pp. 221-246.
- (2010): “El primer peronismo en la historiografía reciente: nuevas perspectivas de análisis”, en: *Iberoamericana*, 39, pp. 255-266.
- PANELLA, Claudio (ed.) (2005): *El gobierno de Domingo Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de peronismo provincial*. La Plata: Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.
- PAOLI, Maria Célia (1988): *Labor, law and the State in Brazil: 1930-1950*. Tesis doctoral, University of London.
- QUIROGA, Nicolás (2004): “El Partido Peronista en Mar del Plata: articulación horizontal y articulación vertical, 1945-1955”, en: *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”* (Buenos Aires), 26, pp. 75-110.
- (2008): “Las Unidades Básicas durante el primer peronismo. Cuatro notas sobre el Partido Peronista a nivel local”, en: *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, URL: <<http://nuevomundo.revues.org/30565>> (16/04/2008).
- RAMACCIOTTI, Karina (2009): *La política sanitaria del peronismo*. Buenos Aires: Biblos.
- RAMACCIOTTI, Karina/VALOBRA, Adriana (2004): *Generando el peronismo. Estudios de cultura, política y género (1946-1955)*. Buenos Aires: Proyecto editorial.
- REIN, Raanan (1998): *Peronismo, populismo y política: Argentina, 1943-1955*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- REIN, Raanan/PANELLA, Claudio (eds.) (2008): *Peronismo y prensa escrita: abordajes, miradas e interpretaciones nacionales y extranjeras*. La Plata: Edulp.
- REIN, Raanan et al. (2009): *Los estudios sobre el primer peronismo: aproximaciones desde el siglo XXI*. La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
- ROMERO, Luis Alberto (1990): “Los sectores populares como sujetos históricos”, en: *Proposiciones* (Santiago), 1, pp. 268-278.
- SABATO, Hilda (1998): *La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880*. Buenos Aires: Sudamericana.
- (2001): “On Political Citizenship in Nineteenth-Century Latin America”, en: *American Historical Review*, 106, 4, pp. 1290-1315.

- SUAREZ-POTTS, William J. (2009): "The Mexican Supreme Court and the Juntas de Conciliación y Arbitraje, 1917-1924: The Judicialisation of Labour Relations after the Revolution", en: *Journal of Latin American Studies* n° 41, 4, pp. 723-755.
- TEIXEIRA DA SILVA, Fernando (1995): *A carga e a culpa: os operários das docas de Santos. Direitos e cultura de solidariedade, 1937-1968*. São Paulo: Hucitec.
- TEIXEIRA DA SILVA, Fernando/DA COSTA, Hélio (2001): "Trabalhadores urbanos e populismo: um balanço dos estudos recentes", en: Ferreira, Jorge (ed.): *O populismo e sua história: debate e crítica*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, pp. 205-271.
- TORRE, Juan Carlos (1990): *La vieja guardia sindical y Perón: sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Sudamericana.
- VARUSA, Rinaldo J. (2000): *Legislação trabalhista e trabalhadores: algumas reflexões a partir da historiografia*, en: *Tempo da Ciência* n° 14.
- (2002): *Trabalho e legislação: experiências de trabalhadores na Justiça do Trabalho (Jundiaí – SP, décadas de 40 a 60)*. Ph.D. Dissertation, Pontifícia Universidade Católica/São Paulo.
- WELCH, Cliff (1999): *The seed was planted: the São Paulo roots of Brazil's rural labor movement, 1924-1964*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- WOLFE, Joel (1993): *Working women, working men: São Paulo and the rise of Brazil's industrial working class, 1900-1955*. Durham/London: Duke University Press.
- (1994): "The Faustian Bargain Not Made: Getúlio Vargas and Brazil's Industrial Workers, 1930-1945", en: *Luso-Brazilian Review*, 31, 2, pp. 77-95.

María Carolina Agoff¹

¿Nuevos derechos hacen nuevas mujeres? El derecho a una vida libre de violencia como espacio de autoidentificación

I. Introducción

En México, aun dentro de un panorama social de extrema violencia delictiva, la casa sigue siendo uno de los lugares más peligroso para las mujeres: según los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006-ENDIREH (INEGI, 2006), el 26,08% de las mujeres experimentó violencia física y/o sexual de parte de su novio, compañero o marido el año previo a la realización de la encuesta. Así, resulta que la promulgación reciente de dos leyes contra la violencia de género² es un interesante punto de partida para estudiar la comprensión y la vivencia de los conflictos de las afectadas, con el propósito final de analizar la apropiación subjetiva de derechos por parte de mujeres víctimas de violencia.

Se llevó a cabo una investigación empírica de naturaleza cualitativa, cuya muestra estuvo compuesta por mujeres víctimas de violencia de pareja con un perfil de usuarias de servicios de salud públicos. Se desarrolló un instrumento metodológico para indagar y contrastar la información brindada por mujeres víctimas de violencia según grupo etario (20-30 años, 30-40 años, 40 y más) y según vivencias de violencia doméstica (en el pasado y actualmente). Por último, cabe destacar que la técnica de producción de datos consistió en la realización de seis grupos focales durante los meses de marzo y abril de 2008 con un total de 72 mujeres participantes.

Dos presupuestos han orientado esta investigación empírica: por un lado, que la escasa confianza en las instituciones que tradicionalmente ha caracteri-

¹ Investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM), México. Esta investigación se llevó a cabo en el marco de una beca Thyssen-Humboldt.

² Nos referimos a la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia” (Cámara de Diputados 2007) y “Ley general para la igualdad entre hombres y mujeres” (Cámara de Diputados 2006).

zando la relación de los ciudadanos en México con las autoridades no clausuraba la posibilidad de alguna clase de impacto social de las nuevas legislaciones. Por otro lado, que la existencia de un tal impacto social de las nuevas leyes podía cristalizarse como una tensión entre la ley y la costumbre, ya que la violencia de género y en particular la de pareja, es entendida como una expresión extrema de una desigualdad de género sedimentada en prácticas y significados consuetudinarios.

La investigación ha seguido hasta ahora tres derroteros³: en primer lugar, el análisis del sentimiento de injusticia asociado a la vivencia de violencia de pareja por parte de las víctimas. Al respecto, y si bien son cada vez menos las mujeres que aceptan la violencia como un destino inevitable, la mayoría de ellas la experimentan como un “castigo innmercedo”, lo cual sugiere la posibilidad de justificar la violencia o merecerla en ciertos casos (en el caso de incumplimiento de las expectativas depositadas en ellas, como mujeres). Con ello se observa una comprensión particular de la injusticia que pone de manifiesto la distancia que separa aún a la violencia como “castigo innmercedo” de la violencia como una conducta inaceptable o como un delito.

El segundo eje de análisis es el conflicto entre normatividades, o entre diferentes formas del reconocimiento –el jurídico y el moral–. Se trata de la tensión entre las normas sociales que guían el ejercicio de rol de género y la valoración social a nivel intersubjetivo y, por otra parte, las normas jurídicas que traducen el problema social a términos individuales “atentando” contra el estatus naturalizado de las mujeres como madres-esposas. Ambas formas del reconocimiento social están reñidas y dificultan el surgimiento e internalización de una cultura de derechos emancipatoria.

En tercer lugar nos hemos enfocado en analizar la eficacia simbólica del derecho que se observa en la aptitud de desnaturalizar una experiencia de injusticia naturalizada y normalizada por las tradiciones. Esto obedece a que el derecho puede constituirse en un lenguaje que les permite a las mujeres decodificar el significado de la violencia de un modo diferente al conocido: se trata de una experiencia naturalizada que el derecho, ahora –en tanto lenguaje legítimo y legitimante–, nombra o designa como ilegal.

La pregunta que sigue para los propósitos de este proyecto intenta develar en qué medida el derecho puede constituirse en un espacio de identificación para las mujeres víctimas de violencia en tanto las apela a ellas como individuos con derechos particulares o específicos. Es decir, ¿puede ser el derecho una vía de subjetivación? O de manera más general, ¿cuál es el impacto del derecho sobre la subjetividad?

³ Estos desarrollos se encuentran en Agoff (2009) y Agoff (2011).

II. La dependencia moral

La normalización de la violencia de pareja responde a la “anuencia” de las víctimas, para quienes el fenómeno resulta invisible o natural o tolerable, pero muy difícilmente condenable. Esto obedece a la relación de dominación misma⁴. Los sentimientos de culpa de las mujeres reflejan la dramática imposibilidad de cuestionar y condenar la violencia; también expresan la responsabilidad que asumen por la violencia de la que resultan objeto.

...uno dice: “Pues a lo mejor yo lo provoqué” o “¿Cómo le hago para pedirle una disculpa?” y de repente digo: “No, pero yo no ocasioné nada de eso”. Mi esposo siempre dice: “¡Ya ves lo que provocaste y ya ves lo que provocaste!” [...] después de que se vino la broncota uno dice: “Pues a lo mejor yo la regué”, se siente uno como culpable... (grupo de mujeres entre 30 y 40 años con violencia en el pasado).

Los testimonios de las mujeres víctimas de violencia de pareja contienen numerosas expresiones de emociones y un análisis detenido de ellas resulta de gran valor heurístico, ya que son reveladoras de las predisposiciones de las mujeres en su condición de subordinadas al poder masculino.⁵ Conocimiento y emoción están inextricablemente unidos (Le Breton 1999) y por ende y a diferencia de los discursos legitimados socialmente, donde lo que cabe es condenar la violencia, los sentimientos revelan “las objetivaciones de valores morales”.⁶ En consonancia con esto es posible entender la expresión de un sentimiento de culpa en el testimonio previo que revela, en particular, el no cumplimiento de un acto internalizado como bueno (Nussbaum 2006), en este caso: “no provocar al marido”.

⁴ Sobre la “colaboración” femenina a la dominación del hombre ver Bourdieu (2000).

⁵ Bartky, en relación al estudio de las emociones apunta: “Lo que se necesita preguntar acerca de tales diferencias emocionales no es sólo su relación con rasgos o disposiciones típicamente genéricos, sino, siguiendo a Heidegger, la manera en que tales predisposiciones son reveladoras de la ‘manera de estar en el mundo’ de los sujetos, o sea, de su carácter como personas y de las maneras específicas en las que, como personas, están inscritas dentro de la totalidad social. [...] En la medida en que las mujeres no están sólo situadas en una posición diferente de los hombres dentro de la estructura social, sino que están activamente subordinadas ellos dentro de ella, este proyecto –la identificación y descripción de estas predisposiciones–, será al mismo tiempo una contribución a la fenomenología de la opresión” (Bartky 1990: 84; traducción del autor).

⁶ “Lo que normalmente denominamos sentimientos morales tienen una función en relación a las objetivaciones de valores morales, es decir, a lo que se considera bueno o malo en una sociedad o estrato social determinado. Esto nada tiene que ver ni con nuestras decisiones, ni con los actos de los demás” (Heller 1999: 115).

A través de los sentimientos observamos que las mujeres difícilmente pueden juzgar –hasta ahora– las normas y valores sociales que orientan el comportamiento de hombres y mujeres, y que constituyen la base de la justificación y legitimación de la violencia:⁷

Y cuando él me pegó... me dio una cachetada, porque no quise acostarme con él (...) entonces, yo igual ¿no? A lo mejor lo provocamos, pero uno también ¿no? (grupo de mujeres entre 30 y 40 años con violencia actual).

Este testimonio revela la imposibilidad de cuestionar el “deber” de la mujer de satisfacer el deseo sexual de su marido. En efecto, las mujeres no parecen poner en duda el modelo tradicional de división sexual del trabajo –el hombre proveedor y la mujer madre-esposa en el espacio doméstico– y por ello resulta tanto más sorprendente para ellas la manifestación de la violencia, pues según esta misma lógica, es innecesaria:

Él me daba, quizá no todo lo que yo quería, pero me tenía bien, pero eso no a costa de los trancazos.

...que yo le tenía la casa limpia, que le lavaba, que le planchaba, que le aguanté... me trató como me trató... que le di dos hijos... (grupo de mujeres entre 20 y 30 años con violencia en pasado).

Estas caracterizaciones de lo que cabe y debe esperarse de un marido y de una esposa revelan la pervivencia una ideología, de un lenguaje y de unos roles de género tradicionales que se podrían considerar lentamente en desuso. La fuerza de los viejos valores, ideales y normas de género se hacen particularmente evidentes en las mujeres jóvenes, para quienes la conformación de una familia sigue siendo la única forma posible imaginable de autorrealización. Esto es producto de las orientaciones normativas que convierten en un ideal la situación de dependencia de la mujer frente al hombre. Dependencia que podría denominarse moral, pues la valía de la persona –autoestima y valoración social– depende del estatus de mujer casada, como se observa en el siguiente testimonio:

⁷ Estas normas y valores están muy alejadas de las formas reales de comportamiento y experiencias de mujeres y hombres en la vida cotidiana. Es tan grande la distancia que separa la norma de la realidad, que se hace necesario reforzar muy intensamente las adscripciones normativas (Hausen 1990). A los fines de nuestra investigación, lo que no deja de tener una importancia decisiva es que este conjunto de normas e ideales constituyen la base de legitimación de la violencia contra la mujer.

Entonces sí, a nadie le gusta que... ni que lo insulten ni que lo humillen ni que lo golpeen; simplemente es eso que piensas que sin él no vales nada... (grupo de mujeres entre 20 y 30 con violencia actual).

La constitución de una familia propia –entendida como la conyugalidad y maternidad en el espacio doméstico de una unión– resulta una coordinada fundamental que permite la definición de sí misma y garantiza la aceptación de la mujer por parte de su entorno social, en forma de respeto, reconocimiento y valoración. Es esta dependencia moral del hombre lo que explica, en buena medida, la permanencia de la mujer al lado de su victimario y los altos umbrales de tolerancia a la violencia que ellas desarrollan.

Si la identidad individual y social se fundan en la dependencia moral, la separación marital se vive y concibe como “fracaso”. La concepción del fracaso da cuenta de que “familia como proyecto de vida” e identidad femenina quedan igualadas; son una y la misma cosa.

Para mí fue muy doloroso como para todas aquí, porque tu proyecto de vida no funcionó y te sientes fracasada [algunas asienten]. Por ejemplo, en mi caso yo me sentí como una fracasada. (grupo de mujeres mayores de 40 años con violencia en el pasado).

Optar por la separación tiene consecuencias devastadoras, pues en la condición de mujer separada y con hijos, la mujer está socialmente devaluada; y más aún si pretende conformar una familia con otro hombre. Quien está devaluada socialmente puede más fácilmente resultar vulnerada por otros hombres.⁸

¡No... y luego con dos hijos, ¿quién te va a querer? Nada más te van a usar, porque no sirves para nada, no vales nada...!

¡Imagínate otro canijo cómo me va a tratar con dos hijos! Porque desgraciadamente... como que uno, como mujer si tiene hijos... pierde ¿no? Pierde valor... la verdad... [Varias asienten] (grupo de mujeres entre 20 y 30 años con violencia en el pasado).

Así, el panorama normativo de la femineidad en México parecería reducido (con las excepciones correspondientes) a la autorrepresentación y autorrealización a través de la conformación y mantenimiento de una familia propia. La imagina-

⁸ La forma extrema de la descalificación moral y el desprecio –la “basurización”– es el mecanismo simbólico que justifica, legitima la construcción del subalterno o excluido y asegura así su instrumentalización (Silva Santisteban 2008).

ción y la costumbre no admiten otra geografía de oportunidades. Con esta caracterización no se pretenden reificar una identidad femenina inexistente en tanto única, sino poner de relieve la dominancia cultural de un modelo normativo.⁹ La adecuación a esa norma de composición de una familia impone entre otras cosas la tolerancia a la violencia y la no ruptura de la unión conyugal:

Porque a lo mejor no quieres recibir críticas, quieres que todo mundo te vea que llegas a las fiestas con tu marido y con tus hijos y que eres una familia perfecta... y la realidad es que no... (grupo mujeres de 30 a 40 años con violencia en el pasado).

En efecto, dado que una familia bien constituida, armónica, garantiza el reconocimiento y valoración de los demás, las mujeres se ven obligadas a esconder la situación de la violencia que experimentan. La dependencia constitutiva de la persona del reconocimiento de los otros supone orientarse según un mundo normativo y valorativo que difícilmente puede cuestionarse y que se impone como único camino posible de vida. Si apelan al derecho a no ser golpeadas, arriesgan la posibilidad de autoafirmación y reconocimiento que les confiere la relación familiar. De este modo se hace posible derivar que la preeminencia de los usos y costumbres para regular la vida social y el rol que desempeña la comunidad como la fuente del reconocimiento social por excelencia resulta un obstáculo para que las mujeres tomen conciencia de sus derechos y los ejerzan. Los valores tradicionales tienen primacía sobre cualquier otra forma del reconocimiento, y éstos pautan el reconocimiento de una identidad e ideal femenino en la conformación y mantenimiento de una familia. Así se explica en buena medida sus dificultades para condenar la violencia de la que resulta víctima y renunciar y romper con la familia, de la que obtiene su estatus social.

Además, la unión conyugal no es sólo una fuente de reconocimiento social para la mujer, también lo es para el hombre. El matrimonio garantiza privilegios complementarios a los hombres y la separación pone en peligro la pérdida del dominio hegemónico y por sobre todo, del capital simbólico —en la forma de autoridad personal, reputación o prestigio (Bourdieu 2000)—. Por ello, frente a la intención de separarse de la mujer, aumenta el peligro de violencia para ella y los obstáculos para la ruptura de esta unión.

Sin embargo la violencia sostenida a lo largo de mucho tiempo puede favorecer el cuestionamiento del modelo aprendido. La vivencia de humillación

⁹ Mientras que a los hombres se los define por su estatus o su papel, a las mujeres se las define en términos androcéntricos por su relación con los hombres (Lamas 1996: 43). Además la identidad femenina, su ontología misma, se define por su condición histórica del ser-para-otros o *Dasein für andere* (Beck-Gernsheim 1988).

como expresión de un daño a la identidad (Nussbaum 2006) permite concienciar sobre los límites de lo que esta relación de dependencia moral puede admitir.

E: Los golpes se te quitan, pero la humillación... el que te digan que eres una mediocre, el que eres una estúpida...

J: Todas esas palabras se te quedan...

E: Aja... se te quedan...

Mi: Porque te lo crees, yo creo que eso es... es que uno dice: “Uno es tonta, uno es...”. Te crees que eres tonta... [varias están de acuerdo] (grupo de mujeres entre 30 y 40 años con violencia en el pasado).

III. El derecho como espacio de autoidentificación

Los testimonios de las víctimas de violencia reflejan relatos biográficos sin un sujeto en la forma de un yo con un proyecto individual de vida. La mujer se vive así misma como parte de un grupo indivisible –la familia– y su yo está indisolublemente ligado al grupo familiar. Se trata de un yo mínimo, envuelto en el devenir de las cosas que decide u opta poco para sí mismo¹⁰, a diferencia de una biografía reflexiva, electiva o del tipo “hágalo usted mismo” (Beck/Beck-Gernsheim 2008: 3), característica para la segunda modernidad o modernidad tardía.

Es esperable que las legislaciones que protegen de la violencia a la mujer y en tanto la apelan en su carácter de sujeto de derechos le pueda facilitar una comprensión de sí misma como individuo con derechos, con derecho a actuar en su nombre. En lo que sigue se pretende ilustrar el impacto simbólico del derecho en el desarrollo de la subjetividad individual.

En efecto, el análisis de los grupos de discusión da cuenta de que junto a la mencionada preeminencia de las normas y valores de género relacionados al fenómeno de la dependencia moral, aparecen ciertos indicios de transformación de este modelo de “feminidad”. Cierta espíritu de transición se observa, entre otros testimonios, ante la caracterización de una mujer que se separa y, según la cual, es posible hoy encontrar virtudes en una situación condenable según los viejos valores:

¹⁰ Wolfgang Engler, sobre el proceso de individualización en la antigua República Democrática Alemana, señala que los alemanes orientales recapitulaban su vida en la forma de una “biografía de sucesos”, mientras que los alemanes occidentales producían con la misma frecuencia “biografías de opciones”. La distinción proviene de un trabajo de Mutz y otros (1995) sobre el desempleo en Alemania (Engler 1999: 45) y resulta de interés para ilustrar el caso de dos sociedades con diferentes grados de individualización.

S: la gente en general ¿qué piensa de una mujer joven como ustedes que tiene hijos chicos y que decide separarse?

J: Que es una mujer fuerte...

G: Ha cambiado ya tanto la situación que en vez de verlo mal hasta a veces... [Entre varias dicen:... Lo aplauden] ...porque dicen: "Puedes, estás demostrando que no necesitas de un hombre para valerte de ti misma..." (grupo de mujeres de 20 a 30 años con violencia en el pasado).

También se observa la capacidad reflexiva y crítica al cuestionar el modelo de socialización genérica y la posibilidad de desnaturalizar la violencia. La vivencia de violencia como una parte constitutiva de ese horizonte de experiencias y expectativas típico de las biografías femeninas a través de las generaciones se resquebraja como producto de la concienciación:

Porque nos educaron en un ambiente enfermo; entonces no te das cuenta y vas creyendo que estás en lo correcto porque dicen que lo normal es lo que la mayoría de la gente hace y si eso es lo que la mayoría hace, lo que la mayoría de nuestras madres aceptaron pues. Pero algo dentro de ti te va, conforme cada golpe te va diciendo: "No y no me lo merezco y no..." (grupo de mujeres de 30 a 40 años con violencia en el pasado).

La coerción social y el mandato de sometimiento a la violencia para cumplir con el ideal social de familia se enfrentan ahora a una vivencia de autonomía que puede responder por sus propias elecciones, defenderlas y asumir las consecuencias:

Te enseñaron que te casaste una vez y para toda la vida y tienes que romper con ese principio que te enseñaron... Y la presión social... entonces cuando me reúno con toda mi familia les digo lo que voy a hacer y el que esté de acuerdo, buena onda y el que no... se murió. (grupo de mujeres de más de 40 años con violencia en el pasado).

A esta altura cabe preguntarse si la posibilidad de cuestionar el horizonte valorativo, normativo y de experiencias de sus madres presupone la capacidad de elaborar proyectos, ideas y acciones propios. ¿Supone esto el fin de la preeminencia de ese modelo referencial? ¿Cuál sería un modelo social orientativo de conducta que represente una opción al tradicional? Es evidente que los cuestionamientos que reflejan estos testimonios y la capacidad de juzgar críticamente el modelo genérico de socialización se hacen posibles en un contexto de creciente discusión pública sobre el fenómeno de la violencia de pareja, de sensibilización a través de campañas y de la promulgación de las dos nuevas leyes federales. También es esperable, tal como sugiere la investigación sobre el desarrollo de la identidad característico de la modernidad tardía, que el pro-

ceso de construcción identitaria sea el resultado de la capacidad activa de los propios sujetos (Keupp 1999) y no sólo producto de las determinaciones adscriptivas.

Así, resulta el interés por analizar si el derecho puede constituirse en un espacio proyectivo que favorezca la autoidentificación y que, en tanto apela a un individuo, promueva indirectamente una individualidad como capacidad práctica de autoafirmación. Un espacio que permite la construcción de otra identidad que se desprende de las tradiciones¹¹.

El impacto de las nuevas legislaciones se observa en la confianza que genera en las mujeres la posibilidad de verse protegidas y defendidas por estas leyes. Esto se cristaliza en la caracterización de su situación “antes” y “ahora”, donde las nuevas leyes resultan el parte aguas. Mientras que antes se sentían vulnerables y desprotegidas porque se vivían sin apoyo en su situación, ahora se sienten confiadas y seguras de enfrentarse al victimario. El siguiente fragmento ilustra la capacidad de poner un límite a la violencia (“ya no te dejas fácilmente”) y la sensación de no estar desprotegida (“ya no lo tomas con temor”) producto del conocimiento de las nuevas legislaciones:

...a lo mejor la mujer *antes* era más sumisa, pero *ahora* ya no, ahora hay tantas leyes que defienden a la mujer y todo, que creo que también eso es un respaldo para uno como mujer, porque ya no estás así como que “¡ah! Me va a pegar el hombre y las leyes no van a hacer nada y van a defender a los hombres y todo...”. Ahora ya si un hombre toca a una mujer, o sea, ya se va al tambo [cárcel] directamente, ¿por qué? Porque ya hay una ley que te protege como mujer... Entonces por lo mismo yo pienso *que ya no lo tomas así tan como con temor* no sé... de que “¡ay! Me va a pegar, qué miedo, me voy a esconder debajo de la mesa”. No, pues tampoco, entonces ahí dices “¿por qué me va a poner una mano encima, no?”. A lo mejor es como dice ella, ya no te dejas tan fácilmente, o sea, ya no agachas la cabeza... (grupo de mujeres entre 20 y 30 años con violencia actual).

La extrema vulnerabilidad de quien se siente desprotegida y atemorizada frente a su golpeador y que, por eso, se ve obligada a “agachar la cabeza”, desaparece. Los testimonios parecen sugerir que la mujer puede ahora, con las nuevas legislaciones, sentirse empoderada y con la certeza de que en caso extremo, a él lo van a juzgar y encarcelar.

El impacto de las nuevas legislaciones sobre la subjetividad tiene también otra cara: la de dar forma a un proyecto individual de vida. Se trata de que este

¹¹ El concepto de identidad aparece como una instancia de mediación entre la estructura social y la subjetividad individual. Sirve para comprender las posibilidades del desarrollo de la identidad del yo que se distancia de las tradiciones y que se pone a disposición del ejercicio de diferentes roles en las sociedades modernas (Bilden 1997).

derecho a una vida libre de violencia pueda incitar el “derecho a una vida propia” en la forma de espacio, tiempo y dinero propio (Beck/Beck-Gernsheim 2008)¹², y contribuir así al desarrollo de una subjetividad individual. La familia resultaba antes toda la subjetividad individual, mientras que ahora se podría constituir en sólo un aspecto de la subjetividad de una persona individualizada¹³.

Yo *ya* le digo a mi marido: “Tú me vuelves a insultar, me vuelves a decir una palabra y yo sí te demando... y no creas que nada más es de palabra...”. Mi marido nada más tiene una demanda y jamás me ha vuelto a insultar ni nada... yo salgo, hago mis compras, hago mi vida, voy al gimnasio, porque *yo también apporto* para la casa y apporto muchísimo porque así tengo [junta los dedos como una seña de mucho] de tickets de todo lo que compro... ropa, despensa, de todo; o sea, yo no pago mi renta pero sí pago el teléfono; entonces yo le digo: “Yo sí apporto lo que tú deberías de aportar, apporto jabón para lavar la ropa, para lavar los trastes, para hacer el quehacer...”, o sea, soy una criada que necesito aporta... pero como yo le digo: “Como también yo apporto, también tengo mi *espacio* y soy un ser humano pensante...” (grupo de mujeres de más de 40 años con violencia en el pasado).

Este testimonio sintetiza el devenir de una situación de subordinación en otra de autoafirmación a través del adverbio temporal “*ya*”: las nuevas legislaciones favorecen otra comprensión de la propia vida, de los derechos, espacios y, en última instancia, de la dignidad y autonomía (“soy un ser humano pensante”, es decir, con capacidad de decidir y de ser respetada) que les corresponde. Pueden también advertir el valor de un salario propio que les da el poder de decidir y de gozar de una vida libre de violencia. El dinero otorga una independencia de los padres y del marido y libera del confinamiento y la dependencia del espacio que impone el hombre. Este testimonio pareciera afirmar: “Yo me gano mi propio espacio”.

El análisis empírico dejó en evidencia que extrañamente son las mujeres adultas (no las jóvenes de 20 a 30 años) quienes sostienen un discurso más igualitario y ponen en duda el valor de los comportamientos tradicionales. Anclado en una experiencia larga de sufrimiento y sometimiento e impulsado y avalado por el discurso moderno y liberador de los derechos de las mujeres, aparece un proceso de concienciación tanto de su propia situación y biografía,

¹² Esto no es un derecho *sensu strictu*; se trata de un horizonte normativo de la modernidad reflexiva, segunda modernidad o modernidad tardía.

¹³ A nivel sociohistórico corresponde referirnos al proceso de individualización, a nivel individual, la contracara puede ser la vivencia de la creciente subjetividad individual o persona individual. De ser vista como un miembro de una familia (hija, hermana, esposa, nuera, cuñada, madre, tía) a ser considerada una persona individual, esto es, con sus propios deseos, necesidades, ideas y planes.

como de las normas de rol de género. Así, creen ver que las mujeres más jóvenes gozan de mayores libertades; además, pueden poner en duda las normas de género con las que fueron socializadas y que las dejaban a disposición de sus maridos:

...y las chicas de ahora ya no son tan tontas, hay parejas que se separan al año porque ellas ya no quieren tener obligación de nada...

...Pues aunque no trabajas también tienes un derecho, porque son una pareja. No se casó con una sirvienta que le sirva, le haga la limpieza, va a tener los hijos que él quiera... (grupo de mujeres de más de 40 años con violencia actual).

El espíritu de cambio que perciben a través de las campañas de sensibilización que acompaña a las nuevas legislaciones permite aflorar nuevos sentimientos de confianza. La información las provee de seguridad para actuar con más libertad:

D: Que aparte ya hay más información en todas partes, sobre todo en la tele ya te pasan mucho de agresión física, agresión verbal [varias asienten], económica: "Nosotros vamos a ayudarlas, acude a tal lado, no estás sola"...

L: ...hay más ayuda para la mujer...

C: ... y antes no sabías qué hacer...

D: ...no además de que tenían mucho miedo de dejar al marido por la situación económica: "No me va a pasar la pensión... [varias murmuran], ahora ya sabe uno que pase lo que pase, *con las leyes nuevas* tienen que pasar una pensión y esto da más confianza de hacer algo...

L: ...más seguridad...

C: ...más seguridad... exactamente...

D: Uno está más protegida que antes, antes no le hacía caso, ibas con los golpes y te decían: "No, pues es que tú, lo provocaste" [murmuran todas]...

L: ...hasta se reían...

(grupo de mujeres de 30 a 40 años con violencia en el pasado).

Y, por último, cabe destacar otro aspecto de la eficacia simbólica del derecho: la capacidad de moldear nuevas identidades de género y favorecer que las mujeres ya no esperen conmiseración o misericordia, sino reparación moral. Todos ellos resultan indicios del devenir de un sujeto social empoderado por una nueva conciencia legal, es decir, un sentido de sí como persona definido por el derecho.

III. Consideraciones finales

En el contexto de democratización y modernización de México, proceso que comprende también la llamada "individualización institucionalizada" (Beck/

Beck-Gernsheim 2008), surge la pregunta por el impacto de las nuevas legislaciones sobre la identidad de las mujeres que resultan víctimas de violencia de pareja.

Bauman sostiene que la modernidad supone una autodeterminación obligatoria y compulsiva que sustituye a la determinación de la posición social (Bauman 2008: XV), y esto se traduce en una demanda y presión hacia las mujeres para que desarrollen “una vida para ellas mismas”. Así, el correlato subjetivo de los cambios sociohistóricos, tales como cambios en la ocupación, educación, ciclo familiar, sistema legal, etc., es que ellas deben desarrollar deseos y expectativas y proyectos de vida por fuera de la familia (Beck/Beck-Gernsheim 2008: 90). Pero, además, el proceso de individualización en el caso de las mujeres se caracteriza por un peculiar “estado intermedio”, ya que ellas siguen asumiendo muchas más tareas que los hombres en el hogar, y siguen estando mucho menos protegidas por una posición estable en el mercado laboral (Beck/Beck-Gernsheim 2008: 56).

Es precisamente en este contexto de grandes cambios sociohistóricos donde resulta interesante observar qué formas y qué significados adquiere la demanda y presión hacia la individualización en esta población en particular. En el caso mexicano, se ha constatado que los cambios en las prácticas de los sujetos no resultan acompañados de manera simultánea por un cambio de las representaciones: las transformaciones de las prácticas de las mujeres, tales como su fuerte inserción en el mercado de trabajo, en la diversificación de los modelos familiares, en la secularización de las prácticas, no han ido paralelamente de la mano de unos cambios en las percepciones. Estos últimos se muestran más lentos (Oliveira 2000). De hecho, muchas mujeres viven el trabajo fuera del hogar como un mal necesario y no como una fuente de autorrealización y autonomía. La incorporación de las mujeres al mercado laboral no logra echar abajo el deseo de permanecer en casa criando hijos; se trabaja porque se necesita para vivir, no se percibe como fuente de gratificación, de reconocimiento y garante de una cierta autonomía.

Si el trabajo no resulta un ámbito de reconocimiento válido para las mujeres debido a la condición precaria de su práctica y malos pagos y porque histórica y tradicionalmente las mujeres no han nutrido su sí mismo de este ámbito, cabe la pregunta por la experiencia del reconocimiento que proviene del derecho. Entre las mujeres entrevistadas que han tenido y tienen experiencias de violencia hemos constatado una diferencia generacional notable: sólo las mujeres mayores de 30 años se muestran permeables al discurso de los derechos y se permiten cuestionar el modelo genérico tradicional. Sólo en aquellas mujeres para quienes la violencia resultó una experiencia sostenida a lo largo de los años, logró influir la idea del derecho a una vida libre de violencia; esto sugiere que precisamente estas mujeres no tenían otra opción, y

podría caracterizarse como un indicio de individualización más práctica que ideacional.¹⁴

De manera ideal, el derecho resulta una esfera de reconocimiento que moviliza una concepción de sujeto contraria a la que prevalece en el imaginario y prácticas sociales de la mujer, que es la de un sujeto tutelado que debe ser representado.¹⁵ Honneth sostiene que la esfera del derecho sienta las bases del reconocimiento recíproco de las personas como ciudadanos iguales y libres. En contrapartida, las otras dos esferas de reconocimiento recíproco –las relaciones familiares y el trabajo– no son muy abiertas a la influencia legal estatal: el estado de derecho no puede intervenir en una mejora de las condiciones de reconocimiento en las relaciones familiares o sus medios resultan muy limitados para lograr su influencia aquí (Honneth 2009: 364).

Si bien como este mismo autor afirma, el estado de derecho por sus competencias regulatorias a través de los derechos protegidos por sanciones puede garantizar el reconocimiento jurídico de los ciudadanos, su poder es limitado si la justicia social no es también conquistada y asegurada por el poder de la sociedad civil. El problema radica en la coexistencia de diferentes principios morales según los cuales se orientan las diferentes formas de reconocimiento y que oscilan entre lo tradicional o consuetudinario, en el caso de las relaciones familiares y comunitarias, y lo equitativo e igualitario (es decir, donde los individuos se reconozcan como iguales y libres), del lado de las relaciones jurídicas.

Precisamente, la esfera privada del mundo de la vida, en particular la esfera de la familia, parece seguir siendo central para la reproducción y constitución de las inequidades de género, donde las familias juegan un rol central. Fraser (1989) señala en su lectura de Habermas que las posibilidades de la vida no están sólo determinadas por el nivel institucional formal o el nivel de la esfera pública, como no están sólo restringidas por imposiciones sistémicas. La esfera privada del mundo de la vida en que nos socializamos con identidades y competencias específicas puede fomentar formas de ciudadanía de segunda clase. De allí que estas diversas esferas o fuentes de reconocimiento

¹⁴ Chang Kyung-Sup y Son Min-Young (2010) distinguen tres variaciones de individualización: la ideacional, la práctica y la demográfica. Sólo en el primer caso se trata de un individualismo positivo que refleja patrones de vida individualizados como algo inherentemente valioso.

¹⁵ Honneth (1992) desarrolla un concepto de persona y un sí mismo dependiente de tres formas del reconocimiento intersubjetivo –amor, derecho y respeto o valoración social. Estas tres formas del reconocimiento tienen como contracara tres formas de desdén o menosprecio, experiencia que puede constituirse como motivo de acción en la conformación de conflictos sociales.

son relaciones sociales insustituibles y en tanto ejercen influencias recíprocas, se complementan.

En efecto, si tal como señala Honneth (2009) la materia de la justicia social es la garantía de la autonomía personal y ésta sólo se alcanza por las diferentes vías intersubjetivas de reconocimiento (es decir, de la esfera de las relaciones íntimas, de las relaciones jurídicas y del trabajo), podemos derivar que un reconocimiento jurídico sin una valoración social puede dejar trunco el desarrollo completo de la autonomía personal, ya que las relaciones de reconocimiento son condiciones decisivas de aquella. Sin reconocimiento en el mundo de la vida, la ciudadanía es vacía y formal, ella requiere también de una dimensión substantiva ligada al estatus que se goza en el mundo de la vida. Queda por tanto, mantener el grado de movilización y sensibilización no sólo para que las víctimas se reconozcan en sus derechos a una vida libre de violencia, sino también para favorecer el proceso de cambio en contra de la desigualdad de género en el conjunto de la sociedad.

Bibliografía

- AGOFF, Carolina (2009): “La abierta competencia entre el reconocimiento jurídico y la valoración social: el caso de la violencia de pareja”, en: *Civitas*, 9, 3, pp. 402-417.
- (en prensa): “Del sentimiento de injusticia y el rol de las nuevas legislaciones contra la violencia de género en México”, en: Braig, M./Costa, S./Kron, S. (eds.): *Democracia y reconfiguraciones del Derecho en América Latina*. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana.
- BARTKY, Sandra Lee (1990): *Femininity and Domination. Studies in the Phenomenology of Oppression*. New York: Routledge.
- BAUMAN, Zygmunt (2008): “Introduction”, en: Beck, Ulrich/Beck-Gernsheim, Elisabeth: *Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences*. London: SAGE.
- BECK, Ulrich/BECK-GERNSHEIM, Elisabeth (2008): *Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences*. London: SAGE.
- BECK-GERNSHEIM, Elisabeth (1988): *Die Kinderfrage. Frauen zwischen Kinderwunsch und Unabhängigkeit*. München: C.H. Beck Verlag.
- BILDEN, Helga (1997): “Das Individuum – ein dynamisches System vielfältiger Teil-Selbst. Zur Pluralität in Individuum und Gesellschaft”, en: Keupp, H./Höfer, R (eds.): *Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung*. Frankfurt: Suhrkamp.
- BOURDIEU, Pierre (2000): *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- CÁMARA DE DIPUTADOS (2006): *Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres*, en: <<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf>> (03-02-11).
- (2007): *Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*, en: <<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGAMVLV.doc>> (03-02-11).

- CHANG KYUNG-SUP/SON MIN-YOUNG (2010): "The stranded individualizer under compressed modernity: South Korean women in individualization without individualism", en: *The British Journal of Sociology*, 61, 3, pp. 539-557.
- ENGLER, Wolfgang (1999): *Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land*. Berlin: Aufbau Verlag.
- FRASER, Nancy (1989): *Unruly Practices. Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory*. Cambridge: Polity.
- HAUSEN, Karin. (1990): "Überlegungen zum geschlechtsspezifischen Strukturwandel der Öffentlichkeit", en: Gerhardt, Ute *et al.* (eds.): *Menschenrechte haben (K)ein Geschlecht: Differenz und Gleichheit*. Frankfurt: Ulrike Helmer Verlag.
- HELLER, Agnes (1999): *Teoría de los sentimientos*. México: Fontamara.
- HONNETH, Axel (1992): *Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*. Frankfurt: Suhrkamp.
- (2009): "A textura da justiça. Sobre os limites do procedimentalismo contemporâneo", en: *Civitas*, vol. 9, n° 3, pp. 325-368.
- INEGI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS) (2006): *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH)*. México: INEGI.
- KEUPP, Heiner (1999): *Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne*. Reinbeck: Rowohlt.
- LAMAS, Marta (1996): *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. México: PUEG/Miguel Ángel Porrúa.
- LE BRETON, D. (1999): *Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- NUSSBAUM, Martha (2006): *El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley*. Buenos Aires: Katz Editores.
- OLIVEIRA, Orlandina (2000): "Transformaciones socioeconómicas, familia y condición femenina", en: López, María de la Paz/Salles, Vania (eds.): *Familia, género y pobreza*. México: Miguel Ángel Porrúa.
- SILVA SANTISTEBAN, Rocío (2008): *El factor asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

Álvaro Pérez-Ragone¹

Diálogo y cooperación en la justicia civil contemporánea: hacia una mayor eficiencia, legitimidad y justicia en la decisión

I. Introducción

La necesidad de una justicia civil, procesos, jueces y partes intervinientes creíbles y leales, aun cuando el postulado parezca una utopía, tal cual como pretendo desarrollar en el presente artículo podría ser una alternativa válida. Los componentes básicos para poder hablar de una “buena justicia civil” se podrían reducir a cuatro: en primer lugar, el acceso a la justicia y a los tribunales, lo que podría traducirse en la eliminación de trabas de carácter económico y socio-cultural que impidan la eficiente prestación y asignación de los recursos de la justicia, así como también la minimización de información tergiversada entre el juez y las partes; un segundo componente consiste en que el acceso y posterior curso de la prestación debe realizarse con criterios de eficacia y eficiencia, ya que una justicia tardía no es justicia; un tercer componente exige que la serie de procedimientos y las relaciones del tribunal para con las partes y terceros respete la dignidad de cada uno, requisito de un proceso equitativo y justo; finalmente, como último componente, se debe mencionar que el producto o resultado obtenido de la prestación del servicio de justicia debe ser legítimo, creíble y convincente².

Estos cuatro componentes debieran contribuir, siempre que se respeten, a que la tutela de los derechos y la solución de controversias se pueda desenvolver de tal manera que sea cual sea el resultado (adverso o favorable) para una parte en concreto, este sea siempre respetable, es decir, legítimo. Uno de los principales inconvenientes, no solamente doctrinarios sino también de técnica legislativa e incluso de visión político-procesal, fue discutir durante los siglos XIX y XX cuál es el rol asignable a los terceros y al juez en un proceso civil. Si

¹ Profesor de Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), aporte investigativo dentro del proyecto Fondecyt N° 1111021.

² Gräns 2001: 16-47.

se consideraba que necesariamente las partes que intervienen en pie de igualdad con conocimiento de la información favorable o no, propia y ajena, relacionada con su caso, sería posible exigirle al juez una actitud absolutamente pasiva, que finalmente asumirá un rol de jerarquía sólo en el momento del pronunciamiento de la sentencia. Pero esta hipótesis de igualdad de las partes en un proceso civil sólo se limitaría erróneamente a una igualdad de carácter formal. No considera, por ejemplo, que, para el acceso a la justicia y la igualdad de condiciones, la calidad de la asistencia letrada es un factor determinante. La parte en mejores condiciones podría aprovechar la situación de desigualdad real para lograr un resultado procesal favorable aunque no le asista la razón. O lo que es peor desde el punto de vista axiológico o de la justicia, que una de las partes ganara no por que le asiste la razón, sino por tener mejor dominio de las reglas del juego.

Los llamados principios o máximas formativas del proceso permanecieron mucho tiempo sin ser sometidos debidamente a una reflexión y continuaron teniendo vigencia en tanto axiomas sin posibilidad de reconsiderarlos³. Es recién luego de la década de 1950 cuando comienza la discusión en torno al principio o máxima de aporte probatorio por las partes procesales, convirtiéndose en objeto de estudio y controversia en la doctrina y la jurisprudencia. Los componentes mencionados al inicio son exigencias –no meras opciones técnicas– para una justicia civil que respete la Constitución. Muchos de ellos se traducían en principios, normalmente inoperables y meramente descriptivos para diferenciar los distintos sistemas de justicia civil. El tratamiento, en especial de las máximas o principios procesales vinculados con el acceso a la información probatoria, no llamaba la atención del legislador y era muy dependiente del tiempo y las corrientes dogmáticas-ideológicas coyunturales, que pendulaban entre lo conservador y lo liberal, el menor o mayor poder de los jueces o de las partes⁴. Al ser el conflicto civil una mera disputa de dos partes movidas por intereses privados, éstas eran libres de determinar la duración, suspender, retomar o disponer sin más de un proceso civil que se identificaba con lo “privado” de la controversia. Otra visión posterior, ya postulada por Klein (1854-1926)⁵ en la reforma al proceso civil austriaco, consideraba que el conflicto privado, al emplear el poder judicial para buscar una solución, entraba de lleno en lo “público”, al usar recursos del Estado, tiempo, eficiencia y eficacia que no podían ni debían interesar solo a las partes. Después de todo, la credibilidad

³ Spohr 1969: 15-24; Stürner 1985: 237; Schlosser 1991: 599-303.

⁴ Klein 1927: 190; Stürner 1985: 237.

⁵ El autor austriaco publicó una serie de artículos que fueron luego compilados en una de sus monografías más influyentes *Pro futuro* (ver especialmente pp. 20-44; Klein 1891: 21-34). Jelinek 1991: 50.

y legitimidad de una sentencia (en tanto legal y justa) es un bien o insumo para toda la sociedad.

Así, la discusión en torno a lo teórico sin ninguna finalidad pragmática dejaba de lado la consideración en concreto del rol que debía asignarse a las partes, al tribunal y a los terceros en la recopilación y posterior procesamiento de toda aquella información necesaria para poder decidir un caso, reconociendo o no el derecho de uno de los interesados. Sucede que la prueba en un proceso, aquello que contiene la información que servirá de fundamento para considerar más o menos cercana a la verdad las alegaciones de las partes interesadas, parece en realidad no ser una actividad exclusiva, sino más bien concurrente del juez y las partes. La mayor o menor duración de un proceso en concreto, la mayor o menor legitimidad de la sentencia no son una cuestión que debiera interesar sólo a las partes, también conciernen al conjunto de ciudadanos que financian el sistema de administración de justicia con sus tributos y a aquellos cuyos casos deben postergarse porque los recursos humanos e infraestructurales están ocupados en otros casos. Aun cuando la justicia civil persiga tutelar y resolver los conflictos de derechos particulares, la utilización de recursos de la función judicial no parece ser sólo cuestión de las partes, o al menos no sólo exclusivamente de ellas.

La necesidad de un *fair play* procesal impone no sólo colaborar, sino además hacerlo de manera leal. El principio de aporte de parte, de quienes tienen interés en el proceso como demandante o demandado de terceros, se veía también nublado por el principio *nemo contra se edere tenetur* (nadie está obligado a alegar contra sí mismo), que de alguna manera marcaba el límite del imperativo que recaía sobre cada uno de los sujetos en relación a la información que podía, debía o le convenía aportar al proceso⁶. Este principio, justamente, se fundaba en que la justicia civil era “cosa o materia de interés particular”, por ende estratégicamente disponible en el tiempo y sujeta a la suerte del mejor jugador. Así no era esperable que una parte pudiera aportar información que la perjudicara, aun cuando ello incidiera en la consecución de un proceso justo, teniendo en cuenta que una sentencia no puede mentir o tergiversar la realidad so pena de devenir en ilegítima y minarse así la credibilidad del sistema en su conjunto⁷.

De ninguna manera el juez sustituye en esta visión a las partes, quienes pueden disponer sobre el objeto del proceso: el juez solamente puede usar aquello que las partes decidan que integre determinado proceso, así en la relación entre el Derecho procesal y la concepción de Derecho sustantivo. Ello podía corresponderse con la posibilidad de disponer sobre el material o elemento en litigio

⁶ Lang 2007: 10-34; Drenckhahn 2007: 25-50.

⁷ Verberk 2010: 66.

y su relación entre el Derecho procesal por un lado y el Derecho constitucional por otro. Esta doble posibilidad, traducida en un Derecho que titularizan las partes procesales, se manifiesta en solicitar a la jurisdicción o accionar como así también de defenderse por un lado. Por otro, en la posibilidad de influenciar en la tramitación y el contenido del proceso, determinando lo que se peticiona y en base a qué hechos, y —en su caso— hasta la invocación del Derecho que va servir de fundamentación para lo peticionado se manifiesta a través del principio dispositivo en el aporte probatorio a instancia de las partes. En efecto, las partes deciden el inicio, la extensión, el objeto de discusión y conocimiento en el proceso, su eventual modificación, prosecución e, incluso, la posibilidad de extinción del proceso sin que medie una actividad o decisión por parte del juez⁸.

El desarrollo jurídico en la historia el Derecho procesal civil ha conducido desde fines del siglo XIX hasta finales del siglo XX, con las últimas grandes reformas europeas, latinoamericanas y asiáticas, a un aumento del poder del juez. Así, consecuente, con el aumento de su responsabilidad en la dirección y manejo del proceso pasó de un simple juez observador y pasivo a uno director y organizador (juez activo)⁹. Este trabajo tiene por objeto ser un aporte al actual significado de los principios que determinan una justicia civil para poderla amoldar a los cuatro componentes que mencionamos al inicio. Veremos de qué manera se aplican a aquello y entre quiénes se discute en un proceso civil, porqué es necesario exigir un “juego limpio” en términos estratégicos, veracidad y lealtad, que se manifiestan en deberes de cooperación en el aporte de información para una correcta decisión¹⁰.

II. Examen del modelo alemán a partir de la reforma a la justicia civil en 2002 (§§ 142 y 144, 273 y 139 ZPO) **(Zivilprozessordnung)**

Un objetivo de la reforma alemana del año 2002 fue fortalecer la primera instancia y lograr así mayor celeridad sin renunciar a la calidad de la decisión. En el proceso, en su momento, se hizo referencia a que el juez tenía el deber de esclarecer las cuestiones de hecho y de derecho para una adecuada resolución de la controversia¹¹. Como antecedente en la discusión dogmática alemana, ya

⁸ Verberk 2010: 303-324.

⁹ Schlosser 1991: 599; Schöpfunglin 1992: 17-26; Baur 1968: 76; Prütting 1980: 361.

¹⁰ Huber 2008: 11-20.

¹¹ BT-Drs. (Bundestag-Drucksache) 14/163; Greger 2000: 842; Hansens 2002: 125-126; Schellhammer 2001: 1081-1082.

en septiembre del año 2000 en el marco del Congreso alemán de juristas número 63, comenzó a considerarse como objeto de la reforma la ampliación de los deberes de esclarecimiento de las partes¹². Es así que del reformado §142 apartado primero de la ZPO alemana, a partir de la reforma del 2002, se otorga al tribunal la facultad ilimitada para exigir, incluso de oficio, a alguna de las partes la exhibición de algún documento u objeto, aun contra su voluntad, aplicándosele en defecto las sanciones previstas para los testigos, amén de eventuales consecuencias desfavorables en el proceso contra sus intereses¹³.

¿Qué rol desempeña o debiera desempeñar la información aportada al proceso? El imperativo recae en todos los intervinientes del proceso: partes, terceros y juez. No hay posibilidad de arribar a una decisión fundada sin que el juez cuente con un convencimiento sobre las razones alegadas por cada una de las partes, y ese convencimiento lo consiguen las partes para obtener una resolución favorable. Trataré, a partir de esta reforma en un sistema positivo concreto, de sostener la siguientes tesis: (i) es posible partir de un deber general de información procesal independiente de los específicos deberes sustantivos civiles, mercantiles, tributarios o de otra índole; (ii) el límite de este deber lo determinan las normas sobre derecho a objeción fundadas en la confidencialidad, posibilidad de perjuicio a terceros o a las partes cuyos derechos no deban sacrificarse en pos del proceso y los casos especiales que reulten de la propia ponderación judicial de las causales existentes para limitar el deber existente para los testigos.

III. Máximas y principios procesales que inspiran al proceso civil alemán

El juez y las partes son las figuras centrales del proceso civil alemán. De allí que sea necesario previamente aclarar los alcances de la distinción doctrinaria entre principio dispositivo y de oficialidad, y por otro, en cuanto a la iniciativa y actividad probatoria, entre principio de aportación de parte y principio inquisitivo.

Un principio fundamental es el del control de las partes del inicio, mutación, fin y objeto del proceso (*principio dispositivo*). El juez es responsable (oficialidad) en el proceso alemán, de que las partes decidan correctamente sobre qué hechos serán discutidos y los fundamentos jurídicos de sus alegacio-

¹² Beilage Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2000, Heft 25, p. 31 ss. ; Hannich 2002: 190-193.

¹³ Strodthoff 2004: 266-270.

nes. Para ello, el ZPO brinda las herramientas de actuación oficiosa del tribunal y las reglas de cargas y deberes en las relaciones de partes y terceros. Así, el proceso civil está completamente dominado por las partes. Son las partes y sus abogados quienes determinan el objeto del juicios a través de sus actos de *postulación* (*principio dispositivo*) y quienes incorporan los hechos y los medios de prueba (*principio de controversia*)¹⁴.

1. *El juez activo: dirección formal y material del proceso*

El § 139 del ZPO fue —y es considerado— como uno de los pilares del justo proceso¹⁵. Este parágrafo regula el impulso y dinámica procesal en general, tanto en su redacción actual como en la anterior a la reforma de 2002. Se debe recordar que aquel no estaba contenido en el proyecto de Código Procesal Civil publicado en 1871 y fue recién incorporado con motivo de la reenumeración del Código con la reforma de 1898¹⁶. En los hechos, las modificaciones posteriores al CPO (*Civilprozessordnung*) no resultaron exitosas en su aplicación práctica y es a partir del 2002 cuando toma un real impulso.

La práctica fue reticente a la aplicación plena de la norma, por considerar que la posibilidad de realizar preguntas y aclaraciones no fue tomada con seriedad ni por el tribunal ni por las partes. En definitiva lo que éstas desean es un juicio rápido y una sentencia definitiva sin mayores trabas. Por ello, aunque las aclaraciones y preguntas que realice el tribunal —en teoría— colaboran con una mejor claridad y orden del proceso previniendo inútiles trabas procedimentales posteriores, era necesario diagnosticar por qué fracasó el sistema de incentivo y sanciones. La falta de éxito se debió a una serie conexas de causas. En primer lugar, las audiencias eran tardíamente preparadas. Incluso el presidente recibía los expedientes, así como los dictámenes pertinentes, con una semana o días de anticipación a la audiencia oral. En caso de creer pertinentes determinadas aclaraciones, obviamente surgía el temor de que fueran introducidas nuevas cuestiones de hecho o de derecho que podrían tácticamente obstaculizar el dictado inmediato de una sentencia y dilaten el proceso, siendo necesarias nuevas audiencias. También colaboró con ello el Supremo Tribunal Federal Alemán con decisiones como la de 1984,¹⁷ según la cual la parte con representación letrada no tendría derecho a avisos o instrucciones del juez que

¹⁴ Schilken 2011: 7-24; Schwab 2010: 10-30.

¹⁵ Prütting-Gehrlein 2011: §139, n. 1-5; Rensen 2002: 1-15.

¹⁶ Rensen 2002: 15.

¹⁷ BGH (*Bundesgerichtshof*/Supremo Tribunal Federal Alemán), *NJW*, 1984, p. 310.

se relacionaran con el Derecho o los hechos sobre los que se sustentaba lo peticionado por las partes. Más aún, en el año 1990, el BGH volvió sobre sus pasos, contrariando la precedente decisión a favor de la potestad esclarecedora del juez. De modo tal que la poca coherencia y predecibilidad sobre los alcances y la aplicación de estas disposiciones era resitada en la práctica.

Con la reforma de 2002, se agregó al § 139 ZPO el apartado 3 del antiguo § 278 ZPO. En su actual redacción, el § 139 ZPO se divide en cinco apartados. El primero establece que el tribunal puede aclarar con las partes las cuestiones de hecho contradictorias realizando las preguntas pertinentes. De este modo, el tribunal colabora e incentiva a las partes para lograr una completa manifestación y en tiempo sobre las cuestiones de hecho relevantes. El apartado segundo dispone que cuando un punto de vista no haya sido reconocido por una parte o, evaluado como irrelevante por ambas, el tribunal podrá referirse a ello en su decisión solamente cuando permitió su discusión y el punto (solo relevante para una parte o irrelevante para las dos) se circunscriba a algo meramente accesorio. Ello también es válido cuando el punto de vista del tribunal sea absolutamente contrario al de las partes. El apartado tercero establece el derecho del tribunal de advertir en todas las cuestiones donde de por sí pueda actuar de oficio. El apartado cuarto señala que el tribunal puede y debe instar las medidas para el adecuado conocimiento del expediente del proceso a fin de prevenir errores. El apartado quinto permite que una parte pueda solicitar un plazo para entregar por escrito aquello que el tribunal le solicitó sea esclarecido.¹⁸

El § 139 ZPO debe ser analizado desde dos puntos de vista: por un lado, el cúmulo de deberes (y facultades) que contempla y, en segundo lugar, los efectos de su inobservancia.

a. Deber de discusión

El § 139 ZPO obliga al tribunal –en colaboración con las partes– al esclarecimiento de aquello que se discute y debe ser decidido en el proceso. Este deber pesa en la cabeza del juez y tiene por objetivo que todos los involucrados puedan precisar el objeto del juicio, sus coincidencias, diferencias y qué solicitan concretamente. Se exige del tribunal prudencia en el ejercicio de este deber, de modo que pueda brindar igual oportunidad a las partes para ser oídas (como componente del proceso debido y justo). En relación con ello hay que recordar que el Tribunal Constitucional Federal (BVerfG) se pronunció claramente en favor de la tutela del derecho a ser oído y del derecho de defensa, aplicando el principio de igualdad de armas¹⁹.

¹⁸ Schaefer 2002: 849.

¹⁹ BVerfGE, 84, p. 190.

b. Deber de instrucción e interrogación

Siempre que surjan dudas sobre los fundamentos de hecho o de derecho invocados por las partes para la tutela de sus derechos, el tribunal debe interrogar a las partes al respecto. Las preguntas pueden ser realizadas aun en forma de indicaciones. El mismo Tribunal Constitucional Federal considera contrario a la Ley Fundamental que el deber de interrogación o indicación no sea ejercido en el supuesto de una decisión jurisdiccional. Así, por ejemplo, cuando ciertas argumentaciones no son comprensibles para el tribunal, debe ejercer su deber de pregunta e información. Por cierto el deber tiene tal importancia que fue considerado por el Tribunal Constitucional Federal en directa relación con el artículo 3, apartado 1.º de la Ley Fundamental²⁰.

c. Deber de esclarecimiento y función preventiva de vicios

El punto de partida esencial del § 139 ZPO es la clara y transparente fundamentación de una decisión judicial. El porqué y el cómo se arriba a una sentencia debe resultar apreciable clara e indiscutiblemente tanto para las partes como para el tribunal. El BGH alemán se pronunció al respecto en el sentido de que las contradicciones en cuestiones relevantes de la demanda deben ser esclarecidas antes de que pueda arribarse a la sentencia²¹. Para ser coherentes con el deber de indicación y en combinación con el deber de discusión y esclarecimiento, el tribunal puede discutir y esclarecer con las partes sus peticiones. Así, por ejemplo, en los supuestos de modificación o cambios de situaciones que influyan en las cuestiones de hechos o derechos discutidas. El límite de la imparcialidad del juez impone que no debe ejercer los deberes y facultades antes mencionados de una manera arbitraria que conduzca a perjudicar la posición de una de las partes beneficiando a la otra.

El tribunal debe ejercer su deber de esclarecimiento para corregir errores en la formulación de los argumentos no considerados, erróneamente ponderados por las partes o incluso contrarios al punto de vista del juzgador.

De acuerdo con el § 139 apartado 3 ZPO, el tribunal igualmente debe realizar las advertencias, indicaciones y requerimientos de las aclaraciones pertinentes de las partes, en todo lo que se corresponda pueda (o deba) ser realizado de oficio por él. Siempre tendrán ambas partes el derecho a ser oídas para oponerse a un actuar arbitrario o de tratamiento inequitativo según centenario fallo del Superior Tribunal Constitucional de 1910²².

²⁰ BVerfG, en *NJW*, 1976, p. 1391.

²¹ BGH, en *MDR*, 2001: 104.

²² BVerfGE 10, p. 182; BVerfGE 15, p. 218.

d. Deberes de documentación y registro del proceso

El agregado del apartado cuarto al § 139 ZPO es importante en tanto y en cuanto el tribunal debe cumplir con todas las obligaciones pertinentes a la debida documentación y protocolización de los actos procesales, su publicidad y registro. Las indicaciones, aclaraciones y advertencias que realice el juez deben ser debidamente protocolizadas o tomadas en el expediente de la manera adecuada para ello.

e. Emplazamiento para manifestarse y conclusión de las audiencias

La apartado quinto del § 139 ZPO regula el deber del tribunal de conceder un plazo a las partes para que puedan manifestarse sobre una pregunta o aclaración requerida por el tribunal. El derecho que tiene una parte al otorgamiento de un plazo para expresar su opinión sobre un requerimiento específico, no implica el correlativo derecho de la otra para aclarar, integrar o refutar sobre lo que ya haya manifestado por escrito²³.

El § 156 ZPO determina que, aun cuando una audiencia ya haya concluido, bajo determinadas condiciones se permite la inclusión de nuevos elementos que permitan su reapertura para oír a las partes. No parece suficiente el poder expresarse por escrito para completar argumentos de hecho o de derecho. Todo se vincula con el conjunto de condiciones necesarias para una atmósfera de confianza que debe imperar entre las partes y el tribunal²⁴.

2. La actividad probatoria: cooperación de partes y terceros

Según la antigua redacción del § 428 ZPO si un documento se encontrara en poder de un tercero, el juez ordenará la producción de la prueba a pedido de la parte intimando al poseedor del documento para que lo presente en un plazo determinado. En esta versión, el tercero solamente estaba obligado a presentar el documento exigido cuando quien lo solicitaba tenía un derecho previo establecido justamente para poder exigir ese documento (§§ 429 y 422 del ZPO)²⁵. En su antigua redacción, el tribunal podía ordenar, a pedido de parte, la presentación de un documento en poder de un tercero. La parte que lo solicitaba necesitaba justificar su petición en un derecho reconocido por el propio Dere-

²³ Comp. OLG Colonia, en *NJW-RR*, 1987: 1152.

²⁴ Así BVerfGE 51, p. 192; 75, p. 190.

²⁵ En detalle Schöpfung 2001: 17-26; Katzenmeier 2002: 534.

cho sustantivo (civil, comercial, etc.) y no era suficiente la sola “necesidad de colaboración probatoria de los terceros” para con ese proceso en concreto.

Con la nueva redacción del § 142 apartado 1 ZPO, el tribunal puede ordenarle –incluso de oficio– a un tercero que presente un documento u objeto que está en su poder con la sola justificación de que tiene relación con lo discutido en ese proceso. Más aun, la reforma introdujo la potestad para que el tribunal de oficio pueda ordenar prueba de inspección o pericial, según el § 144 ZPO. Así, puede afirmarse que, ahora, el tercero está obligado a colaborar con ese proceso aportando el material probatorio que se le exige, incluso a falta de una relación sustantiva. En otros términos, es suficiente y necesaria la relación procesal para que surja el deber de colaboración informativa del tercero²⁶.

La limitación a esta nueva potestad jurisdiccional incluida por la reforma se encuentra contenida en los §§ 142 apartado 2, oración 1, y 144 apartado 2. Así, el tercero se puede desobligar de dicha obligación alegando irrazionalidad o imposibilidad para proceder a acompañar lo requerido. El tercero o la parte destinatarios de la orden pueden oponer a la orden judicial como causales de objeción para la presentación de documentos la existencia de supuestos que autorizan análogamente su liberación del deber de declaración testimonial.

Así, a las partes les son aplicables, en caso de incumplimiento sin justificación, las consecuencias procesales negativas, dándose por probado el hecho alegado que se pudo acreditar (o no) mediante la prueba documental²⁷. Ello aún cuando tal consecuencia no aparece expresamente regulada. En realidad no resulta claro si ello sólo es aplicable a la parte sobre la que recae la carga o peso de probar lo que alegó, o bien podría extenderse incluso a la contraparte, quien sin duda debe cooperar procesalmente. Ahora bien, este deber de cooperación procesal no podría incluir el tener, incluso, que subsidiar al adversario en caso de falta o defecto de prueba de sus alegaciones. Esta interpretación parece aceptable y no es sino una aplicación de la teoría que desarrollara Stürner²⁸. Así, quien alega y debe probar no puede pretender que su negligencia probatoria sea suplida por la contraparte. A los terceros procesales, por su lado, se les aplican las sanciones pecuniarias de cumplimiento inmediato, según los §§ 390 y siguientes del ZPO.²⁹ Este estatuto aplicable al tercero parece razonable, ya que al no tener interés en el resultado del proceso, mal podrían afectarlo consecuencias probatorias negativas.

²⁶ Zekoll-Bolt 2002: 2129; Kraayvanger 2003: 572. En detalle sobre las teorías la siempre vigente la obra de Stürner 1976: 10-60.

²⁷ Beckhaus 2010: 25-35.

²⁸ Stürner 1976: 174-178; Beckhaus 2010: 99-106.

²⁹ BVerfG resol. 14/07/1981 OLG Hamm, igualmente BVerfGE 20, p. 323 (332) = NJW 1967, p. 195 y BVerfG resol. V. 24/04/1991; BVerfG 80, p. 244 (255) = NJW, 1990, p. 37.

IV. Imperativos de aporte de información sobre las partes procesales

Tradicionalmente se crearon dentro de la relación procesal ciertas dificultades para la incorporación de las distintas situaciones jurídicas que podían darse en la relación material. Me refiero especialmente a los supuestos de deberes-derechos, obligaciones, privilegios y potestades.

Pretendo aplicar acá criterios más pragmáticos ya considerados por parte de la doctrina³⁰. Si consideramos la pretensión de información en un proceso podríamos considerarla desde dos puntos de vistas, no necesariamente excluyentes. O es meramente auxiliar a una pretensión sustantiva principal que motivará y será el centro de discusión en ese proceso o, por el contrario, tiene cierto grado de independencia que permite fundamentar una existencia y fines propios como el esclarecimiento mismo y la satisfacción de las finalidades del proceso civil. Dentro del primer grupo hemos de encontrar casos que denominaremos “pretensiones de información procesal derivadas”, mientras que el segundo comprende las “pretensiones de información autónomas”. Creo que nada impide la coexistencia de ambos tipos de deberes de información exigibles³¹. La necesidad de disminuir el déficit de información probatoria impone la coexistencia de deberes de cooperación (de partes y terceros) con límites contenidos en derechos de objeción absolutos y relativos que deben ponderarse en cada caso particular.

Las primeras contemplan deberes de cooperación procesal de carácter material, así, por ejemplo, el § 666 del Código Civil alemán, como así también deberes procesales cuyo fundamento directo sea una relación jurídica material e imponga un deber de cooperación a una de las partes cuyos obligados pueden ser terceros o la contraparte. Los deberes autónomos por su lado existen en base a necesidades puramente procesales, nadie discute el caso del imperativo de asumir la calidad de testigo por ejemplo. Esta clasificación asume importancia a los efectos de determinar una técnica legislativa adecuada para el tratamiento del deber de cooperación procesal informativa tanto de las partes como de terceros, lo que será tratado en detalle posteriormente.

1. *Deber de aclaración de las partes en el proceso civil*

La acuciosa discusión de siglos en torno a la existencia o no de un deber procesal general de esclarecimiento no tuvo especial relevancia en la praxis juris-

³⁰ Stürner 1976: 329.

³¹ Verberk 2010: 413.

prudencial alemana, sino a partir de la sentencia del Tribunal Federal Alemán del 11 junio de 1990³². En paralelo, debe considerarse la formación en Europa de cierta armonización y reformas en materia procesal civil en Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Austria y Holanda. Por cierto, no menciono a los Estados Unidos de América, donde los deberes de cooperación procesal de las partes se manifiesta de una forma mucho más explícita y con un mayor ámbito de aplicación³³.

Creo necesario evaluar la recepción en principio e ideas de una vanguardista tesis de habilitación³⁴ y otra monografía posterior³⁵ para justificar y examinar la reforma alemana a partir del año 2002 como enorme contribución al Derecho procesal civil comparado. El deber de aviso, advertencia o instrucción del juez a las partes y el imperativo de aclaración de éstas coadyuvan a un mejor y más justo proceso dentro de los marcos de libertad y la responsabilidad individual. Cualquiera que sea la visión crítica que se asuma nos encontraremos con una serie de supuestos regulados, ya en el Derecho material ya en el Derecho procesal, donde el centro son imperativos de cooperación o esclarecimiento.

Hasta la reforma del año 2002 existían (debo decir que incluso luego de la reforma existen) al menos tres posiciones.

(i) Una sostiene que a la parte que no tiene que probar (sin el peso de la carga de la prueba) no puede exigírsele un deber procesal de cooperación informativa o de esclarecimiento. Ello justificaría que pueda exigírsele el deber si se fundamenta en el Derecho material y nunca en forma autónoma. Para esta teoría es importante la limitación dentro de este deber de cooperación fundado en el Derecho material y la necesidad de la ponderación de los distintos intereses en juego a partir de la disposición sustantiva³⁶.

(ii) Contra la tesis antes descrita se parte afirmando la existencia de un deber procesal general de esclarecimiento, el que incluso obligaría a la parte sin necesidad que pese sobre ella la carga de la prueba. Así, siempre y cuando la (a) parte que tiene la carga de la prueba (b) haya alegado como fundamento de su

³² Stürner 1990: 315, 208.

³³ Schöpfunglin 1992: 190. Stürner 1985: 239.

³⁴ Me refiero a la tesis de Rolf Stürner, *Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses*, Tubinga, 1976. Una posición minoritaria incluso hasta el siglo XXI, no obstante con importantes claves para entender y aplicar la reforma desde 2002. La tesis tuvo efectos relevantes en reformas como la portuguesa, donde se incorpora una norma expresa en tal sentido.

³⁵ Refiero a la monografía de Rolf Stürner *Richterliche Aufklärungspflicht*, publicada en 1982.

³⁶ Gottwald 1979: 364, 368.

petición determinados hechos y (c) ello pudo ser discutido en el juicio, surgiría entonces un deber general que obliga igualmente a ambas partes sin importar sobre quién recae la carga de probar. Dándose las condiciones (a), (b) y (c) copulativamente y (d) no existiendo normas que regulen intereses propios de naturaleza procesal o sustantivo que precisen de una tutela o atención mayor es posible hablar de un deber general de cooperación procesal para ese caso. En esta tesis se deben verificar entonces tres condiciones positivas (a, b y c) y una negativa (d) para poder hablar de un deber general de cooperación. Faltando alguna de las cuatro sólo corresponderá la carga de la prueba a la parte cuya alegación necesita ser acreditada. Los representantes de esta visión la sustentan en la finalidad del proceso, cual es procurar lo mejor y lo máximo posible el acercamiento a la verdad, lo que estaría garantizado constitucionalmente mediante el derecho de las partes a una tutela jurisdiccional efectiva. Los matices dentro de este posición permiten subdistinguir distintas visiones. Una postura³⁷ acude al argumento de la fundamentación por analogía para poder ampliar la aplicación del deber general a partir de determinados supuestos existentes en el código procesal civil alemán. A partir de un deber general de veracidad e información procesal consagrado en el § 138 inciso primero y segundo, lo regulado en los §§ 423 445 372a y 654 ZPO serían casos especiales de aplicación del principio³⁸. Paralelo a ello, se enuncian las disposiciones sobre la división de la carga de la prueba enunciada por la dogmática en base a la cual, tiene la carga de la prueba aquella parte que, de acuerdo a las circunstancias se encuentra en mejores condiciones de poder acceder a la prueba. Otra parte de la doctrina infiere el deber general de información o cooperación procesal de principios generales aplicables al proceso y en especial de los relacionados por las conductas de coherencia que deben asumir las partes en aplicación de máximas tales como el *venire contrafactum proprium* (actuar contra los actos propios)³⁹.

(iii) Entre ambas posiciones extremas se encuentra una teoría intermedia⁴⁰ que reconoce la existencia de deberes especiales de esclarecimiento fundados en el Derecho material, los cuales deben ser observados, cumplidos y en su caso sancionados procesalmente (lo que toma de la tesis ii). A ello suma la necesidad de respetar y de cumplir aquellos deberes de cooperación procesal que surjan en casos excepcionales aún sin fundamento en el Derecho sustantivo (lo que incluye a partir de la tesis i)⁴¹. Serían una serie de principios jurídi-

³⁷ Stürner 1976: 92; Huber 2008: 106-112; en contra Prütting 1996: 13, 8.

³⁸ Peters 1966: 106.

³⁹ Stürner 1991: 208, 212.

⁴⁰ Prütting 1996: 13.

⁴¹ Schlosser 1991: 599, 604; Prütting 1996: 137; Stickelbrock 1996: 156. Véase, en ese sentido, la jurisprudencia de varios tribunales: OLG Koblenz NJW 1968, 897; BGH NJW

cos como la buena fe, la prohibición de actos contradictorios o incoherentes y la lealtad procesal que fundamentarían deberes procesales especiales de esclarecimiento. Así, no habría un deber general, sino casos particulares fundados en aquellos principios que imponen deberes de esclarecimientos para esos supuestos. Integra esta tesis intermedia la histórica posición adoptada por el Superior Tribunal Federal Alemán, la denominada teoría de la carga de la argumentación o del aporte argumentativo secundario, que justifica la imposición de imperativos de esclarecimiento aun sin relación con norma sustantiva alguna.

Veamos pues cómo se aplicarían estas tres grandes visiones doctrinarias a un caso hipotético concreto. El paciente (a) es sometido a una intervención neuroquirúrgica de altísima complejidad en la clínica Z. El médico a cargo de la operación es el doctor (b). El paciente, luego de la operación no solamente pierde la visión, sino que también queda imposibilitado de poder mover sus extremidades inferiores y superiores. Así, (a) interpone una demanda en contra de la clínica y el médico por mala praxis médica sosteniendo que en ningún momento se le informó sobre la posibilidad de estos resultados y que no obstante el médico haber advertido al paciente sobre la complejidad, minimizó ello sosteniendo que era necesaria y con una alta probabilidad de resultado positivo. Por su lado, las partes demandadas (b) y Z sostienen que se cumplieron con todos los protocolos y la *lex artis* de la medicina para ese caso.

Frente a esta situación, el juez se encuentra imposibilitado de decidir sobre la sola base de lo alegado por las partes, necesitando por ende información y evidencia adicional. Ahora es posible preguntar ¿cuál de las dos partes en este caso se encuentra en mejores condiciones para poder aportar la información pertinente, relevante y fehaciente? Si partimos aplicando la primera teoría (i), desde el punto de vista sustantivo, existirán disposiciones relativas a las reglas *artis* en medicina que imponen el deber de actuar con la máxima diligencia posible, desempeñando el médico una obligación de medios. Así, el médico no se compromete a un resultado, sino más bien a poner toda la diligencia posible para poder alcanzarlo y si no lo logra, basta acreditar su máxima diligencia de acuerdo a sus conocimientos para ser liberado de cualquier responsabilidad. Ahora bien, en esta primera posición, que parte de un análisis exclusivamente del Derecho sustantivo, nos encontramos con una dificultad procesal relacionada son las pruebas suficientes para acreditar precisamente el cumplimiento de esas diligencias como obligaciones de medios. Ante este interrogante de naturaleza netamente procesal, la primera teoría no logra ofrecer respuestas

1972, 1131, 1132; 1986, 2371, 2372; OLG Koblenz NJW 1968, 897; OLG Koblenz NJW 1968, 897; BGH NJW 1960, 821; 1963, 389, 390.

convincentes, ya que poner el peso informativo siempre sobre el paciente (demandante en el caso) no parece justo.

Otra podría ser la respuesta si aplicamos la tesis decrita en (ii): quien tiene la carga de la prueba no es el paciente, él no debe probar que el médico incurrió en una falta de diligencia, ello sería una prueba de un hecho negativo lo que es imposible. El paciente en este caso solamente debiera acreditar el daño sufrido pero la totalidad de la carga de la prueba, a los efectos de acreditar el cumplimiento máximo, mejor y detalladamente posible de la debida diligencia de las reglas *artis* médicas corresponderá al médico y a la clínica. Éstos son los que se encuentran en mejor condición para informar adecuadamente: mayor cercanía, posibilidad y calidad técnica de acceder a la información probatoria necesaria para dirimir el conflicto. Es a esta parte a la cual se le impondrá pues la carga de la prueba.

La posición (iii) respondería a este interrogante de la siguiente manera: de acuerdo al Derecho material, la carga de la prueba corresponde por regla al que demanda (al paciente), es él quien debe acreditar el incumplimiento por parte del o de los demandados. Sin embargo, en este caso, siendo una de las partes notoriamente inferior en calidades técnicas, infraestructurales, económicas, y de condiciones específicas (el paciente) de acceder a la información probatoria relevante, la carga de la prueba corresponderá a la clínica y al médico por el enorme componente técnico y específico de la prueba. Se debe tener presente que son reglas ajenas al conocimiento de cualquier persona normal no calificada en esa área (pacientes en general). En la relación médico-paciente, una de las partes titulariza condiciones técnicas que deben también asumirse con resguardos jurídicos y éticos correspondiendo a ella —excepcionalmente y por las condiciones del caso— la carga de la prueba.

2. *Los terceros y su deber de colaboración con la función jurisdiccional*

Los terceros no interesados con el resultado de un caso en particular son titulares de deberes procesales claramente de cooperación o colaboración no relacionados con una sentencia favorable o no en ese proceso. Al no tener interés en el resultado, solamente cabe su inclusión a través de mecanismos que permitan efectivizar este imperativo en forma coercitiva, ello es, nos encontramos frente a titulares posibles de deberes procesales por un lado. Y por otro, es necesario prever las sanciones a las que se verán sujetos frente al incumplimiento y de qué forma se los puede constreñir patrimonial o personalmente (medidas de coerción) a cooperar⁴². Es cierto que también podrían ser titulares

⁴² Prütting 1996: 30-35; Henckel 1979: 100, 102; Schlosser 1991: 599.

de un deber procesal fundándose en reglas o disposiciones existentes en el Derecho material, o podría por ejemplo verificarse en el supuesto del deber que pesaría sobre una entidad financiera para informar sobre uno de sus clientes que es actualmente parte en un proceso. Pero a diferencia de lo que sucede en relación a las partes son suficientes las disposiciones procesales para justificar un deber de cooperación procesal para la consecución de la garantía de la prestación de la función jurisdiccional. Es decir, la tutela efectiva de los derechos impone el deber de cooperación procesal a los terceros⁴³.

Pueden existir intereses contrapuestos a la funcionalidad misma del proceso y a la necesidad de la consecución de dicho objetivo que puedan en definitiva eximir del deber de cooperación no sólo a los terceros, sino incluso a las partes, así, por ejemplo el peligro de una posible persecución penal (autoincriminación) o la vulneración de un derecho generando un perjuicio de difícil o imposible reparación para el tercero u otros que quitan toda legitimidad a la imposición sin más del deber general de colaboración para el esclarecimiento. En otras palabras, el costo de cumplir con el esclarecimiento procesal excede proporcionalmente al que generaría de no verificarse (la posibilidad de una persecución penal es un costo excesivo frente a no contar con esa información en un proceso concreto).

La forma de controlar los límites del deber general de esclarecimiento y colaboración son los diferentes mecanismos para ejercer el derecho de objeción. El eventual afectado puede oponerse a colaborar frente a una afectación desproporcionada en su ámbito patrimonial o personal. Es así que debe preguntarse cuánto y de qué forma se puede limitar el imperativo de esclarecimiento a través de la contracara manifestada en el derecho de objeción. Todas estas preguntas se relacionan en muchos casos con la ponderación de intereses y la coordinación o enfrentamiento entre el Derecho procesal y material. Es posible identificar tensiones constitucionales en base a los derechos fundamentales ejercidos. Por un lado, la parte procesal y su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva; por otro, los valores y bienes tutelados constitucionalmente de la contraparte o de terceros que no puedan ser afectados, incluso en nombre del ejercicio de la función jurisdiccional⁴⁴.

V. Visión sobre la colaboración de partes y terceros en el proceso civil

En relación a estas tres posiciones que se han sostenido, creo que la intermedia (iii) es la adecuada para un proceso civil contemporáneo donde la actividad

⁴³ Prütting 1996: 33-35.

⁴⁴ Greger 2000: 842; Hansens 2002: 125-127; Schellhammer 2001: 1082.

dialogante del juzgador con las partes y la lealtad informacional deben y pueden primar. Por ello, compartiendo los fundamentos de la tesis intermedia, no veo obstáculos a una aplicación más extensiva de la misma. Considero que a partir del deber de esclarecimiento es de esperarse que todos y cada uno de los aportes pensables y esperables sean aportados a un proceso en concreto. La lealtad y colaboración de las partes entre sí y para con el órgano jurisdiccional imponen incluso la eliminación de conductas estratégicas obstructivas de aquella parte que no tiene la carga de la prueba. Soy consciente que esta propuesta no es justamente la aceptada mayoritariamente por la doctrina⁴⁵ y jurisprudencia⁴⁶.

Pero analicemos con mayor detalle la propuesta ampliada de la tesis intermedia. En realidad considero que la pregunta central debiera reformularse en estos términos: (i) ¿En base a cuáles requisitos y con qué amplitud las partes (tengan o no la carga de la prueba) podrían ser obligadas a esclarecer los hechos controvertidos en el proceso?; (ii) ¿Cómo las partes y terceros podrían ponderar adecuadamente el costo-beneficio frente al deber de colaboración, de forma tal que se generen incentivos adecuados y proporcionales que minimicen el riesgo de falta de información para decidir y maximicen la cooperación adecuada para una sentencia legítima y convincente?⁴⁷

Acorde con la tesis planteada al inicio de este aporte creo que los deberes de información se fundan no sólo en un derecho reconocido previamente en normas de carácter sustantivo, sino que además se correlacionan con los fines primarios de la justicia civil. No pueden ser estudiados *in abstracto* sin relacionarlos con la prestación de una justicia eficiente, eficaz, oportuna, mediante un cause legal y equitativo para el resultado legítimo que lo sustentan⁴⁸. De esta forma, dado que el Derecho sustantivo no logrará cubrir todas las hipótesis de regulación de aporte de información en relación a las partes de futuros procesos, ello tiene que complementarse con los imperativos procesales de cooperación y esclarecimiento. De esta forma, es fundamental para el proceso civil coordinar el principio de aporte probatorio de partes con el actuar oficioso del juez. Es justamente allí donde la teoría de las denominadas “cargas secundarias de alegación”, puede ayudar con algunos aportes relevantes⁴⁹. Una visión considera a estas “cargas secundarias” de alegación como casos excepcionales para imponer deberes allí donde el Derecho material nada dice. Otra posición ve a las cargas secundarias de alegación como meramente subsi-

⁴⁵ Prütting 1996: 137

⁴⁶ NJW 1992, pp. 1817, 1819

⁴⁷ BGH NJW RR 1987, 1296; comp. BGH NJW 1989, 2756; BGH NJW 1985, 1841

⁴⁸ Schlosser 1991: 599.

⁴⁹ Burgard 1990: 3240; Lange 1990: 3235; Yoshimura 1970: 245.

diarias y siempre que no haya disposición sustantiva expresa podrían justificar un deber general de cooperación o esclarecimiento procesal. Pero no puede dejarse de reconocer la visión de Stürmer al respecto, quien critica la tesis de las cargas secundarias. Es que los deberes de esclarecimiento sustantivos y procesales deben distinguirse en su contenido y alcances de la “carga de alegación” que pesa sobre la parte procesal que no tiene “la carga de la prueba”. A la parte que está sujeta a una carga secundaria es el propio Derecho sustantivo quien le exige determinada conducta como emitir, por ejemplo, una factura, o en el caso hipotético que tratamos *supra*, desempeñar la medicina en base a ciertas reglas técnicas. Si eventualmente para un proceso una parte necesitaría esa factura o el esclarecimiento de los deberes técnicos impuestos por esa profesión, la parte debiera colaborar, ya que no solo el Derecho sustantivo supone satisfechos esos deberes, sino porque es ahora el Derecho procesal para un caso concreto el que impone esa conducta colaborativa. El proceso “usa” de los deberes que impone el Derecho sustantivo para exigir el aporte de información de aquel que no tiene la carga de la prueba procesal, pero que sí es sujeto obligado del Derecho sustantivo.

El aporte probatorio de oficio debe diferenciarse de la actividad oficiosa del juez para la incorporación de hechos no considerados o alegados por las partes. Aquél sólo se asienta sobre los hechos que son aportados por las partes en sus alegaciones y sobre los cuales exista controversia. El deber de información y de veracidad sirve de esta forma como marco para el aporte probatorio a través de las partes, lo que permite al juez arribar a un convencimiento que fundamente su decisión⁵⁰. De esta forma, existen una serie de disposiciones no sólo relacionadas con la pertinencia, sino también con la admisibilidad probatoria que pueden eximir el deber de colaboración, por ejemplo: la prohibición de la incorporación de prueba obtenida ilícitamente, las disposiciones de preclusión y la regulación del derecho a objeción⁵¹. Para alguna teoría estos deberes procesales no serían sinónimos de un deber de esclarecimiento o información⁵².

No es un problema, sino que, por el contrario, representa la solución partir considerando la existencia de un deber general de información (de partes y terceros). En algunos casos ese deber se potencia con la regulación específica de deberes sustantivos al respecto que pueden ayudar al mejor esclarecimiento de los hechos, sin necesidad de acudir a la carga de la prueba, siendo suficiente las alegaciones sustanciadas o controvertidas de las partes⁵³. En otros casos el deber general puede verse limitado o reducido frente a la invocación de dere-

⁵⁰ Stickelbrock 1996: 156.

⁵¹ Prütting 1993: 427.

⁵² Brüggemann 1968: 47-51.

⁵³ Storme 2012: 146-148.

chos de objeción por parte de los obligados. Derechos de objeción que podrán ser absolutos e intransables o bien relativos y que limitan el deber general de cooperación informativa en forma inversamente proporcional a la jerarquía del fundamento de la objeción: así, mientras más fuerte sea el derecho de objeción (por ejemplo la prohibición de autoincriminación penal) menor será la posibilidad de exigir que se aporte información que ponga al declarante en dicha situación negativa extrema.

No obstante poder asumir una posición, se deben crear los marcos de incentivos negativos y positivos previsibles para maximizar la colaboración leal y minimizar la litigación estratégica con ocultamiento o tergiverzación de la información. Sin un sistema adecuado de medidas coercitivas⁵⁴ y/o sanciones intraprocesales de inferencias probatorias negativas, tanto los deberes específicos como la visión de un deber general de esclarecimiento procesal se tornan en pragmáticamente inútiles. Pues la respuesta estará en la técnica procesal que un ordenamiento jurídico incorpore y no en el contenido de ese deber, técnica procesal que se vinculará con la calidad del sujeto, si es parte o tercero⁵⁵. Es interesante ver cómo la discusión sobre la interpretación y alcances de un imperativo de colaboración procesal en el proceso civil alemán fue recogida por el Derecho portugués, por ejemplo, incorporando una norma expresa en su redacción sobre el punto⁵⁶ en el artículo 266 del Código Procesal Civil portugués⁵⁷ comparable con el simil brasileño del § 3º del artículo 267 del Código Procesal Civil brasileño⁵⁸.

⁵⁴ Sobre los diferentes modelos de coherción: patrimonial con el Estado como acreedor (multas), patrimonial con la contraparte como acreedora (*astreintes* francesas o multas privadas), personales con remisión a sanciones civiles o penales por desacato al tribunal (Concept of Court anglo-americano), véase en detalle Peyer 2006: 286.

⁵⁵ Stürner 1976: 31.

⁵⁶ Puede verse al respecto la obra de Didier 2010: 23-40.

⁵⁷ Así, el texto del artículo 266 del Código Procesal Civil de Portugal: “1. Na conducao e intervenção no processo, devem os magistrados, os mandatarios judiciais e as proprias partes cooperar entre si, concorrendo para se obter, com brevidade e eficacia, a justa composição do litigio.

2. O juiz pode, em qualquer altura do processo, ouvir as partes, seus representantes ou mandatarios judiciais, convidando-os a fornecer os esclarecimentos sobre a materia de facto ou de direito que se afigurem pertinentes e dando-se conhecimento a? outra parte dos resultados da diligencia.

3. As pessoas referidas no numero anterior são obrigadas a comparecer sempre que para isso forem notificadas e a prestar os esclarecimentos que lhes forem pedidos, sem prejuizo do disposto no nº 3 do artigo 519.

4. Sempre que alguma das partes alegue justificadamente dificuldade seria em obter documento ou informação condicione o eficaz exercicio de faculdade ou o cumprimento de onus ou dever processual, deve o juiz, sempre que possivel, providenciar pela remoção do obstaculo”.

⁵⁸ Mitidiero 2011: 149-155.

VI. Los deberes de cooperación en el marco de la ejecución civil

Desde el punto de vista del Derecho comparado es de gran interés el tópico de los deberes de información y cooperación del deudor en la ejecución⁵⁹. En muchos otros países, el deudor puede ser obligado ya desde el inicio de la ejecución a declarar sus relaciones patrimoniales y en todos los casos mencionar quién es su empleador. Claro está que en la ejecución civil la cooperación exigida al ejecutado de aportar información sobre su patrimonio no es un imperativo para acopio “probatorio”, sino para poder individualizar y determinar los bienes sobre los que recaerán las medidas de agresión ejecutivas y no para poder arribar a una decisión sobre afirmaciones fácticas controvertidas de las partes⁶⁰.

Por el contrario, en Alemania el acreedor sólo puede, por regla, exigir del deudor la presentación de un informe detallado de su patrimonio (“declaración asegurada mediante juramento”), siempre y cuando ya se hayan iniciado las medidas de ejecución y éstas no hayan conducido a la satisfacción del acreedor⁶¹.

La solución tradicional alemana ha recibido abundantes críticas por la doctrina. La ley del 29 de julio 2009 se encarga de reformar entonces las mencionadas reglas sobre el esclarecimiento e información en la ejecución. De acuerdo a las nuevas disposiciones, las cuales, en su gran mayoría, debieran entrar en vigencia recién en el año 2013, tienden a fortalecer y consolidar aún más la posición del oficial de ejecución en torno a estas materias⁶².

VII. Conclusiones

Es posible así sostener la existencia de deberes de información, unos fundados en el Derecho material que en algunos casos no resultan autosuficientes para su despliegue práctico procesal y que por consiguiente están sujetos a la necesidad de ser complementados a través de deberes netamente procesales, aún cuando no tengan un sustento en los imperativos e información sustantivos.

Ello es aplicable tanto a la parte sobre la que pesa la carga de la prueba, como a la contraparte que no está sujeta al imperativo. Esto no quita que

⁵⁹ Keller 1999: 10-34; Schnigula 2001: 2-20; Triller 2001: 20-55.

⁶⁰ Pérez-Ragone/Silva Álvarez 2009: 105-115; Jäger/Schatz 2008: 143; Holzapfl 2009: 15-35.

⁶¹ Holzapfl 2009: 15-35.

⁶² En especial los §§ 802c, 802d, 802e, 802f con la reforma (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009, Teil I, Nr. 48, ausgegeben zu Bonn am 31. Juli 2009) y reforma del 22.12.2011 (BGBl. I p. 3044).

ambas estén sujetas a la carga de la alegación y que en determinandas condiciones previas creadas por el Derecho sustantivo, pueda exigirse colaboración incluso a la que no tiene la carga de la prueba. Los terceros deben ser considerados simplemente como potenciales titulares de deberes y en ningún caso de cargas, en la terminología tradicional. Así, los terceros no interesados y no vinculados a un proceso por disposición sustantiva o procesal y a los que pueda afectar lo que en ese proceso se resuelva, son titulares de un deber de cooperación general para la dinámica y el funcionamiento de la jurisdicción a través del proceso.

Los terceros podrían quedar obligados en base a fundamentos o disposiciones de derecho material. Ese deber se podría exigir tomando como marco la necesidad de dar una respuesta práctica al Derecho a una tutela jurisdiccional que es requerida por las partes procesales y que pone en funcionamiento a la función jurisdiccional del Estado.

Bibliografía

- BECKHAUS, Gerrit (2010): *Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- BRÜGGEMANN, Dieter (2010): *Judex statutor und judex investigator*. Bielefeld: Giesecking.
- DIDIER, Fredie (2010): *Fundamentos del principio de cooperación procesal en el derecho procesal civil portugués*. Lima: Communitas.
- DRENCKHAHN, Cornelia (2007): *Urkundsvorlagepflichten im Zivilprozess und im arbeitsgerichtlichen Verfahren nach der ZPO-Reform unter besonderer Berücksichtigung der Neufassung des § 142 ZPO*. Frankfurt: Peter Lang.
- GRÄNS, Minna (2001): *Das Risiko materiell fehlerhafter Urteile*. Berlin: Duncker & Humblot.
- GREGER, Reinhard (1997): "Justizreform? Ja, aber...", en: *JuristenZeitung*, pp. 842-850.
- HANNICH, Rolf (2002): *ZPO-Reform: Einführung-Texte-Materialien*. München: Beck.
- HANSENS, Heinz (2002): "Die ZPO-Reform", en: *Anwaltsblatt*, pp. 125-130.
- HOLZAPFEL, Carolin (2009): *Sachaufklärung und Zwangsvollstreckung in Europa*. Baden-Baden: Nomos.
- HUBER, Stefan (2008): *Entwicklung transnationaler Modellregeln im Zivilverfahren*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- JÄGER, Ulrich/SCHATZ, Jochen (2008): "Etwas Licht und viel Schatten. Der Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung", en: *Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht*, 143, pp. 143-147.
- JELINEK, Walther (1991): "Einflüsse des österreichischen Zivilprozessrechts auf andere Rechtsordnungen", en: Habscheid, Walther (ed.): *Das deutsche Zivilprozessrecht und seine Ausstrahlung auf andere Rechtsordnungen*. Bielefeld: Giesecking, pp. 50-62.

- KATZENMEIER, Christian (2002): "Aufklärungs-/Mitwirkungspflicht der nicht beweisbelasteten Partei im Zivilprozess", en: *JuristenZeitung*, pp. 534-540.
- KELLER, Ulrich (2000): *Die eidesstattliche Versicherung nach §§ 807, 899 ZPO*. Bielefeld: Giesecking.
- KLEIN, Franz (1891): *Pro Futuro*. Separatabdruck aus "Juristische Blätter". Wien/Leipzig: Deuticke.
- (1927): *Reden, Vorträge, Aufsätze, Briefe*. Wien: Manz.
- KRAAYVANGER, Hilgard (2003): "Urkundenvorlegung im Zivilprozess - Annäherung an das amerikanische 'discovery'-Verfahren", en: *Neue Justiz*, pp. 572-575.
- LANG, Sonja (2007): *Die Urkundenvorlagepflichten der Gegenpartei gemäß § 142 Abs. 1 Satz 1 ZPO*. Frankfurt: Peter Lang.
- MITIDIERO, Daniel (2011): *Colaboração no processo civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- PÉREZ-RAGONE, Álvaro/SILVA ÁLVAREZ, Óscar (2009): "El imperativo de transparencia patrimonial del deudor como requisito funcional para una ejecución eficiente", en: *Revista Ius et Praxis*, año 15, n° 2, 2009, pp. 79-105.
- PEYER, Patrick (2006): *Vollstreckung unvertretbarer Handlungen und Unterlassungen – Civil contempt of court des englischen Rechts im Vergleich zum schweizerischen Zivilprozessrecht*. Zürich: Schulthess.
- PRÜTTING, Hanns (1996): *Gegenwartsprobleme der Beweislast*. München: Beck.
- (1980): "Die Grundlage des Zivilprozesses im Wandel der Gesetzgebung", en: *Neue Juristische Wochenschrift*, pp. 361-365.
- (1993): "Datenschutz und Zivilverfahrensrecht", en: *Zeitschrift für Zivilprozessrecht*, 106, pp. 427-443 ss.
- PRÜTTING, Hanns/GEHRLEIN, Markus (2001): *ZPO-Kommentar*. Köln: Luchterhand.
- REISCHL, Klaus (2003): "Der Umfang der richterlichen Instruktionstätigkeit – ein Beitrag zu § 139 Abs. 1 ZPO", en: *Zeitschrift für Zivilprozessrecht*, 116, pp. 81-102.
- RENSSEN, Harmut (2002): *Die richterliche Hinweispflicht*. Bielefeld: Giesecking.
- SCHAEFER, Thomas (2002): "Was ist neu an der neuen Hinweispflicht?", en: *Neue Juristische Wochenschrift*, pp. 849-855.
- SCHELLHAMMER, Kurt (2001): "Zivilprozessreform und erste Instanz", en: *Monatschrift für Deutsches Recht*, pp. 1081-1097.
- SCHILKEN, Eberhard (2011): *Zivilprozessrecht*. Köln: Heymanns.
- SCHLOSSER, Peter (1991): "Die lange deutsche Reise in die prozessuale Moderne", en: *Juristen Zeitung*, pp. 599-566.
- SCHNIGULA, Jörn (2001): *Das Offenbarungsverfahren – Darstellung und Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung*. Remscheid: Gardez.
- SCHÖPFLIN, Martin (1992): *Die Beweiserhebung von Amts wegen im Zivilprozess*. Frankfurt: Peter Lang.
- STICKELBROCK, Barbara (1996): *Die Kollision von Prozessmaximen*. Köln: Heymanns.
- STORME, Matthias (2012): "Harmonisation of Civil Procedure and the Interaction with Substantive Private Law", en: Kramer, X. E./van Rhee, C. H. (eds.): *Civil Litigation in a Globalising World*. Den Haag: Springer/TMC Asser Press, pp. 141-158.

- STRODTHOFF, Bert-Hagen (2004): *Die richterliche Frage- und Erörterungspflicht im deutschen Zivilprozess in historischer Perspektive*. Frankfurt: Peter Lang.
- STÜRNER, Rolf (1976): *Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- (1982): *Richterliche Aufklärungspflicht*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- (1985): “Parteipflichten bei der Sachaufklärung im Zivilprozess”, en: *Zeitschrift für Zivilprozessrecht*, 98, pp. 237-252.
- (1991): “Anm. zum Urteil des BGH vom 11.6.1990 (NJW 1990, 315 1)”, en: *Zeitschrift für Zivilprozessrecht*, 104, pp. 208-213.
- VERBERK, Remme (2010): *Fact-Finding in Civil Litigation*. Antwerp: Intersentia.
- ZEKOLL, Joachim/BOLT, Jan (2002): “Die Pflicht zur Vorlage von Urkunden im Zivilprozess – Amerikanische Verhältnisse in Deutschland?”, en: *Neue Juristische Wochenschrift*, pp. 2129-2133.

III. CULTURA Y SOCIEDAD

Kathya Araujo¹

La tesis de la individualización en las sociologías alemana y chilena: una lectura crítica²

Este artículo discute los modos en que el tradicional enfoque de la individuación ha sido prolongado en las últimas décadas desde la tesis de la individualización en dos tradiciones intelectuales distintas: la alemana y la chilena. Es esta tesis la que centralmente ha marcado los debates sobre procesos de individuación en el caso alemán, y la que se ha revelado, en este campo, como una de las más influyentes en las ciencias sociales en el caso chileno.

Procederemos en tres etapas. Primero, se presentará la manera en que la tesis de la individualización ha sido desarrollada en Alemania, en particular en los trabajos de Ulrich Beck, y algunas de las críticas que se le han dirigido. En segundo lugar, se desarrollará cómo esta tesis ha sido recibida y retomada en Chile, centrándose, en especial, en algunas de las principales dificultades y riesgos de esta recepción. Por último, argumentaremos que los límites observables en la tesis de la individualización, invitan, no a abandonar, sino a renovar en América Latina los estudios de la individuación, pero sobre nuevas bases.

Una aclaración inicial parece indispensable. El uso terminológico en este campo que toma como foco los procesos de producción del individuo tiende a generar una cierta oscuridad. La confusión es aumentada porque los términos (individuo, individuación, individualización, individualismo) así como los sentidos de los que se cargan están fuertemente influidos por los rasgos de las tradiciones científicas nacionales o regionales (Martuccelli/Singly 2009; Kalupner 2003). Lo anterior produce un efecto de naturalización del uso terminológico en cada área geográfica de discusión, la que abulta la posibilidad de malentendi-

¹ Doctora en Estudios Americanos. Profesora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

² Mis agradecimientos a la Fundación Alexander von Humboldt por su apoyo en la estadía de investigación de la que este texto es tributario y a los y las colegas del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, y muy en particular a Sérgio Costa, por su invaluable ayuda y los fructíferos diálogos y encuentros. Parte de las reflexiones aquí incluidas se desarrollaron en el marco del Proyecto Fondecyt, 1085006 “Procesos de individuación y de configuración de sujeto en la sociedad chilena actual”, apoyado por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile (CONICYT).

dos. Si bien no es posible hacer una discusión a fondo de estos conceptos, por necesidades de claridad del desarrollo expositivo una distinción se impone entre las dos nociones que aquí movilizamos. Por un lado, y en acuerdo con la manera como la sociología clásica abordó este tema, se entiende por *individuación* en este artículo la pregunta por los grandes condicionamientos estructurales que producen modalidades históricas distintas de individuo en las diversas sociedades. El enfoque de la individuación propone, así, que para la comprensión de las sociedades una vía privilegiada es el estudio de las formas en que los individuos se producen en sociedades históricamente definidas. Por el otro lado, cuestión que será desarrollada en detalle más adelante, se entiende por individualización una de las lecturas posibles y actualmente vigentes del proceso contemporáneo de individuación. Un abordaje que, privilegiando una perspectiva sobre todo histórica, y por lo general a través de modos ensayísticos, ha puesto el acento en las fuentes institucionales propias a la segunda modernidad o la modernidad tardía (Beck/Beck-Gernsheim 2003; Giddens 2003).

I. La tesis de la individualización en Alemania

En el caso de la discusión especializada alemana el término hegemónico en este debate es el de *Individualisierung*, el que se usa para nombrar un campo que incluye los desarrollos hechos desde diferentes teorías actuales (desde el individualismo metodológico hasta los teóricos de la segunda modernidad o modernidad reflexiva, pasando por enfoques de tipo sistémicos). Un término que en su amplitud incluso comprende bajo esta denominación discusiones históricamente precedentes (en autores clásicos como Durkheim, Weber, Elias o Simmel). Esta amplitud de los usos del término aporta a que en esta tradición aparezca permanentemente una oscilación entre, por un lado, *Individualisierung* como proceso histórico y, por el otro, propuestas teóricas que plantean modelos para la comprensión de la sociedad a partir de la producción de los individuos (o sea, y en la distinción que hemos introducido más arriba –individuación–). Sin embargo, y a pesar de esta pluralidad semántica, no es abusivo afirmar que, incluso en Alemania, cuando en la discusión se retoma el término de *Individualisierung*, por diferentes razones –una de ellas no menor, el éxito editorial– la asociación más inmediata del término se suele hacer con los trabajos de Ulrich Beck y su noción de Individualización. Dada su influencia central en los debates de la sociología chilena, será su obra la que será privilegiada en lo que sigue.³

³ En efecto, en el caso del debate especializado chileno, algo que con mucha certeza se puede extender a otros países de la región, la noción de individualización, que ha tenido una

La noción de individualización tiene dos acepciones. La primera, de uso corriente y de índole estrictamente descriptiva y empírica, designa el proceso de diferenciación creciente de las trayectorias personales. La segunda acepción, de carácter más analítico, asocia el proceso de individualización con el advenimiento de una nueva etapa de la modernidad, y se interesa sobre todo, dentro de esta visión general, por la aparición de un nuevo tipo de individualismo institucional. Es esta segunda acepción del término la que retendrá nuestra atención aun cuando, y es importante subrayarlo, la confusión entre ambos niveles es una constante en estos trabajos.

Es, sin duda, Ulrich Beck el autor a quien se debe la introducción de la tesis de la individualización en el sentido antes mencionado, la que desarrollará, en varias publicaciones, en colaboración con Elisabeth Beck-Gernsheim. Se ha sostenido con insistencia que su difusión está vinculada con el éxito editorial del libro *Risikogesellschaft*, publicado en 1986, el mismo año que ocurriera el desastre ecológico de Chernobyl (Volkmann 2007; Schroer 2000), desastre que funcionará como una especie de confirmación empírica de la lectura de la sociedad contemporánea que hace el autor. Ese libro contiene ya un capítulo sobre la individualización, como proceso característico de la realidad que estamos enfrentando, pero es su artículo “Jenseits von Stand und Klasse” (Beck 1984), publicado pocos años antes, el que suele ser referido como punto de anclaje inicial para la discusión de esta tesis.

La tesis de la *Individualisierung* de Beck tiene cuatro grandes características. En primer lugar, propone un diagnóstico de época, que el autor irá progresivamente elaborando teóricamente (Schroer 2000: 408). En segundo lugar, la tesis subraya los cambios observables a nivel de las instituciones como entrada privilegiada para dar cuenta de los procesos actuales de individualización. En tercer lugar, la tesis opta, por lo general de manera solamente implícita, por un modelo particular y normativo de actor –el sujeto reflexivo–. En cuarto y último lugar, y aunque el punto sea más polémico, la tesis posee un potencial crítico –la individualización aparece como una experiencia ambivalente, a la vez luminosa y sombría. Veamos cada uno de estos aspectos.

1. *Un diagnóstico de época*

La tesis de la individualización en Alemania se nutre, por un lado, de la evidencia de la incertidumbre y de la conciencia creciente de la amenazante pre-

significativa difusión en los estudios en ciencias sociales, está fuertemente atada a los aportes de los teóricos de la llamada modernidad reflexiva (Beck, Giddens, Lash) a lo cual podría añadirse la influencia de la obra de Bauman. Es decir a una, y por lo general, solo a una de las varias tesis contemporáneas que discuten los procesos de producción de los individuos.

sencia de riesgos globales. Es, por otro lado, también producto de lo que aporta a una reflexión sociológica la aparición de una nueva generación que, lejos de aquella de la posguerra que produjo el llamado “milagro alemán”, comienza a poner en evidencia nuevas prioridades, patrones de enjuiciamiento, anhelos de realización personal. Es la aparición de una generación, para hacer una paráfrasis, que, por ejemplo, deja de preocuparse, como lo hicieron sus padres, porque el par de zapatos que va a comprar sea lo suficientemente bueno y práctico como para que dure muchos inviernos y sea utilizable en la mayor cantidad de situaciones. Una generación que, por el contrario, empieza a orientar su consumo en función de las tendencias de la moda y del estilo personal.

Para Beck, entonces, el proceso de individualización está directamente ligado a la transformación de factores estructurales que se expresan en la mejora de las condiciones de vida en Alemania desde los años cincuenta y sesenta, los que significaron mayores ingresos, más tiempo y recursos materiales a disposición (“efecto ascensor” [Beck 2006:130], como lo ha llamado, pues no se tradujo necesariamente en una disminución de las desigualdades).

Sin embargo, esto no es sino un primer punto. Para Beck la individualización debe ser entendida, de manera más sustancial, como el efecto de la destradicionalización de formas de vida producidas en la sociedad industrial. Destradicionalización que no debe ser entendida como la ausencia de tradiciones, sino como el cambio de estatus de la tradición en una sociedad: una en la cual las tradiciones estarían de forma constante y rutinaria sujetas a interrogación (Beck/Giddens/Lash 1997: 10). ¿Por qué este cuestionamiento? Porque, y es un punto central de su razonamiento, hemos entrado en una nueva fase de la modernidad –la segunda modernidad–, marcada por el hecho estructural que tenemos que enfrentar las consecuencias, por lo general no intencionales, producidas por la primera modernidad. Es en este sentido que la individualización se entiende como un proceso acompañante de la modernización reflexiva. Beck comprende este tipo de modernización como la auto confrontación con los resultados no deseados de la modernización industrial, que la precede, los que llevan, en última instancia, al quiebre de los fundamentos de este último tipo de sociedad, y por ende a un cuestionamiento sistemático de la tradición.

La individualización, sería, así, una consecuencia ambivalente de la ruptura del orden industrial, que abre una nueva forma de vincularse con lo social, la que puede entenderse a partir de tres dimensiones: dimensión de liberación (disolución de formas sociales precedentes), dimensión de desencanto (pérdida de seguridades tradicionales) y dimensión de control o de integración (nuevo tipo de cohesión social). (Beck 2006: 210). La individualización es inseparable de un diagnóstico de época.

2. *Un nuevo individualismo institucional*

Este cambio de época (de naturaleza diacrónica) es particularmente visible en un corte sincrónico, dado el desarrollo que en la posguerra conoció el estado de bienestar. Sin detenerse nunca en exceso en las especificidades del estado de bienestar alemán con respecto a otras variantes nacionales (Esping-Andersen 1990), Beck subraya el aporte central de éste en tanto que orientación a gran escala hacia la individualización: la consolidación de un individualismo institucionalizado de nuevo cuño, uno en el cual, las instituciones mayores de la sociedad, en el marco de la segunda modernidad, se orientan de manera decisiva e inédita hacia el individuo.

Para Ulrich Beck, la individualización está, pues, ligada a la segunda modernidad y a la emergencia de lo que, retomando la expresión de Talcott Parsons, denomina un nuevo individualismo institucional. Las principales instituciones de la sociedad (el trabajo, el empleo, la escuela, la familia...) estarían cada vez más orientadas hacia el individuo, obligando a cada persona a desarrollar y asumir su propia trayectoria biográfica. Al calor de este nuevo individualismo institucional y de las prescripciones a las que se ve sometido, cada cual debe constituirse como individuo, dando forma a una sociedad de individuos. Como resultado, las formas tradicionales de vida y los contornos de los ambientes sociales se transforman (Beck/Beck-Gernsheim 2003).

Tal como lo ha subrayado Scott Lash (2003: 16), es posible leer que lo que Beck sostiene es que si antes las instituciones había que considerarlas como normas reguladoras, las actuales habría que entenderlas como normas constitutivas. Las instituciones antes que decirnos cómo hacer las cosas, expandirían solamente un mandato constitutivo al que debemos someternos: tomar la vida en nuestras propias manos. Hacernos cargo de las decisiones y las elecciones (que son por supuesto infinitamente menos libres de lo que se presentan) al mismo tiempo que de sus consecuencias. Como resultado de esta nueva constelación, entonces, los individuos deben enfrentar constantemente opciones y por lo tanto movilizar su capacidad de decisión.

En breve, el corazón de este segundo pilar de la tesis de la individualización puede enunciarse fácilmente: en la medida en que las instituciones no pueden ya transmitir de manera armoniosa las normas de acción, le corresponde a los individuos darle un sentido a sus trayectorias sociales por medio de la reflexividad (Giddens 1991; Beck/Beck-Gernsheim 2003; Bauman 2001).

3. *El sujeto reflexivo*

Beck reconoce que la individualización no podría ser considerada como una novedad contemporánea, y acepta, como diferentes autores han mostrado, que

éste es un problema presente ya desde los clásicos de la sociología (Schroer 2000; Kalupner 2003; Kippele 1998; Junge 2002). No obstante, considera que la novedad consiste en que ahora, a causa de esta mutación institucional, es el individuo el que se convierte en “die lebensweltliche Reproduktionseinheit des Sozialen” (Beck 1986: 119), unidad de reproducción vital de lo social, idea ya contenida en el título de su temprano artículo “Jenseits von Stand und Klasse”. En breve, la ruptura del orden industrial de la primera modernidad y el cambio operado a nivel de las instituciones, empuja a la aparición de un nuevo tipo de actor, un sujeto reflexivo en el doble sentido del término. Por un lado, un sujeto que se produce como reflejo de los cambios históricos que enfrenta. O sea, en un primer momento, Beck (2006; 1986) entendió más el término en relación con la noción de reflejo y no como reflexión. Por el otro lado, progresivamente, y a veces incluso tan sólo de manera implícita, se desliza en sus trabajos la concepción de un sujeto reflexivo en el sentido de que sería capaz, gracias a sus competencias ordinarias y permanentes de análisis, evaluación y reflexividad, de enfrentar los fenómenos sociales.

Este sujeto reflexivo es, entonces, solicitado –y producido– de manera particular por un conjunto de instituciones sociales que lo obligan a desarrollar una biografía personal bajo la impronta de nuevas modalidades de prescripción normativa. Como lo resume Beck, los individuos deben dar soluciones biográficas a contradicciones sistémicas, que, en mucho, son el resultado imprevisto de la primera modernización (así lo testimonian, por ejemplo, los retos ecológicos inducidos por la industrialización específica a la primera modernidad (Beck/Giddens/Lash, 1997). En el marco de relaciones de desigualdad constantes, esta orientación hacia la individualización “liberó” a las personas de los vínculos de clase y los apoyos familiares, dejándolas, al mismo tiempo, cada vez más solas frente al mercado laboral, con sus riegos, contradicciones y oportunidades (Beck/Beck-Gernsheim 2003: 82 y ss.).

Para Beck, en la medida en que los enlazamientos vinculados con clase, familia y roles de género se debilitaron, el resultado no puede ser sino la aparición de crecientes procesos de reflexividad. Como efecto, retornó a los individuos el peso de la planificación biográfica, la organización de la vida y la gestión de la seguridad existencial, pasando de las biografías normales del modelo industrial de la primera modernidad, y a su tríada formación, actividad, jubilación, a las *Bastelbiographien* de la segunda modernidad. Ante la puesta en cuestión recurrente de la tradición y de las normas, serán los individuos los que deberán asumir las implicancias de “vivir su propia vida” (Beck 2001). Pero no sólo como una elección sino como un nuevo mandato institucional.

En breve, la sociedad industrial de la primera modernidad produjo estatus sociales asignados como la clase, el sexo, la nación. Con el tránsito a la segunda modernidad, estos intermediarios perdieron consistencia. Esto no implica-

ría que los individuos sean más libres en sí mismos, sino que están sometidos a un nuevo proceso histórico que los produce a partir de nuevos factores –sobre todo desde otras prescripciones institucionalizadas–, y que demanda de ellos nuevas habilidades.

4. *Un potencial crítico*

Por último, para Beck, la indudable ganancia en libertad presente en este proceso de individualización va, sin embargo, acompañada de un aumento de los riesgos, de la precariedad, de la exclusión y sobrecarga del Individuo. Ciertamente, en última instancia, sigue considerándola una ganancia porque implica un aumento de la agencia, aumento que es producido por razones estructurales. Sin embargo, y es algo importante en su perspectiva y que lo diferencia sensiblemente, por ejemplo, de los trabajos más abiertamente optimistas de Giddens o de lecturas más unilateralmente pesimistas de la segunda modernidad, para Beck lo que prima es una ambivalencia: una lectura a la vez positiva y negativa de la individualización.

Este aspecto es importante. Aun cuando Beck se haya revelado relativamente insensible a las diversas modalidades de prescripción individualizadora propias a las diversas instituciones de la segunda modernidad, y aún más, que no haya subrayado con la fuerza debida los diferenciales que en términos de clase o de género poseen los individuos para construirse justamente como individuos, es a todas luces injusto minimizar su sensibilidad crítica. Beck es explícito al reformular el postulado sartriano: los individuos *están condenados* a la individualización. Una condena en la que los procesos de individualización están asociados, en forma inevitable, a nuevos mecanismos de dominación.

Si bien es cierto que Beck no ha prestado la atención que merece, a diferencia de muchos otros (Ehrenberg 1998; Bauman 2001; Castel/Haroche 2001; Martuccelli 2006), a la faz sombría de la individualización, sin embargo, su tesis nunca es unívoca. La individualización es un fenómeno irremediablemente ambivalente: o sea, en un mismo y solo movimiento, los individuos obtienen libertades y pierden seguridades. A cada cual, por supuesto, en función de su posición o trayectoria le cabe hacer su propio balance vital. No obstante, esto es secundario en última instancia: lo esencial es recordar que los individuos están condenados a enfrentar una experiencia que es constitutivamente ambivalente.

5. *Críticas e insuficiencias*

Antes de centrarnos en las maneras en que esta tesis ha sido recibida y recreada en la sociología chilena, vale la pena evocar algunas de las principales críti-

cas a las que la tesis de la individualización ha sido sometida. Las críticas que se le han hecho a Beck son diversas: imprecisión histórica del diagnóstico de la segunda modernidad, hiper-optimismo generalizado a pesar de la ambivalencia de la individualización, utilización metafórica de los términos. Las lecturas críticas no han subrayado solamente las dimensiones normativas presentes en la propuesta, sino que han interrogado, también, aspectos centrales de su diagnóstico, y, de manera importante, han dado lugar a líneas de investigación que intentaron probar la acuidad de la teoría contrastándola empíricamente. Para efectos de mis intereses argumentativos en este texto me detendré en tres de estas críticas: la puesta en cuestión de la caracterización de la época contemporánea como “Jenseits von Stand und Klassen” y, tras ello, sus limitaciones empíricas. Segundo, los *impasses* que devienen de la primacía unilateral de aspectos institucionales. Tercero, la vinculación, insuficientemente explicitada, entre individualización y autonomía. Cada uno de estos aspectos indicados por la crítica, ha tenido, como veremos, efectos importantes en su recepción en Chile.

La primera crítica, muchas veces con apoyo de investigación empírica, ha mostrado de qué manera los propios procesos de individualización siguen respondiendo, contrariamente a lo que afirma Beck en su diagnóstico de época, a criterios de clase. Scherr, por ejemplo, postula que los procesos de disolución de la familia o de los ambientes socio-morales, supuestos por Beck, no se han impuesto “sowie dass sich Individualisierungsprozesse keineswegs jenseits von Klasse und Stand sondern unter klassen- bzw schichtspezifischen Bedingungen vollziehen” (Scherr 2000: 193).⁴ Simonson ha mostrado, por su parte, que la falta de influencia de la pertenencia sociocultural –el estatus–, no aparece como un hecho claro: aunque puede confirmarse en ciertos ámbitos (aceptación institucional, por ejemplo), en otros (como la participación en organizaciones sociales) no es el caso (Simonson 2004). Estas críticas, de las que sólo mencionamos algunas aquí, no solamente acotan la pertinencia universal de la tesis propuesta por Beck, sino que, al someterla a contraste empírico, subrayan los límites y las formas distintas que este diagnóstico toma en función de las experiencias específicas según el contexto en el que se ubican los actores.

La segunda crítica tiene como blanco el privilegio que se le otorga a las dimensiones institucionales a la hora de caracterizar el proceso contemporáneo de individuación. A partir de esta perspectiva, la tesis tiene dificultades

⁴ “Tanto como que los procesos de individualización no se realizan más allá del estatus y la clase sino, por el contrario, bajo condiciones específicas de clase o sector socio económico” (traducción libre de la autora).

para dar cuenta de muchos otros fenómenos estructurales que participan activamente en el proceso actual de fabricación de los individuos y que no pueden ser retrotraídos a consideraciones institucionales (Cf. Araujo y Martuccelli 2012). Por supuesto, las instituciones *también* participan en este proceso, pero lo hacen junto con otros factores sin duda más amplios, plurales y contradictorios. Por otro lado, al privilegiar la dimensión institucional pierde de vista que estos procesos de individuación no pueden estudiarse desde la sola óptica de la socialización (que, como sabemos, subyace en el modelo del individualismo institucional). Lo anterior debido a que en ellos participan factores que no son necesariamente internalizados por los actores y que, al ser descuidados, terminan haciendo del primado del individuo una manifestación ideológica que “oculta” otros fenómenos –como, por ejemplo, el rol específico del capital en su advenimiento (Žižek 2001).

La tercera crítica, tanto o más importante que las dos anteriores, se refiere a la vinculación directa que se establece entre individualización y autonomía. En rigor, la suposición de un aumento de autonomía como compañera inevitable de la individualización es un aspecto que Beck y Beck-Gernsheim han sido enfáticos en negar como una afirmación propia, más bien la han considerado explícitamente como una interpretación errada de sus intenciones. “Individualisierung (...) meint (...) nicht Atomisierung, nicht Vereinzelung, nicht Vereinsamung (...) auch nicht die albern schlichte Formel ‘Individualisierung = Autonomie’” (Beck/Beck-Gernsheim 1993: 2)⁵. No obstante, es evidente que en su obra hay más de un elemento que permite afirmar que esta asociación está implícita en el modelo de individuo que propone. La ambivalencia crítica de la tesis de la individualización cede por lo general delante el voluntarismo implícito presente en la figura del sujeto reflexivo, algo que se refleja en la mayor parte de las lecturas que se hacen de su obra, en las que se subraya, no sin razón, creemos, el empuje a la autonomía como parte constitutiva de su tesis (Volkman 2007; Junge 2002). Volveremos sobre este punto más adelante.

II. La tesis de la individualización en Chile

¿Cómo ha sido recibida y recreada esta tesis en el marco de la sociedad chilena? Al evaluar la recepción de la tesis de la individualización en Chile se tiene que subrayar dos facetas. Por un lado, y es sin duda su aspecto más positivo, ella permitió incorporar el estudio sociológico del individuo. Colaboró, así,

⁵ “Individualización no significa atomización, atomización o aislamiento, como tampoco la simple y absurda fórmula individualización = autonomía” (traducción libre de la autora).

tanto en la superación de enfoques casi exclusivamente centrados en el análisis de las estructuras sociales como en salir del marco restringido de la noción de identidad como instrumento de análisis. El individuo no fue un punto central de las preocupaciones de la región por largo tiempo. Por dos razones complementarias. Por un lado, porque en el pensamiento latinoamericano al contrario, fue más bien el tema de la ausencia de individuos o por lo menos su falencia lo que copó las discusiones y preocupaciones por décadas (Araujo 2009c; Martuccelli 2010). Si no había individuos, mal podíamos hacer nuestra esa parte de las preocupaciones de las ciencias sociales europeas. Por otro lado, y ahora desde el marco más restringido de la sociología, la recepción de la teoría de la modernización, el cepalismo y las teorías de la dependencia condujeron a privilegiar exclusivamente el interés por el análisis de las estructuras sociales (Vergara/Vergara 2002). El individuo no estaba considerado como una dimensión pertinente y de peso para tratar temas como el desarrollo o la modernización social. Desde esta perspectiva, vale la pena insistir en que la recepción de esta tesis tiene la función positiva de recuperar un ámbito de problemas que había quedado fuera (el individuo) y de aportar otros marcos interpretativos a la comprensión de la sociedad chilena más allá de lo estructural.

Por otro lado, no obstante, la recepción de esta tesis abrió a un conjunto de nudos problemáticos. Para mostrarlo, nos apoyaremos en cada uno de los cuatro puntos centrales de la tesis de la individualización.

1. *¿Un diagnóstico de época? El peso de la historia nacional*

El enfoque de los procesos de individualización comienza a aparecer de manera importante en Chile en los noventa, en particular en la segunda parte de esta década. En efecto, a partir de esa fecha, una parte de los cientistas sociales comienzan a usar en Chile la clave de la individualización para comprender las transformaciones societales en el país. Según estos autores, también la sociedad chilena, como tantas otras sociedades actuales, viviría un proceso creciente de individualización como resultado de las transformaciones estructurales y culturales (Robles 2000; PNUD 2002; Díaz/Godoy/Stecher 2005; Herrera 2007; Guzmán/Godoy 2009; Soto 2009).

La recepción de la tesis se efectúa en un momento particular tanto desde un punto de vista social como intelectual. Por un lado, desde un punto de vista social e histórico, su recepción se realiza en íntima conexión con los procesos de modernización que se fueron profundizando en el país desde el cambio de rumbo político instaurado por la dictadura militar desde 1973 y la implementación del llamado modelo neoliberal. O sea, y es importante subrayarlo, es

una experiencia interna de modernización, y de la inflexión que se observaba en ella en los años noventa a causa del retorno a la democracia y del nuevo rumbo impuesto por los primeros gobiernos de la Concertación (French Davies 2008), más que el fenómeno de la globalización lo que está en el telón de fondo de la recepción de la tesis en el país.

Son, por tanto, los efectos de la modernización neoliberal, los que producen los principales puntos de tensión teórica presentes en las ciencias sociales del país. Para unos, se habrían modificado los valores sociales con el aporte de los agentes del mercado (Moulian 1997) pero también como fruto de las disputas llevadas por los actores y los movimientos sociales (Garretón 2000). En este universo se habrían acelerado los ritmos vitales y se habrían, sobre todo, precarizado las relaciones laborales y sus regulaciones (Todaro/Yáñez 2004). Se habría asistido, por razones diversas, a un empuje en la transformación de las relaciones sociales, particularmente de género (Grupo Iniciativa Mujeres 2002), pero también entre las generaciones. Habrían surgido nuevas y más altas expectativas, con el inevitable acompañamiento de la frustración, al mismo tiempo que aumentó el nivel de vida de la población (Tironi *et al.* 2003). Se habría reestructurado, en el fondo, profundamente el paisaje de los soportes personales y colectivos con la aparición de una nueva familia de políticas sociales.

Frente al tenor de estos cambios, y en mucho como consecuencia de una toma de conciencia sólo parcial del agotamiento de antiguos paradigmas, las ciencias sociales chilenas fueron recorridas, en los años noventa, por un importante debate (Pinedo 1997). Éste se centró tanto en la naturaleza específica de la modernidad y de la modernización en Chile como en una evaluación normativa de los éxitos o fracasos obtenidos luego de varias décadas de desarrollo bajo la égida del modelo neoliberal. Un debate dentro del cual vino a terciar la tesis de la individualización. Pero, entre muchos de los partidarios de esta tesis, no todos, es justo subrayar, es visible a este nivel la escasa atención que muestran sino necesariamente hacia los rasgos propios de la sociedad chilena, por lo menos hacia las especificidades del proceso de modernización desde el cual Beck formuló su diagnóstico de época.

Al admitir el proceso histórico de la individualización producido para el caso alemán como un modelo para interpretar los datos de otras sociedades, se corrió el riesgo de velar las especificidades de los procesos de individuación en esas otras sociedades. Al hacer uso de una lectura histórica como un modelo teórico aplicable a otras realidades, el precio a pagar fue que se velaron las verdaderas especificidades de la individuación en el caso chileno y que se reintrodujo con fuerza, como veremos en un momento, la figura del individuo por déficit, un viejo conocido en los esfuerzos de la región por pensarse a sí misma.

2. *¿Un individualismo institucional? Individuos sin asistencia*

La segunda consideración crítica es aún más decisiva. Pocas cosas resultan menos pertinentes para estudiar las experiencias individuales en América Latina, incluso en el caso de una sociedad como la chilena, que es sin duda una de las más institucionalizadas de la región, que privilegiar el trabajo de las instituciones. Como los resultados de una investigación reciente muestran⁶, solo al costo de ciertas amputaciones el individuo en Chile puede ser aprehendido desde una variante del individualismo institucional.⁷

En Chile, la situación ha sido y es distinta. No solamente el imperio de las normas es problemático (Araujo 2009b), sino que a causa de particularidades estructurales, un conjunto significativo de iniciativas individuales tienden a afirmarse por fuera o en contra de las instituciones. En un solo y mismo movimiento, los cambios de la vida social son percibidos como generando expectativas que las instituciones no logran estructuralmente canalizar (Araujo 2009a).

Esta tensión entre expectativas e iniciativas es una experiencia particularmente significativa en un país como Chile, en donde a causa del conjunto de importantes transformaciones ocurridas en las últimas décadas (consumo, escolarización, urbanización, extensión de los derechos ciudadanos...), muchos individuos se sienten por “delante” de sus instituciones.. La dialéctica entre las instituciones y los actores no se produce sino de manera transitoria y puntual, bajo la figura del acuerdo.. No se trata solamente que los actores, en ciertos casos y dentro de ciertos límites, “colmen” las brechas de las instituciones, sino que de manera estructural el individuo tiene que construirse teniendo en cuenta las falencias –y las oportunidades relativas– de éstas). El actor a la vez que “depende” de las instituciones, se concibe a “distancia” de ellas. Incluso más, con mucha frecuencia debe defenderse de ellas. Por eso, no cesa de sentirse conminado a un desafío mayor: saberse –sentirse– en el fondo

⁶ Las reflexiones presentadas en este apartado provienen de los resultados de la investigación “Procesos de individuación y configuración de sujeto en la sociedad chilena actual”, de la que fui investigadora responsable entre 2008 y 2011. El estudio fue desarrollado en colaboración con Danilo Martuccelli, y contempló la realización de alrededor de cien entrevistas en profundidad a hombres y mujeres entre 30 y 55 años de los sectores de menores recursos y medios altos. Sus resultados han sido presentados en Araujo y Martuccelli 2012.

⁷ La noción de institución es polisémica y algunos autores dan una caracterización tan amplia de ella que todo fenómeno social que se reproduce se convierte en una institución. Por eso resulta aconsejable movilizar una concepción más restringida y precisa del término: definir como institución a un número reducido de principios legítimos encarnados en organizaciones sociales específicas. Las instituciones se entienden así tanto en el sentido de un conjunto de normas que son interiorizadas y respetadas, como de un conjunto de anhelos que, al ser legítimos y regulados, intentan ser obtenidos por los actores.

solo. Pero una soledad que no es de índole existencial, sino que es el fruto de una experiencia plenamente social.

Este sentimiento de solipsismo condensa uno de las grandes especificidades de los individuos en Chile. A saber, que los individuos se forjan enfrentando instituciones que generan insumos ambivalentes y que, por lo general, los defienden insuficientemente. Los actores tienen que protegerse a veces de sus abusos; otras, de la severidad e inadecuación de sus prescripciones. En los dos casos, lo que prima, muchas veces sin duda de manera excesiva, es el sentimiento de que “el” colectivo político se desresponsabiliza de la suerte personal de cada uno de ellos. Es en este sentido como debe comprenderse que el modo de individuación propio a la sociedad chilena no es, en su centro, un individualismo institucional. Su individualización no es el fruto de un trabajo institucional. Ésta es una realidad que cuestiona radicalmente –o sea, desde su raíz– la pertinencia de la tesis de la individualización.

El proceso de individuación forja, de este modo, individuos que tienen que asegurar su continuidad en la vida social desde ellos mismos. Los individuos son actores en el sentido más fuerte del término: deben constantemente hacer frente a imprevistos tanto a nivel macro (inflaciones, inestabilidades políticas, choques de eventos externos...) como micro (despidos, evoluciones familiares, problemas de salud...). Una situación que produce socialmente un individuo que tiene que hacerse cargo de sí mismo de una manera particular. Por supuesto, como en todos lados es responsable de su vida y, también, como en todos lados, para lograrlo, moviliza un conjunto de recursos diversos. Se ve obligado a utilizar estrategias altamente individualizadas debido a que se encuentran marcadas por el sello de una contingencia relacional permanente. Ciertamente, estos recursos se apoyan sobre costumbres (pensemos la lógica del de las influencias personales o las redes), pero éstas no pueden ser consideradas como verdaderas inscripciones institucionales.

En Chile, y en el marco de la tesis de la individualización, Robles (2000: capítulo 2) ha subrayado esta especificidad. Los individuos enfrentan solos, en todo caso más solos que en otros lares, el proceso de individuación, puesto que se ven obligados a buscar respuestas por sí mismos a una serie de falencias, como las del mercado de trabajo formal, por ejemplo, lo que los obliga a hacer del trabajo temporal o estacional, de la subcontratación, del trabajo a domicilio o clandestino, una forma forzosa de subsistencia. Si en los países del Norte habría, entonces, una auto-confrontación asistida (por las instituciones), en un país como Chile habría una auto-confrontación desregulada que incrementa las inseguridades ontológicas.⁸ Es esto lo que los obliga a tejer y sostener

⁸ Señalemos para evitar todo malentendido que en este artículo movilizamos las nociones de individuación e individualización de manera distinta a como lo propone el autor, que

redes. Es decir, el apoyo no se encuentra principalmente en las instituciones, sino que tiene que ser producido (o al menos sostenido) por el mismo individuo por medio de redes de favores y reciprocidades que el autor denomina como un “sistema funcional alternativo”. Y esto, muchas veces, en medio de situaciones de exclusión, lo cual supone una modalidad específica de sujeto.

3. *¿El sujeto reflexivo? Un horizonte normativo problemático*

Como ya señalamos, los autores que recogen la tesis de la individualización introducen una perspectiva relevante en los estudios sociales chilenos: el interés por el problema del individuo y de los procesos de individuación. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, la recepción de la tesis de la individualización en el caso chileno va a darse, involuntariamente y de modo sinuoso, en el marco de la tradición de lo que podríamos llamar una lectura deficitaria del individuo en América Latina (Araujo 2009c y 2009d; Martuccelli 2010). Es decir, una lectura caracterizada por la idea ampliamente aceptada de que, en estas latitudes, el individuo en el sentido moderno noroccidental era, y es, ante todo un “proyecto”. Esta concepción está íntimamente vinculada con las discusiones sobre la modernidad latinoamericana, una discusión en la que con frecuencia se construyó una perspectiva analítica que ponía el énfasis en la distancia entre nuestras realidades y el modelo noroccidental y los supuestos normativos que lo acompañaban, entre ellos, por cierto, la noción de individuo (García Canclini 1999 y 1995; Martín-Barbero 2001 y 1989; Cornejo Polar 1994; Sarlo 1988). Lo que se subraya aquí es pues la brecha constante que existe entre la realidad social de América Latina y el modelo noroccidental, asociada a la aspiración de remontar esta distancia. En esta perspectiva, el individuo se constituye en un proyecto inconcluso pero en marcha.

Es esta misma antigua perspectiva la que se infiltra en los diferentes enfoques y estudios que se hicieron desde la óptica de la individualización. La tesis funciona *siempre* asociada a un horizonte normativo, aunque en algunos sea utópico, como en el caso de los estudios de género y feministas o de los Informes de Desarrollo Humano del PNUD, y en otros no, como por ejemplo en el trabajo comparativo de Herrera (2007). Pero en todos los casos, se evalúan las situaciones a partir del tipo de individuo que supone este horizonte normativo.

tiende a asociar la individualización con una faz luminosa y la segunda, la individuación, con procesos esencialmente negativos. Regresaremos sobre este punto, pero esta distinción, amén que se condice con la manera como habitualmente se usan estos términos, señala la insuficiencia de la sociología chilena para comprender la ambivalencia intrínseca activa en el proceso de fabricación de los individuos.

Ahora bien, los horizontes normativos presentes en la tesis de la individualización tienen, como lo hemos indicado en nuestra lectura de la obra de Beck, como implícito un modelo de individuo no solamente estrechamente vinculado a la tradición noroccidental, sino que privilegia una versión particular de esta tradición. En efecto, la individualización trabaja dentro de un horizonte normativo *específico* que supone un individuo que tiene como rasgos constitutivos centrales los ideales de autonomía, autodeterminación y reflexividad. La inscripción de la tesis de la individualización dentro de esta tradición enmarca y explica su recepción en América Latina, puesto que en esta región, por razones de contingencia histórica, *este* modelo de individuo ha sido siempre el teatro de un traslape conceptual a través del cual, sistemáticamente, la noción de individuo filosófico abstracto de la ciudadanía se imponía siempre a la noción sociológica del individuo concreto (Araujo 2009c).

Nada testimonia mejor de este lazo que el hecho que son precisamente estos rasgos (el modelo del ciudadano y del individuo abstracto), los que en la recepción que se hace de la tesis de la individualización en el caso chileno funcionarán como los indicadores centrales del nivel de la individualización observable en el país. En todo caso, fue por la asociación entre modelo de individuo y horizonte normativo como el problema de la individualización fue movilizado para abordar el tema más general de las metas de la democratización vía la ciudadanización de los diferentes sectores de la sociedad. Una asociación particularmente visible en los aportes de los estudios de género y feministas.

No se trata de un ejemplo entre otros: es posible sostener que uno de los ámbitos de recepción más extendido y fecundo dentro de las ciencias sociales chilenas de la tesis de la individualización son los estudios de género y feministas (y las nuevas interrogaciones que florecieron vinculadas al ámbito de la intimidad, la privacidad o la sexualidad). Si bien estos estudios se desarrollan en algunos casos desde el marco de las subjetividades e identidades, lo que es importante es que ellos tienen como motor implícito la pregunta por el individuo y su constitución. ¿Por qué? Porque estos estudios están enmarcados en un horizonte normativo: la producción de las mujeres como individuos (Araujo 2009c).

Esto es particularmente fuerte en el llamado feminismo de la igualdad. En éste la meta de emancipación de las mujeres pasa por la constitución de las mismas como individuos, no sólo en sentido de ser reconocidas como tales (ciudadanía), sino por la adquisición de ciertos rasgos en cada caso individual. De esta manera, la autonomía, autodeterminación y reflexividad son elementos centrales de las apuestas políticas de esta posición: por un lado, en el papel otorgado al individuo y su transformación; por el otro, en la politización de lo privado y de la intimidad como núcleo de nuevas propuestas de comprensión e

intervención en lo social. En este marco, resulta fácil comprender el por qué de la recepción –relativamente acrítica– de la tesis de la individualización. Ella daba un marco que permitía asociar el horizonte normativo a un proceso histórico y a una propuesta teórica, y al mismo tiempo asociarla con los objetivos de democratización social (democratización de las relaciones entre los géneros).

Pero al hacerlo, al adherir y por ende imponer definiciones normativas histórica y culturalmente determinadas para otras realidades, esta recepción no pudo en los hechos sino preservar, bajo nuevas coordenadas, la sempiterna lectura deficitaria del individuo en la región. Los actores son siempre percibidos como insuficientemente reflexivos y autónomos.

4. *¿Un potencial crítico? Un optimismo unilateral*

En cuarto lugar, la recepción de la tesis de la individualización, al ser hecha en el contexto de un crecimiento económico sostenido y de mejora indudable del nivel de vida en Chile, y concebida como fundamento para alcanzar el horizonte de democratización de la sociedad que impera como ideal y promesa social, tenderá (aunque ciertamente no en todos los casos) a recoger los aspectos más positivos y optimistas de la misma. La individualización será leída prioritariamente como una oportunidad y una ampliación de las libertades y de la agencia. Más que como la compañera de la incertidumbre social, la individualización será vista como modelo para la agencia en contextos ya sea de transformación social, como en el caso de las relaciones de género que ofrecen a las mujeres nuevas oportunidades y espacios que deben poder ocupar (Valdés/Valdés 2005; Mauro/Godoy 2001; Guzmán/Godoy 2009) de precarización y fragilización de lazos, como en las discusiones sobre los nuevos malestares culturales (PNUD 1998, 2000, 2002, 2009); de nuevos sentidos subjetivos suscitados por las estrategias en el mercado de trabajo (Díaz/Godoy/Stecheer 2005) o frente a la pobreza (Robles 2000). En todos los casos, incluso cuando se reconocen dificultades o escollos, la individualización aparece como una meta deseable, positiva y en curso.

Este punto es particularmente transparente en los Informes de Desarrollo Humano del PNUD. Realizado por un equipo de cientistas sociales en el marco institucional del sistema de Naciones Unidas, estos informes se proponen como instrumento sociológico para la apertura de debate político. Aunque no desde sus inicios, en 1998, el Informe adquirió a partir notoriamente del año 2000, el enfoque de la individualización. En la definición de los procesos de individualización se pone el acento en “la capacidad de los individuos para definir por su cuenta y riesgo lo que quieren ser” (PNUD 2002: 20), capacidad

de decisión, ruptura de lazos tradicionales, mayor capacidad de autorrealización. La individualización, asociada a los horizontes normativos del Informe, es, así, considerada como una vía inequívoca de emancipación: “El chileno tiende a romper los vínculos sociales y los hábitos tradicionales que, a la vez, lo encerraban y lo protegían. Esta ‘salida al mundo’ forma parte de un proceso de emancipación que permite al individuo ampliar su horizonte de experiencias, incrementar su capacidad de participación en la vida social y desarrollar su opción de autorrealización” (PNUD 2002: 89). Aunque los autores consideran y discuten los riesgos de la individualización, el informe adhiere, en su esqueleto normativo, al lado positivo de la misma. Para decirlo más claramente: la individualización es un horizonte de emancipación, que, ciertamente, y en función de ciertos contextos o escasez de recursos, puede presentar ciertas facetas negativas.

Como se puede apreciar, si en la versión alemana de esta tesis, una de las críticas principales que se le hizo (y ello a pesar del reconocimiento explícito que Beck hace de la ambivalencia de este proceso) fue el haber subrayado en exceso el peso de la autonomía, lo que supone atribuirle a los individuos por ende espacios demasiado optimistas de libertad y agencia, es precisamente esta deriva lo que hará atractiva la tesis en el caso chileno.

Si la individualización en el caso alemán está pues más cercana al tema de la recomposición del vínculo social y a los riesgos que se produce por su debilitamiento (lo que incluye por ende indisociablemente una faz negativa en este proceso), en el caso chileno, la individualización es un horizonte normativo sin tachas para la construcción de vínculos más democráticos. El individuo de la individualización aparece, así, como promesa del sostén necesario para la consolidación democrática.

Al subrayarse en la recepción una lectura positiva de la individualización, se oblitera o se deja sin discutir una dimensión que Beck mismo (así como otros autores) se han encargado de reiterar: a saber, que estos procesos de individualización están asociados a nuevos mecanismos de dominación. Los índices positivos que pueden ser exhibidos tienen que tomar en cuenta, al mismo tiempo, sus efectos negativos cuando recaen en las espaldas de individuos ubicados en situaciones de vulnerabilidad permanente, sometidos a sobrecargas laborales y financieras diversas. Una ambivalencia no suficientemente presente en los trabajos sobre la individualización en Chile.

III. Renovar los estudios sobre la individuación

¿Qué consecuencia extraer de estos *impasses*? Para empezar, que una mirada crítica a la tesis de la individualización no puede de ninguna manera traducirse

en un abandono del interés por el proceso de individuación. Por el contrario. Primero porque esta perspectiva de estudio, aparece como cada vez más idónea en el marco de sociedades diferenciadas y complejas, en las cuales la confianza en lecturas que otorgan todo el papel heurístico a la dimensión estructural aparece cada vez más como problemática. Pero, también, porque en nuestras sociedades se afirma una sensibilidad social particular, que exige dar cuenta a escala de los actores de los problemas sociales. Se trata de una doble realidad que aconseja pasar por el individuo para llegar a la comprensión de la sociedad. Una perspectiva que no hace sino recoger la intuición señalada tempranamente por Norbert Elias: en sociedades altamente complejas y diferenciadas, son los individuos los que están en la mejor posición para dar cuenta de las exigencias, tensiones y contradicciones en juego en una sociedad (Elias 1990). Pero, de otro lado, es necesario cuidar que la aplicación de esta perspectiva de estudio no traicione la especificidad de las realidades sociales particulares. Para ello parece aconsejable introducir tres grandes inflexiones (Araujo/Martuccelli 2010).

En primer lugar, se precisa realizar un diagnóstico más preciso de nuestra época, lo que requiere, a diferencia de lo que afirman los teóricos de la segunda modernidad y aún más los trabajos últimos de Beck sobre el cosmopolitismo, subrayar las variantes nacionales en las que se dan –se siguen dando– los procesos de individuación. Las experiencias de los individuos, cualquiera que sea la realidad parcial de lo global, siguen siendo hoy profundamente nacionales. Y lo son en un país como Chile.

En segundo lugar, se requiere dar cuenta, sobre nuevas bases, de la articulación entre los fenómenos estructurales y las experiencias subjetivas. Para ello, es preciso evitar los excesos y los déficits asociados a un enfoque centrado en los procesos de socialización. Los excesos: los trabajos que continúan afirmando un vínculo único entre un tipo de sociedad y un tipo de personalidad (de Riesman 1981 a Lasch 1999). Los déficits: los trabajos que sólo logran dar cuenta de la pluralidad de los individuos desde sus procesos disímiles y contradictorios de socialización (Lahire 2004; Kaufmann 2001). La renovación de los operadores analíticos tendrían que conducirnos a ser más sensibles no solamente respecto a las variaciones existentes en los distintos ámbitos sociales (lo que se produce en el ámbito laboral, por ejemplo, no es isomorfo a lo que acaece en la escuela o en la familia), sino también a las diferentes vías de individuación observables en función de las posiciones sociales, géneros o edad. Cuestiones analíticas que la noción de prueba, como nos lo deja entrever ciertos trabajos, y en particular una investigación sobre el proceso de individuación en la sociedad chilena actual, permite afrontar con éxito (Martuccelli 2006; Araujo/Martuccelli 2010; Araujo/Martuccelli 2012).

En tercer lugar, resulta necesario que la sociología tome en cuenta, de manera más activa a como lo ha hecho en el pasado, el trabajo de los indivi-

duos para producirse como sujetos. En este punto la dificultad de la tesis de la individualización es evidente. Si bien, una de las principales consecuencias del proceso descrito por Beck es que los cambios sociales son más visibles desde las biografías personales que desde los grupos o las clases sociales, paradójicamente la tesis de la individualización propone un paisaje extremadamente homogéneo de los procesos contemporáneos. Se pierde así de vista la multiplicidad de modos en que el individuo se puede producir o el sujeto se puede configurar (Araujo 2009a y 2009d). Para subsanar esta carencia es preciso abrir la sociología de la individuación hacia el trabajo de los individuos: o sea, una interrogación por el trabajo específico que el actor efectúa en el curso del proceso de individuación para configurarse como sujeto. Algo que impone la necesidad de romper con la tendencia, tan frecuente en los análisis sociológicos, de dejar fuera del estudio el problema del sujeto en el sentido preciso del término.

Vale la pena insistir: frente a las aristas problemáticas de la tesis de la individualización, tanto en Alemania como en su recepción en Chile, aquí abordadas, e incluso por razones disímiles, la sociología no debe abandonar su interés por el individuo, sino que requiere renovarlo. Más que nunca se impone la necesidad de abordar el estudio de las sociedades partiendo de los individuos, pero, nos parece, poniendo de manera simultánea el acento en los procesos estructurales de individuación y en el trabajo de los individuos. Se trata de una conversación en dos niveles autónomos pero dialogantes: “hacia arriba”: poner en relación el individuo con el registro social —y permitir aislar el conjunto estandarizado de desafíos específicos a una sociedad. “Hacia abajo”: abrir al estudio efectivo por el cual el individuo se constituye como sujeto —lo que exige una lectura de este trabajo considerándolo siempre historizado de forma peculiar. Lo que se requiere es, así, hacer de la individuación el verdadero eje central de la sociología, y describir en el marco de ella, los procesos personalizados de producción de los individuos en sujetos.

Bibliografía

- ARAUJO, Kathya (2009a): *Habitar lo social*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
 — (2009b): *¿Se acata pero no se cumple?* Santiago de Chile: LOM Ediciones.
 — (2009c): “Individuo y Feminismo. Notas desde América Latina”, en: *Iconos*, n° 33, pp. 141-153.
 — (2009d): *Dignos de su arte. Sujeto y lazo social en el Perú de las primeras décadas del siglo XX*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
 ARAUJO, Kathya/MARTUCCELLI, Danilo (2010): “La individuación y el trabajo de los individuos”, en: *Educação e Pesquisa*, vol. 36, pp. 77-91.

- (2012): *Desafíos Comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos*. Santiago: LOM.
- BAUMAN, Zygmunt (2001): *La sociedad individualizada*. Madrid: Cátedra.
- BECK, Ulrich (1984): “Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitsnehmergeinschaft”, en: *Merkur*, vol. 38, n° 5, pp. 485-497.
- (1986): *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt: Suhrkamp.
- (1997): “La reinención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva”, en: Beck, Ulrich/ Giddens, Anthony/Lash, Scott: *Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno*. Madrid: Alianza, pp. 13-73.
- (2001): “Vivir nuestra propia vida en un mundo desbocado: individualización, globalización y política”, en: Hutton, Will/Giddens, Anthony (eds.): *En el límite: la vida en el capitalismo global*. Barcelona: Tusquets.
- (2006): *La sociedad del riesgo*. Barcelona: Paidós.
- BECK, Ulrich/BECK-GERNSEIM, Elisabeth (1993): “Nicht Autonomie sondern Bastelbiographie”, en: *Zeitschrift für Soziologie*, n° 22, pp. 178-187.
- (2003): *La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas*. Barcelona: Paidós.
- BECK, Ulrich/GIDDENS, Anthony/LASH, Scott (1997): *Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno*. Madrid: Alianza.
- CASTEL, Robert/HAROCHE, Claudine (2001): *Propriété privée, propriétés sociale, propriété de soi*. Paris: Fayard.
- CORNEJO POLAR, Antonio (1994): *Escribir en el aire*. Lima: Editorial Horizonte.
- DÍAZ, Ximena/GODOY, Lorena/STECHE, Antonio (2005): *Significados del trabajo, identidad y ciudadanía. La experiencia de hombres y mujeres en un mercado laboral flexible*. Santiago de Chile: Cuaderno de investigación n° 3, CEM.
- EHRENBERG, Alain (1998): *La fatigue d'être soi*. Paris, Odile Jacob.
- ELIAS, Norbert (1990): *La sociedad de los individuos*. Barcelona: Península.
- ESPING-ANDERSEN, Gösta (1990): *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- FRENCH DAVIS, Ricardo (2008): *Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad*. Santiago de Chile: J. C. Sáez Editor.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (1995): *Consumidores y ciudadanos*. México: Grijalbo.
- (1999): *La globalización imaginada*. Barcelona: Paidós.
- GARRETÓN, Manuel-Antonio (2000): *La sociedad en qué vivi(re)mos*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- GIDDENS, Anthony (1991): *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity Press.
- (2003): *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza.
- GUZMÁN, Virginia/GODOY, Lorena (2009): “Individuación y normatividad de género: la construcción de proyectos biográficos de mujeres”, en: Araujo, Kathya (ed.): *¿Se acata pero no se cumple?* Santiago de Chile: LOM Ediciones, pp. 175-197.
- HERRERA PONCE, María Soledad (2007): *Individualización social y cambios demográficos*. Madrid: CIS/Siglo XXI.
- JUNGE, Matthias (2002): *Individualisierung*. Frankfurt: Campus Verlag.

- KALUPNER, Sybille (2003): *Die Grenzen der Individualisierung. Handlungstheoretische Grundalgen einer Zeitdiagnose*. Frankfurt: Campus.
- KAUFMANN, Jean-Claude (2001): *Ego*. Paris: Nathan.
- KIPPELE, Flavia (1998): *Was heisst Individualisierung? Die Antworten Soziologischer Klassiker*. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- LAHIRE, Bernard (2004): *El hombre plural. Los resortes de la acción*, Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- LASCH, Christopher (1999): *La cultura del narcisismo*. Santiago de Chile: Andrés Bello.
- LASH, Scott (2003): "Individualización a la manera no lineal", en: Beck, Ulrich/Beck-Gernsheim, Elisabeth (eds.): *La Individualización*. Barcelona: Paidós.
- GRUPO INICIATIVA MUJERES (2002): *El nuevo contrato social: balance de una década de democracia en Chile*. Santiago de Chile: Grupo de Iniciativa Mujeres.
- MARTÍN-BARBERO, Jesús (1989): *Procesos de comunicación y matrices de cultura*. México: G. Gili.
- (2001): *Al sur de la modernidad. Comunicación, globalización y multiculturalidad*. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Latinoamericana.
- MARTUCELLI, Danilo (2006): *Forgé par l'épreuve*. Paris: Armand Colin.
- (2010): *¿Existen individuos en el Sur?* Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- MARTUCELLI, Danilo/SINGLY, François de (2009): *Les sociologies de l'individu*. Paris: Armand Colin.
- MAURO, Amalia/GODOY, Lorena (2001): "Las relaciones de pareja y los cambios en el mercado de trabajo: el punto de vista de los hombres", en: *Revista de la Academia*, n° 6, pp. 129-147.
- MOULIAN, Tomás (1997): *Chile actual: anatomía de un mito*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- PINEDO, Javier (1997): "Chile a fines del siglo XX: entre la modernidad, la modernización, la identidad", en: *Universum*, n° 12, pp. 141-180.
- PNUD, INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO (1998): *Las paradojas de la modernización*. Santiago de Chile: PNUD.
- (2000): *Más sociedad para gobernar el futuro*. Santiago de Chile: PNUD.
- (2002): *Nosotros los chilenos: un desafío cultural*. Santiago de Chile: PNUD.
- (2009): *La manera de hacer las cosas*. Santiago de Chile: PNUD.
- RIESMAN, David et al. (1981): *La muchedumbre solitaria*. Barcelona: Paidós.
- ROBLES, Fernando (2000): *El desaliento inesperado de la modernidad*. Santiago de Chile: RIL Editores.
- SARLO, Beatriz (1988): *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- SCHERR, Albert (2000): "Individualisierung - Moderne - Postmoderne. Eine Auseinandersetzung mit dem Individualisierungstheorem in der Perspektive eines kritischen Postmodernismus", en: Kron, Thomas (ed.): *Individualisierung und soziologische Theorie*. Opladen: Leske und Budrich, pp. 185-202.
- SCHIMANK, Uwe/VOLKMANN, Ute (eds.) (2007): *2. Auflage Soziologische Gegenwartsdiagnosen I. Eine Bestandaufnahme*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- SCHROER, Markus (2000): *Das Individuum der Gesellschaft*. Frankfurt: Suhrkamp.
- SIMONSON, Julia (2004): *Individualisierung und soziale Integration. Zur Entwicklung der Sozialstruktur und ihrer Integrationsleistungen*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts- Verlag.
- SOTO, Álvaro (2009): “Formas y tensiones de los procesos de individualización en el mundo del trabajo”, en: *Psicoperspectivas*, vol. VIII, n° 2, pp. 102-119.
- TIRONI, Eugenio *et al.* (2003): *Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década*. Santiago de Chile: INE.
- TODARO, Rosalba/YÁÑEZ, Sonia (eds.) (2004): *El trabajo se transforma*. Santiago de Chile: CEM.
- VALDÉS, Ximena/VALDÉS, Teresa (eds.) (2005): *Familia y vida privada. ¿Transformaciones, tensiones, resistencias o nuevos sentidos?* Santiago de Chile: CEDEM/ UNFPA/Flacso-Chile.
- VERGARA, Jorge/VERGARA, Iván (2002): “Cuatro tesis sobre la identidad cultural latino-americana. Una reflexión sociológica”, en: *Revista de Ciencias Sociales*, n° 12, pp. 81-96.
- VOLKMANN, Ute (2007): “Das schwierige Leben in der Zweiten Moderne – Ulrich Becks ‘Riskogessellschaft’”, en: Schimank, Uwe/Volkmann, Ute (eds.): *2. Auflage Soziologische Gegenwartsdiagnosen I. Eine Bestandaufnahme*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 23-40.
- ŽIŽEK, Slavoj (2001): *El espinoso sujeto*. Barcelona: Paidós.

Patrícia Mattos

As abordagens da “sociologia disposicional” e da “interseccionalidade”: articulando uma proposta para os estudos de gênero

A necessidade de articulação de distintas categorias de diferenciação na análise das desigualdades sociais não é, de forma alguma, uma novidade. Já nos anos 70 e 80 ecoavam vozes das mulheres americanas negras denunciando a homogeneização da categoria “gênero” feita pelo movimento feminista. A propósito dos riscos de homogeneização de categorias, Gabriele Winker e Nina Degele (2009: 9) usam como exemplo o caso de um jornal alemão que, ao tomar as categorias gênero e raça *a priori*, divulgou o significado da disputa presidencial americana entre Barack Obama e Hillary Clinton como um embate entre representantes de minorias – “negro contra mulher”. As autoras ressaltam, com esse exemplo, os autoenganos e reducionismos que esse tipo de polarização e estagnação de categorias pode gerar. Nem Obama nem Hillary representam genuinamente os excluídos. Ambos pertencem à classe média e, portanto, possuem um volume significativo dos capitais econômico, cultural, social e simbólico.

A novidade proposta por Degele e Winker (2007, 2008 e 2009) é a formulação de um conceito *Intersektionalität* (interseccionalidade) que permita articular a relação entre agência e estrutura, contemplando, de maneira adequada, também o nível das representações simbólicas para compreender a dinâmica da dominação social injusta. Ainda que Pierre Bourdieu¹ (1972: 155; 1980: 88-89; 2009: 87-93), com seu conceito de *habitus*, tenha conseguido, com êxito, relacionar agência e estrutura, não teria conseguido levar a cabo uma análise propriamente interseccional dos três níveis – das estruturas sociais, das representações simbólicas e da identidade – e das categorias de diferenciação que naturalizam, produzem e reproduzem as desigualdades sociais.

¹ Winker e Degele afirmam que dois autores – Pierre Bourdieu e Anthony Giddens – obtiveram êxito, cada um a seu modo, em desenvolver teorias – *Habitus-theorie* e *Theorie der Strukturierung* – que interconectassem os níveis da estrutura social e da identidade, da estrutura e da agência. No entanto, eles não teriam desenvolvido análises propriamente interseccionais (Winker/Degele 2009: 70-73).

Um dos aspectos centrais da “abordagem interseccional” diz respeito à necessidade de perceber que as categorias de diferenciação produzem efeitos distintos, dependendo do contexto analisado. Portanto, a escolha das categorias de diferenciação nos diferentes níveis de análise deve levar em consideração esse aspecto levantado em relação aos efeitos, reconhecendo sempre que a especificidade histórica e contextual distingue mecanismos que produzem, estabilizam, perpetuam e naturalizam desigualdades sociais por diferentes divisões categoriais. As formas de investigar as desigualdades sociais e as discriminações nos níveis da estrutura social, das representações simbólicas e da identidade são diferenciadas e, até mesmo, diametralmente opostas. A sugestão de Winker e Degele (2009: 37-53) é que para a investigação do nível da estrutura social seja realizada uma redução de categorias a quatro – classe, raça, gênero e corpo. O intuito dessa redução no nível da estrutura é notar como essas categorias predeterminam, de maneira significativa, o acesso ao mercado de trabalho e às posições no mercado de trabalho, produzindo e reproduzindo, de distintas maneiras, critérios arbitrariamente construídos de classificação e desclassificação social entre os indivíduos. Nos níveis da identidade e das representações simbólicas, por sua vez, é possível a ampliação das categorias de diferenciação. A ideia básica do conceito de interseccionalidade é que com ele seja possível explicar como normas, valores, ideologias e discursos, assim como estruturas sociais e identidades, influenciam-se reciprocamente.

Dessa maneira, é possível, segundo afirmam as autoras inspiradas em Pierre Bourdieu, mas refletindo para além de Bourdieu, desenvolver pesquisas empíricas que permitam perceber as mudanças reais ocorridas nas sociedades contemporâneas a partir da análise das práticas sociais, desvelando, assim, as fontes de legitimação e justificação da dominação social injusta. Com o conceito de “violência simbólica”,² de Bourdieu, acredito que podemos enriquecer essa análise. Isto é, analisar não só as formas de violência manifestas, reconhecidas pelos agentes sociais em suas relações, práticas sociais e institucionais em geral, mas, especificamente, os processos de reprodução da “violência simbólica”, que legitimam o livre curso da dominação social injusta.

O objetivo deste artigo é mostrar os possíveis ganhos teóricos e metodológicos que essa perspectiva interseccional pode proporcionar para os estudos sobre as relações de gênero. Interessa-me refletir sobre a possibilidade de arti-

² O conceito de “violência simbólica” é um dos conceitos centrais da teoria da prática de Pierre Bourdieu. Por “violência simbólica” compreende-se todo tipo de violência “suave”, insensível, invisível a suas próprias vítimas. (Bourdieu 1999: 7)

culação da “sociologia disposicional”³ de Pierre Bourdieu (2008), que vem sendo pensada em outros termos por Bernard Lahire (2002, 2004a e 2006) e tem servido de inspiração para as pesquisas realizadas por mim durante os últimos anos como pesquisadora do Centro de Pesquisa sobre Desigualdade Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (CEPEDES/UFJF),⁴ e a “abordagem interseccional” proposta por Degele e Winker. Para cumprir tal desiderato, inicialmente, será desenvolvida a discussão sobre a proposta de interconexão entre essas duas abordagens. Posteriormente, serão debatidos os pressupostos e os achados das pesquisas empíricas realizadas por mim e pelos pesquisadores do CEPEDES, que resultaram no estudo que realizamos sobre a “ralé” brasileira (Souza 2009). Pretende-se, com isso, analisar as possíveis vantagens teóricas e metodológicas do entrelaçamento entre a “sociologia disposicional” e a “abordagem interseccional” para a realização de estudos sobre mulheres e sobre as relações de gênero.

* * *

A teoria da prática de Pierre Bourdieu serve para Gabriele Winker e Nina Degele (2009: 63) como ponto de partida para o desenvolvimento de seu conceito de *Intersektionalität* (interseccionalidade). A relação de interdependência entre teoria e empiria é o fio condutor desse conceito proposto pelas autoras. Bernard Lahire (2002, 2004a, 2004b, 2006 e 2009) também desenvolve sua teoria inspirado em Bourdieu, melhor dizendo trabalhando com e contra Bourdieu. Seu objetivo é discutir o alcance explicativo e os limites da teoria da prática de Bourdieu. Para isso, ele se dedica a refletir sobre a constituição das disposições⁵ constitutivas do *habitus*⁶, sugerindo o desenvolvimento de uma “sociologia das variações individuais” que tenta apreender o social em seus múltiplos aspectos e dimensões sob uma forma singularizada. Bourdieu com sua “sociologia disposicional” teorizou sobre a noção de *habitus*, procurando compreender as motivações das ações dos atores sociais, levando em conta suas socializações passadas e presentes. No entanto, Bourdieu não trabalhou sobre a

³ A sociologia disposicional busca explicar os pensamentos, comportamentos, percepções e sentimentos dos atores sociais, de parte a parte, pelo encadeamento dos elos sociais passados e presentes que o constituíram.

⁴ Sob direção de Jessé Souza.

⁵ Disposições são entendidas como hábitos, tendências, inclinações, persistentes maneiras de ser.

⁶ Lahire (2002) afirma que se tomarmos a definição de *habitus* de Bourdieu como um sistema homogêneo de disposições gerais, permanentes, sistema transferível de uma situação à outra, de um domínio de práticas a outro, então cada vez menos agentes serão definidos por esse conceito.

produção do *habitus*, sobre a constituição de disposições constitutivas do *habitus*. E é exatamente para essa questão que Lahire dirigiu todo o seu olhar.

O desvelamento das disposições/hábitos para pensar, agir, julgar e sentir incorporadas ao corpo norteia todo o escopo da “sociologia das variações individuais” de Lahire. O hábito é entendido como um esquema de ação resultado da repetição voluntária e involuntária de comportamentos, de práticas relativamente análogas que constituem um sumário de experiências. Ao contrário de Bourdieu, Lahire procura distinguir os hábitos pré-reflexivos dos reflexivos, deliberativos, calculados. Ao fazer uma análise das práticas cotidianas da escrita de lista de compras⁷, de coisas a fazer, da agenda, dos planos de viagem, Lahire introduziu a reflexividade no conceito de *habitus*.

Essas práticas de escrita são percebidas por Lahire instrumentos para dar forma ao tempo, constituindo, portanto, exceções cotidianas repetidas com relação a um ajuste pré-reflexivo de um *habitus* a uma situação. Com isso, Lahire vai defender que é um erro afirmar, como fez Bourdieu, que toda ação é produto de um senso prático, pré-reflexivo, não intencional. “Pensar que as ações humanas se encadeiam umas às outras numa espécie de improvisação permanente é universalizar um caso possível e permanecer cego a uma grande parte das práticas” (Lahire 2002: 140). Como Bourdieu construiu a sua teoria da prática em oposição às teorias da ação “intelectualistas”, que enfatizam a reflexividade e a intencionalidade dos atores sociais, ele não teria percebido que existem diferentes tipos de reflexão, e não somente a erudita, que agem nos diferentes tipos de ação. A proposta de Lahire é construir uma teoria da ação que permita não só diferenciar, através da análise empírica, os atos conscientes, intencionais, dos não conscientes, pré-reflexivos, como também integre em seu programa científico o estudo das diferentes formas de reflexão que condicionam distintos tipos de ação.

Todo o esforço de Lahire tem sido refletir sobre os contextos de incorporação e de atualização das disposições, aperfeiçoando, assim, o conceito de disposição. Entretanto, ao contrário de Bourdieu, Lahire não acredita ser possível perceber nas práticas dos atores sociais comportamentos redutíveis a uma “fórmula geradora” ou a um princípio gerador das práticas sociais, que definem o próprio conceito de *habitus* para Bourdieu. Lahire (2004b: 318) questiona a importância dada por Bourdieu ao que se pode chamar de “*habitus* familiar”, o qual seria a base para um sistema de disposições bastante coerente já constituído que daria sentido às experiências ulteriores dos indivíduos.

Nas sociedades complexas é cada vez mais difícil, na visão de Lahire, reconhecer indivíduos que possam ser definidos por tal conceito. “A definição

⁷ Lahire (2002: 152-158).

de *habitus* convém melhor para sociedades bastante homogêneas, com extensão demográfica relativamente pequena, que oferecem esquemas socializantes bastante estáveis e homogêneos para seus membros” (Lahire, 2004b: 318). Nas sociedades complexas, nas quais as crianças conhecem desde muito cedo uma diversidade de contextos socializantes, os patrimônios individuais de disposições raramente são homogêneos e coerentes. E é aqui que Lahire propõe a noção de “ator plural” (Lahire 2002), na qual o ator social é percebido como produto de processos múltiplos e heterogêneos de socializações, de sumários de experiências múltiplas nem sempre compatíveis entre si. Em suas relações e práticas, o ator terá que lidar com isso. Essa situação pode causar-lhe problemas quando as disposições se contradizem na prática. Ou ainda, o ator social pode não perceber essas contradições em relação às suas disposições, já que, na maioria das vezes, elas só se ativam em contextos de práticas limitados e separados entre si (Lahire 2004a).

A “sociologia das variações individuais” está baseada na busca de compreensão das disposições dos agentes sociais que evite o erro de se deduzir prematuramente uma “visão de mundo” ou um *habitus* de comportamentos observados em uma cena singular. Para isso, ele sugere que sejam analisados os diversos contextos ou microcontextos de socialização aos quais os atores sociais estão submetidos.

E é aqui que parece haver o que poderíamos denominar de uma relação de “complementaridade” teórica e metodológica entre as abordagens da “sociologia disposicional”, que vem sendo aperfeiçoada com a “sociologia das variações individuais”, e a interseccional. Winker e Degele (2009: 73) não hesitam em afirmar que o conceito de *habitus* de Bourdieu representa um verdadeiro ganho para a articulação entre os níveis da estrutura social e da identidade, da relação entre agência e estrutura. Com esse conceito, creem as autoras que Bourdieu lança um olhar certo para o entrecruzamento dos níveis da estrutura social e da identidade. Contudo, na visão delas, Bourdieu não teria tematizado adequadamente o nível das representações simbólicas, pois faltaria à sua teoria uma explicação apropriada de como normas, valores, ideologias e discursos influenciam tanto as estruturas sociais quanto a constituição de identidades e são por elas influenciados.

Para Bourdieu, qualquer forma de decisão consciente dos atores sociais vem sempre precedida de uma não transparente, inconsciente apreciação que se realiza através da prática, a partir da decodificação, pré-reflexiva dos *habitus* realizada pelos agentes. Com o conceito de *habitus* como um conjunto de “disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes” (Bourdieu 1972: 155; 2009: 87) que são apreendidas e incorporadas ao corpo, de forma pré-reflexiva, inconsciente e, por isso mesmo, “automática,” através de socializações, Bourdieu traça a

interrelação entre os níveis das estruturas objetivas e cognitivas e a constituição de identidades, isto é, entre estrutura e agência. O *habitus* estabelece a mediação entre o sistema invisível de relações estruturadas, que influenciam e modelam as ações dos agentes em suas práticas, e as ações visíveis dos atores sociais que estruturam as relações. As disposições são, para ele, ao mesmo tempo adaptadas às estruturas de poder e também produtoras dessas estruturas. As estruturas cognitivas inseridas no mundo social são incorporadas pelos atores sociais através de suas práticas. Com isso, os atores dispõem de um conhecimento prático e de esquemas de classificação social que estão à disposição deles sob a forma de representações simbólicas. Todavia, o nível das representações simbólicas não recebeu a devida atenção de Bourdieu, não possuindo, em sua teoria, um lugar próprio. A ordem social estabelece-se no corpo dos indivíduos, de forma pré-reflexiva, e com isso torna a classificação social, em grande medida, também imperceptível à consciência dos indivíduos. O que Bourdieu não considera apropriadamente é que as construções de identidade dos atores e as representações simbólicas estão entrelaçadas entre si, reproduzindo e produzindo estruturas sociais (Winker/Degele 2009: 73).

Diferentemente de Lahire que se propõe a criticar a teoria do *habitus* por dentro, isto é, a superar as limitações da teoria da prática de Bourdieu, Winker e Degele não questionam o potencial explicativo do conceito de *habitus*. Contudo, em oposição a Bourdieu, elas não colocam a categoria classe como a categoria principal para predeterminar o acesso a bens e recursos materiais e simbólicos escassos nas sociedades modernas. As autoras veem a necessidade de perceber que as categorias de diferenciação produzem efeitos distintos, dependendo do contexto analisado, bem como do nível de análise. Portanto, a escolha das categorias de diferenciação nos diferentes níveis de análise deve levar em consideração esse aspecto levantado em relação às causas e aos efeitos, reconhecendo sempre que a especificidade histórica e contextual distingue mecanismos que produzem, estabilizam, perpetuam e naturalizam desigualdades sociais por diferentes divisões categoriais.

Para realizar os cruzamentos interseccionais, Winker e Degele (2009: 63-97) sugerem como primeiros passos da metodologia que os pesquisadores se concentrem na análise de cada entrevista, na percepção a respeito de quais categorias de diferenciação podem provocar diferentes formas de clivagens e desigualdades entre os indivíduos, dependendo do contexto analisado e dos níveis de análise. O primeiro passo da análise interseccional diz respeito à identificação das categorias de diferenciação que são apresentadas pelos entrevistados. Muitas vezes, é possível notar que algumas declarações dos/(as) entrevistados/(as) dirigem-se não apenas a uma categoria de diferenciação, mas, ao contrário, a várias categorias. Só depois de se perceber como os indivíduos constroem suas narrativas designando e nomeando, muitas vezes de

maneira fragmentada e imprecisa essas categorias, é que se iniciam as outras análises interseccionais. Por exemplo, a partir da reclamação de uma imigrante curda, Frau B, sobre a forma descortês e desumana como é tratada pelas instituições alemãs, inicia-se a análise dos outros dois níveis – o da estrutura social e o das representações simbólicas (Winker/Degele 2007: 11-15). Só mais tarde é que as autoras fazem as análises das entrevistas como um todo, agrupando os indivíduos em tipos sociais e realizando novamente os cruzamentos interseccionais.

A “sociologia das variações individuais” de Lahire pode enriquecer e refinar sobremaneira as análises interseccionais na medida em que pode contribuir, tanto teórica quanto metodologicamente, para a percepção mais apurada, por parte dos pesquisadores, a respeito dos contextos de incorporação e atualização das disposições individuais. Em outras palavras, pode mostrar o alcance explicativo e elucidativo do conceito de *habitus* (visto como um sistema homogêneo de disposições gerais, sistema transferível de um contexto a outro) como sendo um conceito central para refletir sobre as formas de produção e reprodução de desigualdades sociais. Para aprimorar o conceito de disposições de Bourdieu, Lahire, além de voltar-se para os diversos contextos e microcontextos de socialização dos agentes sociais, também desenvolveu uma metodologia – usada com sucesso em minhas pesquisas empíricas e pelos demais pesquisadores do CEPEDES – que permite perceber a dinâmica das estruturas de comportamento para além da consciência dos entrevistados.

Uma das estratégias utilizadas pelos agentes sociais para explicar a motivação de seus comportamentos é a de construir racionalizações para seu comportamento que, na verdade, não foram os reais motives de suas ações. Se essa é uma estratégia presente nas ações humanas em geral, ela é utilizada com relativa frequência especialmente por aqueles que, em função das condições objetivas de precariedade material, cultural, moral e existencial, não podem vislumbrar outras formas de vida possíveis, de ser e atuar no mundo. A estratégia de fantasiar sobre a sua própria vida e sobre o seu futuro faz parte do mecanismo de defesa desses atores sociais que possuem pouca ou quase nenhuma autonomia de escolha (Bourdieu, 1979: 69). Ainda que os indivíduos em geral, independentemente de seu posicionamento social, sofram pela ilusão de liberdade⁸, conforme afirmou Bourdieu, há indivíduos que, em virtude de suas pre-

⁸ Bourdieu é criticado por vários autores pela ênfase de sua teoria nas descrições deterministas da reprodução estável. Ainda que com seu conceito de *habitus* ele afirme que seja possível a mudança de disposições no decorrer da trajetória individual dos agentes sociais, a junção entre os conceitos de *habitus* e violência simbólica não reserva aos agentes sociais um efetivo espaço para a ação criativa deles para além da reprodução. Para uma discussão pormenorizada sobre as teorias atuais na França que tentam superar as descrições estáveis

cárias condições socioeconômicas, vivenciam em suas práticas sociais com muito mais frequência, e sem jamais poder admitir para si mesmos e para os outros a interdição, em grande medida, da possibilidade de fazer escolhas, de ser um sujeito livre e autônomo.

Num mundo no qual a ideologia dominante salienta a possibilidade de escolha, a liberdade para escolher e definir o próprio destino, o reconhecimento individual de ser um desses indivíduos que se limitam a “fazer as escolhas pré-escolhidas” pelas suas condições de precariedade e vulnerabilidade material e existencial é, na maioria das vezes, intolerável. É assim que Bourdieu (1979, 2008) explica o uso da estratégia de “transformação de necessidade em virtude” como um recurso recorrente para aquelas pessoas que, tácita e implicitamente, sabem e sentem, através de suas práticas, que não podem sonhar com outros mundos possíveis, como outras formas de atuação e intervenção no mundo. Mesmo que a utilização dessa estratégia de “transformação de necessidade em virtude” seja feita pelas pessoas em geral, independentemente de sua classe social, ela é utilizada com grande frequência especialmente por aqueles indivíduos que possuem poucas chances de intervenção no mundo. Essa estratégia de “transformação de necessidade em virtude” foi identificada com frequência na pesquisa realizada por mim sobre as prostitutas e pelos pesquisadores do CEPEDDES sobre a “ralé” brasileira (Souza 2009).

Para vencer os obstáculos da autolegitimação individual e o recorrente risco de reproduzir, em nome da ciência e com sua chancela, os autoenganos dos próprios agentes sociais sobre si mesmos, que dão vazão à reprodução da dominação social injusta, é que o método desenvolvido por Lahire (2004a) parece ser bastante interessante e vantajoso. São realizadas, com um/a mesmo/a pesquisado/a, várias entrevistas sucessivas e em profundidade, nas quais é possível notar, a partir das lacunas e contradições do discurso, as autolegitimações ou fantasias sobre a sua própria vida, que os agentes constroem para si mesmos e para os outros para explicar seu comportamento, seus pensamentos e sentimentos. Com isso, pode-se tentar superar a ameaça dos pesquisadores de reproduzirem os esquemas de percepção e avaliação que mantêm e perpetuam a dominação social.

Baseadas em Bourdieu, Winker e Degele (2009: 63) acreditam que uma sociologia crítica das desigualdades sociais tenha que, obrigatoriamente, realizar a articulação entre teoria e empiria. Com sua “teoria da prática”, Bourdieu (1972; 2009) se posiciona decisivamente contrário a teorias que se desenvolvam em função de si mesmas, sem nenhuma relação com as práticas sociais.

da reprodução dialogando “com Bourdieu e contra Bourdieu”, ver o texto “A era dos epígonos: a teoria social pós-bourdiesiana na França” in Vandenberghe (2010). Esse texto foi publicado também em inglês no livro organizado por G. Delanty (2006).

Essa influência bourdieusiana é também marcante para Lahire em seu objetivo de aperfeiçoar o conceito de disposição. Enquanto no nível da estrutura Winker e Degele consideram quatro categorias de diferenciação – classe, gênero, raça e corpo⁹ – nos níveis da identidade e das representações simbólicas não são estabelecidas previamente as categorias diferenciais a serem objeto da pesquisa. Estas serão contempladas na medida em que os entrevistados as identificarem e as nomearem como tais. O uso e a articulação das categorias de diferenciação – classe, gênero, raça e corpo – têm como fim possibilitar o entendimento acerca da relevância dessas categorias com relação ao acesso ao mercado de trabalho remunerado, à distribuição desigual de salários, bem como à reprodução da força de trabalho a custos os mais favoráveis possíveis. O sentido das categorias de diferenciação para as práticas sociais será elucidado pela associação de métodos indutivos e dedutivos de análise.

Quando as autoras destacam que serão abordadas, nos três níveis, diversas categorias de diferença, isso não significa dizer, entretanto, que todas as categorias identificadas sejam igualmente relevantes. A importância das categorias depende, de um lado, do objeto de investigação e, de outro, do respectivo nível de investigação. Essa é a razão para que sejam observadas, na forma de interações e ações sociais, as categorias de diferenciação lá encontráveis, sobretudo, em ações recíprocas. Dessa maneira, pode-se localizar em quais estruturas sociais e contextos simbólicos as práticas sociais estão inseridas, como elas produzem, estabilizam e modificam a construção de identidades, de subjetividades. Naturalmente, a conexão das categorias se dará de forma diferenciada, dependendo de qual nível de investigação se encontra em primeiro plano. O verdadeiro desafio consiste em visualizar as ações recíprocas de diferentes categorias nos três níveis e colocá-las no centro da análise. O diálogo entre as abordagens de Winker, Degele e Lahire pode ser bastante profícuo para evitar as descrições excessivamente deterministas da reprodução estável, às quais Bourdieu é criticado por vários autores.

* * *

Desde 2005, venho desenvolvendo pesquisas empíricas cujo principal interesse tem sido refletir sobre a interrelação entre as formas de dominação de gênero e

⁹ Os autores e autoras, que normalmente desenvolvem análises interseccionais no nível da estrutura social, trabalham com três categorias – classe, gênero e raça/etnia. Ver Gudrun Axeli Knapp (2005), Leslie McCall (2005) e Cornelia Klinger (2003). Winker e Degele afirmam, a partir de pesquisas empíricas realizadas por elas, que no atual estágio do capitalismo a categoria “corpo” aparece como uma das categorias centrais para se pensar em formas de exclusão social no mercado de trabalho.

classe social. Como pesquisadora atuante durante três anos do CEPEDS, pude participar de uma pesquisa empírica que procurou identificar os mecanismos e fatores de produção e reprodução indefinida de uma classe social de subproletários chamada provocativamente de “ralé” (Souza 2003, 2006 e 2009). Nosso intuito com essa pesquisa sobre a “ralé” foi o de ressaltar o processo de produção e reprodução de uma classe social que sequer é percebida enquanto tal e chamar atenção para nosso maior conflito social e político: “o abandono social e político, consentido por toda a sociedade, de toda uma classe de indivíduos ‘precarizados’ que se reproduz há gerações enquanto tal” (Souza 2010: 25).

A compreensão adequada sobre a construção e a dinâmica das classes sociais no Brasil norteou todo o esforço teórico e metodológico empreendido na consecução dessa pesquisa. Percebemos a classe social como a categoria por excelência que predetermina o acesso privilegiado a todos os bens e recursos escassos. Inspirados em Bourdieu (2008), procuramos perceber a dinâmica de reprodução dessa classe denominada “ralé” reconstruindo sua gênese socio-cultural. Propusemo-nos a mostrar que existe uma “cultura de classes” específica e que os indivíduos são produzidos diferencialmente por essa cultura. Procuramos salientar a existência de uma transferência de valores, melhor dizendo, de uma visão de mundo, que se incorpora ao corpo, de forma pré-reflexiva e afetiva,¹⁰ que está na base da reprodução das classes sociais. Com isso, desejávamos mostrar o processo de construção social da subcidadania.

Com essa pesquisa foi possível notar que a “ralé” é caracterizada pela não incorporação dos capitais pessoais (capital econômico e capital cultural), que permitem a participação dos indivíduos, com alguma chance de sucesso, nas instituições centrais de uma sociedade moderna, ainda que periférica como a brasileira. O interesse da pesquisa foi mapear e compreender as estratégias de sobrevivência dessa classe social específica. No livro sobre a “ralé” (Souza 2009), procuramos mostrar como se constroem socialmente, por herança familiar e afetiva, os principais tipos sociais da “ralé”. Ainda que esse *habitus* de classe possa ser modificado no decorrer da trajetória individual, como foi percebido pelo estudo dos pesquisadores do CEPEDS sobre os “batalhadores”, que conseguiram, no atual estágio do capitalismo, construir uma trajetória de transfusões de classe (Souza 2010), o que foi notado na pesquisa sobre a “ralé” foi, em geral, a interdição da possibilidade de rompimento da reprodução em função da herança familiar¹¹ e afetiva.

¹⁰ No estudo sobre a “ralé” percebemos que o *habitus* de classe e sua “cultura de classe”, baseada em um sistema significativamente homogêneo de disposições para o comportamento, é reproduzido, principalmente, pelo que poderíamos chamar de *habitus* familiar.

¹¹ A ausência de uma “economia emocional”, necessária para o trabalho útil e produtivo no mercado competitivo, fundada em valores como disciplina, concentração, autocontrole e

Interessante foi perceber que apesar de todos os indivíduos da “ralé” sofrerem preconceito, discriminação e estereotipação em virtude da falta dessa “economia emocional”, há uma distinção entre os gêneros, uma dominação masculina que coloca as mulheres da “ralé” numa situação de maior fragilidade e opressão social que os homens dessa mesma classe social. Dois tipos sociais femininos apareceram com destaque nessa pesquisa – a empregada doméstica¹² e a prostituta. Investigamos, então, a figura da prostituta na cidade do Rio de Janeiro como membro típico da “ralé”.

Um aspecto que nos chamou atenção como característica marcante dessa destruturação familiar da “ralé” foi a relativa frequência dos relatos femininos a respeito dos abusos sexuais ou, pelo menos, do receio que assola as mulheres de que o abuso sexual possa ser sofrido por elas ou por suas filhas em situações cotidianas. Nas falas dessas mulheres nota-se que elas foram levadas, em suas relações e práticas sociais, a naturalizar o abuso sexual ou a iminência dele. Tais abusos dão aos homens (pais, padrastos, tios, amigos, conhecidos, enfim, homens em geral) a possibilidade de dispor do corpo feminino ao seu bel prazer. A maneira como as mulheres reagem a essa prática e suas estratégias de sobrevivência mostram certas variações individuais que vão desde o silêncio conivente daquelas que foram expostas precocemente a esse tipo de perigo e se acostumaram desde muito cedo às relações instrumentais até aquelas que mesmo sendo precocemente expostas a tal violência tentaram denunciar, se

cálculo prospectivo num contexto familiar marcado pela presença de relações instrumentais e/ou abusos físicos e/ou sexuais tende a reproduzir um exército de desclassificados socialmente.

¹² No Brasil, segundo a amostra domiciliar do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), 15,8% das mulheres que trabalham são empregadas domésticas. Sabe-se que esse índice é ainda maior se levarmos em conta que a informalidade, o trabalho sem carteira assinada e, portanto, sem os direitos sociais garantidos, é bastante comum na profissão de empregada doméstica. No caso das prostitutas, a apreensão estatística é ainda mais difícil, por motivos óbvios como o estigma da profissão. No entanto, sabe-se que essa é uma ocupação de várias mulheres da “ralé” no Brasil. São amplamente divulgados na mídia, como alguns de nossos sérios problemas sociais, a prostituição infantil, o tráfico de mulheres brasileiras para a Europa e o turismo sexual. O Brasil desponta como roteiro obrigatório para aqueles estrangeiros que desejam sexo fácil e intenso. Só para ilustrarmos a força do estigma com relação às prostitutas, frequentemente são realizadas operações de cadastramento de prostitutas em delegacias no Rio de Janeiro. Mesmo que a prostituição não seja considerada uma atividade ilegal no Brasil, ela é associada, como numa relação de contágio, a crimes como lenocínio e furto. É isso que legitima que a polícia faça operações nas praias de Copacabana e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, denominadas de operações “Copacabana” e “Barrabacana”, que têm como finalidade encaminhar prostitutas, travestis e meninos de rua para serem cadastrados na delegacia sob a justificativa de reprimir a desordem urbana nessas praias.

rebelar das mais diversas maneiras, chegando até a encarar o embate com os homens abusadores, a força bruta da violência física, pagando, muitas vezes, um preço alto por tal ousadia e resistência (Mattos 2009: 190-192).

Ainda que padrões de comportamento machistas e sexistas estejam presentes nas práticas e relações sociais e institucionais de todas as classes sociais na sociedade brasileira, na “ralé” esse esquema de percepção e avaliação de mundo é especialmente acentuado. Explicando melhor: Creio que na “ralé” o sexismo e o machismo sejam encontrados de maneira mais caricata, mais bruta do que nas classes média e alta, nas quais o discurso da igualdade entre os gêneros encontra, especialmente, a partir de exemplos pontuais de mulheres bem-sucedidas, um lastro na realidade para a difusão e propagação dessa mudança no regime de gêneros (Mattos 2006: 153-196). O fato de ser homem da ralé já dá a eles uma condição privilegiada em relação às mulheres tanto para explorar o trabalho feminino quanto para abusar sexualmente das mulheres de seu meio. São comuns os relatos de mulheres que não só sustentam seus maridos e sua família como mantêm com eles uma relação de hostilidade que, muitas vezes, conduz a ameaças físicas mútuas, de fato (Carneiro/Rocha 2009). O que pode ser surpreendente aos olhos das mulheres de classe média, mas é totalmente compreensível quando se analisam as condições femininas na “ralé”, é que apesar de toda a violência manifesta sofrida pelas mulheres dessa classe, em muitos casos, essas mulheres mantêm as relações com esses homens. Uma informante apresentou uma explicação que parece sintetizar a vulnerabilidade da condição feminina nessa classe: “mulher sozinha na favela vira toco de cachorro mijar.” (Carneiro/Rocha 2009: 129)

Ao ser notada a situação de vulnerabilidade da mulher da “ralé” em geral e da prostituta, em particular, surgiram algumas questões, fundamentais nesse contexto, que indicavam a limitação de nossa abordagem voltada principalmente para a dinâmica da reprodução dessa classe social: a necessidade de interconexão de outras categorias de diferenciação como gênero, corpo e raça, por exemplo. Surgiram questionamentos relativos à disjuntiva classe/gênero/raça/corpo que nos levaram a perceber a necessidade de aprofundamento nas questões teóricas envolvendo a intersecção de outras categorias de diferenciação para análise das desigualdades sociais.

Em resumo, na realização da pesquisa empírica sobre a “ralé”, nós colocamos a classe social como categoria principal de diferenciação produtora e reprodutora de desigualdades sociais e, ainda que tenhamos percebido a interconexão, em determinados contextos, de vários eixos das desigualdades sociais ligados a outras categorias de diferenciação, a percepção a respeito dos mecanismos de produção e reprodução da exclusão social sofrida pelos indivíduos da “ralé” centrou-se prioritariamente no *habitus* familiar dessa classe social, ou seja, na ausência de um “capital familiar” responsável pela trans-

missão de um sistema disposicional fundado em valores como disciplina, capacidade de concentração, autocontrole e cálculo prospectivo. O que nós observamos, via de regra, foi a existência, nessa classe social, de esquemas de socialização significativamente homogêneos, especialmente no que diz respeito à estrutura das famílias.

Para discutir o alcance da dominação masculina e poder fazer uma comparação entre as mulheres da ralé e as mulheres de classe média, realizo atualmente uma pesquisa empírica sobre os dilemas, ambiguidades e contradições da “mulher moderna”¹³ baseada na abordagem “interseccional” e na “sociologia disposicional”.¹⁴ Na pesquisa atual sobre “mulheres modernas” foi feito um recorte de classe social: as mulheres pesquisadas são de classe média.¹⁵ O objetivo da pesquisa é perceber até que ponto a entrada da mulher no mercado de trabalho competitivo, na competição social por bens e recursos materiais e simbólicos escassos, lhes dá a possibilidade de romper em suas relações, práticas sociais e institucionais com o “estigma do feminino”, com os valores tradicionais ligados à reprodução de um *habitus* feminino (Bourdieu 1999).

Em função de toda uma herança do patriarcado que, usando os termos de Bourdieu, está no *habitus* feminino, reproduzindo, sob aparência de mudança, a dominação masculina, a construção da identidade da “mulher moderna” é ambígua, contraditória e dilemática. Há variações e gradações importantes desse tipo social de mulher denominado “mulher moderna”. Com base na “sociologia das variações individuais”, será só com a análise dos diversos contextos de socialização dessas mulheres (família, trabalho, relações amorosas e afetivas, práticas culturais, cuidados com corpo etc.), que se poderá pensar sobre o alcance explicativo desse *habitus* que caracterizaria a “mulher moder-

¹³ O tipo social “mulher moderna” designa aquela mulher que constrói, em grande medida, sua identidade na esfera do trabalho. É consenso entre os autores que a entrada da mulher no mercado de trabalho, seu maior acesso à instrução formal e sua consequente independência financeira tendem a gerar fricções que podem questionar a *doxa*, a evidência inquestionável da “ordem natural dos sexos”. É bem verdade que há autores como Giddens (1994), Castells (2000), Norris e Inglehart (2003), Crompton (1999), cada um a seu modo, que ressaltam as mudanças no regime dos gêneros, no lugar das mulheres na sociedade e na família. Bourdieu (1999), por sua vez, salienta a continuidade da dominação masculina, apesar da aparência de mudança.

¹⁴ Gostaria de fazer um agradecimento especial ao CNPq e à Fapemig pelo apoio financeiro que venho recebendo para a realização desta pesquisa.

¹⁵ Ainda que, muito provavelmente, possamos encontrar “mulheres modernas” em outras classes sociais, o estudo sobre as mulheres da “ralé” nos mostrou, entretanto, que a entrada das mulheres dessa classe no mercado de trabalho, muitas vezes, sendo elas as principais responsáveis pelo sustento da casa e da família, em geral, não lhes dá, efetivamente, a possibilidade de rompimento, em alguma medida significativa, com a velha “ordem natural” dos sexos.

na” e seus subtipos. Mais do que isso, o interesse da atual pesquisa é averiguar quais são as dores, dramas, conflitos, sonhos, ilusões e conquistas das mulheres de classe média, ressaltando-se tanto as disposições que são comuns às mulheres, como também as disposições, as variações individuais, enfim, os contraexemplos que não permitem que sejam feitas generalizações entre as mulheres.

O mesmo pode ser dito com relação ao *habitus* de classe. Será só com a pesquisa empírica dos diversos contextos de socialização das mulheres dessa classe social que será possível afirmar a existência ou não de uma visão de mundo ligada ao pertencimento de classe e aos fracionamentos dessa classe social, que parece diferir da “ralé” por ser mais multifacetada e heterogênea. Falando de outro modo, somente a pesquisa empírica dos diversos contextos de socialização dessas mulheres de classe média, na comparação com as mulheres da “ralé”, permitirá avaliar a pertinência ou não de se falar de um *habitus* familiar nos termos usados na pesquisa da “ralé”, o qual seria a forma de reprodução por excelência do que chamamos de “cultura de classes”, desse sistema de disposições que daria sentido às experiências ulteriores dos indivíduos.

Com base na “abordagem interseccional” proposta por Winker e Degele para análise do nível da estrutura social, além das categorias classe¹⁶ e gênero serão acrescentadas as categorias raça¹⁷ e corpo. O uso e a articulação dessas

¹⁶ Ainda que se saiba que é só a pesquisa empírica que permite definir tipificações e generalizações plausíveis que indiquem subdivisões para essa classe social de mulheres pesquisadas, recorri às estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para ter um mapeamento inicial da colocação das mulheres de classe média no mercado de trabalho.

¹⁷ No debate sobre as desigualdades sociais no Brasil, a categoria raça vem ganhando destaque como a causa principal das desigualdades sociais no país. Souza (2006) critica as abordagens empíricas destinadas a demonstrar a sobre-representação dos negros em todos os índices sociais negativos. Na falta de um aporte interpretativo que especifique uma hierarquia das causas da desigualdade, a raça é tendencialmente percebida por essas abordagens como princípio gerador de nossas desigualdades sociais. Há, segundo Souza, uma inter-relação entre as formas de exclusão social geradas pelas categorias classe social e raça, ligadas, antes de tudo, à ausência de uma “economia emocional” por parte dos excluídos socialmente, que tem como principal causa uma “cultura de classes” que é obscurecida pela visibilidade da exclusão social dos negros comprovada por estudos empíricos sobre as relações raciais, desvinculada de um quadro teórico-interpretativo amplo, inclusivo e totalizador. A proposta de Souza nesse artigo é inverter a secundarização da classe social, colocando-a como categoria principal para se pensar as causas das desigualdades sociais no Brasil. Dessa forma, ele propõe a inversão da correlação raça/classe feita pelos estudos raciais no Brasil. Sua tese é revista no livro sobre a “ralé” a partir da pesquisa empírica realizada especialmente por Êmerson Rocha (2009). Ficou evidente que só a pesquisa empírica pode identificar os tipos de sofrimentos e dores humanas que, embora correlacionados, dizem respeito

categorias de diferenciação têm como fim possibilitar o entendimento acerca da relevância dessas categorias com relação ao acesso ao mercado de trabalho remunerado, à distribuição desigual de salários, bem como à reprodução da força de trabalho a custos os mais favoráveis possíveis.¹⁸ Ademais, será possível também notar como outras categorias de diferenciação podem surgir como sendo relevantes para análise dos outros níveis.

Vários autores¹⁹ têm se dedicado a construir uma explicação a respeito da singularidade, da “novidade” do capitalismo pós-fordista. Inspiradas nas interpretações a respeito da nova estrutura do capitalismo feitas pelos autores que expõem as ambiguidades e contradições das sociedades centrais, em tempos marcados pela impossibilidade de manutenção do Estado de bem-estar social, da política de pleno emprego e de seguridade social e da formação, na Europa, de uma crescente “classe de excluídos” composta essencialmente por imigrantes, Winker e Degele constroem os pontos de partida de sua análise interseccional no nível da estrutura social.

Ainda que no Brasil os efeitos dessa mudança na estrutura e no “espírito” do capitalismo sejam distintos da Europa e haja, inclusive, uma nova ideologia que propaga o surgimento de uma “nova classe média” entre nós²⁰, é de fundamental importância a precisão, no nosso contexto histórico, com relação às formas de estereotipação, preconceito, enfim, às desigualdades sociais produzidas e reproduzidas pelas categorias de diferenciação no mercado de trabalho.

prioritariamente a uma das categorias de diferenciação, evitando, assim, as análises sobrepostas que não explicam por que e como a relação entre categorias se dá (Rocha 2009: 353-384).

¹⁸ O que elas pretendem é mostrar os efeitos, nas relações, práticas sociais e institucionais, da implementação dessa lógica para a construção de uma análise interseccional. Para cumprir tal desiderato, investigam-se os pressupostos da reprodução da força de trabalho no nível da estrutura; o novo “espírito do capitalismo” no nível das representações simbólicas e as novas formas de subjetivação baseadas na insegurança dos agentes sociais no nível da identidade. Elas partem da suposição de que todas as categorias de diferença têm em comum a regulação da lógica de acumulação capitalista – sua estabilização e também desestabilização, mesmo que o significado de cada categoria se modifique, dependendo do contexto histórico.

¹⁹ Boltanski/Chiapello (2009), Harvey (2008), Sennett (2006), Eickelpasch/Rademacher/Lobato (2008).

²⁰ No Brasil, ao contrário da Alemanha, os efeitos da mudança na estrutura do capitalismo têm sido recorrentemente alardeados pela mídia e por várias pesquisas de forma positiva. Constata-se o surgimento de uma “nova classe média”, que estaria transformando o Brasil num país de primeiro mundo, uma vez que a maioria da população brasileira faz parte dessa classe social, tal como nos países centrais (Lamounier/Souza, 2010). Souza (2010) mostra toda a violência simbólica, toda a ideologia envolvida na atribuição a essa nova classe de “emergentes” da designação de “nova classe média”. A dinâmica de reprodução dessa classe de emergentes, que Souza denomina de “a nova classe trabalhadora”, é muito distinta da classe média.

No que tange à pesquisa sobre a “mulher moderna”, pretende-se investigar a percepção das mulheres a respeito das desigualdades de gênero em várias esferas da vida observando-se a especificidade das mudanças econômicas e, conseqüentemente, das mudanças sociais e políticas que estão vinculadas àquelas. Algumas questões guiam essa empreitada, a saber: quais são as violências simbólicas sofridas pelas mulheres modernas em suas relações e práticas sociais e institucionais? Até que ponto o seu posicionamento privilegiado na hierarquia social não “apaga”, ou melhor, obscurece a percepção da continuidade de determinadas desigualdades de gênero? Quais são as “ficções de igualdade” e as “ficções de segurança” que se manifestam em todas as esferas da vida dessas mulheres? Quais são as ideias condutoras dessas “ficções”? Qual é o preço pago pelas mulheres para serem “autônomas”? Quais são os limites e as possibilidades das mulheres construir sua identidade rompendo com o modelo masculino? Quais são as estratégias/táticas utilizadas pelas mulheres em suas relações e práticas sociais e institucionais? Quais são as expectativas da mulher moderna quanto às suas relações afetivas e conjugais? Quais são os sofrimentos, dores, ilusões, sonhos, aspirações das mulheres modernas? Quais são as mudanças e as permanências no regime dos gêneros? Além das entrevistas para saber como se realiza a subjetivação da dominação social e quais são as dores, sofrimentos, sonhos e aspirações que estão por trás da construção da identidade dessas mulheres, pretende-se também investigar os níveis da estrutura social e das representações simbólicas, realizando uma análise propriamente interseccional.

Para saber qual é o consenso pré-reflexivo que está por trás da construção do papel social da “mulher moderna”, das expectativas de comportamento que estão por trás das relações entre homens e mulheres, que podem indicar mudanças e permanências nas relações de gênero, tem-se buscado notar como se constrói essa definição de mulher nas várias dimensões de sua vida – como profissional, como participante da esfera pública, como mãe, esposa ou namorada, suas expectativas com relação às relações afetivas e ao “romance”, em relação ao homem, à sua autoimagem, à imagem que faz dos homens, à sua própria sexualidade.

Uma das autoras que tem desenvolvido estudos sobre as mudanças e continuidades nas relações de gênero com mulheres de classe média é Mirian Goldenberg (2004, 2007, 2008 e 2009). Goldenberg tem se concentrado em discutir questões relacionadas ao corpo, envelhecimento, casamento e infidelidade. A autora também analisa o nível das representações simbólicas, dos discursos sobre esses temas veiculados em produtos midiáticos como novelas e revistas. Suas pesquisas e descobertas servem de pano de fundo para algumas hipóteses e reflexões que ora desenvolvo na atual pesquisa sobre os desafios e ambigüidades da “mulher moderna”. Goldenberg tem conseguido com suas pesquisas

analisar tendências de comportamento, nas quais tem buscado perceber as transformações e continuidades nas relações entre os gêneros. Sem negar o êxito de Goldenberg em mapear essas mudanças e permanências, interessante, diferentemente das abordagens feitas por Goldenberg voltadas para as questões do corpo, do envelhecimento, do casamento e da infidelidade, ampliar o escopo da pesquisa e compreender não só o estilo de vida, a visão de mundo de mundo das mulheres desse estrato social como também salientar as “variações individuais” e os subtipos encontrados na pesquisa. Mostrar como o investimento dessas mulheres em educação e sua colocação no mercado de trabalho ou a expectativa dessa colocação, no caso das jovens, contribui ou não para a mudança no regime dos gêneros. Com isso, pretendo, seguindo a abordagem interseccional, articular diferentes níveis de análise e perceber a possibilidade de surgimento de novas categorias de diferenciação na constituição das subjetividades das mulheres desse estrato social.

Se vencer o “inconsciente androcêntrico” é um desafio para a construção de uma identidade autônoma das mulheres, como afirma Bourdieu (1999), uma das questões centrais da pesquisa é identificar a possibilidade ou não das mulheres romperem com os esquemas de percepção e avaliação “androcêntricos” em suas relações, práticas sociais e institucionais. Localizar e especificar os contextos e microcontextos nos quais se pode perceber o questionamento, numa dimensão significativa, desse “inconsciente androcêntrico”. E aqui vale ressaltar “as variações individuais”, isto é, discutir as precondições em termos de disposições individuais que podem facilitar a construção de uma identidade autônoma feminina. Além disso, perceber também os contextos e microcontextos em que outras categorias de diferenciação se colocam em primeiro plano em relação à categoria gênero como principais fontes de opressão, discriminação e preconceito para as mulheres entrevistadas.

* * *

Em síntese, pode-se dizer que os ganhos teóricos e metodológicos da articulação das duas abordagens – da “interseccionalidade” e da “sociologia disposicional”, que vem sendo aprimorada pela “sociologia das variações individuais”, de Lahire, são os seguintes: com a “sociologia das variações individuais”, volta-se a atenção para a importância da reconstrução de uma gênese das disposições – que permite explicar comportamentos, percepções e pensamentos dos agentes sociais pelos elos sociais passados e presentes que os constituíram. Com isso, é possível refletir, através da pesquisa empírica que enfatiza os diversos contextos de socialização dos agentes sociais, sobre o potencial explicativo e elucidativo do conceito de *habitus como um sistema homogêneo de disposições gerais transferíveis de um domínio de ação a outro*.

Além disso, a metodologia desenvolvida por Lahire de realização de entrevistas sucessivas com o/a mesmo/a entrevistado/a possibilita que se torne refletida e operacional uma sociologia empírica das disposições sociais, nem sempre acessível de modo consciente ao próprio agente que as possui.

Com a “abordagem interseccional”, por sua vez, tem-se a vantagem de realizar um diagnóstico mais preciso a respeito das causas e dos efeitos das desigualdades sociais, dando-se, assim, continuidade a uma das preocupações centrais da teoria de Bourdieu – a reflexão sobre as formas de justificação, legitimação e naturalização da dominação social injusta. Ao considerar uma multiplicidade de categorias de diferenciação, partindo das práticas cotidianas dos agentes sociais e ligando, dessa maneira, construções identitárias com modelos de interpretação simbólicos e condicionamentos estruturais, evita-se a arbitrariedade da escolha *a priori* de categorias, uma vez que a análise de cada um dos níveis e de sua interrelação pressupõe precisão no que se refere à identificação dos diferentes efeitos produzidos por essas categorias de diferenciação, dependendo do contexto e do nível analisado. Além disso, com a abertura das categorias de diferenciação nos níveis da identidade e das representações simbólicas, é possível atentar-se para o surgimento de novas categorias de diferenciação produtoras e reprodutoras de formas de estratificação social. Mais ainda, a abertura das categorias de diferenciação permite que se tornem visíveis as construções dos eixos das diferenças, que são naturalizadas e hierarquizadas nas relações, práticas sociais e institucionais, gerando, das mais variadas formas, exclusão social, dor e sofrimento. Dessa maneira, é possível desvelar a violência simbólica que legitima e justifica a dominação social em suas diversas manifestações cotidianas. É possível ainda mostrar como operam os sistemas de classificação/desclassificação social em diferentes contextos e, com isso, desconstruir os códigos binários, sempre presentes nas categorias de diferenciação, que estão sempre produzindo e reproduzindo assimetrias arbitrariamente construídas entre os indivíduos.

Referências bibliográficas

- BOLTANSKI, Luc/CHIAPELLO, Ève (2009): *O novo espírito do capitalismo*. São Paulo: Ed. Martins Fontes.
- BOURDIEU, Pierre (1972): *Esquisse d'une théorie de la pratique: précédée de trois études d'ethnologie kabyle*. Genève: Droz.
- (1979): *O desencantamento do mundo*. São Paulo: Ed. Perspectiva.
- (1999): *A dominação masculina*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- (2006): “O camponês e seu corpo”, em: *Revista Sociologia e Política*, v. 26, pp. 83-92.

- (2008): *A distinção: crítica social do julgamento*. São Paulo/Porto Alegre: Edusp/Zouk.
- (2009): *O senso prático*. Petrópolis: Ed. Vozes.
- BUTLER, Judith (1993): “Kontingente Grundlagen: Der Feminismus und die Frage der ‘Postmoderne’”, em: Benhabib, Seyla/Butler, Judith/Cornell, Drucilla/Fraser, Nancy (eds.): *Der Streit um Differenz. Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart*. Frankfurt: S. Fischer, pp. 31-58.
- CARNEIRO, Maria Teresa/ROCHA, Êmerson (2009): “Do fundo do buraco: o drama social das empregadas domésticas”, em: Souza, Jessé (ed.): *A ralé brasileira: quem é e como vive*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, pp. 125-142.
- CASTELLS, Manuel (2000): *O poder da identidade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- CROMPTON, Rosemary (1999): *Restructuring Gender Relations and Employment: The Decline of the Male Breadwinner*. Oxford: Oxford University Press.
- DEGELE, Nina/WINKER, Gabriele (2007): “Intersektionalität als Mehrebenenanalyse”, em: <http://www.tv-harburg.de/agentec/winker/pdf/Intersektionaliteat_Mehrebenen.pdf> (03/11/2009).
- (2008): “Praxeologisch differenzieren. Ein Beitrag zur intersektionalen Gesellschaftsanalyse”, em: Klinger, Cornelia/Knapp, Gudrun Axeli (eds.): *Überkreuzungen: Fremdheit, Ungleichheit, Differenz*. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot.
- (2009): *Intersektionalität: Zur Analyse sozialer Ungleichheiten*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- EICKELPASCH, Rolf/RADEMACHER, Claudia/LOBATO, Phillip (eds.) (2008): *Metamorphosen des Kapitalismus und seiner Kritik*. Wiesbaden: VS Verlag.
- GIDDENS, Anthony (1994): *As consequências da modernidade*. São Paulo: Ed. Unesp.
- GOLDENBERG, Mirian (2004): *De perto ninguém é normal: estudos sobre corpo, sexualidade, gênero e desvio na cultura brasileira*. Rio de Janeiro/São Paulo: Record.
- (org.) (2007): *O corpo como capital: estudos sobre gênero, sexualidade e moda na cultura brasileira*. Barueri: Estação das Letras e Cores.
- (2008): *Coroas: corpo, envelhecimento, casamento e infidelidade*. Rio de Janeiro/São Paulo: Ed. Record.
- HARVEY, David (2008): *A condição pós-moderna*. São Paulo: Ed. Loyola.
- KLINGER, Cornelia (2003): “Ungleichheit in den Verhältnissen von Klasse, Rasse und Geschlecht”, em: Knapp, Gudrun Axeli/Wetterer, Angelika (eds.): *Achsen der Differenz. Gesellschaftstheorie und feministische Kritik II*. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, pp. 14-48.
- KLINGER, Cornelia/KNAPP, Gudrun Axeli (2005): “Achsen der Ungleichheit – Achsen der Differenz. Verhältnisbestimmungen von Klasse, Geschlecht, Rasse/Ethnizität”, em: *Transit – Europäische Revue*, 29, pp. 25-55.
- LAHIRE, Bernard (2002): *O homem plural*. Petrópolis: Vozes.
- (2004a): *Retratos sociológicos: disposições e variações individuais*. Porto Alegre: Artmed.
- (2004b): Trajetória acadêmica e pensamento sociológico: entrevista com Bernard Lahire, em: *Revista Educação e Pesquisa*, v. 30, n.2, pp. 315-321.
- (2006): *A cultura dos indivíduos*. Porto Alegre: Artmed.

- (2009): Entrevista com Bernard Lahire, em: *Cronos*, v. 10, n. 2, pp. 165-177.
- LAMOUNIER, Bolívar/SOUZA, Amaury (2010): *A classe média brasileira: ambições, valores e projetos de sociedade*. São Paulo: Campus/CNI.
- MATTOS, Patrícia (2006): “A mulher moderna numa sociedade desigual”, em: Souza, Jessé (org.): *A invisibilidade da desigualdade social*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, pp. 153-196.
- (2009): “A dor e o estigma da puta pobre”, em: Souza, Jessé (ed.): *A ralé brasileira: quem é e como vive*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, pp. 173-204.
- MCCALL, Leslie (2005): “The Complexity of Intersectionality”, em: *Signs. Journal of Women in Culture and Society*, 30, pp. 1771-1800.
- NORRIS, Pippa/INGLEHART, Ronald (2003): *Rising Tide: Gender Equality & Culture Change Around the World*. New York: Cambridge University Press.
- ROCHA, Êmerson (2009): “Cor e dor moral: sobre o racismo na ralé”, em: Souza, Jessé (ed.): *A ralé brasileira: quem é e como vive*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, pp. 353-384.
- SENETT, Richard (2006): *Der flexible Mensch: Die Kultur des neuen Kapitalismus*. Berlin: BUT Berliner Taschenbuch Verlag.
- SOUZA, Jessé (2003) *A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade periférica*. Belo Horizonte: Ed. UFMG.
- (2005): “Raça ou classe? Sobre a desigualdade brasileira”, em: *Lua Nova – Revista de cultura e política*, n. 65, pp. 43-70.
- (2009): *A ralé brasileira: quem é e como vive*. Belo Horizonte: Ed. UFMG.
- (2010): *Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora?* Belo Horizonte: Ed. UFMG.
- VANDENBERGHE, Frédéric (2006): “The Age of Epigones: Post-Bourdieusian Social Theory”, em: Delanty, Gerard (ed.): *Handbook of Contemporary European Social Theory*. London: Routledge.
- (2010). “A era dos epígonos: a teoria social pós-bourdieusiana na França”, em: Vandenberghe, Frédéric (2010): *Teoria social realista: um diálogo franco-britânico*. Belo Horizonte: Ed. UFMG.

Luiz Sérgio Duarte da Silva

**Filosofia da História e Teoria da Fronteira
no Ensaio Americano: interculturalidade
e integração. Primeiras notas de uma pesquisa
em andamento**

I

Há uma filosofia da história – crítica e especulativa – no ensaio latino-americano do século vinte. O gênero misto é importante como registro de esforços de produção de discursos identitários e orientadores, como marco do pensamento histórico no Novo Mundo e como experimento interpretativo inovador. Sobretudo, nele foi produzida uma teoria da fronteira de caráter historicista necessária ao projeto de atualização que coordena o trabalho intelectual das elites letradas do extremo-Occidente. Interessados em comunicação intercultural podem muito aprender com essa forma do humanismo.

Ensaístas como Alfonso Reyes, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Fernando Ortiz, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Cabrera Infante, García Márquez, German Arciniegas, Severo Sarduy, Edouard Glissant, Guimarães Rosa, Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e José María Arguedas não são relativistas. Suas obras são marcadas por uma reflexão sobre o Ocidente e pela busca da especificidade da experiência americana. Tal interesse se combina com um conceito de humanidade fixado no processo de modernização europeu. A acentuação da dimensão estética das interpretações históricas e a crítica da linearidade das representações do tempo são mais um tipo da cultura histórica ocidental do que um “outro” que teria desenvolvido-se contra ela.

A crítica da concepção ocidental do tempo (Paz, Borges, García Márquez) e da filosofia da história hegeliana (Arciniegas, Carpentier), a análise da socialização e das possibilidades de civilização nas situações de fronteira (Freyre, Holanda, Ortiz, Glissant, Sarduy, Cabrera Infante, Guimarães Rosa, Arguedas) são provas de que o pensamento histórico latino-americano desenvolveu-se a partir da influência e em disputa com a Europa. Os ensaístas produziram a história cultural do subcontinente. Queriam compreender o processo de desenvolvimento cultural. Seu material era a literatura e a cultura popular. Através de

construções intuitivas, corporais e ecológicas do passado procuraram compensar a escassez de fontes.

Os ensaístas escreveram a partir da fronteira da cultura ocidental. Eles falam de um humanismo trágico (tensão entre liberdade e necessidade), querem abrir-se para a cultura oral, explorar as funções da ficção e, tardo-romanticamente, produzir uma expressão americana. Porém os ensaios são, ao mesmo tempo, produtos de pesquisa racional e reconstrução realista. A explicação pelos motivos, a produção de tipologias, o uso de conceitos e o cruzamento de fontes são recursos recorrentes. Os ensaios foram produzidos por modernistas, sobre processos de modernização e lançando mão de procedimentos modernos.

II

Emprego o método da colagem benjaminiana. Hermenêutica radical das sobreposições e citações intercaladas por comentários sintéticos. Meu objetivo é explorar (em vários sentidos) a literatura (o seu gênero liminar, o ensaio) e a crítica literária. Colocá-las a serviço da filosofia da história. Localizar materiais, conceitos e procedimentos para as ciências da cultura. História como interrogação do passado, do tipo de conhecimento que torna essa interrogação possível, assim como da perspectiva (expressa em escritura) do historiador, aquele que encaminha tal interrogação. Trata-se de mover-se em um labirinto. Quero localizar materiais, conceitos e procedimentos para as ciências da cultura. Sobre tudo, procuro fazer teoria da história.

Para Carpentier, o passado é território de ação do farsante, o armador de ilusões. O historiador é como Colombo diante das cortes incrédulas: realiza pantomimas e mascaradas para convencer e para tanto precisa produzir seu “retábulo de maravilhas”. García Márquez enfatiza a solidão do trabalho interpretativo. Interpretar é insistir em ter uma vida própria. A condição para tal é a solidariedade: só em um ambiente orientado por disposição esclarecedora e universalista pode haver espaço para reconhecimento. Só gente disposta a repensar suas próprias concepções pode legitimar diferentes formas de leitura do mundo. Para Octavio Paz o labirinto é condição humana. Saber-se só e procurar o outro é o que marca o homem. A história, a invenção humana diante da natureza, é o resultado desse esforço. Os ensaístas latino-americanos são críticos da linearidade. Seu trabalho de construção do passado se fez contra os pressupostos da história universal. Positivismo e eurocentrismo eram combatidos na história oficial. Mobilizou-se a poética capaz de apreender a dimensão real-maravilhosa (desmedida, anacrônica, fragmentada, híbrida). É uma história feita a partir da fronteira: à contrapelo, com ironia, paródia, intertex-

tualidade e irreverência. Aqueles que mais avançaram na construção desse modelo de leitura do passado americano são Carpentier (a dobra americana), Borges (história e eternidade), Paz (corpo e mente no Ocidente), Sarduy (história travestida), Cabrera Infante (multiplicidade e multidimensionalidade da experiência), Lezama Lima (a sabedoria do olhar) e Glissant (história como formação).

O sucesso mundial do romancista García Márquez realizou um programa para a inteligência americana montado nos anos de 1920 por Alfonso Reyes. A questão não era a do tratamento de temas latino-americanos mas da maneira de lidar com a herança européia. Ver a história a partir de baixo (como em Unamuno), a partir de uma posição de classe (os subalternos), étnica (os escravos, os indígenas), geopoliticamente orientada (o sul, a fronteira) ou estrábica (feminista). Esse programa possui relevância para a teoria da história. Bom exemplo é Borges.

O que é mudança temporal para alguém que queria reorientar o interesse pela história e que tinha escrito sempre sobre a eternidade e os protótipos? Segundo Barilli, para Borges fazer história era em primeiro lugar a atenção às mudanças específicas que cunham as formas da experiência. Registrar a existência, o momento fatal, a mudança dos gostos e das metáforas decisivas. A história é a elaboração mítica de uma tradição, a tentativa de organizar um universo caótico, a vida como sonho perpétuo. É essa rejeição da história oficial que pode ajudar a localizar a diferença: a) interesse por enigmas, b) por sentidos únicos, c) reconstrução do assombro e surpresa do novo, d) da aceitação do impensável, e) o estudo das nuvens de sentido que separam o presente e o passado, f) história é síntese de uma idéia ou imagem.

Outro exemplo é o influente ensaio espanhol. Julian Marias localizou em Gilberto Freyre a especificidade da experiência ibérica do tempo. Trata-se de uma interpretação pessoal do tempo que institui uma diferença diante da instrumentalização puritana. Tempo não é dinheiro, é vida. Essa leitura encontra paralelo também em Marichal e a interpretação da idéia de névoa em Unamuno. Névoa é a metáfora de uma compreensão universalista. Sociabilidade como comunidade de indivíduos: o processo de individualização é a única forma de criar verdadeira integração. Só no ambiente onde exista gente que expresse seus problemas e receios íntimos pode-se constituir humanidade. Trata-se de uma teoria do espaço público e da clínica do social por meio da literatura e da escrita da história. Abellán e Goytisolo caracterizam o pensamento ibérico como marcado pela experiência da descontinuidade (a ruptura com as heranças islâmica e hebraica da Idade Média, a Contra Reforma, a Restauração, o fracasso colonial, a Guerra Civil e a Ditadura) e pelo contato com a América.

III

Essa pesquisa sobre filosofia da história no ensaio americano questiona os fundamentos teóricos, conceitos, estratégias de representação e os interesses didáticos que constituem esses textos. A intenção é incorporar o melhor do pensamento americano à tradição das ciências da cultura. A hipótese principal é a de que essa filosofia da história documenta uma experiência de interculturalidade e constitui-se como experimento de integração cultural. O humanismo dos ensaístas é resultado e fundamento de esforços de comunicação cultural. A partir da fronteira da cultura ocidental os ensaístas latino-americanos produziram uma concepção da conexão entre experiência do tempo e criação de sentido. Com isso conceberam uma interpretação histórica da experiência latino-americana, segundo modelos do pensamento histórico modernizado.

Desde o descobrimento no final do século xv o continente americano foi tratado pelos europeus como o lugar do exótico. Uma percepção instrumental do espaço promoveu a exploração material e o tratamento desumano dos indígenas e escravos para cá transferidos. Os ensaístas queriam chamar a atenção para um outro padrão de relação com a paisagem por meio do tratamento de emoções, memórias e expectativas. Através da valorização da sensibilidade e imaginação registrada na cultura popular e reconstituída na literatura, buscavam resgatar visões de mundo e sistemas simbólicos soterrados. O cerne do programa para a inteligência americana fixado por Reyes é uma combinação de atividade criativa e perspectiva crítica.

A possibilidade de uma síntese da cultura americana seria o resultado do aproveitamento das experiências do passado dos povos americanos e do privilégio da situação de culturas novas que não são limitadas por escolhas já feitas há muito. Os ensaios distinguem-se por um procedimento estético: atenção ao específico (o indivíduo é o lugar da percepção), ao pormenor (onde o sentido realiza-se), ao sentimento (produto da interação), à representação (simbolismo como história cultural), à reflexão (união no pensamento de supressão e conservação). A análise paradigmática do ensaio deve manter a principal qualidade dele, ou seja, a capacidade de relacionar diversos níveis de realidade.

O Novo Mundo é um produto da globalização. O ensaio latino-americano desenvolveu uma versão inclusiva da história universal que tem três variantes. A primeira ancora-se em conceitos como formação, conflito, mudança qualitativa, dialética (Alejo Carpentier, Sérgio Buarque de Holanda, Guimarães Rosa, Edouard Glissant, Carlos Fuentes). A segunda é instruída por conceitos como impensabilidade, alteridade, troca e por paradoxos do tempo como a convivência de fixidez e movimento (Octavio Paz, José Lezama Lima, Alfonso Reyes). Um terceiro grupo dedica-se à exposição de uma lista relativista de tempos: simultaneidade, interdependência e supressão que instituem todos

contraditórios (Jorge Luis Borges, Cabrera Infante, Severo Sarduy). Elaboram três tipos de conceitos de fronteira: ir e vir dos limites, agora como umbral e lugar da descoberta. Concordam na crítica da linearidade, falam do tempo do mito: o passado como contiguidade, como ferida da alma ou como dádiva da memória.

Os ensaístas produziram o pensamento histórico da América Latina: os ensaios são os textos mais influentes na constituição da sua consciência histórica, constituem-se em meta-narrativas. Eles combinam domínio da experiência da contingência e atualização do passado. O continente americano (trata-se de incorporar também os estados sulistas e a literatura ex-cêntrica de Faulkner assim como o Caribe inglês e a sua literatura de nômades pós-coloniais) é a fronteira do mundo ocidental. No espaço de influência ibérica ganha novo sentido a experiência da Reconquista e a cultura do Fim do Mundo (o limite atlântico). A fronteira é o extremo entendido como ermo geográfico, desconhecido simbólico ou prova existencial. A tese dos ensaístas é a de que na América um novo tipo de pensamento desenvolveu-se. Tal pensamento já foi caracterizado como labiríntico: narrativas em rede, hipertexto submetido ao método da incerteza, mais abdução do que dedução ou indução, conhecimento como remendo.

Essa maneira de pensar foi denominada de desdobramento extremo ocidental. O realismo fantástico, a literatura neo-barroca, a arquitetura colonial e a arte popular americana são exemplos dessa estética da superposição e da compressão. Linguagem cifrada e deformação expressam tentativas de reconhecimento mútuo e de celebração cultural. A história não é esclarecimento ou elucidação, é o resultado da simbiose de vários continentes e culturas. A América, terra de conflito e encontro, continente-fronteira é a terra da alegoria, o lugar da resistência ao literal. Ambiente ideal para o barroco, a América é desdobramento do Ocidente: compressão, deformação e sobreposição. O barroco é produto de uma época na qual imaginar é linha de fuga para um pensamento que perdeu suas certezas e investiu nos experimentos de mistura. O lugar da mistura é a fronteira.

Fronteiras são construções: processos social e historicamente produzidos, ou seja, simbolicamente produzidos. Devem ser lidas mais como abertura e atualidade do que como dado ou acabamento. São locais de mutação e subversão porque regidos por relatividade, multiplicidade, reciprocidade e reversibilidade. A fronteira é o reino da relação a qual Bachelard se refere. Fronteiras são sítios da exacerbação e do excesso onde limites são ultrapassados, novas dimensões descobertas e re-ordenamentos encaminhados. Por isso, são espaços de ruptura e conflito: ambientes de extremidade, crista e culminação. Elaboram originalidade pela via da multiplicação da experiência. Realizam modificações espirituais que as aproximações sucessivas possibilitam. Produzem

diferença. Fronteiras são exterioridades: resultados expressivos, figuras, formas, imagens, tipos. Elementos que permitem a teoria, a facilidade da relação: mais que identidade, coexistência, mais que sucessão, correspondência. Objetos de pensamento acessíveis pelo contorno. Trata-se do recorte que instala o limiar pela consistência interna dos componentes e que registra a escolha pela regionalização, marca da vizinhança e sinal de consistência externa. Fronteiras são lugares de deslizamento. Alianças, bifurcações e substituições que preparam o reconhecimento e a necessidade de limites. A fronteira é a vitória da contingência. Arranca a história da necessidade, estabelece o devir (o tornar-se). A fronteira é zona cinzenta: onde os contornos são mal definidos, a separação e a ligação de campos opostos realizam-se sem vergonha.

IV

O problema de fundo sempre foi o mesmo: o dilema-Hegel localizado por Arciniegas, Carpentier, Lezama Lima, Borges e Fuentes da história da América. Os americanos vivem como crianças, se limitam a existir. O que acontece na América tem origem na Europa. A mestiçagem reduz a América a reflexo. Um reflexo tocado pela natureza, sem passado sedimentado, sem continuidade e atualidade. Ruína para si e em si.

O pensamento histórico dos ensaístas que discute este dilema é manancial de idéias que podem alimentar a discussão sobre política da história (as críticas à história oficial), sobre cultura histórica (o projeto modernista de pesquisa e releitura das raízes culturais da América e sua relação com a cultura popular, a indústria cultural e o Estado), sobre consciência histórica (a reconstrução dos significados e sentidos que as concepções de mudança temporal produziram como vetores de orientação e identificação em vários momentos e vertentes) e sobre experiência histórica (a presença do passado: conceitos de memória).

Poetas e historiadores possuem em comum em primeiro lugar, o saber das figuras, formas e tipos, em segundo lugar os intentos de recuperação e expressão da experiência. O ensaio é registro de projetos de identidade e orientação produzidos na América Latina. A referência historicista é o que lhes dá um ar de família. Aquilo que Borges denominou de “minucioso amor pelas coisas” (tudo é história), a consciência do mundo (universalismo de comunicação intercultural), a pesquisa sobre o “abismal problema do tempo” (variações sobre as infinitas séries de tempos), o interesse pela singularidade (a valorização das margens e fronteiras) e pelo presente (vanguardismo), o humanismo (todas as experiências humanas são análogas) e a história dos intentos de compreensão, de plenitude e de eternidade (suas representações) fazem do ensaio latino-americano um herdeiro do historicismo.

Tal historicismo é produtor de uma teoria da fronteira a partir do espaço americano: estágios que alternam abertura e fechamento, nomadismo e plasticidade do bandeirismo, caráter lacunar de sociedades geradas pela colonização de exploração, aproximação contato e passagem proporcionada pelo entre-lugar, criatividade da transculturação, condição mestiça como saber das simultaneidades e trabalho de construção de si, heterogeneidade assumida como solução para o desafio de revelar mundos com atributos de uma outra cultura e a partir de tempos, lugares e inserções sociais diversas.

O escritor americano opera na fronteira entre universalismo e localismo. Seja como constante cultural (Ors\Lezama Lima), resultante da dialética natureza exuberante e mundo da vida (Carpentier) ou como função crítica e subversiva (Campos) o neo-barroco é referência para a postura da inteligência americana de afirmação da margem, lugar de enunciação e estilo irreverente antropofagicamente assimilativo e requalificador dos valores do outro. O neo-barroco é o tipo de pensamento do migrante treinado para a diferença mais que tipo da mistura elevado à essência de americano. Ele é ameaçado tanto pela ignorância de suas qualidades quanto pela fixação delas.

Contra o perspectivismo e o objetivismo, a literatura é discurso que registra valores e práticas, mas é também produtora de conceitos e procedimentos para as ciências da cultura. Ela alimenta o lado imaginativo e interpretativo constituinte das disciplinas bifrontes, liminares, ambíguas (no sentido de combinarem o controle lógico-empírico e a interpretação). A literatura possui uma tradição de tratamento do mito (o outro da história) e registro da experiência (no caso do ensaio historicista de fronteira: conflitos e encontros no Extremo-Occidente. Perda e revelação do passado da América, como fronteira entre sujeito e objeto: o lugar privilegiado do conhecimento das coisas humanas). Os ensaístas viram a dependência entre história e mito. A centralidade do conceito de experiência americana é o índice dessa tese central do pensamento americano. O procedimento literário presente no ensaio do século xx registra fases e tendências dessa reflexão.

Abrangência do campo de estudos e lugar de enunciação: história das idéias (estudo do pensamento sistemático, geralmente em tratados filosóficos), história intelectual (o estudo do pensamento informal, os climas de opinião e os movimentos literários), história social das idéias (estudo das ideologias e da difusão das idéias), história cultural (estudo da cultura no sentido antropológico incluindo concepções de mundo e mentalidades coletivas). O que faço está na fronteira desses campos. Quero reconstruir a especificidade de uma época (1920-1970), o projeto do pensamento americano, vanguarda e busca identitária. É a história de um momento da consciência histórica americana. Depois do Iluminismo e liberalismo da Independência, depois do Romantismo da construção dos Estados nacionais, depois da reforma positivista e da contra-reforma idealista, o programa regional-universalista da vanguarda. No ensaio

nega-se a idéia de percurso nacional consolidado. Na narrativa do passado americano no ensaio de vanguarda a identidade é puro adiamento. Sem totalidade constituída o que temos é a ambivalência de projetos utópicos e proféticos por um lado e pura violência por outro. Como no cinema de Glauber segundo Ismail Xavier, o ensaio americano do século xx é exemplo do dilaceramento da alegoria moderna.

Em Borges temos a história dos símbolos e seus usos. Desconstrução cultural e uso produtivo do imaginário como registro de modelos de concessão de sentido ao mundo, da imaginação como atividade analítica e registro de transcodificações. São exercícios de melhoramento do passado. Novas relações com ele podem ser estabelecidas em momentos posteriores a ele. Essa é uma das características das sentenças narrativas, a dupla temporalidade constitutiva das frases produzidas sobre o passado. Danto e Rüsen sabem como isso funciona.

No ensaio encontramos teorias sobre a relação entre história e ficção a partir dos estudos sobre os relatos dos descobrimentos. Eles provocaram uma crise historiográfica. A América é representada como começo ou fim. A primeira narrativa da América tenta explicar em termos medievais o novo mundo: literatura de cavalaria modela a relação com a gente e o meio. As crônicas influenciam a produção da consciência americana como crise. A ficção do século XIX funcionou primeiramente como análise da realidade americana. Mais tarde o modernismo usou-a como referência de crítica dessa mesma realidade. No primeiro momento um distanciamento do mito, no segundo, reaproximação. O que une todos esses momentos e modelos é a comunidade (interdiscurso e dialogismo) daqueles que se consideravam aptos para produzir enunciados sobre a especificidade americana com função consoladora: conquista, desterro, subordinação colonial e escravidão geraram música, literatura, escultura como remédios contra a dor e o caos. Com receitas de hibridização, transculturação e heterogeneidade produziram esforços de comunicação intercultural que não deixaram de lado o registro do caráter conflitivo e contraditório da experiência americana.

O ensaio americano do século vinte possuía a vantagem do atraso. Substituiu as ciências humanas com brilho, inovação e sucesso internacional. Comparou culturas enfrentando a ameaça etnocêntrica. No ensaio a expressão estética se casou com o esforço teórico. Explicação conceitual e reflexão sobre estratégias andaram juntas da crítica das zonas de pureza e da valorização das trocas e relações, condição das culturas humanas. Ímpetus de renovação da linguagem conviveram com desejos de participação nos mundos impuros. Os ensaístas exercitaram a busca rebelde, poética da plenitude do ser, projetaram seus desejos utópicos, se auto elegeram porta-vozes mas perceberam interstícios exatamente por onde faziam penetrar esse sonho de integração.

O ensaio alia o rigor e a seriedade da crítica à liberdade inventiva da criação. É gênero perigoso. Em primeiro lugar a função simpático-mitificante da

narrativa de fluidez conceitual. Em segundo lugar, a retórica professoral: iluminação mais que Iluminismo. É como teórico da história que me ponho a questão da produção ou da relação com o passado na literatura. Como não eliminar a pesquisa da verdade e incorporar à teoria da história padrões de relação com o passado desenvolvidos pela ficção. Um exemplo: reconstrução e tipificação sintética, identificação intuitiva, não estar de todo em qualquer das estruturas: ver o que ainda não sabemos ver, um coração alheio ao nosso, o verdadeiro fantástico. Nessa fórmula que resume as técnicas de escrita de Cortázar há indicações para uma teoria da história.

A força do ensaio é a sua diversidade. Temos teoria da fronteira em todas as suas versões: extremo-Occidente (Fuentes), o fantástico como o lugar do outro e como fronteira da mente, realidade e irrealidade, história e mito sobrepostos (Cortázar, Asturias, García Márquez), o barroco, a arte da contra-conquista (Lezama Lima, Sarduy, Carpentier, Campos), função de síntese como ponto de partida: improviso mestiço e audácia universalista de quem salta etapas e duvida de modelos fixos de temporalidade (Reyes, Borges), o lugar da matéria indecisa e das metáforas espaciais do tempo (Borges), o sertão, outro interior (Rosa), experiência de formação como perda e reconquista (Holanda), o entre-lugar (Santiago e o pós-colonial), o lugar da solidão e da busca do outro (Paz), heterogeneidade (Polar), transculturalidade (Ortiz, Rama), miscigenação (Freyre), o lugar das tentativas e das escolhas: a América como problema (o novo mundo) que desafia mentes de homens-ensaio a produzirem interpretações sobre a incerteza e a contradição (Arciniegas). O lugar a partir do qual projetos de integração são formulados. Soluções de convivência marcadas por uma historicidade que assume e enfrenta a fragmentação. A experiência das simultaneidades permitindo enxergá-las. Valorização do instante como multiplicidade presente. Totalidades pleiteadas, sonhos de realidades inteiras: utopias (Julio Ortega).

Em Borges, a teoria da fronteira é o resultado de uma investigação sobre as matérias indecisas. Os homens são sonhos de outros homens. Trata-se de sonhar um homem e o impor à realidade sabendo-se que aquele que sonha já foi o sonho (ou pesadelo) de outro sonhador. Os homens são restos de restos. Nenhuma decisão é final: todas se ramificam. Reina o princípio da incerteza. O problema com os gregos é que eles não conheciam a incerteza (Las ruinas circulares). Historiadores também tem problemas com ela. Por isso seus relatos estão carregados de ficção, não podem narrar a monotonia; ela é misteriosa. Livros são mentiras indiretas: estão cheios de omissões e interpolações, são incorreções publicadas. Variam, como tudo. Jogo e loteria estão nas minúsculas coisas. Nelas estão escondidas esplendores e atrocidades. Não se pode corrigir o acaso mas para salvar a esperança é necessário buscar suas leis labirínticas, dedicar-se à investigação das esferas giratórias que o revelam (La lotería en Babilonia). Essa pesquisa produz escrita.

Os historiadores tem um problema com o tempo: esquecem que ele não é história. Regressividade é apenas uma das formas do tempo. Seria produtivo imaginá-lo como inversão; recordar o futuro e ignorar ou prescindir do passado. Ou então assumir completamente o presente: abrir-se ao rigor e à solidão. Saber que no presente se esconde o que fomos e o que seremos (Sobre Oscar Wilde\Otras inquisiciones). Ou então assumir a continuidade, o tempo absoluto e uniforme, labirinto infatigável, caos e sonho (Nueva refutación del tiempo\Otras inquisiciones) História não pode ser sucessão de fatos mas sim o campo para a busca de argumentos (Examen de la obra de Herbert Quain\Ficciones). Só há história como saber da solidariedade do gênero humano. É melhor falar das excelências alheias que das próprias: estranhamento contra o olhar habitado, datas escondidas versus feriados nacionais. A história do mundo deve ser entendida como livro no qual um ponto tem a mesma importância de um capítulo, são criações, artificialidades (Del culto de los libros\Otras inquisiciones). História é o reino das singularidades: não importa a identidade ou a pluralidade. Isso fica claro na história da literatura; um escritor cria seus precursores (Kafka e seus precursores\Otras inquisiciones). Fato importante não é o dia em que algo foi dito mas sim o momento do registro dessa expressão. Ela registra um gosto, uma forma de intuir a realidade, uma fabulação. Fazer a história das relações e das traduções ao invés da simulação localista e objetiva (El pudor de la historia\Otras inquisiciones). História é o saber das complexidades e variações do mal e do infortúnio (Tres versiones de Judas). Os homens matam as coisas que amam (Sobre Oscar Wilde\Otras inquisiciones). O problema do positivista é que ele não pensa, não generaliza: escravo do detalhe, não se distrai do mundo; ele tem de colar-se nele, como Funes o homem-memória. O método da imaginação, a produção da eternidade pela via da memória explora o saber da diferença entre pretensão e realidade, é medida anti-dogmática. Condição da arte é a irrealidade (El milagro secreto). A luta emocionante contra o esquecimento (o contato com o distante) é tão importante que não pode se limitar ao relato da sucessão dos fatos. O sentimento está mais próximo dos odores e dos gostos porque esses são os sentidos que estão rodeados de abismos de esquecimento. Feita com paixão a história é maravilhosa. É o campo onde idéias ganharam forma. O procedimento de Borges é formista (Sobre Chesterton\Otras inquisiciones). Um tipo barroco: platonismo e alegoria, empresa nominalista que abre (ao invés de representar) o real.

V

A idéia de fronteira como contato (o próprio ensaio é o resultado de exercícios nesse entre-lugar) dos ensaístas produziu um conceito expandido de experiência

histórica. A rejeição dos dogmas do engajamento partidário e dos realismos de representação aliada ao projeto de pesquisa formal e enriquecimento da noção de realidade propiciou a superação de um falso dilema entre contextualização e sublimação da leitura do passado. A abertura para os mitos, o trato de mestres em narrativa com o passado, uma nova noção de compromisso produziram uma filosofia da história americana que torna fértil a aproximação da história com a literatura, amplia a consciência histórica a partir das margens do Ocidente e que multiplica os recursos da teoria da história. O ensaio registra uma modalidade (um tipo) de experiência histórica: a partir de um contexto (o extremo-Ocidente), da invenção de um método (diálogo com o mito) e exercitado por sujeitos especiais (literatos com radical interesse em identificação e atualização) os ensaístas formularam o que hoje se chama (Ankersmit) experiência histórica sublime. A partir de exercícios experimentais com a linguagem, ampliaram os conceitos de experiência e de consciência históricas: "...a outridade é antes de mais nada a percepção de que somos outros sem deixar de ser o que somos e que, sem deixar de estar onde estamos, nosso verdadeiro ser está em outra parte." (Signos em Rotação: 107) Experiência feita do tecido dos atos diários (religião, poesia, amor e outras experiências afins). Nas fases e vertentes do historicismo americano (registrado no ensaio do século XX) encontramos um conceito de experiência adequado ao programa da comunicação intercultural.

Esta é uma versão vanguardista da hermenêutica sustentada pela hipótese da coincidência entre memória e experiência autêntica. Os ensaístas exploraram tal região de contato e conflito: ao reconstruir o passado com a ajuda do mito, ao assumir os riscos da alteração da experiência pela linguagem e principalmente ao construir um programa de tomada de consciência. A época do ensaio americano é o conjunto desses experimentos. É uma idade de formulações tardo-idealistas. Uma forma específica de experimentar o mundo, lhe dar um nome e assim, conhecê-lo. Essa forma tem atualidade, pois desenvolveu conceitos e técnicas de comunicação intercultural. Filosofias da história americana são subprodutos desse programa. O sucesso da literatura latino-americana é a sua mais visível expressão. A tensão entre mito e história no ensaio latino-americano é o antídoto contra os dualismos e as totalizações. Procuo as idéias de história que esse empreendimento produziu no ensaio de criação literária, a sua forma ilustre: ao mesmo tempo invenção, teoria e poema.

Toda comparação precisa de um parâmetro organizador que delimite que domínio observar e em qual perspectiva os aspectos individuais observados serão comparados. Um ponto de vista que permita localizar o que é comum e o que é diferente no campo da historiografia e do pensamento histórico, um tratamento delicado do domínio das identidades culturais e das lutas por poder e domínio nele encaminhadas. A sensibilidade para identificar estratégias de dominação e resistência é o que está em jogo. Mas há também a questão teóri-

ca dos condicionamentos impostos pela cultura de quem encaminha a comparação. Aquele que encaminha a comparação de pensamentos históricos e escritas da história já parte de suas próprias representações do que sejam tais coisas. Instala-se um meta-status, um modelo a partir do qual os fenômenos culturais são tratados, uma norma que mede proximidades e distâncias. Elementos ficcionais ou poéticos devem ser entendidos como constitutivos do tratamento do passado ou como seus inimigos? Qual a importância da escrita?

Trata-se de uma modalidade latino-americana de política identitária. Forma de expressão literária e crítica testemunhal: auto-definição e auto-problematização que produziu conceitos (transculturização, formação, hibridismo, heterogeneidade, etc.) que dão voz a sujeitos de enunciação até então subalternizados e alteram – pela via da valorização da multicentralidade da criação artística, política e científica – os programas de investigação e ação do pensamento americano. O cuidado com tendências relativistas, reducionismos sociológicos, estetizantes ou formalistas deve ser a marca de uma postura historicista radical, que resgate e mantenha o programa reflexivo (historização dos sujeitos de conhecimento), compreensivo (ainda a busca dos sentidos das ações), comparativista (postura relacional) e conceitual (interpretação como ação científica) do projeto das ciências humanas.

Bibliografia

- ABELLÁN, José (1987): “La guerra civil como categoría cultural”, em: *Cuadernos Hispanoamericanos*. 56, XXIX. Madrid, pp. 43-56.
- AL-AZM, Sadik (2005): *Islam und säkularer Humanismus*. Tübingen: JCB Mohr.
- ANDERSON, Benedict (1987): *Imagined Communities*. London: Verso.
- APIAH, Anthony (2006): *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers*. New York: Norton.
- ARCINIEGAS, German (1993): *América Ladina*. México: FCE.
- BARILI, Amélia (1999): *Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes: La cuestión de la identidad del escritor latinoamericano*. México: FCE.
- BARTH, Frederik (1970): *Ethnic Groups and Boundaries*. Oslo: Forlaget.
- BERVEILLER, Michel (1973): *Le Cosmopolitisme de Jorge Luis Borges*. Paris: Didier.
- BEVIR, Mark (1999): *The Logic of the History of Ideas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BLUMENBERG, Hans (1997): *Shipwreck with Spectator. Paradigm of a Metaphor for Existence*. Cambridge: MIT.
- BORDA, Juan (1990): *Una Visión de América: La obra de German Arciniegas*. Bogotá: ICC.
- BORGES, Jorge Luis (2005): *Otras inquisiciones*. Madrid: Alianza.
- (2004): *Historia de la eternidad*. Madrid: Alianza.

- BOSSART, William (2003): *Borges and Philosophy*. New York: Peter Lang.
- BUDDE, Gunilla/CONRAD, Sebastian/JANZ, Oliver (2006): *Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- CHATERJEE, Partha (1993): *The Nation and its Fragments*. Princeton: Princeton University Press.
- CONGRESO DE COOPERACIÓN INTELECTUAL (ed.) (1954): *Idea de Europa, Idea de América*. Madrid: ECH.
- ECHEVARRÍA, Roberto (2004): *Alejo Carpentier: el peregrino en su patria*. Madrid: Gredos.
- (1998): *Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana*. México: FCE.
- FLORES, Ociel (1996): *Octavio Paz: poétique et philosophie* (Doctorat). Paris: Sorbonne.
- GLISSANT, Edouard (1996): *Caribbean Discourse*. Charlottesville: University Press of Virginia.
- GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis (1996): *Teoría del ensayo*. México: UNAM.
- GONZALEZ, José (1998): *Borges and the Politics of Form*. New York: Garland.
- GOYTISOLO, Juan (1977): *Disidencias*. Barcelona: Seix Barral.
- HARO, Pedro (2004): *Barroco*. Madrid: Verbum.
- HARRIS, Wilson (1999): *Selected Essays of Wilson Harris*. New York: Routledge.
- HATZFELD, Helmut (1966): *Estudios sobre el Barroco*. Madrid: Gredos.
- HOUVENAGHEL, Eugenia (2003): *Alfonso Reyes y la Historia de América*. México: FCE.
- LÓPEZ-BARALT, Mercedes (2005): *Para decir al Otro: literatura y antropología en nuestra América*. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana.
- KUSHIGIAN, Julia (1984): *Three Versions of Orientalism in Contemporary Latin American Literature: Borges, Sarduy and Paz* (Ph.D. Thesis). Yale University.
- MARICHAL, Juan (2002): *El designio de Unamuno*. Madrid: Taurus.
- MEDIN, Tzvi (1994): *Ortega y Gasset en la Cultura Hispanoamericana*. México: FCE.
- MOULIN-CIVIL, Françoise (1994): *Formes et significations du néo-baroque dans le roman cuban contemporain* (Doctorat). Paris: Sorbonne.
- ORTEGA Y GASSET, José (1969): *El Espectador*. Madrid: Salvat.
- OSTERHAMMEL, Jürgen/LOTH, Wilfred (2000): *Internationale Geschichte: Themen – Ergebnisse – Aussichten*. München: Oldenbourg.
- PADRÓN, Francisco (1980): “La Imagen de Hispanoamérica en la España de los siglos XIX y XX”, em: *Estudios Latinoamericanos*, vol. 6, pp. 199-236.
- PARKER, Alexander (1991): *La imaginación y el arte de Calderón*. Madrid: Cátedra.
- PAZ, Octavio (1969): *Conjunciones y disyunciones*. México: Joaquín Mortiz.
- (2002): *Memorias y palabras*. Barcelona: Seix Barral.
- (2004a): *El arco y la lira*. México: FCE.
- (2004b): *El laberinto de la soledad*. Madrid: Cátedra.
- RÜSEN, Jörn (1990): *Zeit und Sinn. Strategien historischen Denkens*. Frankfurt: Fischer Taschenbuch.
- RUBIERA, Fernando (1992): *América y la dignidad del hombre*. Madrid: Mapfre.
- RÜSEN, Jörn (1993): “The development of narrative competence in historical learning: an ontogenetical hypothesis concerning moral consciousness”, em: Rüsen, Jörn: *Studies in Metahistory*. Pretoria: UCC, pp. 63-84

- (1998): *Die Vielfalt der Kulturen*. Frankfurt: Suhrkamp.
- (1999): *Westliches Geschichtsdenken – eine interkulturelle Debatte*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- (2001): *Zerbrechende Zeit. Über den Sinn der Geschichte*. Köln: Böhlau.
- (2002a): *Geschichte im Kulturprozess*. Köln: Böhlau.
- (2002b): *Kann gestern besser werden?* Berlin: Kadmos.
- (2004): “How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the 21st Century”, em: *Taiwan Journal of East Asian Studies*, 1/1, pp. 59-74.
- (2006a): *Kultur macht Sinn*. Köln: Böhlau.
- (2006b): “Der Funke der Utopie im Feuer der Geschichte”, em: Hofmann, Michael/Rüsen, Jörn/Springer, Mirjam (eds.): *Schiller und die Geschichte*. München: Wilhelm Fink, pp. 145-163.
- RÜSEN, Jörn/OEXLE, Otto (1996): *Historismus in den Kulturwissenschaften*. Köln: Böhlau.
- SAID, Edward (2006): *Humanismo y crítica democrática*. Barcelona: Debate.
- SCHWARTZ, Jorge (2006): *Las vanguardias latinoamericanas*. México: FCE.
- SKIRIUS, John (2004): *El ensayo hispanoamericano del siglo XX*. México: FCE.
- STEINMANN, Horst/SCHERER, Andreas (2001): *Zwischen Universalismus und Relativismus*. Frankfurt: Suhrkamp.
- SRUBAR, Ilja/RENN, Joachim/WENZEL, Ulrich (2005): *Kulturen vergleichen*. Wiesbaden: VS Verlag.
- UNAMUNO, Miguel de (2000): *En torno al casticismo*. Madrid: Alianza.
- (2002): *Niebla*. Madrid: Alianza.
- WEBB, Barbara (1992): *Myth and History in Caribbean Fiction*. Amherst: University of Massachusetts Press.
- YOUNG, Robert (2002): *Postcolonialism, an Historical Introduction*. Oxford: Blackwell.
- ZEA, Leopoldo (1991): *El descubrimiento de América y su impacto en la historia*. México: FCE.
- ZEPP, Susanne (2003): *Jorge Luis Borges und die Skepsis*. Stuttgart: Franz Steiner.

Miguel A. García

Las músicas de Tierra del Fuego en su versión (etno)musicológica

Una doble invención

A lo largo de 70 años se constituyó, de manera coherente y progresiva, un saber particular en el área de la etnomusicología sobre las músicas de los aborígenes selknam, yagan y alakaluf de Tierra del Fuego. Los hechos que desencadenaron su constitución fueron las grabaciones de cantos de los mencionados pueblos efectuadas por los investigadores Charles Wellington Furlong, Martin Gusinde y Wilhem Koppers entre 1907 y 1923.¹ A partir de la realización de esas grabaciones, dicho saber se fue entretejiendo entre los estudiosos que las analizaron hasta mediados de la década del 70. Puede decirse que la conformación de ese saber tuvo dos momentos: uno en el cual se fijaron las expresiones musicales y otro en el que se estudiaron. Este último se caracterizó por el empleo de la transcripción musical y otras formas de representación, y por la emergencia de una serie de especulaciones referidas a sus cualidades sonoras y, en menor medida, a las funciones que supuestamente cumplían esas músicas en la vida de sus creadores.

El primer momento estuvo signado por la tecnología de grabación, es decir, por el empleo del fonógrafo y los cilindros de cera sobre los cuales quedaron impresas las señales sonoras. El fonógrafo era un dispositivo rígido, poco sensible a los deseos inmediatos del colector, en especial debido a la limitación del tiempo de grabación –aproximadamente 3 minutos– y a su restringido ángulo de captación. Sin embargo, el colector podía decir dónde, qué y a quién grabar además de determinar cuándo empezar y terminar un registro. En este sentido, el fonógrafo no era un dispositivo inmune a las orientaciones estéticas, teóricas e ideológicas del colector. Quizás su principal novedad residía en que permitía fijar o congelar una de muchas manifestaciones posibles de una expresión sonora para ser transcrita y/o analizada por un estudioso diferente al colector, además de habilitar su almacenamiento y edición. Puede expresarse que venía

¹ También los colectores registraron unas pocas expresiones verbales.

a ofrecer por primera vez un reemplazo mecánico de la función conjunta del oído y la memoria que podía ser activada por otro sujeto a miles de kilómetros de distancia, una especie de enajenación fisiológica que facultaba la enajenación de una expresión oral sin tener que abandonar la familiaridad de la cultura del analista. Al menos para algunos de sus usuarios, el fonógrafo generaba la ilusión de una reproducción transparente y encarnaba un peldaño más en el derrotero del progreso tecnológico que hacía factible una nueva forma de contacto entre culturas, es decir, una nueva manera de alimentar el imaginario sobre el mundo exótico mediante la captación o dominación de la otredad. Hoy sabemos que el fonógrafo patentado por Thomas Alva Edison en 1878, en tanto dispositivo creado en un ambiente tecnológico, acústico y estético signado por una ideología del progreso y la complejidad, al ser aplicado a otros ambientes se convirtió en una tecnología de la “traducción cultural”, un artilugio de domesticación estética de las músicas de los pueblos que habitaban geografías consideradas “remotas”. Asimismo, fue funcional a un cientificismo indiferente a las atrocidades del colonialismo que celebraba su uso antes de que desaparecieran las manifestaciones musicales y con ellas los pueblos que las habían creado. En el comienzo de uno de los artículos de Erich von Hornbostel, el musicólogo alemán que más contribuyó al estudio de las manifestaciones musicales fueguinas, puede traslucirse esa ideología cientificista:

Como parte esencial de las culturas indígenas más primitivas, la música de los fueguinos merece un interés particular. Teniendo en cuenta la desaparición, espantosamente veloz, de estas tribus en particular, podemos sentirnos doblemente agradecidos por el hecho de que perspicaces estudiosos hayan podido realizar grabaciones fonográficas de canciones fueguinas a último momento, poniendo así a disposición de la investigación científica material completamente confiable [...] (1948: 62).²

El segundo momento de constitución del saber sobre las músicas de los fueguinos³ fue obra del discurso científico, más específicamente, de la etnomusicología.⁴ Mediante el discurso, esta disciplina instituyó su objeto de cono-

² “As an essential part of the most primitive Indian cultures the music of the Fuegians can claim particular interest. Considering the terrifyingly swift disappearance of just these tribes we may be doubly grateful for the fact that the last moment clear sighted scholars have taken able to take phonographic records of Fuegians songs, thus placing completely trustworthy material at the disposal of scientific research [...]” (Hornbostel 1948: 62).

³ El uso de este término no implica ningún tipo de homogeneización de los distintos pueblos que habitaban en el área.

⁴ Quienes analizaron las músicas grabadas por Furlong, Gusinde y Koppers se enrolaron dentro de una disciplina conocida en distintos momentos y en diferentes instituciones

cimiento, creó la ilusión de una transparencia total entre la información que brindaba y una supuesta realidad externa al sujeto y generó y consolidó una comunidad de interés en torno a su objeto y a un conjunto de principios de legitimación. Uno de los pensadores que mejor retrató esta capacidad del discurso fue Michel Foucault, quien en su *Arqueología del saber* (2002) postuló que “el discurso es otra cosa distinta del lugar al que vienen a depositarse y superponerse, como en una simple superficie de inscripción, unos objetos insaturados de antemano” (60), resaltando así su poder para crear objetos de conocimiento. Extrapolando la perspectiva que empleó este autor para explicar la emergencia de la locura mediante las formaciones discursivas de la medicina, puede sostenerse que la música de los fueguinos “ha estado constituida por el conjunto de lo que ha sido dicho en el grupo de los enunciados que la nombraban, la recortaban, la describían, la explicaban, contaban sus desarrollos, indicaban sus diversas correlaciones, la juzgaban...” (2002: 47). Es decir, las manifestaciones discursivas que emanaron de quienes estudiaron las expresiones musicales en cuestión tuvieron fundamentalmente un carácter constituyente de esas expresiones. Otra manera de retratar la impronta instituyente del discurso científico es citar una breve aunque contundente aseveración de Boaventura de Sousa Santos: “cada método es un lenguaje y la realidad responde en la lengua en que es preguntada” (2009: 49); o para ponerlo en términos un tanto extremos podemos recurrir a la sentencia de Michel Maffesoli, quien al fustigar las bases del racionalismo expresó que “la contemplación del mundo es una forma de creación” (1997: 18). Digamos que el discurso científico se reproduce en diálogo con un método que interroga o “contempla” la realidad para “crear” un saber que hoy ha encontrado formas multimediáticas de reproducción, tales como escritos académicos, conferencias, mapas, fotografías, transcripciones musicales, imaginarios sociales, charlas de pasillos, mensajes electrónicos y otros escenarios orales, escritos y cibernéticos.

Como expresé en otro trabajo (García 2011a), los estudiosos que se interesaron por la cultura y la música de los pueblos de Tierra del Fuego crearon mediante sus prácticas discursivas un conjunto de imágenes estereotipadas de los fueguinos que emanaban de una fuerza surgida del poder de la ciencia que sometía, juzgaba, estudiaba e ilustraba; la misma fuerza había sido empleada por la literatura y la ciencia europea para crear Oriente y al oriental (Said 2004). La imagen que impregnó la conformación del saber sobre la cultura de

como “musicología”, “musicología comparada” o “etnomusicología”. Para no confundir al lector poco familiarizado con la historia de la disciplina utilizo en todos los casos el último término por ser el más empleado en la actualidad.

los fueguinos y su hábitat fue la del “último confin”, testificada en obras como las del misionero inglés Tomás Bridges (1998) y su hijo, Esteban Lucas Bridges (1948); una estampa que retrataba un *locus* en el cual se ubicaba y “confinaba” a los representantes “más primitivos” de la humanidad.

En síntesis puede alegarse que tanto las eventuales ejecuciones de los cantos inscriptas en los cilindros de cera como los escritos de quienes intentaron describir y juzgar esas músicas, fueron una invención⁵ conjunta del fonógrafo y el discurso etnomusicológico. Pero antes de la invención etnomusicológica, esas músicas tuvieron una primera invención por parte de los selknam, yagan y alakaluf, de la cual los cilindros sólo nos proveen un esbozo inerte. Por lo tanto parece más adecuado referirse al resultado de la acción del fonógrafo y el discurso como una reinversión⁶ o segunda invención. Los cantos producidos mediante la primera invención vivieron en estado oral, seguramente sujetos al juego de las transformaciones y las permanencias de sus parámetros sonoros, hasta que detuvieron su proceso vital pocos años después de ser registrados, cuando sus creadores desaparecieron por obra de la crueldad de los colonos blancos materializada en persecuciones, humillaciones, asesinatos y expoliaciones. La reinversión fue obra del interés científico, o mejor dicho del discurso científico que almacenó, dismanteló y disecó la música fueguina convirtiéndola en objeto de investigación. En este sentido, la música parece haber corrido la misma suerte que sus primeros y auténticos creadores, subsumida en una empresa de impronta colonialista.

En lo que sigue del escrito procuro reflexionar de manera tentativa, y apegada a la perspectiva someramente reseñada, sobre la reinversión o segunda invención de las músicas de los habitantes de Tierra del Fuego. El propósito es efectuar un recorrido por el inventario de los discursos dirigidos hacia esas músicas y señalar los tópicos que en ellos se fueron generando.⁷ En esta oportunidad me circunscribo a discurrir sobre los discursos etnomusicológicos referidos a las tres colecciones de cilindros mencionadas, aquellos expresados en los escritos de Erich von Hornbostel, Jorge Novati, Alan Lomax y Gilbert Rouget.⁸

⁵ En todos los casos empleo los términos “invención” y “creación” como sinónimos.

⁶ La idea de “reinversión” no es nueva dentro de las ciencias sociales. Su utilización por parte de numerosos estudiosos ha intentado dar cuenta especialmente de procesos culturales que han procurado “revivir” expresiones en desuso. En este trabajo, como se aprecia, el empleo del término es bastante diferente.

⁷ Las ideas expresadas en este artículo surgen en el marco de una beca otorgada por la Fundación Alexander von Humboldt y la Fundación Thyssen.

⁸ En otro trabajo me he referido a los discursos de misioneros, viajeros y militares referidos a estas músicas (García 2011a).

Los colectores y las colecciones

Como se expresó, los registros sonoros fueron efectuados por los investigadores Charles Wellington Furlong, Martin Gusinde y Wilhelm Koppers. Furlong (1874, Cambridge, Massachusetts-1967, Hanover, New Hampshire)⁹ grabó en Tierra del Fuego, entre los años 1907 y 1908, cantos y locuciones verbales de aborígenes selknam (ona) y yagan con un fonógrafo Edison y 13 cilindros de cera. Los registros sonoros fueron tomados en los sitios conocidos como Lauwi¹⁰, Najmish¹¹, Puerto Harberton, Punta Arenas, Río del Fuego y Río Douglas. La colección incluye además de varios cantos, una “Confesión de fe” y otras plegarias de la Iglesia anglicana en idioma yagan pronunciadas por dos misioneros ingleses, llamados James Lewis y John Williams. Furlong envió copias de los cilindros al Archivo de Fonogramas de Berlín (Staatliche Museen zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz; Ethnologisches Museum, Berliner Phonogramm-Archiv) y, a partir de 1909, hasta los últimos años de su vida, mantuvo un contacto regular con los etnomusicólogos berlineses Carl Stumpf, Erich von Hornbostel, Dieter Christensen y Kurt Reinhard. La correspondencia con estos estudiosos da cuenta tanto del interés de Furlong por proveer datos etnográficos y lingüísticos que pudieran enriquecer el estudio propiamente musicológico, como de su deseo por conocer y divulgar los resultados de esos análisis entre las comunidades científicas norteamericana y europea. Asimismo, el contenido de sus cartas pone en evidencia el cuidado que dedicó a que sus grabaciones tuvieran una calidad sonora acorde a sus exigencias auditivas. Sus registros fueron estudiados por Eric von Hornbostel, quien se refirió a ellos en tres de sus trabajos: *Melodie und Skala* (1913), *Fuegian Songs* (1936) y *The Music of Fuegians* (1948). Posteriormente, también se interesaron por las grabaciones de Furlong otros etnomusicólogos, tales como Jorge Novati (1969-1970) y Alan Lomax (en Chapman 1972).

Martin Gusinde (1886, Breslau, Silesia-1969, St. Gabriel, Viena) fue etnólogo y misionero de la congregación religiosa “Societas Verbi Divini”. A partir de 1918 llevó a cabo cuatro expediciones a Tierra del Fuego.¹² Entre las varias publicaciones a través de las cuales difundió los resultados de sus estudios con

⁹ Además de explorador y etnólogo fue militar, escritor, pintor y docente. Sus intereses lo llevaron no sólo a Tierra del Fuego sino también a la Patagonia y a distintas regiones de África y América Central.

¹⁰ De acuerdo con la información del colector provista al Archivo de Fonogramas, era un sitio de asentamiento yagan sobre el Canal del Beagle cuya traducción es “Piedra Grande”.

¹¹ Según el colector, el sitio era conocido por la familia del misionero Tomás Bridges también con el nombre de Viamonte.

¹² También efectuó viajes de investigación a África y Papúa Nueva Guinea.

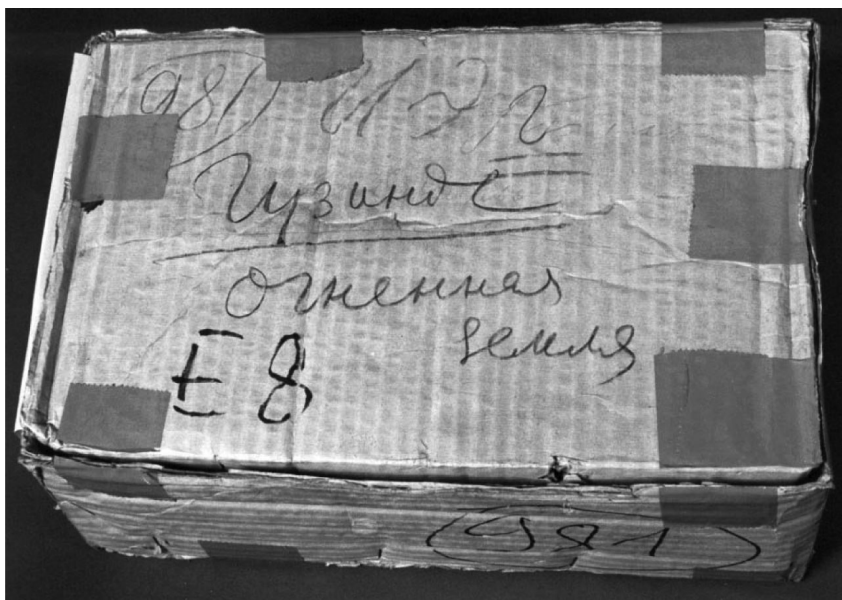
los habitantes fueguinos se destacan los 4 tomos de su *Die Feurland-Indianer* (1931-1939), editados en Viena, monumental obra que fue traducida y reeditada en Argentina en 1982 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Entre el 5 de marzo y el 12 de diciembre de 1923, en los sitios conocidos como Canal Smith, Mejillones, Muñoz Gamero y Remolino, grabó un vocabulario y diversos cantos de aborígenes alakaluf, selknam y yagan con 30 cilindros de cera. De la misma manera que había procedido Furlong, Gusinde envió los cilindros al Archivo de Fonogramas de Berlín, donde fueron estudiados por Hornbostel (1936 y 1948) y muy brevemente por Marius Schneider (1934). Asimismo, uno de sus registros se incluyó en la obra *Music! The Berlin Phonogramm-Archiv, 1900-2000*, con comentarios a cargo de Richard Haas (2000). En un texto mecanografiado con fecha del 12 de enero de 1925, perteneciente a los fondos documentales del mencionado Archivo, se halla un detalle de las grabaciones de Gusinde en el cual se indican, para cada canto, la denominación en escritura fonética, el tipo de expresión, la procedencia étnica, el nombre del ejecutante, el lugar y la fecha de grabación.

Wilhem Koppers (1886, Menzelen, Niederrhein-1961, Viena) estudió filosofía y teología y, al igual que Martin Gusinde, fue misionero de la congregación religiosa “Societas Verbi Divini”. Acompañó a Gusinde en su tercer viaje a la Isla Grande de Tierra del Fuego, entre diciembre de 1921 y abril de 1922. La narración de las experiencias del viaje apareció publicada en 1924 bajo el título *Unter Feuerland-Indianern. Eine Forschungsreise zu den südlichsten Bewohnern der Erde mit M. Gusinde*. Ambos estudiosos participaron en rituales de iniciación de los yagan. Una colección de 33 cilindros que lleva su nombre –Koppers Feuerland–, unas pocas páginas que detallan la colección y una carta enviada por Koppers a Kurt Reinhard –fechada el 8 de enero de 1953– se hallan en el Archivo de Fonogramas de Berlín. Se trata de cilindros grabados en 1922 con cantos y expresiones verbales de aborígenes alakaluf y yagan. A pesar de que la colección está identificada con su nombre, su condición de único autor es dudosa. La documentación es confusa al respecto ya que en algunos casos deja traslucir que las tomas fueron efectuadas en forma conjunta entre Koppers y Gusinde.¹³

Las tres colecciones de cilindros y sus copias digitales hoy se hallan alojadas en el Archivo de Fonogramas de Berlín.¹⁴ Los colectores enviaron los cilindros a esa institución con fines de preservación y también con el propósito de que fueran analizados con un criterio musicológico. Los estudiosos berli-

¹³ Koppers también efectuó grabaciones en cilindros en India (Ziegler 2006).

¹⁴ Solo se han extraviado 4 cilindros de la colección de Koppers, números 1, 7, 13 y 28 (Ziegler 2006).



Caja número 981 con cilindros Edison. Inscripción en ruso sobre la cubierta: *Gusinde - ognennaja zemlja* (Gusinde-Tierra del Fuego). Fotografía: Dietrich Graf (1994). Staatliche Museen zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz. Ethnologisches Museum, Berliner Phonogramm-Archiv.

neses, ávidos por reunir, clasificar y estudiar la llamada “música exótica” o “música primitiva” cultivada por los pueblos del mundo no-europeo, por ese entonces acogían con beneplácito las grabaciones musicales efectuadas en geografías “remotas” con el propósito de nutrir los fondos documentales que les permitieran especular sobre el origen y la evolución de la música desde una perspectiva que conjugaba equilibradamente las teorías evolucionista y difusionista. El acopio de cilindros se detuvo durante los años de la Segunda Guerra Mundial y poco antes de que Berlín sufriera los últimos bombardeos, los cilindros fueron evacuados del Museo y trasladados a Silesia con la intención de evitar su destrucción. Al finalizar la guerra las 2.000 cajas de cilindros que habían sido despachadas a Silesia quedaron en poder de las fuerzas soviéticas y, poco después, fueron acarreadas a Leningrado. En 1960 los cilindros volvieron a Berlín Oriental quedando al cuidado de Erich Stockmann, del Instituto de Estética y Artes de la Academia de Ciencias. Se sabe que Stockmann sólo abrió e identificó 528 cajas. Por ese entonces se creía que las grabaciones de Tierra del Fuego se habían perdido. Años más tarde, después de la caída del Muro, los cilindros volvieron a Berlín Occidental y, en 1993, en el marco de

un proyecto de catalogación y digitalización, Susanne Ziegler identificó las colecciones de Furlong¹⁵, Gusinde y Koppers. Finalmente, en 1998, se digitalizaron las dos primeras y en 2009 la que lleva el nombre de Koppers.¹⁶ La siguiente imagen muestra una de las cajas transportadas a Leningrado.

La versión (etno)musicológica

Como fue dicho, los colectores no analizaron la música que recogieron en los cilindros. Fue el musicólogo Erich von Hornbostel, director del Archivo de Fonogramas de Berlín entre los años 1905 y 1933, quien realizó los primeros y más detallados análisis de las grabaciones de Tierra del Fuego.¹⁷ En 1913 incluyó en su escrito “Melodie und Skala” un comentario sobre uno de los registros de Furlong. En 1936 publicó en *American Anthropologist* su primer trabajo dedicado con exclusividad a la música de los fueguinos, en el cual anunció la aparición de otra contribución de su autoría, de mayor envergadura, que supuestamente iba a ser incluida en uno de los tomos de la monumental obra de Martin Gusinde, *Die Feuerland Indianer* (1931-1939). Ya desaparecido Hornbostel y debido al hecho de que la publicación del volumen que iba a contener su contribución se demoraba —en realidad nunca llegó a ver la luz—, Gusinde ofreció el manuscrito al editor de *Ethnos* para su publicación en inglés (Hornbostel 1948).¹⁸

El análisis de Hornbostel de las músicas de Tierra del Fuego fue efectuado con exhaustividad, ningún parámetro musical evadió su indagación. Ferviente defensor del método comparativo, se esmeró en buscar similitudes y diferencias entre la música analizada y las músicas de otros pueblos —como los tehuelche, uitoto, yuma y veda—, lo que lo llevó a concluir que los cantos fueguinos formaban parte de un supuesto “estilo indígena americano”. A partir de las transcripciones y del análisis de Hornbostel la música de los fueguinos entró decididamente en el relato de la etnomusicología —o “musicología compara-

¹⁵ Un copia en cinta de la la colección de Furlong fue enviada a Berlín por el Archivo de Música Tradicional de Bloomington (Indiana) en 1964.

¹⁶ Agradezco a Susanne Ziegler, responsable del Phonogramm-Archiv, por haberme brindado toda la información referente a la historia de los cilindros. También expreso mi gratitud a Albrecht Wiedman, de la misma institución, por sus reiterados asesoramientos en cuestiones técnicas.

¹⁷ Como fue expresado, también Marius Schneider (1934) se refirió a la música de los fueguinos, aunque muy escuetamente.

¹⁸ En 1986 una versión alemana de este último trabajo formó parte de una recopilación de los trabajos de Hornbostel realizada por Christian Kaden y Erich Stockmann con el título *Tonart und Ethos* (Hornbostel 1986).

da”, como se la llamaba en esa época—, y al convertirse en objeto de investigación pasó a ser considerada por los estudiosos allegados al Archivo de Berlín como una expresión “fielmente capturada” por el aparato de grabación y la pericia del colector, la cual requería, una vez transportada “inmaculadamente” al “centro de la civilización”, ser almacenada, clasificada y analizada. El primer rótulo que recibió fue el de “música primitiva”, un vocablo que realimentaba el imaginario europeo mediante la representación de un lugar arcaico y primigenio que para los científicos de la época merecía ser dominado, registrado y estudiado.

Posteriormente, a fines de la década del 60, el etnomusicólogo argentino Jorge Novati publicó un análisis de los cantos selknam (1969-1970), empleando grabaciones propias tomadas entre 1967 y 1969, y recurriendo a los registros de Furlong y a las transcripciones que Hornbostel había realizado de las grabaciones de este último y de Gusinde. Novati afirma en su artículo que la totalidad de la música de los selknam está ligada a manifestaciones rituales y que sus cantos y danzas pueden agruparse en conjuntos asociados a distintos rituales y/o seres mitológicos, tales como: canciones referentes a hierofanías celestes, cantos y danzas concernientes a fenómenos atmosféricos, canciones propiciatorias de la caza, cantos vinculados a la muerte, cantos y danzas relacionados con el chamanismo, y cantos para iniciación masculina.¹⁹ A partir del análisis etnomusicológico del corpus reunido, focalizado en cuatro dimensiones denominadas gama sonora, orden rítmico, estructura y forma de externalización, arriba a la siguiente conclusión:

La ausencia de ideas conclusivas en la estructura de los hechos musicales de carácter ritual es consecuencia de tal carácter. Debido a la concepción y actitud valorativa frente a los hechos musicales de carácter sagrado, “lo musical” no se percibe como un hecho sonoro con implicancias estéticas, sino como un continuo fluir que está en función del tiempo en el cual se desarrolla el rito. Al no ser concebida y vivida como manifestación independiente, la música en sí no necesita conclusión: finaliza cuando concluyen los lapsos de tiempo equivalentes dentro de los cuales se desarrolla (1969-1970: 403).

Seguidamente a este testimonio, Novati se adentra aún más en su especulación y argumenta que la ausencia de frases conclusivas explica el motivo por el cual el canto selknam fue calificado como “monótono” por varios observado-

¹⁹ Como expresé en otro trabajo (García 2005), Novati ha dedicado la mayor parte de sus escritos a develar aspectos ontológicos y a interpretar las expresiones musicales como mediadoras entre lo humano y lo sagrado, dando prioridad al análisis del discurso mitológico.

res y estudiosos.²⁰ Esta afirmación parece evitar un razonamiento esencialista al atribuir esa caracterización a las expectativas auditivas de los observadores y no a la música en sí, es decir, a los mandatos estéticos de observadores imbuidos en la cultura europea que decodificaron o percibieron como monótonas las configuraciones sonoras que no concluían de la misma manera que lo hacían las músicas de su medio cultural. Sin embargo, la afirmación de Novati no evita reproducir una lógica de tipo colonialista que define al otro por medio de una carencia, mediante la falta de un atributo en relación con los que posee el sujeto que mira, escucha y analiza: de acuerdo con su análisis los otros, los fueguinos, no tienen intereses estéticos.

Un hecho significativo en la constitución del relato que mediante la descripción etnográfica y el análisis etnomusicológico alojó la música fueguina en el imaginario de la ciencia, fueron las investigaciones de Anne Chapman. Entre sus trabajos se destacan dos que contienen registros sonoros. En 1972 publicó dos LP con 47 cantos y lamentos de los selknam²¹, junto con un estudio etnográfico y el análisis etnomusicológico efectuado por el conocido investigador norteamericano Alan Lomax.²² Cinco años más tarde publicó otros dos LP con 41 cantos del mismo pueblo, pero en esta oportunidad todos pertenecientes al ritual *hain*, acompañados también por información etnográfica (Chapman 1977). Los cantos de ambas publicaciones fueron, en palabras de Chapman, “cantados por la última india verdadera del grupo *selknam*, Lola Kiepja [...] la última shamán de su grupo” (1972: 1).²³ La autora recurrió en las dos obras a las investigaciones de Martin Gusinde para describir el mundo chamánico, los rituales y los mitos de los fueguinos. La mayor información etnomusicológica aparece en la primera publicación a través de referencias a las conclusiones alcanzadas varios años antes por Erich von Hornbostel al estudiar la música grabada por Furlong y Gusinde (1936) y, principalmente, mediante la inclusión de los resultados de la aplicación del método de Alan Lomax, conocido con el nombre de *Cantometrics*²⁴, a un conjunto de grabaciones efectuadas por Furlong. Es sorprendente que el análisis de Lomax fuera hecho sobre los registros tomados por Furlong entre 1907 y 1908 a aborígenes selknam y yagan y no sobre las grabaciones que Chapman había incluido en su publicación. Al res-

²⁰ Ver al respecto García (2011b).

²¹ Estos registros fueron tomados con anterioridad a los realizados por Jorge Novati, aunque su edición fue posterior a la aparición del artículo de este investigador.

²² También provee información sobre el perfil de su informante y sobre las vicisitudes de las sesiones de grabación.

²³ “sung by the last true Indian of the Selknam group, Lola Kiepja [...] the last shaman (medicine-woman) of her group” (Chapman 1972: 1).

²⁴ Ver al respecto Lomax 1968 y 1976.

pecto, Lomax argumentó: “encontramos que los cantos eran tan similares a los que habíamos estudiado en la colección de Furlong que para un primer informe el análisis era innecesario” (en Chapman 1972: 12).²⁵ El propósito del proyecto de Lomax era definir lo que él llamaba el “estilo musical”, lo cual debía efectuarse, según el autor, a partir del estudio comparativo de los cantos de diferentes pueblos. Lomax encontró en el caso fueguino similitudes entre el estilo musical de los selknam y yagan y de otros estilos hallados en las costas del Pacífico de América del Sur y de América del Norte, concluyendo que el estilo del canto fueguino podía ser considerado como un estilo amerindio prototípico –“proto-typical Amerindian type” (12)–. Asimismo, resaltó que

Los perfiles de estilo ona [selknam] y yagan son muy similares el uno con el otro, pero mucho menos con cualquier otra cultura, lo cual indica que el estilo musical fueguino se ha desarrollado durante un tiempo considerable en estado de aislamiento considerable. A excepción de lo que se acaba de decir, el estilo ona guarda una sorprendente similitud con un estilo de canto encontrado entre los pastores de reno y cazadores primitivos de Siberia, todo a lo largo del Círculo Ártico desde los chukchi hasta los lapones del norte de Noruega. Esto es, tal vez, evidencia de su considerable antigüedad (en Chapman 1972: 12).²⁶

También el etnomusicólogo francés Gilbert Rouget, con la colaboración de Jean Schwarz, se refirió al canto de los fueguinos en dos artículos (1970 y 1976).²⁷ En ambos casos su objeto de estudio estuvo constituido por el fragmento de un canto grabado por Anne Chapman en 1966 a la ya mencionada Lola Kiepja.²⁸ Rouget empleó en los dos artículos una perspectiva comparativista contrastando un canto mandinga de Sudán con el canto selknam. En la

²⁵ “We found the songs were so similar to those we had studied in the Furlong set, that analysis was unnecessary for a first statement” (Chapman 1972: 12).

²⁶ “The Ona and Yaghan style profiles are very similar to each other and far less so to any other culture, indicating that the Fuegian musical style has developed for a considerable time in a state of considerable isolation. Otherwise Ona style bears an astonishing similarity to a song style found among the primitive reindeer herders and hunters of Siberia all along the Arctic Circle from the Chukchee to the Lapps of Northern Norway. This is, perhaps, evidence of its considerable antiquity” (Chapman 1972: 12).

²⁷ Si bien los trabajos de Rouget no abordan ninguno de los registros generados por los colectores sobre los cuales se centra este trabajo, es pertinente sumarlos al tema que estoy abordando en estas páginas debido a que efectivamente contribuyeron a la conformación del saber etnomusicológico sobre la música fueguina.

²⁸ La referencia que proporciona Rouget sobre esta fuente es la siguiente: *Indian Chants from Tierra del Fuego*, enreg. d’A. Chapman, Ethnic Folkways (Musée de L’Homme), 2 disquetes à paraître. Disque I, Face B, page 6. El mismo autor en el segundo trabajo que realiza sobre este mismo canto (Rouget 1976) hace referencia a la edición de Chapman consignada en la bibliografía (1972).

primera publicación dedica 33 páginas a analizar y contrastar 5 segundos del canto mandinga con 4 segundos del selknam. Ambas expresiones aparecen representadas mediante gráficos producidos por los dispositivos conocidos como strobocoñ y sonógrafo²⁹, y a través de las habituales transcripciones musical y lingüística. Su estudio se despliega fundamentalmente en dos niveles, uno acústico y otro denominado por el autor como el de la “producción”. De esta manera, al contrastar los segmentos de ambos cantos en el plano acústico arriba a la conclusión que el canto selknam se caracteriza por la uniformidad de las duraciones, la presencia de acentos, la modulación de la intensidad, la fuerte importancia del timbre vocálico y la interdependencia de la altura de la nota con el timbre vocálico, entre otros aspectos. Mientras que el plano de la producción, en la misma expresión se percibe la presencia de un tono glotal elevado, una presión subglotal baja, una laringe elevada, una velar subida, una cavidad faríngea reducida y una cavidad bucal también reducida, entre otros rasgos. En el trabajo de 1976, Rouget y su colaborador establecen un diálogo con Eric von Hornbostel a partir del análisis de 11 segundos del mismo canto, lo cual equivale a una estrofa, representados también mediante un sonograma y sus transcripciones musical y lingüística. El propósito de este segundo texto es fundamentalmente metodológico y discurre sobre problemas de definición de intervalos a partir de las dimensiones acústicas y articulatorias.

Es notable como en ambos escritos Rouget logra desaparecer en la espesura de un análisis técnico, minucioso y en apariencia exhaustivo. Asimismo, resulta sorprendente su pretensión de aportar un conocimiento significativo de la expresión vocal selknam mediante un artilugio metonímico que consiste en analizar unos pocos segundos en representación del todo. Más allá de la discusión sobre la pertinencia metodológica que pueda tener un análisis limitado a un fragmento de segundos y lo inadecuado que esto puede resultar desde el punto de vista de un razonamiento inductivo, en el cual se encuadra la perspectiva de Rouget, parece necesario remarcar la manera en la cual a través de su discurso contribuyó a la conformación de la versión etnomusicológica del canto fueguino. Si hay un término que puede dar cuenta de la imagen particular del canto selknam que Rouget proporcionó al saber etnomusicológico es el de “segmentación”. Se trata de una segmentación de orden tanto metodológico como epistemológico; en otras palabras, los procedimientos y el objeto de análisis son fragmentados al máximo y no parece haber un recurso heurístico

²⁹ El strobocoñ es un aparato que mide la altura de los sonidos y puede reconocer la centésima parte de un semitono (un cent). El sonógrafo es un dispositivo que muestra un resumen del espectro de varios segundos de una señal sonora, dando cuenta de la duración de los sonidos y de los cambios de frecuencia y amplitud.

que al final del camino permita recomponer el objeto desde una perspectiva holística. Podríamos decir con Michel Foucault que el método de Rouget constituye un proceder violento porque en vez de reducir, como operaría un “modelo reducido” levistraussiano (1964), tiende a descomponer de manera irreversible. De forma coherente con este tipo de acercamiento, prácticamente no hay mención en sus artículos a cuestiones que vayan más allá de la dimensión sonora del canto. Obviamente la falta de información sobre aspectos fundamentales de las vidas de sus creadores no fue un olvido, por lo contrario fue un acto deliberado y consecuente con su interés científico deshumanizante.

Tecnicismo y sensibilidad

Como he tratado de poner en evidencia en las páginas anteriores, los etnomusicólogos convirtieron a los cantos selknam en su objeto de conocimiento creando la ilusión una correspondencia nítida entre sus discursos y una supuesta realidad ajena al observador. De esa manera establecieron una comunidad de interés en torno a ese objeto y a un conjunto de principios de legitimación. Es decir, constituyeron un saber mediante discursos que a su vez fueron capaces de contener y orientar otros discursos que progresivamente se iban dirigiendo a un objeto de estudio nunca acabado. Foucault fue muy convincente con respecto a las particulares que adquiere un saber:

Un saber es aquello de lo que se puede hablar en una práctica discursiva que así se encuentra especificada: el dominio constituido por los diferentes objetos que adquirirán o no un estatuto científico [...]; un saber es también el espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata en su discurso [...]; un saber también es el campo de coordinación y subordinación de los enunciados en que los conceptos aparecen, se definen, se aplican y se transforman [...]; en fin, un saber se define por posibilidades de utilización y de apropiación ofrecidas por el discurso [...]. Existen saberes que son independientes de las ciencias [...], pero no existe saber sin práctica discursiva definida; y toda práctica discursiva puede definirse por el saber que forma (2002: 237-238).

Efectivamente, el saber es “el espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata en su discurso”; y entre los etnomusicólogos esas posiciones han sido en algunos casos concordantes y en otros discordantes. Para Hornbostel, Chapman³⁰ y Lomax los factores que

³⁰ Aunque no fue etnomusicóloga, su participación en la constitución de este saber fue muy significativa dado que proveyó el material de análisis de Rouget y en menor medida de Lomax, y contribuyó a la circulación de las conclusiones alcanzadas por Hornbostel.

conferían valor científico a los cantos fueguinos eran su “condición primitiva” y su supuesto “alto grado de aislamiento”. Chapman fue muy elocuente sobre el asunto:

Estos cantos son la expresión de un pueblo que vivía exclusivamente de la caza, la recolección y la pesca, las tradiciones más arcaicas de la humanidad. Un arte de la cultura paleolítica, ellos representan el tipo de música más primitiva conocida (Chapman 1972: 1).³¹

Con el texto de Jorge Novati el saber sobre los cantos fueguinos pareció encaminarse en dos nuevas direcciones. Por un lado, rehusó seguir caracterizando las expresiones selknam como “primitivas”, de esta manera vino a cuestionar la persistencia explícita o implícita en los escritos y en el imaginario de los analistas de una etiqueta eurocéntrica cuya función era validar el estudio de esos cantos: merecen ser estudiados porque son “primitivos”. Por otro lado, si bien Novati continuó alimentando la disposición de la etnomusicología a conferir un papel central a la dimensión sonora, incorporó a su estudio la relación de los cantos con las narraciones míticas y con los rituales. En su trabajo, entonces, confluyeron la preeminencia del análisis musical inaugurada por Hornbostel con la centralidad que le otorgó Martin Gusinde a la religión en la vida de los fueguinos. No obstante, la perspectiva de Novati no dejó de resultar novedosa en la medida en que, al postular que la ausencia de frases conclusivas en el canto estaba en relación con los tiempos del ritual, colocó en el escenario de la etnomusicología de Tierra del Fuego una nueva constitución del objeto, redefinido con mayor información contextual.

Los trabajos de Gilbert Rouget constituyen un caso particular. Mientras que Novati visitó Tierra del Fuego a riesgo de no encontrar con vida a ninguno de los habitantes originarios —en los hechos sólo pudo entrevistar a dos personas mestizas de 75 y 90 años de edad—, Rouget se limitó a analizar un fragmento de un canto selknam a miles de kilómetros de distancia del hábitat de sus creadores y parapetado detrás de una parafernalia tecnológica. En este sentido, el discurso de Rouget fue un discurso doblemente invisibilizante: tanto los selknam como él mismo resultaron disipados o diluidos en una maraña de enunciados técnicos. El artilugio que empleó para que esto ocurriera fue emplazar delante de toda humanidad un tecnicismo que coqueteaba con las ciencias exactas y particularmente con una lingüística que prometía en ese entonces zanjar las diferencias entre un conocimiento subjetivo y otro objetivo

³¹ “These chants are the expression of a people who lived exclusively by hunting, gathering and fishing, the most archaic tradition of mankind. An art of a Paleolithic culture, they represent the most primitive type of music known” (Chapman 1972: 1).

—en este sentido no es un dato menor saber que su segundo artículo formó parte de una publicación en honor a Claude Lévi-Strauss, el padre del estructuralismo francés—.

Como corolario de todo lo expuesto, y a riesgo de reiterar lo que han aseverado insistentemente diversos epistemólogos, cabe subrayar que ningún saber es neutral, desinteresado y libre de valores éticos y estéticos, y menos aún cuando conlleva una mirada transcultural, tal como sucede con el saber etnomusicológico sobre los cantos fueguinos. También vale la pena volver a decir que toda orientación epistemológica está asociada a una posición ideológica explícita o implícita, de lo cual se infiere que los documentos que conforman un saber hablan más de sus autores, de los conceptos que construyen y de “sus” objetos, que de las “cosas” que pretenden representar o describir. En este sentido, mi propio discurso tampoco busca ser indemne a un conjunto de condicionamientos éticos, estéticos e ideológicos, pero sí pretende situar al menos el condicionamiento ideológico en un nivel consciente de la enunciación.³² Si bien el propósito de estas líneas es, a fin de cuentas, develar cómo una cultura retrató a otras que consideraba muy diferentes y en algunos casos “inferiores”, mis condicionamientos ideológicos sesgan la mirada hacia el carácter asimétrico que ha tizado la mayor parte de la constitución de ese saber. Considero que ningún análisis cultural comprometido —o tal vez sólo sea suficiente decir “sensible”— puede desarrollarse a espaldas del hecho de que los habitantes de Tierra del Fuego fueron despojados de sus tierras, de sus prácticas culturales, de sus creencias y finalmente de sus vidas. Ningún análisis debería ignorar esta información por más complejo y desafiante que resulte establecer un nexo necesario entre ella y el análisis particular de la disciplina. La investigación etnomusicológica fue en muchos casos una práctica que acompañó al colonialismo registrando expresiones musicales antes de que desaparecieran sus creadores o marchando a su retaguardia analizando esas manifestaciones una vez que sus creadores habían muerto. El análisis que he hecho de los textos citados muestra que esto se ha efectuado ignorando y haciendo ignorar los contextos culturales, sociales e históricos en los cuales se desarrollaron esas músicas y, lo que es peor aún, lo ha hecho desatendiendo las circunstancias de la desaparición de esos pueblos. Paradójicamente, a pesar de la intención de todo saber consistente en aproximar una parcela de la realidad hacia el sujeto cognoscente, algunos discursos etnomusicológicos parecen habernos colocado a mayor distancia de las culturas fueguinas, y lo han hecho empleando sin disimulo los más sofisticados medios científicos de invención. Parecería como si en los

³² He llevado a cabo el ejercicio de explicitar mis propios condicionamientos estéticos en otro trabajo (García 2011b).

textos etnomusicológicos el discurso técnico fuese la antítesis del discurso sensible, como si a mayor tecnicismo la correspondiese mayor insensibilidad. El desafío es pues para la etnomusicología poner en la misma frecuencia tecnicismo y sensibilidad o, en todo caso, ubicar al primero bajo la vigilancia de la sensibilidad a fin de limitar la deshumanización engendrada por un saber etiquetado como “científico” que en ocasiones suele liberar su narcisismo y hablar sólo de sí y para sí.

Bibliografía

- BRIDGES, Esteban Lucas (1948): *Uttermost Part of the Earth*. London: Hodder y Stoughton.
- BRIDGES, Tomás (1998): *Los indios del último confín. Sus escritos para la South American Missionary Society*. Ushuaia: Zagier y Urruty.
- CHAPMAN, Anne (1972): *Selk'nam (Ona) chants of Tierra del Fuego, Argentina*. Vol. I New York: Folkways Records.
- (1977): *Selk'nam (Ona) chants of Tierra del Fuego, Argentina*. Vol. II. New York: Folkways Records.
- FOUCAULT, Michel (2002): *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- GARCÍA, Miguel A. (2005): *Paisajes sonoros de un mundo coherente. Prácticas musicales y religión en la sociedad wichí*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega.
- (2011a): “Escuchar y escribir. Las músicas de Tierra del Fuego en los relatos de viajeros, misioneros y científicos”, en: Fernández Calvo, Diana (ed.): *Estudios de caso en la musicología actual: diferentes aproximaciones*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes (Colección Música y Ciencia), pp. 141-157.
- (2011b): “Esbozos de la estética musical pilagá”, en: *Trans, Revista Transcultural de Música* 15, < http://www.sibetrans.com/trans/pdf/trans15/trans_15_19_Garcia.pdf > (10.05.2012).
- GUSINDE, Martin (1931-1939): *Die Feuerland Indianer*. Wien: Anthropos.
- (1982): *Los indios de Tierra del Fuego*. Buenos Aires: CAEA.
- HAAS, Richard (2000): “Song from the Youth Initiation”, sung by the Yámana Indian Masemikes Pedro, recorded by Martin Gusinde in Mejillones on Tierra del Fuego, Chile, on March 5, 1923”, en: Simon, Artur/Wegner, Ulrich (eds.): *Music! The Berlin Phonogramm-Archiv 1900-2000*. Berlin: Wergo, pp. 108-110.
- HORNBOSTEL, Erich M. von (1913): “Melodie und Skala”, en: *Jahrbuch der Musikbibliothek Peters* 19, pp. 11-23.
- (1936): “Fuegian Songs”, en: *American Anthropologist* 38, pp. 357-367.
- (1948): “The music of Fuegians”, en: *Ethnos* 13, pp. 61-102.
- (1986): *Tonart und Ethos Herausgegeben von Christian Kaden und Erich Stockmann*. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun.
- KOPPERS, Wilhelm (1924): *Unter Feuerland-Indianern. Eine Forschungsreise zu den südlichsten Bewohnern der Erde mit M. Gusinde*. Stuttgart: Strecker und Schröder.

- LÉVI-STRAUSS, Claude (1964): *El pensamiento salvaje*. México: Fondo de Cultura Económica.
- LOMAX, Alan (1968): *Folk song style and culture*. Washington: American Association for the Advancement of Science.
- (1976): *Cantometrics. An Approach to the Anthropology of Music*. Berkeley: University of California Press.
- MAFFESOLI, Michel (1997): *Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo*. Barcelona: Paidós.
- NOVATI, Jorge (1969-1970): “Las expresiones musicales de los selk’nam”, en: *Runa* XII, pp. 393-406.
- ROUGET, Gilbert (con la colaboración de Jean Schwarz) (1970): “Transcrire ou decrire? Chant soudanais et chant fuegien, in Echanges et Communications”, en: Pouillon, Jean/Maranda, Pierre (eds.): *Mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l’occasion de son 60 anniversaire*, vol. I. Paris/La Haye: Mouton, pp. 677-706.
- (1976): “Chant Fuégien, consonance, mélodie de voyelles”, en: *Revue de Musicologie* 62 (1), pp. 5-24.
- SAID, Edward (2004): *Orientalismo*. Barcelona: Debolsillo.
- SANTOS, Boaventura de Sousa (2009). *Una epistemología del sur*. México: Siglo XXI/Clacso.
- SCHNEIDER, Marius (1934): *Geschichte der Mehrstimmigkeit. Historische und phänomenologische Studien. Erster Teil. Die Naturvölker*. Berlin: Julius Bard Verlag
- ZIEGLER, Susanne (2006): *Die Wachsylinder des Berliner Phonogramm-Archivs. Textdokumentationen und Klangbeispiele*. Berlin: Ethnologisches Museum/Staatliche Museen zu Berlin.

IV. CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Raquel Gil Montero*

Tecnología minera en los siglos XVI-XIX: una perspectiva comparada¹

Introducción

A fines del siglo XVIII el rey de España decidió contratar una comisión de expertos alemanes con el fin de asesorar en temas mineros y metalúrgicos en las colonias americanas, como la mejora en la técnica de la amalgama, la incorporación de nuevos procedimientos de trabajo subterráneo y la resolución de los problemas que presentaba la mina de azogue de Huancavelica. La tecnología alemana era considerada en ese momento como la más avanzada y, en alguna medida, el modelo a seguir. Hasta la llegada de esa comisión, las tecnologías minera y metalúrgica de Europa y de América no se habían desarrollado en forma paralela sino divergente. Lo primero que se destaca en la comparación de estas tecnologías es que mientras que en Europa Central en general -donde la minería se desarrolló en forma significativa en aquellos siglos- se realizaron muchas innovaciones importantes relacionadas con la extracción del mineral y del desagüe de las minas, en las técnicas de fundición no se produjeron cambios muy significativos. Lo contrario ocurría en los virreinos de Nueva España y del Perú, ya que la mayor parte de las innovaciones estaban concentradas en el procesamiento del mineral para separar la plata, procesamiento conocido como “beneficio”, particularmente en mejorar la técnica de la amalgama. La discusión historiográfica latinoamericanista, y en particular la que refiere a la comparación con Europa, se ha centrado mayoritariamente en el desarrollo de la tecnología del beneficio, incluyendo algunos de los aportes locales, como por ejemplo el del uso de las *guayras* (hornos de fundición andinos). La tecnología aplicada dentro de las minas, en cambio, ha sido hasta el momento mucho menos estudiada.

* Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET-UNT).

¹ Algunas de las afirmaciones de este trabajo surgieron de conversaciones con Pablo Cruz y Diego Salazar, y de un trabajo inicial con Jon Mathieu, a quienes les agradezco sus comentarios y aportes. La investigación fue realizada con financiamiento de una beca Thyssen-Humboldt en Alemania y de un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT 2007-00426).

El objetivo central de este trabajo es analizar con detalle este último desarrollo tecnológico menos conocido en los Andes, con énfasis en dos aspectos: la cronología y el aporte local. Este énfasis se basa en dos supuestos: primeramente consideramos que el cambio tecnológico o la aplicación de tecnología no tuvo un desarrollo lineal y que por ello es importante atender la cronología y las coyunturas. Segundo, sabemos que los principales trabajadores fueron los indígenas, muchos de los cuales habían sido anteriormente mineros y otros aprendieron principalmente en Potosí. Este aporte local es muchas veces invisible, aunque importante de distinguir.

El texto se estructura, en parte, en torno a la expedición de los expertos alemanes y a su visión de la minería andina, que sirve como puente entre las dos geografías. Tras un primer apartado que da cuenta de los avances historiográficos más destacados, describimos luego el contexto europeo que entendemos es la fuente de donde abrevaron quienes vinieron a trabajar a América. La situación de la minería andina es analizada a través de dos miradas diferentes: la de los expertos alemanes y la de los mineros locales. En las conclusiones ponemos en conjunto estos debates y avances en la investigación, los caminos sugeridos para analizar el aporte local, y algunas explicaciones del porqué del desarrollo tecnológico divergente.

La historiografía del desarrollo tecnológico

La tecnología aplicada al beneficio de los metales ha sido el centro del interés de la historiografía americanista, que tuvo su auge en las décadas de 1970 y 1980. La tecnología minera, en cambio, se menciona en forma marginal y no ha sido objeto de debate ni de investigación específica, con unas pocas excepciones importantes a las que dedicamos este apartado. El trabajo más completo escrito en torno a este último tema ha sido el de Bakewell (1984a y b, 1986).² Para este autor, las minas potosinas se caracterizaban principalmente por su falta de planificación, característica que se debía a la forma en que se realizaba el trabajo: por lo general las vetas eran atacadas en la superficie, y se las iba siguiendo hacia el interior de la tierra. La Corona, por su parte, nunca promovió una explotación racional, sino la maximización de los beneficios. Las concesiones que se realizaban eran muy limitadas, por lo que derivaron en una multiplicidad de minas pequeñas que tampoco favorecían dicha racionalidad. La abundancia de mano de obra indígena (barata) hacía que fuese más económico sacar el mineral en sus hombros que invertir en tecnología, como,

² Ver también Salazar (2003).

por ejemplo, en la construcción de chimeneas verticales por donde sacar el material con maquinarias, como ocurría en Alemania.

Sin embargo, siempre siguiendo a este autor, hubo algunos avances. El primero de ellos fue la construcción de socavones que permitían ventilar las minas y que facilitaban la extracción del material y del agua. La integración a gran escala de las minas a partir de los socavones fue relativamente frecuente en México pero no en los Andes, por razones que aún no se han determinado. Hubo otros tres adelantos tecnológicos que vale la pena mencionar: el uso de bombas para desaguar minas (copiadas justamente de las ilustraciones de *Re Metallica* de Agricola, libro que consultaban los mineros americanos); el uso de malacates para sacar agua y minerales sobre todo desde fines del siglo XVIII en Nueva España; y, finalmente, el empleo de la pólvora. Esta última comenzó a usarse en Alemania en 1627 y no se sabe con claridad cuando apareció en América, aunque hay evidencias poco claras desde 1637 en Huancavelica, y seguras de su uso en Potosí desde los años 1670.

Entre los factores analizados por Bakewell se encuentra también la organización del trabajo en las minas. La principal mano de obra americana era indígena, aunque había algunos negros libres y esclavos, utilizados sobre todo en la minería de oro y al comienzo también en la de plata. Los mestizos también formaron parte de estos contingentes, sobre todo desde el siglo XVIII, pero cuanto más cerca estaban de los españoles, menos dispuestos estaban a realizar estas tareas. El trabajo forzado se organizó formalmente en los virreinos de Nueva España y del Perú desde los años 1570, aunque existía ya desde antes. El trabajo asalariado creció desde temprano en el sector minero porque demandaba mano de obra especializada.

La bibliografía también destaca la importancia que tuvo la minería como dinamizadora de la economía y de la población (Assadourian 1983), y en la urbanización temprana. En el momento de su apogeo, esto es, entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII, Potosí tenía, según diferentes fuentes, poco mas de 130.000 habitantes, lo que la convertía en el principal mercado de América del Sur.

El desarrollo minero en Europa

Uno de los objetivos propuestos por la Corona al equipo de técnicos alemanes que llegó a fines del siglo XVIII era ayudar a que las galerías de las minas fueran construidas en el futuro con éxito “según las reglas”, así como evitar que en adelante fueran “realizadas a ojo”, según decía el virrey saliente, Francisco Gil de Taboada y Lemos, en un largo informe redactado para su sucesor (Gicklhorn 1963: 75 y 113). ¿Cuáles eran esas reglas? Quisiéramos responder

a esta pregunta dando cuenta de la historia del importante asiento minero de Rammelsberg, en Goslar, en el distrito del Harz de Alemania. En aquel entonces se encontraba en una fase de innovación técnica, que lo convirtió en un exitoso establecimiento en los siglos XIX y XX (Roseneck 2001; Molloy 1986; Daumas 1965: 47-52 y 1968: 562-584).

Dentro del territorio de habla alemana, Rammelsberg era un asiento de tamaño medio, que a comienzos de la era moderna ocupaba a unos 200 trabajadores regulares, a los que se les agregaban unos 50 a 100 ayudantes. La cercana ciudad de Goslar tenía hacia 1800 unos 5.500 habitantes y en 1850, cerca de 10.000 (Roseneck 2001: vol. 1; Livi Bacci 2000).

En el aspecto tecnológico parece ser Rammelsberg un buen representante del promedio regional. Desde el Medievo se desarrolló en conjunto el sistema de galerías con la tecnología del transporte, que tanto en sentido horizontal como vertical se basaba fuertemente en vehículos y elevadores que tenían tracción animal o hidráulica. Concretamente sabemos que, al menos desde comienzos de la era moderna, se utilizaban dos tipos de vehículos en las galerías de las minas para el transporte *horizontal* de minerales: 1) diferentes carretillas, que los trabajadores llevaban a mano desde un punto hasta el siguiente; 2) vagonetas llamadas *Hunte* (“perros”, en alemán) que se empujaban desplazándose en forma fija sobre una especie de carril de madera a partir de una guía que servía para estabilizar el transporte. En ellas se podía aumentar en algo más de un 50% la capacidad de transporte de las carretillas. Agricola dejó constancia de ambos vehículos en los dibujos y textos de su obra clásica sobre la minería, aparecida por primera vez en 1556. Agregó, además, que los trabajadores de las minas ocasionalmente utilizaban pequeños recipientes cargados en los hombros para el transporte del mineral. Según Plinio, el transporte realizado por los hombres habría sido el sistema normal en la antigüedad romana, pero esto no era así a comienzos de la era moderna, como sostenía Agricola: “Nuestros mineros despreciaban esta manera de cargar el material con el fin de extraerlo, porque fatigaba a gran cantidad de gente ya que implicaba mucho trabajo e incrementaba los costos” (1928: 127).

El transporte *vertical* de mineral también dependía de diferentes instrumentos. La forma más frecuente de extraer el mineral era a través de los pozos de extracción, mediante tornos u otros aparatos. La fuerza que impulsaba estos artefactos podía provenir de tres fuentes: 1) trabajo humano, 2) fuerza animal (caballos), 3) impulso por agua. Para las dos últimas formas no solamente se utilizaban sistemas simples de tornos, sino también complicadas “máquinas”, como las llamaba Agricola, fabricadas principalmente de madera. En los primeros siglos de la era moderna se puede ver en Rammelsberg una transición de la tracción animal a la hidráulica. En esa dirección avanzaron otras innovaciones, como la sustitución de las cuerdas de cáñamo que se utilizaban para

los elevadores, por cadenas de hierro resistentes a la tracción. La extracción de mineral representaba un importante factor en los costos y desde comienzos del siglo XVIII se encuentran reflexiones acerca de cómo se podría racionalizar este trabajo en las actas de la administración de la mina. Los cambios sistemáticos llegaron en la segunda mitad del siglo, cuando se incrementó la demanda y se fortaleció el discurso innovador de los economistas ilustrados. En ello desempeñó un importante papel Johann Christoph Roeder, quien provenía de una familia de mineros, y desde 1764 hasta 1810 ocupó un puesto de responsabilidad en Rammelsberg. Bajo su dirección se incrementó el número de pozos de extracción, para disminuir el transporte horizontal en las galerías. Al mismo tiempo, construyó un sistema de ruedas impulsadas por agua, para aumentar la capacidad de elevación. Estas ruedas eran de gran diámetro y desarrollaron una fuerza considerable e, incluso, podían cambiar de dirección de funcionamiento (Roseneck 2001).

Después de los tiempos de Roeder se continuó con la innovación. En los años 1830 se instalaron los primeros cables metálicos, y por las galerías se comenzó también a trasladar los vehículos sobre rieles de hierro. Para la innovación introducida por las máquinas a vapor hubo que esperar hasta el año 1874 (Roseneck 2001).

En forma paralela comenzó a desarrollarse la *medición* de las minas, tanto desde la superficie del suelo como desde el subsuelo, basada en la técnica de triangulación. Hasta el siglo XVI se aprovechó este “arte de demarcar” (*Markscheidekunst*) para la delimitación de los derechos de propiedad de los abundantes pequeños propietarios (Agricola 1928: 98-99). Cuando se impusieron las formas colectivas de posesión se fue tornando cada vez más importante la estimación de los depósitos minerales y el planeamiento de la tecnología. Esta evolución se puede ver sobre todo en las representaciones gráficas. Hasta el siglo XVII estas representaciones eran planas (miradas desde arriba), a menudo en forma de croquis simples, sin respetar las escalas. En Rammelsberg, el plano más antiguo de las galerías de una mina que tenemos fue realizado en 1680. Una generación más tarde, en los años 1711-1712, se empleó una forma más compleja de medición, en la que trabajaron dos personas a lo largo de varios meses. En términos generales había comenzado la época de la educación formal y académica de los mineros especializados (Roseneck 2001: vol. 2, 136-149; Daumas 1968: vol. 3, 584).

Rammelsberg es un ejemplo representativo y conocido por los viajeros y científicos que viajaron a América y que mencionamos en este texto, de una serie de transformaciones ocurridas al norte de los Alpes y al este del Rin. Carlos V calculaba en unas 100.000 las personas que trabajaban en la minería y en la metalurgia. La combinación de ambas actividades, la presencia de importantes bosques (combustible) y cursos de agua (energía hidráulica) y la

población relativamente menos abundante que favorecía la colonización, proporcionaron a Alemania un contrapeso a los logros del Renacimiento de la Europa del Sur. Aunque después del comienzo de la llegada de plata americana muchos centros mineros entraron en decadencia, esta actividad siguió desarrollándose en forma desigual en el tiempo, introduciendo algunas innovaciones como las que hemos visto sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII. En ese entorno se formaron los expertos mineros se trasladaron a las colonias de ultramar.

En España, esta actividad también tuvo un desarrollo importante de destacar siguiendo los objetivos de este trabajo. Los mineros españoles conocían la práctica de combinar pozos verticales con galerías horizontales aun antes de que se introdujera la técnica alemana en los años 1550-1555 (Sánchez 1989: 241). Estas prácticas eran muy simples ya que no se disponía de capital como para realizar obras complejas. El problema se les presentaba al llegar al nivel de la capa freática, ya que no siempre se podía realizar su desagüe, por no contar ni con mano de obra especializada ni con tecnología adecuada. Lo que solía suceder era que, cuando se llegaba al nivel del agua, se abandonaba la explotación, con excepción de algunas empresas importantes que lograban resolver este problema.

Para sacar el mineral se utilizaba una abundante mano de obra (con relación al material extraído) y se empleaban tornos sencillos movidos a mano en los casos en que hubiera pozos verticales o a hombros de los peones en las galerías horizontales. Las herramientas utilizadas eran almaraduces, picos, picayos, azadas, azadones, raederas, barrenas y cuñas de hierro. En Almadén (la mina más importante de la península que era productora de mercurio) se extraía el material a lomo de burros. Fue en esta mina donde los Fugger instalaron en 1536 una grúa elevadora, cuando se hicieron cargo de su explotación. Para iluminarse dentro de las galerías se utilizaban lámparas de aceite o un sistema rudimentario de sogas empapadas en aceite. Se habían desarrollado también técnicas de sostenimiento de las galerías o para realizar grandes agujeros subterráneos mediante el recubrimiento con piedra o la entibación con madera a base de la utilización de asnadillos, peones y estacas.

Hay dos elementos más que quisiéramos destacar para cerrar este apartado. Las explotaciones mineras en España no generaron grandes instalaciones de superficie. La mayoría de las minas tenía almacenes para los minerales, viviendas rudimentarias para los trabajadores, algún horno de fundición, herrería para reparar las herramientas y depósitos varios. Esto no fue así en los Alpes, donde la minería tuvo un rol muy importante en la urbanización (Mitterauer 1974). El segundo elemento importante a destacar es que, a pesar de la presencia alemana en territorio español, prácticamente no hubo introducción de tecnología avanzada en los centros mineros, con unas pocas excep-

ciones.³ La opinión de Sánchez es que el aumento observable en la producción en algunas minas del siglo XVI se debió más al incremento del número de peones no calificados que a los cambios tecnológicos (Sánchez 1989: 247). Esta mano de obra realizaba principalmente las tareas de extracción de mineral y desagüe, mientras que los especialistas se contrataban a destajo y trabajaban tiempo limitado en cada mina, migrando de explotación en explotación. La forma predominante de pago era “a partido”, es decir, se pagaba parte del salario con mineral que los mismos trabajadores fundían y vendían.

Las minas americanas desde la perspectiva de los expertos alemanes

La expedición de mineros y metalurgistas alemanes contratados por la Corona a fines del siglo XVIII debía trabajar diez años en las minas americanas. Helms, el beneficiario mas destacado de la expedición, llegó con el barón Von Nordenflycht al Perú, pero sólo se quedó cuatro años. Esta parte de la expedición llegó pocos años después de las grandes sublevaciones indígenas (en 1789), cuyas consecuencias pueblan las páginas del diario de Helms: abandono de minas, falta de inversiones, escasez de circulante, ciudades o campañas que todavía daban cuenta de las batallas libradas (Helms 1807). A la imagen de un campo arrasado por los conflictos sociales, se le suma la de su esterilidad natural: en su viaje de Buenos Aires a Potosí, uno de los primeros aspectos que destaca Helms es la falta de cobertura vegetal, lo que implicaba la necesidad de llevar a estas minas la madera usada para combustible y la necesaria para la construcción desde grandes distancias. Hombres y animales transportaban grandes troncos desde el Tucumán a través de las montañas. La ausencia de madera para la construcción no solamente encarecía los costos de casi cualquier emprendimiento, sino que fue uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentó Helms, quien tuvo que regatear y lidiar por este rubro con los comerciantes.

Lo segundo que este experto destaca en su diario es la irregularidad de la arquitectura de las minas: “Casi todas las minas de Perú fueron abiertas por desertores del ejército y la armada, marineros y otros vagabundos; y continuaron trabajando sin observancia de las leyes y regulaciones de la minería, simplemente con el objeto del saqueo” (Helms 1807: 38). En general sostiene que las galerías no eran muy profundas y que la inexistencia de maquinaria hacía

³ Un caso excepcional fue la mina de Guadalcanal, que era una empresa minera de la Corona y que recibió los aportes de expertos alemanes y americanos (Sánchez 1989: 417 y ss.).

muy difícil la tarea de vaciarlas de agua. Helms opina, también, que las herramientas de los trabajadores indígenas (habla de los martillos y las barretas) estaban muy mal pensadas, principalmente por el peso y por el tamaño. La forma de las minas acentuaba, además, el problema del aire viciado por las velas de sebo. Con relación a los sistemas de transporte, se sorprende de que no se usara el montacargas para la extracción del material, sino que se siguiera haciendo a hombros de la gente (Helms 1807: 15).

Las críticas que Helms realiza de las obras mineras que se estaban haciendo están relacionadas con la concepción del trabajo realizado “a ojo” en palabras del virrey citado, a diferencia de las propuestas alemanas basadas en la medición. A partir de las posibilidades que les ofrecía este tipo de análisis, los expertos evaluaron los socavones en marcha, y propusieron ubicaciones que consideraban más adecuadas para el futuro.

La expedición había generado grandes expectativas en la población local y regional, ya que la audiencia que había ido a escucharlos incluía mineros de otros centros como por ejemplo Oruro, La Paz y Tupiza. Muy capaces en lo técnico, estos expertos carecían de la menor diplomacia para transmitir sus opiniones. “Establecer aunque más no fuera la más remota comparación entre los logros de nuestro compatriota [Born] y los procedimientos bárbaros de los indios constituiría una intolerable degradación de su trabajo” (Helms 1807: 22). Las opiniones de los expertos sobre los mineros potosinos tampoco eran elogiosas, ya que se referían a ellos públicamente como “cabezas huecas”, “ignorantes” o “pequeñas personas” (Buechler 1973: 76). Pronto comenzaron muchos de los potosinos a manifestarse en contra o en desacuerdo con la expedición, quitándoles su apoyo y, a veces, hasta boicoteando sus actividades.

Nordenflycht, por su parte, compartía gran parte de lo que hemos sintetizado del diario de Helms, aunque con algunas comparaciones relativas a la organización en Europa Central que son interesantes para este trabajo. Uno de los problemas que este autor encuentra en las minas peruanas es el de la propiedad, que estaba demasiado repartida entre particulares quienes, además, gozaban de una extrema libertad a los ojos de este experto (Flores 2005). Nordenflycht se inclinaba más bien por el modelo seguido en Europa Central, según el cual las minas se habían convertido en una suerte de manufactura real. La centralización permitía grandes inversiones, mano de obra especializada y asesoría técnica de primer nivel. Como señala Flores, estas ideas estaban en consonancia con las de los monarcas Borbones. Su opinión sobre la forma de trabajo en las minas era que seguían un sistema utilizado antiguamente en Europa, que en Alemania se conocía como *Raubbau*, o sea, “construcción de ladrones”. Esta denominación hacía referencia a la característica de ser un trabajo no planificado que sólo buscaba obtener los minerales más ricos, dilapidando con frecuencia los recursos. Para este experto, este modelo

requería mayor cantidad de mano de obra, generaba mayores gastos y era muy riesgoso. Uno de los problemas que Nordenflycht encontraba en el Perú era el de los trabajadores, a quienes consideraba poco hábiles y sin experiencia, por lo que una de las soluciones que proponía era importar mano de obra. Este observador consideraba que había que europeizar América por medio de la educación de los trabajadores y de imponer cambios en la sociedad a través de la cultura impresa, de las instituciones educativas y de la innovación tecnológica. Dentro de los cambios propuestos estaba también el de la liberación de los indígenas de las muchas cargas coloniales que tenían, ya que creía en el trabajo libre y consideraba sus condiciones de vida y de trabajo como inaceptables.

La opinión de estos especialistas coincide en términos generales con las que expresó Alexander von Humboldt. En 1799 el científico consiguió una autorización del rey Carlos IV en Madrid para poder realizar su viaje de estudios a las colonias españolas de ultramar, en la que se decía expresamente que se le permitía “pasar a América a continuar el estudio de minas” (Krätz 2000: 63). En una conversación personal con el rey, Humboldt había destacado especialmente este interés y se había comprometido a ello. Durante su viaje de estudios por América (1799-1804) presentó esta autorización ante las autoridades locales de los asentos mineros siempre que tuvo la oportunidad. Aunque sus principales informantes fueron por lo general estas autoridades, Humboldt visitó las minas personalmente, habló con los trabajadores y sobre la base de todas estas fuentes de información escribió diversos reportes sobre las deficiencias que encontraba y sobre las posibles soluciones.⁴ Es interesante destacar que, a diferencia de otros registros de su diario que fueron realizados en francés, las descripciones de las minas están mayormente escritas en alemán, lengua que Humboldt consideraba como el “idioma natural” de los informes mineros.⁵ En ellas deja constancia de que los días pasados en las minas fueron los más intensos del viaje, porque él quería ver y examinar todo, y porque la gente esperaba sus consejos.

Las minas peruanas visitadas por este investigador fueron las de Hualgayoc, descubiertas en 1771. En su relato señala que la plata se encontraba al principio en su mayoría en forma compacta cerca de la superficie, de manera que se las podía extraer “simplemente revolviendo el suelo”, sin conocimientos técnicos mineros. Tras cinco o diez años de laboreo en superficie, los trabajadores debieron meterse dentro de la montaña. La forma de trabajar las vetas era seguir el filón en todos sus giros, de manera que los socavones pron-

⁴ La mejor síntesis sobre el tema en Faak (1991). Además, Humboldt (1983).

⁵ El informe ha sido publicado en gran parte en Faak (1986; 1990).

to comenzaron a parecerse a “cuevas de zorro o de conejos”, al decir de Humboldt. No había vehículos para el transporte del mineral, vehículos que por otra parte no hubieran podido moverse dentro de estos retorcidos laberintos. En lugar de ello se sacaba el mineral en bolsas colocadas en las espaldas de los trabajadores, método que era utilizado incluso para el desagüe de las minas. Sólo unos pocos años antes se había comenzado a sacar el agua en sacos de cuero y en baldes tirados por cuerdas ubicados en algunos puntos. Pero, según la mirada de Humboldt, este método también era desacertado. Estando allí les explicó a los trabajadores cómo desaguar las minas a partir de fuerza animal (caballos) o con ruedas movidas con agua, como se hacía en Europa (Faak 1986: 43-44, 259-264). Humboldt también describió en forma muy detallada el resto del trabajo, en particular el “beneficio” de la plata a partir del método de la amalgama, método que también comparó con el utilizado en Europa.

La mirada de los especialistas alemanes es un punto de partida interesante para analizar la minería andina, si tenemos en cuenta lo que en el momento se consideraba la tecnología más avanzada en Europa. En el siguiente apartado proponemos incluir otras miradas sobre estado de la minería, miradas que consideramos relativamente independientes de la de estos especialistas.

El desarrollo minero en los Andes

A partir de los relatos de las crónicas tempranas y de las investigaciones más recientes se puede afirmar que la importancia del conocimiento indígena en los primeros años de la minería en los Andes fue central. Aunque la minería prehispánica se realizó a una escala mucho más reducida que la colonial (y por ello los españoles encontraron las reservas minerales relativamente intactas), esta actividad estaba muy difundida. Las investigaciones arqueológicas son muy numerosas, pero se concentran en el estudio de objetos terminados o subproductos de los procesos de producción mineros y metalúrgicos, sin prestar mucha atención a la actividad minera propiamente dicha, que por otra parte es más difícil de abordar por la superposición de explotaciones en el tiempo (Salazar/Salinas 2008). Hoy sabemos que la minería se realizaba tanto a cielo abierto como en forma subterránea a través de galerías, trincheras y socavones no muy profundos. Las herramientas utilizadas eran construidas principalmente con piedras y astas de animales, no se usaban escaleras y se conocía el manejo del fuego para facilitar las tareas de extracción.

Se sabe que los Inkas explotaban y conocían la existencia de muchas minas, entre otras, la de Porco, a la que se habían destinado trabajadores especializados. En las primeras actividades mineras de los conquistadores europeos se utilizó mano de obra indígena especializada y se explotaron sitios que ya

habían estado en producción. Muchos de estos trabajadores fueron trasladados a Potosí, luego de que fuera “descubierto” en 1545: se trataba de artesanos especializados en las técnicas metalúrgicas (Weaver 2008).⁶

Aunque los tratados y estudios sobre la actividad minera son muy abundantes en los Andes debido a la importancia que ella tenía, la descripción concreta de las minas es muy escasa, cuando no directamente inexistente, como, por ejemplo, en el caso del tratado de Alonso Barba. En todas las crónicas lo que se destaca, en cambio, es la descripción del método del “beneficio”, en particular el uso de la tecnología indígena de fundición, ya que la hispana no había dado los resultados esperados. Las *guayras*, pequeños hornos que funcionaban con el viento que ingresaba por los numerosos agujeros que tenía su estructura, iluminaban la noche potosina en un número de entre cinco y seis mil, todas ellas esparcidas por las laderas del cerro (Capoche 1959: 115).

¿Cómo era, entonces, la actividad minera colonial? El descubrimiento de las vetas fue en muchos casos, sobre todo al inicio, más bien producto de la entrega de información de la ubicación de las minas explotadas por los Inkas, que de cateos en tierras desconocidas. La mayoría de los cateadores eran también indígenas, aunque no tenemos muchas descripciones de ellos.⁷ Cuando se descubría una nueva veta lo que ocurría era que a los descubridores se les otorgaba derecho a 80 varas y 30 días en los cuales podían catear libremente hasta ubicar con mayor precisión dónde trabajar.⁸ A quienes llegaban después les correspondían 60 varas. Lo notable en todo este proceso es la velocidad de la afluencia de mineros al lugar, una vez que se conocía la ubicación de la veta descubridora. En quince días ya había mas de diez mineros trabajando en pequeñas concesiones en un ejemplo como el descripto, ubicado lejos de cualquier centro urbano y de difícil acceso. El caso de Potosí es otro ejemplo que ilustra muy bien la velocidad de este proceso: en septiembre de 1545 —es decir, al poco tiempo del “descubrimiento” de las primeras vetas— había 170 españoles y 3.000 indígenas asentados al pie del Cerro Rico; dos años más tarde, había alrededor de 2.500 casas y 14.000 habitantes (Cook 1981: 236).

Hasta la implementación de la tecnología del beneficio con amalgama llevada a cabo por el virrey Francisco de Toledo en la década de 1570, los indígenas dominaban todas las fases de la producción (Cole 1985; Cruz/Absi 2008). Para poner en marcha el nuevo sistema, el virrey tuvo que resolver diferentes problemas, entre los que detallaremos aquí solamente los que están

⁶ En la actualidad se sostiene que Potosí era una mina conocida por los Inkas y que fue “entregada” tardíamente a los españoles (Platt/Quisbert 2008).

⁷ Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en adelante ABNB, Minas 52/335.

⁸ ABNB, Minas 62/ 439, año de 1657. En este caso la veta era de oro. Otro ejemplo en ABNB, Minas 52/335.

relacionados con el trabajo en el interior de las minas. Una de las principales ideas de Toledo (en rigor una adaptación de un sistema de origen incaico y parcialmente utilizado ya en algunas minas) fue la organización de la mita minera, un sistema de trabajo forzado destinado principalmente a suplir las necesidades de mano de obra no especializada (Bakewell 1984b; Cole 1985; Tandeter 1992). Pensado como un sistema transitorio destinado a impulsar importantes cambios de infraestructura y tecnológicos que permitieran la reactivación de la minería, la mita siguió siendo importante justamente por el enorme crecimiento que experimentó la producción en Potosí (Cole 1985).

Al comienzo de la era postoledana, los mitayos fueron mano de obra forzada y barata que permitió a los azogueros tanto realizar las grandes obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento de los ingenios, como resolver los problemas laborales en las tareas más peligrosas, pesadas y peor remuneradas. Vale la pena mencionar como ejemplo de los abusos el hecho de que, aunque Toledo había ordenado un máximo de dos viajes por día para los mitayos que sacaban el mineral (los *apiris*), tan temprano como en 1580 se hacían veinticinco. En los años 1590 la tarea diaria era diecinueve montones, esto a pesar que la cuota misma había sido prohibida por los virreyes. Con el tiempo y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, los mitayos fueron encontrando maneras de eludir sus obligaciones reemplazándolas por pago en plata. Los azogueros contaban así con dinero para pagar asalariados más costosos, o simplemente pudieron gozar de lo que Tandeter llamó la “renta mitaya” (Tandeter 1992).

A partir de la reorganización toledana el control de la producción de plata se sacó de manos de los indígenas y se acentuó notablemente la división del trabajo en el proceso. Dentro del conjunto de los trabajadores del interior de la mina, los mitayos realizaban las labores más duras y menos calificadas: extraer de los minerales del cerro hasta las canchas. Señala Acosta, hacia fines del siglo XVI, (2006: 175):

Trabajan con velas siempre los que labran, repartiendo el trabajo de suerte que unos labran de día y descansan de noche y otros al revés les suceden. El metal es duro comúnmente y sácanlo a golpe de barreta quebrantándole que es quebrar un pedernal. Después lo suben a cuestras por unas escaleras hechizas de tres ramales de cuero de vaca retorcido como gruesas maromas, y de un ramal a otro puestos palos como escalones, de manera que pueden subir un hombre y bajar otro juntamente. Tienen estas escalas de largo diez estados, y al fin de ellas está otra escala del mismo largo, que comienza de un releje o apoyo, donde hay hechos de madera unos descanso a manera de andamios, porque son muchas las escalas que se suben. Saca un hombre carga de dos arrobas atada la manta a los pechos y el metal que va en ella, a las espaldas; suben de tres en tres. El delantero lleva una vela atada al dedo pulgar, para que vean.

Uno de los principales cambios introducidos por los españoles fueron las herramientas de hierro. En varios inventarios de López del siglo XVII hemos encontrado que se utilizaban barretas, martillos y azadones, todos fabricados con hierro, a veces importados y otras, transformados o reparados en forjas locales.⁹ Con relación a los medios utilizados para acceder a las vetas y para sacar el mineral, Acosta describe otra innovación colonial: las escaleras de cuero con escalones de palos. Por ellas podían andar incluso dos hombres en sentido opuesto. El material se sacaba en aquellos tiempos en mantas atadas a las espaldas.

Capoche, un importante minero que vivió en Potosí en el momento de su auge, aporta algunos detalles técnicos interesantes. Señala que hay dos formas de llegar a las vetas: por escaleras realizadas con una combinación de cuero y palos o por los socavones que permitían andar con un poco más de comodidad. Estos socavones no se construían para unir todas las minas, sino para llegar a una en particular. En caso de atravesar alguna otra mina, los indígenas que por allí pasaban debían pagar peaje. Como Acosta, Capoche describe las escaleras, el mineral cargado en la espalda dentro de una manta y las velas que se llevaban atadas al pie.

En el interior de la mina, la tecnología no permaneció igual todo el tiempo. Los detalles de la construcción de un socavón de comienzos del siglo XVII en el asiento de Chocaya, Chichas, permiten conocer un poco sobre este aspecto.¹⁰ En el cuestionario que se solicita se realice a los testigos de un juicio en 1638, se mencionan los sistemas alternativos que se utilizan para entrar a las minas, por ejemplo, o para sacar el agua. Entre otros elementos se hace referencia a las escaleras de cuero y los callapos con barbacoa utilizados para entrar o salir de las minas. Estos últimos eran andamios montados sobre palos que se dice eran abundantes, y que podían ser de lozas de piedra o de tola u otras ramas. Para sacar el agua se mencionan palos ahuecados, embreados y sujetos con cinchas de fierro, mucho más costosos que los canales de desagüe que iban por los socavones.

A lo largo del siglo XVII encontramos algunos avances en la tecnología aplicada en el interior de la mina. En la década de 1670, el azoguero Antonio López de Quiroga parece haber usado por primera vez la pólvora en forma exitosa en Porco, para hacer avanzar las obras en un socavón construido en piedra muy dura. Aunque hay algunos indicios de un uso anterior en Huancaavelica, ésta parece ser la primera vez que se usó sistemáticamente en la región (Bakewell 1988: 82). López de Quiroga fue el propulsor de varios socavones

⁹ ABNB, Escrituras Públicas, Tomo 137, folios 123v y 173v. ABNB, Minas 57/394.

¹⁰ ABNB, Minas 52, 328.1638.

construidos en diferentes asientos mineros, siendo el más ambicioso el de San Antonio del Nuevo Mundo, en Lépéz. El encargado de dirigir las obras fue un experimentado español, Alonso Ruiz, quien reclutó mano de obra indígena en Potosí para realizar el trabajo. La construcción demandó unos cinco años, entre fines de 1672 y comienzos de 1678. El socavón tenía grandes dimensiones, un canal cubierto por un pavimento de losa para que los trabajadores pudieran recorrerlo y a la vez pudieran desaguar las minas. Lo interesante, además, es que hay un gasto relacionado con un carretón destinado a sacar piedras del interior, aparentemente movido por chiriguanos.¹¹ La construcción del socavón requirió de pólvora que debió ser tratada con brea para poder ser usada en un ambiente húmedo e incluso inundado.

Los expedientes relativos a esta obra permiten afirmar que se tenía pleno conocimiento de los beneficios que aportaba el hecho de construir socavones.¹² Se sabía que este sistema permitía el drenaje de las minas por la simple fuerza de la gravedad, permitía también el paso simultáneo de dos personas en sentidos opuestos incluso yendo cargados y mejoraba considerablemente la ventilación. Al poco tiempo de terminado el socavón y desaguadas las minas, se comenzó a cavar por debajo del nivel y el problema del agua reapareció. Sin embargo, el desagüe pudo hacerse por un tiempo más en forma relativamente fácil, reuniendo el agua en pozos y subiéndola al socavón por medio de un torno instalado bajo tierra. Este sistema permitió que el asiento siguiera produciendo unos años más, pero hacia fines del siglo xvii los reportes indican el abandono de casi todos los trabajos: los costos de extracción y la calidad de los minerales hacían inconveniente su explotación teniendo en cuenta que el asiento se encontraba a 4.700 metros de altitud y que había que abastecerlo de todos los insumos, alimentos y vestidos.

Para Bakewell (1988) esta y otras obras construidas por López de Quiroga rompían con la anterior tradición de pequeños socavones que llevaran a las vetas, para pensar más bien a una mayor escala, es decir, socavones unidos entre sí que facilitaran tanto el acceso como la extracción de minerales. El de San Antonio se consideró una obra heroica por su costo y dimensiones. Ya en los años 1690 se hacía necesario un segundo socavón (una obra hercúlea) que nunca se construyó. Hemos encontrado una sola referencia al costo de este tipo de obras, que sirve para evaluar los pros y contras de emplear esta tecnología: una hacienda de beneficio en Nuevo México o un ingenio en los Andes representaban una inversión de decenas de miles de pesos; mientras que un socavón costaba aproximadamente centenares de miles (Bakewell 1986).

¹¹ ABNB, Minas 58/405, folio 267.

¹² ABNB, Minas 58/405. 1679-1681.

A comienzos del siglo XVIII era poco lo que había cambiado en las minas. Hacia 1705, Arzáns Orzúa y Vela sostiene que en aquellos tiempos muchas de las minas de Potosí estaban inundadas, pero se sacaba el agua mediante bombas (que no describe) y cubos. A veces el agua formaba lagunas muy profundas donde se ahogaban quienes no conocían bien los caminos o los desdichados a quienes se les apagaban las velas. Se utilizaban barretas y pólvora para desprender mineral dentro del cerro, mineral que era transportado en las espaldas de los apiris, quienes trepaban “por las sogas cargados de metal sudando y trasudando” y descendían por “unos palos muy delgados doscientos, trescientos y más estados”. “También los veréis algunas veces asemejarse a las bestias caminando en cuatro pies con la carga a las espaldas y otras arrastrándose como gusanos” (Arzáns 1965: 65-66).

Entre estas descripciones y la llegada de los expertos alemanes hubo dos hechos que afectaron al desarrollo minero que venimos describiendo: los levantamientos indígenas de fines del siglo XVIII y el crecimiento de la importancia de los *kajchas* en las labores. La expedición alemana llegó a Buenos Aires en 1789, es decir, ocho años después del apogeo de la sublevación en el Cuzco y en el norte potosino. En el levantamiento de los indígenas numerosos establecimientos habían sido destruidos, mucha gente asesinada, herida o desarraigada y las fuentes de crédito habían desaparecido (Walker 1999). Parte de estas consecuencias las observa Helms (1807: 24-25) —como hemos mencionado anteriormente—, quien describe el abandono de las minas de Oruro y las secuelas menores que aún se observaban en La Paz. Las consecuencias están presentes incluso en los distritos mineros del sur más alejados del centro de la rebelión, como Chichas.¹³

Hay mucha más información sobre los *kajchas* relacionada con las minas, como es lógico. El *kajcheo* apareció en Potosí desde fines del siglo XVII, pero se fue haciendo más importante a lo largo del siglo XVIII. Su origen no está claro: algunos lo asocian a los mismos inicios de la actividad minera en Potosí, otros lo atribuyen al superintendente Pedro Vázquez de Velasco, cuya gestión en dicha villa data de los años 1663 a 1666 (Tandeter 1992: 113-114). Aunque el origen no sea claro, el sentido de la práctica sí lo es: estaba destinada a favorecer el asentamiento y permanencia en Potosí de trabajadores regulares de la minería, como una forma de complementar los ingresos. La mejor descripción de esta actividad la realiza Enrique Tandeter:

Los fines de semana eran momentos muy singulares en el Potosí del siglo XVIII. Entre los sábados a la tarde y los lunes por la noche los trabajadores libres y forza-

¹³ ABNB, Minas 53/346. 1782.

dos que habían permanecido en el cerro ininterrumpidamente durante la semana, abandonaban las minas y se dirigían a sus ranchos. En esos días, sin embargo, las minas no quedaban desiertas. Por el contrario, el cerro era invadido entonces por los *kajchas*, hombres que se aprovechaban de la interrupción del trabajo minero regular para extraer para sí los minerales que pudieran encontrar en las minas, los que luego serían refinados en los trapiches, pequeñas y rudimentarias instalaciones de molienda manual (Tandeter 1992: 112).

Uno de los inconvenientes del *kajcheo* era que se realizaba completamente fuera del control de los empresarios mineros. A los *kajchas* se los acusaba de no cuidar las instalaciones rompiendo puentes y otras obras de infraestructura sólo en su afán por seguir las vetas, provocando derrumbes y desórdenes. Cañete (1939: 57-58) describe también a los *kajchas* hacia fines del siglo XVIII. En San Antonio, cuando las minas estaban en un claro período de decadencia, los pocos azogueros que aún quedaban reclamaban por la acción de otros trabajadores semejantes a los *kajchas*, llamados allí *jucos*.¹⁴

Hacia fines del siglo XVIII los Andes transitaban una coyuntura en la que también es importante situar a los expertos. Aunque la producción de Potosí se había recuperado desde 1730, esta recuperación no fue tan importante como para alcanzar la de los años de auge. Este incremento tuvo diferentes causas, entre las que vale la pena señalar el aprovechamiento mejor que se hizo hasta mediados de la década de 1790 de los llamados “desmontes”, esto es, del mineral que había sido dejado de lado anteriormente por su calidad, pero que en aquellos años se podía procesar. El aprovechamiento de los desmontes no implicaba grandes gastos de infraestructura, ni altos costos en mano de obra. Pero tenía su límite, ya que la calidad de las nuevas vetas era siempre mejor que la de estos minerales y, además, los desmontes se estaban acabando. En este contexto y como parte de las reformas impulsadas por los Borbones, la administración colonial se había decidido tardíamente a invertir en algunas mejoras destinadas a incrementar la producción minera. Una de las obras propuestas fue la construcción de un socavón iniciado en la década de 1790 destinado a facilitar el acceso a las vetas más profundas y que se esperaba fueran más ricas. La obra se abandonó durante las guerras de independencia, antes de haber alcanzado a rendir frutos (Tandeter 1992: 294). La disminución de los impuestos a la producción y del precio del azogue, fueron también medidas tomadas en dicha coyuntura que ayudaron al incremento de producción de la plata potosina. La llegada de los expertos financiados por España se enmarca, junto con las mencionadas, en estos tardíos esfuerzos de la Corona.

¹⁴ ABNB, Minas 61, 429-1728.

Conclusiones

Para algunos autores, en la industria minera se unieron tres tradiciones culturales, la castellana, la germana y la andina, aunque se discute si las dos primeras no tendrían en realidad una misma matriz cultural con características similares (Flores 2005: 127). En este trabajo hemos comparado un aspecto de la tecnología que en cierta medida rompe con la imagen dicotómica de la tradición “occidental” versus la indígena, y se inclina un poco más por la de las tres matrices. La española estaría presente no solamente como un puente entre la alemana y la americana, sino como receptora activa de las otras dos experiencias y fuente de difusión ocasional de la americana hacia el resto de Europa.¹⁵

Todavía es poco lo que podemos agregar acerca del aporte indígena en cuanto a la tecnología minera. La introducción de la amalgama implicó un enorme cambio en la organización del trabajo del beneficio despojándolos del control de la producción, pero en el interior de las minas no parece haber ocurrido un fenómeno semejante. Las herramientas cambiaron, pero quienes barreteaban siguieron siendo los mismos que antes de los cambios tecnológicos. Este oficio requería de mayores conocimientos que el de los *apiris* y era mejor pagado. El cateo también estuvo en gran medida en manos de los indígenas. Se podría decir sintéticamente que los españoles supieron utilizar mano de obra que tenía experiencia minera, que conocía la región y la actividad, y que además rápidamente aprendió las nuevas tecnologías.

Con relación a la arquitectura de las minas, la impresión que tenían los expertos alemanes, incluido Humboldt, y compartida por Bakewell, se confirma en cierta medida con diferentes descripciones realizadas por mineros y otros españoles residentes en América. En ese sentido, hemos visto cómo las galerías seguían mayormente a las vetas, en una arquitectura no planificada que hacía difícil la utilización de vehículos para el transporte horizontal. Aunque ésta parece haber sido la característica dominante de las minas en los Andes, había algunos socavones que se construyeron para acceder a vetas profundas, para desaguar minas y para facilitar el transporte. Sin poder hacer una estadística de estas obras, lo que parece a partir de estos testimonios es que no era la forma más común, sino algo excepcional, propio de los momentos de auge.

También vimos cómo el material se sacaba del interior de las minas a hombros de los indígenas, primero envuelto en mantas y luego, en bolsas de cuero.¹⁶

¹⁵ Mientras que la superioridad de la tecnología de extracción centro europea no se discute, la del tratamiento del mineral genera permanentes polémicas (Sánchez 1989: 533).

¹⁶ Hemos encontrado sólo una referencia en San Antonio sobre las llamadas “chimeneas verticales” utilizada –aparentemente– para sacar agua. ABNB, Minas 58/405, 1679 a 1685.

Quienes realizaban estas tareas eran trabajadores no especializados que recibían menos salario que los demás, los *apiris*. Esta tarea la realizaban en Potosí mayoritariamente los mitayos. Los *apiris* subían y bajaban al interior de la mina por escaleras de cuero y palos, o algunas veces, por medio de socavones cortos que facilitaban el acceso a las vetas.

¿A qué se debió que no se aplicara una mejor tecnología en el interior de las minas? En este trabajo hemos sugerido algunas respuestas. Una de ella, que sigue a la de Bakewell, es que había abundante mano de obra barata. Esta mano de obra no era solamente forzada, ya que hemos visto que sólo había mitayos (trabajadores forzados por excelencia) en unas pocas minas. La situación colonial, sin embargo, difumina parcialmente la frontera del trabajo libre y forzado, no solamente porque la tasación del tributo en plata empujaba a muchos indígenas a trabajar en las minas como un modo de conseguir cómo pagarlo, sino también porque los mineros tenían derecho a “sacar indios” y llevarlos a las minas en un número reducido, para que los sirvieran a cambio del pago de los jornales.¹⁷ Aunque importante, el tema de la mano de obra por sí sola no explica la modalidad andina del trabajo en las minas. Hemos visto que para el caso de España, Sánchez menciona también la falta de introducción de tecnología en la mayoría de las minas y del gran número de trabajadores no cualificados y baratos que realizaban principalmente tareas de extracción de mineral y desagüe.

La falta de innovación, ¿se debió a algún tipo de resistencia a los cambios en el sentido que sostiene la *Path Dependency-Theorie*? ¿Influyó la historia de la minería en la conservación de algunas maneras de trabajar? Hay algunos indicios en la descripción de Humboldt del modo en que se iniciaron las tareas en Hualcayoc que apuntan en esa dirección. Para este viajero la forma en que se encontraba la plata al comienzo de las explotaciones permitía que el trabajo fuera realizado por mano de obra no especializada, no experta. Luego simplemente se seguía la veta. Por otra parte, la forma de las concesiones que se daban para la explotación favorecía esta forma no planificada del trabajo, ya que se otorgaban muchas licencias para explotar pequeñas porciones de los minerales. En esos laberintos era muy difícil implementar otro método diferente que el de sacar el mineral a hombros de los *apiris*. Si prestamos atención a lo que sostenía Nordenflycht, esto mismo había ocurrido en Europa en tiempos anteriores, pero se había podido cambiar. Entre las recetas propuestas por este experto, el papel del Estado no era menor, como un agente de ordenamiento del trabajo minero (que era preferible que fuera centralizado y no disperso en tantas manos tan independientes), pero también debía realizar fuertes

¹⁷ ABNB, Minas 62/438 y Minas 131/1200.

inversiones de infraestructura (caminos, socavones, haciendas de beneficio) e impulsar enormes cambios en la sociedad, tales como la libertad de trabajo, de explotación de recursos naturales necesarios para la actividad, controlar a los azogueros, mejorar los jornales, etc. En otras palabras, el cambio tecnológico requería de otras muchas transformaciones muy profundas que lo excedían.

La importancia de las políticas públicas de la Corona en la persistencia de esta manera de trabajar no planificada de las vetas surge también en otros de los textos analizados, tanto en las fuentes como en las interpretaciones realizadas por historiadores. La administración colonial invirtió poco o nada en infraestructura que favoreciera una explotación racional de las minas, aunque se podría pensar que en tiempo de los Borbones se propiciaron algunos cambios, que fueron truncados por las guerras. Lo que más se había hecho a lo largo de todo el tiempo anterior fue el otorgamiento de prebendas y ventajas a los diferentes actores sociales con el fin de promover la producción de plata. A los azogueros la Corona les dio mano de obra forzada y barata para estimular sus inversiones, así como una amplia libertad de acción; a los mitayos les dio la posibilidad de cambiar la mita en persona por un pago en plata, lo que favoreció indirectamente la existencia de rentistas mitayos, como los llamó Enrique Tandeter, mas que la de empresarios mineros; para sostener una población abundante de trabajadores en Potosí permitió el *kajcheo*, actividad que en muchos asientos se dio con independencia del permiso colonial cuando ya no eran muy rentables.

La organización cronológica en el texto de algunos cambios ocurridos en la tecnología minera pone de relieve una evolución no lineal, en la que la segunda mitad del siglo XVIII parece una época relativamente más decadente que fines del siglo XVI o el XVII. Hubo dos circunstancias particularmente importantes de este período que seguramente influyeron en la visión mostrada por los expertos alemanes de la minería en los Andes. La primera fue que esta expedición llegó cuando todavía se podían observar las consecuencias de las sublevaciones indígenas de los años 1780. No se trataba únicamente de las minas arrasadas o de los establecimientos destruidos, sino también de una situación social descrita en términos generales por los viajeros como de dominio despótico por parte de los españoles. La segunda fue la importancia que adquirieron los *kajchas* durante el siglo XVIII, cuya actividad dentro de las minas era vista incluso por los mismos mineros potosinos como caótica y que sumaba a esta imagen de saqueo y de trabajo no planificado que presentaban las minas.

El factor costos figura también entre las explicaciones que aparecen en las fuentes históricas. Hemos visto cómo la compleja tecnología de los socavones se conocía y se practicó sólo ocasionalmente, porque los costos eran muy elevados (eran obras “hercúleas”) y se multiplicaban por el hecho de tener que abastecer a los asientos mineros con todo lo necesario, desde los insumos para

las obras hasta la comida para los trabajadores, abastecimiento que se realizaba a veces desde sitios muy lejanos. Este factor pesaba también en la construcción de los ingenios (aunque aparentemente eran obras mucho más baratas que los socavones) y sin embargo esas obras sí se construyeron. En rigor, el balance entre costos, existencia de mano de obra barata (potenciada por la situación colonial) y rendimientos permite suponer que la perduración de prácticas ya conocidas y a veces difíciles de cambiar se debe a que en esas condiciones difícilmente se podían superar los rendimientos alcanzados por la tecnología predominante hasta fines del siglo XVIII.

Aunque todavía hacen falta más trabajos comparativos que pongan el acento en la minería española, podemos decir con relación a las tres matrices mencionadas al comienzo del apartado que ella está mucho más presente de lo que inicialmente pensábamos. Siempre centrándonos en las minas, hemos visto cómo la tecnología de Europa Central se conocía pero no se aplicaba salvo muy marginalmente, tanto en España como en América. Por otra parte, los condicionamientos ambientales y la adaptación a ellos deberían participar como factores que influenciaron fuertemente los caminos que siguió el desarrollo tecnológico, como, por ejemplo, en el poco empleo de fuerza animal o hidráulica en los Andes. Y aunque la tecnología indígena es casi invisible en las fuentes, debería ser objeto de más interés ya que ellos fueron la principal mano de obra experta utilizada en los Andes.

Bibliografía

- ACOSTA, José de (2006 [1590]): *Historia natural y moral de las Indias*. México: Fondo de Cultura Económica.
- AGRICOLA, Georg (1928): *Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen*. In *neuer deutscher Übersetzung bearbeitet von Carl Schiffner*. Berlin: VDI-Verlag.
- ARZÁNS DE ORSÚA/VELA, Bartolomé (1965): *Historia de la Villa Imperial de Potosí*. Providence: Brown University Press.
- ASSADOURIAN, Carlos Sempat (1983): *El sistema de la economía colonial. El mercado interior, regiones y espacio económico*. México: Editorial Nueva Imagen.
- BAKEWELL, Peter (1984a): "Mining in Colonial Spanish America", en: Bethell, L. (ed.): *The Cambridge History of Latin America, Vol. 2, Colonial Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 105-151.
- (1984b): *Miners of the red mountain. Indian labour in Potosí, 1545-1650*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- (1986): "Los determinantes de la producción minera en Charcas y Nueva España en el siglo XVII", en: *HISLA*, vol. 8, pp. 3-11.
- (1988): *Plata y empresa en el Potosí del siglo XVII. La vida y época de Antonio López de Quiroga*. Pontevedra: Exma. Diputación Provincial Pontevedra.

- BARGALLÓ, Modesto (1969): *La amalgamación de los minerales de plata*. Monterrey: Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.
- BUECHLER, Rose Marie (1973): "Technical Aid to Upper Peru: The Nordenflucht Expedition", en: *Journal of Latin American Studies* 5/1, pp. 37-77.
- CAÑETE Y DOMÍNGUEZ, Pedro Vicente (1939): *Potosí Colonial. Guía histórica, geográfica, política, civil y legal del gobierno e intendencia de la provincia de Potosí*. La Paz: Imprenta Artística.
- CAPOCHE, Luis (1959): *Relación General de la Villa Imperial de Potosí. Un capítulo inédito en la historia del Nuevo Mundo*. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, Tomo CXXII.
- COOK, Noble David (1981): *Demographic collapse. Indian Peru, 1520-1620*. Cambridge: Cambridge University Press.
- COLE, Jeffrey (1985): *The Potosí mita, 1573-1700. Compulsory Indian labor in the Andes*. Stanford: Stanford University Press.
- CRUZ, Pablo/ABSI, Pascale (2008): "Cerros ardientes y huayras calladas. Potosí antes y durante el contacto", en: Cruz, Pablo/Vacher, Jean-Joinville (eds.): *Mina y metalurgia en los Andes del Sur, desde la época prehispánica hasta el siglo XVII*. Sucre: IRD/IFEA, pp. 91-120.
- DAUMAS, Maurice (ed.) (1965/1968): *Histoire générale des techniques*. Paris: Presses Universitaires de France, vol. 2/3.
- DOUGNAC RODRÍGUEZ, Antonio (1995): "Derecho minero indiano: Voces técnicas peruanas del siglo XVIII", en: *Memoria del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*. México: Universidad Autónoma de México, pp. 387-436.
- FAAK, Margot (1994): "Alexander von Humboldt als Bergmann in Süd- und Mitteleuropa", en: Leitner, Ulrike et al. (eds.): *Studia Fribergensia. Vorträge des Alexander von Humboldt-Kolloquiums in Freiberg vom 8. bis 10. November 1991*. Berlin: Akademie Verlag, pp. 39-51.
- (1986/1990): *Alexander von Humboldt: Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und Mexico. Aus seinen Reisetagebüchern zusammengestellt und erläutert durch M. Faak*. Berlin: Akademie-Verlag, vol. 1/2.
- FLORES CLAIR, Eduardo (2005): "La representación de la minería americana a través de las obras del Barón de Nordenflucht y Federico Sonneschmidt, a finales del siglo XVIII", en: O'Phelan Godoy, Scarlett/Salazar Soler, Carmen (eds.): *Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera globalización en el mundo Ibérico, siglos XVI-XIX*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú/Instituto Riva Agüero/Instituto Francés de Estudios Andinos, pp. 549-570.
- GICKLHORN, Renée (1963): *Die Bergexpedition des Freiherrn von Nordenflycht und die deutschen Bergleute in Peru*. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie.
- HELMS, Anthony Zachariah (1807): *Travels from Buenos Aires by Potosí to Lima*. London.
- HUMBOLDT, Alexander von (1983): *Chronologische Übersicht über wichtige Daten seines Lebens. Bearbeitet von Kurt-R. Biermann u. a., 2. Auflage*. Berlin: Akademie-Verlag.

- KRÄTZ, Otto (2000): *Alexander von Humboldt. Wissenschaftler – Weltbürger – Revolutionär*. München: Callwey.
- MITTERAUER, Michael (1974): “Produktionsweise, Siedlungsstruktur und Sozialformen im österreichischen Montanwesen des Mittelalters und der frühen Neuzeit,” en: Mitterauer, Michael (ed.): *Österreichisches Montanwesen. Produktion, Verteilung, Sozialform*, Wien: Geschichte und Politik, pp. 234-315.
- MOLLOY, Peter (1986): *The History of Metal Mining and Metallurgy. An Annotated Bibliography*. New York: Garland.
- PLATT, Tristan (1998/1999): “La alquimia de la modernidad. Los fondos de cobre de Alonso Barba y la independencia de la metalurgia boliviana (1780-1880),” en *Población & Sociedad* 6/7, pp. 69-142.
- PLATT, Tristan/QUISBERT, Pablo (2008): “Tras las huellas del silencio: Potosí, los Inkas y el virrey Toledo,” en: Cruz, Pablo/Vacher, Jean-Joinville (eds.): *Mina y metalurgia en los Andes del Sur, desde la época prehispánica hasta el siglo XVII*. Sucre: IRD/IFEA, pp. 231-277.
- ROSENECK, Reinhard (ed.) (2001): *Der Rammelsberg. Tausend Jahre Mensch-Natur-Technik*. 2 vols. Goslar: Verlag Goslarsche Zeitung.
- SALAZAR SOLER, Carmen (2003): “Quilcar los indios: a propósito del vocabulario mineiro andino de los siglos XVI y XVII,” en: Lorandi, Ana/Salazar, Carmen/Wachtel, Nathan (comps.): *Los Andes: cincuenta años después, 1953-2003. Homenaje a John Murra*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 281-315.
- SALAZAR, Diego/SALINAS Hernán (2008): “Tradición y transformación en la organización de los sistemas de producción mineros en el norte de Chile prehispánico: San José del abra, siglos I al XVI d.C.,” en: Cruz, Pablo/Vacher, Jean-Joinville (eds.): *Mina y metalurgia en los Andes del Sur, desde la época prehispánica hasta el siglo XVII*. Sucre: IRD/IFEA, pp. 163-200.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, Julio (1989): *De minería, metalurgia y comercio de metales. La minería no férrea en el Reino de Castilla, 1450-1610*. 2 vols. Salamanca: Instituto Tecnológico Geominero de España, Estudios Históricos y Geográficos.
- TANDETER, Enrique (1992): *Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- WALKER, Charles (1999): *De Tupac Amaru a Gamarra. Cuzco y la formación del Perú republicano. 1780-1840*. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.
- WEAVER, Brendan (2008): “Ferro Ingenio: an archeological and ethnohistorical of labor and empire in colonial Porco and Potosí”. Tesis de maestría presentada en la Universidad de Western Michigan.

Oldimar Cardoso¹

Cultura histórica e responsabilização científica

A reflexão contida neste texto foi realizada numa pesquisa pós-doutoral sobre revistas de divulgação científica/ciência popular especializadas em História e publicadas no período 2004-2008 no Brasil (*Revista de História da Biblioteca Nacional* e *Aventuras na História*), na Alemanha (*Damals* e *P.M. History*), na França (*L'Histoire* e *Historia*), na Argentina (*Todo es Historia*) e no México (*Arqueología Mexicana*). O objetivo central desta pesquisa, que ainda está em andamento, é definir quais funções sociais da História se expressam neste tipo específico de revista. A hipótese que orienta esta pesquisa é a de que essas revistas, a despeito de seu reduzido prestígio diante dos historiadores, são uma fonte de informação significativa para um grande público e exercem diversas funções sociais que substituem, complementam ou conflitam com outros suportes de cultura histórica mais oficiais, como livros universitários ou didáticos e museus.

Como exercício que antecede a análise das funções sociais da História nessas revistas, este texto visa definir o que exatamente significa “divulgação científica”, partindo da premissa de que o interesse científico público difere do interesse privado dos cientistas e de que esses dois interesses estão articulados à concepção de “divulgação científica”.

As revistas de ciência popular, representadas nesta pesquisa por *Aventuras na História*, *P.M. History*, *Historia* e *Todo es Historia*, são caracterizadas especialmente pela presença de um editor jornalista, pela ausência de *peer-review*, pela publicação de textos de muitos colaboradores não-historiadores e pela utilização sistemática de imagens como mera ilustração, sem que seu conteúdo seja discutido ou explorado no texto da revista.

As revistas de divulgação científica, representadas nesta pesquisa pela *Revista de História da Biblioteca Nacional* e por *L'Histoire*, *Damals* e *Arqueología Mexicana*, são caracterizadas especialmente pela presença de um editor historiador, pela existência de *peer-review* – ainda que diferenciado do *peer-review* típico das revistas científicas –, pela publicação de textos de historiado-

¹ Universidade de São Paulo (FAPESP); Bolsista do Programa Thyssen-Humboldt na Universidade de Augsburg.

res e pela utilização sistemática de imagens como fontes históricas, cujo conteúdo é discutido ou explorado no texto da revista.

O termo “ciência popular” expressa regularmente com clareza o que são as revistas desse tipo, mas existe uma imprecisão muito grande a respeito do que se deseja definir exatamente com a expressão “divulgação científica”. Essa imprecisão é complicada pelo fato de “divulgação científica” não ser sequer um termo unânime, convivendo com “difusão científica”, “disseminação científica”, “vulgarização científica” e “mediação científica”. Não é possível identificar diferenças claras no uso desses termos no meio científico, sendo possível afirmar que eles, apesar de possuírem significados diferentes, são utilizados como sinônimos pelos cientistas. Esses sinônimos teriam em comum apenas o fato de expressar uma relação entre os cientistas e a sociedade, sem definir qual relação exatamente seria essa. Essa indefinição indica que pelo menos parte dos cientistas não percebe as distintas relações que podem existir entre ciência e sociedade ou não está interessada em discuti-las.

Como todas as expressões citadas no parágrafo anterior são utilizadas indistintamente, tentar estabelecer diferenças entre elas é um exercício meramente lexical, sem relação com o conteúdo concreto de cada expressão. Porém, esse exercício é útil para compreender alguns dos possíveis significados atribuídos pelos cientistas que utilizam essas expressões.

As expressões “divulgação científica” e “difusão científica” sugerem a concepção mais recorrente de relação entre cientistas e sociedade: os cientistas apenas informam os leigos. Segundo o que essa expressão parece sugerir, os cientistas, detentores de um conhecimento específico e indisponível a outros membros da mesma sociedade, precisam garantir que pelo menos parte desse conhecimento ultrapasse a barreira que separa uns de outros. Nessas duas expressões está clara a idéia de que a comunicação se dá apenas no sentido que vai dos cientistas para a sociedade, sem que haja qualquer *feedback* ou outro tipo de comunicação no sentido contrário. Também não está claro nessa concepção por que haveria a necessidade de comunicação entre cientistas e sociedade, o que dá a ela um aspecto quase naturalizado.

Já a expressão “disseminação científica” acrescenta um sentido às duas expressões anteriores. Ela mantém a idéia de comunicação de mão-única de cientistas para sociedade, mas inclui um porquê ao processo, que seria a necessidade de esclarecer os leigos. Essa expressão contém a idéia de lançar pequenas sementes num campo de ignorância, visando obter alguns leigos mais esclarecidos, mesmo sabendo que não será possível esclarecer a todos. Nesta expressão a ciência é vista como sinônimo de esclarecimento (o que não é obrigatoriamente verdadeiro em todos os contextos), mas continua em aberto por que exatamente seria necessário esclarecer os leigos.

A expressão “vulgarização científica”, ainda que não se diferencie das duas primeiras, acentua uma característica do processo de comunicação entre cientistas e sociedade, a necessidade de “traduções (muitas vezes consideradas duvidosas) da pesquisa científica para o público leigo” (Paul 2004: 32). O foco nessa expressão não está no fim, como na expressão anterior, mas no meio utilizado e, subrepticamente, nas mazelas desse meio. Está subentendida nessa expressão a idéia de que é inevitável a existência de ruídos no processo de comunicação de mão-única entre cientistas e sociedade.

A expressão “mediação científica” sugere que a comunicação entre cientistas e sociedade pode ser conflituosa e não obrigatoriamente de mão-única. Apesar disso, ela é utilizada sistematicamente como sinônimo de todas as expressões anteriores, sem que seus utilizadores atentem para os sentidos que a palavra mediação sugeriria.

O sentido que todas as expressões relativas à “divulgação científica” ignoram é sua manifestação como instância pública/política de discussão da ciência. A discussão propriamente científica da ciência (realizada entre pares cientistas) e a discussão epistemológica da ciência (realizada entre filósofos especialistas nesse campo) compõem dois aspectos fundamentais da discussão científica que não esgotam as discussões socialmente necessárias a respeito da ciência. Uma terceira forma necessária de discussão da ciência, entre cidadãos, tangencia o que vem sendo chamado até hoje de “divulgação científica”. Essa instância política ou pública de discussão da ciência teria como funções prestar contas aos contribuintes acerca do dinheiro público investido na produção científica, angariar apoio político para ampliações e alterações necessárias na destinação desses recursos e constituir um espectro de respeitabilidade dos cientistas no mundo público. Mas ao assumir que um dos papéis da divulgação científica é constituir esse espaço político de discussão da ciência, ela perde o seu caráter de mera divulgação e de via de comunicação de mão-única entre cientistas e sociedade. Fazer “divulgação científica” deixa de ser apenas saber explicar ciência numa linguagem acessível ao público leigo, para tornar-se saber utilizar essa capacidade comunicativa como apenas o ponto de partida para a condução de uma discussão pública a respeito da ciência, cujas funções essenciais seriam prestar contas, obter apoio político e respeitabilidade.

Entendida dessa maneira mais ampla, a “divulgação científica” seria responsável por uma quarta função, que as instâncias científicas e epistemológicas fracassam sistematicamente em realizar: o banimento da autoridade moral do âmbito da ciência. Ainda que a ciência tenha sido criada num contexto propício ao combate da autoridade moral, sua institucionalização posterior trouxe para dentro da ciência aquilo que ela foi criada para desqualificar. Se a ciência é o espaço de apresentação de evidências em detrimento de meras opiniões moralmente constituídas, seria de se esperar que a realidade sempre sobrepu-

jasse a opinião pura e simples do especialista, mas nem sempre é isso que ocorre. A “divulgação científica” seria então um espaço privilegiado para o combate à autoridade moral por ser o espaço em que o cientista é obrigado a se expressar para um público que não compactua com seus interesses institucionais. Numa comunicação científica há sempre o risco de que julgamentos morais sejam entendidos como evidências por pares interessados na legitimação desses mesmos julgamentos. Nesse caso, o interesse privado dos cientistas se sobrepõe ao interesse científico público e condena a ciência ao fracasso. A comunicação de divulgação científica é dirigida a um público que não compactua com esses interesses privados e, por isso, não está predisposto a aceitar *fashionable nonsense* (conclusões da moda científica em voga) como se fosse evidência de algo (cf. Sokal/Bricmont 1998). A divulgação científica constitui-se assim num espaço de combate às modas científicas por obrigar o cientista a escrever para um público que não tem qualquer interesse em legitimar essas modas. O fato de o público não estar diretamente implicado naquilo que se escreve permite um distanciamento que não existiria na comunicação científica e que funciona, em última instância, como uma prova de fogo ao cientista: não basta convencer seus pares, mas também os leigos, de que as evidências apresentadas são, de fato, evidências.

A comunicação de divulgação científica ainda pode ter a quinta função de ampliar os constrangimentos dos cientistas diante de conclusões desejáveis, mais fáceis de serem comunicadas a pares do que a leigos. Por exemplo, se uma historiadora feminista concluiu que as mulheres do século XVI eram menos submissas do que se pensava até então, é compreensível que seus pares não cobrem grandes evidências para balizar essa afirmação, já que ela é uma conclusão desejável (por razões ideológicas) para esses mesmos pares. Já um leigo, sem qualquer interesse em comum com o cientista (por exemplo, por não ser mulher ou por não ser feminista), tende a ser mais rigoroso do que seus pares para aceitar essa afirmação. Isso que demonstra que, neste caso, uma comunicação de divulgação científica exigiria do cientista mais rigor do que uma de comunicação científica. E rigor aqui nada tem a ver com linguagem mais ou menos acessível, mas com o nível de balizamento das evidências. É possível que um texto de divulgação científica seja infinitamente mais rigoroso do que um texto científico, ainda que o primeiro esteja escrito numa linguagem clara e, o segundo, numa linguagem acadêmica empolada. Ser um texto acadêmico não é qualquer garantia de rigor e ser um texto de divulgação científica não indica falta dele. Pelo contrário, a linguagem acadêmica repleta de jargões “científicos” pode servir como uma forma de disfarçar a ausência de rigor de um cientista predisposto a conclusões desejáveis, a reivindicar autoridade moral ou a reproduzir uma moda científica em voga. A clareza da divulgação científica desnuda tentativas de vender construções obscurantistas como rigor científico. *Aufklärung ist Klarstellung*.

Essa ampliação do espectro da divulgação científica aqui proposta extrapola os limites da expressão “divulgação científica” e exige uma nova nomenclatura que dê conta desses sentidos. É por isso que o título deste texto propõe a substituição do termo “divulgação” e a criação da expressão “responsabilização científica”. O termo “responsabilização” é uma referência direta à idéia de *accountability* recorrente nas discussões políticas, jurídicas e organizacionais (Cavill/Sohail 2007; Claibourn/Martin 2007; Fox 2007; Grant/Keohane 2005; Rubenstein 2007). Ele se expressa como “responsabilização”, e não como “responsabilidade”, porque não emana da boa vontade dos cientistas, mas de uma exigência social que precisa ser imposta a eles. Os cientistas não precisam ser “responsáveis”, mas “responsabilizados” por suas práticas, como qualquer outro profissional que trabalhe com orçamentos e interesses públicos, mas tenha interesses privados distintos desses. Ainda que a “divulgação científica” tenha sido exercida historicamente apenas pelos cientistas, seria desejável que nós não tivéssemos controle total sobre a “responsabilização científica”. Talvez a ciência seja importante demais para ser confiada exclusivamente aos cientistas.

Uma instância pública para a discussão científica

Definida como a instância pública da discussão científica, complementar à discussão entre pares e à epistemologia, a responsabilização científica reconfigura a principal atribuição da divulgação científica (a comunicação entre leigos e cientistas) com um sentido mais amplo do que o anterior. Essa comunicação passa a ser de mão-dupla e, além de exercer as típicas funções estritamente comunicativas (prestar contas, obter apoio político e respeitabilidade), inclui outras não meramente comunicativas (combate da autoridade moral, das conclusões desejáveis e do *fashionable nonsense*).

Um dos problemas que a responsabilização científica permite enfocar são os vínculos entre pesquisa e descoberta. Apesar de ser esperado que toda pesquisa leve a uma descoberta, na comunicação científica nem sempre fica claro que descoberta foi essa, seja pelo emprego exacerbado de jargões científicos que obscurecem essa questão, seja pela permissividade dos pares leitores cujos interesses privados implicam a aceitação de um discurso tautológico no lugar de uma descoberta. A clareza do texto de divulgação é um espaço singular para definição do que exatamente foi descoberto pela pesquisa, sem grandes espaços para criar subterfúgios a essa questão.

Um exemplo de substituição de descoberta científica por tautologia pode ser observado em uma vertente de pesquisas sobre livros didáticos realizada no Brasil dos anos 1970 e 1980. O precursor dessa vertente é o livro *As belas mentiras: a ideologia subjacente aos textos didáticos*, publicado em 1979 com

base numa monografia acadêmica defendida no ano anterior por Maria Nosella na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O Brasil vivia uma ditadura típica dos países latino-americanos da guerra fria e a universidade católica, por mais contraditório que isso possa parecer, abrigava então muitos dos professores marxistas impedidos de trabalhar nas universidades estatais controladas pela ditadura. Esse contexto criará um marxismo brasileiro caricato que influencia significativamente diversas áreas das ciências humanas no país até hoje. A tese central do livro *As belas mentiras*, reproduzida na década seguinte a ele em dezenas de monografias brasileiras, é a de que os livros didáticos escritos no Brasil reproduzem a ideologia capitalista. Citações marxistas e trechos de livros didáticos são costurados nessas monografias para concluir que os livros didáticos produzidos no Brasil, um país capitalista, são... capitalistas. Num contexto em que a atividade científica era confundida com essa tautologia, que pode ser compreendida como uma espécie de resistência à ditadura, a discussão entre pares demonstrou-se insuficiente para desmontar a pobreza desse raciocínio. Além da tautologia em si, esse caso é um exemplo de irresponsabilidade científica. Ao concluir que os livros didáticos são reprodutores da ideologia capitalista, esses pesquisadores marxistas se recusaram a interferir no processo de produção desses livros, na contramão do interesse público mais básico de que pesquisadores de livros didáticos ajudam a aprimorar livros didáticos. Em vez disso, esses pesquisadores passaram a pregar o fim dos livros didáticos e dedicaram mais de uma década a concluir sistematicamente a tautologia descrita, gastando para isso dinheiro público que deveria ser empregado no aprimoramento desses livros. Mas os livros didáticos brasileiros obviamente não deixaram de existir por causa disso. Muitas universidades brasileiras tratam ainda hoje essa tautologia como descoberta científica, criando um *fashionable nonsense* que adquire ares de normalidade no meio acadêmico. Na década de 1990, essa tautologia se expandiu das análises de livros didáticos para as análises de programas estatais de formação continuada de professores. Tais programas passaram a ser denunciados pelos seguidores dessa vertente como “neoliberais”. Afirmar que um programa é neoliberal é o mesmo que afirmar que ele é liberal, que é o mesmo que afirmar que ele é capitalista. Configura-se então a mesma tautologia: os pesquisadores acreditam ter descoberto que a formação de professores no Brasil, um país capitalista, tem características capitalistas. Se no contexto da ditadura era difícil a todos reconhecer esse discurso como tautológico, hoje qualquer mortal é capaz de fazê-lo, com exceção dos acadêmicos que vivem imersos num contexto em que essa tautologia tornou-se normal. Este é um exemplo de tautologia que perdura trancada no interior da universidade, mas que seria facilmente desmontada se submetida à discussão pública sobre o que fazem os cientistas, aqui chamada de responsabilização científica.

A responsabilização científica também pode adquirir a função de auxiliar o pesquisador a ampliar a consciência sobre seu objeto. Um pesquisador que comunica o que faz para leigos não beneficia apenas essas pessoas, mas o interesse científico público. Esse tipo de comunicação obriga o pesquisador a pensar no que faz e por que faz de uma forma muito sistemática. É fácil pensar em justificativas plausíveis na ótica dos interesses privados de seus pares. Já justificativas que convençam leigos precisam ser muito mais sofisticadas e exigem um nível apurado de reflexão do pesquisador. Num contexto acadêmico extremamente hierarquizado, no qual pesquisadores iniciantes assumem apenas partes isoladas do trabalho dos seus superiores, é comum encontrar aqueles que não sabem exatamente por que fazem aquilo que fazem. Teorias, métodos e objetos são muitas vezes selecionados apenas por estarem na moda, por serem indicação do orientador ou por serem os únicos com os quais o orientador trabalha. Um pesquisador que se sujeita a uma dessas situações normalmente encontra dificuldade para explicar a si mesmo por que realiza a sua pesquisa. O grande problema para o interesse científico público é que pesquisadores subservientes e com um baixo nível de reflexão sobre aquilo que fazem podem ser mais propícios a ascender na carreira acadêmica, já que uma carreira focada no objeto e na descoberta demanda muito mais tempo do que uma carreira focada na mera obtenção dos títulos. Um pesquisador formado numa lógica não-reflexiva será tendencialmente na maturidade um pesquisador não-reflexivo, que por isso promoverá discípulos não-reflexivos, criando um ciclo nocivo ao interesse científico público. O hábito de comunicar a razão de ser de uma pesquisa ao público leigo tem consequências muito mais profundas sobre o interesse científico público do que apenas tornar os leigos mais informados. Na ótica do interesse científico público, o nível de reflexão que a justificativa aos leigos demanda do cientista traz mais benefícios à sua formação do que aos leigos. Essa é uma diferença fundamental da responsabilização científica em relação à divulgação científica. Um mesmo fato, a comunicação aos leigos, perde o sentido de algo que beneficia apenas a eles para ser algo que traz mais benefícios aos próprios cientistas, em nome do interesse científico público.

Ao combater a tautologia e ampliar a consciência dos pesquisadores sobre seu objeto, a responsabilização científica permite enfrentar um terceiro problema da ciência, que é a transformação dos cânones de pesquisa. Quando a discussão desses cânones fica restrita à universidade, é comum que eles sejam submetidos aos interesses privados dos cientistas, que normalmente os sustentam por mais tempo do que desejaria o interesse científico público. Um cientista que se estabelece rigidamente sob um determinado cânone fica vulnerável a descobertas que demonstram as fragilidades desse mesmo cânone. Esse cientista pode então agir politicamente para boicotar essas pesquisas, dando

pareceres desfavoráveis ao financiamento delas, à publicação de artigos científicos sobre elas e à contratação dos pesquisadores que as realizam. Contrariando o interesse científico público, o cânone nesse caso não dura o tempo que o desenvolvimento da pesquisa científica demoraria para destituí-lo, mas o tempo da carreira do pesquisador que depende desse cânone. A morte ou aposentadoria desse pesquisador seria então sua maior contribuição à ciência, já que ele deixaria de emperrar a necessária substituição do cânone. A discussão pública dos cânones de pesquisa, a ser promovida pela responsabilização científica, contribuiria à renovação sistemática desses cânones e dificultaria sua manutenção *après la lettre* apenas para servir aos interesses privados dos cientistas.

Mais do que contribuir com a renovação dos cânones de pesquisa, a responsabilização científica poderia influenciar a dinâmica institucional da ciência. Fazer pesquisa envolve concretizar institucionalmente os cânones em departamentos, institutos, faculdades, laboratórios, bibliotecas e centros de pesquisa. Muito investimento de dinheiro público é feito na criação dessas instituições, cujo prazo de existência deveria ser definido pela sua resposta ao interesse científico público. Mas enquanto essa discussão está limitada à universidade e aos interesses privados dos pesquisadores, a existência e o volume de financiamento das instituições científicas depende apenas da habilidade política de seus gestores. Isso permite que o fechamento ou redução de recursos de uma determinada instituição cuja pesquisa contemplaria o interesse científico público conviva com o financiamento de instituições dispensáveis.

Um exemplo concreto de instituição científica obsoleta que subsiste em detrimento do interesse científico público são os cursos de licenciatura brasileiros. Esses cursos, compostos por apenas seis disciplinas de graduação que somam 360 horas, supostamente transformam um bacharel em qualquer área científica (História, Biologia, Física etc.) num professor dessa disciplina na escola básica. Esse tipo de organização curricular está pautada naquilo que André Chervel chama de “pedagogia lubrificante” e só poderia sobreviver institucionalmente caso essa concepção ainda se sustentasse teoricamente (Chervel 1990: 182). Segundo essa concepção, criticada por Chervel, as disciplinas escolares seriam resultado da adaptação das disciplinas científicas à escola e a pedagogia seria utilizada como lubrificante para transformar disciplinas científicas em escolares. Sabemos há algumas décadas que isso não ocorre assim. Os saberes escolares foram criados “pela própria escola, na escola e para a escola” (Chervel 1990: 181); eles não são saberes eruditos lubrificados. Portanto, um professor não se forma com aulas de Didática Geral ou de Psicologia da Educação superpostas a seu conhecimento científico sobre a disciplina em que se formou na universidade. Submetidos a essa licenciatura, os estudantes de graduação brasileiros aprendem a ser professores apesar dela, e não graças a ela. Por que a universidade brasileira impõe esse processo equivocado de

formação a seus estudantes, se já sabemos que não é assim que se forma um professor? A resposta a essa pergunta explicita a contradição entre o interesse científico público e o interesse privado dos docentes que controlam as universidades brasileiras. Caso a discussão sobre o processo de reformulação dos cursos de licenciatura fosse pública, ela poderia implicar uma reformulação completa desses cursos para atender ao conhecimento científico atual sobre como se forma um professor. O interesse público sobre os cursos de licenciatura é garantir que eles formem os melhores professores possíveis, ainda que isso implique dispensar os docentes de Didática Geral e de Psicologia da Educação e eliminar essas disciplinas do currículo. O interesse privado dos docentes de Didática Geral e de Psicologia da Educação é garantir seus empregos. A licenciatura brasileira não se transforma substancialmente há décadas, mesmo sendo ineficiente no cumprimento de sua função, porque as discussões sobre sua transformação estão encerradas na universidade. Essas discussões são monopolizadas pelos docentes que perderiam seus empregos caso o conhecimento científico que se tem hoje sobre formação de professores fosse aplicado à reformulação institucional da universidade. Empreender um processo de responsabilização científica, neste caso, forçaria uma instituição científica a funcionar nos moldes das descobertas científicas de sua área. Este é um exemplo de como os interesses privados dos cientistas podem funcionar como um freio à própria ciência e de como a inclusão dos leigos no debate científico pode ser mais benéfica à ciência do que o monopólio desta pelos cientistas.

Um último possível efeito da responsabilização científica sobre as práticas dos cientistas está relacionado à relevância da pesquisa científica diante do saber socialmente acumulado sobre o mesmo tema, o que inclui o saber não-científico. Esse efeito é bastante limitado e talvez restrito a algumas áreas das ciências humanas, como as pesquisas sociológicas, psicológicas e pedagógicas. No caso das pesquisas sociológicas, especialmente das pesquisas de gabinete sobre setores desprivilegiados da sociedade, realizadas por cientistas sem o menor contato com seus sujeitos, não é raro que suas conclusões sejam bastante perspicazes do seu próprio ponto de vista, mas excessivamente simplórias quando cotejadas àquilo que os próprios sujeitos pesquisados (ou outros setores da sociedade) já sabem sobre eles. Caso essas pesquisas fossem responsabilizadas publicamente, seus autores poderiam ouvir dos sujeitos ou de outros leigos que seria desnecessário gastar todo o dinheiro público envolvido na pesquisa para chegar àquelas conclusões. Isso ocorre porque as hipóteses sobre os sujeitos são formuladas com base na ignorância, na distância e nos preconceitos do pesquisador sobre eles. O conhecimento que o pesquisador produz então representa um avanço em relação à sua ignorância, mas não um avanço em relação ao saber socialmente acumulado (o que inclui o saber dos próprios sujeitos e o saber não-científico de outros setores da sociedade) a res-

peito do tema. Um exemplo concreto disso pode ser uma pesquisa sociológica sobre a gravidez na adolescência entre garotas das classes populares que conclua que elas não engravidam por falta de informação a respeito do funcionamento do seu sistema reprodutor. Esta conclusão pode ter um efeito útil sobre as políticas de saúde, ao alertar sobre gastos com campanhas informativas sem sentido que subestimam a capacidade intelectual dessas garotas. Por outro lado, é óbvio para essas garotas e para todos do seu entorno que elas não engravidam por falta de informação. A hipótese de que elas engravidariam por falta de informação, que culmina com sua não confirmação pela pesquisa, é resultado apenas da postura ignorante e preconceituosa do pesquisador a respeito delas. Caso o pesquisador se informasse não apenas na bibliografia científica sobre o tema, mas também no conhecimento não-científico, talvez não desperdiçasse dinheiro público para descobrir aquilo que o público já sabe. Outro exemplo concreto do efeito da ignorância do pesquisador a respeito do saber não-científico sobre seu tema pode ser observado nas pesquisas pedagógicas e psicológicas sobre aprendizagem. Quando conduzidas por pedagogos ou psicólogos que nunca lecionaram na escola básica, essas pesquisas frequentemente “descobrem” aquilo que os professores (que não são cientistas, mas convivem cotidianamente com os alunos) já sabiam. Um pedagogo ou psicólogo que consulta apenas seus pares e ignora o saber socialmente acumulado sobre os sujeitos de sua pesquisa (que neste caso é bastante grande), convive com a possibilidade de concluir aquilo que já se sabe sobre o tema. Claro que é sempre possível argumentar que, nos exemplos citados, o sociólogo, psicólogo ou pedagogo sistematizou cientificamente um saber popular, o que justificaria o dinheiro gasto com a pesquisa e amenizaria o fato de ele “descobrir” aquilo que os leigos já sabiam. Também é possível realizar uma pesquisa para “dar voz aos excluídos” e apenas reproduzir o que eles já sabem sobre eles mesmos. As duas opções não passam de *fashionable nonsense* e de falta de responsabilidade para com a descoberta, ambos já discutidos aqui.

Sobre cultura histórica

No caso da História, qual seria o papel da responsabilização científica e como ela poderia articular-se aos conceitos específicos dessa disciplina? A tradição germânica já possui um conceito para definir o conjunto dos saberes históricos não-científicos, que é o conceito de cultura histórica. Este conceito define todos os “processamentos da História sem forma científica” que identificam “a forma como uma sociedade lida com seu passado e sua História” (Pandel 2006b: 74). Ela é uma forma específica de experimentar e interpretar o mundo, que descreve e analisa a orientação da prática de vida, a auto-compreensão e a

subjetividade dos seres humanos (Rüsen 1997: 38). Nem todas as sociedades possuíram uma cultura histórica: trata-se de um fenômeno da Modernidade, que pressupõe uma História compreendida de forma singular por um coletivo (Pandel 2006b: 75).

A cultura histórica é a “efetiva associação da consciência histórica na vida de uma sociedade” (Rüsen 1994: 5). A consciência histórica e a cultura histórica podem ser definidas sem contradição se forem entendidas, no sentido da “Sociologia do Conhecimento”, como “os dois lados de uma mesma moeda”. De um lado, a consciência histórica desenvolve-se como um “constructo individual”, “durante processos de internalização e de socialização”. De outro lado, a cultura histórica, enquanto “constructo coletivo”, “desenvolve-se no processo oposto de externalização e de objetivação” (Schönemann 2002: 79). A consciência histórica é um “modo de processamento psíquico do saber histórico”, que é formado sobre esse saber mas possui uma relativa autonomia em relação a ele. A consciência histórica não é o acúmulo de saber histórico, mas o “modo simbólico” de processar o contingente de informações reunido nesse saber para orientar-se na temporalidade do passado, presente e futuro. Um indivíduo pode ter consciência histórica mesmo sem ter consciência disso (Pandel 2006a).

É difícil definir consciência histórica com precisão, principalmente se levarmos em conta as diferenças entre as definições dos autores francófonos – *conscience historique* – e germanófonos – *Geschichtsbewußtsein*. Parte dessas diferenças se deve ao fato de a expressão “consciência histórica” reunir mais de um conceito. Um deles define a consciência da disciplina História. Nesse sentido, a consciência histórica é uma consciência disciplinar, uma representação sobre essa disciplina ou sobre a forma como ela organiza simbolicamente o mundo (Reuter 2003: 18-19). Nicole Tutiaux-Guillon e Marie-José Mousseau utilizam esse conceito de consciência histórica – *conscience historique* – ao descrevê-la como uma determinada representação sobre o passado – crer que existe “uma ligação entre passado e presente” ou que o “presente serve de referência para compreender o passado” – e sobre conceitos, acontecimentos ou sujeitos específicos desse passado – “a Idade Média, a Revolução Industrial, Hitler” (Tutiaux-Guillon, Mousseau 1998: 101-102). François Audigier acrescenta a esse conceito de consciência histórica que ela é um privilégio da Modernidade, que permite uma consciência da relatividade de todas as opiniões. Além disso, ela é a consciência de “ser precedido de maneira insuperável por um mundo que nos dá a possibilidade de ter um projeto, de pensar um futuro” (Audigier 1998: 127-128). Esse primeiro conceito de consciência histórica se aproxima do que Robert Martineau e Nicole Lautier denominam *pensée historienne*. Martineau define *pensée historienne* como um modo de pensar da cultura histórica – *culture historienne* –, um domínio específico do

pensamento que faz da História mais do que um campo da cultura (Martineau 1999: 116-118). Lautier define *pensée historienne* como uma ação crítica caracterizada pelas “operações” de periodização, controle da análise comparativa, controle do grau de generalização e distinção dos níveis de leitura e escritura – a imagem fixa, o filme, a caricatura, o mapa, as pinturas (Lautier 1997: 124-128).

Um segundo conceito expresso por “consciência histórica” define o entendimento da inserção social de um indivíduo ou de um grupo na história de sua sociedade. Esse conceito aproxima-se do que a bibliografia específica também chama de memória – *mémoire* –, de memória coletiva – *mémoire collective* – ou de identidade – *identité* (Laville 2003: 15). Henri Moniot define “identidade” como sinônimo de “consciência” e de “memória coletiva”. Segundo esse autor, a identidade se constitui das histórias contadas por um indivíduo ou por uma comunidade, histórias essas que são retocadas, corrigidas, reprimidas, desmentidas e analisadas pelos historiadores (Moniot 1993b: 77).

Um terceiro conceito expresso por “consciência histórica” representa a consciência da temporalidade histórica. Esse conceito define a capacidade humana de situar-se no tempo, não enquanto grandeza física, mas conforme ele foi historicamente concebido desde a Modernidade. Neste sentido ontogênico, a origem da consciência histórica estaria imersa no processo de aquisição da linguagem (Pandel 2006a: 70, Klose 1997: 51-53). Para falar, os indivíduos aprendem palavras que expressam o tempo – ontem, rápido, freqüentemente etc. – e, por meio delas, moldam um conceito de tempo próprio de sua cultura. Esse conceito de tempo não é “lógico”, mas “histórico”: é o tempo “socialmente produzido”, “das inovações técnicas, da dinâmica das organizações, da formação de normas” (Lepetit 1995: 273-274).

O quarto conceito incluso em “consciência histórica”, proposto por Jörn Rüsen, define essa consciência como “fundamento de todo conhecimento histórico”. Para Rüsen, todas as formas de conhecimento histórico, inclusive o criado pela ciência da história, são “um modo particular de um processo genérico e elementar do pensamento humano”. Isso permite a Rüsen definir a consciência histórica como “fundamento da ciência da história” e, segundo ele, fundamentar essa ciência num processo externo a qualquer “concepção particular da história, vinculada a tal ou qual cultura” (Rüsen 2001: 56).

Poderíamos ainda pensar num quinto conceito de consciência histórica que, de acordo com a definição hegeliana, desfizesse a sinédoque contida na palavra “história”, que confunde os acontecimentos – *res gestas* – e a narrativa sobre esses acontecimentos – *historiam rerum gestarum* (Hegel 1973: 65). Essa diferenciação poderia ser efetuada pelos conceitos de *Bewußtsein/Unbewußtsein* e de *Geschichtsbewußtsein/Historienbewußtsein*. Esses dois últimos conceitos seriam igualmente traduzidos como “consciência histórica” em lin-

guas que não possuem substantivos diferentes para a história enquanto acontecimento e para a História enquanto narrativa – como o português, o inglês e o francês. Na língua alemã atual, a história enquanto acontecimento é *Geschichte* e a História enquanto narrativa é *Historie*, daí a tentativa de expressar dessa forma os dois conceitos de consciência histórica propostos. A língua inglesa diferencia *history* de *story* e não diferencia acontecimento de narrativa, o que reforça essa indiferenciação do ponto de vista de um leigo, ao atribuir um caráter de ficção para a *story* e de suposta verdade para a *history*. Apesar de não possuírem substantivos diferentes para a história enquanto acontecimento e para a História enquanto narrativa, as línguas inglesa e francesa possuem respectivamente os adjetivos *historic* e *historique* – relativos a *res gestae* – e os adjetivos *historical* e *historienne* – relativos a *historia rerum gestarum* –, o que ameniza essa indiferenciação. A palavra *historienne* ainda consta dos dicionários franceses apenas como substantivo, mas ela já é utilizada como adjetivo há algumas décadas na bibliografia específica.

Em suma, a expressão “consciência histórica” pode definir o pensar segundo conceitos e métodos históricos – pelo desenvolvimento de uma representação da disciplina História e da forma de pensamento disciplinar que lhe é subjacente –, o entender-se parte de uma história, o situar-se no tempo, o fundamento do conhecimento histórico e talvez a consciência de que há uma diferença entre os acontecimentos e sua narrativa. Independentemente de qual ou quais dessas definições se utiliza, todas elas se expressam na cultura histórica. Há coerência na utilização de mais de um desses conceitos de consciência histórica, ou na utilização de vários como se fossem um só, desde que haja compatibilidade entre eles. Por exemplo, as três primeiras definições podem ser complementares e o mesmo ocorre com a terceira e quarta. Porém, a segunda e quarta definições são inconciliáveis.

Independentemente dos conceitos de cultura histórica e de consciência histórica utilizados, existe uma separação nítida entre ambos e o conceito de *Geschichtswissenschaft*, que representa o conhecimento histórico científico ou a História dos historiadores. No caso específico da História, o conceito de responsabilização científica proposto neste texto serve como elo entre a História científica e a História não-científica, representada pela cultura histórica e pela consciência histórica. A responsabilização científica em História tem a especificidade de não reunir leigos absolutamente alheios ao conteúdo dessa disciplina, diferentemente do que poderia ocorrer com outras disciplinas científicas. Todo leigo possui consciência histórica e está imerso na cultura histórica, pois tem acesso à História no cinema, no teatro, na TV, nas revistas, nos memoriais, nas comemorações públicas, nos livros didáticos, nas escolas etc. Ainda é importante lembrar que, da mesma forma que os leigos, os historiadores possuem consciência histórica e estão imersos na cultura histórica. Isso

reforça a importância da responsabilização científica para a História, já que leigos e cientistas precisam discutir publicamente, neste caso, não apenas por terem em comum o fato de serem cidadãos, mas também por terem em comum sua relação com a consciência histórica e com a cultura histórica.

A relação dos historiadores com a consciência histórica e a cultura histórica corrobora um fenômeno chamado por André Chervel de “efeito Wilamowitz”, em referência ao filólogo alemão Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff, que sugeriu em 1889 a influência do saber leigo sobre o conhecimento erudito (Chervel 1998: 183-184, 234). O “efeito Wilamowitz” em História implica a influência da cultura histórica sobre a História científica. Ou seja, os historiadores influenciam a cultura histórica com suas pesquisas tanto quanto essas mesmas pesquisas são influenciadas pela cultura histórica. A criação de um processo de responsabilização científica dos historiadores explicitaria essa realidade que muitos deles ainda têm dificuldade para aceitar. Os historiadores não são os proprietários da História, que se expressa socialmente apesar deles e muitas vezes livre de sua influência. A responsabilização científica em História apresenta, além de todas as perspectivas descritas até aqui, a possibilidade de os historiadores reconhecerem o quanto são influenciados pela consciência histórica e pela cultura histórica e utilizarem essa informação para refinar os resultados de sua pesquisa. Responsabilizar cientificamente um historiador implica criar uma relação com os leigos para além do fornecimento de informações sobre os resultados da pesquisa. Um historiador sujeito à responsabilização científica compreende-se imerso na cultura histórica, reconhece a via de mão-dupla entre cultura histórica e História científica e faz uso dessa meta-consciência histórica em benefício da ampliação do rigor de seu trabalho.

Referências bibliográficas

- AUDIGIER, François (1998): “Les jeunes, la conscience historique et l’enseignement de l’histoire”, em: Tutiaux-Guillon, Nicole/Mousseau, Marie-José (eds.): *Les jeunes et l’histoire: identités, valeurs, conscience historique*. Paris: INRP, pp. 127-133.
- CAVILL, Sue/SOHAIL, M. (2007): “Increasing strategic accountability: a framework for international NGOs”, em: *Development in Practice*, vol. 17, 2, pp. 231-248.
- CHERVEL, André (1990): “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa”, em: *Teoria & Educação*, vol. 2, pp. 117-229.
- (1998): *La culture scolaire: une approche historique*. Paris: Belin.
- CLAIBOURN, Michele P./MARTIN, Paul S. (2007): “The Third Face of Social Capital: How Membership in Voluntary Associations Improves Policy Accountability”, em: *Political Research Quarterly*, vol. 60, 2, pp. 192-201.
- FOX, Jonathan (2007): “The uncertain relationship between transparency and accountability”, em: *Development in Practice*, vol. 17, 4-5, pp. 663-671.

- GRANT, Ruth/KEOHANE, Robert (2005): “Accountability and Abuses of Power in World Politics”, em: *American Political Science Review*, vol. 99, 1, pp. 29-43.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1973): *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*. Frankfurt: Suhrkamp.
- KLOSE, Dagmar (1997): “Geschichtsbewußtsein – Ontogenese”, em: Bergmann, Klaus *et alii* (eds.): *Handbuch der Geschichtsdidaktik*. Seelze/Velber: Kallmeyer, pp. 51-56.
- LAUTIER, Nicole (1997): *Enseigner l’histoire au lycée*. Paris: Armand Colin.
- LAVILLE, Christian (2003): “Pour une éducation historique critique, qu’attendre du courant de la conscience historique?”, em: Tutiaux-Guillon, Nicole/Nourrisson, Didier (eds.): *Identités, mémoires, conscience historique*. Saint-Étienne: Publications de l’Université de Saint-Étienne, pp. 13-25.
- LEPETIT, Bernard (1995): “Le présent de l’histoire”, em: Lepetit, Bernard (eds.): *Les formes de l’expérience: une autre histoire sociale*. Paris: Albin Michel, pp. 273-298.
- MARTINEAU, Robert (1999): *L’histoire à l’école, matière à penser...* Paris: L’Harmattan.
- MONIOT, Henri (1993): *Didactique de l’Histoire*. Paris: Nathan.
- PANDEL, Hans-Jürgen (2006a): “Geschichtsbewusstsein”, em: Mayer, Ulrich *et alii* (eds.): *Wörterbuch Geschichtsdidaktik*. Schwalbach: Wochenschau, pp. 69-70.
- PANDEL, Hans-Jürgen (2006b): “Geschichtskultur”, em: Mayer, Ulrich *et alii* (eds.): *Wörterbuch Geschichtsdidaktik*. Schwalbach: Wochenschau, pp. 74-75.
- PAUL, Danette (2004): “Spreading Chaos: The Role of Popularizations in the Diffusion of Scientific Ideas”, em: *Written Communication*, vol. 21, 1, pp. 32-68.
- REUTER, Yves (2003): “La représentation de la discipline ou la conscience disciplinaire”, em: *La Lettre de la D.F.L.M.* Saint-Cloud: AIRDF, 1, 32, pp. 18-22.
- RÜSEN, Jörn (1994): “Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken”, em: Fußmann, Klaus *et alii* (eds.): *Historische Faszination: Geschichtskultur heute*. Köln: Böhlau, pp. 3-26.
- (1997): “Geschichtskultur”, em: Bergmann, Klaus *et alii* (eds.): *Handbuch der Geschichtsdidaktik*. Seelze/Velber: Kallmeyer, pp. 38-41.
- (2001): *Razão Histórica: Teoria da História – os fundamentos da ciência histórica*. Brasília: Editora UnB.
- RUBENSTEIN, Jennifer (2007): “Accountability in an Unequal World”, em: *The Journal of Politics*, vol. 69, 3, pp. 616-632.
- SCHÖNEMANN, Bernd (2002): “Geschichtskultur als Forschungskonzept der Geschichtsdidaktik”, em: *Zeitschrift für Geschichtsdidaktik*. Schwalbach: Wochenschau, pp. 78-86.
- SOKAL, Alan D./BRICMONT, J. (1998): *Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science*. New York: Picador.
- TUTIAUX-GUILLON, Nicole/MOUSSEAU Marie-José (1998): *Les jeunes et l’histoire: identités, valeurs, conscience historique*. Paris: INRP.

Henrique Cukierman

Um mapa inicial para uma história comparada da informática brasileira¹

A que se refere o termo informática? Uma informática, a que se pretende neutra e universal, supõe como referência um corpo coeso e único de conhecimentos. O presente artigo propõe-se a trafegar na contramão dessa suposta unidade, *procurando mapear, a partir de um conjunto selecionado de leituras e ainda que de forma incipiente*, as condições de possibilidade de uma abordagem comparativa entre as informáticas do chamado Primeiro Mundo e a informática brasileira, cujas diferenças se evidenciam quando examinadas a maneira como as práticas locais recebem, reproduzem e/ou reconstróem essa suposta universalidade.

Como poderia esta tarefa ser levada a cabo? Um ponto de partida que aqui será *esboçado* é a composição de um mapa de relações – entre tecnologia, pesquisa, mercado, comunidade científica, forças armadas, universidade, indústria, software, gestão, financiamento, tradições, cultura, etc. – que permita entrever um quadro comparativo que dê conta de subsidiar possíveis estratégias para lidar com as assimetrias entre o Brasil e o chamado Primeiro Mundo. Se um tal mapa for conjugado a uma investigação mais minuciosa das políticas nacionais, dos debates e das experiências brasileiras em informática, especialmente quando cotejados com os planos norte-americanos e europeus, a perspectiva comparada provavelmente colocará em questão o que tem sido, desde o século 19, um duro desafio para as elites intelectuais brasileiras, a saber, a de realizar o sonho de construir um país tão ‘moderno’ quanto os ‘mais modernos’. Realizá-

¹ O presente artigo é resultado de rica e intensa troca de experiências com Ulf Hashagen, pesquisador do Forschungsinstitut für Technik- und Wissenschaftsgeschichte, do Deutsches Museum, Munique, Alemanha, onde permaneci durante três meses, de janeiro a março de 2009, graças a uma bolsa Thyssen/Humboldt. Meus sinceros agradecimentos ao Ulf Hashagen e à Fundação Humboldt por esta magnífica oportunidade.

Uma versão preliminar do presente artigo foi apresentada para discussão no 12º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, realizado conjuntamente com o 7º Congresso Latino-Americano de História da Ciência e da Tecnologia, ocorrido em Salvador, de 12 a 15 de novembro de 2010.

lo demanda-lhes a superação de diferenças percebidas única e exclusivamente como uma ‘falha’, jamais como uma vantagem ou sequer como uma oportunidade de produção de novos conhecimentos, novas lições e novas posturas. Leyla Perrone-Moisés (2007: 27, grifos do autor), em seu livro *Vira e mexe, nacionalismo – Paradoxos do nacionalismo literário*, aproxima-se dessa ‘falha’ pelo viés da cultura latino-americana, observando com muita propriedade que “[o] Velho Mundo, ao olhar o Novo, deveria encontrar não o seu próprio rosto espelhado e degradado, nem um rosto totalmente exótico destinado a diverti-lo ou comovê-lo a distância, mas um rosto que devolvesse o seu olhar e que lhe demonstrasse que há outras maneiras de olhar a si mesmo e ao outro. **Nosso objetivo deveria deixar de ser ‘abafar na Europa’, e simplesmente mostrar a ela o que fizemos de diferente com o que ela nos trouxe**”.

A hipótese é que, ao examinar como práticas locais produzem e/ou reconstróem um corpo ‘único’ de conhecimentos em informática, tona-se possível observar similaridades e diferenças entre as diversas informáticas, em especial a produção e distribuição de assimetrias ao longo dos mais diferentes lugares. Uma primeira tentação é a de invocar uma divisão Norte-Sul para descrever as assimetrias entre o Brasil e esses outros países, mas uma divisão Norte-Norte, isto é, entre Estados Unidos e Europa, provavelmente teria de ser levada também em consideração, ou até mesmo uma divisão Sul-Sul, a depender do exame das diferenças entre o Brasil e seus vizinhos sul-americanos. Portanto, muito provavelmente, não há algo como uma única e simples divisão a apartar o planeta em duas regiões bem definidas – o Norte e o Sul – mas sim uma configuração provisional de semelhanças e diferenças entre múltiplas regiões. Mesmo assim, chama a atenção, em todos os textos selecionados, uma forte preocupação com a posição isolada dos EUA muito à frente dos demais países. A depender dessas leituras, não há maneira de ingressar no campo da história comparativa da informática sem levar em consideração a posição privilegiada dos norte-americanos.

Portanto um quadro comparativo histórico pode evidenciar o termo ‘informática’ como uma referência a: 1) um corpo de conhecimentos configurado e estabilizado pela ciência e tecnologia norte-americanas, cuja hegemonia consolida-se através da sua ‘simples’ difusão (Cortada 2008) e cuja ‘excelência’ é ‘meramente’ adaptada para as diferentes realidades nacionais; 2) um conjunto ‘resistente’ de esforços para produzir conhecimentos fora do (maciçamente financiado) complexo ‘militar-acadêmico-industrial’ dos norte-americanos, bem como as maneiras pelas quais tais esforços são guiados por contextos locais, a saber:

- por vezes de forma acentuadamente política e ideológica – como no caso da experiência chilena do governo socialista de Salvador Allende (Medina 2006);

- por vezes através de movimentos imprevistos em sintonia com as demandas de mercado, como no caso do SAP – software de informatização de negócios (Leimbach 2008);
- por vezes sob a aura de uma retórica nacionalista, como no caso francês, explícito no Plan Calcul dos anos 60 (Mounier-Kuhn 1989, 1989a, 1995), ou no caso finlandês em suas relações com os mitos presentes nas tradições culturais finlandesas (Paju 2008), ou ainda no próprio caso brasileiro quando da reserva de mercado dos anos 70 e 80;
- por vezes, para o bem ou para o mal, através da tradição acadêmica de pesquisa, como no caso da Matemática Aplicada na Alemanha (Hashagen 2010) e na França (Chamak 1999);
- por vezes através da existência (ou inexistência) de uma indústria local, como no caso da Bull (Mounier-Kuhn 1989; Leclerc 1990), das máquinas alemãs de Konrad Zuse (Rojas/Hashagen 2002; Hashagen 2010; Hellige 2003; Petzold 2003) ou no caso da Ferranti do Canadá (Vardalas 2001);
- por vezes com o suporte massivo de políticas nacionais nos anos 50 e 60 como na Alemanha (Hashagen 2010), na França (Mounier-Kuhn, 1989, 1989a), no Canada (Vardalas 2001), e no Brasil (mais tardiamente, nos anos 70 e 80);
- por vezes por conta de preocupações militares com a questão da soberania nacional e do domínio de tecnologias de guerra, como no Canada (Vardalas 2001), na Alemanha (Hashagen 2010), e no Brasil;
- e, na maior parte das vezes, através de uma combinação local e específica destas motivações para ‘resistir’ à hegemonia norte-americana.

A lista acima poderia ser facilmente expandida para dar conta, entre outras tantas motivações a serem incluídas, da dinâmica do mercado de trabalho, da definição das profissões (Hoffsas 1990) e de sua regulação, etc. Curiosamente, ‘resistir à hegemonia norte-americana’, em termos de uma abordagem comparativa, pode ser compreendido como ‘resistir à comparação’, na medida em que o esforço em produzir histórias locais certamente reforçaria diferenças e incomensurabilidades, como seria o caso das enormes diferenças na escala de financiamento das informáticas locais, a exemplo da distância entre os gigantes investimentos dos EUA quando comparados àqueles do Canadá (Vardalas 2001) e da Alemanha (Hashagen 2010).

Assim como deu-se a tentativa por seguir a trilha de uma suposta divisão Norte-Sul (que parece superada por um panorama muito mais rico em diferenças e semelhanças no seio do chamado Primeiro Mundo), as leituras do caso chileno também poderiam apontar na direção de uma potencial divisão Sul-Sul. Uma tal divisão separaria o Brasil de seus vizinhos sul-americanos, a

depende de indicadores tais como o tamanho do mercado e a experiência na fabricação de computadores (Medina 2008). Todavia, conforme já o apontamos anteriormente, o caminho de maior rendimento para uma história comparativa parece requerer, como ponto de partida, a não existência de uma única e singular lacuna a dividir o planeta em duas regiões definidas – Norte vs. Sul, ou EUA vs. ‘o resto do mundo’, ou ainda Sul vs. Sul – mas sim um mapa de similaridades e diferenças entre múltiplas regiões e países.

No caso brasileiro, o enquadramento temporal admite como ponto inicial de corte o ano de 1958, quando o Governo Federal criou um grupo de trabalho – que acabou formalizando-se mais adiante como Grupo Executivo para Aplicação de Computadores Eletrônicos (GEACE) – para estudar a viabilidade de utilização de um computador para calcular e distribuir os recursos financeiros alocados ao Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek. O recorte temporal pode ser estendido até alcançar o ano de 1991, quando uma segunda lei de informática entrou em vigor (Lei nº 8.248, de 23/10/1991) abolindo os pilares nacionalistas da lei que lhe antecedeu (Lei nº 7.232, de 29.10.1984). Esse período pode ser internacionalmente caracterizado pela busca dos mais diversos países por uma competência nacional em projeto e fabricação de computadores, conforme apontado por Vardalas (2001: 1):

Entre 1945 e 1975, uma nova geração de empreendedores criou novas indústrias para explorar as técnicas eletrônicas digitais. Foi também durante esse período que cada país criou o núcleo de sua expertise acadêmica, industrial e governamental na qual encontram-se as raízes da sua atual competência técnica no universo digital. Foram nesses anos que as principais nações industrializadas do mundo, desafiadas pela hegemonia industrial dos EUA, pela primeira vez batalharam para assegurar competência local em projeção e manufatura em conformidade com o paradigma da eletrônica digital².

A citação acima aponta uma forte comensurabilidade, que de fato encontramos, entre as diversas experiências nacionais de meados dos 1950s a meados dos 1970s, a saber, a da busca de domínio e autonomia locais em relação às tecnologias da computação. Um exemplo é o próprio caso brasileiro, ainda que ocorrido mais tardiamente (a partir dos 1970s), articulado com os objeti-

² No original: “Between 1945 and 1975, a new generation of entrepreneurs created new industries to exploit digital electronic techniques. It was also during this period that each nation created the core of academic, governmental, and industrial expertise in which present-day technical competence in the digital universe is rooted. It was during those years that the major industrialized nations of the world, challenged by the technological and industrial hegemony of the United States, first scrambled to assert domestic design and manufacturing competence within the paradigm of digital electronics”.

vos dos governos da ditadura militar de transformar o Brasil em uma potência mundial. O forte teor nacionalista e autonomista da experiência que ficou conhecida como ‘reserva de mercado’ – o mercado brasileiro, inicialmente o de minicomputadores, mais tarde também o de microcomputadores, foi reservado a empresas nacionais de meados dos 1970s até o início dos 1990s – revela-se claramente nas propagandas da época dos minicomputadores então produzidos no Brasil. As figuras 1, 3 e 4 abaixo permitem apreciar os textos e o visual explícitos e diretos dos anúncios de lançamento dos minicomputadores Cobra 530 e 540, produzidos pela Cobra Computadores, uma empresa de economia mista, porém predominantemente estatal, que esteve na vanguarda da reserva de mercado. Na figura 1, se pode ler (grifos do autor) que

[u]m país que pretende ser grande e forte tem que desenvolver sua própria tecnologia em informática. O Cobra 530 é o primeiro computador **verdadeiramente nacional** capaz de resolver com rapidez qualquer problema de processamento de dados. (...) O Cobra 530 é a resposta da Cobra à reserva de mercado. É o desenvolvimento e a fixação de tecnologia nacional num setor onde não há meio termo: **independência ou morte.**

Se chama a atenção a idéia de força e grandeza nacionais associadas ao domínio da tecnologia em informática, a referência à independência não poderia ser menos patriótica e eloquente: as palavras que fecham o anúncio, ‘independência ou morte’, fazem uma referência direta a nada mais nada menos que o episódio do chamado ‘Grito do Ipiranga’ (celebrizado pelo quadro de Pedro Américo, de 1888, reproduzido na figura 2), o qual, de acordo com a história oficial, teria sido bradado às margens do riacho Ipiranga (atual cidade de São Paulo) pelo Príncipe Regente D. Pedro, marcando assim a independência do Brasil de Portugal. A ‘marca registrada’ da independência cruza século e meio para reaparecer triunfante como sinal distintivo da tecnologia nacional.

O anúncio da figura 3, cultivando o mesmo tom nacionalista, principia por uma convocação ufanista, incitando o leitor ao ardor patriótico, expresso na sugestão de ‘estufar o peito’. Ainda se pode ler nessa propaganda que

[p]rojetado, desenvolvido e produzido por técnicos brasileiros, que trabalham numa empresa totalmente nacional, o Cobra 530 não deve nada aos seus similares estrangeiros. E o que é melhor, por ser feito por gente nossa, ele é muito mais adequado às necessidades de processamento de dados em nosso país. (...) Como brasileiro, você tem muitas razões para se orgulhar do Cobra 530 (...) ele representa a consolidação de uma tecnologia própria, independente. É a prova de que, também no campo da informática, estamos vencendo os desafios.

Mais uma vez, a publicidade percute a tecla da independência tecnológica, causa somente possível, segundo o texto, se abraçada por ‘gente nossa’, e

**Computador é como petróleo:
é perigoso depender dos outros.**

Um país que pretende ser grande e forte tem que desenvolver sua própria tecnologia em informática. O Cobra 530 é o primeiro computador verdadeiramente nacional capaz de resolver com rapidez qualquer problema de processamento de dados.

Projetado para permitir grande flexibilidade de configuração, tanto de hardware quanto de software, o Cobra 530 é muito eficiente para processamento interativo, em lotes ou distribuído. Numa rede nacional de operações tanto pode atuar como equipamento central ou como ponta de rede.

A alta confiabilidade do equipamento é garantida por dois pontos importantes: seu exclusivo dispositivo de autoteste e a Rede de Manutenção Cobra.

Há anos a Cobra fornece a centenas de usuários, mini e microcomputadores, terminais de teleprocessamento, unidades de fita e de disco, leitores, impressoras. Falava apenas um computador ágil, versátil, poderoso. Faltava, pois o Cobra 530 é exatamente tudo isso.

Hoje, empregando apenas equipamentos Cobra, é possível resolver qualquer problema de processamento de dados em nosso país. Isso facilita muito a operação e a manutenção do equipamento.

O Cobra 530 é a resposta da Cobra à reserva de mercado.

É o desenvolvimento e a fixação de tecnologia nacional num setor onde não há mais temor: independência ou morte.

cobra 530
O COMPUTADOR
BRASILEIRO

cobra

Cobra Computadores e
Sistemas Brasileiros S/A

FIGURA 1
Revista Veja, ed. 641, 17/12/1980



FIGURA 2
Independência ou Morte, mais conhecido como O Grito do Ipiranga,
de Pedro Américo (1888)

Estufe o peito e arregale os olhos: o Brasil já faz computadores ágeis, versáteis, poderosos.



Poucos, muito poucos sabem produzir computadores avançados, capazes de resolver seus problemas de processamento de dados. Pois saiba que o Brasil já está entre eles. A Cobra acaba de lançar o Cobra 530, made in Jataípagat, Rio de Janeiro. Projetado, desenvolvido e produzido por técnicos brasileiros, que trabalham numa empresa 100% nacional, o Cobra 530 não deve nada aos seus similares estrangeiros. E o que é melhor, por ser feito por gente nossa, ele é muito mais adequado às necessidades de

processamento de dados em nosso país.

A partir de um 8088 processador, com capacidade de 512 KB de memória, o Cobra 530 é perfeito para trabalhar tanto com processamento distribuído quanto com processamento por lotes. Composto uma rede nacional de opções, o Cobra 530 tanto pode atuar como o cérebro central da rede como pode ser equipamento de ponta. Esta versatilidade é que lhe permite enorme elasticidade em toda a gama de aplicações administrativas, financeiras, industriais e científicas.

Facilmente configurável, o Cobra 530 permite a montagem de soluções homogêneas de processamento. Dentro da linha de produtos da Cobra existem mini e microcomputadores, terminais de teleprocessamento, unidades de fita e de disco, leitores e impressoras que podem ser acoplados ao Cobra 530. A vantagem é dos usuários: empregando máquinas de um único fabricante, ficam muito

mais simples as atividades de treinamento e desenvolvimento de sistemas, bem como muito mais fácil a operação e a manutenção do equipamento.

Como brasileiro, você tem muitas razões para se orgulhar do Cobra 530. O primeiro computador verdadeiramente nacional em sua classe, além de economizar dólares e contribuir para reforçar a segurança nacional, ele representa a consolidação de uma tecnologia própria, independente. É a prova de que, também no campo da informática, estamos vencendo os desafios.



**Cobra Computadores e
Sistemas Brasileiros S/A**

FIGURA 3
Revista Veja, ed. 635, 05/11/1980



Cobra 540

O computador do Brasil.

Memória com capacidade de um milhão de bytes, 64 terminais de vídeo. E, por incrível que pareça, criado e fabricado no Brasil com tecnologia 100% nacional.

Assim é o Cobra 540, um computador que tanto pode liderar um grande Centro de Processamento de Dados quanto trabalhar integrado com outras máquinas de grande porte. O Cobra 540 chega para complementar a linha Cobra 500, uma família de computadores pronta para responder a desafios de todos os tamanhos.

É para permitir às empresas uma opção tecnológica adequada aos dias de hoje. Em desempenho, eficiência e custo.

O Cobra 540 foi planejado aqui para resolver problemas daqui. Por isso ele merece ser chamado o computador do Brasil.

Cobra

A marca da tecnologia brasileira.

FIGURA 4
Revista Veja, ed. 778, 03/08/1983

cujos benefícios podem ser aquilatados pela vantagem de que um computador assim produzido ‘é muito mais adequado’ às necessidades brasileiras que seus similares importados. Desta forma, recusam-se o universalismo e a neutralidade do computador, passando sim a importar a origem do seu desenvolvimento e, portanto, fazendo de um *made in Brazil* um artefato melhor que os ‘similares’ estrangeiros. A similaridade resulta enquadrada como um elemento de comparação e afinidade, porém nunca de identidade ou igualdade, uma vez que o local do desenvolvimento da tecnologia desfaria semelhanças em diferenças irrecuperáveis, em incomensurabilidades.

Na figura 4, onde se lê que “[o] Cobra 540 foi planejado aqui para resolver problemas daqui. Por isso ele merece ser chamado o computador do Brasil”, a publicidade insiste em uma relação direta entre desenvolvimento local e problemas locais, pois seria o planejamento para ‘resolver problemas daqui’ a garantia da superioridade da solução brasileira. A conclusão decorre ‘naturalmente’, a saber, que um computador desenvolvido no país por brasileiros, um ‘computador do Brasil’, é o melhor para o Brasil.

Segue abaixo, em ordem não hierárquica, um breve inventário de comensurabilidades, com um pouco mais de detalhes a respeito das questões que emergiram da pesquisa bibliográfica já realizada. Ele serve para ajudar a verificar, em um próximo passo da pesquisa comparativa, como tais questões articulam-se ao caso brasileiro, e se elas poderiam auxiliar uma melhor compreensão da história da informática brasileira.

- A organização da ciência e da tecnologia (seu financiamento e sua relação com a indústria, o mercado e o setor militar): é o caso da organização norte-americana, herdada das práticas da ‘Big Science’, consagradas a partir dos laboratórios de guerra da Segunda Guerra, e que continuou ao longo da Guerra Fria com a devida substituição do inimigo nazista pelo inimigo comunista (Edwards 1997);
- O nacionalismo, a luta por ciência e tecnologia ‘nacionais’: é o caso da DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft³ – em seu esforço para financiar projetos que, através do desenvolvimento local, evitassem a compra de um computador estrangeiro (Hashagen 2010);
- Produzir software / produzir hardware: seria importante deter algum *know how* na produção de máquinas (hardware) para poder produzir software? Seria a competência no uso decorrência direta da competência para produzir o que é usado? Seria a competência no uso inútil face à competência na fabricação? Face às necessidades nacionais?

³ O principal órgão estatal alemão de fomento à pesquisa.

- Produzir software / produzir hardware: diferenças entre, de um lado, concepção e fabricação, e, de outro lado, fabricação sem concepção (simples montagem de peças) como no caso das fábricas européias da IBM no pós-guerra (Schlombs 2008);
- Questões historiográficas: quais deveriam ser os elementos de uma história da informática? Quais artefatos/processos/atores/relações deveria abraçar uma tal história? Apenas computadores, ou seja, apenas os artefatos? Ou também, por exemplo, os métodos algorítmicos, os instrumentos matemáticos e os usuários dos computadores? (Hashagen 2010);
- Os vínculos com a história da matemática: o status de conhecimento de ‘segunda classe’ que distinguia a Matemática Aplicada na Alemanha e na França, em contraste com os EUA, onde a importância da tecnologia e uma concepção pragmática de ciência não reforçou tal status (Hashagen 2010; Chamak 1999);
- Vínculos culturais: a rejeição francesa pelo que entendiam como uma antropomorfização das máquinas, porém fortemente aceita pela cibernética norte-americana (a qual sintomaticamente desenvolveu muito mais vínculos com a psicologia e as neurociências), assim como as relações estabelecidas por matemáticos finlandeses entre seus mitos nacionais e a urgência nacional em construir computadores (Paju 2008);
- A própria definição do campo: o conceito europeu de ‘informática’ vs. o conceito norte-americano de ‘ciência da computação’ (McCoy 2003);
- As burocracias de estado: a demanda por um excesso de papéis e relatórios, como no caso da França quando comparada a uma burocracia mais ágil como a norte-americana (Chamak, 1999); o caso alemão da disputa entre a DFG e o Ministérios da Educação (Hashagen 2010);
- O aprendizado com os erros das escolhas sociotécnicas para a fabricação local de computadores: quais os aprendizados que se podem extrair dos erros cometidos? (Vardalas 2001);
- A procura por uma localização institucional para a informática no mundo acadêmico e da pesquisa: Matemática Pura? Matemática Aplicada? Engenharia de Computação? (Baron/Mounier-Kuhn 1990; Hashagen 2010);
- O background industrial: os casos da Bull na Europa (Mounier-Kuhn 1989), da IBM no Chile e na Europa do pós-guerra (Medina 2008; Schlombs 2008), da Remington Rand também na Europa do pós-guerra (Schlombs 2008), ou ainda o próprio caso da falta de background, como ocorreu no Canadá (Vardalas 2001);
- O background comercial: as calculadoras baseadas em cartão perfurado vendidas por companhias norte-americanas no mundo inteiro, que constituíram-se na ‘primeira onda’ de informatização dos negócios, anterior

à introdução dos computadores (Schlombs 2008; Mounier-Kuhn 1989, 2005; Medina 2008);

- Vínculos políticos: o caso do Chile de Salvador Allende, no qual a informática teve como seu objetivo prioritário estar a serviço da revolução socialista (Medina, 2006, 2008); o caso alemão, seja pela emigração massiva de matemáticos alemães fugidos do nazismo, seja pela nova dinâmica que assumiu a pesquisa alemã durante a Segunda Guerra (Hashagen 2010);
- A construção de negócios de informática: o caso do SAP (Leimbach 2008);
- Software, uma palavra ‘guarda-chuva’: há muitos tipos de software, e, portanto, há muitas questões, talvez incomparáveis, reunidas de forma problemática sob a mesma categoria;
- Configurações de mercado: uma maioria de pequenas e médias empresas na Europa do pós-guerra, em comparação à realidade norte-americana da época, com um mercado mais concentrado nas mãos de poucas grandes empresas (Schlombs 2008); o pequeno tamanho do mercado, como no caso do Canadá (Vardalas 2001);
- O Plano Marshall: caminho encontrado para expandir o mercado europeu para as companhias norte-americanas, assim como para configurar não somente as companhias européias aos métodos gerenciais norte-americanos (Schlombs 2008) mas também a própria agenda européia de ciência e tecnologia (Krige 2006).

Para concluir, vale reiterar que o que aqui se propõe é apenas um mapa inicial para se pensar o que poderia vir a ser a empreitada de construir uma história comparada da informática brasileira. Não se trata de um mapa exaustivo, mas sim de uma sugestão, um incitamento à compreensão histórica de um campo que insiste em figurar como prioridade em todas as propostas de governo no que diz respeito às agendas de pesquisa e desenvolvimento. Sem uma tal compreensão, torna-se muito mais difícil constituir uma capacidade local para propor os caminhos a seguir, para formular políticas que sejam capazes de sintonizar o país com suas demandas e necessidades na direção de uma ‘sociedade do conhecimento’, como prefere um certo jargão corrente, ou de forma mais pragmática (mas nem por isso mais simples), de uma sociedade mais próspera, justa e democrática.

Bibliografia

BARON, Georges-Louis/MOUNIER-KUHN, Pierre-Éric (1990): “Computer Science at the CNRS and in French Universities: A Gradual Institutional Recognition”, em:

- Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 12, n. 2, pp. 79-87.
- CHAMAK, Brigitte (1999): "The Emergence of Cognitive Science in France: a Comparison with the USA", em: *Social Studies of Science*, vol. 29, n. 5, pp. 643-684.
- CORTADA, James W. (2008): "Patterns and Practices in How Information Technology Spread around the World", em: *Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 30, n. 4, pp. 4-25.
- COY, Wolfgang (2003): "Was ist Informatik? Zur Entstehung des Faches an den deutschen Universitäten", em: Hellige, Hans Dieter (ed.): *Geschichten der Informatik: Visionen, Paradigmen, Leitmotive*. Springer: Berlin, pp. 473-498.
- EDWARDS, Paul N. (1997): *The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America*. Cambridge: MIT Press.
- HASHAGEN, Ulf (2010): "Computer für die Wissenschaft: Wissenschaftliches Rechnen und Informatik im Deutschen Wissenschaftssystem 1870-1970", em: Orth, Karin/Oberkrome, Willi (eds.): *Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1920-1970: Forschungsförderung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik*. Stuttgart: Steiner, pp. 145-162.
- HELLIGE, Hans Dieter (2003): *Geschichten der Informatik: Visionen, Paradigmen, Leitmotive*. Springer: Berlin
- HOFSAES, Colette (1990): "The French Society of Computer Scientists: AFCET", em: *Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 12, n. 3, pp. 167-176.
- KRIGE, John (2006): *American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- LECLERC, Bruno (1990): "From Gamma 2 to Gamma E.T.: The Birth of Electronic Computing at Bull", em: *Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 12, n. 2, pp. 5-22.
- LEIMBACH, Timo (2008): "The SAP Story: Evolution of SAP within the German Software Industry", em: *Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 30, n. 4, pp. 60-76.
- MEDINA, Eden (2006): "Designing Freedom, Regulating a Nation: Socialist Cybernetics in Allende's Chile", em: *Journal of Latin American Studies*, vol. 38, n. 03, pp. 571-606.
- (2008): "Big Blue in the Bottomless Pit: The Early Years of IBM Chile", em: *Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 30, n. 4, pp. 26-41.
- MOUNIER-KUHN, Pierre-Éric (1989): "Bull: A World-Wide Company Born in Europe", em: *Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 11, n. 4, pp. 279-297.
- (1989a): "The Institut Blaise-Pascal (1946-1969) from Couffignal's Machine to Artificial Intelligence", em: *Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 11, n. 4, pp. 257-261.
- (1995): "On the history of the data processing industry in France", em: *Engineering Science and Education Journal*, vol. 4, n. 1, pp. 37-40.

- PAJU, Petri (2008): “National Projects and International Users: Finland and Early European Computerization”, em: *Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 30, n. 4, pp. 77-91.
- PERRONE-MOISÉS, Leyla (2007): *Vira e mexe, nacionalismo – Paradoxos do nacionalismo literário*. São Paulo: Companhia das Letras.
- PETZOLD, Hartmut (2002): “Konrad Zuse and Industrial Manufacturing of Electronic Computers in Germany”, em: Rojas, Raúl/Hashagen, Ulf (eds.): *The First Computers - History and Architectures*. Cambridge: MIT Press, pp. 315-322.
- ROJAS, Raúl/HASHAGEN, Ulf (2002): *The First Computers - History and Architectures*. Cambridge: The MIT Press.
- SCHLOMBS, Corinna (2008): “Engineering International Expansion: IBM and Remington Rand in European Computer Markets”, em: *Annals of the History of Computing, the IEEE Computer Society*, vol. 30, n. 4, pp. 42-58.
- VARDALAS, John N. (2001): *The Computer Revolution in Canada: Building National Technological Competence*. Cambridge: MIT Press.

EPÍLOGO

Günther Maihold

***Außenwissenschaftspolitik*, diplomacia científica
y relaciones internacionales científicas:
Alemania-América Latina**

Außenwissenschaftspolitik es un neologismo cuya carrera política se ha venido incrementando en las relaciones exteriores de Alemania durante la última década. La “invención” del término tiene su origen en una propuesta del entonces secretario general de la Fundación Alexander von Humboldt, el Dr. Georg Schütte, quien enfatizaba que la diplomacia científica debería considerarse como uno de los ejes centrales de la acción externa de Alemania (Schütte 2006). Con este impulso al debate, Schütte trataba de llamar la atención sobre una creciente pérdida de presencia de las ciencias ubicadas en Alemania frente a una competencia internacional en aumento, y concluía que se debía a la falta de atracción de Alemania como lugar de estudio para los investigadores internacionales. Su motivación consistía en convencer a los actores políticos para que asumieran acciones decididas para tratar de orientar las corrientes internacionales de investigadores hacia Alemania y así fortalecer las capacidades de rendimiento científico en el país, inducir nuevas decisiones de cooperación científica entre universidades e institutos de investigación e incentivar inversiones de empresas multinacionales. Era ésta la forma en la que la *Außenwissenschaftspolitik* debía orientar la dimensión estratégica de la política científica de Alemania (Schütte 2008: 17). Este impulso, que emanó de la Fundación Alexander von Humboldt, ha sido asumido con gran entusiasmo por parte de la política alemana más allá de las líneas divisorias que tradicionalmente separan a los ministerios correspondientes. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores (Steinmeier 2008) como el de Educación e Investigación (Schavan 2008) se identificaron con el llamado a relanzar el posicionamiento alemán en materia científica en el ámbito internacional, desarrollando programas específicos para alimentar esta presencia con proyectos y programas especiales.

Detrás del argumento de tratar de asumir la internacionalización de las ciencias como reto político se esconde, a veces, la ilusión de que el mismo proceso de la globalización implica un automatismo de internacionalización, al dejar a un lado la necesidad de organizar deliberadamente este proceso (Nettelbeck 2008). Allí descansa también un debate internacional que se orienta en

dos direcciones: por un lado enfatiza que las metas de la ciencia también son parte de la política exterior, y confronta así esta posición con una alternativa que considera que los objetivos de la política exterior los efectúa la ciencia (The Royal Society 2010)

La ubicación del tema en el ámbito administrativo alemán

En términos generales, estas dos opciones describen diferentes situaciones en la relación entre política y ciencia: en la primera versión se pone de manifiesto que es la misma ciencia la que logra concebir sus propios objetivos y transmitirlos como metas generalizadas de la política en su acción externa, utilizando los instrumentos políticos establecidos por los Ministerios de Relaciones Exteriores para ir fortaleciendo su propia posición en el ámbito internacional. En cambio la segunda posición refleja una subordinación de la ciencia a los objetivos definidos por parte de la política exterior, y se ofrece como un instrumento para darles una mejor difusión y profundización en el ámbito internacional.

Aunque en esta presentación se expongan las dos opciones como contrapuestas, en la práctica probablemente no se perciba con tanta nitidez dicha confrontación; más bien se pueden señalar diferentes etapas en un proceso de configuración de una interdependencia existente entre los dos espacios, en la que se realza el posicionamiento de Alemania y su investigación académica en el mundo. Esto se realiza especialmente en el caso de un país sin muchos recursos naturales que busca conquistar mercados con base en sus adelantos de investigación y desarrollo tecnológico, motivo que llevó al respectivo Ministerio alemán de Educación e Investigación (BMBF) a lanzar en el año 2008 su “Iniciativa para la Internacionalización de la Ciencia y la Investigación” (BMBF 2008). Sin embargo, este esfuerzo no se limitó a esta dependencia gubernamental, sino que contó también con la emulación (para algunos observadores, la competencia) por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que desarrolló su propio programa de fomento de las ciencias alemanas en el exterior. Llama la atención aquí el énfasis tan desigual que le pusieron los respectivos ministerios a sus iniciativas: mientras el Ministerio de Educación e Investigación adoptó para su punto de vista el concepto de una “carrera por el conocimiento” realzando la competencia internacional por las “cabezas pensantes” y la participación más activa de Alemania en esta competición, el Ministerio de Relaciones Exteriores intentó posicionar sus programas con un matiz de mayor cooperación bajo el título “Conectar los mundos del conocimiento” (Auswärtiges Amt 2009a y b). Así, la iniciativa del Ministerio de Educación e Investigación, con la inclusión de un grupo específico de países, lanza

una orientación adicional y apunta hacia los “líderes globales” para fortalecer la cooperación en materia de investigación, logrando comprometer a los centros de Investigación y Desarrollo (I+D) para conformar alianzas que potencien la creatividad, pero al mismo tiempo establece formatos de cooperación de largo alcance en materia de educación superior e I+D con países en vías de desarrollo (Flink/Schreiterer/Turekian 2010). Todo esto se maneja con el afán de resolver retos de carácter global y para demostrar conjuntamente responsabilidad internacional. Es en este punto donde la política exterior encuentra su empalme con la ciencia, al tratar de aprovechar sus capacidades de establecer lazos comunes y definir proyectos conjuntos.

El esfuerzo por lograr la aceptación de ese término en el ámbito político demostró ser efectivo –respetando las variantes en la acentuación de esta iniciativa–, así que el gobierno de la gran coalición entre el partido democristiano y el socialdemócrata (2005-2009) lo adoptó como uno de los ejes de su proyección de Alemania en diferentes partes del mundo. Con el cambio de gobierno a una coalición entre el partido liberal y el partido demócrata-cristiano (2009-) el neologismo de *Außenwissenschaftspolitik* en términos de diplomacia científica, al parecer necesitó un rediseño en la descripción de los diferentes esfuerzos de los Ministerios de Educación e Investigación y Relaciones Exteriores respectivamente: se acogió el término de las “relaciones científicas internacionales”, que se diferencia de alguna manera de un concepto alternativo que hubiera podido ser empleado en términos de una “política global científica”. Es ahí donde se hace patente que esta nueva área de la acción externa del gobierno alemán parece estar sometida a las prioridades de la política interna y, por lo tanto, expuesta a los vaivenes de la composición del gobierno en sus diferentes etapas. Esto implica a su vez que se tenga que optar por la sostenibilidad de este esfuerzo, en caso de que se considere que puede ser objeto de diferentes coyunturas en la conformación de un área política que es de vital importancia para el posicionamiento de Alemania en el mundo.

1. Retos para una política de relaciones científicas internacionales

La política internacional científica se está moviendo en un campo muy competitivo en cuanto a la presencia en el mercado y la influencia, respectivamente, en el poder internacional. Es ahí donde se articulan los objetivos centrales, ya sea en tanto que se quiera garantizar el acceso a recursos de carácter global o atraer talentos, apoyo y aceptación para el sistema científico alemán y en sus respectivos resultados. Esta situación de competencia internacional por “las cabezas” pone de manifiesto que Alemania entra al cuadrilátero como país individual, sin duda en el marco de su nexo europeo, pero teniendo en mente

también la competencia en el ámbito de la Unión Europea (Maihold 2007). Se busca potenciar el *soft power* (Perthes 2007), concepto presente en la teoría de las relaciones internacionales, cuya finalidad es la de ubicar los elementos de atracción y de ejemplo como incentivos para posicionar un país en las relaciones internacionales. Para Alemania, que como país no dispone de muchos recursos de *hard power*, es esencial recurrir a esta proyección de poder a nivel internacional (Wittig 2007). La diplomacia científica, en ese sentido, aporta a lo que ha ido definiéndose como *smart power* la capacidad de combinar *hard and soft power* en una estrategia exitosa. Sin embargo, esta intencionalidad todavía no perfila la decisión que se toma frente a la disyuntiva de doble uso que podría desprenderse de este planteamiento: por un lado una visión que enfatiza la utilidad de la ciencia para los esfuerzos diplomáticos, mientras que por el otro lado se busca reforzar el apoyo de la diplomacia para la ciencia. Sin querer recurrir a posiciones que realcen una diferencia de características fundamentales de las dos áreas y que por lo tanto presuponen una cierta posición de incompatibilidad de sus lógicas internas de acción, no hay que olvidar que el interés de la política por encontrar una utilidad en otros sectores de intercambio —en este caso académico— implica una pérdida de independencia en su accionar, el cual se encuentra sometido a las lógicas que la política como tal trata de proyectar para sus actores y su clientela internacional (Mak 2010). Esto sale a relucir, cuando se relaciona este debate con aquel de los países que son de mayor interés en el posicionamiento de Alemania en el mundo. Es decir, las naciones emergentes y de reciente industrialización, llamadas “*Gestaltungsmächte*” o poderes constructivos, que se han convertido en los objetos-meta de una cantidad de esfuerzos políticos que abarcan tanto la política económica, como la política científica, sin excluir la política global (Auswärtiges Amt 2011). Sin embargo, aún no se han logrado descubrir las aportaciones específicas de la diplomacia científica, ya que hasta la fecha no hay evaluaciones sobre este tipo de relacionamientos de los que se han servido los diferentes países.

2. Problemas en la conformación de una diplomacia científica

La conformación de una diplomacia científica tiene que enfrentar una cantidad considerable de problemas, por el simple hecho de que es un proyecto de carácter transversal entre los diferentes ministerios y sus respectivas agencias, lo que implica lidiar con la disparidad organizacional de los actores involucrados. Ellos no solamente introducen sus propias lógicas de acción en el momento de formar parte de las agencias de implementación, sino que incluyen también aquellas instituciones que tratan de participar en la definición y la

priorización de las decisiones a tomar. El simple hecho de un cierto traslape entre diferentes áreas políticas (como son la política exterior y la política científica) multiplica los problemas y las expectativas, que no solamente se refieren a los intereses de participación en estos procesos de definición política, sino que también incluyen las estrategias organizacionales propias dentro de la administración pública y las correspondientes agencias encargadas.

Por lo tanto, en este campo tiende a reproducirse cierta tensión entre la cooperación y la competencia, la cual no solamente se expresa a nivel nacional, sino que también es extensible a nivel internacional. Ante la escasez de esfuerzos multilaterales de investigación (Schavan 2008: 32), la Unión Europea ha ido articulando un claro interés por posicionarse en las políticas internacionales de carácter científico.. De esto deriva cierta rivalidad entre el nivel regional y nacional que también se transfiere a las contrapartes allende del espacio europeo, que de pronto tienen que elegir entre diferentes propuestas que les ofrecen las instancias nacionales europeas, sin que haya habido una coordinación previa por parte de las instituciones en los países miembros de la UE. Este aspecto de competencia nacional dentro del marco europeo desorienta a las universidades e instituciones de investigación que, ante la multiplicidad de ofertas en el mercado, tienen gran dificultad para decidirse por una.

Las tensiones que emanaron de allí al final de cuentas no coadyuvaron a mejorar la posición alemana y europea en los espacios internacionales; inquietudes que se añaden a las complicaciones que resultan de las lógicas encontradas en el mismo sistema científico. Allí se enfrentan modalidades antagónicas de orientación e interacción social: por un lado existe el régimen (in)formal de los *peers* académicos, quienes actúan bajo el criterio de la evaluación científica y de los méritos alcanzados por los investigadores, mientras que por el otro lado las agencias de intercambio y promoción científicos proceden orientados en criterios formales de organización, autoridades y jerarquías, en los que quieren ver implementados sus prioridades y planes de acción, en la mayoría acordados con sus instituciones contraparte en los países prioritarios. Estas lógicas no necesariamente llegan a coincidir, por lo que dejan espacio y oportunidad para interferencias de carácter político.

Esta particularidad no sólo define la zona de contacto entre política y ciencia, sino que pone en evidencia una relación problemática gracias a la que podría llegar a utilizarse la ciencia en favor de los intereses de la política exterior; por ejemplo, la definición de las naciones-meta, que en el caso alemán son determinadas como países emergentes, se orienta en el interés político de fortalecer las relaciones con los países tipo BRIC, codiciados por los diferentes actores internacionales en esta materia. Aparte se está desarrollando todo el debate sobre la cooperación académica en términos de aportaciones al desarrollo de países subdesarrollados en el marco de los Objetivos del Milenio (Schütte 2007:

33), ya sea a través de la conformación de estructuras idóneas para la investigación propia, la capacitación del personal académico o la formación de condiciones para que funjan como incubadoras técnicas y tecnológicas adecuadas.

3. Experiencias internacionales: Inglaterra y EE.UU.

Aunque el deseo de lograr una mayor internacionalización de la ciencia y la tecnología se consuma en aras de una desnacionalización de los esfuerzos propios de cada Estado, el afán central sigue apuntando a los sistemas nacionales de innovación y su orientación para lograr una presencia nacional expandida en el ámbito internacional. La ausencia de agendas internacionales de innovación le confiere a esta situación una característica paradójica: una necesidad internacionalizada de adquisición del conocimiento por un lado y una administración nacional por el otro (Dolata 2006).

Aparte, es palpable que los intereses de cada país se desarrollan de una manera bastante variada: por un lado existen aquellos que anhelan atraer nuevos conocimientos desde el exterior e intentan lograr condiciones para su absorción, mientras que otros se consideran los portadores de estos conocimientos de innovación, por lo que tratan de posicionarse de tal manera que esta ventaja no caduque a corto plazo. Llama la atención que en este sentido exista un debate en algunos espacios que considera la internacionalización en ciencia e investigación como un juego de suma cero, en tanto sigue la lógica de que la ganancia de un país siempre va a costa de otros. Esta posición manejada en los países desarrollados que tratan de “defender” su avance en cierta área científica, devela también sus límites cuando es confrontada con los sistemas de producción de conocimiento nuevo, especialmente de compañías internacionales que tienen sus propias capacidades de investigación distribuidas en el ámbito internacional. Esta presencia transnacional logra conciliar las inversiones en I+D como un elemento central de su posicionamiento internacional bajo el amparo de los derechos de protección de la propiedad intelectual. Por lo tanto, una perspectiva que se limita a observar a los actores públicos en su quehacer referido a la cooperación y el intercambio científico-tecnológico, sólo en parte será capaz de cubrir las dinámicas en este sector. Por eso, para impulsar un nuevo dinamismo al desarrollo tecnológico habrá que considerar de entrada la cooperación entre actores públicos y privados (*public private partnership*), especialmente de aquellos sectores cercanos a los avances concretos en los desarrollos punta.

Una revisión de las políticas de I+D pone de manifiesto que existen políticas que, desde un punto de vista tipológico, cubren los siguientes objetivos (Flink/Schreiterer/Turekian 2010):

- Atracción de investigadores e inversiones extranjeros
- Mejoramiento del rendimiento del país en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y competitividad económica
- Nivelación del acceso al conocimiento que es distribuido globalmente y derribo de las barreras para el acceso a mercados de punta para la promoción de productos de alta tecnología y nuevos servicios
- Ponerse al tanto de las políticas de investigación, de fomento tecnológico y desarrollo económico de otros países
- Contar con el apoyo de la diplomacia científica para apoyarse en las experiencias ya hechas y establecer redes internacionales entre compañías, actores nacionales, universidades e institutos de investigación

Tal programa implica revertir la carencia de científicos y capacidades industriales que existen en materia de atracción u oferta a nivel nacional, aplicar el llamado *brain-gain* o tratar de romper el aislamiento que existe en cuanto a la integración en los procesos internacionales de generación de conocimiento; por lo tanto, es urgente aumentar la atracción de científicos foráneos, inducir procesos de reconversión en los aparatos industriales de investigación y desarrollo e integrarse más plenamente en los mercados centrales de desarrollo científico-tecnológico, no solamente a través del desarrollo de capacidades administrativas propias y del manejo científico, sino también por medio del establecimiento de redes internacionales entre empresas y científicos (Edler/Boekholt 2001: 314 s.). Es el camino que siguen los EE.UU. e Inglaterra, que se consideran parte de aquellos mercados centrales que generan el avance tecnológico y que asimismo tratan de mantener su posición como mercado líder.

Esta situación encuentra a veces su contrapeso en el momento en que los representantes de estos países no estén dispuestos a asumir una posición de reciprocidad en los arreglos de carácter bi- y multilaterales para el desarrollo de los sistemas de innovación con otros países, prefiriendo más bien un control de sus adelantos y tratando de establecer mecanismos como *public-private-partnerships de corte nacional*. A este panorama, el gobierno brasileño le ha contrapuesto su “diplomacia de innovación” y ofrece, por ejemplo, la tecnología para biocombustibles bajo un esquema de igualdad y sostenibilidad (Dickson 2010). Sin embargo, también en este caso se prefiere proceder a través de un estricto bilateralismo, ya que se considera esta modalidad más compatible con el interés por manejar las relaciones exteriores de su país en un formato no demasiado abierto.

Las lógicas presentes en estos contextos son dinámicas que buscan inducir un aprendizaje organizacional hacia adentro y se diferencian de aquellas experiencias que generan efectos de aprendizaje volcándose hacia afuera al esta-

blecer esquemas de innovación a través de redes con formatos de cooperación transnacional. La competencia a la cual hoy en día están expuestos los sistemas nacionales de innovación tienen características globales y, por lo tanto, en el contexto de la Unión Europea (UE), existe la necesidad de plantearse acciones comunes como lo muestra el European Research Council. Estos esfuerzos, sin embargo, no han tenido hasta la fecha el efecto deseado: no se han logrado encontrar procedimientos adecuados que faciliten una mayor coherencia con las estrategias nacionales. Los instrumentos de la cooperación científica europea se asemejan demasiado a los formatos utilizados en los espacios nacionales, dejando de alguna manera en suspenso la agenda acordada para que se dé la confluencia de los programas manejados por ministerios nacionales.

Ahí desempeña también un papel central el debate sobre la correspondencia entre los esfuerzos nacionales y los intereses de fomento desde las políticas de cooperación al desarrollo, en tanto que los países del Sur se podrían convertir en contrapartes para la construcción de nuevas redes internacionales en materia de investigación y desarrollo. La creación de un área europea de investigación y su compatibilidad con los compromisos asumidos en el marco de los Objetivos del Milenio son retos centrales de la política externa de la misma UE, que ha recurrido a un procedimiento de coordinación de políticas para lograr la conciliación interna de sus prioridades con resultados mixtos. En el marco organizacional del fomento a la ciencia y a la tecnología (Bučar 2010: 21) se pone de relieve que, hacia adentro de la misma institucionalidad europea, existen muy diferentes conceptos que, si bien no han entrado en una contradicción abierta, hasta la fecha no han logrado desplegar todos los potenciales que podrían haberse obtenido con base en la confluencia de los sistemas.

El reto que también plantean hoy en día ciertas empresas internacionales para el avance tecnológico (*global challenges*) en América Latina destaca en el discurso que se ha ido generalizando sobre las multilatinas (Santiso 2008) que han logrado una posición preponderante entre un conjunto de empresas con potencial para ocupar un papel de líder a nivel mundial. Aunque a veces se les ha asociado a intereses de explotación de recursos naturales, existen también aquellas que han asumido un claro liderazgo en el sector industrial o de servicios, de manera que no debemos subestimar su capacidad de impactar sobre la generación de valor agregado (Verma *et al.* 2011).

Inglaterra: ¿política a costa de la ciencia?

Si concentramos nuestra atención en el caso inglés, éste podrá ser muy aleccionador: en los pasados diez años Inglaterra ha desarrollado una diplomacia científica que se guiaba –siguiendo el ejemplo de que el sistema como tal no

es capaz de orientar otras áreas políticas— en la agenda gubernamental para el cambio global (Millenium Agenda for Global Change), publicada en el año 2000, que servía para poner en operación los objetivos del milenio. Asimismo, la Oficina de Relaciones Exteriores tomó la iniciativa de fomentar la investigación y tecnología a través de la inauguración de una red de diplomáticos “científicos” en ciertas áreas centrales, con el fin de aumentar y expandir la presencia del Reino Unido en todo el mundo. Este impulso proveniente de la política tuvo como efectos secundarios la matización de los intereses específicamente diplomáticos de *soft power* con base en la agenda política y su disposición de proyección, dejando de lado las necesidades propias de la comunidad científica. Esta situación tuvo como efecto que la misma representación de los científicos, los Research Councils United Kingdom (RCUK), lanzara su propia estrategia de internacionalización y abriera oficinas de representación en Bruselas, Washington, Beijing y Delhi.¹

Sin embargo, las dificultades de coordinación que sufrieron los diferentes intentos de impulsar la presencia británica en materia de ciencia e innovación se refleja en el esquema que se creó para facilitar la interacción de los diferentes ministerios que se sumaron a este esfuerzo a través de una plataforma de coordinación llamada “Global Science and Innovation Forum” (GSIF 2006), fundada en 2006 y cuya labor es la de fungir como vehículo para facilitar la información y el intercambio con el fin de coordinar el papel que debe jugar el Reino Unido en materia de cooperación científica y de innovación. El esfuerzo del GSIF y su posible éxito se debe a sus capacidades de articular en un alto nivel político del gobierno británico a los diferentes actores, representado en la institución que asesora el gobierno en materia política como lo es el Government Chief Scientific Adviser. El hecho de ser la persona que asesora al primer ministro en materia de ciencia, ha creado además una constelación a través de la cual pueden llegar a reconciliarse los diferentes intereses estratégicos entre las representaciones de los ministerios por un lado y, por el otro lado, se logra generar un estatus de coordinación que no corra el peligro de estar perdiendo su efectividad cuando surjan dificultades de interacción interinstitucional (Flink/Schreiterer 2010: 671 s.)

EE.UU: en busca de un camino para la diplomacia científica

Con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (American Association for Advancement of Science, AAAS) se ha conformado, ya desde el siglo

¹ <<http://www.rcuk.ac.uk/documents/framework/framework.pdf>> (17.11.2011)

XIX, una instancia central para la organización del sector científico y su proyección hacia el exterior en los EE.UU. La AAAS mantiene un Centro para Diplomacia Científica² a través del cual se hace el intento de utilizar la cooperación científica para la promoción del entendimiento y prosperidad internacionales. Para tal efecto, la AAAS aumentó su presencia territorial en amplias partes del mundo a través del envío de *science envoys*, destacadas personalidades de la ciencia que se dedican a promover la presencia científica de los EE.UU. en el exterior. Igualmente, en el mismo Departamento de Estado, cada año se están colocando a jóvenes científicos cuya tarea es fungir como asesores en materia de política exterior con el fin de fortalecer las misiones diplomáticas de EE.UU. (Flink/Schreiterer 2010: 674).

La administración Obama ha incrementado este programa de enviar a destacados científicos como emisarios diplomáticos, especialmente a comunidades musulmanas, y las considera un *new beginning*, iniciativa con la que se tratan de reconstituir las relaciones de los EE. UU. con el Medio Oriente, África del Norte y el Sureste de Asia (Campbell 2009). Más allá de los esfuerzos bilaterales establecidos y la cooperación estadounidense en esfuerzos multilaterales de investigación, la iniciativa del presidente Obama corresponde a un uso explícito de la ciencia como instrumento para restablecer relaciones con países que se han encontrado en una cierta situación de aislamiento en cuanto a sus relaciones políticas. Por lo tanto, puede considerarse un paso para iniciar un dialogo, lograr intercambios y, a lo mejor, una cierta colaboración en un sector donde las medidas diplomáticas clásicas son poco eficaces. Así, es más que lógico que para este tipo de programas se tomen en consideración retos de carácter global como la alimentación, el agua, la energía, el clima, etc., para cuya solución se quieren aportar conocimientos tecnológicos y técnicos con la intención de establecer además relaciones de asociación con colegas científicos en esos países meta.

Para tal efecto, se quiere recurrir al lenguaje común de los científicos, dejando a un lado en un primer momento los temas que podrían prestarse para un distanciamiento entre los países y para suscitar conflictos entre sus posicionamientos políticos. La pregunta de si la diplomacia científica realmente presenta una situación de *win-win* con respecto a la cooperación científica y su conexión con los intereses y motivos de la política gubernamental (Copeland 2011) es un debate abierto especialmente en los EE.UU. ya que se alega su relación precaria con respecto a ciertos países específicos. La expectativa política de que la ciencia pueda allanar el camino para entablar una cooperación científica con países tan disímiles como Pakistán, Irán, China, Corea del Norte o Libia, representa uno de los retos más debatidos en la actualidad en materia de política

² Center for Science Diplomacy: < <http://diplomacy.aaas.org/> > (12.04.2011).

científica. El alcance que se pretende obtener a través del empleo de la ciencia para fines de la política exterior es muy evidente en una situación en la cual la política exterior estadounidense tiene una imagen muy negativa —especialmente al final de la era Bush— y esta preocupación afloraba no solamente a nivel político sino también universitario. El interés por fortalecer la presencia de la diplomática científica para fines de la política exterior estadounidense, quedó explícitamente manifestado en un documento conjunto bipartidista que fue adelantado por representantes científicos y políticos del país en febrero de 2010, bajo el título “Science diplomacy is crucial to US foreign policy”. El hecho de que este documento haya sido promocionado por el “Partnership for a Secure America” (2010) y avalado por el AAAS pone de manifiesto que la funcionalización de la ciencia para la realización de metas en política exterior sigue siendo un tema central. Más allá de este interés por suavizar las relaciones críticas a nivel político, también está presente la tendencia de mantener vigente la posición de EE.UU. como líder en el desarrollo científico-tecnológico, por lo cual el afán de relacionarse con personalidades de la avanzada en materia de investigación es un elemento central que se quiere garantizar para el futuro.

La participación de muchas instancias públicas en la presencia internacional de la ciencia y de la tecnología en el caso de los EE.UU. queda evidente en la existencia de un consejo presidencial de asesores en ciencia y tecnología, fundado a instancias del Departamento del Estado, que se ocupa de esta materia y de los impulsos en los diferentes ministerios, sin que se haya logrado hasta la fecha consolidar un Ministerio de Ciencias en este país. El Center for Science Diplomacy del AAAS pone de relieve que su mayor compromiso radica en establecer un nexo entre investigadores, analistas políticos y tomadores de decisión, con el fin de allanar el camino a la diplomacia científica en su función de catalizador entre sociedades y con el afán de fortalecer las interacciones de actores del ámbito de la sociedad civil (AAAS 2011).

La revisión de estos casos, a los que podríamos añadir unos cuantos más, pone en evidencia que el área de la promoción de relaciones científicas internacionales es reconocida en muchos países como una tarea central para que el respectivo país pueda mantener una presencia internacional significativa. Sin embargo, se ve que hay cierta disparidad entre actores y tareas, que no ha podido ser organizada en un esquema coherente que pudiera servir de modelo para su aplicación en otros países. Por el otro lado, los países y Estados meta son bastante disímiles porque, mientras Inglaterra trata de tomar en consideración a los Estados emergentes que funcionan como máquinas del crecimiento económico mundial, en los EE.UU., de alguna manera se ve el aporte de la ciencia en términos de reducir riesgos para sus relaciones exteriores con países que han presentado cierto problema en el trato de la política oficial. La configuración concreta siempre se mueve en una amplia gama de motivos:

- el acceso a mercados prometedores y desarrollos en ciencia e investigación interesantes,
- acompañados de la promoción de los propios adelantos en esta materia y
- la promoción de las instituciones de la educación superior para un mercado demandante en estos países,
- un interés explícito por participar en el acceso a personal científico altamente capacitado
- para poder lograr por esta vía acaparar este personal capaz de alimentar el propio aparato científico.

4. Acceso, promoción e influencia: lógicas de la diplomacia científica alemana

El surgimiento reciente de la diplomacia científica en Alemania ha incitado el debate de si se trata de una conceptualización sistemática de un área política nueva o más bien de un acercamiento *ad hoc* al cual le hacen falta ciertos elementos esenciales que dan sustancia y continuidad a la acción política. Tomando en consideración la transversalidad del interés político que lo anima, se ha planteado la pregunta de si la diplomacia científica puede considerarse un área política propia si se toma en cuenta la dificultad que cuesta definir el límite de esta área y las lógicas que la rigen. Con respecto a estas interrogantes se ha afirmado que el acceso a investigadores, a los resultados de sus investigaciones, a las respectivas instituciones, a los recursos naturales y al capital son esenciales para impulsar la capacidad de innovación y la competitividad nacionales. Además, la promoción de los logros del propio país en materia de I+D en el marco de su mercadeo global es una precondition para atraer a personas y compañías; asimismo, se desea ampliar la influencia individual con el compromiso de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, cruzando así las fronteras del propio país.

Ante esta descripción de tareas asociadas a la diplomacia científica, pueden generarse dudas de si el mismo servicio exterior está suficientemente preparado para asumir estas responsabilidades en la dirección de esta política; más allá de ello, habrá que discutir cuál o cuáles son las instituciones capaces de implementar estratégicamente estas iniciativas. Alemania cuenta con una amplia red de actores en esta área, empezando con la DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft (Comunidad Alemana de Investigación)³, la Max-Planck-Gesellschaft⁴ y otros centros de investigación extrauniversitarias, como la

³ <<http://www.dfg.de>> (12.03.2011).

⁴ <<http://www.mpg.de>> (12.03.2011).

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren⁵ o la Fraunhofer-Gesellschaft.⁶ En el área del intercambio académico, el Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD; Servicio Alemán de Intercambio Académico)⁷, la Alexander von Humboldt Stiftung y los mismos secretarios para la ciencia en las Embajadas alemanas en el exterior son instancias que pueden facilitar programas y proyectos financiados por parte del gobierno federal. Sin embargo, estos actores no necesariamente juegan “en equipo” y logran complementar sus capacidades para alcanzar prioridades y objetivos comunes. Al mismo tiempo, la política no siempre ha sido capaz de definir claramente las regiones meta o las materias centrales para sus intereses estratégicos particulares o sus compromisos globales. Así, la expectativa puesta en estas instituciones de que se pueda a través de sus programas lograr una expansión global de normas y valores orientada en el desarrollo pacífico y la resolución de conflictos tiene limitaciones implícitas para surtir efectos.

Esto se vuelve evidente desde las mismas bases programáticas de los dos ministerios centrales en el área: mientras que el Ministerio de Educación e Investigación (BMBF) sigue el concepto de una política científica global, el Ministerio de Relaciones Exteriores más bien promueve una diplomacia científica para lograr un avance en el combate de problemas de alcance global, para formar capacidades en regiones de desarrollo y promover capacidades cívicas y el diálogo. En su documento base “Internationalisierungsstrategie für Wissenschaft und Forschung”, del año 2008, el Ministerio de Educación e Investigación (BMBF 2008) define cuatro prioridades propias:

- Fortalecimiento de la cooperación científica con líderes globales
- Explotación internacional de potenciales de innovación
- Intensificación de la cooperación con países en vías de desarrollo en materia de educación, investigación y desarrollo a largo plazo
- Asumir responsabilidad internacional y resolver retos globales.

Para lograr estas metas se pretende formar a investigadores jóvenes con un perfil internacional en aras de ampliar la movilidad internacional y especialmente europea de esta nueva generación alemana. Al mismo tiempo, se desean coordinar mejor los programas de fomento a nivel nacional, regional e internacional para aprovechar de mejor manera las complementariedades. Cumpliendo con el interés de acercar la cooperación al desarrollo y la cooperación científico-tecnológica se aspira acordar agendas de prioridades con los países contrapartes.

⁵ <<http://www.helmholtz.de>> (12.03.2011).

⁶ <<http://www.fraunhofer.de>> (12.03.2011).

⁷ <<http://www.daad.de>> (12.03.2011).

Finalmente, la implementación de una agenda internacional de investigación debería dar respuestas a los retos globales como el cambio climático, el problema de recursos naturales, las amenazas de seguridad y las enfermedades globales infecciosas, para orientar los programas multilaterales de fomento.

Operativamente se esperan mejores resultados con la presencia coordinada de las instituciones de la ciencia alemana con las representaciones de la industria alemana en el exterior. En concreto, se fomentan exposiciones y eventos de promoción conjuntos para desarrollar mayores complementariedades entre los dos sectores. Lo mismo se intenta a nivel europeo, en el marco de estrategias comunes con respecto a ciertos países contrapartes de acuerdo a la estrategia alemana de internacionalización. Ésta se someterá a una evaluación en intervalos fijos para poder medir su impacto sobre la realidad.

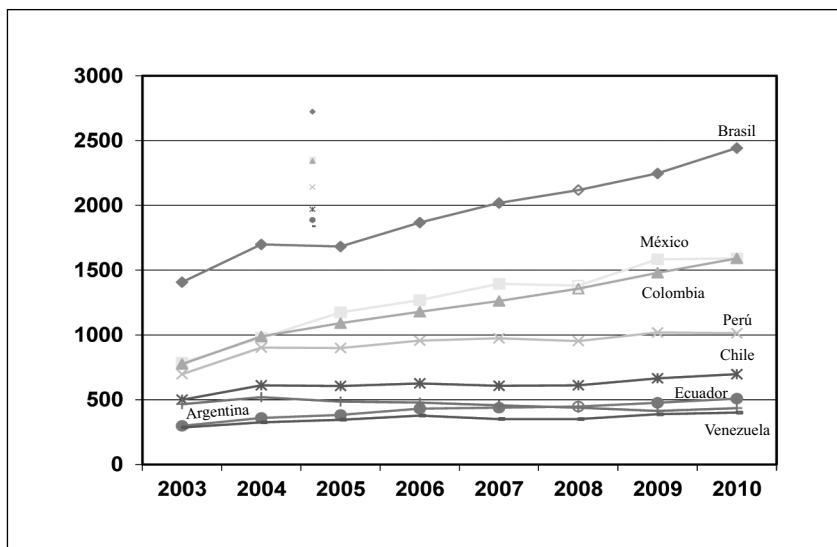
5. El caso de las relaciones científicas entre Alemania y América Latina

En las décadas de 1980 a 2000 se ha detectado una contracción masiva de solicitudes desde América Latina para becas de estudio en Alemania (Janetzke 2001). Esto vale específicamente para el área de ciencias sociales, derecho y estudios culturales, por lo que se nota una disminución de la tradicional cercanía de las humanidades para con la investigación en Alemania que data de los años 20 del siglo pasado. Por el otro lado se puede identificar una gran demanda de investigadores con doctorado en las universidades de América Latina, ya que los procesos de certificación de programas de estudio a nivel de maestrías y doctorados han aumentado la presión sobre las universidades de incrementar el número de académicos con doctorado en sus centros de estudio. Es sorprendente que esta dinámica no se haya reflejado oportunamente en las universidades de Alemania, lo cual de alguna manera se ha atribuido a la lengua alemana como barrera de acceso a los estudios de doctorado en universidades de este país. El alemán no parece fungir hoy en día como lengua franca de la comunicación académica, por lo que muchas universidades han optado por ofrecer cursos y estudios de posgrado en inglés. En consonancia con la estrategia de Bolonia de homologar los exámenes y estudios a nivel europeo, se espera que las universidades de Alemania se vuelvan más atractivas para estudiantes de América Latina.

Revisando las cifras de los estudiantes latinoamericanos en Alemania, se puede detectar, siempre dependiendo del país y tomando como base una situación constante y a veces ascendente, una tendencia positiva, que en el caso de Brasil, México y Colombia refleja mayores avances.

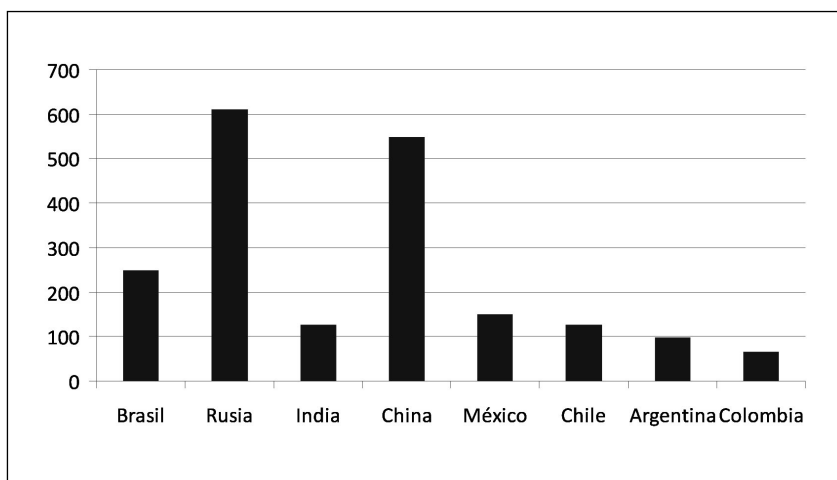
En el marco institucional de los acuerdos de cooperación entre universidades a escala mundial, solamente Brasil logra acercarse al nivel de Rusia y

FIGURA 1
Estudiantes latinoamericanos en Alemania



FUENTE: DAAD.

FIGURA 2
Asociaciones de universidades alemanas en el mundo



FUENTE: Wissenschaftskompas/HRK.

China, mientras que India queda igualmente con un desarrollo relativamente bajo, al igual que México y Chile. Esta situación es sumamente sorprendente si uno ve en perspectiva histórica la larga historia de cooperación que ha existido entre universidades de Alemania y de América Latina. Como esta tradición académica data de muchos años atrás, hay que preguntarse por qué no ha logrado encontrar una expresión institucional correspondiente a tantas décadas de intercambio entre investigadores de los dos lados.

Es en este contexto en el que deben revisarse los alcances de la cooperación entre las respectivas entidades de fomento académico de los dos lados (CONICET/COLCIENCIAS/CONACYT/DFG), ya que a lo mejor un nuevo impulso debería pasar por otras entidades, como por ejemplo las asociaciones de universidades, los consejos de rectores u otras entidades similares.

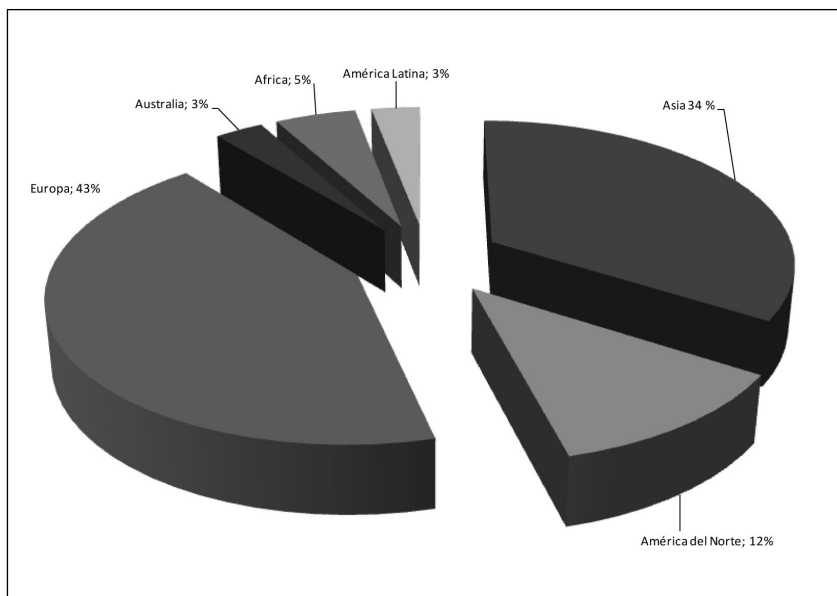
El instrumento clásico de fomento en el intercambio académico es el otorgamiento de becas. Una revisión de los datos en el caso de la Alexander von Humboldt Stiftung pone de relieve que la participación de América Latina en la entrega de becas y premios ha tenido un desarrollo muy precario, logrando un avance del 3 al 4,6% del total en una década.

En la distribución por países en América Latina se pone de manifiesto que son Brasil, Argentina y México los que han logrado un nivel más alto, de entre 4 y 7 becas al año, de una aplicación máxima de 18 solicitudes en el caso del Brasil. Esta situación pone de relieve que serán solamente los países con una estructura científica consolidada los que tengan posibilidades reales de ampliar su presencia a través de becas del sistema alemán.

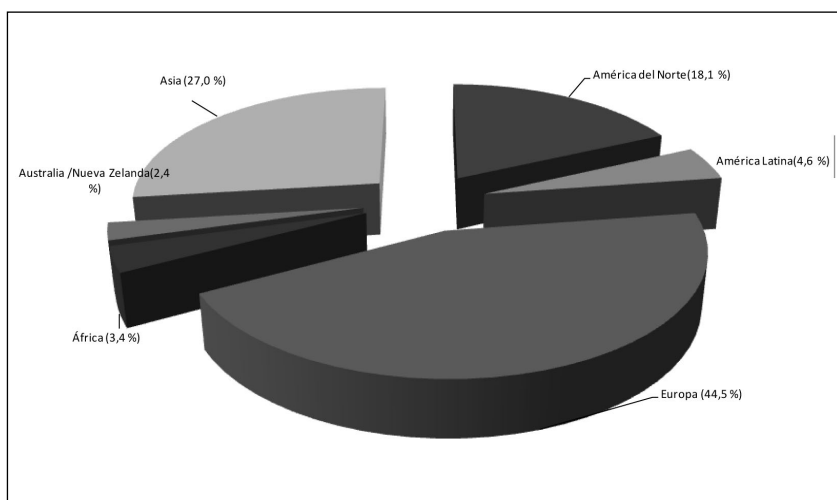
Aparte de los elementos tradicionales (becas, invitaciones, programas de intercambio y de graduación), la política científica ha desarrollado actividades específicas para promover a Alemania en el mercado de la ciencia y de la tecnología de América Latina. Entre éstas hay que mencionar el Año Alemán-Brasileño de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010/2011, organizado por el BMBF y su contraparte, el Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Este evento trató de poner énfasis en las posibilidades de cooperación en la investigación en materia de medio ambiente, de sostenibilidad y del área marítima, que demostraron ser los ejes más interesantes para la colaboración. Además, en especial en el área de la investigación aplicada se enfocaron la tecnología de la información, la investigación de genomas, nano- y biotecnología, al igual que la salud y la aeronáutica. La fundación de un Fondo Común para la Ciencia representa en esta cooperación un nuevo elemento bilateral. Asimismo, en Brasil se inauguró en el año 2009 la Casa Alemana de Ciencia e Innovación, con sede en São Paulo (DIWH)⁸, apoyado por el Ministerio de Relaciones

⁸ <<http://www.dwih.com.br/>> (12.03.2011).

FIGURA 3
Becas AvH solicitadas y concedidas 1994-1998



Becas AvH solicitadas y concedidas 2009



FUENTE: Jahresberichte Alexander von Humboldt Stiftung.

Becas AvH 2008/2009 en América Latina por países

	2008		2009	
	solicitadas	concedidas	solicitadas	concedidas
Brasil	18	7	18	5
México	7	3	14	7
Argentina	14	6	9	4
Chile	6	5	5	2
Cuba	—	—	3	1
Perú	3	2	2	1
Costa Rica	—	—	1	0
Bolivia	1	—	—	—
Colombia	2	1	—	—
Ecuador	1	1	—	—
Honduras	1	—	—	—
Venezuela	1	1	—	—

FUENTE: Jahresberichte Alexander von Humboldt Stiftung.

Exteriores y el BMBF con el interés de fomentar la interrelación de universidades e institutos de investigación de ambos países; que los científicos estén mirando con alguna preocupación la cercanía muy grande a intereses comerciales refleja de nuevo la relación precaria entre intereses políticos, económicos y científicos (Dungen 2011: 45). El Ministerio alemán de Relaciones Exteriores, por su lado, asignó al Heidelberg Center en Santiago de Chile⁹ y a la Universidad del Norte, Sede Santa Marta/Colombia¹⁰ la calidad de Centros de Excelencia para Investigación y Enseñanza en colaboración con universidades alemanas. Esta variante concuerda con el creciente interés de “exportar” las ofertas de enseñanza hacia América Latina y el Caribe, a veces con dependencias completas al estilo de las universidades de los EE.UU. (Werz 2006).

⁹ <<http://www.heidelberg-center.uni-hd.de/>> (12.03.2011).

¹⁰ <<http://www.cemarin.org/>> (12.03.2011).

Becas de investigación científica de la Alexander von Humboldt Stiftung para científicos provenientes de América Latina en el año 2010

Suma total de las becas de investigación científica Humboldt- y Georg-Forster (número de becas Georg-Forster entre comillas)

Especialidad	País*							América Latina en total
	Argentina	Brasil	Chile	Ecuador	Colombia	México	Venezuela	
Humanidades								6 (2)
Filosofía		1 (0)				1 (0)		2 (0)
Psicología, Pedagogía	1 (0)							1 (0)
Historia	1 (1)							1 (1)
Derecho		2 (1)						2 (1)
Ciencias naturales								22 (10)
Informática/Estadística		1 (0)						1 (0)
Física	1 (0)	3 (0)						4 (0)
Astronomía, Astrofísica						1 (0)		1 (0)
Geología		1 (1)						1 (1)
Química, Farmacología	3 (1)	1 (0)						4 (1)
Biología	3 (2)	2 (1)	1 (1)			1 (1)		7 (5)
Medicina	1 (1)	1 (1)					1 (0)	3 (2)
Agronomía/ Silvicultura				1 (1)				1 (1)
Ingeniería								2 (0)
Ingeniería de materiales	1 (0)				1 (0)			2 (0)
Suma/Total	11 (5)	12 (4)	1 (1)	1 (1)	2 (0)	2 (1)	1 (0)	30 (12)

* Para científicos provenientes de otros países de América Latina no se ha concedido becas en el año 2010.

Finalmente, se ha diseñado un proyecto muy innovador con base en el Centro Universitario Alemán-Argentino (CUAA-DAHZ),¹¹ con sede en Buenos Aires, que se encuentra en proceso de construcción y pretende fungir como aglutinador de proyectos bilaterales en el marco del Programa Binacional para el Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias Argentino-Alemanas. Se aspira a promover y desarrollar programas de grado y posgrado entre universidades de ambos países que conlleven al establecimiento futuro de carreras binacionales con doble titulación. En el campo de la investigación se busca estimular y fortalecer la asociación académico-científica, alentando el intercambio de docentes, investigadores y alumnos. Aparte, siguen trabajando Cátedras especiales como la Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt en la UNAM y el Colegio de México¹², la Cátedra Walter Gropius en la Universidad de Buenos Aires/Argentina¹³ y la Cátedra Martius de Estudos Alemães e Europeus en la Universidad São Paulo/Brasil¹⁴ financiadas por parte del DAAD.

6. Conclusiones

La diplomacia científica como instrumento para restituir las relaciones académicas y de investigación entre Alemania y América Latina se ha propuesto una amplia gama de objetivos. Esta situación implica eminentes esfuerzos para corresponder a los grandes retos planteados, especialmente en tiempos de presupuestos reducidos y limitadas posibilidades a nivel de fomento académico ante una situación de mucha competencia. Sin embargo, la importancia asignada a la I+D debería también encontrar su expresión en América Latina, especialmente ante el declarado interés del gobierno alemán por impulsar su relación con la región (Auswärtiges Amt 2010) Aunque pueda haber mucha voluntad política (Maihold 2010), dependerá de los mismos actores en el área de la ciencia e investigación si se logran construir puentes y desarrollar formatos asociativos y de colaboración efectivos acordes a sus intereses. La política, por su lado, puede facilitar el acceso y la promoción, no solamente por sus objetivos de responsabilidades compartidas y beneficios mutuos en materia global, sino también en la movilización de intereses concretos articulados en las universidades y la industria. Para tal efecto, la formación de alianzas estra-

¹¹ <<http://cuaa-dahz.org/es/home/>> (12.03.2011).

¹² <http://www.colmex.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Item=&Itemid=100> (23.03.2012).

¹³ <<http://www.academicas.daad.org.ar/catedra-walter-gropius/>> (23.03.2012).

¹⁴ <http://cm.daad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=28&lang=de> (23.03.2012).

tégicas más allá de un afán declarativo podría aterrizar de una manera muy concreta en materia de ciencia buscando construir faros que puedan dar orientación a amplios grupos e instituciones del mundo académico tanto en Alemania como en América Latina. Que estos esfuerzos tengan que emprenderse en un ámbito de competencia internacional por el reclutamiento de las “mejores cabezas” y por las mejores ofertas bajo el criterio de la mayor atracción de las condiciones para la investigación y el desempeño profesional, implica un desafío especial para los sistemas de innovación, en Alemania y en América Latina.

Bibliografía

- AUSWÄRTIGES AMT (2009a): “Wissenswelten verbinden. Deutsche Außenpolitik für mehr Bildung, Wissenschaft und Forschung”. Berlin, Konferenzdokumentation Berlin 19-20 de enero de 2009, en: <<http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/365322/publicationFile/3669/ProgrammDownload.pdf>> (20.04.2011).
- (2009b): “12 worlds of knowledge”. Frankfurt/Berlin, en: <<http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/474658/publicationFile/3641/AWP-Testimonials.pdf>> (10.03.11).
- (2010): Alemania, América Latina y el Caribe. Concepto del Gobierno federal alemán sobre América Latina y el Caribe. Berlin.
- (2011): Globalisierung gestalten – Partnerschaften ausbauen – Verantwortung teilen. Konzept der Bundesregierung. <<http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/608384/publicationFile/165779/Gestaltungsmachtekonzzept.pdf;jsessionid=731E0B38F02CA818516A81DD9E8E425A>> (23.02.12).
- BMBF (2008): “Strengthening Germany’s role in the global knowledge society. Strategy of the Federal Government for the Internationalization of Science and Research”, en: <<http://www.bmbf.de/pubRD/Internationalisierungsstrategie-English.pdf>> (12.03.2011).
- BUČAR, Maja (2010): Science and Technology for Development. Coherence of the Common EU R&D Policy with Development Policy Objectives. Bonn: DIE.
- CAMPBELL, Cathy (2009): “Send in the Scientists. Why Mobilizing America’s Researchers Makes Sense for Diplomacy”, en: <http://www.scienceprogress.org/2010/10/send_scientists/> (10.04.2011).
- COPELAND, Daryl (2011): “Science Diplomacy: New Day or False Dawn”, en <<http://www.themarknews.com/articles/5672-science-diplomacy-new-day-or-false-dawn>> (12.03.2011).
- DICKSON, David (2010): “Innovation diplomacy: an alternative concept”, en: <<http://scidevnet.wordpress.com/2010/06/27/innovation-diplomacy-an-alternative-concept/>> (12.03.2011).
- DOLATA, Ulrich (2006): “Technologie- und Innovationspolitik im globalen Wettbewerb. Veränderte Rahmenbedingungen, institutionelle Transformationen und poli-

- tische Gestaltungsmöglichkeiten”, en: *Zeitschrift für Politikwissenschaft*, vol. 16, n° 2, pp. 427-455.
- DUNGEN, Johannes von (2011): *Vom Freund zum Partner: Die deutsch-brasilianischen Kulturbeziehungen im Wandel*. Stuttgart: ifa.
- EDLER, Jakob/BOEKHOLT, Patries (2001): “Benchmarking national public policies to exploit international science and industrial research: a synopsis of current developments”, en: *Science and Public Policy*, vol. 28, n° 4, pp. 313-321.
- FLINK, Tom/SCHREITERER, Ulrich (2010): “Science diplomacy at the intersection of S&T policies and foreign affairs: toward a typology of national approaches”, en: *Science and Public Policy*, vol. 37, November, pp. 665-677.
- FLINK, Tom/SCHREITERER, Ulrich/TUREKIAN, Vaughan (2010): *Towards better Approaches in Science Diplomacy – Communication, Coordination and Leadership*. Berlin: WZB (mimeo).
- GLOBAL SCIENCE AND INNOVATION FORUM (2006): *A Strategy For International Engagement in Research and Development*, London (URN 06/1862), en: <<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.berr.gov.uk/files/file34726.pdf>> (23.02.2012).
- JANETZKE, Gisela (2001): “Alexander von Humboldt, die Stiftung und ihre Wissenschaftsbeziehungen mit Lateinamerika”, en: Maihold, Günther (ed.): *Ein „freudiges Geben und Nehmen“? Stand und Perspektiven der Kulturbeziehungen zwischen Lateinamerika und Deutschland*. Frankfurt: Vervuert, pp. 33-42.
- MAIOLD, Günther (2007): “Außenwissenschaftspolitik – zur Produktivität eines neuen Politikfeldes”, en: Alexander von Humboldt Stiftung (ed.): *Außenwissenschaftspolitik – Wissenschaftsaußenpolitik*. Bonn: Arbeits- und Diskussionspapier 7, pp. 16-20.
- (2010): *Das neue Lateinamerikakonzept der Bundesregierung: Politikinnovation durch Konzeptentwicklung?* Berlin: Ibero-Analysen n° 23.
- MAK, Stephen (2010): *Science Diplomacy: Applying Science and Innovation to International Challenges*. Wilton Park: Report on Wilton Park Conference 1037.
- NETTELBECK, Joachim (2008): “Wissenschaftsaußenpolitik – Asymmetrie der Wissensordnung und Orte der Forschung”, en: Schütte, Georg (ed.): *Wettlauf ums Wissen. Außenwissenschaftspolitik im Zeitalter der Wissensrevolution*. Berlin: Berlin University Press, pp. 112-119.
- PARTNERSHIP FOR A SECURE AMERICA (2010): “Science Diplomacy is Crucial to U.S. Foreign Policy”, en: <<http://www.psaonline.org/article.php?id=620>> (10.04.2011).
- PERTHES, Volker (2007): “Soft Power als Teil der Auswärtigen Politik”, en: Alexander von Humboldt Stiftung (ed.): *Außenwissenschaftspolitik – Wissenschaftsaußenpolitik*. Bonn: Arbeits- und Diskussionspapier 7, pp. 5-7.
- SANTISO, Javier (2008): “La emergencia de las multilaterales”, en: *Revista de la CEPAL*, vol. 95, agosto, pp. 7-30.
- SCHAVAN, Annette (2008): “Von Alexander von Humboldt lernen”, en: Schütte, Georg (ed.): *Wettlauf ums Wissen. Außenwissenschaftspolitik im Zeitalter der Wissensrevolution*. Berlin: Berlin University Press, pp. 31-34.
- SCHÜTTE, Georg (2006): “Diplomatie der Forscher. Wenn Deutschland international mithalten will, braucht es eine Außenwissenschaftspolitik. Ein Plädoyer”, en: *Die Zeit*, 12 de abril de 2006.

- SCHÜTTE, Georg (2007): “Außenwissenschaftspolitik – Wissenschaftsaußenpolitik: eine Querschnittsperspektive internationaler Politikgestaltung in modernen Wissensgesellschaften”, en: Alexander von Humboldt Stiftung (ed.): *Außenwissenschaftspolitik – Wissenschaftsaußenpolitik*. Bonn: Arbeits- und Diskussionspapier 7, pp. 28-39.
- (2008): “Wettlauf ums Wissen: Außenwissenschaftspolitik als Herausforderung moderner Wissensgesellschaften. Eine Einführung”, en: Schütte, Georg (ed.): *Wettlauf ums Wissen. Außenwissenschaftspolitik im Zeitalter der Wissensrevolution*. Berlin: Berlin University Press, pp. 12-27.
- STEINMEIER, Frank-Walter (2008): “Partner gewinnen und Potenziale nutzen - Warum sich Außenpolitik für Wissenschaft einsetzt”, en: Schütte, Georg (ed.): *Wettlauf ums Wissen. Außenwissenschaftspolitik im Zeitalter der Wissensrevolution*. Berlin: Berlin University Press, pp. 28-30.
- THE ROYAL SOCIETY (2010): *New Frontiers in Science Diplomacy. Navigating the Changing Balance of Power*. London: RS Policy document 01/10.
- VERMA, Sharad et al. (2011): *Companies on the Move. Rising Stars from Rapidly Developing Economies are Reshaping Global Industries*. Boston: The Boston Consulting Group.
- WERZ, Nikolaus (2006): “Von ‘geborenen Partnern zu entfernten Verwandten’? – Lateinamerika in der neueren deutschen Außenkulturpolitik”, en: *Lateinamerika Analysen*, vol. 15, nº 3, pp. 105-124.
- WITTIG, Peter (2007): “Die Rolle und das Verständnis von Soft Power in der deutschen Außenpolitik”, en: Alexander von Humboldt Stiftung (ed.): *Außenwissenschaftspolitik – Wissenschaftsaußenpolitik*. Bonn: Arbeits- und Diskussionspapier 7, pp. 8-10.

Sobre los autores

María Carolina Agoff es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2003. Su campo de especialidad se centra en los estudios de género y violencia, y en particular en la violencia de pareja. Actualmente se encuentra investigando la migración indocumentada de centroamericanos y mexicanos en EE.UU.

Kathya Araujo es doctora en Estudios Americanos. Profesora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. Ha sido profesora e investigadora invitada en diversas universidades en América y Europa. Sus áreas de investigación son la sociología moral, los procesos de individuación y configuración del sujeto y los estudios sobre sexualidades. Investiga actualmente sobre las razones de obediencia y el ejercicio de la autoridad en la familia y el trabajo.

Klaus Bodemer es politólogo y fue, de 1996 a 2006, director del Instituto de Estudios Ibero-Americanos en Hamburgo. Desde 2006 es *senior fellow* en el GIGA Instituto de Estudios Latinoamericanos en Hamburgo. Sus investigaciones se centran en las relaciones internacionales de América Latina, la integración regional, la política de seguridad y la política energética.

Oldimar Cardoso es experto en didáctica de la Historia, investigador de la Cátedra de Didáctica de la Historia de la Universität Augsburg. Desde 2009 es *fellow* en el Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung y desde 2011, miembro de la dirección de la International Society for History Didactics. Sus investigaciones se centran en la responsabilidad científica, la cultura histórica, la función social de la historia, los libros de texto y los medios educativos.

Ricardo Córdova Macías es politólogo, director ejecutivo de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), San Salvador. Sus principales áreas de interés para la docencia e investigación son: los procesos de democra-

tización, las elecciones y los partidos en Centroamérica, la cultura política y las actitudes políticas, y la seguridad ciudadana.

Henrique Cukierman es ingeniero. Desde 2002 es profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro en el Posgrado de Ingeniería de Sistemas y Computación, de Historia de las Ciencias, las Tecnologías y la Epistemología, y en la licenciatura de la Escuela de Ingeniería de Computación e Información. Sus investigaciones se centran en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, con énfasis en las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en Brasil.

Luiz Sérgio Duarte da Silva es historiador y sociólogo. Tiene seis libros publicados sobre ciudad, desarrollo, literatura, política y teoría de las ciencias de la cultura. Es *fellow* de la Fundación Humboldt y profesor de Teoría de la Historia en la UFG-Brasil.

Marco Estrada Saavedra es sociólogo, profesor-investigador de El Colegio de México y director de la revista *Estudios Sociológicos*. Sus líneas de investigación son los movimientos sociales, la teoría social contemporánea y la antropología del Estado. Entre sus últimos libros se encuentran *La comunidad armada rebelde y el EZLN* (2007), *(Trans)Formaciones del Estado en los márgenes de América Latina* (2011, en coedición con Alejandro Agudo) y *Protesta social* (2012).

Miguel A. García es antropólogo. Se desempeña como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Sus investigaciones se centran en las áreas de la Antropología y la Etnomusicología, en particular en la cultura de los pueblos originarios de Tierra del Fuego y el Chaco.

Raquel Gil Montero es historiadora, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Entre 2008 y 2010 fue becaria de las fundaciones Humboldt y Thyssen y actualmente lo es de la fundación Guggenheim. Sus investigaciones se centran en las poblaciones indígenas de los Andes Centro-Sur durante el período colonial y el siglo XIX, en la minería de plata y en los pastores altoandinos.

Carla Gras es socióloga de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía y Letras de la misma Universidad. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y

profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha trabajado sobre expansión agroindustrial, estructura agraria, campesinado, agricultura familiar y, actualmente, sobre los procesos de concentración empresarial y el modelo de desarrollo agrario en Argentina.

Günther Maihold es sociólogo y politólogo. Desde 2004 es subdirector del Instituto Alemán para Política Internacional y Seguridad/SWP, Berlín. Actualmente es titular de la Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt en la Universidad Autónoma de México y El Colegio de México, México, D.F. Sus temas de investigación son la política exterior e internacional, el crimen organizado y la violencia en América Latina, y las relaciones entre Europa y América Latina.

Patrícia Mattos es profesora en el Departamento de Ciências Sociais de la Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Sus investigaciones se centran en la teoría sociológica, la sociología de las desigualdades sociales y los estudios de género. Es autora de *As visões de Weber e Habermas sobre Direito e Política* y *A Sociologia Política do Reconhecimento: As contribuições de Charles Taylor, Axel Honneth e Nancy Fraser*. Con Jessé Souza publicó el libro *A Teoria Crítica no Século XXI*.

Juan Manuel Palacio es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por la University of California-Berkeley. Investigador del CONICET y profesor titular de Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Especialista en historia rural y en historia legal y judicial latinoamericana contemporánea.

Álvaro Pérez-Ragone es académico, profesor de Derecho Procesal Civil en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile). Se doctoró por la Universität Köln (Alemania) y realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) y Federal de Paraná (Brasil). Sus áreas de investigación y asesoría son la justicia civil, la litigación civil y comercial nacional e internacional, la historia y el derecho procesal civil comparado.

Lucio Renno es politólogo. Desde 2006 es profesor adjunto del Instituto de Ciencia Política de la Universidade de Brasília. Es investigador Humboldt en el GIGA Instituto de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo. Sus investigaciones se centran en las instituciones políticas y el comportamiento electoral.

Emil Albert Sobottka es sociólogo, profesor en la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, Brasil. Sus áreas de

investigación son la cultura política, la democracia, el Estado y el mercado, las organizaciones sociales y la participación ciudadana, las políticas públicas, la violencia y la seguridad pública.

El Instituto Ibero-Americano (IAI) de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano en Berlín dispone de un amplio programa de publicaciones en alemán, español, portugués e inglés que surge de varias fuentes: la investigación realizada en el propio Instituto, los seminarios y simposios llevados a cabo en el IAI, los proyectos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales, y trabajos científicos individuales de alta calidad. La „**Bibliotheca Ibero-Americana**“ es una serie que existe desde el año 1959 y en la que aparecen publicadas monografías y ediciones sobre literatura, cultura e idiomas, economía y política de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Volumenes anteriores:

147. *Múltiples identidades. Literatura judeo-latinoamericana de los siglos XX y XXI*. Verena Dolle (ed.), 2012

146. *Ideas viajeras y sus objetos: El intercambio científico entre Alemania y América austral*. Gloria Chicote / Barbara Göbel (eds.), 2011

145. *Culturas políticas en la región andina*. Christian Büschges / Olaf Kaltmeier / Sebastian Thies (eds.), 2011

144. „*Una estirpe, una lengua y un destino*“. *Das Sprachideal der Akademien de la Lengua Española (1950-1998)*. Kirsten Süselbeck, 2011

143. *Escribir después de la dictadura. La producción literaria y cultural en las posdictaduras de Europa e Hispanoamérica*. Janett Reinstädler (ed.), 2011

142. *La expresión metaperiférica: narrativa ecuatoriana del siglo XX. José de la Cuadra, Jorge Icaza y Pablo Palacio*. Fernando Nina, 2011

141. *El viaje y la percepción del otro: viajeros por la Península Ibérica y sus descripciones (siglos XVIII y XIX)*. Ricarda Musser (ed.), 2011

140. *Venezuela heute. Politik-Wirtschaft-Kultur*. Andreas Boeckh / Friedrich Welsch / Nikolaus Werz (Hrsg.), 2011

139. *Die Erfindung einer Nationalliteratur. Literaturgeschichten Argentiniens und Chiles (1860-1920)*. Katja Carrillo Zeiter, 2011

138. *Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX / Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle*. Ottmar Ette / Gesine Müller (eds.), 2010

137. *Redes y negocios globales en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII*. Nikolaus Böttcher / Bernd Hausberger / Antonio Ibarra (coords.), 2011

136. *Argentinien heute. Politik - Wirtschaft - Kultur*. Peter Birle / Klaus Bodemer / Andrea Pagni (Hrsg.), 2010

Más información: <http://www.iai.spk-berlin.de/es/publicaciones.html>



**Ibero-Amerikanisches
Institut**
Preußischer Kulturbesitz

A pesar de extensas investigaciones no ha sido posible a los editores averiguar los propietarios o herederos de los derechos de reproducción de todas las ilustraciones de este libro. A los interesados que puedan hacer valer sus derechos se les ruega ponerse en contacto con la editorial.